

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO LABORAL Y AGRARIO

Historia de la ola progresista en Sudamérica

(1998-2016)

Fabio Luis Barbosa dos Santos

Historia de la ola progresista en Sudamérica

(1998-2016)

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL
DESARROLLO LABORAL Y AGRARIO

Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) /
Fabio Luis Barbosa dos Santos.

Historia de la ola progresista en Sudamérica (1998-2016) /
Barbosa dos Santos, Fabio Luis / 2020

La Paz, mayo de 2020, viii; 596 p.
CEDLA (Ed.)
I. t.
II. s.

DESCRIPTORES TEMÁTICOS

<POLÍTICA> <GOBIERNO> <CIENCIA POLÍTICA> <PARTIDOS DE IZQUIERDA>
<PROGRESISMO> <POLÍTICA ECONÓMICA> <DESARROLLO> <SUBDESARROLLO>
<INTEGRACIÓN> <COMERCIO> <NEOLIBERALISMO>

DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS

<ARGENTINA> <BOLIVIA> <PARAGUAY> <PERÚ> <BRASIL> <VENEZUELA> <COLOMBIA>
<CHILE> <AMÉRICA LATINA> <ECUADOR> <MÉXICO> <CUBA>

© 2020, CEDLA

Primera edición en español, 2020

Depósito Legal: 4-1-1316-2021
ISBN: 978-9917-9831-3-2
Director Ejecutivo: Javier Gómez Aguilar
Autor: Fabio Luis Barbosa dos Santos
Coordinación general: Juan Luis Espada
Producción editorial: Unidad de Comunicación y Gestión de Información (CEDLA)
Cuidado de edición: Mauricio Casanovas
Diseño y diagramación: Milton Iñiguez
Traducción: Cristina Pabón Escóbar
Fotografía de tapa: elvenezolanocolombia.com
Impresión: Impresiones Gráficas Virgo
Editorial CEDLA: **www.cedla.org**
info@cedla.org

Achumani, Calle 11, Nº 100
entre Av. García Lanza y Av. Alexander
T: 591 2 279 4740 | 591 2 279 9848
C: 8630
La Paz - Bolivia

Este documento fue elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) y cuenta con el valioso apoyo de la Embajada de Suecia, en el marco del Programa: "CEDLA, Enhanced Knowledge for Action: MPDA and the Sustainable Use of Natural resources".

Las opiniones y orientación presentadas son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente son compartidas por la institución o agencia que ha apoyado este trabajo.

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de tapa, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, sin permiso previo del editor.

Índice

Presentación..... vii

Introducción..... 1

La revolución venezolana y el subdesarrollo con abundancia de divisas..... 17

Post-scriptum: Venezuela en crisis (junio de 2019)..... 67

Conciliación y orden bajo el lulismo en Brasil..... 85

Post-scriptum: La elección de Bolsonaro (23 de enero de 2019)..... 131

El Kirchnerismo y los impases de la vía burguesa en Argentina..... 161

El proceso de cambio en Bolivia: ¿tensiones creativas o destructivas?..... 199

Ecología versus capitalismo: dilemas de la revolución ciudadana en Ecuador..... 249

La destitución de Fernando Lugo en Paraguay y la cuestión brasiguaya..... 279

Brasil y la economía política de la integración sudamericana..... 313

Chile y la economía política del neoliberalismo real..... 343

Perversión y trauma: los impases de la política peruana contemporánea..... 391

Guerra y paz en Colombia en perspectiva histórica..... 433

¿Hacia dónde va la revolución cubana? Dilemas del socialismo primitivo..... 473

México y el progresismo tardío en la frontera imperial..... 519

Epílogo..... 557

Presentación

En América Latina, de tiempo en tiempo, somos invadidos por el sentimiento desesperante del eterno retorno de los mismos. En cada intento de integración civilizadora, nuestras sociedades son engullidas por la vorágine del atraso que las mantiene presas de la desigualdad, de la falta de libertad y de la injusticia, ¿por qué?

En el intento de responder estas inquietudes de la "ola progresista", Fabio Barbosa dos Santos, en su libro: *Historia de la ola progresista en Sudamérica*, que presenta el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en su primera edición en español, busca sintetizar lo ocurrido en las últimas dos décadas, a partir de una valiosa investigación de campo y de entrevistas, más allá del dominio de la amplia literatura especializada.

La obra de Barbosa inquiere si la "ola progresista" ¿ayudó a superar la desigualdad y dependencia?, ¿cuáles fueron sus alcances y límites del cambio propuesto?, ¿qué relaciones establecieron con los sectores populares y con las clases dominantes?

La intención de cambiar estas sociedades sin enfrentar la raíz de los problemas, de acuerdo con Barbosa dos Santos, remite a la articulación entre dependencia y desigualdad heredada del pasado colonial, limitado así el cambio a la superficie política.

Al analizar las contradicciones y los dilemas de los gobiernos progresistas, el autor exhibe que a pesar de las particularidades de cada

país, hay características comunes: los presidentes y sus gobiernos no rompieron con el legado macroeconómico neoliberal; con pequeños golpes en la desigualdad, fortalecieron el capitalismo, dejando de cumplir promesas de integración social sustantiva; llevados al poder por la insatisfacción del campo popular con las políticas de ajuste estructural, canalizaron la revuelta hacia demandas institucionales de pequeño resultado; y por último, se aprovecharon de la acumulación por desposesión surfeando en el consenso de las *commodities* sin atender la depredación socioambiental de allí resultante, en un proceso lubricado por los extraordinarios ingresos que se disfrutaron durante el alza de precios de materias primas, que facilitó la conciliación de intereses en las gestiones progresistas.

En la utopía de lograr una autocrítica en torno a la "ola progresista", Barbosa concluye con nueve propuestas sobre la articulación entre soberanía, igualdad e integración continental, entendidas como referencias de un proyecto a ser construido.

El CEDLA ofrece este libro como una contribución para fortalecer el debate desde una mirada crítica, sobre estos procesos políticos, entendiendo que solo el debate amplio y crítico permitirá avanzar hacia una verdadera transformación social.

Javier Gómez Aguilar
DIRECTOR EJECUTIVO
CEDLA

Introducción

El objetivo de este libro es contribuir a un balance de la llamada "ola progresista" sudamericana. La expresión se refiere a la sucesión de gobernantes identificados con la izquierda, elegidos en reacción al neoliberalismo en los últimos años en la región: Hugo Chávez en Venezuela (1998); Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil (2002); Néstor Kirchner en Argentina (2003); Tabaré Vázquez en Uruguay (2004); Evo Morales en Bolivia (2005); Rafael Correa en Ecuador (2006) y Fernando Lugo en Paraguay (2008). Con excepción de este último, todos se han reelegido o eligieron a sus sucesores. En Chile, los socialistas tomaron la delantera en la coalición Concertación con la elección de Ricardo Lagos (2000) y luego con Michelle Bachelet (2006). Solo en Perú y Colombia, por las razones que se exploran en este libro, se puede decir que la alternancia política se inclinó hacia la derecha.

A fines de 2015, cuando el bolivarianismo sufrió una aplastante derrota en las elecciones parlamentarias venezolanas y Mauricio Macri fue elegido presidente de Argentina, parecía que la ola progresista daba paso a un reflujo reaccionario. Esta percepción se consumó con el *impeachment* (juicio político) de Dilma Rousseff en Brasil en el 2016. En 2017, aunque la coalición Frente Amplio aún gobernaba Uruguay, Morales presidía Bolivia y Correa preparaba a su sucesor en Ecuador (aunque luego rompió con él), era claro que la iniciativa política había cambiado de manos.

¿Cómo entender esta inflexión? ¿Sería una reacción al cambio llevado a cabo por gobiernos anteriores, o el progresismo simplemente se desgastó en medio de expectativas frustradas, acosado por la caída de los precios de las *commodities* y por las denuncias de corrupción? ¿Qué nos dice esta experiencia sobre el sentido de la evolución de la historia contemporánea?

i.

La ola progresista surgió como respuesta a los efectos socialmente nocivos de la convergencia entre la globalización y el neoliberalismo en América del Sur. Enmarcada en una perspectiva global, se trata de un intento de frenar, desde la periferia, el movimiento en dirección a la barbarie que caracteriza al capitalismo contemporáneo.

Esta reacción, sin embargo, estuvo limitada por las condiciones propias de degradación del tejido social y de la coyuntura internacional en la que pretendía afirmarse. Los resultados fueron proyectos de cambio que aceptaron los parámetros del orden que habían heredado, con el objetivo de renegociar, en mejores términos, la inserción mundial de sus países y la situación de los "excluidos" a los que representaban a menudo. Pragmatismo y el interés convergieron en diferentes niveles para esta razón política moderada, entre una evaluación desfavorable de la correlación de fuerzas para el cambio y el simple acomodo en el poder. En resumen, con la posible excepción de Venezuela, se optó por enfrentar la barbarie por la línea de la mínima confrontación.

Esta vía respaldó la articulación prevaleciente entre el neoliberalismo y el progreso. La ola progresista fue neoliberal no solo porque se subordinó a la dictadura del ajuste estructural, sino porque interiorizó la razón del mundo que lo caracteriza reduciendo la política a técnicas de gestión marcadas por una lógica mercantil. Al mismo tiempo fue progresista, no porque fuera necesariamente izquierdista, sino porque partió de una visión del mundo que identifica la lucha

contra el subdesarrollo con el crecimiento económico, una versión periférica de la ideología del progreso.

Como resultado, los gobiernos progresistas articularon el ajuste estructural al mito del crecimiento económico; la financiarización a la exportación primaria; la capitalización de los pobres con el consumo importado. En el intento por aplacar la vorágine capitalista, se buscó el mínimo denominador común entre globalización y soberanía en la esfera internacional, y entre el neoliberalismo e integración de la población en el plano doméstico.

Interpretada en sus propios términos, la ola pareció exitosa en un inicio. El crecimiento económico impulsado por el aumento de los precios de las materias primas facilitó la aplicación de políticas focalizadas que mitigaban la pobreza, mientras que los negocios prosperaban como siempre, dando como resultado una relativa paz social. El neo desarrollismo brasileño, el capitalismo en serio en Argentina, el proceso de cambio en Bolivia, la Revolución Ciudadana en Ecuador y el gobierno de Lugo en Paraguay perseguían la piedra filosofal de un neoliberalismo inclusivo, como otrora se buscó el desarrollo dependiente, con la esperanza de forjar amalgamas de las que surgirían naciones.

A principios de 2018, sin embargo, el progresismo se vislumbraba como el polvo en una carretera transitada, asentándose de a poco en la ruta por la cual avanzaba el tren de la historia. Por donde quiera que se mirase, el "neoliberalismo inclusivo" daba lugar al despojo social, mientras que la conciliación daba lugar a la guerra de clases. Más allá de las críticas, los errores y los aciertos que se puedan señalar en cada proceso, el sentido del movimiento era claro: la apuesta fue insuficiente para detener, mucho menos para revertir la vorágine en dirección a la barbarie.

En este sentido, lo que sucedía en Cuba fue revelador. Aislada por su política y naturaleza, el destino de la isla siempre estuvo condicionado al de su entorno regional. Tras veinte años de progresismo, Cuba escribió una constitución en la que se eliminó "el objetivo de edificar

la sociedad comunista". La ola progresista, que comenzó reescribiendo las constituciones para refundar las naciones —como en el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador— terminó reescribiendo lo que queda de izquierda y de nación en la región.

La paradoja iba más allá: mientras los países que atravesaban la ola progresista avanzaban a ritmos y tiempos diferentes hacia los estados de criminalización de la política y el blindaje económico —a la moda colombiana—, los países que no estaban gobernados por el progresismo evolucionaban tímidamente en la dirección opuesta: los frentes de izquierda destacaron en las elecciones presidenciales en Chile, Perú y Colombia entre 2016 y 2017, mientras que Andrés Manuel López Obrador alcanzó la presidencia en México en 2018.

A pesar del aliento que las últimas elecciones puedan haber traído a la izquierda de estos países, se entiende que esto no debe interpretarse como una señal de cambio, sino como lo opuesto. Veinte años después, se constata al mismo tiempo la inocuidad del progresismo para amenazar el orden y su relativa eficacia para gestionarlo; en los países donde las fuerzas del cambio estuvieron más sofocadas en las últimas décadas, se entreabre una brecha que seguramente cautivará la ilusión de muchos y, ciertamente, no conducirá a ningún cambio. López Obrador será el primero en ser lanzado a los leones, frente a la monumental crisis mexicana.

Ubicados frente a frente, pasado y futuro, progresismo y reacción emergen bajo este prisma como caras diferentes —pero no contrarias—, de la barbarie a la que se dirige el planeta. El fracaso del desarrollismo nacional en la periferia, seguido de los efectos desintegradores del neoliberalismo en todas las esferas de la existencia, desde la economía hasta la cultura política, lleva al Tercer Mundo en su conjunto hacia este destino. Para dar dos ejemplos: la degradación del nacionalismo nehruviano asociado al Partido del Congreso en la India, que abrazó el neoliberalismo en la década de 1990, fue seguida por la ascensión del nacionalismo hindú, una política con ambiciones totalizadoras, reaccionaria y, al mismo tiempo, modernizadora. En

Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano, que gobierna el país desde el fin del apartheid, degeneró, durante la administración de Jacob Zuma, en una organización que "capturó" al Estado con fines privados, mientras campeaban la violencia y la desigualdad —también entre los negros—. Por donde quiera que se mire en el Sur global el escenario es desolador; blindaje de la economía, desintegración de la sociedad, degradación de la política y alienación cultural. Concentración de riqueza, desamparo, represión y oscurantismo son las características de la historia contemporánea.

Analizados a la luz de esta tendencia global, los gobiernos progresistas de América del Sur aparecen como intentos por civilizar el tren de la historia recurriendo al sentido común y a la concertación. Se creyó que era posible domesticar el desarrollo capitalista en la periferia o al menos regular su velocidad y dirección. Sin cuestionar la vía, adoptaron como su principio rector el crecimiento económico, referido al paradigma del desarrollo de las fuerzas productivas. Como resultado, en lugar de frenar el tren del progreso, como decía Walter Benjamín, estos gobiernos lo aceleraron. En lugar de conducirlo, fueron arrastrados por él y, en algunos casos, expulsados.

La moraleja de la historia es que el progresismo no conduce al cambio y se necesita más que buena voluntad para construirlo. Al contrario de lo que se puede imaginar, descarrilar este tren no nos llevará hacia la barbarie: puede ser justamente la única forma de evitarla. Es necesario desmantelar el orden que el progresismo pretendió civilizar, o no habrá más civilización. Si el orden es progreso, como se lee en la bandera brasileña, urge el desorden.

ii.

La izquierda latinoamericana exige un análisis informado de la ola progresista buscando responder cuestiones de relevancia política para la actualidad y para el futuro. La presente contribución está organizada en capítulos que abordan individualmente cada país sudamericano,

incluso aquellos que no se identificaron con el progresismo, excepto Uruguay. El enfoque nacional se complementa con una discusión del proceso de integración regional liderado por Brasil, que también permea el capítulo sobre Paraguay. El libro incorpora una discusión sobre Cuba, referencia ineludible en cualquier proceso de cambio en la región, y reflexiones finales sobre el tema. Para esta edición, se agregó un capítulo sobre México motivado por la elección de López Obrador en 2018 y post-scriptums sobre Venezuela y la elección de Bolsonaro en Brasil.

Las interrogantes que guían el análisis de las presidencias progresistas tienen un carácter político. ¿Contribuyeron estos gobiernos a superar la desigualdad y la dependencia? ¿Cuál es el alcance y el límite del cambio propuesto? ¿Qué relaciones establecieron con los sectores populares y con las clases dominantes? En una perspectiva histórica, ¿es posible identificar su funcionalidad política desde el punto de vista de reproducción del orden? ¿Cuáles son los nexos entre los procesos progresistas y la reacción que se vislumbra?

En relación a Chile, Perú y Colombia, surgen diferentes preguntas. ¿Por qué en estos países el neoliberalismo no fue desafiado ni siquiera retóricamente? ¿Qué pasó con el campo popular y la izquierda? El sustento de la lucha armada en Perú y Colombia en los años 1990, ¿es relevante para explicar las trabas al progresismo en estos países? ¿Chile es el neoliberalismo que funcionó? Y más recientemente, a la luz de la ola progresista, ¿tienen futuro los frentes de izquierda que crecieron en las elecciones en Perú en 2016, en Chile en 2017 y en Colombia en 2018? En general, la pregunta es: ¿qué lecciones se pueden extraer de la ola progresista para la política de izquierda en el subcontinente?

El libro incluye un capítulo sobre Cuba porque, desde el triunfo de la revolución en 1959, la isla incide, de alguna manera, en todo proceso de cambio en América Latina y viceversa; el margen de maniobra de la revolución está condicionado por su entorno regional. Por otro lado, un análisis dirigido a contribuir a la política contra-hegemónica necesita incorporar la experiencia cubana. En este capítulo, la pregunta

central es: ¿cuál es el sentido de los cambios en la isla? En otras palabras, la pregunta es si en Cuba hay una restauración capitalista en curso. Subyacente a este análisis, reflexionamos sobre la actualidad de la revolución en América Latina a partir de la experiencia cubana.

Más allá de cada proceso nacional, la ola progresista recuperó el ideal de la unidad latinoamericana, asociándolo con la soberanía y el desarrollo. La constitución de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en 2008 es la principal expresión de este movimiento que, sin embargo, se dirigió a América del Sur y no a América Latina, como pretendió la entonces Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), hoy Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, lanzada algunos años antes en oposición al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) propuesta por Washington. Se entiende que el análisis de la integración regional permite discutir las sinergias y limitaciones de los diferentes procesos nacionales, toda vez que la esperanza despertada por la ola progresista se relaciona, en parte, con la posibilidad de convergencia entre los gobiernos potenciando cambios difíciles de postular aisladamente como, por ejemplo, desafiar a la hegemonía de los Estados Unidos.

Desde este punto de vista, el carácter de las administraciones petistas fue decisivo para modular el sentido general del proceso. Más allá de la importancia política y económica de Brasil, el país reivindicó el liderazgo de una integración regional que buscaba modelar a imagen y semejanza de su política interna. Cabe entonces preguntar: ¿Cuáles son los intereses subyacentes de la integración sudamericana liderada por Brasil? ¿Cómo ha interactuado este liderazgo con gobiernos tan dispares como los de Hugo Chávez en Venezuela y Álvaro Uribe en Colombia? ¿Cómo interpretar el consenso sobre la creación de Unasur y la Iniciativa de Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)? ¿Qué revela este proceso de integración regional al que se unieron todos los países sudamericanos, sobre el alcance y el límite de la ola progresista? Y, en consecuencia, ¿cuál es el alcance y los límites de una integración emprendida por gobiernos de esta naturaleza?

La hipótesis central del libro es que la ola progresista explicita los estrechos límites para el cambio en América Latina sin romper con el orden vigente. La intención de cambiar estas sociedades sin enfrentar la raíz de los problemas —que remite a la articulación entre dependencia y desigualdad heredada del pasado colonial— limitó el cambio a la superficie de la política. Pero, la alternancia electoral es funcional a la democracia burguesa y a las clases dominantes, principalmente en momentos en que el patrón de dominación, descrito por Florestan Fernandes como el Estado Autocrático Burgués, se ve amenazado.

Los gobiernos progresistas se eligieron en contextos con estas características. En algunos casos, el neoliberalismo fue abiertamente cuestionado, como en Argentina, Bolivia o Ecuador, donde los levantamientos populares derrocaron a presidentes sucesivos. En otros, el cuestionamiento estuvo latente, como en Brasil o en Uruguay, donde quien inauguró el ajuste estructural fue castigado con sucesivas derrotas electorales. Desde este punto de vista, la ola progresista puede verse como un capítulo más de la contrarrevolución permanente que caracteriza a la dominación burguesa en América Latina, porque, a pesar de sus buenas intenciones iniciales, ella se impuso como una ley de la gravedad sobre los tímidos propósitos de cambio. A menudo el techo bajo para la reforma se convirtió en el propio piso del progresismo.

La imposibilidad de la reforma como vía de cambio asociada con el carácter antipopular, antidemocrático y antinacional de las clases dominantes, no es una hipótesis nueva ni original en el pensamiento latinoamericano. Hace casi cien años, José Carlos Mariátegui enunció la antinomia entre burguesía y nación en el Perú, mientras que Florestan Fernandes explicó con rigor académico, décadas después, la razón de ser de esa dinámica. Sin embargo, una cosa es saber esto en teoría y otra es constatarlo en la práctica. El análisis de la ola progresista da concreción histórica a la propuesta de que el patrón de lucha de clases que caracteriza al capitalismo dependiente en América Latina, inviabiliza la reforma como vía para superar el subdesarrollo.

Desde un punto de vista político, tan importante como constatar este movimiento en la ola progresista es comprenderlo. Con este fin, en este libro se adoptan dos estrategias principales: la contextualización histórica y la dinámica de la lucha de clases, que implica analizar la relación de los gobiernos con las clases dominantes y con los sectores populares. Este enfoque destaca las determinantes internas de cada proceso, vinculando la *démarche* política al movimiento de la historia y al patrón de lucha de clases. En esta perspectiva, aunque el imperialismo y el papel de los Estados Unidos son realidades ineludibles, se observa que esta presencia no fue determinante en el desarrollo de los procesos abordados, salvo excepciones como el Plan Colombia y el inefable bloqueo de Cuba. Estados Unidos no tuvo un papel determinante en el derrocamiento de Lugo en Paraguay o de Rousseff en Brasil, como fue el caso de Jacobo Arbenz en Guatemala o Salvador Allende en Chile durante la Guerra Fría. Incluso la inestabilidad que caracteriza el proceso bolivariano desde la elección de Nicolás Maduro en 2013 se atribuye principalmente a dinámicas internas.

La exigencia de contextualización impone un retroceso histórico a los capítulos en que se abordan los diferentes países, remitiendo el período de la ola progresista a los dilemas específicos de cada situación: el subdesarrollo con abundancia de divisas en Venezuela, la "sociedad abigarrada" en Bolivia, la violencia en Colombia, el socialismo primitivo en Cuba, y así sucesivamente.

Este retroceso es importante para sopesar la dimensión de los desafíos enfrentados, porque si los progresistas se eligieron en reacción al neoliberalismo, los problemas que enfrentaron tenían raíces más profundas. Y esa perspectiva histórica es igualmente fundamental para comprender a los países que no se inclinaron a la izquierda. Es necesario comprender a Sendero Luminoso y el "fujichoque", o a la Unidad Popular (UP) y a la dictadura de Augusto Pinochet —procesos bastante diferentes entre sí— para explicar por qué la izquierda peruana se encogió y la chilena se congeló.

Al mismo tiempo, es necesario preguntar por qué los procesos desencadenados terminaron sucumbiendo al orden, incluso donde había un notable potencial de radicalización, como en Bolivia. Se entiende que más allá de la seducción del poder hay una correlación entre la timidez política de estos gobiernos y la derrota del movimiento histórico que los precedió. Como capítulo de la contrarrevolución mundial, la contrarrevolución latinoamericana en el contexto de la Guerra Fría liquidó los proyectos revolucionarios y también reformistas, generando las condiciones para la imposición del neoliberalismo, que a su vez la consolidó. El orden burgués en América Latina se afirma como una contrarrevolución permanente.

En esta realidad, no hay término medio: gestionar el orden requiere involucrarse con los ricos y dominar a los pobres. Hay diferentes formas de ejercer esta dominación, pero la explotación, la alienación y la dependencia siempre están ahí. En esta perspectiva, mientras los gobiernos progresistas ilustran las limitaciones para romper con la contrarrevolución permanente, los países en los que la política no se inclinó hacia el progresismo son la contraprueba del argumento: se trata de una contrarrevolución permanente sin interludio color de rosa.

Para reconstruir la dinámica de la reciente lucha de clases en los diferentes países, se recurrió a la investigación de campo, además de la bibliografía disponible. Al final de cada capítulo, incluso el que aborda la integración regional, se encuentran referencias a conversaciones, entrevistas y visitas; si no están citadas, como en el caso de Ecuador, es porque no se tiene un registro de ellas.

Estos trabajos de campo remiten a diferentes proyectos de investigación y extensión; como becario del Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), investigaba el tema de los brasiguayos en Paraguay cuando el presidente Lugo fue depuesto en 2012. Desde 2014 viajé a Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, Cuba, Argentina y Chile como parte del programa de extensión "Realidad Latinoamericana de la Universidad Federal de São Paulo (UNIFESP)", que reúne a grupos de estudiantes y profesores en torno a una agenda de formación académica

y política que culmina en una investigación de campo colectiva, incluyendo visitas y entrevistas con líderes populares, personalidades políticas e intelectuales. El programa es apoyado por la Pro-Rectoría de Extensión de la universidad, a la cual agradezco especialmente. El Memorial de América Latina ofreció sus instalaciones para las actividades del proyecto, además de organizar la publicación electrónica de sus resultados en la serie Pedagogía del Viaje. La Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo (FAPESP) colaboró con el proyecto de investigación "Neodesarrollismo y neoliberalismo: el Brasil y el sentido de la integración regional sudamericana", proceso Nº 2014/05549-3. Este apoyo permitió realizar investigación complementaria en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú y Uruguay. El capítulo sobre integración regional se basa en los resultados de esta investigación. Las entrevistas en Ecuador se realizaron en 2011 en el marco de un programa similar al de Realidad Latinoamericana, pero se realizó fuera de la universidad. Los datos y la bibliografía se actualizaron posteriormente.

Agradezco también a los colegas y estudiantes que participaron en los diferentes proyectos. Arriesgando omitir a alguien agradezco a Pedro Barros, Verena Hitner, Felippe Ramos, Pietro Alarcón, Héctor Mondragón, Carol Ramos, Nilson Araújo, Luis Pinto, Rodrigo Chagas, Regiane Bressan, Daniel Carvalho, Gilberto Maringoni, Agustin Espinosa, Fabiana Dessotti, Vivian Urquidi, Bruna Muriel, Salvador Schavelzon, Luciana Sousa, Marcelo Carvalho, Carlos Alberto Cordovano, Joana Salém, Patricia Mechi, Vanderlei Vazelesk, Fabio Maldonado, Silvia Adoue, Luis Fernando Ayerbe, Plínio de Arruda Sampaio Junior, Frei Betto, Carlos Eduardo Carvalho y Victor Schincariol.

Fuera de Brasil, agradezco a todos con quienes conversé, siendo la mayoría de estas conversaciones citadas al final de cada capítulo. Miguel Tinker Salas, Rodrigo Chagas, Salvador Schavelzon, Javier Gómez, Bernardo Sorj, Michael Löwy, Marcelo Santos, Clécio Mendes, Julio Gambina e Isabel Loureiro estuvieron entre los lectores críticos de diferentes capítulos, así como los revisores de revistas académicas

en las que fueron publicadas versiones de algunos de estos textos. Daniel Feldmann hizo valiosos comentarios sobre el libro y cada uno de sus capítulos, en una combinación de competencia y generosidad desafortunadamente rara en nuestro medio. Muchas gracias.

Esta nota metodológica delimita el alcance del libro. No hay un capítulo sobre Uruguay porque este fue el único país sudamericano donde no se hizo la investigación de campo. Por otro lado, hay un capítulo sobre Cuba. Inicialmente, no había un capítulo sobre el caso brasileño, porque lo analicé en un trabajo reciente. Sin embargo, dada la posibilidad de difundir este libro entre una audiencia que no lee portugués, redacté un capítulo sobre Brasil a partir de un texto en coautoría con Ruy Braga. Es el único capítulo que no se apoya en un trabajo de campo sistemático.

Además de los capítulos nacionales, abordo el proyecto de integración regional de las administraciones petistas por dos razones: para aclarar el carácter de la política exterior brasileña y la integración que promovió, y también porque este es un ángulo fecundo para analizar las interacciones entre los países sudamericanos, a la izquierda y a la derecha del espectro progresista. Bajo este prisma, se evidencia el papel moderador de los gobiernos petistas (PT), en el doble sentido del término: como mediador entre radicales y reaccionarios, como Chávez y Uribe, pero también como un actor que presionó por la moderación en lugar de la radicalización del cambio. En este mismo tenor, el tema de los "brasiguayos" ilustra las contradicciones del proyecto brasileño, que en el caso paraguayo contribuyeron a un triste desenlace. Este enfoque supone como premisa que las administraciones petistas desempeñaron un papel decisivo para calibrar el alcance y el límite de la ola progresista.

Finalmente, hay una limitación cronológica. Las investigaciones de campo y el esbozo original de los textos fueron realizados en diferentes momentos. Aunque se propone el 2016 como el año en que se agotó el proceso, no todos los capítulos llegan allí, mientras que algunos avanzan hasta 2018. El capítulo sobre Ecuador recurre a una

actualización respaldada por fuentes secundarias, porque el extenso trabajo de campo se realizó en 2011. En el caso de Colombia, el capítulo se escribió a fines de 2014. Se agregó solo una nota relacionada con la derrota de la consulta pública sobre el proceso de paz. Entiendo que el análisis presentado ofrece elementos para explicar este resultado, como la resonancia de la política uribista en el país y las ambigüedades del gobierno de Juan Manuel Santos. En el caso paraguayo, no se propuso analizar el gobierno de Horacio Cartes, pero se presenta una reconstrucción detallada de las motivaciones y de los eventos que condujeron al *impeachment* a Fernando Lugo. Este texto, que señala como coordinador y principal beneficiario del golpe paraguayo al político que lo sucedió como presidente del país, fue escrito en agosto de 2012, mucho antes de la elección de Horacio Cartes. Esto indica que los paraguayos informados políticamente entendieron rápidamente lo que sucedió —y por qué.

El recuento histórico realizado en los capítulos tampoco es uniforme, responde a lo imprescindible para contextualizar los dilemas contemporáneos en cada país. Sin embargo, hay una relativa simetría en el análisis de los países con antecedentes socioeconómicos similares y cuya orientación política reciente ha sido notablemente diferente: Venezuela y Colombia, Bolivia y Perú, Argentina y Chile. Aquellos que deseen profundizar el potencial comparativo del análisis pueden revisar estos capítulos.

Una observación sobre las reflexiones finales. La hipótesis fundamental del libro se explicó en esta introducción y subyace a los diferentes capítulos: el orden como contrarrevolución permanente, y la inviabilidad de la reforma como camino del cambio. Teniendo estas cuestiones como telón de fondo, las reflexiones finales delinean el sentido de la historia en el período, apuntando relaciones o contrastes relevantes entre países. El objetivo es reconstituir a grandes rasgos el marco general latinoamericano poniendo las particularidades nacionales en diálogo, por similitud o diferencia. Es un ejercicio de ensayo, por el poco convencimiento de que detallar las comparaciones entre

países sería fructífero, lo que de todos modos estaría fuera de las posibilidades del autor.

Por lo tanto, este no es un libro en el que los argumentos encadenados en capítulos sucesivos desemboquen en una conclusión que compruebe la tesis; es un libro en el que, a manera de su objeto, la tesis de la contrarrevolución permanente está presente como telón de fondo. La excepción queda para las reflexiones finales, en las que se presentan nueve proposiciones en torno a la respuesta necesaria para la contrarrevolución permanente: la revolución latinoamericana.

Bibliografía

FERNANDES, FLORESTAN

1981 *Poder e contrapoder na América Latina*. Rio de Janeiro: Zahar.

1976 *Circuito fechado*. São Paulo: Hucitec.

1975a *Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina*. Rio de Janeiro: Zahar.

1975b *A revolução burguesa no Brasil*. Rio de Janeiro: Zahar.

LAVAL, CHRISTIAN Y PIERRE DARDOT

2016 *A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal*. São Paulo: Boitempo.

La revolución venezolana y el subdesarrollo con abundancia de divisas

Es un poco lo que decía de la tercera vía que propone Tony Blair, el primer ministro británico. Un modelo que no sea socialista, ni comunista, pero tampoco el neoliberalismo salvaje que genera desempleo e inestabilidad. Que exista empleo, trabajo, salario justo, seguridad social. Un modelo económico humanista, esa es la solución.

Hugo Chávez, 1998

Tú recuerdas, y el país recuerda, en alguna ocasión, ingenuamente esbozaba aquella tesis de la tercera vía [...] pero llegué aquí y comenzó aquella dinámica en torno a mi persona, en torno a mi gestión, fui aprendiendo en la realidad, fui estudiando, fui recorriendo el mundo y en pocos años, y sobre todo después del golpe de abril de 2002, después de la arremetida imperialista con aquella salvaje acción de sabotaje económico, terrorismo, me di cuenta de que el único camino para nosotros ser libres, para que Venezuela sea libre, independiente, es el camino del socialismo.

Hugo Chávez, 2008

Introducción

La elección de Hugo Chávez en 1998 fue la primera victoria de un candidato alternativo a la política convencional en América del Sur en el contexto del neoliberalismo. En las cuatro décadas anteriores, Venezuela había sido liderada por dos partidos que se turnaban en el poder bajo un acuerdo político conocido como el Pacto de Punto Fijo. Dependiente de la exportación de petróleo, el país vivió una notable expansión económica en la década de 1970, en el contexto del *boom* petrolero. Pero la conjunción entre la crisis de la deuda y la caída en el precio del barril en la década siguiente sumergió al país en una prolongada recesión. La aplicación del recetario neoliberal por

sucesivos gobiernos estuvo en la raíz de un levantamiento popular en 1989, el Caracazo, así como en el intento fallido de golpe liderado por Chávez en 1992 y, finalmente, de su elección.

A pesar de la orientación inicial moderada del nuevo gobierno, la intención de otorgar carácter público a los ingresos petroleros polarizó al país. Ante un intento de golpe seguido de un paro patronal en 2002, el gobierno extremó posiciones. Un proceso dinámico que recolocó el cambio radical en la agenda latinoamericana, la autodenominada Revolución Bolivariana se enfrentó al desafío de superar la situación descrita por Celso Furtado como "subdesarrollo con abundancia de divisas", en la cual se inscribieron el alcance y los límites de este proceso.

Subdesarrollo con abundancia de divisas

Como uno de los principales focos insurgentes en la guerra de la independencia hispanoamericana y cuna de figuras como Francisco de Miranda, Simón Rodríguez y Simón Bolívar, la trayectoria de Venezuela a lo largo del siglo XIX revela similitudes con los países de la región, donde las barreras geográficas, sociales, políticas y económicas para la afirmación del Estado Nacional se expresaron en continuos conflictos civiles. A la manera mexicana, los esfuerzos de modernización capitalista en el último cuarto de siglo fueron guiados, directa o indirectamente, por una modalidad de "autócrata civilizador". El general venezolano Antonio Guzmán Blanco, quien dictó la línea política del régimen, incluso cuando dejó la presidencia en 1888, no sería el primer ni el último gobernante con un proyecto modernizador a identificarse como una especie de reencarnación de Simón Bolívar —quien murió en 1830 aislado y amargado por la fragmentación de su proyecto de unidad regional— habiendo sido erigido como un icono nacional desde entonces (Carrera Damas, 2003).

Con el derrocamiento del régimen en 1899 por un militar andino, Cipriano Castro, la llamada causa restauradora no se diferenció de los gobiernos anteriores o posteriores por sus métodos políticos, pero sí por un sesgo nacionalista. Así, cuando una coalición de potencias

europeas bloqueó los puertos venezolanos en 1902 con el pretexto de cobrar la deuda externa, el presidente condenó la agresión en una declaración que comenzaba con las siguientes palabras: "La planta insolente del extranjero profanó el suelo sagrado del país".

El resultado del episodio, en el que se impuso la mediación estadounidense a favor de las potencias extranjeras, reveló algo que ya se había anunciado unos años antes con la intercesión de Washington en la disputa de la frontera oriental venezolana con la Guyana Inglesa: Estados Unidos desplazó a los británicos como poder discrecional en la región, reivindicando el control sobre el Caribe como una especie de mar interior en la secuencia de la Guerra Hispanoamericana de 1898, cuando ocuparon Cuba y Puerto Rico (LaFeber, 1963). La intervención en la guerra civil colombiana, que resultó en la división territorial que dio origen a Panamá en 1903 y a la construcción del canal, iniciada el año siguiente, consolidó este movimiento.

Así, unos meses después de junio de 1908 —cuando estalló un conflicto entre el gobierno venezolano y una corporación minera estadounidense, produciendo una ruptura de las relaciones diplomáticas entre estos países— se produjo un golpe militar que llevó a la presidencia a Juan Vicente Gómez, quien reconoció las exigencias estadounidenses hechas al gobierno anterior y abrió la puerta al capital extranjero, comandando el país hasta su muerte en 1935. La evolución venezolana en este contexto, no difería de otros países de América Central y del Caribe, en una región en que Estados Unidos comenzó a intervenir cada vez más explícitamente, modelando la economía y las instituciones políticas.

La exportación de productos primarios en Venezuela no presentó el dinamismo de otras economías sudamericanas, que desarrollaron tendencias hacia la diversificación económica apuntando a una potencial autonomización a principios de siglo. La expresión de este escaso dinamismo es el hallazgo de que, desde fines del siglo XVIII, no se fundaban nuevas ciudades en un país donde el 85% de la población vivía en áreas rurales y los demás en su mayoría habitaban ciudades

de 5 a 10 mil habitantes, mientras que Caracas no superaba los 100 mil habitantes (Carrera Damas, 1997: 129). Esta situación fue subvertida a partir de 1917, año en que se descubrió petróleo en suelo venezolano. En 1926, el producto se convertiría en la principal exportación del país. A pesar de la ínfima tributación, los ingresos fiscales del petróleo se multiplicaron por cincuenta en unos pocos años, pasando de 6 millones de bolívares en 1924 a 300 millones en 1930, en un proceso que tuvo desenvolvimientos económicos y políticos sintetizados por Domingo Maza Zavala en las siguientes palabras:

> [Cipriano] Castro fue el último gobernante de un país agroexportador, fragmentado por el dominio de los caudillos, endeudado con el exterior, pobre en recursos fiscales, financieros y monetarios, aún absorbido por las centellas agonizantes de las guerras intestinas. Gómez fue el primer gobernante de un país petrolero, con predominio del capital extranjero, sin la amenaza del "caudillismo" tradicional, sin los partidos "históricos" (diferentes matices de conservadurismo y liberalismo), con un creciente potencial fiscal, financiero y monetario, de solvencia restaurada con respecto a la deuda pública y un clima relativo de paz bajo el lema de "unión, paz y trabajo" (1984: 477).

Gobernando Venezuela como un negocio privado —"administrar el país es como administrar una hacienda", decía el dictador— Gómez distribuyó concesiones de exploración a través de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) entre sus familiares y personas favorecidas, quienes a su vez los renegociaban con las transnacionales del ramo: en este escenario, Standard Oil y Shell controlaban el 85% del negocio —50% y 35%, respectivamente— a fines de 1930. En un fenómeno que la literatura posterior describió como "enfermedad holandesa"[1] la

1 "Enfermedad holandesa" es un término utilizado en economía para explicar situaciones en las que el aumento del ingreso de la exportación de recursos naturales causa la sobre valorización de la moneda local, llevando a la desindustrialización del sector manufacturero, lo

valorización del bolívar en función de los ingresos petroleros elevó el precio de los productos agrícolas exportables, agravando la situación crítica del sector en el momento de la depresión mundial entre guerras. En este contexto, el país se convirtió en importador de alimentos, lo que condujo a un proceso de "descampesinización" y migración urbana, revelando una de las caras del proceso de constitución de la Venezuela contemporánea: el debilitamiento de las actividades productivas como resultado del modo en que el ingreso del petróleo impactó las relaciones sociales heredadas por la formación histórica del país, engendrando una situación descrita por Celso Furtado (2008) como "subdesarrollo con abundancia de divisas".

La consolidación de la identidad venezolana como país petrolero tuvo, en este contexto, desarrollos fundamentales en la forma que se afirmó la relación de la población con el Estado y con el propio nacionalismo. Como el petróleo fue identificado como una riqueza natural perteneciente al pueblo venezolano, cuya gestión debía ser hecha por el Estado como representante del interés nacional, los diferentes matices políticos en el campo democrático que se consolidaron en los años posteriores a la muerte de Gómez convergieron en la reivindicación de la distribución del ingreso petrolero, en oposición a la apropiación privada operada por la dictadura. Por eso es que aún en el campo marxista raramente se aventuraba a la nacionalización de la extracción de petróleo. En esta perspectiva, la realización del interés individual pasaba por la actuación efectiva del Estado como mediador entre las corporaciones transnacionales y el conjunto de la población.

Esta identificación entre democracia y distribución del ingreso petrolero resultó en una ambigüedad del nacionalismo venezolano toda vez que, por un lado, el crecimiento del ingreso nacional dependía de una correlación de fuerzas favorable a la apropiación del ingreso

---

que lo hace menos competitivo en relación con productos externos. El origen del nombre remite a lo que sucedió en Holanda en la década de 1960, cuando varios sectores de la industria del país prácticamente desaparecieron debido a la valoración del florín después del descubrimiento de gas natural en su territorio [Nota de edición: n.e.].

petrolero por parte del Estado frente a las transnacionales que dominaban el negocio; y, por otro lado, toda vez que el ingreso de la nación se vinculaba al negocio petrolero, la rentabilidad de estas empresas extranjeras era una condición necesaria para su reproducción ampliada. Según Miguel Tinker Salas (2014: 22-23), esta lectura afirmó un proyecto cultural que se volvió hegemónico en el país, según el cual "los empleados de las compañías petroleras extranjeras y sectores de la clase media crearon la visión de una nación venezolana moderna, enraizada en los valores políticos y sociales promovidos por la industria" que tenía como línea maestra la idea de que "los intereses de la industria eran los mismos intereses que de la nación".

Así, la percepción de Venezuela como una nación petrolera se tradujo en dos asociaciones relacionadas: entre democracia y distribución del ingreso petrolero, y entre progreso de la nación y prosperidad del negocio petrolero. Esta ideología se refleja en la consigna de mayor resonancia en la Venezuela contemporánea: "Sembrar el petróleo". Originalmente formulada por el intelectual Arturo Uslar Pietri en la década de 1930, en un contexto en que el país, hasta entonces agrícola, dependía crecientemente de la importación de alimentos, el texto denunciaba de modo premonitorio, el riesgo de que la riqueza petrolera convirtiera a Venezuela en una especie de "parásito de la naturaleza".

Convertida en un mantra de varios proyectos políticos que pretendían romper la dependencia petrolera del país mediante la diversificación productiva y la industrialización, esta noción oculta la naturaleza de las relaciones internacionales y de clase en que se basa la reproducción del subdesarrollo, sugiriendo que su superación es, sobre todo una cuestión técnico-económica asociada a la asignación racional y productiva del ingreso estatal. Esta ideología está presente en el debate político venezolano desde los primeros programas del partido Acción Democrática (AD), fundado en 1941 con inspiración socialdemócrata, hasta el proceso bolivariano en el siglo XXI, e informa el análisis de pensadores críticos y comprometidos con el pueblo de Venezuela, como Juan Pablo Pérez Alfonzo y Celso Furtado. Este,

frente al aumento de los precios del petróleo, diagnosticaba en 1975 que "en ese país existe la posibilidad de modificarlo [el subdesarrollo] sin mayores trastornos sociales" (Furtado, 2008: 122).

Al contrario de ser una cuestión ideológica, esta identificación entre nación y negocio petrolero expresa la incidencia del rentismo en todas las esferas de la sociedad venezolana (Tinker Salas, 2014: 344). En primer lugar, una vez que el Estado es el intermediario entre el ingreso del petróleo y el interés nacional, la disputa por el excedente petrolero se materializa como una disputa por el Estado. Así, si el denominador común de las organizaciones democráticas que surgieron después de la muerte de Gómez fue la exigencia de la distribución social de los ingresos del petróleo. Es posible interpretar que la inestabilidad política de este período —en el que una sucesión de golpes militares puso y sacó a AD del gobierno—está vinculada a la construcción de un arreglo satisfactorio para las diferentes fracciones de la clase dominante con respecto a los privilegios asociados al ingreso petrolero. Este arreglo fue consumado en 1958 con el famoso Pacto de Punto Fijo, que implicó fundamentalmente dividir al Estado entre los dos brazos del orden: AD y Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI, de inspiración demócrata cristiana, fundado en 1946), que pasaron a alternarse en el poder Ejecutivo; integrar las Fuerzas Armadas a los privilegios petroleros; controlar los sindicatos, incluida la Confederación de Trabajadores Venezolana (CTV), vinculada principalmente a AD; y reprimir a los disidentes, especialmente comunistas.

Bajo esta perspectiva, el pacto aceptó las premisas en que se asentaba la reproducción del negocio petrolero, lo que tuvo como consecuencia, en el plano geopolítico, el alineamiento del país con los Estados Unidos. Así, el Pacto Punto Fijo correspondió en el plano internacional a la Doctrina Betancourt, formulada en 1959 por el presidente venezolano Rómulo Betancourt quien, bajo la retórica de un compromiso intransigente con la democracia, desagradable a dictadores como el dominicano Rafael Trujillo o el nicaragüense

Anastasio Somoza, reveló una hostilidad militante hacia la Revolución Cubana. Internamente, el límite de tolerancia de los gobiernos asociados al Punto Fijo fue dado por los fundamentos del propio pacto, recurriendo a las técnicas represivas características de las dictaduras del Cono Sur contra aquellos que cuestionaron los marcos del orden (Defensoría del Pueblo, 2013). Por lo tanto, a pesar de la idealización de la "democracia" venezolana en el período, frágil como los elogios a la democracia mexicana de partido único o la democracia genocida colombiana, los análisis que se centran en las implicaciones del rentismo petrolero sobre las diferentes esferas de la existencia matizan el significado de los golpes que destituyeron a Isaías Medina Angarita en 1945 y a Rómulo Gallegos en 1948, así como en el golpecito que consolidó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1952 y de la movilización que derrocó al mismo régimen en 1958.

De ahí que autores como Fernando Coronil o Tinker Salas enfaticen la continuidad como la marca de la historia petrolera venezolana, al menos hasta la elección de Hugo Chávez, en contraposición a las lecturas que identifican la "modernidad" venezolana con el petróleo, como hace Germán Carrera Damas; o con la muerte de Gómez en 1935, como sugiere Mariano Picón-Salas; o aún con la "Revolución de Octubre" de 1945, conforme la narrativa construida por AD; o, finalmente, con el "espíritu del 23 de enero", que derrocó a Pérez Jiménez en 1958, según las lecturas apologéticas del Pacto de Punto Fijo. Coronil observó, por ejemplo, un patrón similar en el gasto público entre estos diferentes gobiernos, encontrando como única diferencia un compromiso en las gestiones de AD por aumentar los ingresos (Coronil, 2013). De modo análogo, el análisis de Bernard Mommer (2013b: 23) sobre el sentido general de la política petrolera estableció un corte cronológico en el auge del Pacto Punto Fijo, cuando la nacionalización del combustible comandada por Carlos Andrés Pérez trajo una inflexión en lo que había hasta entonces:

> La historia del petróleo puede ser dividida en tres períodos. El primero, la Época de las Concesiones (que va desde el comienzo del siglo XX hasta 1975), se caracterizó por el progreso continuo del Estado como propietario del recurso natural y como propietario soberano. Culminó con la nacionalización de la industria en 1975 y la creación de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. El segundo período, la Época de la Compañía Petrolera Nacional (de 1975 a 2003), que estuvo marcada por un movimiento contrario, de anular una por una, todas las conquistas del primer período. […] El tercer período de nuestra historia petrolera, que comenzó en 2003, se puede llamar la Época de las Confrontaciones entre las dos políticas opuestas ya indicadas anteriormente —la nacional y la antinacional— bajo el lema de la Plena Soberanía Petrolera.

Diferentes en alcance, metodología y objetivos, los trabajos de Coronil y Mommer llaman la atención sobre las líneas de continuidad en la historia venezolana más allá de las alternancias de gobierno e incluso del régimen. Y estas determinaciones remiten a los vínculos entre Estado, sociedad e ingreso petrolero. En el caso de Mommer, estas relaciones se refieren al sentido del movimiento de la historia, mientras el trabajo de Coronil se centra en las múltiples ramificaciones sociales, políticas y culturales del rentismo petrolero para la sociedad venezolana. Es posible situar la crisis que proyectó Hugo Chávez en la convergencia entre ambas problemáticas en una sociedad marcada, en todas las esferas de la sociabilidad, por el subdesarrollo con abundancia de divisas.

Según Mommer, la inversión en el sentido de la política petrolera practicada desde la década de 1930 fue marcada, paradójicamente, por la creación de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) en 1975, en una operación que se limitó a nacionalizar el capital de las transnacionales mientras mantuvo intacto su control sobre la dimensión comercial del negocio, replicando un procedimiento realizado en los principales países asociados a la Organización de Países Exportadores

de Petróleo (OPEP) en el período (Mommer, 2013a). En Venezuela se mantuvo intacta la orientación de la nueva empresa, sustentada en una racionalidad mercantil e impermeable a las políticas estatales, de modo que PDVSA se consolidó en las siguientes décadas como una especie de "Estado dentro del Estado", en un movimiento agravado en la década de 1990 a la luz de las políticas de apertura petrolera (Parra Luzardo, 2012).

Coronil señaló que esta separación entre el ingreso petrolero y el interés nacional estaba asociada a la generalización de la corrupción y de la delincuencia en un país donde el uso del cargo público como medio de enriquecimiento privado era una práctica común. Así, paralelamente a la euforia en el auge de los ingresos petroleros resultante del *boom* del petróleo en 1973, que se tradujo en numerosas obras públicas, en la difusión de un patrón de consumo sofisticado basado en importaciones y en un endeudamiento público respaldado por la certeza de ingresos futuros, se difundió la sensación de que el petróleo corroía el tejido social del país. Esta percepción fue sintetizada en el título del libro publicado en 1976 por un exponente de la lucha por la nacionalización del petróleo y uno de los protagonistas de la fundación de la OPEP, Juan Pablo Pérez Alfonzo: *Hundiéndonos en el excremento del diablo* (Pérez Alfonzo, 2011).

Las raíces estructurales de este malestar están vinculadas a las peculiaridades del patrón de lucha de clases bajo el rentismo petrolero. Según Coronil, en una sociedad en que la principal fuente de riqueza está asociada a la distribución, la disputa por el excedente económico no tiene lugar en el terreno de la producción, pero se expresa en una disputa por el Estado o, más específicamente por la manera como el Estado distribuye los ingresos del petróleo. En esta perspectiva, el lastre socioeconómico del Pacto Punto Fijo residió en una división desigual —pero amplia— de los ingresos estatales, contemplando desde los beneficiarios directos del negocio petrolero y los sectores de servicios asociados a este, la burocracia estatal, que incluye el ejército, los negocios vinculados a las obras públicas, hasta

segmentos de trabajadores que conforman burocracias sindicales. En resumen, el negocio petrolero, los funcionarios públicos, las obras de infraestructura, los programas sociales y los subsidios económicos directos e indirectos para el consumo constituyen una red que extiende los beneficios del ingreso petrolero a los diferentes estratos de la población, aunque en proporción desigual. Según Coronil (2013: 294), la naturaleza de esta relación social da como resultado una percepción fetichista del Estado como "un lugar dotado de poder alquímico para transmutar la riqueza líquida en vida civilizada".

En función de las distorsiones socioeconómicas asociadas con la enfermedad holandesa y de su impacto sobre la productividad de los sectores no petroleros, la generalización de los subsidios al consumo se tradujo en estímulos a la importación, difundiendo un patrón de vida desconectado de la estructura productiva del país. Toda vez que la savia vital de la economía está asociada a la circulación del ingreso petrolero que impulsa la importación, florece en el país una burguesía vinculada al comercio, y no a la producción. Así, más allá de los obstáculos económicos a la propuesta de "sembrar el petróleo" (mercado interno, dependencia tecnológica, inversión de capital, etc.), esa dinámica reveló múltiples trabas para la constitución de una burguesía nacional umbilicalmente vinculada a la producción, en una realidad en la cual la iniciativa industrial era percibida como mera extensión de la actividad comercial.

Esto significa que la inversión industrial a menudo fue motivada por el afán de preservar una situación comercial ventajosa, cuando, por ejemplo, el gobierno alentaba con tarifas proteccionistas la fabricación de determinados productos. Así, el estudio de caso de la fábrica de tractores Fanatracto, en la década de 1970, señala que los accionistas de esta empresa estaban vinculados al comercio de tractores importados, de modo que cuando el gobierno retiró su apoyo a la iniciativa en el marco de una inflexión liberalizadora, la fábrica fue enterrada sin protestas y sus protagonistas volvieron a importar tractores. La generalización de este patrón, en el que la distribución

del ingreso petrolero predomina sobre la producción de valor, lleva Coronil a invertir la afirmación de Karl Marx, sugiriendo que en Venezuela, el proceso de circulación absorbe la producción como una fase de circulación (Coronil, 2013: 470).

El malestar asociado a la percepción de que el ingreso petrolero propagaba la corrupción y el "parasitismo" en lugar de "sembrar" la industrialización y la soberanía, se convirtió en indignación social en la década de 1980, cuando la combinación de la crisis de la deuda y la caída en los precios internacionales del petróleo provocó una escasez de divisas que disolvió el poder asociado al "Estado mágico", poniendo a Venezuela en la vía neoliberal. El primer síntoma inequívoco de la crisis fue la devaluación del bolívar en 1983, al mismo tiempo que se alteró el sistema de cambio, en un día que quedó conocido en el país como el Viernes Negro. El titular de un diario nacional sintetizó el estado de ánimo del momento: "Se acabó la fiesta" (López Maya, 2006: 23).

El año siguiente se implementó el primer paquete de medidas neoliberales. Pero el detonante de la crisis fue la rebelión popular desencadenada por el aumento del precio de la gasolina en 1989, que afectó las tarifas del transporte público, en el contexto de los ajustes fiscales ejecutados por el gobierno de Andrés Pérez entre 1989 y 1993. El presidente, que irónicamente dirigió el país entre 1975 y 1979 en plena "euforia petrolera", administraba un Estado que direccionaba más de la mitad de sus ingresos al pago de acreedores. El *Caracazo* fue la rebelión más violenta contra la agenda neoliberal en América Latina a fines del siglo XX, dejando después de cinco días de enfrentamientos un legado impreciso de muertos, que se cuentan por centenas.

Al evidenciar el carácter autocrático del Estado venezolano, el episodio es considerado un hito en el proceso de corrosión de los fundamentos políticos del Pacto de Punto Fijo, que tiene como sustrato su degradación económica. Según Mommer (2013b), durante el período que correspondió a la política petrolera antinacional (1975-2003), hubo una involución del orden del 1,5% del Producto Interno

Bruto (PIB) *per cápita*, en contraste con un crecimiento de alrededor del 4% en el período anterior. Las tasas negativas entre 1980 y 1984 fueron seguidas por cambios bruscos, reflejando la dependencia del país en relación a las exportaciones de petróleo.

El programa neoliberal tuvo efectos corrosivos en el mundo del trabajo, que se expresaron en un incremento sustancial de la delincuencia. Entre 1983 y 1998, se registró una disminución en el empleo formal en los sectores público (22,67% a 16,33%) y privado (36,03% a 35,47%), que correspondió a un aumento del trabajo informal (41,30% a 48,2%). Esta reducción del empleo formal estuvo acompañada de ofensivas que socavaron los derechos de los trabajadores, lo que resultó en una disminución del poder adquisitivo del conjunto de la población, que fue agravada por la inflación. Así, entre 1980 y 1997, el porcentaje de hogares en situación de pobreza aumentó de 17,65% a 48,33%, y de extrema pobreza, de 9,06% a 27,66%. El aumento de la delincuencia en el período se evidenció en la tasa de homicidios, que se cuadruplicó en toda Venezuela y se sextuplicó en Caracas entre 1986 y 1999, mientras que el robo de vehículos se triplicó entre 1990 y 1996 (López Maya, 2006).

Este es el trasfondo sobre el que se proyectó el liderazgo político de Hugo Chávez. El teniente coronel comandó un golpe militar el 4 de febrero de 1992 contra el gobierno de Andrés Pérez. Frustrado el levantamiento, asumió la responsabilidad por la derrota en la red de televisión nacional, enfatizando que se rendía temporalmente —*por ahora*—, en sus palabras[2]. La osadía y la humildad de Chávez, que se rebeló contra un gobierno odiado, resultó en una identificación popular con el líder de la insubordinación. Afiliado a la AD, Andrés Pérez se aferró al cargo, pero desmoralizado. Fue destituido el año

2 "Compañeros, lamentablemente por ahora, los objetivos que nos propusimos no fueron alcanzados en la capital. O sea, nosotros aquí en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes hicieron muy bien por ahí, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar, y vendrán nuevas situaciones, y el país tiene que encaminarse definitivamente hacia un mejor destino".

siguiente en medio de un proceso de corrupción y puesto bajo arresto domiciliario.

Su sucesor fue otra figura emblemática del Pacto de Punto Fijo, el expresidente y fundador de COPEI, Rafael Caldera, quien se eligió con un discurso en el que buscaba desvincularse del acuerdo que ayudó a construir, anunciando una ruptura con políticas de su antecesor. A pesar de las intenciones originales, en poco tiempo este gobierno se rindió ante las presiones neoliberales, sellando ante la población el colapso de las alternativas políticas convencionales. Fue en este contexto que Hugo Chávez, indultado al inicio del gobierno de Caldera, se eligió presidente en 1998, enfrentando una coalición sin precedentes entre los grupos políticos que se alternaron como los dos brazos del partido del orden durante cuarenta años.

Revolución bolivariana

Desde una perspectiva continental, la elección de Chávez remite a un patrón en el que la implementación de la agenda neoliberal provocó un agudo desgaste de los partidos convencionales, abriendo espacio para la elección de candidatos alternativos, históricamente identificados con la izquierda en algunas situaciones, como Tabaré Vázquez en Uruguay y Lula en Brasil, o simplemente con una alternativa a la política imperante, como Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador —que incluso fue elegido con un marcado discurso antipartidista—. En este contexto, la singularidad del proceso venezolano fue la determinación con la que su presidente enfrentó los obstáculos al cambio social, respondiendo con una radicalización progresiva de la autodenominada Revolución Bolivariana mientras sus homólogos frecuentemente legitimaron el neoliberalismo (Webber y Carr, 2013). El propio Chávez era consciente de esta dinámica, que describió como "cuestión de madurez teórica y de práctica eminentemente dialéctica":

> Tú recuerdas, y el país recuerda, en alguna ocasión ingenuamente esbozaba aquella tesis de una tercera vía. Una vez, en alguna ocasión

> incluso llegué a leer la tesis del llamado capitalismo renano o con rostro humano, pero llegué aquí y comenzó la dinámica aquella en torno a mi persona, en torno a mi gestión, fui aprendiendo en la realidad, fui estudiando, fui recorriendo el mundo, y en pocos años, y sobre todo después del golpe de abril de 2002, después de la arremetida imperialista, con aquella salvaje acción de sabotaje económico, terrorismo, me di cuenta de que el único camino para nosotros ser libres, para que Venezuela sea libre, independiente, es el camino del socialismo (Rangel, 2014: 274).

Aunque para muchos venezolanos la figura de Chávez surgió repentinamente en la política nacional con el levantamiento frustrado de 1992, el propio comandante ubicó su compromiso revolucionario original a fines de la década de 1970. En 1982 inició la preparación de un movimiento militar reivindicando el derecho constitucional a la rebelión, fundando el Movimiento Revolucionario Bolivariano 200 (MRB-200) en el año que precedió al bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar.

Hugo Chávez, teniente coronel influenciado por militares de orientación progresista en el continente, como los gobiernos de Juan Velasco Alvarado en Perú (1968-1975) y Omar Torrijos en Panamá (1968-1981), también debió su formación política a las tradiciones de la izquierda venezolana vinculadas a la lucha armada en la década de 1960, combinadas con un nacionalismo que reivindicaba el legado de los próceres de la patria y de la unidad latinoamericana (Gott, 2004). Esta conjunción se evidencia en el programa político que guió el levantamiento de 1992, conocido como *El libro azul*, probablemente aludiendo a *El libro verde* elaborado por otro militar de origen nacionalista en un país petrolero, Muamar Al Khadafi. En este folleto se encuentra la descripción de un árbol con tres raíces, como las tres fuentes del marxismo popularizadas por Lenin: "Es el proyecto de Simón Rodríguez, el Maestro; Simón Bolívar, el Líder; y Ezequiel Zamora, el General del Pueblo Soberano" (Chávez, 2013). En términos concretos,

el eje de la propuesta fue una reforma política teniendo como punto de partida la convocatoria de una Asamblea Constituyente, premisa para la refundación de la patria y la construcción de una "democracia participativa y protagónica", en una crítica velada a la institucionalidad consagrada en el Pacto de Punto Fijo.

De hecho, esta fue la ruta seguida por Chávez cuando fue elegido. Una vez posesionado, convocó a una Asamblea Constituyente, pero mantuvo a la ministra de Economía del gobierno anterior, Maritza Izaguirre, como señal de una orientación moderada en este campo, aunque en años anteriores hubiese sugerido la moratoria de la deuda y el establecimiento de un "modelo de economía de posguerra" (Rangel, 2014: 107). En una entrevista concedida meses antes de las elecciones, describió su propuesta económica en estas palabras:

> Es un poco lo que decía de la tercera vía que propone Tony Blair, el Primer Ministro británico. Un modelo que no sea socialista, ni comunista, pero tampoco el neoliberalismo salvaje que genera desempleo e inestabilidad. Que exista empleo, trabajo, salario justo, seguridad social. Un modelo económico humanista, esa es la solución (Rangel, 2014: 217).

Como resultado de una intensa actividad constitucional en su primer año de gobierno, la nueva Carta Magna refrendada en plebiscito cambió el nombre del país a República Bolivariana de Venezuela; creó los poderes "ciudadano" y "electoral", como se señalaba en *El libro azul*; amplió y actualizó los derechos humanos, incorporando derechos indígenas y ambientales; estableció diversas formas de participación política directa, además de la posibilidad de revocar mandatos, entre otros cambios en el ámbito político. La movilización constitucional que ocupó el inicio del mandato fue acompañada de un fortalecimiento de la base parlamentaria vinculada al proceso, que entonces se llamó Revolución Bolivariana.

Sin embargo, lo que levantó a la oposición no fue el proceso constituyente, sino el conjunto de "leyes habilitantes" anunciadas a fines de 2001 —iniciativa del Ejecutivo similar a las "medidas provisionales" en Brasil (Maringoni, 2004: 57)—. Entre las leyes promulgadas destaca la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que permite la expropiación de áreas mayores a 10 mil hectáreas que no tengan documentación regular; la Ley de Pesca y Acuicultura, que aboga por la pesca artesanal en relación a la pesca industrial; y, principalmente la Ley de Hidrocarburos que establecía una reapropiación de los ingresos petroleros por parte del Estado para fines de política pública.

Este conjunto de medidas desencadenó una articulación conspirativa que culminó con el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, orquestado con un decisivo apoyo mediático, como muestra el documental *The revolution will not be televised* (La revolución no será televisada), de los irlandeses Donnacha O'Briain y Kim Bartley. Revertida por la confluencia entre la protesta popular masiva y la intervención de militares fieles al gobierno, la ofensiva de la oposición cobró, pocos meses después, la forma de un paro cívico nacional —es decir, un *lockout* patronal, cuyo eje fue la interrupción de las exportaciones de petróleo con la paralización de PDVSA.

A pesar del éxito en desestabilizar la economía, provocando una caída del 27% del PIB en el primer semestre de 2003, el saldo político del embate inclinó la correlación de fuerzas decisivamente a favor del gobierno. Decidido a consolidar una reversión del sentido antinacional de la política petrolera practicada desde 1975, el gobierno llevó a cabo una limpieza en PDVSA despidiendo cerca de 18 mil funcionarios de un total de 42 mil. Al mismo tiempo, las políticas sociales se intensificaron, principalmente a través de las llamadas misiones, que respondieron al doble propósito de atender las demandas populares reprimidas y estimular bases orgánicas de apoyo al régimen, en un proceso que contó con la participación decisiva del ejército frente a los obstáculos que la burocracia estatal puso en relación con el chavismo[3]. Según López Maya:

3 Chávez declaró: "¿Era políticamente viable comenzar a gobernar ya con un proyecto pro-

> Fue después de esta victoria política que el gobierno pareció adquirir conciencia clara de que su supervivencia, no solo a mediano y largo plazo, sino también en el transcurso de los próximos meses, estaba vinculada a la posibilidad de que debería realizar cuanto antes y de manera tangible, la democracia participativa y protagónica que anunciaba desde el inicio de su gestión, y la cual, hasta entonces, solo había avanzado tímidamente (2006: 276).

Chávez resumió el dilema de estos primeros años en la siguiente frase: "O me dejo arrastrar o me mantengo firme" (Rangel, 2014: 313). El triunfo sobre la oposición golpista en Venezuela se consolidaba en el momento en que Lula asumía la presidencia de Brasil, seguida de la victoria de Néstor Kirchner en Argentina pocos meses después. Esta auspiciosa convergencia regional estimuló la radicalización bolivariana y marcó el surgimiento del proceso descrito retrospectivamente como la "ola progresista" en América del Sur.

Decidido a mantenerse firme, el gobierno venezolano articuló iniciativas en varias dimensiones, destinadas a consolidar las bases económicas, ideológicas, sociales y políticas del cambio. En el campo económico, estimuló actividades productivas en diferentes frentes y con estrategias variadas, involucrando desde la nacionalización de las empresas, los incentivos para emprendedores nacionales (la llamada *boliburguesía*[4]) y los estímulos para formas cooperativas de producción en el campo y en la ciudad, como las Empresas de Producción Social (EPS) y, más recientemente, la propuesta de Zonas Especiales de Industrialización (ZEIS), entre otras. En términos ideológicos hubo una radicalización que se revela en la incorporación de una retórica antiimperialista en 2003,

fundamente revolucionario? ¿Era políticamente viable? ¿Cómo? Con casi todo el Estado en contra" (Rangel, 2014: 408). Juan Carlos Monedero (2013: 18) registra el siguiente graffiti difundido en Caracas en aquel período: "Chávez es nuestro infiltrado en este gobierno de mierda".

4 *Boliburguesía* es un neologismo creado por la contracción de los términos "bolivariano" y "burguesía" para describir una nueva élite compuesta por empresarios y funcionarios que se enriquecieron durante el gobierno de Hugo Chávez [n.e.].

que condujo a la propuesta de un socialismo bolivariano difundida en 2004, a veces descrita como "socialismo del siglo XXI" (Dietrich, 2005) y que se intensificó con la propuesta del Estado Comunal de 2006. A nivel internacional, floreció una política alternativa, enfatizando la integración regional como parte de una estrategia orientada a la multipolaridad, señalada con el lanzamiento de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) en 2004, en contraposición al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la constitución de Petrocaribe en 2005, el ingreso al Mercosur en 2006, consumado en 2012, así como las relaciones profundizadas con países como China, Irán y Rusia. En el campo social, una multiplicidad de programas recibieron inversiones, tanto para garantizar una política de seguridad alimentaria, entre la producción de alimentos (Gran Misión AgroVenezuela) y su distribución en los mercados estatales (Mercal), hasta programas masivos de educación popular en diferentes niveles (escuelas bolivarianas, Misión Ribas, Misión Sucre y la Universidad Bolivariana), pasando por planes de salud (Misión Barrio Adentro, con destacada participación de médicos cubanos) y un impresionante programa de construcción de viviendas populares (Gran Misión Vivienda), entre otros.

Refrendado por diecisiete elecciones durante catorce años, en los cuales sufrió una sola derrota —en la consulta popular de 2006—, el gobierno era muy consciente de que la "tangibilidad de la democracia participativa y protagónica" mencionada por López Maya implicaba consolidar las bases sociales de apoyo al proceso, superando la falta de organicidad predominante cuando Chávez fue elegido por primera vez. En una palabra, la Revolución Bolivariana necesitaría superar el chavismo para avanzar. De ahí los múltiples emprendimientos organizativos en diversos terrenos, como los círculos bolivarianos y las misiones en el contexto polarizado de los primeros años; el surgimiento de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores dentro de la CTV, que apoyó el paro patronal en 2002 y 2003, y la creación de la Unión Nacional de Trabajadores en 2003; la constitución de Comités de Tierra Urbana (CTUS) en lugares donde había necesidad de regularización de la tierra en las ciudades, así

como de las Organizaciones Comunitarias Autogestionadas (OCAS) en el primer gobierno de Chávez; la formación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en 2007; el empeño en la afirmación de los Consejos Comunales y Comunas, especialmente a partir de la Ley de los Consejos Comunales de 2006, y con mayor vigor a partir de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales de 2009 (López Maya, 2011). Evidentemente, estas iniciativas se enfrentaron con los dilemas inherentes a la intención de organizar a la población a partir del Estado, comprometiendo su autonomía.

Las propuestas en el campo político fueron acompañadas por acciones en el campo de la prensa y la propaganda, buscando contrarrestar la hostilidad de la mayor parte de los medios de comunicación. A pesar de una retórica histriónica de resonancia internacional, denunciando supuestos límites a la libertad de expresión, las encuestas indicaban que, de los noventa diarios nacionales y regionales, cerca de ochenta seguían líneas de oposición al gobierno: la capacidad de estos vehículos para influenciar a la opinión pública se multiplicaba frente al hecho de que muchas estaciones de radio los utilizaron como fuente para sus programas de noticias. Además, la mayoría de los medios de comunicación son de propiedad privada: entre los canales de televisión, por ejemplo, había 65 comerciales y seis estatales (Díaz Rangel, 2012: 40). Frente a este impresionante poder, anclado en la complicidad de la gran prensa mundial, el gobierno invirtió en una prensa que simpatizara con su política, que tuvo en Telesur, su fruto más admirable. Pero el principal canal de comunicación con la población puede haber sido obra del propio Chávez, quien resultó ser un talentoso comunicador masivo, en vivo o en televisión, como protagonista del programa dominical Aló, Presidente.

Sin embargo, el carisma difícilmente podría sostener un proceso que se extendió por más de quince años. La política de inversión social del ingreso petrolero, que se benefició de altos precios del producto, registró avances sociales innegables bajo Chávez, atestiguado por una serie de datos. Entre 2002 y 2010, la población en estado de pobreza en Venezuela disminuyó de 48,6% a 27,8%, y esa cifra se reduciría a 21,2% en 2012. De manera similar, se observó una reducción de 22,2%

a 10,7% de venezolanos viviendo en pobreza extrema, alcanzando el 6,5% en 2012. Estas cifras colocaron al país como el tercero menos pobre de América Latina continental, después de Argentina y Uruguay. Además, Venezuela registró el coeficiente Gini —índice que mide el grado de concentración de ingresos— más bajo de América Latina (0,394). En el campo laboral, el desempleo cayó del 14,6% en 1999 al 6,4% en 2012, mientras que el empleo formal aumentó del 53% a 57,5%. El número de matrículas en todos los niveles de educación subió considerablemente, al igual que la extensión del sistema de jubilación (de 387 mil en 1998 a casi 2,5 millones en 2012), mientras que la mortalidad infantil y la desnutrición disminuyeron. Como resultado, el país registró un avance consistente de posición en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), alcanzando la posición 63 entre 187 países, situándose en el rango considerado "alto" de esta lista (Plan de la Patria, 2013).

Estas cifras, basadas en una reapropiación de los ingresos petroleros en favor del interés público, sugieren que el proceso bolivariano superó el nefasto legado social y económico del neoliberalismo, devolviendo al país a la ruta de la nación. Sin embargo, la persistencia de altos índices de criminalidad, la corrupción y la ineficiencia estatal, el clientelismo, la cultura rentista, la dependencia del petróleo, la falta de soberanía alimentaria y el patrón de consumo basado en las importaciones indican los límites entre lo que realizó y lo que proyectó la revolución.

Dilemas de la Revolución Venezolana

Desde que Nicolás Maduro se eligió con un estrecho margen de votos en marzo de 2013, los principales desafíos del gobierno están en el ámbito económico. Su principal expresión es el aumento de la inflación, los problemas de abastecimiento y el desajuste del tipo de cambio, en el que se observa una notable disparidad entre las diferentes bandas cambiarias oficiales y el precio del dólar del mercado paralelo. La desorganización de la economía tiene efectos

desintegradores en el tejido social y hay indicios de que los avances mencionados anteriormente se revirtieron (Lander, 2015).

Más adelante se detallan los mecanismos y efectos de la crisis. En este momento se llama la atención sobre los aspectos que remiten a su dimensión estructural, al tiempo de delinear los contornos de lo que parece haber sido la estrategia chavista para superar estas limitaciones. La hipótesis central es que el énfasis en la disputa política en detrimento de las contradicciones económicas fue un síntoma de la debilidad del bolivarianismo para producir el cambio. Este enfoque analítico matiza el peso de la muerte de Chávez en la crisis actual, sugiriendo los límites del proceso en su totalidad.

La raíz estructural de los problemas económicos venezolanos remite al desencuentro entre el patrón de consumo, mediado por importaciones a menudo subsidiadas por el Estado, y a la base productiva del país, siendo esta una situación característica del subdesarrollo. La peculiaridad del país es contar con lo que Celso Furtado (2008: 46) describió como un "flujo líquido estable de capital extranjero" proveniente de los ingresos del petróleo, indicando la posibilidad de eludir una de las barreras características de la industrialización periférica: la escasez de capitales. Sin embargo, esta "abundancia de divisas", al engranar en las estructuras del subdesarrollo, genera las distorsiones socioeconómicas asociadas a la "enfermedad holandesa" y que en Venezuela dan lugar a relaciones sociales subsumidas al rentismo petrolero, fundamentadas en un patrón de consumo basado en importaciones y subsidios estatales. Lejos de limitarse a una cuestión económica, superar la dependencia del petróleo implica modificar relaciones sociales cristalizadas, cuyo origen remite a la colonización, como señala Coronil:

> Paradójicamente, el dinero proveniente del petróleo, que era el resultado de las actividades de algunas de las empresas transnacionales más dinámicas, reforzó en Venezuela las concepciones y

> prácticas surgidas a partir del descubrimiento y de la colonización de las Américas, que consideraban la riqueza, no tanto como el resultado del trabajo productivo, pero sí como la recompensa por actividades que no están directamente relacionadas con la producción, entre ellas la conquista, el saqueo o la pura suerte (2013: 470).

En este contexto, "sembrar el petróleo" no debe concebirse como un fin en sí, sino como expresión de un anhelo de cambio que trasciende la dimensión económica del rentismo. Después de todo, una hipotética distribución equitativa de los ingresos petroleros sustentaría una nación rentista —o, en el límite, un "socialismo rentista"—, como fue sugerido provocativamente (Álvarez, 2012). Sin embargo, más allá de la cuestión existencial sobre el significado de una sociedad que se reproduce a sí misma como un "parásito de la naturaleza", la superación de la dependencia petrolera es condición para asumir el control sobre el propio destino y, en este sentido, una premisa de la Revolución Venezolana. En otras palabras, el ingreso petrolero es la expresión venezolana del problema de la dependencia, que es indisociable del patrón de lucha de clases que reproduce el subdesarrollo, según analizó Florestan Fernandes (1968; 1975).

En esta perspectiva, al recuperar la directriz "sembrar el petróleo", Chávez también incorporó sus ambigüedades, pues como se vio que este eslogan sugiere el contenido económico, pero elude la dimensión de clase de la Revolución Venezolana: se enfoca en la distribución y no en la producción. Esta ambivalencia se refleja en la dinámica del proceso bolivariano, en el que la claridad de su líder con respecto al carácter de la burguesía venezolana —"imaginen si yo hubiese hecho un pacto con la derecha venezolana, con la burguesía capitalista; yo ya estaría políticamente acabado"—, que resultó en una radicalización del proceso, convivió con un llamado permanente a la colaboración de clases —"no hay otro camino sino alcanzar el más amplio consenso social"— y con la queja de la falta de oposición leal, que practicase la política "con código ético" (Rangel, 2014: 361, 378). Esta ambivalencia

entre la conciencia de las implicaciones políticas de la radicalización y la aspiración a la conciliación de clase encontró expresión lapidaria en una entrevista concedida por el presidente en septiembre de 2012 durante su última campaña presidencial:

> Nuestra victoria le conviene a los dueños de la Televen, le conviene a los dueños de Venevisión, le conviene a los dueños de las grandes empresas privadas, le conviene a la gran burguesía del Lagunita Country Club ¿Por qué? Porque con Chávez aquí, se garantiza la tranquilidad del país, la paz del país y el desarrollo del país […] Yo soy una garantía para ustedes, un seguro de estabilidad; ¿Qué más quieres que te diga? (Rangel, 2014: 465).

Y, sin embargo, los propietarios venezolanos desestabilizaron el orden chavista siempre que fue posible, reafirmando que no tenían vínculos con el espacio económico nacional o con un proyecto de nación. Más allá de las contradicciones inherentes al fomento de una industria nacional cuando el interés de las clases dominantes está vinculado a las importaciones, la apertura neoliberal potenció la especulación financiera, agudizando la volatilidad del espacio económico nacional. Se estima que entre el auge petrolero y la liberalización económica de la década de 1990 hubo una fuga de capitales de 60 mil millones a 90 mil millones de dólares, es decir, entre dos y tres veces la deuda externa de la época. Ya en los meses de paro petrolero, en 2003, la fuga de capitales fue estimada en siete mil millones de dólares. En la crisis reciente, se observó una convergencia entre la especulación financiera, que presiona el precio del dólar para apostar por una devaluación del bolívar, y la especulación comercial, que importa productos al dólar oficial para revenderlas a la cotización paralela.

Frente a esta realidad, y asumiendo como premisa que el proceso bolivariano envolvió un compromiso genuino para consumar la Revolución Venezolana, ¿cómo explicar la postura conciliadora de Chávez?

Es posible interpretar sus declaraciones como una táctica orientada a minimizar las contradicciones sociales, en función de una evaluación desfavorable de la correlación de fuerzas para un enfrentamiento abierto. Una racionalidad similar puede ser aventurada en el plano de las relaciones internacionales, en las que Chávez criticó a menudo la orientación neoliberal del Mercosur, al cual terminó adhiriéndose, mientras defendió a Unasur como vía de integración regional antineoliberal, aunque la perspectiva brasileña de una organización "paraguas", de carácter eminentemente político, se haya impuesto (Sanahuja, 2012). En ambos casos, Venezuela aceptó los limitados beneficios que estas iniciativas le ofrecían como contrapeso a la virulencia estadounidense, en un contexto mundial hostil a proyectos alternativos al neoliberalismo —mucho menos a los de inspiración socialista.

En una coyuntura internacional desfavorable al cambio, confrontado con una burguesía cuyo horizonte mercantil está desvinculado del espacio económico nacional y de la producción de riqueza, heredando un Estado "ineficaz, corrupto, autoritario, indolente y derrochador" (Monedero, 2013: 18), las esperanzas de una revolución nacional solo podrían ser depositadas en el pueblo venezolano, a quien Chávez dio testimonios de fidelidad.

Sin embargo, el punto de partida en este campo tampoco era auspicioso. Como se observó, Chávez fue elegido en un contexto de desprestigio de los partidos políticos y debilidad de la clase trabajadora, en un proceso en el que un sector militar desempeñó el papel de partido contra el orden y fue elegido, movilizando una amplia pero difusa base de apoyo popular. Frente a un Estado corrupto, una central sindical opositora y un movimiento campesino incipiente, el gobierno se apoyó inicialmente en el ejército para iniciar las misiones. Sin embargo, la oportunidad de radicalizar el cambio motivó una estrategia de transición a una otra Venezuela que Chávez describió como "socialismo bolivariano", señalando de este modo que no tendría como horizonte el capitalismo ni el paradigma soviético, sino la nación. En este sentido, le gustaba citar a Fidel Castro, quien decía

que su mayor error fue creer que había quien supiese el camino al socialismo. De ahí el lema de Simón Rodríguez, abrazado por Chávez: "O inventamos o erramos".

El terreno de la invención escogido por Chávez fue la política, campo en el que cosechó sus mayores éxitos, y su método, el Estado Comunal.

La constitución del Estado comunal fue proyectada a partir de la consolidación y articulación de varias instancias del poder popular, como los Consejos comunales, las Comunas, las Ciudades Comunales y, finalmente, el Estado comunal, culminando con el ideario de la "democracia participativa y protagónica". Recibiendo inicialmente atribuciones políticas, diversas comunas se articularon en torno a actividades productivas, especialmente en el campo, marcando una aproximación germinal entre las dimensiones productiva y legislativa de la vida social. Habiendo proyectos de orientación económica similar, se constituía un "distrito motor" vinculado a las Regiones Estratégicas de Defensa y Desarrollo Integral (REDI) promulgadas en el Plan de la Patria (2013-2019), programa gubernamental ideado por Chávez e incorporado por Maduro. A mediados de 2014, había más de 48 mil Consejos Comunales y más de 2 mil Comunas, de las cuales 754 estaban registradas como tales, y estaba en marcha un proceso de transferencia de competencias y recursos a estas instancias comunales mediado por el Ministerio del Poder Popular para las comunas y los Movimientos Sociales, órgano que según afirmó su viceministro "tiene que tener una existencia finita" (Toledo, 2014).

La propuesta del Estado Comunal como herramienta para construir el socialismo floreció en una realidad en la que incluso los opositores al régimen reconocieron que "las innovaciones participativas impulsadas por el gobierno durante doce años arraigaron la convicción de que los problemas de la democracia venezolana pueden ser resueltos con la participación y el esfuerzo de todos" (López Maya, 2011: 113).

Sin embargo, este camino que enfatiza la vía política no estuvo exento de contradicciones. Como señala Víctor Álvarez (2012), durante

el proceso bolivariano la economía se volvió *más capitalista*, en el sentido de que la participación del sector privado aumentó de 64,8% a 70% entre 1999 y 2008-2009, un fenómeno que se explica en las siguientes palabras:

> La política económica bolivariana, al concentrarse en la reactivación y no en la transformación del aparato productivo existente, contribuyó a que el sector capitalista de la economía creciera a una mayor velocidad que la economía pública y la economía social.

La dependencia del petróleo también aumentó, representando casi el 95% de las exportaciones en el gobierno de Maduro, que todavía tenía a los Estados Unidos como su principal comprador, a pesar de la creciente participación de China. Pero más allá de los desafíos que remiten a las relaciones de producción, el chavismo se resistió a implementar reformas modestas que señalarían una tendencia hacia la disciplina en el uso de la riqueza y del consumo. Por ejemplo, en Venezuela no hay impuesto sobre la ganancia financiera, mientras que la vecina Colombia tiene una tasa del 25%; la carga fiscal en el país está entre el 9% y el 12% del PIB, mientras que en Brasil alcanza al 35%. Finalmente, el gobierno se resistió a mover el precio de la gasolina, el más barato del mundo, pero cuyo subsidio desangra las arcas públicas.

Este subsidio condensa las contradicciones inherentes al patrón de distribución del ingreso petrolero que caracteriza al "Estado Mágico". En primer lugar, reproduce la desigualdad, una vez que la subvención para quienes disfrutan de un transporte público barato es ínfima en comparación con los propietarios de automóviles, vagonetas y jeeps, cuyo consumo es aún mayor según el tamaño y la sofisticación del modelo. En consecuencia, esta cuestión remite a otro dilema de la Revolución Venezolana, implicando la necesidad de modificar un patrón de consumo reflejado en las sociedades del capitalismo central. Pues

como indicó Furtado (2008: 126), en el caso venezolano, "disciplinar el consumo es al menos tan importante como orientar la producción".

A pesar de las contradicciones para consolidar el poder comunal del modo como se concibió, con el apoyo del Estado y en el marco de la continuidad económica, se trata de un esfuerzo para proyectar un horizonte de cambio para el chavismo. En esta perspectiva, se entiende que no debe ser despreciado, sino analizado y evaluado como parte de una estrategia cuyos límites se hicieron evidentes después de la muerte del líder el 5 de marzo de 2013.

Chávez fue un lector atento y un intelectual voraz que tuvo la humildad de aprender con los libros y con la vida. La centralidad adquirida en su pensamiento por el lema "o inventamos o erramos" traduce la conciencia de que "la revolución es una eterno revisar". El líder venezolano también fue un dedicado estratega[5], e Ignacio Ramonet llama la atención sobre su habilidad para ser subestimado, que estaría relacionada a su origen pobre (2013: 21). Así es plausible que el Estado comunal emerja inspirado en los Comités de Defensa Revolucionarios Cubanos (CDRS), en una estrategia que combina la democracia directa y la territorialización del poder (Briceño Méndez, 2014), con la intención de superar los obstáculos a la radicalización del proceso venezolano:

> Creo que ese es el mejor combate contra la burocracia, contra la ineficiencia del Estado, contra la corrupción. Darle poder al pueblo, he ahí los consejos comunales y sus leyes, ya son unas instituciones; he ahí las comunas que se están formando; he ahí el control social y la ley que se acaba de aprobar, son ejemplos... Son una configuración estratégica general mucho más complicada, mucho más trabajosa (Rangel, 2014: 333).

5 Chávez declaró: "En la Academia aprendí lo que Napoleón llama la 'flecha del tiempo'. Cuando un estratega planea una batalla, debe pensar de antemano en el 'momento histórico', luego en la "hora estratégica", después en el 'minuto táctico' y por fin en el 'segundo de la victoria'. Nunca olvidé ese esquema de pensamiento" (Ramonet, 2013: 20).

Entiendo que la propuesta del Estado Comunal fue parte de una estrategia de consolidación de la Revolución Venezolana, concebida como un largo proceso histórico cuyo eje no es el cambio de las relaciones de producción, sino la construcción de lo que Antonio Gramsci conceptualizó como "hegemonía". Vista desde este ángulo, la crítica de López Maya a una instrumentalización de los Consejos Comunales por el PSUV debe ser matizada, toda vez que expresa una contradicción más profunda, inherente al papel de un Estado que pretende disolver su poder (López Maya, 2011). Según lo registrado por Azellini,

> El desafío a la transformación en Venezuela significa que muchas de las instituciones tienen que trabajar para superar su propia existencia (por ejemplo, el Ministerio de las Comunas), o por lo menos cambiar completamente sus funciones y reducirlas a favor de la participación protagónica del pueblo organizado. Esto por la lógica inherente, no hace ninguna institución por sí misma (2012: 119).

La resistencia que este proceso suscitó en el propio campo bolivariano era predecible, ya que entra en conflicto con los intereses arraigados en la institucionalidad imperante. Después de todo, el bolivarianismo se convirtió en poder. En esta perspectiva, el poder comunal fue visto como un rival por cuadros vinculados a las diferentes instancias del poder estatal y que no se proyectan una "existencia finita". En opinión de muchos, esta fue la razón subyacente a la única derrota electoral del chavismo en una consulta que buscaba, entre otros, refrendar el poder comunal y la orientación socialista del proceso. Es plausible que el propio Chávez cultivase una relación ambigua con la propuesta comunal, dividido entre las exigencias del poder estatal y la utopía del poder popular —dilema familiar a la Revolución Cubana, a la que se aproximó.

Crisis

En vísperas de la elección parlamentaria en Venezuela en diciembre de 2015, los desequilibrios económicos en el país se acentuaban. La inflación se estimó en 150% según datos no oficiales, ya que el gobierno no divulgó cifras durante todo el año. Hubo escasez en varios sectores, incluyendo los alimentos básicos, medicamentos, insumos productivos y repuestos. El desajuste cambiario despegaba: en el tipo de cambio oficial, el dólar se cotizaba a 6,30 bolívares, mientras que en el mercado paralelo superaba los 800 bolívares, un fenómeno que potenciaba prácticas especulativas de distinta naturaleza. En consecuencia, había escasez de divisas, dificultando los viajes al exterior. El nivel de reservas internacionales del país era bajo, alrededor de 16 mil millones de dólares y con escasa liquidez, ya que más del 80% estaba en oro. En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) visualizaba una recesión de alrededor del 10% para el país. En este escenario económico desalentador, la popularidad del presidente Maduro era evaluada en torno al 25% y la pérdida de la mayoría gobernante en el Congreso era predecible, aunque pocos imaginaran la magnitud de la derrota que se impuso (Ramos, 2015).

El marco general del proceso que llevó a esta situación es conocido. En un contexto en el que prevalece un tipo de cambio fijo sobrevaluado, el precio del dólar en el cambio paralelo pasó de 12 bolívares en octubre de 2012 hasta alcanzar un máximo de 88 bolívares a fines de febrero de 2014. Este salto estuvo vinculado a una escasez de divisas en dólares a mediados de 2013, asociada al aumento sustancial de los gastos públicos a partir de 2010, después de cinco trimestres de recesión que siguieron a la caída en el precio del barril de petróleo de 118 a 58 dólares a fines de 2008. La principal inversión se destinó a la construcción de viviendas del programa Gran Misión Vivienda, lanzado en respuesta a un desastre natural que dejó a miles de personas sin hogar en el estado de Vargas. Más allá de la motivación inmediata, el programa señaló una nueva ronda de acciones populares en el marco de una serie de disputas electorales

que se anunciaban, y que acabó por consumir las finanzas públicas y la salud de su principal líder.

La escasez de divisas desencadenó un aumento en el precio del dólar paralelo afectando a las importaciones, lo que tuvo repercusiones inflacionarias y afectó el poder adquisitivo de los salarios. La escasez de algunos productos generó compras compulsivas con la intención de almacenar, lo que a su vez exacerbó la escasez. El desajuste en la relación entre el dólar paralelo y el oficial, cuya diferencia anterior era el doble, se elevó más de diez veces, extendiendo actitudes oportunistas, en que los comerciantes, que importaban al tipo de cambio oficial, reajustaban sus precios de acuerdo con la variación del paralelo, agravando la presión inflacionaria.

En este contexto, el gobierno lanzó una banda cambiaria intermediada conocida como Sicad 2, con el objetivo de disminuir la demanda del dólar en el paralelo y romper el ciclo de depreciación e inflación que se había establecido. A partir de febrero de 2014, entraron en vigencia diferentes tipos de cambio: el dólar a 6,3 bolívares para la importación de bienes esenciales; el Sicad 1, que en ese momento estaba en el rango de 10 bolívares, para artículos secundarios y viajes internacionales venezolanos; el Sicad 2, que sigue el sistema de oferta y demanda con intermediación del Banco Central, que rondaba los 50 bolívares; y, finalmente, el dólar paralelo, que en ese momento cayó a menos de 70 bolívares (Ramos, 2014).

En el segundo semestre de 2015, la explosión de la diferencia entre el cambio oficial congelado en 6,30 bolívares, y el paralelo, que superó los 800 bolívares, se convirtió en un impulso irresistible a la especulación, que se materializó de varias maneras y escalas. En pequeña escala, se observaron múltiples actividades especulativas, como el fenómeno de los *raspacupos*, que compraban pasajes en vuelos internacionales para acceder a dólares al precio oficial, que posteriormente eran revendidos en el paralelo, agotando los asientos virtuales de aviones que de hecho despegaban vacíos (Ramos, 2014); o el contrabando en pequeña y gran escala de todo lo imaginable

desde gasolina hasta pañales, pasando por alimentos y medicinas, especialmente para Colombia[6]. El empeño del gobierno por preservar el subsidio a los alimentos de primera necesidad impulsó este comercio ilegal, del que se beneficiaban autoridades fronterizas corruptas. A mayor escala, se registraron controversiales manipulaciones contables en grandes empresas, como en el campo de la aviación, generando constantes fricciones con el gobierno. Lo más grave para la legitimidad del proceso fue la evidencia de corrupción que involucraba a los funcionarios públicos, incluso con denuncias de contrabando de buques petroleros con la complicidad de los miembros del gobierno y de las Fuerzas Armadas. La profundidad del problema se evidencia cuando se recuerda que Chávez recurrió al Ejército, especialmente en sus primeros años como presidente, buscando contrarrestar las dificultades para implementar un programa de cambio frente al Estado "ineficaz, corrupto, autoritario, indolente y derrochador" que había heredado.

La diferencia entre los tipos de cambio, combinada con el aumento de la inflación resultó en la práctica en la dolarización del precio de los artículos importados. Así, un frasco de *ketchup* marcado a 6 mil bolívares equivaldría a casi mil dólares en el cambio oficial. La otra cara de esta situación es la devaluación real de los salarios, acentuada en comparación con actividades que involucran el acceso a dólares: alguien que revende un tanque de gasolina venezolano en Colombia una vez al día, cinco veces por semana, ganará más que un profesor universitario (Ramírez, 2015).

La conjunción entre la difusión de la referencia al dólar en una economía basada en importaciones y la disminución del poder adquisitivo de los salarios, a pesar de los continuos aumentos concedidos por el gobierno, obligó a los venezolanos a buscar dólares para

6 Fue en este contexto que el gobierno venezolano deportó a 1.532 colombianos en agosto de 2015, según datos de las Naciones Unidas, y decretó el cierre de la frontera, provocando que al menos 18.377 ciudadanos regresen a su país de origen por temor a desarrollos, descritos por el Estado colombiano como una "crisis humanitaria".

subsistir. Así, de una situación en que los propietarios más grandes y más pequeños manejaban la crisis como una oportunidad mercantil, lucrando con la brecha del tipo de cambio, se transitó a una realidad en la que muchos complementaban el ingreso, o incluso dejaban sus trabajos en busca de divisas, buscando mantener su patrón de vida. A menudo, los medios de acceso a divisas implican actividades ilícitas, y el manejo de la disparidad cambiaria es éticamente cuestionable. Este fenómeno, que se asemeja formalmente al llamado "período especial" en Cuba tras el colapso de la Unión Soviética, señala una corrosión ética del proceso bolivariano en la medida en que la reproducción social basada en el trabajo ya no es suficiente (Lander, 2015).

Frente al deterioro progresivo de las condiciones cotidianas de los venezolanos, los observadores que simpatizan con el proceso cuestionan si el desgaste político no sería superior al peso de los cambios que disciplinen la economía. Incluso las medidas cuya necesidad es ampliamente reconocida, como el reajuste en el precio de la gasolina, resistían a ser implementadas: el recuerdo del *Caracazo* intimidaba a los líderes. Mientras tanto, al precio de 10 centavos por litro, un dólar compraba 8 mil litros de gasolina subsidiada a fines de 2015, desangrando las arcas públicas.

Los déficits operativos eran cubiertos con la emisión de moneda y con préstamos, principalmente de origen chino, hipotecando la producción futura de petróleo. Simultáneamente, las gestiones internacionales de Maduro para articular un aumento en los precios del petróleo junto a los países productores fueron infructuosas, aunque reveladoras al explicitar que el horizonte de salida de la crisis está dentro del marco del rentismo petrolero. De hecho, el único punto en que el "Plan de la Patria" chavista se parecía al programa electoral del opositor Henrique Capriles era el compromiso de duplicar la producción de petróleo hasta 2019.

Esta constatación explicita los límites del proceso bolivariano: pasados más de quince años, Venezuela se convirtió en un país más dependiente de las exportaciones de petróleo. El esfuerzo del gobierno en

materializar la utopía de "sembrar el petróleo" utilizando el "flujo líquido estable de capital extranjero" proveniente de ingresos petroleros, fracasó.

Aunque un balance de los esfuerzos realizados en esta dirección y de los obstáculos que encontraron exijan investigaciones de campo consistentes y que empaticen con los obstáculos encontrados, es posible constatar que, de manera general, el rentismo prevaleció sobre la producción. Una investigación realizada en un conjunto de empresas nacionalizadas de pequeño y mediano porte, entre 2002 y 2009, sugiere resultados devastadores desde el punto de vista de la productividad (Obuchi, 2011). Las grandes empresas tampoco presentaron resultados satisfactorios, aunque siempre hay excepciones, como es el caso de la CANTV, empresa telefónica que volvió a ser nacionalizada en 2007 —y que sigue siendo rentable—. Como regla general, las empresas estatales soportaron factores políticos tales como el nombramiento de favorecidos, disputas intestinas o la suspensión de las elecciones sindicales cuando una oposición crítica al chavismo, por su postura de izquierda, venció a la representación de los trabajadores en la Siderurgia del Orinoco (SIDOR), la mayor siderúrgica del país.

Hubo y hay todavía intentos de fortalecer el poder de los trabajadores por medio de la producción social. Sin embargo, las barreras estructurales al cambio en las relaciones de producción, sumadas a la cultura rentista que impregna las relaciones sociales, han revelado ser un obstáculo extraordinario. Así, la nacionalización y la entrega de Sidor al control obrero en 2008, en el contexto de una amplia huelga reivindicando reajuste salarial, no alteraron las relaciones laborales en la empresa, ni previnieron conflictos con el Estado en los años siguientes. De modo similar, se observan numerosos conflictos laborales en las empresas vinculadas a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), un conglomerado público que emplea a más de veinte mil trabajadores en la región (Posado, 2013). A pesar de la intención del Plan Guyana Socialista 2009-2019, que pretendía convertir el centro de la industria pesada del país en un "laboratorio del nuevo papel de los

trabajadores en el control y gestión de la producción", el presidente Maduro sugirió en un discurso, poco después de ser elegido, que el modelo de control de los trabajadores en Guayana no fracasó, porque en realidad nunca existió (Maduro, 2013).

Mientras tanto, en el campo, experimentados militantes del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), en una misión de cooperación técnica en el país, presenciaron una realidad singular, en la que hay un gobierno que expropia tierras, pero no hay quien trabaje en ellas. Por otro lado, la importación subsidiada de productos agrícolas dificulta la producción rentable y el Estado termina financiando a muchas de las Empresas de Producción Social para evitar devolver la tierra a los propietarios. En resumen, prevalece la cultura de que "es más fácil cosechar en los puertos que cosechar en los campos" (Micilene y Derli, 2014).

En general, los cerca de 23 mil millones de dólares invertidos en nacionalizaciones en el período 2007 y 2009, cuando el proceso bolivariano radicalizó su discurso y su práctica en la dirección socialista, fueron incapaces de alterar la estructura productiva del país. Desde el punto de vista de las relaciones de producción, tampoco se modificaron las jerarquías del trabajo. Al contrario, Álvarez (2012) constató un recrudecimiento de la explotación de los trabajadores al observar que, en 1998, el "factor trabajo" absorbía el 39,7% del valor creado, superando el 36,2% que correspondían al capital. Diez años después, la participación del trabajo cayó al 31,69%, mientras que la de los capitalistas aumentó al 49,18%, según datos del Banco Central de Venezuela.

En resumen, a pesar de la inflexión que el bolivarianismo representó para la historia de Venezuela y su importancia en reposicionar el cambio radical en la agenda del continente, el proceso fue incapaz de desafiar consistentemente la lógica rentista. Y, en el momento en que la muerte del líder indiscutible y la caída de los precios del petróleo exigirían sólidas bases económicas para superar las adversidades, las debilidades afloraron, referidas a las propias circunstancias que permitieron la ascensión de Chávez.

En primer lugar, la debilidad orgánica del movimiento social venezolano hizo que Chávez se apoyara en el Ejército como partido, situación que se agudizó en respuesta al golpe fallido que sufrió en abril de 2002, y se evidenció en el papel de la institución en la implementación de las misiones. Sin embargo, la centralidad del Ejército es contradictoria con las presiones de sentido democratizador plasmadas en el ideario del Estado Comunal desde 2006. El propósito de fortalecer los poderes locales en paralelo con el Estado, como parte de una estrategia para consolidar la Revolución Venezolana, es antagónico a la racionalidad militar, donde la autonomía es identificada como una amenaza a la soberanía.

En segundo lugar, la militarización del Estado, que ha sido exacerbada por Maduro, refuerza un dilema que acompañó el proceso: cómo establecer vínculos orgánicos entre el pueblo venezolano y el Estado bolivariano sin instrumentalizar esta relación con fines políticos o, más precisamente, electorales. Las tensiones entre el poder del Estado y la democracia popular tuvieron consecuencias importantes a nivel productivo, toda vez que frecuentemente valiosas iniciativas para democratizar la propiedad y el control de la producción sufrieron las distorsiones típicas de los procesos jerárquicos o "de arriba hacia abajo" en el lenguaje popular.

Una tercera cuestión surge en el plano de los tiempos del cambio social. A pesar de la retórica revolucionaria, el ascenso de Chávez se consumó por la vía electoral, y el proceso bolivariano compensó su fragilidad organizativa y su debilidad económica con una recurrente legitimación en las urnas. Sin embargo, el tiempo de las elecciones presiona para obtener respuestas inmediatas, lo que inhibe la implementación de cambios radicales que pueden ser coyunturalmente impopulares, como es el caso del subsidio a la gasolina. O incluso medidas que no serían radicales o impopulares, pero que tropiezan con el temor de irritar los ánimos opositores, como la tributación de las ganancias financieras. Así, la dinámica electoral condicionó el alcance del chavismo a una redistribución democratizadora de los ingresos

del petróleo, en la que la extensión de los subsidios desde una perspectiva universalista reforzó los patrones característicos del rentismo. Una expresión de la perpetuación del rentismo es la reproducción de patrones de consumo típicos de las sociedades centrales. En conjunto, se observa una correspondencia entre las dificultades para desarrollar un sector productivo nacional y la adopción de estándares económicos y culturales adecuados a la realidad del país.

Evidentemente el desarrollo de una base industrial propia en el siglo XXI enfrenta a numerosos desafíos económicos que difícilmente serían dirimidos a escala nacional. De ahí el énfasis concedido por el proyecto bolivariano a la integración regional. Pero, se verá más adelante, su iniciativa más audaz en esta dirección —el Alba— fue neutralizada en la práctica, por la actuación brasileña, cuyo proyecto regional obedeció a una racionalidad mercantil y de proyección nacional. Por otro lado, la política llevada a cabo por Venezuela a través del Alba y de Petrocaribe careció de reciprocidad, y cuando la crisis empeoró, el país se vio obligado a vender con un descuento considerable las deudas por cobrar de Jamaica y de República Dominicana (Cerezal, 2015). Incluso los otros dos países que señalizaron proyectos de cambio radical en la región, Bolivia y Ecuador, establecieron una relación instrumental con el Alba, beneficiándose de las ventajas mercantiles que esta aproximación les ofrecía, pero demostrando escaso interés en otras dimensiones de la propuesta (Villegas, 2016).

Reconocer los límites del contexto internacional en que se movió Chávez no significa ignorar un terreno de concordancia fundamental, sintetizado en la ilusión del progreso —o, en términos de Furtado, el "mito del desarrollo económico"—. En el caso venezolano, el paradigma del progreso se tradujo en la reproducción de la dependencia en relación al petróleo. Aunque teóricamente sea concebible una diversificación económica impulsada por los ingresos del petróleo, la historia ha demostrado que las problemáticas son indisociables. Para cambiar la estructura económica del país, es necesario enfrentar la articulación entre dependencia y desigualdad.

El rentismo petrolero es la forma en que se expresa el subdesarrollo en Venezuela. Y así como la superación del subdesarrollo no se limita a la ecuación de sus variables económicas, el rentismo exige ser enfrentado en su totalidad, abarcando los aspectos económicos relacionados con las barreras a la diversificación y autodeterminación económica; sociales, referidos a las distorsiones socioeconómicas que militan contra una sociedad basada en el trabajo; políticos, que proyectan relaciones de dependencia y clientelismo en las esferas de la organización popular; y culturales, fomentando una subjetividad basada en patrones de consumo ajenos a la realidad venezolana.

Reflexiones finales

Frente a las restricciones impuestas por el patrón de lucha de clases venezolana para profundizar el cambio dentro del orden, Chávez lideró una progresiva radicalización del proceso bolivariano. El amplio apoyo popular, respaldado por la lealtad de un sector de las Fuerzas Armadas, garantizó la victoria del gobierno en enfrentamientos decisivos en sus primeros años, que resultaron en la desarticulación de la oposición y en el fortalecimiento del chavismo en el momento en que los presidentes identificados con el campo progresista se eligieron en Brasil y en Argentina. Anclado en el restablecimiento del carácter público de PDVSA, los incontestables avances sociales del gobierno acentuaron la legitimidad del proceso, reafirmada en numerosas elecciones y consultas populares que enterraron los fundamentos políticos del *puntofijismo*.

Sin embargo, la pretensión de profundizar las conquistas populares se enfrentó con obstáculos estructurales, cuyas raíces remiten al modo en que el ingreso del petróleo engranó en una sociedad forjada en el marco de la colonización del Nuevo Mundo, engendrando la peculiar situación de "subdesarrollo con abundancia de divisas". Frente a una correlación desfavorable de fuerzas nacional e internacional a los proyectos de sentido anticapitalista, la autodenominada Revolución

Bolivariana eligió el terreno de la política, en el cual obtuvo sus mayores éxitos, como vía para una proyectada radicalización del proceso.

Su propuesta más osada en esta dirección, formulada como Estado Comunal, encontró obstáculos y contradicciones, entre la resistencia de sectores chavistas incrustados en el Estado y las limitaciones a la autonomía del campo popular. Consciente de que se trataba de "una configuración estratégica general, mucho más complicada, mucho más trabajosa", la estrategia parece haber sido una extensión del tiempo revolucionario con la intención de solidificar las condiciones subjetivas para una futura radicalización. Sin embargo, este esfuerzo por difundir una identificación positiva entre revolución nacional y socialismo contradice los límites objetivos impuestos por la reproducción capitalista en Venezuela, lo que resulta en paradojas como el aumento de la participación del capital en la riqueza producida, la intensificación de la explotación del trabajo, una mayor dependencia en relación al petróleo y la reproducción del mimetismo cultural.

Sin la presencia de su líder indiscutible, enfrentando problemas económicos característicos del "subdesarrollo con abundancia de divisas" en un momento en que las conquistas acumuladas disminuyen frente a las dificultades cotidianas, surgen las vulnerabilidades de un proceso valiente y comprometido con el cambio, pero cuyo horizonte civilizatorio no superó las articulaciones entre rentismo y consumo importado que caracterizan el subdesarrollo en el país. Más de quince años después, las limitaciones de la estructura asaltan el tiempo de la coyuntura, poniendo en jaque a la Revolución Venezolana.

Frente al desgaste de un Estado permeado por la corrupción, cada vez más respaldado por militares que a menudo no reconocen el liderazgo de Maduro con el mismo fervor que acataron a Chávez, en un contexto de inseguridad pública e imprevisibilidad económica que fuerza a los ciudadanos a ingenierías cotidianas para viabilizar la rutina, el discurso de la "guerra económica", aunque real, se ha mostrado insuficiente para renovar los votos al proceso. La aplastante derrota electoral en diciembre de 2015, cuando la oposición logró

dos tercios de los parlamentarios, llevó al gobierno a una reacción controversial, recurriendo a malabarismos políticos y a eufemismos ideológicos para eludir la disputa en las urnas, en la cual otrora se apoyara. El Congreso fue ignorado, la realización de un referéndum revocatorio previsto en la Constitución fue solapado y las elecciones para gobernadores postergadas. La institucionalidad burguesa con la que convivió el bolivarianismo se convirtió en un obstáculo para su supervivencia, ya vacía de cualquier potencial revolucionario. En este contexto, la convocatoria a una asamblea constituyente elegida según criterios específicos que favorecen al gobierno, fue interpretada como un medio para reforzar el poder Ejecutivo y escamotear al Parlamento electo.

En su conjunto, este camino dividió a la izquierda en relación al bolivarianismo, entre aquellos que consideran legítimo defenderlo frente a las alternativas reaccionarias que se presentan, aunque por métodos antidemocráticos, y los que identifican contradicciones insostenibles entre los medios y los fines de la política avanzada, comprometiendo cualquier aspiración progresista. En todo caso, el proceso está a la defensiva y lo sembrado no florecerá en el poder popular.

La evolución de la coyuntura venezolana ilustra de modo paradigmático los límites del progresismo. Impotente para superar la exportación primaria, promoviendo un nuevo patrón de acumulación, o una revolución social, modificando las estructuras de propiedad y de poder, el proceso bolivariano quedó en medio del camino. Como en América Latina no hay espacio para el término medio, en 2017 una vorágine tragaba las conquistas del pasado, mientras sometía al país a la descomposición social, sacando a relucir lo peor del bolivarianismo. Incapaz de promover el cambio con que se identificó, el bolivarianismo bloqueaba la reacción, convirtiéndose en una fuerza conservadora, mientras el país se degradaba a un ritmo acelerado.

Como observó Lander, la diferencia fundamental de los momentos más difíciles bajo el liderazgo de Chávez, que atravesó problemas económicos igualmente graves a raíz del paro petrolero de 2002 y 2003,

es que la población creía que estaba experimentando una situación provisional, en tránsito hacia algo mejor. Con Maduro, el sentimiento predominante es que el proceso bolivariano se ha agotado, arriesgándose a la degeneración. Y con él, una ola menos progresista de lo que muchos creían, pero menos reaccionaria de lo que el futuro inmediato permite anticipar.

Bibliografía

ÁLVAREZ R., VÍCTOR

2012 "La transición al socialismo de la Revolución Bolivariana: gobierno socialista o revolución socialista?", en Jorge Valero (comp.), *Democracias nuevas o restauradas: el caso de Venezuela*. Caracas: El Perro y La Rana, pp. 189-207.

AZELLINI, DARIO

2012 "Participación y poder popular: Consejos Comunales y Comunas", en Jorge Valero (comp.), *Democracias nuevas o restauradas: el caso de Venezuela*. Caracas: El Perro y La Rana, pp. 117-132.

BRICEÑO MÉNDEZ, MANUEL

2014 *Estado Comunal: la nueva geometría del poder*. Caracas: Fondo Editorial de la Asamblea Nacional Willian Lara.

CANO, WILSON

2000 *Soberania e política econômica na América Latina*. São Paulo: Unesp.

CARRERA DAMAS, GERMÁN

2003 *El culto a Bolívar*. Caracas: Aldafil

1997 *Una nación llamada Venezuela*. Caracas: Monte Avila.

CHÁVEZ, HUGO

2013 *El libro azul*. Caracas: Ediciones Correo del Orinoco.

CORONIL, FERNANDO

2013 *El Estado mágico: naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela*. Caracas: Alfa.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
2013 *Testimonios: tortura, asesinato y desaparición forzada en el período 1958-1998*. Caracas: Defensoría del Pueblo.

DÍAZ RANGEL, ELEAZAR
2012 "El proceso venezolano: obstáculos para su desarrollo", en Jorge Valero (comp.), *Democracias nuevas o restauradas: el caso de Venezuela*. Caracas: El Perro y La Rana, pp. 33-40.

DIETRICH, HEINZ
2005 *Hugo Chávez y el socialismo del siglo XXI*. Buenos Aires: Nuestra América.

FERNANDES, FLORESTAN
1975 *Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina*. Rio de Janeiro: Zahar.
1968 *Sociedade de classes e subdesenvolvimento*. Rio de Janeiro: Zahar.

FURTADO, CELSO
2008 *Ensaios sobre a Venezuela: subdesenvolvimento com abundância de divisas*. Rio de Janeiro: Contraponto y Centro Internacional Celso Furtado.

GOTT, RICHARD
2004 *À sombra do libertador*. São Paulo: Expressão Popular.

LAFEBER, WALTER
1963 *The New Empire: An Interpretation of American Expansion (1860-1898)*. Ithaca: Cornell University Press.

LÓPEZ MAYA, MARGARITA
2011 *Democracia participativa en Venezuela (1999-2010): Orígenes, leyes, percepciones y desafíos*. Caracas: Fundación Centro Gumilla y Universidad Católica Andrés Bello.
2006 *Del viernes negro al referendo revocatorio*. Caracas: Aldafil.

MADURO, NICOLÁS
2013 "Encuentro del Presidente Nicolás Maduro con el Consejo de Movimientos Sociales del Gran Polo Patriótico". Caracas, 22 de mayo de 2013. Disponible en: http://www.granpolopatriotico.org.ve/opinion/

lea-el-discurso-integro-del-presidente-nicolas-maduro-en-el-acto-de-juramentacion-del-gran-polo-patriotico-simon-bolivar/.

MARINGONI, GILBERTO
2004 *A Venezuela que se inventa*. São Paulo: Perseu Abramo.

MAZA ZAVALA, DOMINGO FELIPE
1984 "Historia de medio siglo en Venezuela: 1926-1975", en Pablo González Casanova (coord.), *América Latina: Historia de medio siglo*. México: Siglo XXI.

MOMMER, BERNARD
2013a "Petróleo y socialismo", en Bernard Mommer, Jaime Corena Parra y Humberto Trómpiz Valles, *Renta petrolera y Revolución Bolivariana*. Caracas: El Perro y La Rana.
2013b "Venezuela, país petrolero: hacia el primer centenario", en Bernard Mommer, Jaime Corena Parra y Humberto Trómpiz Valles, *Renta petrolera y Revolución Bolivariana*. Caracas: El Perro y La Rana.

MONEDERO, JUAN CARLOS
2013 "Venezuela y la reinvención de la política: el desafío del socialismo en nuevos escenarios", en *Observatorio Social de América Latina*, núm. 33, mayo, pp. 15-37.

OBUCHI, RICHARD K. (coord.)
2011 *Gestión en rojo: evaluación de desempeño de 16 empresas estatales y resultados generales del modelo productivo socialista*. Caracas: IESA.

PARRA LUZARDO, GASTÓN
2012 *De la nacionalización a la apertura petrolera. Derrumbe de una esperanza*. Caracas: Banco Central de Venezuela.

PÉREZ ALFONZO, JUAN PABLO
2011 *Hundiéndonos en el excremento del diablo*. Caracas: Banco Central de Venezuela.

PLAN DE LA PATRIA
2013 *Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019*. Caracas: Ediciones Correo del Orinoco.

POSADO, THOMAS
2013 "L'État regional du Bolívar au Venezuela. Reflet du désalignement entre le gouvernement chaviste et le mouvement ouvrier", en *Revue Mouvements des idées et des luttes*, núm. 76, pp. 105-116.

RAMONET, IGNACIO
2013 *Hugo Chávez: mi primera vida. Conversaciones con Hugo Chávez*. Caracas: Vadell Hermanos Editores.

RAMOS, FELIPPE
2014 "Oposição radicalizada na Venezuela perde força porque protestos mais violentos pioram economia, diz sociólogo do Ipea", en *América Economía Brasil*, 16 de abril de 2014. Entrevista concedida a Franco Nero e Bia Rodrigues. Disponible en: https://brasilamericaeconomia.com.br/artigos/oposicao-radicalizada-na-venezuela-perde-forca-porque-protestos-mais-violentos-pioram.

RANGEL, JOSÉ VICENTE
2014 *De Yare a Miraflores, el mismo subversivo. Entrevistas al comandante Hugo Chávez Frías* (1992-2012). Caracas: Ediciones Correo del Orinoco.

SANAHUJA, JOSÉ ANTONIO
2012 "Regionalismo post-liberal y multilateralismo en Sudamérica: el caso de Unasur", en Andrés Serbin, Laneydi Martínez y Haroldo Ramanzini Júnior (coords.), *El regionalismo "post-liberal" en América Latina y el Caribe: nuevos actores, nuevos temas, nuevos desafíos. Anuario de la Integración Regional de América Latina y el Gran Caribe 2012*. Buenos Aires: Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales.

TINKER SALAS, MIGUEL
2014 *Una herencia que perdura: petróleo, cultura y sociedad en Venezuela*. Caracas: Editorial Galac.

WEBBER, JEFFERY Y BARRY CARR
2013 *The New Latin American Left. Cracks in the Empire*. Lanham: Rowman & Littlefield.

WEISBROT, MARK Y JAKE JOHNSTON
2012 "Venezuela's Economic Recovery: Is it Sustainable?", en *Center for Economic and Policy Research*, septiembre. Disponible en: http://www.cepr.net/report/venezuelas-economic-recovery-is-it-sustainable.

Entrevistas y conversaciones

Caracas, julio de 2014

BARROS, PEDRO SILVA. Jefe de la misión del Instituto de Investigaciones Económicas Avanzadas (IPEA) en Venezuela.
CEREZAL, MANUEL. Investigador francés y asesor del Banco Central Venezolano.
DERLI. Militante del MST en misión de cooperación en Venezuela.
MICILENE. Militante del MST en misión de cooperación en Venezuela.
RAMOS, FELIPPE. Investigador de la misión del IPEA en Venezuela.
TOLEDO, ALEXIS. Viceministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales.

Caracas, noviembre de 2015

CEREZAL, MANUEL. Investigador francés y asesor del Banco Central de Venezuela.
CONSTANT ROSALES, HECTOR. Diplomático y profesor de la Universidad Central de Venezuela.
FIGUEROA, AMÍLCAR. Dirigente histórico de la izquierda venezolana, cuadro del PSUV.
LIRA, BÁRBARA. Investigadora y coautora del libro Gestión en rojo.
RAMÍREZ, KENNETH. Director del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI).
RAMOS, FELIPPE. Investigador de la misión del IPEA en Venezuela.

Medellín, noviembre de 2015

LANDER, EDGARDO. Sociólogo.

Montevideo, diciembre de 2015

URBINA, ELVIS. Coordinador Nacional de Venezuela en el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) de Unasur.

La Paz, julio de 2016

VILLEGAS, PABLO. Investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).

Post-scriptum: Venezuela en crisis (junio de 2019)

Hay quienes dicen que Maduro abandonó las comunas. ¿Abandoné? Yo te aviso…no hablen paja. Entonces, ¿qué son los Comités Locales de Abastecimiento y Producción? Esos son las comunas organizadas, son el poder comunal.

Nicolás Maduro, 2017

Mientras más tiempo se encuentre Maduro en el gobierno, menos quedará del chavismo.

Edgardo Lander, 2019

En mayo de 2019, un informe del Banco Central de Venezuela estimó la inflación en el año anterior en 130 mil por ciento. Calculada entre abril de 2018 y abril de 2019, la cifra alcanzaba el 282 mil por ciento. A inicios de 2019, otras fuentes calculaban la deuda externa venezolana en 184,5 mil millones de dólares, monto siete veces mayor que las exportaciones en 2017, y más de veinte veces el volumen de las reservas nacionales en 2018. Aunque no hubiese datos oficiales, se estimaba que la producción de petróleo, que en el pasado alcanzó los tres millones de barriles diarios, se limitaba entonces a poco más de quinientos mil barriles. Al mismo tiempo, se estimó que solamente se utilizaba un tercio de la capacidad industrial instalada del país, comprometiendo aún más la recaudación del Estado, mientras el déficit fiscal superaba el 20% del PIB. Sumando todo, la caída del PIB en los últimos cinco años fue superior al 50%. Entre 1939 y 1943, en medio de la Segunda Guerra Mundial y al bombardeo nazi, el PIB de Polonia cayó un 44% (Prodavinci, 2019; Rivas Alvarado, 2019; Sutherland, 2019).

Una de las respuestas para mantener el gasto público en medio de la caída de los ingresos fue emitir moneda: entre mayo de 2015 y mayo de 2018, la base monetaria se volvió 509 veces más alta,

impulsando la hiperinflación. La pérdida de respaldo de la moneda resultó en una dolarización de la economía, un papel jugado por pesos colombianos o reales en algunas regiones, mientras el gobierno imprimía billetes de cincuenta mil bolívares. Los mecanismos de pago electrónico se difundían, penalizando a los sectores de la población sin acceso a estos medios, en una realidad en que el salario mínimo era de unos seis dólares mensuales y cuyo poder real cayó 95% entre 2013 y 2018. En mayo de 2019, la canasta básica familiar era calculada en 1.218.147,82 bolívares, mientras el salario mínimo vigente era de cuarenta mil bolívares. Por lo tanto, era necesario un salario mínimo por día para alimentar adecuadamente a una familia. La caída en las importaciones agravaba la escasez —comprometiendo la provisión de alimentos, remedios y transporte— y el funcionamiento de hospitales, industrias y servicios, que se enfrentaron a repetidos apagones, que alcanzaron el 80% del territorio nacional. En esta coyuntura, se calcula que más de un millón de venezolanos dejaron el país en los últimos años (Cenda, 2019; Lander, 2018).

Con este desastre como telón de fondo, en enero de 2019, el entonces desconocido presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente del país. La medida fue reconocida de inmediato por Estados Unidos, por la Organización de los Estados Americanos (OEA), por países latinoamericanos y caribeños aglutinados en el Grupo de Lima[1] y por la mayoría de los países europeos.

Es necesario dejar claro que la maniobra de Guaidó es parte de lo peor de la tradición golpista latinoamericana. Se trata de una iniciativa antidemocrática sin ningún respaldo popular, concertada con los

1 El Grupo de Lima se constituyó el 8 de agosto de 2017 en la capital peruana, después de una reunión de los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, para "abordar la crítica situación de Venezuela y explorar formas de contribuir a la restauración de la democracia en aquel país a través de una salida pacífica y negociada". Los Estados Unidos no participan oficialmente en el grupo, pero asiste a las reuniones. Se trata de una articulación regional que trabaja diplomáticamente por la caída del chavismo [n.e.].

Estados Unidos y los gobiernos sometidos a su agenda en la región, especialmente Colombia de Iván Duque y Brasil de Bolsonaro. El golpista venezolano armó un circo diplomático y mediático que, de manera literalmente orquestada, conspira a cielo abierto para derrocar a un presidente electo que no es menos legítimo que sus pares —ciertamente no menos que Trump, que tuvo tres millones de votos menos que Hilary Clinton, ni de Bolsonaro—, cuyo mayor rival electoral fue arrestado por un futuro ministro suyo. El principal efecto de la ofensiva fue aumentar la tensión en el país y en la región, desde entonces, al borde de un conflicto militar, mientras silenció a los sectores moderados. El camino hacia una salida negociada se entorpeció, mientras las sanciones penalizan a la población. Es difícil imaginar cualquier consideración por el pueblo venezolano de parte de un grupo imperialista que invierte en violencia y en miseria. La constatación de que la mayoría de los países de la Unión Europea se han embarcado en esta conspiración insultante es un síntoma de la degradación de los principios y valores que avalan la política internacional, en un mundo que marcha hacia la barbarie.

Desde el primer momento, el autoproclamado presidente exhortó a los militares a derrocar a Nicolás Maduro. A pesar del amplio apoyo internacional, el intento que promovió el 30 de abril fracasó. Mientras la suerte de Guaidó parecía menguar, Leopoldo López, líder de la agitación golpista en 2014, conocida como "la salida", escapó del arresto domiciliario y se refugió en la embajada de España. Frente a todo, los bolivarianos resistían. ¿Cómo explicar?

El gobierno tiene dos pilares de apoyo organizado: militares y organizaciones populares, a veces vinculadas a las comunas. Aparentemente opuestos entre sí, estos sectores desempeñan papeles complementarios en la economía política de la crisis: mientras los militares controlan el comercio exterior y de alimentos, los comités vecinales, organizados como Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), median la distribución de canastas alimenticias y el acceso a otras políticas públicas.

Establecidos en 2016, los CLAP son parte de la reacción del gobierno para mitigar los efectos de la crisis en su base popular, al mismo tiempo que pretende fidelizarla. La creación del "carnet de la patria", a través del cual se gestionan diversos beneficios monetarios, complementa una ingeniería política que, en la práctica, suplantó a las misiones (Encovi, 2018). En la visión de López Maya, el "carnet de la patria y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción son los nuevos circuitos clientelistas por los cuales se derraman los recursos públicos a cambio de lealtad política" (López Maya, 2018).

Una gran parte de la población depende de estos beneficios y de estas canastas para sobrevivir: cerca del 87,5% de los hogares del país accede a los productos distribuidos por los CLAP (Encovi, 2018), que consisten principalmente en carbohidratos. En este contexto, "la principal tarea de muchas organizaciones de base pasó a ser la coordinación de la distribución de bienes subsidiados" (Lander, 2018).

Con poco dinero, el gobierno desarrolló una vasta red de clientes, en medio de un proceso de "lumpenización" de la población. La oposición tiene como nicho el Twitter y rara vez hace trabajo de campo en las periferias, donde quien penetra es el chavismo o el crimen organizado (Sutherland, 2019) —o, a veces, una mezcla de los dos, como es el caso de algunos "colectivos", especie de milicias bolivarianas originalmente armadas por el gobierno— (Sauda, 2019).

Esta precaria —pero efectiva— red de apoyo al régimen frustró los llamados de la oposición a la insurrección y brinda cierto respaldo al gobierno. Sin embargo, así como ocurrió en el golpe de 2002 contra Hugo Chávez, quien mantiene el chavismo en el poder son los militares. En 2016, los oficiales en reserva gobernaban doce Estados del país, mientras se estimaba que más de dos mil militares ocupaban altos cargos públicos. En las elecciones del año siguiente, de los diecinueve gobernadores elegidos por el bolivarianismo, ocho eran militares. Al mismo tiempo, el gobierno decretó y prolongó indefinidamente un "estado de excepción" en varias regiones del país, sustrayendo del comando civil parcelas importantes del territorio (San Miguel, 2016).

Sin embargo, más que una fuente de poder, la posición de los militares es, frecuentemente, un medio de enriquecimiento.

Además de hacer compras multimillonarias de armas, el cuartel controla el sector eléctrico, el metro de Caracas, las empresas de aluminio, hierro y acero en el sur de Venezuela, así como los puertos y las aduanas. Desde 2013, se formaron cuatro empresas militares: el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (BANFANB), un canal de televisión (TVFANB), la Empresa Militar de Transporte (EMILTRA), que transporta carga y la empresa agropecuaria AGROFANB. Con el agravamiento de la crisis en 2016, la presencia militar se intensificó en otras áreas estratégicas, como la alimentación, el extractivismo y el petróleo (Jácome, 2018).

En ese año, se conformó la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, colocada bajo la responsabilidad del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, un militar activo. Bajo su mando, se designaron dieciocho generales para organizar la compra (importación) y distribución de alimentos y medicamentos. La participación militar en la política alimentaria venezolana no era novedad: desde 2004, de los once ministros de la Alimentación, diez fueron militares. El control de la corporación se profundizó en enero de 2018, cuando un decreto prohibió a las autoridades regionales y municipales involucrarse en el control y distribución de alimentos (Jácome, 2018).

El poder militar se extiende a la economía extractivista. Frente a la caída de los ingresos petroleros, el gobierno impulsó la minería a cielo abierto en el Arco Minero del Orinoco, reserva de agua crucial del país y que alberga una de las biodiversidades más grandes del planeta. La exploración en este delicado ecosistema es realizada por "empresas mixtas", en las que las multinacionales chinas, rusas o estadounidenses se asocian a las empresas militares venezolanas (Andreani, 2018). Las fuerzas armadas también ocupan altos cargos en el negocio petrolero: a fines de 2017, se nombró a un general como presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y simultáneamente como Ministro de Energía. En enero de 2019, nueve de los 32 ministros eran militares (Tian y Silva, 2019).

Investigaciones indican que el brazo económico militar se extiende a contratos del gobierno con empresas bajo su mando, en áreas como la construcción, importación de medicamentos y alimentos, insumos para el sector de la salud, entre otros (Armandoinfo, 2019). Finalmente, numerosas denuncias indican la participación de patentes de todos los niveles con el narcotráfico y el crimen organizado, incluido el contrabando de gasolina, alimentos y personas, particularmente en la frontera con Colombia (Jácome, 2017).

Por lo tanto, los militares controlan el comercio exterior —incluso el petróleo, el suministro de víveres y la adquisición de armas—, y están involucrados con la explotación minera, el contrabando, el tráfico de drogas, de armas y de personas. En comparación con este poder, la quimera de un Estado comunal sobrevivía en 2019 como adorno, así como en el pasado el presupuesto participativo decoró las gestiones petistas comprometidas con la austeridad fiscal.

Este cuadro sugiere que el compromiso de los militares con el gobierno de Maduro va mucho más allá de la ideología bolivariana o el favoritismo político. En realidad, es plausible suponer que los militares estuvieron entre los partidarios de la distorsión del tipo de cambio que finalmente desorganizó la economía venezolana pero también generó canales de enriquecimiento y poder en medio de la crisis.

> Y cuesta imaginar que algún miembro de esta cúpula pudiera haber sido ajeno —por acción o por omisión—, a lo que la revolución transformó en el "mejor negocio del mundo": el tráfico de divisas vendidas por el Estado a tasas preferenciales mediante importaciones sobrefacturadas o incluso "fantasmas", de bienes de consumo e intermediarios, así como de materias primas —y ello, irónicamente, gracias al control de cambios instaurado en 2003 para "luchar contra la fuga de capitales", después de tres meses del paro petrolero antichavista (Andreani, 2018).

Una especie de economía política de la crisis floreció con la distorsión del tipo de cambio, manejada de modo favorable para aquellos que ocupan posiciones privilegiadas en el régimen. Paradójicamente, las sanciones económicas internacionales, que apuntan a debilitar al gobierno, fortalecen a quien comanda la circulación de bienes en la escasez, además de dar peso al discurso antimperialista de Maduro. Eso no quiere decir que el gobierno se beneficie de las sanciones —PDVSA, por ejemplo, está afectada por la imposibilidad de reposición de piezas, lo que compromete aún más su capacidad de producción y, por lo tanto, el acceso del país a divisas (Rivas Alvarado, 2019)[2]—, sino que el margen de maniobra para lidiar con las determinaciones de la crisis fue y continúa siendo condicionada por intereses que pueden, contradictoriamente, agravarla.

Comandando las principales posiciones económicas y políticas en el país, los militares venezolanos no tienen como objetivo tomar el poder. Por el contrario, les conviene que Maduro permanezca como la cara civil, visible y vulnerable de un Estado militarizado. En otras palabras, la paradoja que enfrenta al sector golpista liderado por Leopoldo López es que a los militares no les interesa una salida militar para los impases del país (Barros, 2019).

A diferencia de otros países de la región, las Fuerzas Armadas venezolanas no están dominadas por cuadros pro estadounidenses, que fueron expurgados de la institución después del fallido golpe de 2002. Por el contrario, desde entonces hubo un intenso proselitismo bolivariano, denunciado por la oposición como una "partidización" de las Fuerzas Armadas (Control Ciudadano, 2013; Himiob, 2017). Estos cuadros, que incluyen muchos partidarios genuinos del chavismo, temen el revanchismo que daría lugar un cambio político brusco, en un contexto de violenta polarización. La alternativa al bolivarianismo, a sus ojos, sería una "vía chilena", lo que significa un acuerdo que

2 En función de la distorsión cambiaria, PDVSA vende los dólares que recauda a una tasa artificialmente baja, lo que facilita las importaciones subsidiadas para el gobierno, pero disminuye el ingreso de la empresa, comprometiendo su capacidad de reinversión.

conserve los privilegios y la impunidad de los militares en una Venezuela post bolivariana (Gombata, 2019).

No solo los militares tienen intereses que necesitarían ser acomodados en un cambio de gobierno. El endurecimiento estadounidense llevó al bolivarianismo a anclarse aún más intensamente en China y Rusia. Este apoyo envuelve grandes negocios: de 2006 a 2016, la potencia asiática prestó 62 mil millones de dólares a Venezuela, que a cambio hipotecó una parte importante de su producción petrolera futura, mientras las empresas chinas operan varios proyectos en la zona del Orinoco. En años recientes, Rusia asignó al país caribeño diecisiete mil millones de dólares, entre préstamos e inversiones: se calcula que desde 2010, la estatal Rosneft puso nueve mil millones de dólares en proyectos petroleros involucrando a PDVSA. Alrededor del 90% de las armas que Venezuela compró, desde 2012, proviene de estos países (Lowe y Sagdiev, 2019; Sabra y Wilkinson, 2019; Tian y Silva, 2019).

Ambos tienen interés en la continuidad del régimen, pero el enfoque geopolítico es distinto: mientras China privilegia el aspecto mercantil y puede hasta hacer negocios con la caída de Maduro, Rusia concibe al aliado caribeño como una molestia para Washington, que la fortalece en las negociaciones en regiones que más le importan: los países de la ex Unión Soviética y de Europa del Este (Sabra y Wilkinson, 2019).

Por otro lado, aunque los Estados Unidos aparezcan como el bastión de la vía golpista, no siempre fue así. A pesar de la retórica antichavista, la diplomacia petrolera venezolana dirigida por Petrocaribe servía al interés de este país pues mitigaba los problemas sociales en el Caribe, conteniendo presiones migratorias (Ramos, 2015). Este escenario se alteró con la agudización de la crisis venezolana, que debilitó a la diplomacia petrolera y la elección de Donald Trump, que cambió el abordaje de la cuestión migratoria. Al mismo tiempo, el reflujo del progresismo sudamericano y la debacle de Unasur dejaron al gobierno venezolano sin puntos de apoyo para una solución negociada

regionalmente. Si América del Sur nunca tuvo mucha fuerza, ahora no tiene ni siquiera voz. No es casual que Juan Guaidó haya aparecido reivindicando abiertamente la intervención militar estadounidense, en el mes en que Jair Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil.

En junio de 2019, el cuadro en Venezuela es sombrío. El impacto de las sanciones tiende a agravar los problemas económicos, agudizando el vertiginoso deterioro del tejido social del país. Y, sin embargo, no se ve una luz al final del túnel.

El gobierno de Maduro está atado a los militares, principales gestores de la economía política de la crisis, que se fortalece por las sanciones. Paradójicamente, una salida militar para los impases de Venezuela no interesa a los militares. Es cierto que Maduro los necesita, pero ellos también necesitan a Maduro.

El poder comunal no es una alternativa ni una preocupación para la oposición, que sigue dividida y tiene escasa legitimidad. A pesar de la gravedad de la crisis, el bolivarianismo conserva una base social, no solo por la efectividad de las redes de clientes, sino porque construyó cierta legitimidad en sus primeros años: muchos reconocieron en Chávez un aliado, —cuando no un protector— y le son fieles. Al apostar a una rendición incondicional del bolivarianismo, la oposición golpista ignora esa realidad y empuja la disputa al terreno de la fuerza. Sin base popular, milita en las redes sociales. Sin apoyo en los cuarteles, apuesta por la intervención externa.

Sin embargo, los impases se replican en el escenario internacional. La continuidad de Maduro es favorecida por diferentes motivos, por China, Rusia e incluso Estados Unidos, al menos de manera circunstancial: los republicanos pretenden prolongar la inestabilidad venezolana, con miras a impulsar la campaña para la reelección de Trump, que se aproxima. Una intervención internacional pondría al presidente estadounidense "en el asiento del conductor" de una crisis colosal, para la cual nadie tiene solución (Corrales, 2019).

Entre la oposición venezolana, más allá de la escisión entre los golpistas y los que apuestan por una solución negociada, el horizonte

civilizatorio es el mismo: el restablecimiento del crédito internacional mediante la austeridad fiscal, restaurando la normalidad neoliberal. La discrepancia es cómo lidiar con el chavismo antes y después de, eventualmente, llegar al poder en una sociedad violentamente polarizada, en la que se contabilizan siete millones de armas ilegales para una población de treinta millones de personas (Notimex, 2016). La radicalización internacional arroja leña a la hoguera golpista, desplazando de la escena a los moderados. Sin embargo, el calor mantiene planeando el globo chavista, mientras las llamas consumen el tejido social del país.

Las paradojas van más allá. En Brasil, Bolsonaro hizo del espectro de Venezuela un tema central de su campaña electoral. Sin embargo, el país ahora parece aproximarse a aquello en lo que Venezuela se convirtió, de un modo más intenso de lo que jamás ocurriría bajo el PT. Además de infestar al gobierno de militares, el excapitán ambiciona una serie de políticas inspiradas en el chavismo —que, por cierto—, admiró en sus primeros años como diputado. Por ejemplo, Bolsonaro sueña con una reforma del Supremo Tribunal Federal en la línea de lo que sucedió en Venezuela después del fallido golpe de Estado en 2002, ampliando el número de magistrados para darle una mayoría al gobierno[3]. Al excapitán también le gustaría señalar a decenas de cuadros ideológicamente alineados como embajadores, entre otras ideas.

Es dudoso que el presidente brasileño tenga éxito en sus determinaciones. Sin embargo, esta convergencia aterradora, explicita los

3 Tras la derrota del gobierno en diciembre de 2015, cuando eligió menos de un tercio de la Asamblea Nacional, el parlamento saliente, con una mayoría gobernante, designó a trece magistrados y a 21 suplentes para el Tribunal Supremo de Justicia. Acto seguido, la corte impugnó la elección de los tres diputados de Amazonas, lo que implicaba que la oposición ya no tendría la mayoría absoluta en la cámara. Sin embargo, la Asamblea decidió incorporarlos, lo que llevó al tribunal a considerarla un desacato, suspendiendo sus funciones. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega, dijo que el fallo del Tribunal Supremo de Justicia violó el orden constitucional y fue retirada meses después. En 2017, la Asamblea nombró un tribunal paralelo en el exilio, mientras que el gobierno convocó a la elección de una Asamblea Constituyente, boicoteada por la oposición. Al año siguiente, Maduro se reeligió, pero la elección no fue reconocida por la oposición. Se dibujó así la dualidad de poderes que culminó en la autoproclamación de Guaidó en enero de 2019.

límites del progresismo, visto como una cara diferente, pero no contraria, de la autocracia burguesa de la que habla Florestan Fernandes. En la actualidad, se constata que el progresismo venezolano no está inmune al movimiento en dirección a la violencia económica y a la violencia política que caracteriza la historia contemporánea, aunque por una vía diferente de la neoliberal. ¿Será que el bolivarianismo, inicialmente inspirado en la "tercera vía" de Tony Blair, se revelaría después de todo, como una alternativa, pero también como una inspiración para el bolsonarismo?

Bibliografía

ANDREANI, FABRICE

2018 "Las vías enmarañadas del autoritarismo bolivariano", en *Nueva Sociedad*, núm. 274, marzo-abril. Disponible en: https://nuso.org/articulo/las-vias-enmaranadas-del-autoritarismo-bolivariano/. Acceso 20 de junio de 2019.

ARMANDOINFO

2019 "El gobierno bolivariano subcontrata a los caudillos de la Fuerza Armada", en *armandoinfo*. Disponible en: https://armando.info/AiData/Outsourcing_Militar. Acceso 20 de junio de 2019.

BARROS, PEDRO

2019 Discussão sobre a Venezuela na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 12 de junio de 2019.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS PARA LOS TRABAJADORES (CENDA)

2019 "Canasta Alimentaria. Mayo 2019", en Cenda, 16 de junio de 2019. Disponible en: http://cenda.org.ve/noticia.asp?id=189. Acceso 19 de junio de 2019.

CONTROL CIUDADANO

2013 "Propaganda, militancia y proselitismo político de mandos militares venezolanos (2012-2013)", en *Cuadernos de denuncia,* núm. 2, abril. Disponible en: http://www.controlciudadano.org/web/wp-content/uploads/PARTIDIZACION-FANB-2012-2013.pdf. Acceso 20 de junio de 2019.

CORRALES, JAVIER

2019 "How to Tackle Venezuela's Military Problem?", en *The New York Times*, 4 de marzo de 2019. Disponible en: https://www.nytimes.com/2019/03/04/opinion/venezuela-military-maduro-guaido.html. Acceso 19 de junio de 2019.

ENCOVI

2018 *Encuesta sobre condiciones de vida en Venezuela*. Caracas, febrero de 2018. Presentación de Luis Pedro España N. y María G. Ponce Z. (IIES-UCAB). Disponible en: https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/ENCOVI-2017-presentaci%C3%B3n-para-difundir-.pdf. Acceso 21 de junio de 2019.

GOMBATA, MARSÍLEA

2019 Discussão sobre a Venezuela na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 12 de junio de 2019.

HIMIOB, GONZALO

2017 "¿Por qué los militares venezolanos no le dan la espalda a la dictadura?", en *The New York Times*, 7 de julio de 2017. Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2017/07/07/por-que-los-militares-venezolanos-no-le-dan-la-espalda-a-la-dictadura/. Acceso 20 de junio de 2019.

JÁCOME, FRANCINE

2018 "Los militares en la política y la economía de Venezuela", en *Nueva Sociedad*, núm. 274, marzo-abril. Disponible en: https://nuso.org/articulo/los-militares-en-la-politica-y-la-economia-de-venezuela/. Acceso 19 de junio de 2019.

2017 "Crisis, seguridad y fuerza armada en Venezuela. Retos en la relación colombo-venezolana", en *Documentos de Política Venezolana*, núm. 1. Bogotá: Universidad del Rosario.

LANDER, EDGARDO

2018 "Venezuela: el fracaso del proceso bolivariano", en Aporrea, 16 de agosto de 2018. Disponible en: https://www.aporrea.org/ideologia/a267859.html. Acceso 21 de junio de 2019.

LÓPEZ MAYA, MARGARITA

2018 "Socialismo y comunas en Venezuela", en *Nueva Sociedad*, núm. 274, marzo-abril. Disponible en: https://nuso.org/articulo/socialismo-y-comunas-en-venezuela/. Acceso 20 de junio de 2019.

LOWE, CHRISTIAN Y RINAT SAGDIEV

2019 "How Russia Sank Billions of Dollars into Venezuelan Quicksand", en *Reuters*, 14 de marzo de 2019. Disponible en: https://www.reuters.com/investigates/special-report/venezuela-russia-rosneft/. Acceso 21 de junio de 2019.

NOTIMEX

2016 "Venezuela cuenta con más de 7 millones de armas ilegales en circulación", en *Notimex*, 30 de abril de 2016. Disponible en: https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-venezuela-cuenta-mas-millones-armas-ilegales-circulacion-20160430194436.html. Acceso 21 de junio de 2019.

PRODAVINCI

2019 "Deuda externa venezolana: un mapa de propuestas", en *Prodavinci*, 20 de febrero de 2019. Disponible en: https://prodavinci.com/deuda-externa-venezolana-un-mapa-de-propuestas/. Acceso 19 de junio de 2019.

RIVAS ALVARADO, JOSÉ FELIX

2019 Discussão por Skype com Grupo de Trabalho Clacso de Integração Regional, 29 de mayo de 2019.

SABRA, AYRES Y TRACY WILKINSON

2019 "Russia and China, Heavily Invested in Venezuela, Warily Watch the Political Turmoil", en *Los Angeles Times*, 25 de enero de 2019. Disponible en: https://www.latimes.com/world/europe/la-fg-venezuela-russia-china-20190125-story.html. Acceso 21 de junio de 2019.

SAN MIGUEL, ROCÍO

2016 "Hoja de ruta para una transición militar en Venezuela". Ponencia presentada en el marco del Foro: Venezuela: Transiciones militares. Retrospectiva y perspectivas (23 de noviembre de 2016), en *Control Ciudadano*. Disponible en: http://www.controlciudadano.org/web/wp-content/uploads/2.2-Ponencia-Rocio-San-Miguel-.pdf. Acceso 21 de junio de 2019.

SAUDA, ALDO

2019 Discussão sobre a Venezuela na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 12 de junio de 2019.

SUTHERLAND, MANUEL

2019 "Où va le Venezuela (à supposer qu'il aille a quelque part…)? Entretien avec Manuel Sutherland", en *Contretemps*, 26/01/2019. Disponible en: https://www.contretemps.eu/venezuela-entretien-sutherland/. Acceso 18 de junio de 2019.

2018 "La ruina de Venezuela no se debe al 'socialismo' ni a la 'revolución'", en *Nueva Sociedad*, núm. 274, marzo-abril. Disponible en: https://nuso.org/articulo/la-ruina-de-venezuela-no-se-debe-al-socialismo-ni-la-revolucion/. Acceso 19 de junio de 2019.

TIAN, NAN Y DIEGO LOPES DA SILVA

2019 "The Crucial Role of the Military in the Venezuelan Crisis", en SIPRI, 2 de abril de 2019. Disponible en: https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2019/crucial-role-military-venezuelan-crisis. Acceso 20 de junio de 2019.

Conversaciones

Caracas, noviembre de 2015

RAMOS, FELIPPE. Investigador de la misión del Instituto de Investigaciones Económicas Avanzadas (IPEA) en Venezuela.

Conciliación y orden bajo el lulismo en Brasil

¿El PT mantendrá la naturaleza de una necesidad histórica de los trabajadores y de los movimientos sociales radicales anteponiendo la "ocupación del poder" a la óptica revolucionaria marxista?

Florestan Fernandes, 1991

Nunca hice una concesión política. Hago un trato. Si Jesús viniese aquí y Judas tuviese la votación en cualquier partido, Jesús tendría que llamar a Judas para hacer coalición.

Lula, 2009

Introducción

La elección de Luiz Inácio Lula da Silva para la presidencia de Brasil, en 2002, encendió expectativas de cambio en la región y en el mundo. Surgido al final de la dictadura (1964-1985), el Partido de los Trabajadores (PT) se consolidó en la lucha por la democratización en los años de 1980 y en la siguiente década, "liderando" la resistencia al neoliberalismo. Al llegar a la presidencia, el PT adoptó un discurso y una práctica conciliadores. Durante una década, que coincidió con la expansión económica, obtuvo éxito notable al pacificar el país y ganó otras tres elecciones presidenciales. Sin embargo, en 2016, la presidenta Dilma Rousseff sufrió un controversial *impeachment*, y dos años después Lula fue encarcelado. Las expectativas progresistas dieron paso a una ofensiva reaccionaria impensable años antes. La opción del PT de enfrentar los males a partir de los síntomas, evitando las raíces, reveló límites y contradicciones. La defenestración del partido —del Poder Ejecutivo— marcó el reflujo del progresismo con el cual fue identificado: las campanas que suenan por el Brasil, suenan por toda la región.

Preámbulo

Como último país en abolir la monarquía y la esclavitud en las Américas, Brasil fue una referencia conservadora en el continente desde su emancipación. En el siglo XX, en medio de una acelerada industrialización, se convirtió en la principal economía latinoamericana. Al igual que Argentina y México, atravesó una experiencia descrita como populista, revelando fisuras en el patrón oligárquico de dominación durante el entreguerras. Sin embargo, el golpe militar de 1964, el primero de una secuencia represiva en el Cono Sur, respaldó la opción burguesa de disociar desarrollo e integración nacional. A pesar del progreso industrial y de las riquezas naturales, el país es, aún hoy, uno de los más desiguales del mundo.

El PT surgió al final de la dictadura (1964-1985) con el compromiso de cambiar esa realidad. Convergieron en su origen el movimiento sindical, los movimientos populares, las comunidades eclesiales de base y la intelectualidad progresista brasileña, conformando un instrumento político original. Creado como un partido de masas y no de vanguardia, el PT pretendía superar los principales vehículos históricos de la política popular en el país hasta ese momento. Por un lado, la demagogia populista asociada al *trabalhismo* y Getúlio Vargas, que suponía una integración tutelada de la sociedad de masas; por el otro lado, el comunismo, plagado de dogmatismo y por disputas fraticidas que impedían su enraizamiento popular. Al mismo tiempo, el PT apareció a la sombra de los grupos guerrilleros diezmados por la dictadura, mientras el eurocomunismo se afirmaba en Europa. En este contexto, aunque el socialismo y el antimperialismo no estuvieron ausentes, prevalecieron formulas estratégicas referidas a la "democracia como valor universal" (Coutinho, 1984), cristalizadas en lo que se conoció como el "proyecto democrático popular". En otras palabras, el PT surgió como un partido de la reforma, no de la revolución.

Rápidamente, la nueva organización aglutinó a quienes se identificaban con el cambio social. El PT participó en los últimos años de la lucha contra la dictadura y cumplió un papel importante en ampliar el

debate en torno a la transición, presionando por elecciones directas y reformas sociales. Este papel se consolidó con el protagonismo, desproporcionado de su representación, ejercido por los parlamentarios del partido en la redacción de la Constitución todavía vigente en el país, conocida como la "Constitución Ciudadana", aprobada en 1988. De manera significativa, la bancada petista votó en contra del texto final por considerar insuficientes los avances sociales del documento fundamental de la "Nueva República" que entonces florecía. En aquel momento, el PT ya había acumulado importantes éxitos electorales locales, y Lula emergía como un fuerte candidato a la presidencia.

Para muchos, la derrota electoral contra Fernando Collor de Mello en 1989, por un estrecho margen, fue un punto de inflexión en la trayectoria del PT. Enfrentado por una sórdida campaña en la que el conservadurismo se unió en torno a un político inexpresivo, pero que el marketing vendía como tabla de salvación del orden, el partido derrotado se enfrentó a un dilema: prepararse para enfrentar a los que se oponen al cambio o resignarse a la política tolerada por el orden. La opción por el segundo camino se hizo evidente en los años siguientes. A medida que el partido ganaba elecciones en todo el país, su originalidad política se desvanecía. Prácticas identificadas con el "modo petista de gobernar", como las viviendas construidas de forma autogestionada o el presupuesto participativo, dieron paso a la ideología de una gestión eficiente que colonizaba la esfera pública. En las campañas electorales, el entusiasmo militante fue reemplazado por mercadeo y donaciones corporativas. En síntesis, el partido se convirtió a los medios y fines de la política convencional.

A pesar de esta inflexión conservadora comandada por el liderazgo petista, el triunfo de la candidatura presidencial de Lula en 2002, después de tres derrotas consecutivas, despertó la esperanza de cambio. El líder obrero fue reelegido en 2006, y en 2010 fue sucedido por su correligionaria Dilma Rousseff, también reelegida en 2014. En 2016, el segundo mandato de Dilma fue acortado por un controvertido proceso de *impeachment* y dos años después Lula fue encarcelado.

Las expectativas progresivas dieron paso a una ofensiva reaccionaria que parecía inconcebible pocos años antes.

Para entender este movimiento, se analizan los gobiernos federales petistas en su conjunto como premisa para comprender los críticos eventos recientes. Inicialmente se abordan las estrategias de acumulación promovidas por las presidencias petistas, para luego analizar las formas de legitimación política que adoptaron. La hipótesis es que el *impeachment* de Dilma Rousseff se refiere a la crisis del llamado "modo lulista de regulación del conflicto social", agotando la funcionalidad de los gobiernos petistas desde el punto de vista del orden. Este agotamiento, evidente desde las jornadas de junio de 2013, se agudizó en los años siguientes frente a la conjunción de la crisis económica y los escándalos de corrupción.

Estrategias de acumulación: ¿neodesarrollismo o neoliberalismo?

a) Conciliación y orden

Las presidencias petistas apostaron a la conciliación de clases como método para reformar el capitalismo brasileño. De cara a la aguda desigualdad que caracteriza al país, se partió de la premisa —razonable por cierto— de que se podría hacer mucho para atenuarla sin enfrentar las estructuras que la reproducen. El programa Hambre Cero, cuyo mando fue inicialmente entregado a un fraile católico, resumió este enfoque: después de todo, ¿quién se opondría a acabar con el hambre?

Pero si el pan apaciguaría a los pobres, la conciliación con los ricos exigiría un compromiso con la llamada estabilidad económica. En el caso brasileño, su hito fundador es el Plan Real, implementado por el entonces ministro de Hacienda, Fernando Henrique Cardoso (FHC), en 1994, quien luego se eligió Presidente. Las líneas maestras del plan se refieren a programas de estabilización monetaria en curso en el mundo neoliberal, que incluyen apertura comercial y financiera,

reducción del papel del Estado a través de privatizaciones, estrictas políticas monetarias y fiscales, y altas tasas de interés. Como en otras situaciones, tuvo éxito en contener la inflación, pero agravó los desequilibrios estructurales en las cuentas nacionales, al mismo tiempo que redujo irreparablemente el margen de maniobra del Estado para enfrentarlos. La apreciación del tipo de cambio (paridad del real frente al dólar) y la apertura comercial estimularon importaciones que ayudaron a contener los precios, pero comprometieron a la industria nacional provocando crecientes déficits comerciales. Inicialmente este desequilibrio fue mitigado por privatizaciones e inversión extranjera, principalmente para adquirir activos nacionales, mientras aumentaba la presión y los incentivos para exportar. Sin embargo, el principal mecanismo para compensar los desequilibrios comerciales fue la atracción de capital especulativo, lo que exigió una serie de medidas que antecedieron al Plan Real, con el objetivo de convertir al Brasil en un destino atractivo para las finanzas internacionales. En particular, la apertura del mercado brasileño de títulos públicos, emitidos y cotizados en el exterior, convirtió al país en emisor de capital ficticio (Paulani, 2008).

El otro lado de este engranaje fue que el Estado operase como instrumento de transferencia de riqueza nacional hacia los circuitos financieros internacionales. Se impuso la lógica del ajuste estructural, que tuvo su expresión final en la Ley de Responsabilidad Fiscal negociada con el FMI, en el contexto de la crisis que antecedió a la devaluación del real en 1999, cuando FHC comenzaba su segundo mandato. Esta ley, cuyo carácter antisocial fue entonces denunciado por el PT, establece una jerarquía en el gasto presupuestario, dando prioridad máxima a los acreedores financieros en detrimento de las políticas sociales y de las inversiones públicas.

En resumen, la adopción del Plan Real en 1994 culminó un proceso que convirtió al Brasil en una plataforma para la valorización del capital financiero internacional. Esto significa que, al mismo tiempo que el país se consolidó como un destino de capitales especulativos,

el flujo de estas capitales se volvió indispensable desde el punto de vista de la ortodoxia implementada. El ajuste fiscal permanente, las altas tasas de interés, la política monetaria restrictiva, el tipo de cambio fluctuante y la libre circulación de capitales fueron los pilares de esta macroeconomía.

Este es el compromiso que el entonces candidato Lula aseguró cuando lanzó la Carta al pueblo brasileño durante la campaña de 2002. Se trataba en realidad de una carta al capital, dirigida a conjurar el espectro de la fuga de capitales que se asomaba ante la inminencia de la elección del presidente obrero.

Una vez posesionado, el gobierno petista fue fiel al compromiso asumido, reafirmando todos los aspectos del ajuste neoliberal consolidado en las administraciones anteriores: procesos de liberalización, desregulación y privatización, estabilidad monetaria, Ley de Responsabilidad Fiscal, superávits primarios; límite al endeudamiento del sector público, flexibilización de las relaciones laborales, reducción y corte de derechos adquiridos, entre otros. Este compromiso con la credibilidad internacional exigió profundizar las reformas antisociales, como la nueva Ley de Quiebra, que puso a los trabajadores en igualdad de condiciones con otros acreedores, en contra de la premisa de que los riesgos del negocio recaen en el empleador.

Pero el principal nudo desatado en el primer mandato de Lula fue la reforma de la seguridad social del servicio público. El paso del modelo de seguridad social a la seguridad privada rompió con la idea de la solidaridad generacional, en la que la contribución de los jóvenes garantiza la pensión de los ancianos, en nombre de un modelo en el que cada trabajador tiene una cuenta individual, administrada como un fondo de inversión. La solidaridad generacional y de clase dio paso a una coparticipación en los mecanismos y riesgos asociados al capital financiero.

Esta reforma fue emblemática por dos razones. En primer lugar, porque reveló la funcionalidad del PT desde el punto de vista del orden: el prestigio del presidente ante los trabajadores fue fundamental

para viabilizar, en el primer año de su mandato, una reforma que su antecesor no había logrado alcanzar debido a la oposición que enfrentó. En segundo lugar, porque obedece a una lógica individual y mercantil, transformando un derecho social en un producto financiero. Más allá de las opciones macroeconómicas que llevaron a Leda Paulani (2008: 10) a describir el primer gobierno de Lula como "la más completa encarnación" del neoliberalismo, se revela que el horizonte civilizador del partido estaba en perfecta sintonía con la razón del mundo neoliberal (Laval y Dardot, 2016).

b) Neodesarrollismo

Sin embargo, la política del PT nunca se asumió como neoliberal. Al contrario, en el segundo mandato de Lula, cuando hubo un crecimiento acelerado impulsado por el aumento de los precios de los *commodities* ante la expansión china, ganó espacio entre los secuaces del gobierno la propuesta de que estaba en marcha un proyecto de "neodesarrollo". Después de décadas de estancamiento, la lenta recuperación del poder adquisitivo del salario, la disminución del desempleo, una leve mejora en la distribución del ingreso, la reducción de la pobreza extrema a través de políticas focalizadas, la expansión del consumo que acompañó a la abundancia del crédito, más allá de la percepción de que el país atravesaba ileso la crisis económica mundial, respaldaba el discurso de que Brasil se sumergía en un período de desarrollo —y el paralelismo con el desarrollismo nacional de la posguerra, justificaba el neologismo.

El denominador común entre las diferentes formulaciones neodesarrollistas es el diagnóstico de que el país debe buscar una vía alternativa entre la financiarización, que caracteriza el neoliberalismo y el nacionalismo asociado al desarrollismo. Se propuso recuperar el énfasis en actividades productivas en detrimento de la renta, pero sin incurrir en la inflación, el populismo fiscal, el nacionalismo y otros elementos que remiten al desarrollismo nacional. Plínio de Arruda Sampaio Jr. (2012) describió la ambición neodesarrollista en los siguientes términos:

> El desafío del neodesarrollismo consiste, por lo tanto, en conciliar los aspectos "positivos" del neoliberalismo —compromiso incondicional con la estabilidad de la moneda, la austeridad fiscal, la búsqueda de competitividad internacional, la ausencia de cualquier tipo de discriminación del capital internacional—, con los aspectos "positivos" del viejo desarrollismo —el compromiso con el crecimiento económico, la industrialización, el papel regulador del estado, la sensibilidad social.

El anhelo de conciliar "un elemento externo, el liberalismo, con otro interno, el desarrollismo brasileño" (Cervo, 2003) se concretó en el apoyo a la internacionalización de grandes empresas de capital nacional o con sede en el país, entendidas como vectores del desarrollo capitalista nacional: fue la política de las "campeonas nacionales", que se examinará con más detalle en un capítulo posterior. Sus principales vehículos fueron la diplomacia empresarial practicada por Itamaraty, especialmente en América del Sur, y la política crediticia del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). En su auge en el año 2010, los préstamos del banco con este fin superaron en dos veces y media la suma de los recursos movilizados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La acción del BNDES intensificó la concentración de capital en sectores de la economía brasileña considerados internacionalmente competitivos, notablemente en el campo de las exportaciones primarias y de la construcción civil. Para dar algunos ejemplos: el banco proporcionó 6 mil millones de reales al grupo JBS para adquisiciones en Brasil y en el extranjero, monto que lo convirtió en el mayor productor de carne del mundo; 2,4 mil millones de reales para que Votorantim Celulose adquiera Aracruz Celulose y se convierta en la Fibria, uno de los mayores productores de celulosa del mundo; más de 1.500 millones para la fusión de Sadia con Perdigão, haciendo del grupo Brasil Foods el mayor exportador mundial de pollo (García, 2012).

Sin embargo, el protagonista de la expansión comercial de Brasil fue la construcción civil, un sector que extendió sus negocios en toda América Latina, desde Colombia hasta Cuba, así como en otras partes del mundo, especialmente en África Portuguesa. Odebrecht, una corporación que simboliza este movimiento, regaló a la ciudad de Lima una réplica del Cristo Redentor de Río de Janeiro en el momento en que se autoproclamaba "la constructora de la integración regional"[1]. El sector también fue beneficiado a nivel nacional por el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) que prevé una agenda de obras de infraestructura y por el programa Mi Casa Mi Vida, que dio créditos de vivienda a los estratos populares.

En conjunto, este movimiento de internacionalización de las corporaciones brasileñas correspondió a un proyecto político de liderazgo regional. La estrategia preveía que la expansión económica de los negocios brasileños sirviera como soporte para la proyección política del país en el escenario mundial, como analizaremos en otro capítulo.

Es posible decir que, durante el ciclo de expansión económica que se extendió hasta el primer mandato de Dilma Rousseff, esta propuesta avanzó con relativo éxito. El avance de los negocios brasileños correspondió a un reconocimiento del protagonismo del país, encarnado en la figura del presidente Lula, quien en 2009 fue considerado por el presidente estadounidense, Barack Obama, como el político más popular del mundo (*Newsweek*, 2009). En ese momento, la portada del conservador *The Economist* mostraba al Cristo Redentor carioca levantando vuelo como un cohete, con la leyenda: "el Brasil despega".

Sin embargo, la conjunción entre la desaceleración económica y los escándalos de corrupción que se intensificaron a partir de 2014, pusieron este proyecto a la defensiva. Mientras la economía brasileña entraba en recesión, numerosas denuncias revelaron esquemas de corrupción involucrando a contratistas y otras "campeonas nacionales",

1 En 2017, cuando los escándalos de corrupción golpearon a Odebrecht en Perú y al expresidente Alan García, quien idealizó el monumento, la estatua recibió el apodo de Cristo de lo robado.

en el país y en el exterior. Estas revelaciones minaron la confiabilidad del gobierno y del partido que lo comandaba, y comprometieron los fundamentos del proyecto neodesarrollista con el que se identificaban. Incluso antes de que la crisis se agudizara, el BNDES estaba más preocupado por las investigaciones que por las inversiones. En todo caso los recortes presupuestarios, junto a la caída de los ingresos provenientes del Fondo de Apoyo al Trabajador (FAT)[2], disminuyeron los capitales disponibles para la inversión a largo plazo.

Por otro lado, varios indicios cuestionaron la efectividad de la estrategia de las "campeonas nacionales". En primer lugar, algunas empresas que recibieron grandes aportes del BNDES pasaron, poco después, al control internacional. Este fue el caso del conglomerado de bebidas Ambev, que se fusionó con una corporación belga y trasladó su sede a ese país; de la planta de etanol Santa Elisa, adquirida por la francesa Louis Dreyfus Company (LDC) después de ser respaldada por el BNDES; de EBX, que se asoció a empresas de capital chino y coreano después de aprobar grandes volúmenes de crédito público para sus proyectos; por ejemplo el de la Alunorte y de la Alumar, empresas vendidas por la Vale a la noruega Norsk Hydro, entre otros casos (Tautz *et al.*, 2010). También hubo situaciones como la de la sucursal de Odebrecht en Perú, que en la práctica se independizó: registrada legalmente como una empresa local, ya no tiene proyectos respaldados por el BNDES, pero tampoco colabora para la exportación de servicios y productos brasileños. En síntesis, hay poca evidencia de que el apoyo brindado por el BNDES a estas empresas correspondiera a las expectativas neodesarrollistas. Al mismo tiempo hay indicios de que las "campeonas nacionales" accedieron a créditos de largo plazo para reducir los costos de capital, o incluso para obtener ganancias, manipulando las tasas de interés: invirtieron el dinero prestado en la compra de bonos del gobierno, que pagaban intereses más altos (Bonomo, Brito y Martins, 2014).

2 FAT es un fondo especial, de naturaleza contable y financiera, vinculado al Ministerio de Trabajo, para financiar el Programa de Seguro-Desempleo, el Subsidio Salarial y el financiamiento de programas de desarrollo económico [n.e.].

Si la estrategia de las "campeonas nacionales" dio frutos dudosos, la asociación esperada entre el neodesarrollismo y la industrialización no tuvo éxito. Al contrario, durante las administraciones petistas, se acentuó la desarticulación de la industria brasileña, un fenómeno que le antecede. Desde 1985, la participación industrial en el PIB disminuyó de 35,88% en ese año a 13,13% en 2013. En ese momento, el Brasil respondía por el 2,8% de la producción industrial mundial, una cifra que se redujo a 1,7% en los años 2000, estabilizándose en este nivel hasta el año 2010 (Unido, 2011).

La desarticulación del tejido industrial es sugerida por diversos indicadores, como el aumento de participación de los componentes primarios en la producción industrial, la elevación del uso de insumos importados utilizados en la fabricación de los bienes industriales y una mayor concentración de valor agregado en pocos segmentos, elementos que denotan una fragilización de los eslabones que permiten a la industria funcionar como un todo orgánico (Carneiro, 2008). En este contexto, la parcela del consumo cubierto por las importaciones aumentó un 6% desde 1996, llegando al 21,7% en 2014, mientras que las exportaciones no industriales duplicaron su participación en el patrón exportador. En 2010, un informe del Ministerio de Hacienda clasificaba como *commodities* el 64,6% de las exportaciones brasileñas, cifra que en 1994 era de alrededor del 50% (Esposito, 2017). Cabe recordar que una parte sustancial de las exportaciones industriales de Brasil son llevadas a cabo por multinacionales, como es el caso de los fabricantes de automóviles instalados en el país.

A pesar de estas tendencias regresivas, el primer mandato de Lula se benefició de una secuencia excepcional de cinco años de saldos positivos en transacciones corrientes, lo que infló la ilusión neodesarrollista. A partir de 2008 el saldo se volvió cada vez más negativo, superando los 100 mil millones de dólares en 2014, —o el 4,3% del PIB—, el peor resultado en la serie histórica. Al final de cuentas, la exigencia permanente de aumentar las exportaciones resultó en el apoyo incondicional para el agronegocio y para la minería, alimentando

numerosos conflictos y desastres socioambientales, como en Belo Monte y en Mariana[3].

El porcentaje de las importaciones y exportaciones en relación al PIB aumentó durante las administraciones petistas, lo que refleja un mayor grado de apertura de la economía y, en este caso, dependencia. Igualmente, significativa, la media de movilidad de capitales aumentó de 5% entre 1986 y 1990 a 37% entre 2006 y 2010, período en que el pasivo externo también se multiplicó, indicando un aumento en la vulnerabilidad del país a las crisis causadas por la fuga de capitales (Machado y Sampaio Jr., 2012). En resumen, la convergencia entre desarticulación del sistema industrial, el traslado del eje dinámico de la economía hacia el exterior y la erosión de los centros internos de toma de decisiones frente a las finanzas internacionales, apuntan a una desindustrialización del país.

Estos hallazgos expresan el carácter ideológico de la propuesta neodesarrollista. Al sugerir una asociación contradictoria entre los supuestos aspectos benéficos del neoliberalismo con aquellos nostálgicos del viejo desarrollismo, el "pastiche del neodesarrollo" (Fiori, 2011) ignoró los nexos entre las diferentes dimensiones inherentes a ambos idearios —por ejemplo, la relación antitética entre la política monetaria restrictiva y el crecimiento económico que caracteriza el neoliberalismo, o la protección del capital nacional— que condiciona la industrialización en la perspectiva desarrollista. Aún así, abstrae de las condiciones históricas que sostenían a la utopía nacional-desarrollista como vía para la humanización del capitalismo periférico, ya que, en la actualidad, las posibilidades de un horizonte nacional para el desarrollo están limitadas en un mundo guiado por un régimen de acumulación global.

---

3 En noviembre de 2015, se rompió una represa de desechos mineros de la empresa Samarco, subsidiaria de Vale, en el municipio de Mariana. El desastre ocasionó daños ambientales incalculables, particularmente en el río Doce, además de destruir dos municipios y cobrar 19 vidas. Belo Monte se refiere a la controvertida central hidroeléctrica en construcción en la cuenca del río Xingu en la Amazonía, que despertó la resistencia local e internacional.

Bajo este barniz retórico que remite a un ideario que en otros tiempos buscó conciliar al capitalismo y la nación en la periferia, se observó una política económica conservadora, que aceptó los parámetros del neoliberalismo. En la práctica, la economía brasileña continuó operando como una plataforma para valorizar el capital financiero internacional, en un contexto en el que los bancos ganaban dinero como nunca, según repetía Lula; exportadora de materias primas, incluyendo sectores que internacionalizaron sus operaciones, entre frigoríficos, mineros y agronegocios; y como base de apoyo de las corporaciones multinacionales, que explotan el mercado interno, pero también exportan, aunque cada vez menos manufacturas. Las tendencias económicas predominantes se intensificaron: desnacionalización, desindustrialización, devastación ambiental y sobreexplotación de la mano de obra, así como la apertura comercial y financiera, aumentando así la vulnerabilidad a la crisis y su contraparte, la sujeción a las finanzas internacionales.

Desconectada del movimiento de la realidad, la ideología neodesarrollista se prestaría, según Sampaio Jr., a una doble función: "Diferencia al gobierno de Lula del gobierno FHC, lanzando sobre este último el estigma de 'neoliberal', y reforzando el mito del crecimiento como una solución a los problemas del país, eludiendo a las masas" (Sampaio Jr., 2012). La retórica neodesarrollista jugó un papel ideológico regresivo al estrechar el debate económico, restringido a la microeconomía, y acortar el alcance de la discusión política, limitado a la coyuntura. Al reducir el horizonte de cambio social a los parámetros aceptados por el neoliberalismo, la política se limitó a una discusión sobre el ritmo y la intensidad del ajuste estructural, distinguiéndose solamente en aspectos accesorios, como la intensidad de las políticas de transferencia monetaria emanadas del Banco Mundial; la estrategia para lidiar con las presiones sociales; el papel atribuido al entorno regional; y el marketing para el consumo interno y externo, entre otros. La estrategia petista, en los parámetros del orden que defendió, estuvo referida a lo que llamaremos el "modo lulista de regulación del conflicto social".

El modo lulista de regulación del conflicto social

a) Articulación de dos consensos

El modo lulista de regulación del conflicto social se puede resumir como una combinación entre modestas ganancias para los extremos inferiores de la pirámide social brasileña —sea por la extensión de las políticas de ingresos condicionados promovidas por el Banco Mundial, sea por una discreta evolución del salario mínimo, vinculada al crecimiento de la economía brasileña— asociada a la continuidad del país como un negocio para los bancos y para el capital internacional. La conjunción de pequeñas ganancias para los de abajo, con las ganancias de siempre —y todavía mayores para los de arriba—, sostuvo una relativa pacificación social del país durante más de una década.

Según Ruy Braga (2014a; 2015), la hegemonía lulista se apoyó sobre la articulación de dos formas distintas pero complementarias de consentimiento. En primer lugar, el *consentimiento pasivo* de las clases subalternas al proyecto de gobierno, abrazado por una burocracia sindical que durante el período de crecimiento económico, supo garantizar concesiones modestas pero efectivas a los trabajadores. De manera general, el *subproletariado semirural* en los rincones del país se benefició con el Programa Bolsa Familia, pasando de la pobreza extrema a la pobreza oficial. El precariado urbano se benefició de aumentos en el salario mínimo por encima de la inflación y la creación de empleos formales. Finalmente, en el contexto de un mercado laboral dinámico, el *proletariado sindicalmente organizado* alcanzó negociaciones colectivas, ventajosas tanto en términos de salarios como en términos de beneficios laborales. En un país con fama de desigualdades abismales, estos pequeños avances fueron suficientes para solidificar el consentimiento de los subalternos a la regulación lulista.

Al mismo tiempo, el gobierno articuló concretamente los intereses de la burocracia sindical, de los líderes de los movimientos sociales y de los sectores medios intelectuales, sentando las bases para un

consentimiento activo al lulismo, cuyo lugar fue el aparato de Estado[4]. Por medio de la ocupación de cargos en los consejos de administración de fondos de pensiones y bancos públicos, la alta burocracia sindical se "financiarizó", es decir, fusionó sus intereses al capital financiero. Chico de Oliveira (2003) denunció la simbiosis entre "técnicos y economistas dobles de banqueros, que formaban el núcleo duro del PSDB[5], y los trabajadores que se convirtieron en operadores de fondos de pensiones, núcleo duro del PT" que controlan el acceso a fondos públicos. En gran medida, la rentabilidad de tales fondos está vinculada a procesos de reestructuración productiva que generan desempleo. Se llegó a una situación en la que un estrato privilegiado de trabajadores ganó dinero con la precarización de los demás.

La adhesión de la Central Única de Trabajadores (CUT) a este proyecto reveló la piedra filosofal del lulismo: las principales organizaciones sociales que en otros tiempos resistieron el avance del neoliberalismo, ahora apoyaban a un gobierno comprometido con la profundización de estas políticas. La relación de confianza construida a lo largo de los años entre el partido y las organizaciones sociales fue instrumentalizada para neutralizarlas facilitando la estocada neoliberal. El carisma personal de Lula fue igualmente manipulado para este fin. Como parte de esta regulación, proliferaban las políticas públicas y las instancias participativas inocuas para modificar las estructuras sociales, pero efectivas para desviar el activismo social. Militantes fueron convertidos en gestores de proyectos del gobierno, cuando no se volvieron simples funcionarios del gobierno. En general, este arsenal de prácticas y estrategias consolidó un consenso activo sobre el proyecto petista, debilitando la autonomía del campo popular.

Inicialmente, líderes y organizaciones justificaron su apoyo tácito con el argumento de que el gobierno estaba en disputa. Sin embargo,

4 Sobre el lulismo y sus contradicciones ver Singer (2012) y Loureiro y Singer (2016).

5 Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) es el partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso, que polarizó la política nacional con el PT desde los años 1990. Son conocidos como "tucanes".

la idea de que era posible disputar el gobierno y llevarlo a la izquierda nació muerta. Desde la primera victoria de Lula en 2002, el partido jamás pensó construir una correlación de fuerzas para modificar las estructuras del Estado brasileño. Al contrario, se embarcó conscientemente en las prácticas de la política profesional, caracterizadas por la venalidad y el oportunismo. Si existía la ilusión de que los petistas manejaban al Estado por medios oscuros para fines legítimos, lo que ocurrió fue lo contrario y la máquina petista fue absorbida por la política convencional, de la cual se convirtió en parte integrante.

Recurriendo a una figura del lenguaje, los movimientos se casaron con el gobierno creyendo que lo cambiarían, pero fueron ellos quienes acabaron cambiando. A su vez, el gobierno descubrió en este matrimonio que, a pesar de numerosas traiciones públicas, la pareja no consideraba el divorcio como posibilidad. Así, el recurso a las alianzas sórdidas y prácticas inmorales no tuvo límite. Vulgarizando la analogía, mientras el gobierno sentía que no necesitaba atender al cónyuge, que todo podía entender, se desvivía para complacer a los amantes, entre los cuales estaba el voluptuoso Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), actual MDB, partido convencional al que pertenece el entonces vicepresidente Michel Temer, articulador del golpe.

Las crisis políticas acentuaron la separación entre la fidelidad de los movimientos y la venalidad del gobierno. Desde la primera crisis grave en torno a los sobornos o pagos mensuales[6] en 2005, la base petista blandió la amenaza de golpe a pesar de haber un consenso, entre la burguesía en aquel momento, contra el *impeachment*. En lugar de considerar la posibilidad de que el PT, que aplicaba una política conservadora en todas las esferas, también pudiese manipular al parlamento de manera convencional, recurriendo al soborno, el sector popular cerró filas con el gobierno. Fueron 43 las organizaciones que firmaron una Carta al pueblo brasileño, homónima al documento de

6 Denuncia de compra de voto de parlamentarios por medio de depósitos mensuales.

2002, calificando las denuncias como maniobras golpistas. Mientras tanto, el Planalto respondía reforzando la participación del MDB en el gobierno, los compromisos con el capital financiero y las políticas asistencialistas focalizadas.

Diez años después, la operación Lava Jato, que expuso la promiscuidad entre empresas y políticos, también fue reducida a una persecución política, a pesar del arresto de empresarios en cuya inocencia pocos creen. En esos días, apenas se escuchaban ecos de la retórica del "gobierno en disputa", lo que implicaba que el campo popular había sido derrotado en todas las batallas a lo largo de aquel período. Entre algunos dirigentes, el discurso fue enriquecido con la idea de que se armaba un cerco contra la izquierda. La hipótesis que pocos lanzaron era que, en este punto el PT era parte del cerco, no de la izquierda.

En resumen, la convergencia entre las estrategias petistas de neutralización de la crítica y la incapacidad de parte de la militancia en desprenderse del partido provocó una especie de secuestro de la izquierda. Paradójicamente, el principal legado del consenso activo sobre la hegemonía petista fue el inmovilismo, que tuvo consecuencias devastadoras una vez que la paz lulista cayó en picada.

b) Modernización conservadora

El "modo lulista de regulación del conflicto social" se impuso con notable éxito durante el ciclo expansivo de la economía, que abarcó las presidencias de Lula y el primer mandato de Dilma. Para comprender su posterior agotamiento y la reacción que generó, es necesario analizar las dinámicas en la que se asentó el consenso pasivo de las masas. Concretamente se examinará la creación de empleo, el aumento del salario mínimo y la expansión de la educación universitaria, tres elementos en el universo de los protagonistas de las jornadas de junio de 2013, cuando se evidenciaron las contradicciones del lulismo. El fracaso de la reforma urbana alentada por las primeras gestiones petistas en los años de 1980, que entonces difundían una "forma de gobierno petista" y el retroceso de la reforma agraria, un

tema que movilizó al más poderoso movimiento social brasileño bajo el neoliberalismo, complementan el panorama de la modernización conservadora adelantada por estas administraciones.

El agotamiento del consenso pasivo al pacto lulista se evidenció a partir de las jornadas de junio de 2013, el ciclo de mayor movilización popular en la historia del país desde el fin de la dictadura en 1985. Investigaciones de campo indican que las protestas fueron protagonizadas por jóvenes estudiantes que trabajan —o jóvenes trabajadores que estudian—. Este segmento se vio doblemente afectado por el proyecto petista, toda vez que más del 60% de los empleos creados durante estas administraciones fueron ocupados por jóvenes de entre 18 y 24 años, que constituyen también los principales clientes para la expansión de la educación superior (principalmente privada) en el país (Braga, 2014b).

Contrariamente a la mitología que rodea a una "nueva clase media", estudios mostraron que lo que hubo bajo las administraciones petistas fue una ampliación de la base de la pirámide social brasileña. De cada diez nuevos empleos creados durante los años 2000, nueve pagaban menos de 1,5 veces el salario mínimo. En 2014, cuando se acentuaban los efectos de la desaceleración económica, cerca del 97,5% del empleo creado estaba situado en este rango de remuneración. El motor de la expansión fue el sector de servicios, como el telemarketing, abarcando segmentos de la sociedad que históricamente reciben salarios más bajos y que son más discriminados en el mercado laboral: mujeres, negros y jóvenes (Braga, 2014a; Braga, 2014b; Pochmann, 2012).

Desde el punto de vista del dinamismo económico, Marcio Pochmann (2012) indica que "este movimiento de expansión de empleos mal remunerados mostró ser compatible con la absorción del enorme excedente de mano de obra generado previamente por el neoliberalismo". Reflexionando sobre el impacto de este movimiento en la estructura social, el economista señala que "ya sea por el nivel de ingresos o por el tipo de ocupación, o por el perfil y atributos

personales, la mayor parte de la población emergente no se encaja en criterios serios y objetivos que pueden identificarse claramente como de clase media". Por el contrario, revelan un perfil característico de los sectores populares que, frente al aumento de los ingresos, no ahorran, sino que aumentan de inmediato el consumo.

Para este grupo social, la recuperación del salario mínimo es crucial. Pese a que existe una discreta evolución de la participación del trabajo en el ingreso, durante los gobiernos de Lula, el alcance de la política de recuperación del valor del salario mínimo debe ser matizado. En primer lugar, se debe reconocer que esta tendencia es anterior al período petista: durante los ocho años de FHC, entre 1994 y 2002, hubo una recuperación del 42% en el valor real del salario mínimo, mientras que entre 2003 y 2014 la apreciación registrada fue del 76,5%. La difundida política de valorización del salario mínimo, vigente desde 2008, vinculó los aumentos salariales a la inflación y a la variación del PIB en un momento de crecimiento económico. Esta política tuvo algún impacto durante la subida de los precios de las *commodities*, pero queda sin efecto bajo la recesión (Krein, Santos y Manzano, 2015).

En segundo lugar, es necesario contextualizar los resultados alcanzados en relación a períodos anteriores. El reciente aumento en el empleo tiene como referencia un nivel bajo: el desempleo masivo de la década de 1990. Del mismo modo, el aumento en el salario real promedio del trabajador apenas lo colocó, en 2013, en un nivel similar al del inicio del Plan Real. Por lo tanto, su poder adquisitivo permanecía inferior al verificado a inicios de los años ochenta, lo que a su vez reflejó la baja resultante de dos décadas de dictadura.

Igualmente, el aumento en la participación del trabajo sobre la renta entre 2002 y 2009, cuando pasó del 42,4% al 43,6%, según datos del Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (IPEA), todavía estaba a un nivel inferior al de 1994, cuando alcanzó el 48% —y muy inferior al del bienio 1959-1960, cuando alcanzó el 57%. Sobre todo, se perpetúa la degradante distancia entre el salario mínimo establecido

en la Constitución y el salario mínimo efectivamente pagado. Según cálculos del Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socioeconómicos (DIEESE), el salario mínimo ideal en junio de 2013 debería ser cuatro veces el salario mínimo real para cubrir los gastos básicos de una reproducción digna de la existencia (DIEESE, 2016).

Si los avances cuantitativos son pobres, los datos cualitativos indican un retroceso en las condiciones de trabajo. Se constata un aumento de las tasas de tercerización de las empresas, la profundización de la flexibilidad de la jornada de trabajo, aumento de las tasas de rotación de personal y aumento de los accidentes y muertes laborales, todos indicios del deterioro de la calidad del empleo creado. Cuando consideramos que las fuerzas impulsoras de la economía en el período fueron la construcción civil, el agronegocio y el sector de servicios, difícilmente se podía esperar otro resultado. Se evidencia que el crecimiento económico se basó en la sobreexplotación del trabajo, explicitando la contradicción entre el interés mercantil y las aspiraciones populares.

En resumen, el mundo del trabajo bajo el PT avanzó a paso rápido en consonancia con el movimiento global de precarización del trabajo. Ruy Braga se refiere a este sujeto histórico como "precariado", "esa masa formada por trabajadores no cualificados y semi-cualificados que entran y salen muy rápidamente del mercado laboral, por jóvenes en busca de su primer trabajo, por trabajadores recién salidos de la informalidad y por trabajadores mal pagados" (Braga, 2014a). Se trata de un grupo social despojado de garantías laborales, sometido a ingresos inciertos y sin una identidad colectiva arraigada en el mundo del trabajo.

Muchos de estos jóvenes cursan la educación superior con la expectativa de competir por empleos por encima del 1,5 del salario mínimo con la clase media, dejando atrás el mundo incierto y mal pagado del precariado. Se convierten así en los principales clientes de la expansión de universidades privadas que ofrecen cursos de pésima calidad a precios bajos. Si es verdad que bajo el Programa de

Apoyo a los Planes de Reestructuración y Expansión de las Universidades Federales (REUNI), vigente de 2003 a 2012, se crearon catorce nuevas universidades federales y cien nuevos campi universitarios, propiciando un aumento de alrededor del 60% en las matrículas en cursos presenciales de pregrado, la precariedad con que esta expansión se dio es notoria. El deterioro de las condiciones de trabajo y de la carrera de técnicos y docentes, agravada por violentos recortes en los presupuestos para la educación, dio lugar a dos grandes huelgas en 2012 y 2015.

El brazo principal de la expansión de la educación superior no fue público sino privado. Entre 2003 y 2014, la oferta de cursos de pregrado en el país se extendió de 282 a 792 municipios y, en este año, el 78,5% de las vacantes ofrecidas en la educación superior eran nuevas. Sin embargo, de los 8 millones de vacantes, el 90,2% pertenecían a universidades privadas. Estrictamente hablando, se trata de una expansión subsidiada, ya que el gobierno federal realizó masivas transferencias de recursos públicos a la educación privada a través del Fondo de Financiamiento Estudiantil (FIES) y del Programa Universidad para Todos (PROUNI). En el año 2013, el Ministerio de Educación desembolsó 5,8 mil millones de reales al FIES y, en 2014, 12,3 mil millones de reales. Cuando, en 2015, los recortes presupuestarios redujeron 12 mil millones de reales de la Educación, el gobierno federal dio 17,7 mil millones de reales a FIES y renunció a la recaudación de 970 millones de reales para Prouni (Zagni, 2016). La lógica subyacente es que es más barato para el Estado subvencionar al estudiante en una universidad privada que mantener una institución pública.

Resulta que al final del estudio universitario, muchos descubren que el camino para ascender socialmente es más estrecho que el prometido. El trabajo precario, originalmente concebido como un compromiso provisional, se convierte en permanente. La precariedad deja de ser un escalón y se convierte en una pared: paredes cada vez más estrechas en una habitación cada vez más baja. La vida se vuelve angustiante en el sentido etimológico del término: comprimida,

estrecha, estresada. Quienes tienen algún éxito perciben que el mercado laboral exige el sacrificio diario de la ética para asegurar un lugar en un mundo marcado por la competencia, el despotismo y el miedo. Y, aún así, no hay certeza sobre el futuro, ya que todos son prescindibles. Finalmente se descubre que ser menos pobre no hace que la existencia sea más estable.

Para la mayor parte, esta existencia angustiosa e inestable ocurre en la ciudad, entre la casa, el estudio y el trabajo. La movilidad está en el centro de la vida. Y las ciudades brasileñas colapsaron como una experiencia de vida social y un lugar de civilización.

Para establecer los motivos del fracaso en detener este proceso, Pedro Arantes (2014) analiza la trayectoria de la lucha por la reforma urbana en el Brasil y su conexión con las políticas urbanas federales. Haciendo una analogía con el movimiento sindical brasileño, que poco cuestionó la propiedad privada de los medios de producción, Arantes señala que los movimientos de vivienda nunca trascendieron el umbral de la propiedad privada de la tierra. Así, a medida que declinó el urbanismo "democrático-popular" practicado por las administraciones municipales petistas en la década de 1980 —involucrando la urbanización de las favelas, la producción de viviendas autogestionadas, además de prácticas como el presupuesto participativo—, surgieron condiciones para un consenso en torno a una salida mercantil para esa cuestión, teniendo como horizonte la ideología de la casa propia.

Tomando en cuenta a las ciudades como marca o como negocio, las administraciones petistas recurrieron cada vez más a consultores urbanos internacionales, a tiempo que defendían e introducían mecanismos posmodernos de privatización de las ciudades, como las intervenciones urbanas, las ventas de certificados de potencial constructivo adicional, los grandes proyectos urbanos y megaeventos. Agotadas en su potencial transformador original, las prácticas que caracterizaron la "forma petista de gobernar" se convirtieron en tecnologías de gestión de masas urbanas empobrecidas.

En línea con la inflexión política e ideológica sufrida por el PT, la reforma urbana dejó de ser vista como una totalidad hasta confundirse con "las prácticas del sector inmobiliario, de los gobiernos de derecha y del Banco Mundial", como señala Arantes. En este recorrido, se abandonó un pensamiento sustantivo sobre la ciudad, lo que sería el propio fin de la reforma urbana. La movilidad entendida como un derecho urbano fundamental, porque es un medio de acceso a otros derechos, fue una de las dimensiones enterradas con esta problemática. Así, como no se cuestionó la propiedad del suelo, no se problematizó el molinete.

Una vez alcanzada la presidencia, la principal forma de concertación del PT, entre capital y trabajo en el plan de vivienda popular fue el programa "Mi casa mi vida". Desde el punto de vista de la racionalidad del gobierno, el desafío fue convencer al capital inmobiliario para atender a los pobres, lo que significaba convertir a los "sin techo" en consumidores de vivienda y la vivienda popular en un negocio rentable. La era de la autoconstrucción y del trabajo conjunto dio lugar a una alianza entre los trabajadores y el capital inmobiliario, que está respaldada por fondos públicos. En este acuerdo, todas las dimensiones del proceso de construcción están controladas por el sector privado: desde la política de tierras hasta el patrón de urbanización, pasando por lo local y la tecnología constructiva. Se consolidó la identificación entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad, en un proceso que Arantes (2014) interpreta como una "solución compensatoria a la reforma urbana que no ocurrió".

La cuestión agraria, bajo las presidencias del PT, fue encaminada de modo similar, con resultados igualmente frustrantes. Según Ariovaldo Umbelino de Oliveira (2010), fue evidente desde el inicio que la reforma agraria bajo Lula estaría marcada por dos principios: "No hacerla en áreas de dominio del agronegocio y hacerla solo en las áreas donde se pueda 'ayudar' al agronegocio. Es decir que, la reforma agraria en Brasil está definitivamente unida a la expansión del agronegocio".

Un conjunto de medidas a lo largo de las gestiones petistas consolidaron esta orientación antipopular, como la Ley de Bioseguridad, que regularizó la producción y comercialización de semillas transgénicas; el Programa Tierra Legal, que legalizó el acaparamiento de tierras en la Amazonía; la renegociación de las deudas de los ruralistas; el desmantelamiento del Código Forestal; y las obras de infraestructura orientadas a potenciar el agronegocio referidas al Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) y a la Iniciativa de Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA).

Esta realidad puso a las organizaciones rurales como al Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) ante una situación difícil. El apoyo al gobierno contradecía la defensa de la reforma agraria, lo que le dio al movimiento su razón de ser. Por otro lado, la administración federal señaló múltiples vínculos posibles, desde el nombramiento de militantes para puestos de bajo nivel hasta la difusión de políticas asistencialistas en la base del movimiento, como la Bolsa Familia. Era un contraste sorprendente con la represión de la gestión anterior.

En el plano productivo, el gobierno multiplicó los recursos del Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF), emulado por el Banco Mundial e implementado en el país durante la gestión de FHC. Más que una línea de crédito, la concepción del programa supone una ingeniería social orientada a transformar la agricultura familiar en un engranaje de la agroindustria transnacional. Desde el punto de vista político, este incentivo contemplaba una de las bases del movimiento: las familias ya asentadas. Sin embargo, esto se hizo a expensas de las familias campesinas sin tierra, de los agricultores empobrecidos y el trabajador agrícola en general.

Como regla general, los incentivos a la agricultura familiar tienden a prescindir de la mediación de los movimientos sociales y casi siempre fomentan el monocultivo: la mitad de los créditos emitidos entre 2003 y 2011 se destinaron a cultivos de maíz y soja. Como resultado, tanto en el noreste como en el sur del país, según Alex Hilsenbeck (2013), hubo asentamientos de MST dedicados al monocultivo de

ricino o girasol, en iniciativas mediadas por acuerdos con Petrobras, en detrimento del policultivo de alimentos.

La forma como las presidencias petistas lidiaron con la reforma agraria y la cuestión urbana, temas que han movilizado a los movimientos populares más combativos en Brasil desde el final de la dictadura, revela la economía política que se propuso. En el campo, se diluyó la contradicción entre la agricultura familiar y el monocultivo de exportación a costa de la reforma agraria. En la ciudad, la contradicción entre el derecho a la vivienda y la ciudad como negocio, se dirimió a expensas de la reforma urbana.

Atravesando campo y ciudad, se pretendió aliviar la contradicción entre la integración social y la sobreexplotación del trabajo, reemplazando la lucha por los derechos con la capitalización de los pobres. La expansión de la Bolsa Familia y de empleos abaratados se articuló con la expansión del crédito popular y de la educación superior privada superior para tejer un horizonte de inserción individual, mediado por el consumo. El sueño de la movilidad social alentó el precariado como una condición pasajera, que tenía como base la Bolsa Familia y, como puntal la educación superior privada. El crédito popular alimentó sueños de consumo y de ascensión profesional, así como la casa propia (Mi Casa Mi Vida) y la agricultura mercantil (PRONAF). Mientras algunas familias comieron más, otras tuvieron un hijo en la universidad por primera vez. Todas soñaron con dejar la *senzala*[7], aunque de manera individual, no colectiva.

En su esfuerzo por aliviar los males que afligen a la sociedad brasileña desde el origen colonial, el petismo mitigó transitoriamente algunos de sus síntomas. Sin embargo, sus causas empeoraron. Los modestos avances fueron acompañados de la profundización de los problemas estructurales, evidenciados en el deterioro de las condiciones de trabajo y en el retroceso en las cuestiones urbanas y agrarias, en el contexto de la reprimarización de la economía. Políticamente,

7 *Senzala* es el lugar donde los esclavos negros dormían.

la apuesta por la conciliación de clases fomentó negocios e intereses conservadores —entre el capital financiero, el agronegocio, los medios corporativos, el neopentecostalismo[8], los partidos convencionales —al mismo tiempo que se acomodaron, a través de concesiones y privilegios, muchos de los que presionaron por cambio en el pasado.

Mientras tanto, el esfuerzo por eludir las contradicciones que tensionan a la sociedad brasileña, como si fuese posible erradicar los males sin tocar las raíces, resultó ser una quimera, que comenzó a desmoronarse en junio de 2013.

El lulismo en crisis

a) De las jornadas de junio a las movilizaciones por el impeachment

Las contradicciones de la modernización conservadora asociada al "modo lulista de regulación del conflicto social" surgieron en las movilizaciones multitudinarias de junio de 2013 —aunque el propio gobierno no había interpretado los acontecimientos de esta manera.

Para aquellos que veían al Brasil con los lentes del lulismo, la revuelta popular surgió como un rayo en el cielo azul. Se creía que el país era inmune ante la crisis mundial y que se había reencontrado con el crecimiento económico después de tres décadas de estancamiento. El salario mínimo real creció y el consumo aumentó dando origen a una nueva clase media. Se alentaba la formalización del trabajo y la trabajadora del hogar se convirtió en portadora de derechos. La pobreza absoluta disminuyó, en consonancia con las amplias políticas de transferencias monetarias condicionadas. El país rompía récords en la exportación mineral y agrícola, mientras que el descubrimiento del petróleo en el *pre-sal* preanunciaba una prosperidad aún mayor. El Brasil pasará de deudor a acreedor del FMI, de estudiante a ejemplo

8 Referencia a iglesias evangélicas de fundación relativamente reciente, que se expanden en Brasil y otras partes sosteniendo un discurso emprendedor (teología de la prosperidad) y valores conservadores.

del Banco Mundial. En torno al liderazgo brasileño se conformaban nuevos espacios de articulación de los países sudamericanos como Unasur. Este protagonismo internacional fue reconocido con la presidencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y con el liderazgo militar de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH), y legitimó el reclamo de un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Como cereza en la torta, el país sería sede de la Copa Mundial 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016, un reconocimiento tácito de su competencia y modernidad.

Las jornadas de junio fueron un movimiento multifacético que generó varias lecturas. Hubo lulistas argumentando que los logros de los años anteriores aumentaron las expectativas sociales, que luego se desbordaron en las calles. En la medida que las frases de tipo reaccionario comenzaron a proyectarse en carteles y megáfonos, se sugirió que las manifestaciones eran la expresión de una clase media preocupada por el aumento del costo de los servicios, lo que encarecía a los empleados domésticos, y con la intensificación de la competencia en el mercado laboral, debido al aumento del número de universitarios entre las clases inferiores. En resumen, se trataba de una reacción contra la democratización del Brasil.

Aunque el segundo punto sea relevante para las manifestaciones antipetistas que tomaron forma en 2015 y 2016, su participación en junio de 2013 fue tardía y minoritaria, así como fue la de las centrales sindicales y de otras organizaciones aliadas del gobierno, incluyendo la izquierda del PT. Quien estuvo en las calles desde un primer momento fueron los movimientos y partidos a la izquierda del espectro político[9]. A partir de su iniciativa, una juventud inconforme y dispuesta

9 La Juventud Petista (JPT) de São Paulo fue la única organización vinculada a la constelación petista que estuvo en las calles desde las primeras protestas en junio de 2013 en la ciudad, respaldando la agenda de reducción de tarifas del transporte público impulsado por el Movimiento de Pase Libre (MPL) [n.e.].

se movilizó, pero con poca experiencia política. Y fueron ellos quienes dieron la tónica a las jornadas de junio. El sentido de las consignas gravitaba alrededor de tres temas fundamentales: la democratización de las ciudades, las políticas públicas universales y una reacción al cretinismo parlamentario —la ilusión de que el parlamento representa una nación—. Haciendo cuentas, aunque no tuviese como meta un gobierno en particular, la rebelión desafió a la modernización conservadora profundizada por el PT.

Inicialmente las manifestaciones, que reunieron alrededor de 6 mil personas en São Paulo, el 6 de junio de 2013, protestaron contra el aumento de las tarifas de transporte público. La represión policial llevó a los manifestantes a duplicarse en los días siguientes. Esa semana, el Alcalde de São Paulo, Fernando Haddad, miembro de alto rango del PT, defendía en París la candidatura de la ciudad para la Expo 2020 junto al gobernador Geraldo Alckmin, uno de los principales líderes nacionales del PSDB. En línea con su colega tucán, Haddad condenó las protestas y alabó el comportamiento de la Policía Militar[10].

Sin embargo, las protestas continuaron. Como respuesta, la Policía Militar aumentó la represión: el 13 de junio, arrestó a más de doscientas personas e hirió a cientos de manifestantes y a más de dos docenas de periodistas —uno de ellos acabó perdiendo un ojo al ser alcanzado por una bala de goma—. Al contrario de lo esperado, las manifestaciones se intensificaron. Pronto se ampliaron a nivel nacional y ya no podían ser reprimidas por la policía. A lo largo de ese mes, durante unas tres semanas, un terremoto social sacudió la escena política brasileña. En su apogeo, se estima que dos millones de personas salieron a las calles en más de 120 ciudades. En ese entonces, alrededor del 80% de los brasileños apoyaban las protestas. La agenda de reinvindicaciones trascendió el tema del transporte público, incluyendo otros servicios públicos, especialmente en salud y educación. La ampliación del

10 Haddad y Alckmin se enfrentarían en las elecciones presidenciales de Brasil en 2018, en el caso de Haddad, por la impugnación de la candidatura de Lula.

alcance original de las protestas se resumió en el lema: "¡No es por centavos, es por derechos!".

Coincidiendo con la Copa de las Confederaciones, evento de prueba para las instalaciones de la Copa Mundial, las jornadas de junio tuvieron en las relaciones de la FIFA con el país, una síntesis de la modernización conservadora petista. La parodia "era un país muy divertido, no tenía escuelas, solo tenía estadios" sintetizaba ese malestar, en el que sofisticados patrones de consumo conviven con la primitiva reproducción social de la existencia. Erigidos con dinero público a costa de la relocalización de poblaciones y de la sobreexplotación del trabajo, como parte de negocios internacionales ilícitos que enriquecieron a políticos y contratistas, los estadios de la Copa Mundial surgieron como auténticos monumentos al subdesarrollo, más allá de divertir a unos pocos que podían pagar las entradas.

En resumen, si bien es cierto que las protestas no tuvieron como objeto a los gobiernos petistas en particular, también es un hecho que la contestación del orden lo incluyó. Solo sería posible argumentar que el malestar en las calles no se dirigió al gobierno federal y al PT si consideramos que diez años después de llegar a la presidencia, ambos no tenían nada que ver con la situación en el país. Lo más probable es lo contrario: que las manifestaciones tradujesen, aunque de manera difusa, una enorme frustración.

Sin embargo, la reacción del gobierno reveló que la frustración continuaría. Si las manifestaciones lograron suspender los reajustes tarifarios en todo Brasil, la agenda política nacional no cambió. Se ganaban centavos, pero no derechos. El gobierno de Dilma Rousseff simuló preocupación y asumió compromisos retóricos con los manifestantes, pero luego anunció una nueva ronda de privatizaciones, aumentó las tasas de interés y presionó aún más el ajuste fiscal, reduciendo el gasto público y aumentando el superávit primario. En lugar de hacer eco de las demandas de las calles, agilizó una ley antiterrorista para intimidarlos, con el objetivo de mantener a las masas alejadas de la Copa Mundial 2014 y de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

También en las elecciones presidenciales de octubre de 2014, se ignoró la agenda pública puesta en las calles el año anterior. Las prioridades del gobierno se ilustran con datos de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, indicando que, en ese año, el 45,11% de todo el presupuesto ejecutado fue comprometido con intereses y amortizaciones de la deuda pública —doce veces el monto invertido en educación, once veces la inversión en salud y más del doble de los gastos de la seguridad social (Fattorelli y Ávila, 2015).

La elección, sin embargo, atestiguó una polarización política sin correspondencia con lo que efectivamente estaba en disputa: la gestión de la crisis que se asomaba. Un clima de hostilidad visceral intoxicó al electorado y el pueblo brasileño fue testigo de una radicalización reaccionaria. En este contexto, muchos de sus mejores representantes defendieron apasionadamente el petismo, despojado de cualquier potencial de cambio. En el otro polo, una clase dominante siempre reacia al protagonismo popular sintió que el *momentum* lulista pasaba y reanudó la ofensiva. Sin alternativas programáticas para presentar, su crítica se convirtió rápidamente en prejuicio, revelando la intolerancia con la existencia de un partido de trabajadores, aunque desprovisto de autonomía de clase.

Reelegida por un margen estrecho, Dilma se enfrentó a un escenario diferente en su segundo mandato. La reversión de la coyuntura internacional favorable a las *commodities*, las presiones inflacionarias, el aumento del desempleo, las altas tasas de interés, la caída en las exportaciones, una industria colapsando, todo esto en medio de una sucesión de escándalos de corrupción, acentuaron la fragilidad del Ejecutivo, astutamente explotada por un Congreso cuyo perfil reflejaba la degradación del tejido social brasileño. En este contexto, la presidenta abandonó inmediatamente su programa de campaña y adoptó la agenda del candidato derrotado implementando un ajuste fiscal draconiano que significó recortes en todos los ministerios de acción social. Atormentado por el espectro del *impeachment*, el gobierno sería presionado para ceder cada vez más, con la expectativa de aplacar la voracidad del MDB y del gran capital.

Sin embargo, la recesión económica —que derivó en tasas negativas de crecimiento en 2015 y 2016— comprometió el pilar burgués del gobierno. A su vez, los recortes en el gasto federal agravaron los efectos de la recesión en el empleo, perjudicando a los trabajadores. Según la Encuesta Mensual Continua de Hogares del Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE), la tasa de desempleo para el trimestre que finalizó en noviembre de 2016 alcanzaba los 12,1 millones de trabajadores, frente a los 9,1 millones del año anterior. Al mismo tiempo, recrudeció la hostilidad de los sectores medios tradicionales, molestos por el encarecimiento del trabajo doméstico, la afluencia popular en centros comerciales y aeropuertos, y la competencia por empleos con un salario mayor que el salario mínimo.

En el momento en que las denuncias de corrupción alrededor de Petrobras comenzaron a monopolizar las noticias, la insatisfacción de esta clase media explotó en una ola de manifestaciones favorables al *impeachment* de Dilma, que tomaron las calles de las principales ciudades brasileñas en marzo y abril de 2015. Marcelo Badaró (2015) destaca la diferencia en la base social de los manifestantes en relación a junio de 2013. En lugar de los trabajadores que estudian, en las protestas de 2015, predominó la población adulta, de 30 a 50 años, blanca y que recibe más de cinco salarios mínimos. Los manifestantes de familias que ganan hasta tres salarios mínimos no pasaron del 20%. Además, las protestas contaron con apoyo mediático, fueron dirigidas y apoyadas por organizaciones con vínculos clasistas, algunas vinculadas a *think tanks* estadounidenses. Por lo tanto, hubo un giro y no una continuidad lineal entre los ciclos de manifestaciones de 2013 y 2015.

Sin embargo, existe al menos una relación importante entre las dos olas de protesta. Junio abrió una nueva coyuntura política, marcada por el vaciamiento del modo lulista de regulación del conflicto social. Para decirlo gráficamente: el PT emergió a la política en los años de 1980 poniendo al pueblo en las calles; se alzó con el poder en las décadas siguientes, sacando a la gente de las calles; las jornadas de junio evidenciaron que el partido no tenía más poder para poner ni sacar

a la gente de las calles, lo que puso en jaque su papel político a los ojos del orden. La crisis económica entonces estrechó el margen para la conciliación de clases, dando lugar a una actualización del régimen de acumulación. La versión petista de un neoliberalismo inclusivo daba paso al despojo social, mientras que la era de la conciliación se deslizaba hacia la guerra de clases. Aunque se inició en el gobierno de Dilma, esta inflexión se consumó con el proceso de *impeachment*.

b) Impeachment

En esta perspectiva, la destitución de Dilma Rousseff en 2016 no reflejó una disputa sustantiva sobre el proyecto de país, pero sí un realineamiento de fuerzas políticas y de estrategias de acumulación, en el contexto del agotamiento de la paz social lulista. Inicialmente, la estrategia de la derecha antipetista no contemplaba el golpe, y sí, como se decía abiertamente, "hacer sangrar al gobierno". Sin embargo, como sucede muchas veces en la historia, la política adquirió un dinamismo propio y los tiempos se aceleraron. Cuando el PT lanzó un candidato a la presidencia del Congreso, la base parlamentaria del gobierno se fisuró. Primero acusado de la operación Lava Jato, que investigaba la corrupción asociada a Petrobras, el diabólico presidente de la casa, Eduardo Cunha, pronto se convirtió en un enemigo implacable del Ejecutivo, instigando la conspiración provocada por su correligionario, el vicepresidente Michel Temer.

En abril de 2016, Dilma fue alejada de su cargo y cuando terminaron los Juegos Olímpicos en agosto, la destitución se consumó. El pretexto fueron las llamadas "pedaleadas fiscales", una práctica de posponer la transferencia de fondos públicos que serían distribuidos en programas gubernamentales como la Bolsa Familia, a los bancos públicos. Esto, con el objetivo de minimizar los desequilibrios en el presupuesto estatal. Para no retrasar los programas, los bancos recurren a recursos propios, que luego son reembolsados por la Unión. Según el parecer del Tribunal de Cuentas, esta práctica constituye un préstamo, lo que está prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Sin embargo, esta es una práctica corriente en la gestión pública brasileña, a la cual recurrieron los presidentes anteriores —FHC y Lula—, además de diecisiete gobernadores de la federación en ese mismo año. Por lo tanto, se configuró un juicio político encubierto como proceso judicial: un golpe de Estado operado por el parlamento, en complicidad con el Poder Judicial y los medios masivos.

Sin embargo, este golpe no estuvo motivado por contradicciones programáticas fundamentales. Amenazado por la conspiración, el gobierno acogía las agendas de la derecha, como la reforma de la seguridad social, el congelamiento de los gastos públicos y la desnacionalización del *pre-sal*. El proceso se circunscribió a una disputa en el seno de lo que Marx describió como el "partido del orden", contrario al protagonismo popular. En este tenor, el gobierno intentó negociar su salvación hasta el último momento con el propio Cunha, siempre en los términos viles de la política antirepublicana de negociación de intereses.

La pérdida de mando sobre la pequeña política —que el PT manejó exitosamente durante trece años— reflejó el agotamiento del modo lulista de regulación del conflicto social. Cuando el partido asumió la presidencia en 2003, su prestigio frente a los trabajadores fue fundamental para viabilizar la reforma de la seguridad social que FHC no había logrado hacer. En 2016, sin embargo, la militancia estaba pasiva, entre la dispersión y la resignación. Por otro lado, la reducción en el consumo de las familias, que se veía venir por primera vez desde 2004, sugería que la base popular del lulismo estaba en riesgo, mientras la recesión económica —caída de -3,8% del PIB en 2015 y de -3,5% en 2016— comprometía su base burguesa. La funcionalidad política del lulismo se agotó. El brazo derecho del orden retomaba la iniciativa y no tenía por qué ser complaciente con sus rivales. El arresto de Lula en abril de 2018, en un proceso marcadamente persecutorio y sin ninguna evidencia consistente de corrupción, fue una demostración cabal de esta ofensiva.

Reflexiones finales

Concebido en el pecado original de traición, el gobierno de Temer refleja el abandono de la estrategia conciliadora de la burguesía brasileña en nombre del enfrentamiento abierto con la clase trabajadora. La combinación entre el congelamiento del gasto público por veinte años, la reforma laboral y la proyectada reforma de pensiones apunta a una regresión de las condiciones de vida de los trabajadores al siglo XIX. Profundamente antipopular, este proceso estuvo acompañado por la agudización de la represión y de la criminalización de la lucha social; por ataques contra la organización sindical y el derecho a la huelga; por el avance de la ley de "escuela sin partido" en muchos municipios; y por la reforma de la escuela secundaria; entre otras medidas destinadas a reprimir la insurgencia de los sectores populares, particularmente de los más jóvenes. Es el réquiem de la "Nueva República", fundada en la "Constitución Ciudadana".

Sin embargo, a diferencia del golpe militar de 1964, este ataque no refleja un punto de inflexión en sentido de la historia brasileña. Por el contrario, apunta a una aceleración en el ritmo y en el tiempo de la política imperante. Por ejemplo: la enmienda constitucional que congela el gasto público durante veinte años radicalizó la lógica del ajuste estructural practicada por las gestiones petistas. Un mes antes de ser alejada, Dilma había sorprendido a los servidores públicos con el proyecto de ley 257, de alcance más modesto, pero de racionalidad similar. El cambio en el régimen de explotación de petróleo en la capa *pre-sal*, profundizada por Temer, también había sido iniciado por el gobierno depuesto, mientras la persecución popular en curso se ampara en la ley antiterrorista sancionada por la presidenta en vísperas de su destitución. Las continuidades se resumen en la figura de Henrique Meirelles: el ministro de Hacienda del gobierno golpista comandó al Banco Central durante los dos mandatos de Lula, entre 2003 y 2010 atendiendo la invitación del presidente obrero se desafilió del PSDB, por el cual había sido elegido diputado federal por el Estado de Goiás.

Desde este punto de vista, el gobierno de Temer puede verse como una metástasis de las administraciones petistas, toda vez que los intereses antipopulares, que el PT en el poder jamás enfrentó, ahora se difunden sin impedimentos. Del mismo modo, los profesionales corruptos que afianzaron la gobernabilidad petista dejaron de ser coadyuvantes, asumiendo el mando del Estado.

En resumen, el agotamiento del lulismo extinguió las mediaciones entre las aspiraciones depredadoras de la burguesía brasileña y los derechos y anhelos de los trabajadores. Sin embargo, al destituir al PT y encarcelar a Lula —en una especie de golpe preventivo, dado su gran favoritismo en la disputa presidencial de 2018— los de arriba mostraron una autoconfianza que podría costarles caro en el futuro, ya que sortean su principal carta bajo la manga para torear a las masas, por ahora adormecidas.

Este asalto a las instituciones del país y a los derechos de los trabajadores plantea la pregunta: ¿por qué el campo popular no reaccionó a la altura de los acontecimientos? Este problema requiere examinar brevemente el legado del lulismo a nivel de movilización popular y la política petista después del golpe.

Antes que nada, es necesario decir que el PT en el poder contribuyó a confundir, apaciguar y alienar al campo popular. Al implementar un programa de la derecha, pero presentándose como izquierda, el petismo ayudó a confundir las percepciones populares. La indiferenciación entre izquierda y derecha alimentó la apatía, una modalidad de despolitización. Sin embargo, al preservar su identificación con la izquierda, el partido profundizó la desconfianza sobre la política en general —y la izquierda en particular—. Bajo este prisma se comprenden los altísimos índices de abstención en las elecciones municipales de octubre de 2016 que, sumados a los votos nulos y blancos que superaron el voto del candidato elegido, en las dos ciudades más grandes del país[11].

11 En el caso de São Paulo, el único candidato que no estaba asociado con la política profesional superó a tres exalcaldes elegidos por el PT en la primera vuelta —incluido el que buscaba la reelección—. En Río de Janeiro, un exministro del gobierno de Dilma y obispo

El otro lado de la política que incorporó el PT al orden fue distanciarlo de sus bases populares. Como vimos, en vez de desatender a las organizaciones que históricamente lo apoyaron, las administraciones petistas buscaron involucrarlas en la gestión pública, pero no para satisfacer sus demandas históricas sino para neutralizarlas. Evidentemente esta es una vía de doble sentido: sectores organizados de los trabajadores brasileños se identificaron con esta política, ya sea por creer en los posibles avances o por los beneficios materiales y simbólicos que obtuvieron en el proceso.

La disyuntiva entre ser un socio minoritario del poder u oponerse a él ocasionó fracturas en el movimiento sindical y en las organizaciones populares. La defensa de un gobierno antipopular, pero identificado con la izquierda, generó situaciones ambiguas para la militancia en todos los niveles. En el límite, las contradicciones distanciaron a las organizaciones y a las bases. Solamente los más comprometidos política o emocionalmente con el PT fueron capaces de hacer la vista gorda a lo que estaba sucediendo. Aunque estas tensiones no convergieron en una oposición de izquierda, la desilusión reforzó el apaciguamiento y la fragmentación.

Finalmente, la política petista contribuyó a alienar al pueblo en lugar de politizarlo, porque promovió el consumo popular como una solución a los problemas sociales —una vía individual y no colectiva que mercantiliza derechos como la salud, la educación y la seguridad social—. En lugar de fomentar respuestas de clase para los problemas brasileños, el partido en la presidencia cultivó variantes de la ideología y de la práctica liberal: políticas focalizadas, conciliación de clases e inclusión por el consumo.

Bajo el prisma de la confusión, de la domesticación y de la alienación que se entiende la tibia reacción popular a los eventos críticos recientes: el *impeachment*, el ataque antipopular dirigido por Temer

de la Iglesia Universal derrotó, en la segunda vuelta, a un candidato de izquierda incluso en las periferias, señalando el encantamiento de la fe como sustituto del desencanto con la política.

y el arresto de Lula. A lo largo de ese tiempo la posición petista fue ambigua, toda vez que la convocatoria popular estuvo subordinada a los cálculos electorales, proyectando el retorno de su máximo líder. En este contexto, es difícil decir si el partido no recurrió a las masas por temor a abrir una caja de Pandora, o porque pensó que se llevaría un fiasco. El hecho es que, en el momento en que el expresidente fue llevado a prisión, su eterno liderazgo en las encuestas presidenciales no se convirtió en solidaridad en las calles.

Entre el golpe de agosto de 2016 y el arresto de Lula, en abril de 2018, se frustró cualquier expectativa de autocrítica petista. Por el contrario, la brecha entre la indignación de base y la práctica del partido continuó siendo abismal. Dos meses después del juicio político, el PT se asoció con partidos de base golpista en unas 1.500 candidaturas a Prefecto en todo el Brasil, en muchos casos con el PSDB y el DEM, sus antípodas en el Congreso[12]. El sindicalista y exministro Luiz Marinho justificó tales aproximaciones con el argumento de que "la mayoría del pueblo también apoyó el *impeachment* y queremos recuperar a la mayoría del pueblo", mientras que Lula hablaba de "perdonar a los golpistas que hicieron esa desgracia en el país". En las elecciones municipales, los candidatos del partido evitaron tocar el *impeachment*, como el entonces prefecto de São Paulo, Fernando Haddad, que consideró la palabra "golpe" un "poco dura". La timidez incidió en las protestas populares. En las huelgas generales del año siguiente, muchos gritaron "fuera Temer", pero se evitó la crítica a la dictadura del ajuste estructural, con el cual un Lula reelegido nunca rompería.

Entre la izquierda, la noción de que era necesario atraer el petismo limitó el alcance de la crítica, aspirando a un frente con aquellos que durante trece años hicieron un frente con el capital. En términos generales, este es el dilema que enfrentaba la izquierda en las elecciones presidenciales de 2018, que tiene su principal expresión política

12 Democratas (DEM) es un grupo descendiente directo del Partido Democrático Social (PDS), principal partido de la dictadura.

en el Partido Socialismo y Libertad (PSOL). Una candidatura de frente amplio que se arriesga a un petismo moralizado, o la superación de este horizonte político en nombre de un proyecto revolucionario, que puede tener poca resonancia inmediata. En la disputa interna, la candidatura del líder sin-techo Guilherme Boulos señaló el primer camino, mientras que el otro polo fue encarnado por el derrotado economista Plínio de Arruda Sampaio Jr.

Así se reeditó el dilema de la izquierda que lucha por liberarse de la lámpara mágica del lulismo. En el año 2016, el desafío fue oponerse al *impeachment* sin respaldar al gobierno de Dilma; en 2017, construir un "fuera Temer" que no fuese un "vuelve PT"; en las elecciones de 2018, una campaña que no haga de la liberación de Lula su eje, aunque condene esta injusticia. En resumen, la izquierda brasileña todavía tiene cuentas que saldar con el PT, premisa necesaria para una política que la supere. Mientras tanto, el país se sumerge en la ola reaccionaria que caracteriza la política mundial.

Bibliografía

ARANTES, PEDRO

2014 "Da (anti) reforma urbana brasileira a um novo ciclo de lutas nas cidades", en Plínio de Arruda Sampaio Jr. (comp.), *Jornadas de junho: a revolta popular em debate*. São Paulo: Instituto Caio Prado Jr.

BADARÓ MATTOS, MARCELO

2015 "Junho e nós: das jornadas de 2013 ao quadro atual", en *Junho Blog*, 2 de julio de 2015. Disponible en: http://blogjunho.com.br/junho-e-nos-das-jornadas-de-2013-ao-quadro-atual/.

BONOMO, MARCO; RICARDO BRITO Y BRUNO MARTINS

2014 *Macroeconomic and Financial Consequences of the After Crisis Government-Driven Credit Expansion in Brazil*. Working paper 378. Rio de Janeiro: Banco Central do Brasil.

BRAGA, RUY

2015 "Contornos do pós-lulismo", en *Cult*, núm. 206, octubre, pp. 46-49.

2014a "Precariado e sindicalismo no Brasil contemporâneo: Um olhar a partir da indústria do *call center*", en *Revista Crítica de Ciências Sociais*, núm. 103, mayo, pp. 25-52. Disponible en: http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2182-74352014000100003&lng=pt&nrm=iso. Acceso 15 de julio de 2016.

2014b "As jornadas de junho no Brasil: crônica de um mês inesquecível", en Plínio de Arruda Sampaio Jr. (comp.), *Jornadas de junho: a revolta popular em debate*. São Paulo: Instituto Caio Prado Jr.

CARNEIRO, RICARDO DE MEDEIROS
2008 "Impasses do desenvolvimento brasileiro: a questão produtiva". Texto para discussão, IE/UNICAMP, núm. 153, noviembre.

CERVO, AMADO LUIZ
2003 "Política exterior e relações internacionais do Brasil: enfoque paradigmático", en *Revista Brasileira de Política Internacional*, vol. 46, núm. 2, julio-diciembre, pp. 5-25.

COUTINHO, CARLOS NELSON
1984 *A democracia como valor universal e outros ensaios*. São Paulo: Salamandra.

DIEESE
2016 "Salário mínimo nominal e necessário". Disponible en: http://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html.

ESPOSITO, MAURÍCIO
2017 "Desindustrialização do Brasil: uma análise a partir da perspectiva da formação nacional", en *Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política*, núm. 46, pp. 77-104.

FATTORELLI, MARIA LUCIA Y RODRIGO ÁVILA
2015 "Gastos com a dívida pública em 2014 superam 45% do orçamento federal executado", en *Auditoria Cidadã da Dívida*, 5 de febrero de 2015. Disponible en: http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2015/02/24/gastos-com-a-divida-publica-em-2014-superaram-45-do-orcamento-federal-executado/.

FIORI, JOSÉ LUÍS
2011 "A miséria do 'novo desenvolvimentismo'", en *Carta Maior*, 30 de noviembre de 2011. Disponible en: https://www.cartamaior.com.br/?/Coluna/A-miseria-do-novo-desenvolvimentismo-/20887.

GARCÍA, ANA E. SAGGIORO
2012 *Internacionalização de empresas brasileiras durante o governo Lula: uma análise crítica da relação entre capital e Estado no Brasil contemporâneo* (Tesis de doctorado). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

HILSENBECK, ALEX

2013 *O MST no fio da navalha: dilemas, desafios e potencialidades da luta de clases* (Tesis de doctorado). Universidade Estadual de Campinas, Campinas.

KREIN, JOSÉ DARI; MARCELO MANZANO Y ANSELMO LUIS DOS SANTOS

2015 "A recente política de valorização do salário mínimo no Brasil". En prensa.

LAVAL, CHRISTIAN Y PIERRE DARDOT

2016 *A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal*. São Paulo: Boitempo.

LOUREIRO, ISABEL Y ANDRÉ SINGER

2016 *As contradições do lulismo: a que ponto chegamos?* São Paulo: Boitempo.

MACHADO, FERNANDO D'ANGELO Y PLÍNIO DE ARRUDA SAMPAIO JR.

2012 "Capital internacional e vulnerabilidade externa", en *Jornal dos economistas*, núm. 275, junio, pp. 11-12.

MERCADANTE, ALOÍSIO

2010 *As bases do novo desenvolvimentismo: análise do governo Lula* (Tesis de doctorado). Universidade Estadual de Campinas, Campinas.

NEWSWEEK

2009 "Brazil's Lula: The Most Popular Politician on Earth", en *Newsweek*, 21 de septiembre de 2009. Disponible en: https://www.newsweek.com/ brazils-lula-most-popular-politician-earth-79355.

OLIVEIRA, ARIOVALDO UMBELINO DE

2010 "A questão agrária no Brasil: não reforma e contrarreforma agrária no governo Lula", en João Paulo de Almeida Magalhães *et al.*, *Os anos Lula: contribuições para um balanço crítico, 2003-2010*. Rio de Janeiro: Garamond, pp. 287-328.

OLIVEIRA, FRANCISCO DE

2003 Crítica à razão dualista. *O ornitorrinco*. São Paulo: Boitempo.

PAULANI, LEDA
2008 *Brasil Delivery*. São Paulo: Boitempo.

POCHMANN, MARCIO
2012 *Nova classe média? O trabalho na base da pirâmide social brasileira*. São Paulo: Boitempo.

RODRIGUES, EDUARDO
2009 "Brasil faz obras nos vizinhos temendo a China", en *Folha de S. Paulo*, 27 de septiembre de 2009. Disponible en: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2709200910.htm.

SAMPAIO JR., PLÍNIO DE ARRUDA
2012 "Desenvolvimentismo e neodesenvolvimentismo: tragédia e farsa", en *Serviço Social & Sociedade*, núm. 112, octubre-diciembre, pp.672-688. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-66282012000400004&lng=en&nrm=iso.

SICSÚ, JOÃO; LUIZ FERNANDO PAULA Y RENAUT MICHEL
2005 *Novo-desenvolvimentismo: um projeto nacional de crescimento com equidade social*. São Paulo: Manole y Fundação Konrad Adenauer.

SINGER, ANDRÉ
2012 *Os sentidos do lulismo*. São Paulo: Cia. das Letras.

SOUZA, JOSIAS DE
2013 "Ibope: 75% dos brasileiros apoiam os protestos", en UOL, 22 de junio de 2013. Disponible en: http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2013/06/22/ibope-75-dos-brasileiros-apoiam-os-protestos/.

TAUTZ, CARLOS; FELIPE SISTON, JOÃO ROBERTO LOPES PINTO Y LUCIANA BADIN
2010 "O BNDES e a reorganização do capitalismo brasileiro: um debate necessário", en João Paulo de Almeida Magalhães *et al.*, *Os anos Lula: contribuições para um balanço crítico, 2003-2010*. Rio de Janeiro: Garamond, pp. 249-286.

UNIDO
2011 *Industrial and Development Report 2011*. Viena: Unido.

ZAGNI, RODRIGO MEDINA

2016 "Carta aos calouros ou bem-vindo à pátria educadora", en *Boletim Adunifesp*. Disponible en: http://www.aduni-fesp.org.br/artigo/carta-aos-calouros-ou-bem-vindos-patria-educadora-por-rodrigo-medina-zagni.

Post-scriptum: La elección de Bolsonaro (23 de enero de 2019)

Ese grupo, si quisiera quedarse aquí, va a tener que colocarse bajo la ley de todos nosotros. O se van afuera o van a la cárcel. ¡Esos marginales rojos serán desterrados de nuestra patria!

Jair Bolsonaro, 2018

Ahí llega un sujeto completamente tosco, grosero y consigue el voto como Lula lo consiguió. La élite brasileña, en vez de entender y hablar así, bueno, nosotros tenemos la oportunidad de cambiar la política brasileña para mejor […] ¡Amansa al tipo! […] [Bolsonaro], ya es otro animal.

Paulo Guedes, ministro de Economía del gobierno de Bolsonaro, 2018

Las páginas anteriores permiten comprender que la elección a la presidencia del excapitán Jair Messias Bolsonaro, en octubre de 2018, no salió de la nada. No obstante, el escenario que se configuró en las elecciones fue sorprendente: a pesar del golpe y de la prisión de Lula, el PT fue a la segunda vuelta y se enfrentó a una temible cría de la dictadura. ¿Cómo explicar esta situación? ¿Qué estuvo en disputa? ¿Cómo triunfó la candidatura de Bolsonaro? ¿Por qué no se proyectó un frente democrático de oposición? ¿Cuál fue la estrategia petista y la posición de la izquierda? Y finalmente, ¿qué esperar de este gobierno?

¿Qué estaba en juego en las elecciones?

Para la burguesía brasileña, la economía no estuvo en disputa en las elecciones: el vencedor enfrentaría los problemas del neoliberalismo con más neoliberalismo. Sea por la vía utópica de un "neoliberalismo inclusivo", pregonado por el PT, sea por el ultraneoliberalismo

de los tucanos o de Paulo Guedes, el encargado de la economía bajo Bolsonaro. Lo que la burguesía disputa es la forma política de gestión de la crisis brasileña, o sea, la cara que tendrá el arreglo institucional, jurídico y cultural que substituirá a la Nueva República definitivamente condenada.

En la segunda vuelta, dos vías se proponían. Según sus propias palabras, Lula ofrecía credibilidad y estabilidad. En la larga entrevista que concedió poco antes de su arresto, le preguntaron cuál sería su prioridad en caso de ganar las elecciones: "Alguien que hoy fuera elegido presidente de la república para gobernar este país, debe tener algunos compromisos que no sean económicos. Primero es necesario recuperar la credibilidad de las instituciones y dar estabilidad a la democracia. El Congreso Nacional tiene que recuperar credibilidad [...] Es necesario conquistar esa credibilidad primero".

Pero Lula y el PT ya no gozan de gran credibilidad entre los dueños del poder. Por lo tanto, Lula estaba hablando de credibilidad junto al pueblo: "Hay un componente que es la base central del éxito en la economía: tú tienes que tener una persona con credibilidad a los ojos de la sociedad y que, con esa credibilidad, *aquello que ella hable pueda ser aceptado por la sociedad*" (Lula da Silva, 2018, énfasis del autor). Se debe recordar la reforma de pensiones que Fernando Henrique Cardoso (FHC) no logró aprobar, pero que, con su credibilidad, Lula concretó.

En otras palabras, el lulismo ofrecía su capacidad de convencimiento y neutralización del descontento popular como vía del orden. Si Dilma Rousseff fue la sombra de Lula, Fernando Haddad se proyectó como el avatar de esta política.

En el polo opuesto complementario estaba Bolsonaro. ¿Cómo entenderlo? Bolsonaro es la respuesta aterradora de una sociedad asustada. Quien está sin trabajo tiene miedo al hambre y quien trabaja tiene miedo al desempleo. Todos tienen miedo de la violencia y también miedo a la policía. En un contexto de desprestigio de las formas colectivas de lucha, Bolsonaro promete el orden a través de

la brutalidad, así como Trump en los Estados Unidos, Erdogan en Turquía, Modi en la India, el uribismo en Colombia o el fascismo en Italia —entonces todos en el poder—. Bolsonaro no está solo: es una tendencia, no una aberración.

En síntesis, se vislumbraban vías distintas para gestionar la colosal crisis brasileña: el PT ofreciendo el orden en el diálogo, mientras Bolsonaro proponía el orden a golpes.

¿Cuál es la movida de la clase dominante?

Ninguno de los dos eran candidatos del capital, que presentó tres nombres propios en la elección: Geraldo Alckmin, entonces gobernador de São Paulo, que salió nuevamente por el Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB); Henrique Meirelles, que asumió la ingrata candidatura del Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido de Temer y João Amoedo, representando un nuevo partido de brasileños ricos, que adoptó ese mismo nombre: Partido Nuevo. Sin embargo, entre los tres, sumados, no alcanzaron una décima parte de los votos en la primera vuelta. Ante la imposibilidad de Alckmin, Meirelles o Amoedo, ¿cuál vía sería preferible para el capital?

Si venciese Haddad, sería un problema gobernar. El dilema del poder sería como enroscar de nuevo la serpiente del antipetismo. ¿Cómo convencer a aquellos que se embarcaron en el afán del *impeachment* y del arresto de Lula, a aceptar que todo eso desembocaría en Haddad? Venciendo Bolsonaro, habría problema para los gobernados. Su base entre los poderosos es frágil, su rechazo popular es alto y su carácter impredecible. La cuestión es: ¿Quién disciplinará al disciplinador? En síntesis, tanto Haddad como Bolsonaro surgieron como respuestas provisionales y necesariamente inestables de una burguesía que se reorganiza. Ninguno de los dos amenaza sus intereses de clase, pero tampoco tiene la confianza incondicional de aquellos que siempre prefieren tener en la presidencia a uno de los suyos.

Pero más allá de lo inmediato, el sentido del movimiento burgués va en la dirección de Bolsonaro, pues el fin de la Nueva República también compromete a los tucanos. Es eso lo que explica el Partido Nuevo, expresión de una burguesía que intuye que los nuevos tiempos exigen nuevas respuestas: es Bolsonaro que aún no salió del armario. Porque lo que la clase dominante idealiza es un bolsonarismo sin Bolsonaro. En Francia, Marine Le Pen se queja de aquellos que se unieron para derrotarla en la segunda vuelta. Porque después de todo eligieron a alguien que implemente sus políticas, pero sin alardear, reclama una inconforme Le Pen.

Bajo la polvareda de las elecciones, la burguesía brasileña forja a su Macron[1]. El cruce de Bolsonaro y Amoedo puede ser João Dória. En su meteórica trayectoria política, el millonario presentador de televisión dividió el PSDB para postularse a la prefectura de São Paulo en 2016, cuando derrotó a tres exprefectos petistas todavía en la primera vuelta. Para elegirse gobernador en 2018, se adhirió a Bolsonaro, reproduciendo de forma sincera la retórica y las tácticas de esa campaña —lo que, por cierto, hicieron candidatos en todo el centro sur del país—. Pero también puede ser Sergio Moro, que después de comandar el arresto de Lula, en medio de una inédita espectacularización de la justicia que convirtió a los magistrados en estrellas mediáticas, renunció a la magistratura para asumir el Ministerio de Justicia en el gobierno de Bolsonaro, con la función principal de confundir la lucha contra la corrupción con anticomunismo.

Lo cierto es que, entre la derrota del lulismo, que se configuró en la rebelión de junio de 2013, y un bolsonarismo confiable, la burguesía brasileña se rediseña. Ese reordenamiento se expresó en la

1 En entrevista al canal France 2, el 11 de octubre de 2018, Marine Le Pen fue obligada a distanciarse de Bolsonaro. Cuestionada sobre las declaraciones del candidato brasileño diciendo que prefere um hijo muerto que un homosexual o que el embarazo es una carga para los empleadores, Le Pen cuestionó la lectura de que Bolsonaro es alguien de la derecha y declaró que el militar sostiene "propuestas eminentemente desagradables". Su padre Jean-Marie Le Pen celebró el triunfo de Bolsonaro en Twitter. En los Estados Unidos, Francis Fukuyama describió a Bolsonaro como una "amenaza a la democracia".

dispersión de candidatos a la presidencia en 2018. La última vez que eso sucedió fue en 1989[2]. En esa ocasión, el PT también se enfrentó, en la segunda vuelta, a un político común pintado como un *outsider,* Fernando Collor de Mello —que después de vencer a Lula por un estrecho margen de votos, sufriría un *impeachment* en 1992—. Desde entonces, el PT y el PSDB polarizaron todas las elecciones. Como en 1989, cuando comenzaba la Nueva República, la burguesía busca un camino, pero ahora para enterrarla.

En este contexto, los tucanos hicieron su autocrítica: hubiera sido mejor dejar "desangrar" a Dilma, que conspirar por el golpe y concertar con Temer. Fueron con mucha sed al vaso y ahora están condenados a la paciencia. Pasado el tren de la presidencia, la burguesía y los tucanos esperan que Bolsonaro, así como Temer, les abra a hierro y fuego nuevas fronteras de negocio y de control social, con la expectativa de fundar, sobre esta tierra destruida, un nuevo orden a su semejanza[3].

Mientras tanto, el futuro bajo Bolsonaro es imponderable. Muchos lo apoyaron para deshacerse del PT, pero ahora ¿quién librará al Brasil del excapitán? La Democracia Cristiana apoyó el golpe de Augusto Pinochet contra Salvador Allende en Chile, en 1973, creyendo que en seguida volverían a la presidencia —lo que de hecho ocurrió, solo que 17 años después.

La candidatura Bolsonaro

Al igual que otros brasileños de origen modesto, Bolsonaro ingresó al ejército en busca de ascenso social. En 1986, a los 31 años, firmó un artículo en la revista *Veja* reclamando mejores salarios para

2 En las elecciones de 1989 se presentaron 22 candidatos, cinco de los cuales considerados competitivos. Collor de Mello venció a Lula por un estrecho margen en la segunda vuelta. En diciembre de 1992, Collor fue destituido por un proceso de *impeachment* en medio de acusaciones de corrupción.

3 Como dijo el antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, a propósito del incendio que consumió el Museo Nacional de Rio de Janeiro en septiembre de 2018, principal acervo histórico del país, en Brasil "gobernar es crear desiertos".

los militares, y se volvió fuente del semanario dentro de la institución. Sin embargo, al año siguiente mostró a una periodista planes para explotar bombas destinadas a socavar la credibilidad del ministro del Ejército Leonidas Pires —pero sin causar víctimas— aclaró.

Eran los primeros años después del fin de la dictadura. Además de la cuestión salarial, era evidente la frustración entre los jóvenes militares con la disminución de su poder. La revista divulgó el plan, Bolsonaro declaró de su propio puño que *Veja* mentía y Leonidas Pires lo defendió. Entonces la revista publicó pruebas, incluyendo el croquis del propio Bolsonaro mapeando las explosiones[4]. El capitán fue investigado, estuvo preso algunos días y, al final del episodio fue trasladado a la reserva. Gracias a la fama que tuvo entre los suyos, se eligió concejal en Río de Janeiro y luego diputado federal, cargo que ocupó desde 1990.

Después de siete mandatos como parlamentario en Brasilia a lo largo de 28 años, pasando por nueve partidos diferentes, Bolsonaro se mostraba cansado de la política. En la intimidad se decía estar listo para retirarse. Pero primero, disputaría la elección presidencial para dar fuerza a los tres hijos que se candidateaban —todos ahora elegidos—. Inicialmente nadie esperaba la victoria de Bolsonaro, ni él mismo.

El candidato del Partido Social Liberal (PSL) tuvo dificultades para conseguir un vice[5]. Hay quienes dicen que el general Hamilton Mourão[6], que finalmente se impuso como compañero de partido de Bolsonaro, fue parte del acuerdo para garantizar el apoyo del ejército a

4 Los reportajes de la revista, que años más tarde se convertiría en un bastión reaccionario en el país, pueden ser vistas en "ReVeja Jair Bolsonaro: explosivo desde 1986", en *Veja*, 22 de junio de 2018. Disponible en: https://veja.abril.com.br/blog/reveja/reveja-jair-bolsonaro-explosivo-desde-1986/. Acceso 18 de enero de 2019.

5 El general Augusto Heleno, el senador evangélico Magno Malta, la abogada Janaína Pascoal —coautora de la acción del *impeachment* de Dilma— y el príncipe heredero de la "familia real brasileña", Luiz Philippe de Orleans y Bragança, están entre los que rechazaron la invitación.

6 El diputado Eduardo Bolsonaro explicó la elección del vicepresidente: "Tiene que ser alguien [por quien] no valga la pena ir tras un *impeachment*". O sea, la posibilidad de que Mourão asuma la presidencia desalentaría la maniobra, como aclaró el propio general.

la candidatura del excapitán —un apoyo que literalmente le da fuerza para gobernar, pero que no trae votos—. Para obtener el apoyo del capital, o al menos su bendición, Bolsonaro buscó otra mano para besar. Y tampoco fue fácil encontrarla.

Durante meses, el candidato simplemente despreciaba las preguntas sobre economía, lo que generaba simpatía entre el electorado cautivado por su franqueza. Sin embargo, en la medida en que su candidatura se mostraba competitiva, quedó claro que necesitaría refuerzo en este campo. Fue entonces cuando buscó a Paulo Guedes.

El hombre que se convertiría en ministro de Economía de Bolsonaro se doctoró en Chicago en la década de 1970. De vuelta al Brasil, no logró una carrera universitaria, acumulando rencores y resentimientos en el proceso. De allí en adelante criticó todos los planes económicos aplicados en el país, varios de ellos concebidos por sus excolegas de la Pontifícia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-RJ). Guedes resume su sesgo político-económico así: "La 'derecha' hegemónica gobernó por dos décadas y la 'izquierda' hegemónica por tres, ambas con un modelo económico dirigista, desastroso para el desarrollo social y político del país" (Guedes, 2017).

Después de enfrentarse a las puertas cerradas en Brasil, el economista encontró trabajo en la Universidad de Chile. El país se encontraba bajo la dictadura de Pinochet, y la institución era dirigida por un militar. Es en la realidad chilena de aquella época que Paulo Guedes se inspira para la liberalización económica radical que pretende impulsar en el Brasil. La apertura indiscriminada del mercado, la privatización de "todas las estatales", la financiarización completa del sistema de seguridad social y la mercantilización de la educación en todos los niveles, bajo el amparo del sistema de *vouchers* de descuento, son algunas de sus referencias chilenas.

Inicialmente, Bolsonaro se mostró reticente con esa agenda. Su formación militar asocia Estado con la seguridad nacional. Como diputado, votó contra el fin del monopolio estatal del petróleo y de las telecomunicaciones, contra el techo salarial para los servidores

públicos, contra varias privatizaciones e intentos de reformar la seguridad social. Es cierto que sus posiciones a menudo resultaron de negociaciones corporativas: el entonces diputado, por ejemplo, votó en contra del Plan Real porque el gobierno se negó a ajustar el salario de los militares de esa época.

Paulo Guedes tampoco se casó con Bolsonaro de inmediato. Después de Chile, el economista hizo dinero en el mercado financiero, donde también circuló como expositor y consultor. Irónicamente, fue una invitación de la presidenta Dilma para conversar en Brasilia, en momentos en que ella despedía al ministro de Hacienda, Joaquim Levy, que se le encendió una luz: su hora política había llegado. Cuando su hija, que trabaja en procesamiento de datos y selección de personal, hizo algunos cruces de información en internet y lo convenció de que el próximo presidente sería un *outsider* con fuerte presencia en redes sociales, el economista buscó al presentador de televisión Luciano Huck para ofrecer sus servicios (Gaspar, 2018).

Guedes solo cerró con Bolsonaro cuando Huck desistió de la candidatura. Desde entonces, el capitán dejó de lado cualquier capricho nacionalista. Dos meses antes de las elecciones, apareció en el programa *Roda-Viva* de la TV Cultura, una de las pocas entrevistas genuinas a las que se sometió. De entrada le preguntaron cómo esperaba que su eventual gobierno fuera recordado en el futuro. Inicialmente respondió generalidades anti-izquierdistas y anti-corrupción. Pero cuando el entrevistador insistió, afirmó: "Que nuestra economía realmente fuese liberal. Ese es nuestro sueño".

Es irrelevante saber si el excapitán fue convencido por Guedes o no; o si el acuerdo será duradero, toda vez que ambos tienen fama de irascibles. El servicio que el economista le prestó fue otro: el de garante del militar frente al mercado. Como dijo un gerente financiero en esa época: "muchos empresarios querían votar por él, pero tenían recelo o vergüenza. Paulo Guedes dio la disculpa que la gente necesitaba" (Gaspar, 2018).

Las propuestas concretas del economista de Chicago son secundarias frente al mensaje dejado por el candidato durante la elección:

Bolsonaro dejará la economía en las manos del capital. Cuando el capitán reenvió todas las preguntas sobre economía a Guedes durante la campaña, entrelíneas decía que no iba a aburrirlos con ideas propias, que probablemente ni él tiene. Guedes fue la "carta a los brasileños" de Bolsonaro.

La campaña del mito

Si Mourão aseguró el apoyo militar, Guedes garantizó el beneplácito del mercado. Pero nada de esto trae voto. ¿Cómo explicar el triunfo electoral de Bolsonaro?

No hay novedad en la adhesión de los de arriba a su candidatura. Aunque grosera y vulgar, la violencia que la encarna es, en primer lugar, violencia de clase. El propio Guedes explicó el razonamiento de los ricos cuando justificó su adhesión: "todo el mundo trabajó allí para Aécio, ladrón, marihuanero. Trabajó para Temer, ladrón. Trabajó para Sarney, ladrón y deshonesto que manipuló a todo el Brasil. Luego llega un sujeto completamente tosco, grosero y obtiene un voto como lo hizo Lula. La élite brasileña, en vez de entender y hablar así: bueno, nosotros tenemos la oportunidad de cambiar la política brasileña para mejor […], ¡Amansa al tipo!". Preguntando si era posible amansar a Bolsonaro, dijo: "Creo que sí, ya es otro animal" (Gaspar, 2018). Domesticar a la fiera en favor de sus intereses de clase, esa es la apuesta de los de arriba.

El drama es la adhesión popular. En ausencia del líder carismático, el subproletariado que sustentó el lulismo tendió hacia Bolsonaro, excepto en el Noreste. Todo brasileño conoce a quién ya votó por Lula y ahora eligió al capitán. Lula estaba preso, pero quien votó no lo estaba. ¿Qué sucedió?

Descartando la hipótesis de que todos los que votaron por él son fascistas o fueron manipulados contra el PT, este movimiento sugiere la incómoda hipótesis de que el bolsonarismo es lo opuesto al lulismo —su lado B—, y no su contrario.

Es cierto que el antipetismo envenenó el debate, pero diversos candidatos sostuvieron esta bandera. Bolsonaro, hombre de la vieja política, se vendió como el nuevo. El secreto puede haber sido la forma, no el contenido: el excapitán maneja el lenguaje de la brutalidad, que un pueblo brutalizado conoce y entiende. De un modo perverso, él habla con el pueblo, como Lula. En el proceso se diferenció de los candidatos "hijos de papá" y de los candidatos de siempre.

Si Lula aparecía como un mesías, Bolsonaro se convirtió en un mito. Principalmente entre los jóvenes. Investigando las motivaciones de la adhesión de los jóvenes de la periferia a Bolsonaro, Esther Solano cuenta que, para iniciar una conversación, reprodujo un video con algunas declaraciones atroces del candidato. Los jóvenes ríen y aplauden. ¿Por qué? "Porque es genial, porque es un mito, porque es divertido, porque dice lo que piensa y no le importa". Solano concluye: "Con más de cinco millones de seguidores en Facebook, el hecho es que Bolsonaro representa una derecha que se comunica con los jóvenes, una derecha que algunos jóvenes identifican como rebelde, como contrapeso al sistema, como una propuesta diferente" (Solano: 2018: 22).

La constatación que se impone es que la candidatura de Bolsonaro pervirtió la rebeldía. Más allá de los votos reaccionarios, que no fueron pocos, muchos otros tuvieron un tenor de protesta —especialmente entre los jóvenes, para quienes el PT desde 2003 es el orden—. Se trata de una doble perversión: porque vendió el conservadurismo por cambio, pero también porque fue una candidatura identificada con la disciplina y el orden, invirtiendo el sentido común de la rebeldía, que es la insubordinación y la ruptura del orden. En este sentido, existe una afinidad con el fascismo.

Este voto "de protesta" podría ser motivo de aliento para la izquierda —una señal de que la rebeldía— aunque pervertida, aún late en los corazones populares. Sin embargo, la resonancia de un mensaje que agrede a la izquierda, a la mujer, a los negros, a los homosexuales y elogia la dictadura, la tortura, las armas y la violencia

en general, transmitida principalmente por medio de *memes*, videos cortos y mensajes de celular, apunta a una preocupante "banalización del odio". Atrocidades son dichas en un lenguaje lúdico, colorido y joven, al contrario de la derecha, seria y mal humorada[7].

Ese es uno de los elementos que explica un fenómeno sorprendente, palpable en la segunda vuelta de las elecciones: al contrario de lo esperado, votar por Bolsonaro se volvió "modita", mientras que el voto por Haddad raramente era motivo de orgullo, excepto entre los más politizados. Aunque muchas personas rechazaran la violencia del militar y tuvieran consciencia del engaño que encarnaba, es necesario constatar que el antipetismo se impuso como un valor.

Eso explica los obstáculos para conformar un frente republicano a la francesa en la segunda vuelta: más allá de los errores de la campaña petista y del oportunismo de los políticos comunes[8], el ciudadano promedio tenía más vergüenza de votar por el PT que por Bolsonaro. La identificación entre el PT y la corrupción, repetida en los últimos años por los medios de comunicación, fue el otro lado de la banalización del odio. A los ojos de muchos, los corruptos parecían más detestables que aquellos que matan.

¡Aún más sorprendente que esa inversión de valores fue constatar que, después de la gigantesca manifestación liderada por mujeres, dos semanas antes de la primera vuelta, con el lema "Él no"!, Bolsonaro creció en todo el Brasil. En ese momento, para quien participó en la que fue una de las manifestaciones masivas más conmovedoras desde el fin de la dictadura, parecía seguro que él no pasaría. Fue en ese momento que se intensificó el uso criminal de las redes sociales por

7 En la recta final de la elección, una empresa lanzó un videojuego "Bolsomito2K18", donde el personaje del excapitán gana puntos al matar personas pertenecientes a minorías e integrantes de movimentos sociales.

8 Candidato por el PDT del difunto nacionalista Leonel Brizola, muchos vieron en Ciro Gomes una alternativa sensata entre Bolsonaro y el PT. Ubicado en tercer lugar, Gomes no participó en la segunda vuelta. Aunque antes invitó a Haddad para ser su vicepresidente, su campaña sucumbió a la retórica antipetista.

la campaña del candidato militar (Venturini, 2019). Aún hay mucho que investigar sobre este tema, así como sobre la puñalada que recibió Bolsonaro 40 días antes de las elecciones.

A principios de agosto, un hijo de Bolsonaro se reunió con Steve Bannon en los Estados Unidos. Portada de la revista *Time* en febrero de 2017, con el título "el gran manipulador", Bannon es considerado la "eminencia gris" del magnate reaccionario Robert Mercer, con quien trabajó en las campañas de Trump y del Brexit —el plebiscito que decidió por la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea—. Como se sabe, casi 90 millones de cuentas de Facebook en los Estados Unidos alimentaron sofisticados programas de la empresa Cambridge Analítica, que produjo perfiles detallados de los electores convertidos en el blanco de la publicidad específica y direccionada (*behavior microtargeting*). En resumen, se empleó inteligencia artificial para analizar los datos robados (u obtenidos sin conocimiento de los usuarios) para diseñar estrategias de manipulación emocional con fines electorales. Posteriormente, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, se disculpó públicamente, Cambridge Analítica cerró sus puertas, pero Trump está en la Casa Blanca y los mentores de su campaña están por ahí —aparentemente repletos de propuestas de trabajo.

En Brasil, a fines de septiembre, Facebook reconoció que al menos 30 millones de cuentas de usuarios en el país habían sido invadidas. Ya en julio, el grupo deshabilitó 197 páginas y 87 perfiles falsos que fueron asumidos por el Movimiento Brasil Libre (MBL), uno de los exponentes de las manifestaciones por el *impeachment* y que pueden haber sido utilizados para obtener datos.

Pero, ¿qué alimenta esta red? Después de todo, es notoria la inocuidad política y la falta de preparación intelectual de Bolsonaro. Cuando es entrevistado revela dificultades para articular un raciocinio coherente. En realidad, muchas veces es difícil entender la conexión entre la pregunta y la respuesta, porque a menudo no existe.

Sin embargo, el estilo de comunicación caótico y fragmentado de Bolsonaro, basado en intervenciones rápidas, cortes secos y *slogans*,

es adaptado para otro medio: los videos cortos de internet donde él reina. Sus seguidores editan los mejores momentos de sus intervenciones en los medios de comunicación para circularlos en las redes digitales desde el *broadcast* hasta el *multicast* (Lago, 2018). Si Lula aconsejaba a Dilma hablar para el pueblo y no para los periodistas, Bolsonaro habla para los internautas. Por eso, ellos fueron los primeros a quien agradeció en su discurso de posesión: el nuevo presidente no se apoya en militantes, pero sí en seguidores.

Pero el medio en el que la campaña de Bolsonaro fue más agresiva fue en WhatsApp. Empresarios compraron paquetes de envío de mensajes violando flagrantemente la ley electoral, como denunció un reportaje de la *Folha de São Paulo* el 18 de octubre de 2018. Al mismo tiempo se crearon más de 1.500 grupos, en los cuales solamente el administrador publicaba mensajes, generalmente con números de fuera del país[9]. Esos grupos iniciaron cadenas compartidas, en progresión geométrica, circulando mensajes mentirosos o tergiversados sobre la candidatura petista —pero no solo eso—. A continuación de la manifestación de mujeres contra Bolsonaro, el 29 de septiembre, circuló una avalancha de imágenes con mujeres en la calle con los senos a la vista y parejas del mismo sexo besándose, con textos agresivos en defensa de la familia y de la moral. En resumen, una poderosa red de *fake news* (noticias falsas) que recibió una nebulosa asesoría internacional actuó en la campaña de Bolsonaro.

Sin embargo, si bien es cierto que hubo un uso criminal de las redes sociales, también es forzoso constatar un caldo de cultivo propicio para los valores en los que se apoyó la calumnia. Porque si es una maldad retratar a una mujer con los senos a la vista, como si todas ellas se manifestaran así, reduciendo la protesta a lo que se considera un ejemplo de la "obscenidad" que ocurriría en todo el país con la

9 Con códigos de otros países se escapa de los filtros de *spam* y de las limitaciones impuestas a WhatsApp en Brasil, como el límite del número de participantes y la cantidad de reenvíos automáticos.

victoria de Haddad, eso solo será visto como una amenaza a los valores de la familia cristiana por quien sustenta esos valores.

El amparo popular de esta notable reacción en el campo del comportamiento son las iglesias neopentecostales, cuyo poder no deja de crecer: en 2018, la llamada bancada evangélica eligió 84 diputados federales (de un total de 513) y siete senadores (de 81).

Después de todo, no siempre fue así: como muchos otros, el obispo Edir Macedo, dueño de TV Record y de la Iglesia Universal del Reino de Dios venía apoyando las candidaturas petistas desde 2002. En ese ínterin, su sobrino y también pastor, Marcelo Crivella, fue ministro de Dilma. En las elecciones para prefecto de Río de Janeiro en 2016, Crivella derrotó a uno de los únicos candidatos de la izquierda en llegar a la segunda vuelta en una capital, Marcelo Freixo, del Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). El propio Bolsonaro votó por Lula en la segunda vuelta de las elecciones en 2002.

Además de bloquear cualquier discusión a favor de la despenalización del aborto o de la igualdad de género, la bancada evangélica presiona para que la homosexualidad sea tratada como enfermedad (la "cura gay"), entre otras pautas reaccionarias. En función de la presión evangélica, en 2012 Rousseff canceló la producción de un material escolar titulado "Escuela sin homofobia". Aun así, la acusación de que Haddad, el ministro de Educación de la época, defiende un "kit gay" para las escuelas, fue ampliamente explotada en la campaña.

La fuerza del neopentecostalismo y de la reacción conservadora es un fenómeno complejo. Su trasfondo es la búsqueda de referencias de estabilidad en medio de una existencia cada vez más precaria e inestable, frente a la degradación del mundo del trabajo y a la escalada de violencia, que destrozan el tejido social brasileño. Es importante destacar que hay una tensión latente: el protagonismo de las mujeres, que difícilmente liderarían una marcha similar hace veinte o diez años, así como avances en los derechos de los homosexuales y de los negros, conviven con la idea de que eso provoca un desorden de valores.

Y fue en el desorden que Bolsonaro reinó. Recalentando el simplismo de la Guerra Fría, su campaña asoció a petistas con comunistas y comunistas con ateos —por lo tanto, una amenaza para la familia y las costumbres—. Al mismo tiempo, el candidato se proyectó, aunque de manera falsa, del lado de quien, como él, no articula bien las ideas, ni entiende mucho de las cosas. En suma, defendió valores y no un programa. De ahí el diálogo fluido con los evangélicos.

No podría haber sido de otro modo. Al contrario de lo que se puede imaginar, la agenda neoliberal del candidato no tiene la adhesión de su base. Encuestas de opinión realizadas en manifestaciones de la derecha revelaron que tres de cada cuatro participantes se oponían a la reforma de pensiones presentada por Temer en 2017. Datos anteriores, tomados en la manifestación por el *impeachment* de Dilma en agosto de 2015, revelaron que el 88,6% de los encuestados estaba totalmente de acuerdo en que el Estado debe proveer servicios de salud para todos los brasileños, 92,3% opinaron lo mismo sobre educación y 72,1% sobre transporte público, rechazando así la idea del Estado mínimo. Lo que unía a los presentes era lo punitivo, o sea la noción de que es necesario aumentar el castigo a los infractores de la ley; además, el rechazo a políticas sociales como Bolsa Familia y cuotas, interpretadas como antimeritocráticas; y finalmente, el antipetismo (Solano, 2018). El desplazamiento del debate hacia el campo de valores ocultó la agenda antipopular de Bolsonaro de su propia base.

Un elemento central de la retórica del candidato militar fue asociar la izquierda al desorden. Venezuela y Cuba fueron bastante evocadas, y aunque el *imbróglio* (embrollo) bolivariano favoreciese esta asociación, la comparación con los gobiernos petistas no tenía ningún fundamento en la realidad. Al modo colombiano, las mentiras de la derecha intoxicaron la campaña, trabaron el debate y acosaron a la izquierda —mentiras porque, antes que nada, acusaban a la izquierda que hace mucho tiempo se esforzaba en la dirección contraria—. Fue por iniciativa propia que el PT sacó el rojo de la campaña muchos años atrás.

Para mostrar a los brasileños lo que es derecha, fue necesario inventar una izquierda. Si la lucha de clases no fue superada es por culpa de ellos, no de Lula.

Más allá de la corrupción y de las mentiras: ¿cuál es el sustrato del antipetismo? El antipetismo de los de arriba no tuvo como meta lo que el partido es, sino lo que él representa: el PT surgió como el primer instrumento político autónomo de los trabajadores brasileños —un momento en que la *senzala* (esclavos) levantó la cabeza y se organizó—. Ya el antipetismo de los de abajo es una mezcla complicada, que incluye una enorme frustración con el PT, transformada en rabia. Como ocurre con los de arriba, la rabia de los de abajo no se dirige a lo que el partido se volvió —el brazo izquierdo de un orden corrupto, pero con la promesa incumplida de la que un día él se hizo portador.

Después de todo, el PT no es un partido aleatorio, sí una construcción histórica colectiva. Fueron muchos años conversando con el pueblo, insistiendo en que había un camino diferente y que valía la pena. De una manera o de otra, los de abajo invirtieron su esperanza y creyeron en una política de izquierda. Finalmente descubren que la esperanza no venció el miedo, porque nunca lo enfrentó[10]. Entonces el miedo secuestró la esperanza, desprestigiada después de 13 años de presidencia petista.

La campaña petista

Y la candidatura petista, ¿qué estrategia adoptó? La campaña petista fue comandada por el lulismo hasta los cuarenta minutos del segundo tiempo. O sea: apostó por los lazos de fidelidad entre su líder carismático y la masa de los desposeídos, señalando el regreso a los buenos tiempos del crecimiento económico, en los brazos de un "Lulinha paz y amor".

10 "La esperanza venció el miedo" fue una frase repetida por la candidatura victoriosa de Lula en 2002.

Esa opción correspondió al dominio indiscutible que Lula ejercía hasta entonces sobre el partido. Pero fue una vía de doble sentido, pues la dirección del PT también identificaba su futuro con el prestigio de su líder. Entre la megalomanía del expresidente y el cálculo mezquino de los caciques, la campaña petista terminó confundiéndose con la suerte de su líder máximo.

Así como Dilma intentó evitar el *impeachment* negociando con el enemigo hasta el final, Lula apostó por recursos jurídicos para librarlo de la prisión, mostrando una fe conmovedora en el poder judicial brasileño, que contrastaba con la denuncia de carácter político del proceso[11]. Cuando la prisión se consumó en abril de 2018, culminando un proceso persecutorio y sin ninguna prueba consistente de corrupción[12], la campaña petista apostó por la victimización del expresidente: en pocas palabras, Lula tenía la intención de convertir las elecciones en un plebiscito sobre sí mismo.

Esto significa que la campaña no discutió los problemas del país ni criticó al gobierno de Temer. Tampoco atacó a Bolsonaro antes de octubre (Maringoni, 2018). A fin de cuentas, la estrategia lulista significó que el PT también llevara la campaña al plano moral: mientras Bolsonaro defendía el orden, los petistas se centraron en la justicia.

Aunque la estrategia fue repudiada por muchos correligionarios, especialmente cuando Bolsonaro creció y los demás se estancaron, fue

11 El carácter político del proceso se abrió completamente en junio de 2019 después de que se descubrieron las conversaciones privadas entre el entonces juez federal Sergio Moro, verdugo del expresidente, y el procurador de la República, Deltan Dallagnol, autor de la denuncia que dio lugar a la condena, demostrando que Magistratura y Ministerio Público trabajaron en conjunto para encarcelarlo, hiriendo el debido proceso legal [n.e].

12 La acusación es que Lula recibió en 2009 un apartamento en la playa de Guarujá (corrupción pasiva) que, sin embargo, se mantuvo a nombre de la Constructora OAS para ocultar el patrimonio (lavado de dinero), a cambio de contratos con Petrobras. Lula y su esposa tenían interés en comprar el inmueble, lo que no se concretó. El expresidente visitó la propiedad dos veces, sin nunca haber dormido en ella. El favoritismo hacia Petrobras no fue probado. Con escasas pruebas materiales, la sentencia que lo condenó a nueve años y cuatro meses de prisión se basa en el testimonio del expresidente de OAS, Leo Pinheiro, quien estuvo preso y redujo su sentencia de 26 años a tres años y seis meses a lo largo de varias dilaciones premiadas. Lula responde por otras siete acciones.

coherente con la política del partido, que no se vio afectada por los reveses experimentados. Si la base vivió el *impeachment* con la genuina angustia de una derrota popular, la cúpula lo encaró como una dificultad temporal en el tablero de Brasilia, donde los dados continuaban rodando. A los ojos de la dirección partidaria, la noción de "golpe" fue un medio de valorizar, entre los fieles, una rendición sin lucha.

La timidez incidió en las protestas populares. En las huelgas generales convocadas al año siguiente muchos gritaron "fuera Temer", pero se evitó la crítica a la dictadura del ajuste estructural, con la cual un Lula reelegido no rompería. Entre el *impeachment*, el asalto antipopular liderado por Temer y la prisión de Lula, la ambigüedad de la posición petista contribuyó a una débil reacción en las calles, toda vez que la convocatoria popular siempre estuvo subordinada a cálculos electorales que proyectaban el retorno de su máximo líder. Al PT solo le interesaba un "fuera Temer" que pudiese llamar de suyo.

En la práctica, la estrategia era "hacer desangrar al gobierno de Temer", con la expectativa del regreso del presidente obrero. El plan parecía infalible, pero no contaba con el arresto de Lula, denunciado acertadamente como un "golpe preventivo". La maniobra arruinó el cálculo del partido, que tarda en aceptar la nueva realidad.

Lo que la realidad escondía por debajo de la prisión de Lula muestra que pasó el tiempo del lulismo. Lo que podría resucitar esa política como alternativa burguesa, que navega en las aguas del orden, sería la ascensión de las masas. La paradoja es que eso solo sucederá si se rompen las amarras del lulismo —como en junio de 2013—. Pero cuando eso ocurra. ¿Será que los revoltosos se contentarán con una vuelta a la Era Lula?

Si la serpiente del antipetismo es difícil de enroscar, el más allá del petismo será mucho más. Por eso no interesa ni a Lula, el pueblo en la calle.

Después de todo, lo que ese líder tiene para ofrecer, tanto para los de arriba como para los de abajo es la conciliación —la antítesis de la confrontación—. Así, el partido no recurrió a las masas por temor a abrir una caja de Pandora, pero también puede haber calculado que sería un

fiasco. El hecho es que, en el momento en que el expresidente fue llevado a prisión, su eterno liderazgo en las encuestas presidenciales no se convirtió en solidaridad en las calles. Hasta porque ni el mismo Lula cree en esa vía.

Dado que la ambición petista es volver a hacer el medio campo entre los negocios de los de arriba y las necesidades de los de abajo, la campaña centrada en la victimización de Lula cumplió una segunda función: eludir los temas que conformarían una agenda popular. La reversión de las reformas de Temer, el archivo de la reforma de la seguridad social, la reforma urbana, la reforma agraria, entre otros temas, ponen al partido en una posición delicada, ya que es obligado a asumirlos en las letras chicas de su programa, cuando no tiene el compromiso de realizarlos. Sus militantes racionalizan esta debilidad diciendo que la concretización del programa depende de la "correlación de fuerzas" —que en 2018 fue peor que nunca.

La constatación que se impone es que, por diferentes caminos, la campaña petista, así como la de Bolsonaro, contribuyeron a despolitizar el debate electoral. También a blindar la economía, que jamás fue discutida, toda vez que el partido no cuestiona, ni siquiera retóricamente, la macroeconomía neoliberal.

Sin embargo, la estrategia petista sufrió un revés inesperado cuando Bolsonaro fue apuñalado a inicios de septiembre: el militar comenzó a disputar el papel de víctima con el propio Lula. También escapó a incómodos debates televisivos donde su falta de preparación se revelaría aún más[13].

Solo en ese momento, faltando menos de un mes para las elecciones, Haddad fue confirmado como candidato del PT. Aun así, la estrategia inicial fue hacer de Lula el candidato por detrás del candidato: "Haddad en el gobierno, Lula en el poder", en una reedición del

13 Esa conducta antidemocrática persistió cuando recobró la salud. Durante el debate de la Rede Globo en vísperas de la primera vuelta, la TV Record, que pertenece a la Iglesia Universal, transmitió una entrevista grabada con Bolsonaro mientras los demás candidatos debatían en la emisora rival, la más importante del país. La estrategia de ausentarse de debates cuando se lideran las encuestas de opinión fue inaugurada en Brasil por FHC.

eslogan de Héctor Cámpora en Argentina en 1973, en la elección que antecedió el retorno de Perón. De una manera u otra, la campaña fue delineada por el lulismo hasta el final de la primera vuelta, sin discutir los problemas del país ni confrontar a Bolsonaro de forma consistente.

Sin embargo, en aquel momento estaba claro que, independientemente del resultado, el vencedor de la elección sería Bolsonaro. Porque era él quien orientaba el debate: exaltados o asustados, todos discutían al excapitán. El eje de la discusión se deslizó hacia la derecha, blindando aún más el debate estructural. Por otro lado, era evidente que la izquierda perdería esta elección, porque ni siquiera entró en el juego.

En vísperas de la elección, se difundió el temor de que Bolsonaro ganaría en la primera vuelta, lo que hasta entonces no había sido considerado. Por su lado, el militar aún hablaba de fraude electoral, un discurso revelador de que ni él creía en su propia victoria. Después de todo, obtuvo el 46,03% de los votos válidos —una votación sorprendente—, pero que no evitó ir a la segunda vuelta.

A partir de ese momento, pocos creían que Haddad daría la vuelta el juego. Su campaña adquirió un tono de confrontación, inevitable frente a las tácticas del rival. Recibió algunos valiosos apoyos, mientras muchos otros se excluyeron. En general, la idea de un frente democrático no prosperó. Como en el *impeachment*, pocos se adhirieron a Haddad por la causa democrática, mientras el antipetismo movilizaba pasiones.

En estas circunstancias, el 44,87% de los votos obtenidos por Haddad en la segunda vuelta no fueron del todo malos. Se evitó al menos una victoria abrumadora de Bolsonaro.

Bolsonaro en el poder

Entonces, Bolsonaro ganó. ¿Qué esperar? Sin un programa, el militar defendió valores. El principal es el orden, que para él significa concluir la obra inacabada de la dictadura. Es eso lo que se concluye

cuando dice que es necesario hacer "un trabajo que el régimen militar no hizo, matando a unos 30 mil" —cifra de muertos y desaparecidos de la última dictadura argentina, la que más mató en el Cono Sur—. Después de todo, tal vez ese sea su programa.

¿Pero qué significa concluir el trabajo de la dictadura en la actualidad?

Paulo Arantes sugiere la siguiente hipótesis: en el pasado, los militares asociaron su poder a la industrialización del país, que comenzó y se consolidó entre dos dictaduras: el Estado Nuevo (1937-1946) y el golpe de 1964. Según esta lectura, los gobiernos petistas fueron el último aliento de la utopía de un "Brasil potencia", actualizando la ideología desarrollista y la intención de hacer de América del Sur su ámbito de influencia, en línea con un designio acariciado por los militares.

Sin embargo, enfrentados con la regresión industrial y la degradación social del país, los cuarteles tiraron la toalla, desistiendo de la idea de un "Brasil potencia". Entonces, los militares se remangaron las mangas para una gestión armada de la vida social, para aferrarse de pie a un país en ruinas. Apostaron sus fichas a una relación privilegiada con los Estados Unidos, en un contexto de sálvese quien pueda global[14].

Hay una ironía en esta relación entre las gestiones petistas y el retorno de los militares bajo Bolsonaro, pero con una agenda inversa. Lula envió al general Augusto Heleno para comandar la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (Minustah), en 2004. Esta polémica participación fue concebida en el marco de la idea de hacer de Brasil un *global player*.

Sin embargo, el general y sus tropas regresaron pensando en otra dirección: cómo evitar que Brasil se convierta en un Haití. No es ningún

14 Las ideas del ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo son resumidas en su artículo "Trump y el Occidente", en el que dice: "Solamente un Dios podría salvar todavía al Occidente, un Dios trabajando por la nación —incluso, y tal vez principalmente, la nación americana—". Y concluye: "Trump aún puede salvar el Occidente" (Araújo, 2017: 356).

secreto que los militares brasileños vieron en la isla una oportunidad de entrenamiento y experimentación. De vuelta a casa, muchos se convencieron de que el ejército debe participar en misiones similares con la ONU, pero en el plano doméstico.

Por otro lado, crece la demanda de misiones de "Garantía de la Ley y del Orden" por políticos ansiosos de mostrar servicio o distraer a la población, como hizo Temer frente al fracaso en la aprobación de la reforma de pensiones[15]. Esto fortalece el poder de negociación de los militares, que exigen modificaciones en el marco regulatorio de las intervenciones, de modo que se permitan medidas de excepción, como búsquedas sin orden o el uso letal de la fuerza, como en las "misiones de paz" de la ONU (Harig, 2018).

Vetado por su partido como vicepresidente de Bolsonaro, Heleno usará este repertorio para comandar el Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de la República, órgano directamente vinculado al presidente y responsable por los servicios de inteligencia. Otro veterano de Haití, el general Fernando Azevedo y Silva, asumió el Ministerio de Defensa. Transformado en un "ministerio de la violencia", la cartera fue creada en 1999 con la intención de reforzar el control civil sobre las Fuerzas Armadas —y, hasta Temer, nunca había sido ocupada por un militar. En 2013, el general Azevedo y Silva fue nombrado por Dilma para comandar la Autoridad Pública Olímpica.

En síntesis, la misión que los militares se atribuyeron en el siglo XXI implica el control y la gestión territorial de las masas empobrecidas, en una sociedad que se distancia de cualquier cohesión tejida a partir del trabajo y que abandonó sus sueños de grandeza internacional.

En otras palabras, Bolsonaro ofrece la forma de gestión de la barbarie —el Estado policial—. El contenido él no lo tiene; en realidad

15 Realizadas exclusivamente por orden de la Presidencia de la República, las operaciones de "Garantía de la Ley y del Orden" están previstas constitucionalmente en casos de grave perturbación del orden, en el que se agotan las fuerzas tradicionales de seguridad pública. Entonces, es facultad provisoria de los militares actuar como poder de policía. En la práctica, su uso se trivializó (Copa Mundial, visita del Papa, huelgas policiales en los Estados) y se extendió en el tiempo, problematizando su carácter provisional.

le es indiferente y por eso terceriza. Lo que le importa es el poder. Así como delegó las finanzas a Paulo Guedes, hace lo mismo con el agronegocio, la industria, el Banco Central y así sucesivamente. Está implícita una división de tareas en que Bolsonaro disciplina a la sociedad y al capital le toca la economía.

Sin embargo, no se trata de dos rectas paralelas, sino de líneas que convergen en el horizonte. Porque el otro lado de la militarización que se pretende es configurar una sociedad brasileña, de manera comparable a aquella producida por el neoliberalismo chileno bajo Pinochet. Se ambiciona una reorganización completa de las relaciones sociales, que agote toda posibilidad de organización colectiva y, en última instancia, de resistencia.

En otras palabras, la idea no es simplemente prohibir la organización política, sino eliminar el piso en el que ella se asienta: secar el agua en el que navega el pez rojo del comunismo. Por ejemplo, más eficaz que prohibir los sindicatos es individualizar al extremo las relaciones de trabajo, para transformar a los trabajadores en competidores, minando las posibilidades de resistencia organizada; o desestructurar la universidad pública para que deje de ser atractiva para el estudiante y para el docente, excepto cuando recauda dinero privado —y ahí ya no sea exactamente pública.

La mercantilización absoluta de las relaciones sociales es el mecanismo central de este ataque, donde el fundamentalismo neoliberal de Guedes se casa con el reaccionarismo de Bolsonaro. Es probable que, más allá de la economía, el militar haya sido seducido por las implicaciones políticas de la prescripción chilena, discutida en otro capítulo de este libro.

En Chile, cuando el partido de Salvador Allende volvió al poder en el año 2000, estaba tan desfigurado que se rindió a la gestión activa del neoliberalismo. Ningún aspecto legado por esta singular dictadura en el Cono Sur, que implementó una modalidad pionera del fundamentalismo neoliberal, fue confrontado. Por el contrario, las gestiones socialistas continuaron la obra, construyendo sobre esta

misma base. Al mismo tiempo fue congelada la política de izquierda, en el marco del "duopolio" chileno. Hasta hoy, muchos se refieren a los socialistas como "a la izquierda" en oposición a sus rivales. Esa "izquierda" es aplaudida internacionalmente por los liberales y fue premiada con un lugar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El mensaje es claro: con una izquierda así, no es necesaria una derecha.

Las (pocas) encuestas sobre la visión de mundo de los electores de Bolsonaro sugieren una ambigüedad en relación a ese proyecto. Por un lado, existe la percepción de que el Estado tiene una responsabilidad en proveer salud y educación a los ciudadanos y que la reforma de pensiones es impopular. Por otro lado, el rechazo de la Bolsa Familia, así como de las políticas de cuotas que caracterizan el antipetismo, está asentado en una ideología meritocrática. Se alega que el programa de distribución de ingresos desestimula el trabajo y que el negro no puede ser discriminado, pero tiene que mostrar su competencia como cualquier otro (Pinheiro-Machado y Scalco, 2018; Solano, 2018).

Este discurso revela una profunda penetración de la "razón del mundo neoliberal", en que el individuo es visto como un emprendedor de sí mismo, en competencia con los demás (Dardot y Laval, 2010). Sin embargo, si en el Chile de Allende la reorganización neoliberal se tiñó de sangre y silencio, en el Brasil actual hay una adhesión tácita a valores afines, reforzada por una reacción del comportamiento que se alimenta de difamaciones: el "kit gay" en las escuelas, o la universidad pública como antro de marihuaneros y de perversión sexual. En este cuadro, la escuela, la universidad, la salud, la seguridad —en síntesis, la sociedad brasileña—, tal como la conocemos hoy, está amenazada.

Evidentemente hay una distancia entre lo que quiere Bolsonaro y lo que logrará hacer. Muchos hablan de su temperamento autoritario, como un obstáculo para realizar las alianzas necesarias para gobernar. Entretanto, el militar es "mono viejo": si en siete mandatos

como diputado federal aprobó solamente dos proyectos de ley, alguna experiencia en "toma y daca", ciertamente, acumuló.

También se dice que la saña de agotar al Estado resultará en cabezazos y tiros en el pie. La primera Medida Provisional del presidente fue la eliminación del Ministerio de Trabajo, creado en 1930 por Getúlio Vargas al servicio de la conciliación de clases y fue inmediatamente cuestionada en el Supremo Tribunal Federal. Los Ministerios de Cultura y del Deporte están entre los desactivados y sus funcionarios fueron incorporados por otros ministerios.

El presidente compró peleas con la Red Globo y con la *Folha de São Paulo*. Pero Trump, cuyos métodos Bolsonaro visiblemente copia también hizo eso. No se debe esperar que liberales democráticos ficticios protegidos por una prensa burguesa, frenen el mito.

Tampoco debe esperarse mucho de la oposición parlamentaria. En medio del luto general, algunos petistas celebraban que el partido eligió la mayor bancada de Brasília, lo que lo coloca en una posición de fuerza para liderar la oposición. Fuera del cinismo de esta lectura —el país se acaba, pero el PT sobrevive—, creer que la salida vendrá de Brasilia es como esperar que los peces salven a los náufragos. La oposición en Brasilia puede incluso fortalecerse en medio de tsunamis, pero mientras tanto, el pueblo se ahoga.

En última instancia, muchos apuestan o hacen barra para que la falta de preparación y el primitivismo del presidente lo hagan tropezar con sus propios pies, creyendo que luego el país despertará de la pesadilla. Así como sucedió con Collor en la década de 1990, que después de todo cayó. Eso hasta puede suceder, pero el juego no va a girar hacia el pueblo: hay muchos Bolsonaros sin uniforme, que conocen los modales en la mesa y hablan portugués correcto, esperando su hora.

Lo único que puede revertir la marcha hacia la barbarie es la reacción popular. Porque la pretensión de Bolsonaro de enfrentar los problemas del neoliberalismo con más neoliberalismo ciertamente la agravará, así como el combate a la violencia con más violencia va a empeorarla.

En un primer momento, Bolsonaro puede ofrecer sangre petista para aplacar a la turba ilusionada que lo eligió —probablemente por la vía judicial, a pesar de las numerosas declaraciones de que va a "fusilar a *petralhada*" (fusilar a los petistas)—. Tal vez el mayor peligro de su lengua es que ella autoriza a hacer a sus seguidores. Indígenas y sin tierra, lejos de los proyectores, seguramente estarán entre las primeras víctimas.

Pero enseguida, la realidad cobrará la factura y el campo popular responderá. Entonces será necesario superar el lulismo, que no es un antídoto al fascismo, pero sí entorpece la comprensión de lo que sucede. Solo con lucha los brasileños escaparán de la barbarie, no con morfina.

Bibliografía

ARAÚJO, ERNESTO FRAGA

2017 "Trump e o Ocidente", en *Cadernos de Política Exterior*, vol. 3, núm. 6, segundo semestre, pp. 323-358.

DARDOT, PIERRE Y CHRISTOPHE LAVAL

2010 *La nouvelle raison du monde. Essai sur la societé neoliberal*. Paris: La Découverte.

FOLHA DE SÃO PAULO

2018 "Empresários bancam campanha contra o PT por WhatsApp", en F*olha de São Paulo*, 18 de ocutbre de 2018. Disponible en: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/empresarios-bancam-campanha-contra-o-pt-pelo-whatsapp.shtml.

GASPAR, MALU

2018 "O fiador", en *Revista Piauí*, núm. 144, septiembre.

GUEDES, PAULO

2017 "Atolados no pântano", en *O Globo*, 1 de mayo de 2017.

HARIG, CHRISTOPH

2018 "Re-Importing the 'Robust Turn' in UN Peacekeeping: Internal Public Security Missions of Brazil's Military", en *International Peacekeeping*, vol. 26, núm 2, pp. 137-164. DOI: 10.1080/13533312.2018.1554442.

LAGO, MIGUEL

2018 "Bolsonaro fala outra língua", en *Revista Piauí*, 13 de agosto de 2018. Disponible en: https://piaui.folha.uol.com.br/bolsonaro-fala-outra-lingua. Acceso 14 de enero de 2019.

LULA DA SILVA, LUIS INÁCIO

2018 *A verdade vencerá*. Entrevista concedida a Ivana Jenkins, Gilberto Maringoni, Juca Kfouri e Maria Inês Nassif. São Paulo: Boitempo.

MARINGONI, GILBERTO

2018 "Anotações sobre o grande desastre", en *OutrasPalavras*, 29 de octubre de 2018. Disponible en: https://outraspalavras.net/crise-brasileira/anotacoes-sobre-grande-desastre/. Acceso 14 de enero de 2019.

PINHEIRO-MACHADO, ROSANA Y LUCIA MURY SCALCO

2018 "Da esperança ao ódio: juventude, política e pobreza, do lulismo ao bolsonarismo no Brasil", en *IHU. Revista Online*, 04/10/2018. Disponible en: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/583354-da-esperanca-ao-odio-juventude-politica-e-pobreza-do-lulismo-ao-bolsonarismo. Acceso 16 de enero de 2019.

SOLANO, ESTHER

2018 "Crise da democracia e extremismos da direita", en *Análise Friederich Ebert Stiftung*, núm. 42, mayo.

VENTURINI, FABIO

2019 "Movimento #elenão pode ter transferido 'teto' de Bolsonaro para Haddad", en *Revista Amplitudes*, 3 de enero de 2019. Disponible en: https://revistaamplitudes.net/2019/01/03/movimento-elenao-pode-ter-transferido-teto-de-bolsonaro-para-haddad/. Acceso 18 de enero de 2019.

El Kirchnerismo y los impases de la vía burguesa en Argentina

Para nosotros, el peronismo fue el más importante y único intento de realización de la revolución democrática-burguesa en Argentina, cuyo fracaso se debe a la incapacidad de la burguesía nacional de cumplir esta tarea.

Silvio Frondizi, 1955

Es imposible consolidar un proyecto de país si no consolidamos una burguesía nacional.

Néstor Kirchner,
29 de septiembre de 2003

Introducción

Estrictamente hablando, la elección de Néstor Kirchner pocos meses después del triunfo de Lula en Brasil marca el inicio de la ola progresista sudamericana, cuando en 2003, los presidentes identificados con la izquierda asumieron el mando de los dos países más grandes de la región, sumándose al venezolano Hugo Chávez.

Argentina, principal economía de América del Sur hasta la Segunda Guerra Mundial, pasó por una prolongada inflexión que empobreció, desindustrializó y desnacionalizó al país, a partir de una dictadura que controló el país entre 1976 y 1983. Luego, el fundamentalismo neoliberal de Carlos Menem profundizó las condicionantes de una crisis que explotaría a comienzos del siglo XXI. Aunque Kirchner tuviese una trayectoria convencional en las filas peronistas, fue elegido en el contexto de la extraordinaria movilización popular que, en diciembre de 2001, derrocó a presidentes sucesivos e impuso cambios.

Beneficiándose de la moratoria de la deuda y del fin de la convertibilidad peso-dólar decretadas en medio de la crisis, el gobierno de Kirchner ensayó una retoma desarrollista que, sin embargo, se enfrentó

con obstáculos de naturaleza diversa. En la medida que la coyuntura internacional favorable a las exportaciones primarias se enfrió, su sucesora y esposa, Cristina Kirchner, adoptó medidas controversiales, respondiendo a las dificultades económicas con una política destinada a fortalecer su autoridad sobre el Estado y los sectores que apoyaban al gobierno. Con un proceso más audaz que su contraparte en Brasil, el kirchnerismo sufrió las ambigüedades inherentes a la apuesta por una burguesía nacional combinada con la tutela sobre el movimiento popular, que resuena al peronismo con el que la izquierda argentina todavía tiene cuentas que saldar.

Perón y peronismo

Proyectado en la política nacional como Ministro de Trabajo durante la Segunda Guerra Mundial, el coronel Juan Domingo Perón (1895-1974), que se volvió general, presidió Argentina en tres ocasiones y fue elegido en todas ellas. Ejerció dos mandatos consecutivos entre 1946 y 1955, cuando fue derrocado por un golpe y regresó a la presidencia en 1973, después de un largo exilio. Durante su primer mandato cautivó a los trabajadores argentinos, sembrando las bases del peronismo. Este fenómeno político trascendió la vida y las posiciones del coronel, imprimiendo una marca indeleble en la cultura política del país, cuyas repercusiones se sienten hasta hoy (Murmis y Portantiero, 1973).

En el plano económico, el primer gobierno peronista practicó una política de desarrollo de la industria nacional, especialmente la industria ligera, a tiempo de impulsar la presencia estatal en la industria pesada, pero sin el mismo éxito. En aquellos años, Argentina vivió una prosperidad sin igual, amparada por una coyuntura internacional favorable marcada por las altas exportaciones de cereales y carne en la posguerra. Bajo el peronismo, la economía argentina continuó siendo comparable a la brasileña.

Por otro lado, el gobierno favoreció la intervención estatal en pro de los trabajadores en varias ocasiones y promovió una distribución

de ingresos sin precedentes en la historia del país. La participación de los salarios en el PIB argentino alcanzó el 50%, un nivel que se mantuvo en los años siguientes. Al éxito económico se sumaron avances políticos, como la legislación laboral, el derecho a la organización sindical —aunque tutelada por el Estado— y el voto universal, entre otros (Kaplan, 1984; Romero, 2001). En la memoria de muchos trabajadores argentinos, los años de Perón representaron el momento en que se volvieron ciudadanos.

En términos ideológicos, el peronismo o justicialismo estuvo asociado a tres ideas: "justicia social", entendida como una elevación del nivel de vida de los trabajadores, pero que rechazaba la contradicción entre capital y trabajo, y la noción de lucha de clases; la "independencia económica", identificada con la autonomía del país frente a los monopolios extranjeros y la "tercera posición" en el ámbito internacional, suponiendo la neutralidad en relación a los dos bloques de la Guerra Fría (Bobbio, Matteucci y Pasquino, 1983: 923).

La pretensión de conciliar capital y trabajo, industria y exportación primaria, desarrollo nacional y capital internacional prosperó mientras la coyuntura internacional fue favorable. Sin embargo, la contracción de las exportaciones primarias coincidió con la ascendente presión del capital transnacional, especialmente de origen estadounidense, en dirección a la liberalización económica. Enfrentando problemas financieros, el Estado perdió su capacidad de subsidiar al mercado interno y frenó los salarios recurriendo a la Confederación General del Trabajo (CGT) y a métodos coercitivos para contener las demandas populares. La cara represiva del gobierno se evidenció en el control de la prensa, de la actividad del partido y del movimiento sindical. En este contexto, las concesiones a favor del capital internacional fueron insuficientes para revertir el creciente descontento, toda vez que para la oposición, cualquier solución política necesariamente excluía la permanencia del peronismo en el poder (Ayerbe, 2002; Kaplan, 1984). El impase se resolvió en 1955 con un golpe militar.

En el análisis de Silvio Frondizi (1955), la caída de Perón constató la imposibilidad de consolidar la nación argentina en el marco burgués: "Para nosotros, el peronismo fue el único y más importante intento de llevar adelante la revolución democrático-burguesa en Argentina, cuyo fracaso se debe a la incapacidad de la burguesía nacional para cumplir esta tarea".

El período entre la destitución de Perón en 1955 y la dictadura militar iniciada en 1976 estuvo marcado por la inestabilidad política y enfrentamientos sociales. Aunque proscrito, el peronismo tuvo más votos que sus competidores en las elecciones de la época cuando convocó al voto en blanco. Expresando la inestabilidad prevaleciente, los dos presidentes radicales electos[1], Arturo Frondizi (1958-1962) y Arturo Illia (1963-1966), no concluyeron sus mandatos.

El gobierno de Illia fue derrocado en 1966 por un golpe militar que pretendió estabilizar la situación mediante una "revolución argentina". Mientras tanto, el régimen liderado por Juan Carlos Onganía enfrentó una agudización de los enfrentamientos sociales, expresados por las luchas universitarias, sindicales y también por una combinación de los dos, cuya mayor expresión fue el Cordobazo en 1969, cuando la ciudad de Córdoba fue brevemente tomada por los trabajadores. La insurrección fue violentamente reprimida, pero el régimen cayó en descrédito y diversos grupos tomaron las armas para enfrentar la represión. Los Montoneros peronistas, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), de tendencia marxista, surgieron en este contexto. Cuestionado por los sectores más bajos y también por sus pares, Onganía convocó a elecciones en 1973, ganadas por un líder de izquierda peronista, Héctor Cámpora quien creó las condiciones para el retorno de Perón, quien asumiría la presidencia meses después.

1 Referencia a la Unión Cívica Radical, partido que se originó como una división intraoligárquica en la política argentina a fines del siglo XIX y llegó por primera vez a la presidencia en 1916, atrayendo el voto de la clase media. Durante décadas polarizó la política institucional en el país en oposición al peronismo.

Para ese entonces, el peronismo ganó vida propia. Grupos que asumían posturas políticas opuestas se afirmaban peronistas, mientras el mismo líder manipulaba a todos a su conveniencia. Al incitar a la izquierda armada al mismo tiempo que provocaba a los sectores reaccionarios, Perón contribuyó a un clima de confrontación y desorden que aparentemente solo él mismo podría apaciguar. La funcionalidad del peronismo para restablecer del orden fue el pasaporte para el retorno del general.

De vuelta al poder, Perón desautorizó al peronismo de izquierda, mientras que el paramilitarismo anticomunista recibió cobertura del gobierno para actuar. Cuando falleció, fue sucedido por su esposa María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita, que gobernó entre los años de 1974 y 1976, intensificó las acciones represivas y mostró poca aptitud para la presidencia. En 1975, un paquete de medidas económicas impopulares conocido como *Rodrigazo* disparó el costo de la vida y la inflación, desencadenando la primera huelga general contra un gobierno peronista en la historia del país (Sartelli, 2007). La insubordinación de los obreros era un indicio de que la función política del peronismo se estaba agotando.

Al mismo tiempo, la violencia política se volvía cotidiana. Mientras la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como Triple A —articulada por el secretario personal y ministro de Perón, José López Rega—, sumaba víctimas selectas, las acciones guerrilleras se multiplicaban. En este clima de guerra civil, un capellán militar pontificó, a inicios de 1976, que "el pueblo argentino cometió pecados que solo pueden ser redimidos con sangre" (Novaro y Palermo, 2007: 87). Esta fue la misión asumida por las Fuerzas Armadas en los años siguientes.

Del proceso de reorganización nacional a la democracia neoliberal

La dictadura inaugurada en 1976 unificó a la clase dominante del país en torno al restablecimiento del orden, proceso que contó con la benevolencia o indiferencia de parte de la población. "Silencio es

salud", decían carteles difundidos por el régimen. Para alcanzar este objetivo, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional pretendió reconfigurar las relaciones sociales en el país, como una reacción a la izquierda marxista y también al peronismo. Fue un proyecto más ambicioso y radical que el de todas las dictaduras anteriores, incluida la "Revolución Argentina" de 1966 que, en evaluación de los que asumieron el mando, fracasó por su moderación y debilidad (Novaro y Palermo, 2007: 30).

Basada en el exterminio de una generación de militantes, esta "reorganización nacional" modificó el patrón de acumulación predominante que tenía a la industria como su núcleo dinámico, creando las condiciones para la implementación del neoliberalismo que el propio régimen comenzó a ejecutar (Basualdo, 2001). Las relaciones sociales de producción, la función del Estado y la inserción internacional del país cambiaron sustancialmente, en paralelo a una degradación continua del nivel de vida de la población, que se extendió por décadas. Aunque este proceso no se completó bajo la égida militar, el régimen estableció las bases para la posterior regresión económica y social.

La estrategia para restablecer el orden fue expandir el terror, mediante secuestros, detenciones clandestinas y desapariciones de modo sistemático y tenaz. Las treinta mil víctimas fatales de la dictadura, entre asesinados y desaparecidos, reflejan una inédita escala de la represión, que se hizo cualitativamente diferente (Hourcade y Tufró, 2017). Al mismo tiempo, el régimen pretendió negar toda responsabilidad por las ejecuciones, evitando las presiones internacionales sufridas por la experiencia chilena. La desaparición, como método, cumplió este doble papel de extender el manto de la sospecha y la incertidumbre, al mismo tiempo que preservaba el régimen de la opinión pública, toda vez que no tenía que justificar lo que afirmaba desconocer.

En el plano económico, la dictadura desestructuró los dos pilares de la economía política peronista: el desarrollo industrial y la clase obrera. La regulación estatal que protegía a la industria frente a la exportación agropecuaria y al capital financiero, fue desmantelada

en favor de estos últimos y su peso en la economía declinó desde entonces. Al mismo tiempo, la combinación entre reformas estatales y represión devastó la resistencia de los trabajadores.

Algunos defienden que el objetivo fundamental del régimen fue primero político antes que económico, induciendo un cambio en las relaciones de poder destinado a tener efectos estructurales sobre la morfología social: la dictadura se afirmó contra una clase trabajadora "indisciplinada", así como contra un empresariado "ineficiente". En función de este objetivo, el régimen mezcló recetas neoliberales, conservadoras y desarrollistas (Novaro y Palermo, 2007: 56, 79). No obstante, el sentido general del movimiento fue determinado por la reforma financiera de 1977, profundizada en 1979, cuando se adoptó un enfoque monetario de la balanza de pagos, invirtiendo la subordinación del sistema financiero a la economía real que prevalecía hasta entonces (Basualdo, 2009: 329).

La apertura de los mercados de bienes y capitales aumentó los desequilibrios comerciales y financieros, resueltos con un creciente endeudamiento, hasta que el país sucumbió a una crisis similar a la chilena a principios de la década de 1980. En el caso argentino, la dictadura buscó eludir los problemas con una salida política, y atacó las Islas Malvinas ocupadas por los ingleses desde 1833. Se planeaba un triunfo nacional que respaldaría la candidatura del general Leopoldo Galtieri, allanando el regreso a las elecciones y coronando la gestión militar.

De hecho, la cuestión de las Malvinas es una injusticia reconocida por la ONU al menos desde 1965 y moviliza al nacionalismo argentino como ninguna otra bandera. El saldo de la campaña, sin embargo, fue desastroso. La primera ministra británica, Margaret Thatcher, también enfrentaba un momento doméstico crítico y aprovechó esta oportunidad para hacerse popular, generando un masivo contrataque inglés. Al suponer el apoyo de los Estados Unidos, porque los argentinos asesoraron a la contrainsurgencia en Centroamérica, los militares sudamericanos revelaron una profunda ignorancia sobre las

relaciones internacionales contemporáneas. La efímera popularidad de la aventura se desvaneció con la derrota y las muchas vidas perdidas, precipitando el fin del régimen.

El balance socioeconómico de la dictadura es desalentador. En 1982, el PIB *per cápita* era 15% más bajo que en 1975; el PIB industrial decreció en un 25% desde 1970; los salarios reales cayeron en un 40% y la participación del salario mínimo en el PIB disminuyó de 45% en 1974 a 34% en 1983. Se estima que el gasto social se encogió a la mitad (Novaro y Palermo, 2007). La convergencia entre la brutalidad de la represión, el desastre de las Malvinas y el fracaso económico desmoralizó a los militares y al propio régimen, que pocos defenderían posteriormente. La dictadura argentina fue la primera en el Cono Sur en dejar el poder y los militares sufrieron presiones incomparables por justicia y reparación en el continente.

A pesar de estas particularidades, la transición argentina también implicó negociaciones entre el liderazgo civil y militar de la dictadura y los líderes políticos de oposición, que aceptaron descartar el recurso a la movilización popular. En las elecciones siguientes, el peronismo fue derrotado en las urnas por primera vez. Venció el radical Raúl Alfonsín, identificado con el centro-izquierda y con la defensa de los derechos humanos. Desde el punto de vista del orden, su principal tarea en el gobierno, entre 1983 y 1989, fue recomponer el sistema político, poniendo a Argentina nuevamente en la ruta de la normalidad burguesa.

La osadía con la que inicialmente enfrentó a los militares dio paso a la moderación —y luego dio lugar a la capitulación— expresada en la Ley de Punto Final y en la Ley de Obediencia Debida que, como describen sus nombres, tenían como objetivo cerrar el debate sobre la reparación de las violaciones cometidas por la dictadura, absolviendo a quien obedeció órdenes. La misma dinámica fue constatada en el plano económico, en el que un ensayo desarrollista desembocó en la sumisión al FMI y en ajustes para pagar la deuda. Presionado entre la expectativa de cambio alimentada por él y el conservadurismo que

respaldó, entre la desilusión civil y el revanchismo militar, entre el peronismo y los *carapintadas*, entre el FMI y la hiperinflación, Alfonsín renunció antes de terminar su mandato, y los peronistas regresaron a la Casa Rosada.

En 1989, cuando Carlos Menem asumió la presidencia, la inflación bordeaba el 5.000%. La "revolución productiva" que prometió en campaña, pero que no fue cumplida, se convirtió en un programa de ajuste estructural radical, consolidando la ruta neoliberal inaugurada por la dictadura. Si los militares pusieron al país en la vía de la desindustrialización, el período de Menem profundizó la desnacionalización. Visto en conjunto, este movimiento erosionó las bases de la nación, dando lugar a la degradación del tejido social argentino y al empobrecimiento de la población.

Como en otras situaciones sudamericanas, la drástica reducción de la inflación confirió la base popular para implementar la prescripción del ajuste estructural. Con el apoyo de todos los justicialistas y radicales, el Congreso dio poder al Ejecutivo para promulgar la Ley de Emergencia Económica y la posterior Ley de Reforma del Estado. "Achicar el Estado para agrandar la nación" fue el lema de la dictadura recuperado por la reforma que privatizó las telecomunicaciones, la aviación comercial (Aerolíneas Argentinas), la electricidad, el sistema de seguridad social, el transporte y distribución de gas, las líneas de metro, un tercio de la red de carreteras, puertos, ferrovías, aeropuertos, inmuebles, acerías, petróleo y gas —Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)— empresas petroquímicas, empresas sanitarias, el hipódromo, correos, centrales nucleares, entre otros. El proceso de privatización implicó el mayor rescate de la deuda externa de la región, dado que el Estado aceptó como pago títulos de deuda que representaron cerca a un tercio del valor recaudado (Azpiazu y Basualdo, 2002: 24; Cano, 1999).

En el ámbito monetario, el ministro Domingo Cavallo ejecutó en 1991 un plan de convertibilidad que, en la práctica, dolarizó la economía argentina. Las "relaciones carnales con los Estados Unidos"

defendidas por el canciller Guido di Tella fueron llevadas al paroxismo. Sumadas a la apertura comercial y a la liberalización de parte significativa de la producción de bienes y provisión de servicios, el curso seguido contuvo la inflación potenciando la dependencia de flujos de capital extranjero.

Como en el caso brasileño, esta política desequilibró la balanza comercial. El superávit de 4,6 mil millones registrado en 1990 se convirtió en un déficit de 12,2 mil millones de dólares en 1998, un hueco cubierto por el ingreso de capital extranjero —lo que, a su vez, repercutió en la deuda externa, que se duplicó en el período (Cano, 1999: 140-142)—. Esta arquitectura funcionó mientras las privatizaciones engrosaron los flujos de capital extranjero, facilitados por el aumento de la oferta de crédito internacional y por el alza coyuntural de los precios de exportación (Kosacoff, 2010: 29). Por lo tanto, cuando estos aspectos favorables se disiparon, el país encaró una crisis monumental, con escasos medios para enfrentarla. Al final del segundo mandato de Menem en 1999, el país se sumergió en la recesión.

Su sucesor, Fernando de la Rúa, mantuvo el compromiso con la convertibilidad, que vetaba la posibilidad de manejar la moneda para mitigar los crecientes déficits comerciales. La situación se agravaba por la fuga de capitales, en un país donde los ricos ahorraban en dólares guardados en el exterior, contribuyendo a la escasez de divisas en un Estado que se endeudó en dólares. Este engranaje obligó al gobierno a realizar sucesivas renegociaciones de la deuda para acceder a nuevos créditos, apoyándose en medidas antipopulares que sacaban recursos del Estado y de la economía en general para compensar a los acreedores. La situación llegó a un punto crítico en noviembre de 2001, cuando la fuga de capitales se aceleró, provocando una corrida en los bancos. Entonces, el exministro de Economía del período del Presidente Menem, nuevamente en el cargo, decretó el congelamiento de los depósitos bancarios, en una medida que quedó conocida como *corralito*.

¿Qué ocurría en el mundo laboral argentino en este contexto? El desempleo, que fue alto en 1998 (14,8%), aumentó a 22,5% en 2001,

mientras que el 48% de la fuerza laboral estaba en la informalidad. La pobreza se duplicó en el período, saltando de 25,9% a 52% hasta alcanzar el 57,5% de la población en 2002 —año en que se registró una caída del 11% en el PIB—. En estos cinco años, el PIB se redujo en un quinto, mientras que la producción de bienes industriales, en relación al conjunto de la economía, cayó en un 135% entre 1995 y 2001. La participación del trabajo en el PIB también decreció hasta alcanzar el nivel más bajo de la historia argentina, cuando llegó al 20% en 2005 (Basualdo, 2009: 355; *El Descamisado*, 2015).

Pero más allá de las estadísticas, la pobreza y el hambre ensombrecieron a las multitudes en un país con poca experiencia en estos fenómenos en el siglo XX. Existen numerosos testimonios de escuelas que se convirtieron en comedores populares, donde las mujeres se organizaban para alimentar a los niños del barrio (Isacovich, 2017; Movimiento Territorial Liberación, 2017; Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, 2017). Desempleados engrosaron las filas de los movimientos piqueteros que, alejados de la producción, cortaban la circulación de mercancías bloqueando calles y carreteras. Por otro lado, la clase media se proletarizó, mientras los servidores públicos y los jubilados sufrieron recortes en sus ingresos siguiendo las exigencias del FMI. Adicionalmente, los servidores públicos eran pagados con títulos públicos o bonos del gobierno, como los famosos *patacones*[2], redundando en una ulterior reducción salarial y confusión monetaria. Aún así el FMI anunció, en diciembre de 2001, que ya no rescataría más al país, ya que los compromisos asumidos por el gobierno estaban siendo cumplidos de manera insuficiente.

En este escenario, el *corralito* provocó una fuerte reacción también entre la clase media, porque se entendió que la convertibilidad naufragaba, presagiando la devaluación de los ahorros bloqueados. Una

2 Nombrada así en referencia a una moneda de plata del siglo XIX, esta "moneda" fue emitida por el gobierno de Buenos Aires en 2001 como un título de la deuda pública de Buenos Aires, que el gobernador Carlos Ruckauf utilizó para pagar los salarios de sus funcionarios [n.e.].

ola de movilizaciones, saqueos y huelgas sacudió al país. De modo inédito, los piqueteros fueron bien recibidos por la clase media que golpeaba ollas exigiendo que *se vayan todos*. El presidente Fernando de la Rúa enfrentó la situación decretando estado de sitio, medida que tuvo el efecto contrario y detonó la protesta popular. La represión a las jornadas de diciembre tuvo 39 personas muertas, el presidente renunció y escapó del palacio presidencial en helicóptero, mientras cuatro sucesores cayeron la semana siguiente, bajo la furia popular.

En aquellos días, Argentina experimentó niveles inéditos de movilización popular que caracterizan una coyuntura revolucionaria. Cientos de asambleas de barrio se realizaron diariamente en todo el país, con participación masiva. En estas reuniones de iniciativa popular se discutían los problemas de la nación y se encaminaban acciones concretas. En la capital, representantes de los asambleístas se reunían los domingos en el Parque Centenario en un intento de articular acciones conjuntas. Organizaciones de la izquierda argentina se sumaron al proceso pero no lo lideraron. Se puede argumentar que esta fue una fuerza del movimiento que trascendió trabas burocráticas, disputas intersticiales y cálculos mezquinos. Tal característica, sin embargo, también fue su debilidad, toda vez que la ausencia de dirección dificultó su organicidad.

Las maniobras sucesivas para restablecer el orden resultaron en un acuerdo parlamentario que llevó a la presidencia al peronista Eduardo Duhalde, exvicepresidente de Menem, a completar el mandato del presidente depuesto. Aunque concebido como un gobierno tapón, en este período hubo al menos tres acontecimientos determinantes para los rumbos del país. Primero fue decretada la moratoria, dando inicio a un proceso de renegociación que sería mantenido por el gobierno siguiente. En enero de 2002, se abolió la convertibilidad, lo que resultó en una depreciación significativa de la moneda argentina. Estas dos medidas fueron fundamentales para el crecimiento económico que vino enseguida, ya que la devaluación del peso favoreció la producción nacional y las exportaciones nacionales, mientras que la moratoria

puso a disposición grandes fondos públicos para otros fines distintos al de la deuda. En este contexto, dos millones de planes para Jefes(as) de Hogar Desocupados[3] fueron distribuidos para mitigar el desempleo y la pobreza, respondiendo a la demanda piquetera (Gambina, 2017; Sartelli, 2007).

El tercer elemento determinante fue de naturaleza política. El asesinato de dos jóvenes militantes —Maximiliano Kosteki y Darío Santillán— en junio de 2002, durante una manifestación cerca del Puente Pueyrredón en Avellaneda, ciudad de la provincia de Buenos Aires, fue un punto de inflexión en la extraordinaria movilización popular argentina. La conmoción provocó la anticipación de las elecciones presidenciales, en las que Duhalde desistió de postularse para apoyar a su correligionario Néstor Kirchner. Entre la represión y el desorden se intensificaron las presiones de arriba y de abajo para volver a la normalidad, traducida como el orden burgués. Nuevamente, el peronismo cumpliría este papel.

Gobiernos Kirchner

Próspero abogado, exgobernador de la remota provincia petrolera de Santa Cruz en el sur de Argentina, Néstor Kirchner tuvo una carrera política convencional en las filas peronistas. Respaldado por Duhalde en 2003, enfrentó a otros dos peronistas en las elecciones presidenciales, incluido el viejo Carlos Menem, que ganó la primera vuelta. Sin embargo, el expresidente se retiró de la elección en la segunda vuelta, legando a la Argentina con un líder que recibió apenas el 22% de los votos.

La modesta legitimidad inicial de Kirchner creció en los años siguientes y la de su esposa, Cristina, que se convirtió en presidenta dos veces con una adhesión electoral cada vez mayor: 45% de los votos en 2007 y con el 54% en 2011. Durante los doce años al frente del

3 Programa del gobierno argentino de transición que distribuía beneficios asistenciales siguiendo la normativa de "un derecho familiar a la inclusión social" [n.e].

país, los Kirchner movilizaron una retórica que remitía al peronismo histórico, pero que gradualmente ganó vida propia. El "kirchnerismo" renovó su impulso político después de la muerte de Néstor en 2010 y se intensificó en el segundo mandato de Cristina. Fracasado en el intento de postularse a un tercer mandato consecutivo y derrotado en las urnas en 2015, el kirchnerismo circula desde entonces el lema "Volveremos", de evidente resonancia peronista.

Pero, ¿cuál es la base material de esta referencia a un peronismo asociado a la industrialización nacional, a la integración de los trabajadores y a la soberanía? El significado de los gobiernos Kirchner es motivo de controversia: algunos interpretan el Argentinazo en 2001 como una inflexión histórica que modificó el patrón de acumulación en una dirección nacional —desarrollista o neodesarrollista—, perseguida por el gobierno (Basualdo, 2009; Varesi, 2012; Schincariol, 2013). Otros enfatizan aspectos coyunturales que permitieron una recuperación parcial de la economía, en el marco de continuidades estructurales que no fueron enfrentadas (Gambina, 2017; Gallo Mendoza, 2017).

Esta disputa tiene consecuencias políticas, toda vez que la postura en relación al gobierno fracturó a los movimientos populares y a los sindicatos, además de dividir a la intelectualidad progresista. La división de la izquierda argentina no es inédita, pero se profundizó bajo el kirchnerismo, especialmente cuando este pretendió monopolizar la identidad progresista en los años recientes. Como en otros países del subcontinente, el gobierno cautivó una parte del movimiento social y fue intolerante con quien preservó la autonomía. En el caso argentino, la diferenciación en relación al kirchnerismo es complicada por las disputas de sentido en torno al peronismo que, aunque no son concluyentes, parecen estar lejos de agotarse (CTEP, 2017; Movimiento Emancipador Peronista, 2017).

Aunque los aspectos descritos indican similitudes formales con las presidencias petistas, los gobiernos Kirchner compraron pleitos que sus homólogos brasileños jamás imaginaron: la renegociación de la deuda externa, encarando un relativo aislamiento de las finanzas

internacionales; la derogación de leyes que absolvían a los militares, quienes volvieron a ser juzgados y arrestados por los crímenes de la dictadura; la propuesta de una ley de medios de comunicación que acosó a Clarín, el grupo mediático más grande del país; y el intento de aumentar el impuesto a la soya, causando una rebelión del agronegocio. Además de eso, se revirtieron privatizaciones, hubo cambios en la Corte Suprema de Justicia, el matrimonio igualitario fue aprobado —la Argentina fue el primer país de la región en hacerlo— y la televisión comenzó a transmitir gratuitamente todos los juegos del campeonato argentino de fútbol, considerado patrimonio cultural del país.

Sin embargo, este mismo gobierno continuó asistiendo a las reuniones del FMI, promulgó una ley antiterrorista elaborada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, difamó y reprimió a los disidentes, congeló las licencias a los medios comunitarios, no realizó la reforma tributaria ni consiguió reducir la desigualdad, que permaneció imperturbable, mientras se acentuó la concentración y la desnacionalización de la economía.

Elegido en medio de una coyuntura revolucionaria, el carácter de los gobiernos Kirchner tiene relación con el alcance y los límites de la rebelión que lo precedió. Desde el punto de vista del orden, el peronismo resurgió como un recurso político efectivo para sacar a la política de las calles y devolverla a las instituciones. Por otro lado, el Argentinazo puso fin al sentido antipopular de la política impuesta desde la dictadura, allanada por el terrorismo de Estado. La movilización popular no logró que se vayan todos, como cantaba, pero sacudió al neoliberalismo como una ideología indiscutible en el país (Sartelli, 2007: 171). En esta coyuntura, el kirchnerismo puede interpretarse como el mínimo común denominador posible entre la furia popular y las exigencias del orden.

El margen de maniobra de los Kirchner estuvo condicionado por el movimiento de la economía. Inicialmente, el rápido crecimiento económico popularizó la gestión de Néstor. El siguiente período, entre 2007 y 2013, fue marcado por oscilaciones de manera que las altas y

bajas se anularon. En este contexto, las presiones fiscales llevaron a Cristina a tomar medidas controversiales, que hicieron que perdiese apoyo en sectores de la burguesía y de la clase media, mientras lo reforzaba entre otros segmentos de clase media y de las capas populares. A partir de 2014, hubo un estancamiento económico que persistió en los primeros años de la gestión de Mauricio Macri.

La reanudación del crecimiento económico precedió a la elección de Néstor. Como fue observado, resultó de la convergencia entre la devaluación del peso, la moratoria de la deuda y el *boom* de los *comoditties*, en la cual se asentó la prosperidad que sustentaba la popularidad del gobierno. La moratoria asumida en 2002 fue fundamental para recuperar la capacidad financiera del Estado. En ese año, sus gastos en intereses disminuyeron en 8,5 mil millones de dólares, pasando de 12 mil millones en 2001 a 3,5 mil millones en el año siguiente (Gambina, 2017).

Sin embargo, no toda la deuda dejó de ser pagada. De los 140 mil millones de dólares que el país debía, 40 mil millones continuaron siendo pagados a los organismos financieros internacionales. El resto fue reestructurado por el gobierno de Kirchner según los parámetros del sistema financiero internacional. La negociación concluida en mayo de 2005 puede considerarse exitosa desde este punto de vista, ya que alcanzó un descuento del 75%, —pero que efectivamente terminó en el rango del 15% a 20%—. Por otro lado se frustró la presión para denunciar como "deuda odiosa" a los préstamos negociados por la dictadura, lo que los volvería ilegítimos, como se afirmó en el caso iraquí después de la caída de Saddam Hussein (*El Descamisado*, 2015). Los acreedores que no aceptaron los términos del canje de títulos ofrecido por Néstor tuvieron una segunda oportunidad en 2010 bajo el gobierno de Cristina. Alrededor del 7,5% de estos permanecieron irreductibles, constituyendo lo que los periodistas argentinos apodaron como "fondos buitre". La disputa con estos acreedores dificultó el acceso al mercado financiero internacional por parte de los gobiernos Kirchner, que contaron con préstamos de Venezuela en un primer momento y después de la China.

La segunda medida importante que precedió al gobierno de Néstor fue el fin de la convertibilidad. Su consecuencia inmediata fue un aumento de los precios y la ruptura del sistema de contratos (Kosacoff, 2010: 33). Pero en los años siguientes, la competitividad de la manufactura local aumentó y las importaciones se encarecieron, impulsando una recuperación industrial que se sumó a la valorización de las exportaciones primarias para sacar al país de la recesión. Entre 2002 y 2007, la industria creció en un 73,5% y el PIB aumentó más del 50%, a un promedio anual de 8,5%. Los niveles de empleo se elevaron, la miseria disminuyó y el consumo se intensificó. La población que vivía por debajo del nivel de pobreza, y que alcanzó el 52% en la crisis, bajó en 2007 al 20,6%. Los líderes populares recuerdan que entre 2005 y 2006, los comedores populares dejaron de ser necesarios y las escuelas volvieron a ser solamente escuelas (Movimiento Territorial Liberación, 2017).

La retórica kirchnerista, que propugna la reconstrucción de un capitalismo nacional, encontraba respaldo en este proceso. En contraposición a la ola especulativa protagonizada por el capital extranjero desde el gobierno de Menem, que condujo al país al desastre, el presidente pregonaba un capitalismo *en serio*, proyectando el desarrollo de una industria nacional y de su correlato social, la burguesía nacional: "El plan es construir en nuestra patria un capitalismo de verdad, con reglas claras en que el Estado desempeñe su papel de manera inteligente para regular, controlar y hacerse presente donde haga falta mitigar los males que el mercado no remedia, estableciendo un equilibrio en la sociedad que permita el funcionamiento normal del país" (Kirchner, 2003).

La discreta evolución de la participación de la industria en el PIB en los gobiernos Kirchner no justificó el entusiasmo del proyecto original. Los datos indican un aumento del 14% al 17% en el período, restituyendo la situación prevaleciente en 1994, pero a un nivel bastante inferior al 25% registrado en 1973 (Basualdo, 2009: 337). La industria estaba distante de retomar la centralidad productiva de los

años anteriores a la dictadura, en una realidad en la cual "no hubo estrategia de desarrollo productivo en general, ni industrial en particular" (Schorr y Azpiazu, 2015: 101).

Una investigación detallada sobre el poder económico durante el kirchnerismo echa por tierra la ideología del neodesarrollismo argentino, según la cual la burguesía nacional recuperó una posición dominante bajo el amparo del Estado —argumento repetido por Cristina hasta el final de su mandato—. La investigación constata un alto nivel de concentración y desnacionalización de la economía doméstica, concluyendo: "se advierte una fuerte confluencia de intereses en el proyecto de país del empresariado extranjero y los diferentes segmentos del gran capital local. El resultado es la profundización de un perfil de especialización internacional regresivo y de un tipo de inserción pasiva y subordinada en el mercado mundial" (Gaggero, Schorr y Wainer, 2014: 7). En resumen, la existencia de grupos capitalistas argentinos que lucran con el modelo no se tradujo en la esperada burguesía nacional (Varesi, 2012: 248).

Es posible constatar una dinámica similar en el mundo del trabajo. La recuperación de la economía y del empleo contribuyó a que el sindicalismo recupere cierto protagonismo, favorecido por la generalización de los convenios colectivos de trabajo avalada por el gobierno. Este beneficio también implicó un cálculo político, ya que tenía la intención de debilitar el movimiento piquetero. Al mismo tiempo, el aumento de la productividad del trabajo en el gobierno de Néstor no correspondió a la evolución salarial, lo que indica un aumento del margen de explotación (Schorr y Azpiazu, 2015: 102).

Lo más significativo desde el punto de vista de la centralidad del trabajo son los relatos de quien prefiere trabajar sin registro para continuar recibiendo subsidio gubernamental de alrededor de 4 mil pesos, en lugar del salario mínimo que alcanzaba los 9 mil pesos en 2017. Por ejemplo, una militante trabajadora del hogar relata que no quiso ser registrada por su jefe, ya que prefiere agregar a su ingreso

por limpieza, la Asignación Universal por Hijo[4] y la remuneración de una cooperativa en la que participa (MTL, 2017).

Sintomático de esta realidad, es el surgimiento de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), uno de los principales movimientos populares al final del gobierno de Cristina, del cual se distanció. La CTEP parte del diagnóstico de que, aunque la economía crezca, no habrá trabajo para todos y esta es una situación permanente. "Somos el descarte de la economía de mercado", dice uno de sus principales líderes, refiriéndose a los desempleados como "trabajadores de la economía popular" (Gringo, 2017). Ante esta situación, la agenda de la CTEP incluye modalidades de ingresos básicos similares a aquellas que reclamaron y conquistaron los piqueteros en la crisis de 2001. Incluso un líder sindical opina que en Argentina hoy, "la nueva fábrica es el barrio" (Central de Trabajadores de Argentina Autónoma, 2017).

En síntesis, analizando el perfil de la economía y de las relaciones laborales durante los gobiernos Kirchner, se observa que se perpetuó el patrón de acumulación legado por las reformas que se remontan a la dictadura, a pesar de las mejoras que tienen como referencia comparativa la crisis más grave que el país ya vivió. La otra cara de esta marginalidad de la industria y de la degradación del trabajo es la profundización del "perfil de especialización internacional regresivo" mencionado anteriormente. Bajo el kirchnerismo, el motor de la economía argentina fue la exportación primaria, especialmente la soja, acompañada de hidrocarburos y de un inédito crecimiento en la explotación minera.

Como en otros países de la región, la siembra de soja en la Argentina se expandió vertiginosamente después de la liberación de la variedad transgénica en 1996. Se constata que en 2002 la superficie

4 Implementada en 2009 por el gobierno de Cristina Kirchner, la Asignación Universal por Hijo es ofrecida a uno de los padres por cada hijo menor de 18 años (no hay límite de edad si el hijo tuviera alguna discapacidad) a familias que no tienen cobertura social y están en situación de vulnerabilidad — desempleo, por ejemplo [n.e.].

cultivada alcanzó su límite, a partir del cual la posterior expansión implicó la apropiación de tierras ya ocupadas, generando conflictos. Mientras la soja despegaba, la producción de bienes industriales en relación al conjunto de la economía disminuyó en un 135% entre 1995 y 2001 (Basualdo, 2009: 355).

A principios del siglo XXI, el fin de la convertibilidad abarató las *comodities* argentinas en el mercado internacional y el alza de los precios dio un impulso adicional a la expansión. Al final de la era Kirchner, el agronegocio ocupaba 22 millones de las 33 millones de hectáreas cultivables en el país, de las cuales el 90% estaban dedicadas a la soja. En este momento, la oleaginosa y sus derivados representaban aproximadamente un tercio de las exportaciones argentinas (Palmisano, 2017; Petz, 2017).

Más allá de la especialización regresiva, el proceso productivo asociado a la soja transgénica implica un sistema cultural, social, técnico y económico que transforma la fisonomía del campo argentino. El predominio de este sistema productivo, que se describió como una "agricultura extractivista" o una "agricultura sin agricultores", provocó una pérdida significativa de diversidad económica, social y ecológica, transformando al país en "un laboratorio donde se experimenta la eliminación de la vida rural" (Grupo de Reflexión Rural y Lewkowicz, 2003: 40). El compromiso de Cristina Kirchner con este modelo se reafirmó en 2010 en el Plan Estratégico Agroalimentario 2020, previendo un aumento del 60% en las exportaciones de granos transgénicos, principalmente soja y maíz.

Al mismo tiempo, la presión sobre el medioambiente y las poblaciones rurales se intensificó por la expansión de la minería, una actividad que no tiene tradición en el país. La evolución técnica y el aumento de los precios internacionales de los minerales estimularon la inversión internacional en los últimos veinte años. La primera mina a cielo abierto en Argentina entró en actividad en 1997 y los gobiernos de Kirchner cultivaron una política minera estimulando la explotación de oro, plata y cobre, entre otros. A principios del siglo XXI, el sector

creció un 20.000% en diez años, movimiento que causó numerosos conflictos socioambientales. Hasta 2017, la resistencia popular había expulsado a seis multinacionales mineras, probablemente un récord mundial (Varesi, 2012: 152; Palmisano, 2017).

El país tiene la segunda reserva mundial de esquisto y la cuarta reserva de petróleo no convencional. Hay indicios de que la nacionalización parcial de YPF —la empresa más grande del país— en 2012 está relacionada con este negocio. Privatizada bajo Menem, la empresa fue controlada desde 1999 por la española Repsol. Los enormes beneficios de la operación argentina respaldaron la expansión de esta empresa en América Latina y en África, mientras que poco se reinvirtió en el país. En este contexto, Argentina dejó de ser autosuficiente en petróleo; las reservas cayeron y los gastos de importación subieron. En 2011, Argentina importó más gas y petróleo que de lo que produjo —hecho inédito desde la privatización—. Al año siguiente, el Estado tomó el control del 51% de la empresa, dividido entre las provincias y el Estado nacional, indemnizando a Repsol por cinco mil millones de dólares. Luego, YPF firmó un acuerdo secreto con Chevron (ex Standard Oil, vinculado a la familia Rockfeller) que abrió las puertas a la explotación de hidrocarburos no convencionales en el país, apoyada por los Estados Unidos. Se evalúa que el acuerdo sería muy impopular si se hubiese firmado con la española Repsol (Marcos, 2017). Desde entonces, tales actividades —como el *fracking*[5]—, crecen en Argentina.

Así como el impulso industrial no modificó las estructuras productivas, las nacionalizaciones no significaron una reorientación del papel del Estado en el país. Se concentraron en empresas que tenían problemas, como Aerolíneas Argentinas, correos, empresa del agua y la propia YPF. Mientras tanto, las más rentables, como las empresas de

5 "El fracturamiento hidráulico o *fracking* es una técnica experimental por la cual se consigue extraer gas o el petróleo atrapado en las rocas hace millones de años. Consiste en inyectar agua, arena y productos químicos a alta presión en las formaciones rocosas ricas en hidrocarburos para aumentar su permeabilidad y permitir así la extracción de estos recursos". Para más información, ver: Bertinat, Pablo *et al.*, *20 mitos y realidades del* fracking. Buenos Aires: El Colectivo, 2014 [n.e.].

telefonía y energía, permanecieron bajo el control privado recibiendo subsidios millonarios del Estado, parcialmente reducidos por Macri.

Cristina Kirchner

Cuando Cristina Kirchner se eligió en 2007, la expansión económica que benefició el mandato anterior se desaceleraba, mientras que se intensificaban las presiones inflacionarias. Después de tres años de carencia, el país retomó en 2008 el pago de la deuda renegociada en 2005 y, para fines de ese año, ya presentaba un considerable déficit fiscal.

El gobierno reaccionó de manera variada y controvertida a este nuevo escenario. Por un lado, intensificó los gastos sociales para sostener los niveles de empleo e ingresos. El programa de renta básica de Asignación Universal por Hijo ejemplifica este recorrido, que a su vez agravó los problemas fiscales. En respuesta, la gestión intentó aumentar sus ingresos, pero sin enfrentar una reforma tributaria. La iniciativa para aumentar las retenciones a la exportación y la estatización del sistema de pensiones se enmarcan en este contexto. Más controvertida en el campo de la izquierda, fue la intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que desestructuró el referencial estadístico del país.

Un parte aguas en la presidencia de Cristina fue el intento de establecer un sistema móvil para la tributación agroexportadora, aumentando la tasa en situaciones de precios altos para gravar las ganancias excepcionales. La medida no era inédita en la historia argentina, aunque el aumento propuesto —del 35% al 44%—, fuese relativamente alto (Palmisano, 2017). La propuesta provocó una reacción en bloque del agronegocio argentino, en el que grandes y pequeños propietarios se movilizaron para parar al país. A lo largo de cuatro meses, el empresariado rural incitó diversas modalidades de acción directa, como el bloqueo de carreteras y puentes, protestas y marchas.

El tema dividió al país, pero la polémica se limitó a la dimensión distributiva: rara vez fue cuestionado el patrón primario exportador. Al

final se aprobó el proyecto en el Congreso, pero el voto en el Senado empató. El voto de oro recayó en el vicepresidente de la República, Julio Cobos, que se alineó a los ruralistas y derrotó al gobierno que representaba.

El conflicto y la derrota incidieron en el rumbo posterior del gobierno. La pérdida de aliados al interior de la clase dominante llevó al kirchnerismo a fortalecer su apoyo junto a otros segmentos sociales. En esta perspectiva, se intensificó la retórica de conflicto que dio la tónica al paro agrario, activando con frecuencia motivos peronistas con el objetivo de solidificar, por oposición a sus detractores, una identidad entre gobierno e interés nacional.

La controversia en torno a la ley de medios de comunicación aprobada en 2009 está referida a este contexto. Las relaciones hasta entonces cordiales con el grupo Clarín, el conglomerado mediático más grande del país, se agriaron durante el enfrentamiento con el agronegocio, defendido por los más importantes medios de comunicación. En represalia, el gobierno aprobó una ley limitando la concentración de concesiones de radio y televisión, medida que afectaba directamente a este grupo. El Clarín respondió con acciones judiciales que frenaron la aplicación de la ley y con una cobertura periodística visceralmente hostil a sus proponentes hasta el final del mandato. Posteriormente, el gobierno de Macri se encargó de vaciar la ley en sus aspectos más democráticos.

Otras dos iniciativas importantes que siguieron al conflicto agrario fueron la estatización del sistema de pensiones, la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AJFP), contra la cual ningún banco protestó y la Asignación Universal por Hijo, modalidad argentina de la Bolsa Familia implementada al año siguiente. En cierto modo, estas medidas se complementaban, toda vez que la estatización puso a disposición del Estado fondos previsionales que fueron utilizados para pagar gastos corrientes, incluso los programas sociales, en un contexto de constricción fiscal (Katz, 2014: 234).

En realidad, la situación económica del país se deterioraba. La política de mitigar los efectos sociales de la desaceleración económica,

elevando el gasto público ya presionado por las subvenciones a los servicios heredadas de la crisis de 2001, aumentó las presiones inflacionarias y el déficit fiscal. En esta coyuntura, la intervención del gobierno en el organismo nacional de estadísticas, el INDEC, fue interpretada como una maniobra para disimular el aumento de la inflación e imponer una especie de impuesto inflacionario que reduciría los gastos en el servicio de la deuda, pero que también afectó al ahorro (Altamira, 2009: 130). Desde entonces, las estadísticas argentinas han perdido confianza y los problemas económicos se agravaron.

Como vimos, el intento de elevar las retenciones sobre la soja está ligado a este contexto y su fracaso también tuvo efectos políticos, llevando al gobierno a intensificar la confrontación con la oposición como una estrategia para fortalecer la autoridad presidencial. Esta amplificación retórica del conflicto destinada a fortalecer la identidad kirchnerista fue potenciada a partir de la muerte de Néstor Kirchner en 2010. Según Maristella Svampa (2017: 216, 230), este acontecimiento imprevisto "abrió las compuertas al populismo de alta intensidad", resumido en tres puntos: la reinvindicación del Estado como constructor de la nación, el ejercicio de la política como una contradicción permanente entre dos bloques antagónicos y la centralidad del líder.

Inicialmente, el liderazgo de Cristina se fortaleció en este proceso, ganando las elecciones presidenciales del año siguiente con la mayor votación recibida por los Kirchner hasta ese entonces. En contraste con el peronismo histórico, cultivó los sectores medios como su principal base de apoyo, lo que fue descrito como un "populismo de clase media" (Svampa, 2017: 232). En 2012, el líder de la CGT, Hugo Moyano rompió con el kirchnerismo, que perdió su principal punto de apoyo en el movimiento obrero, reducido entonces a la fracción de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma (CTA) integrada por servidores públicos y profesores. La CTA, que surgió como una escisión de la CGT dócil al menemismo, se dividió entre una central fiel y otra crítica al kirchnerismo, fragmentación que se repitió en numerosos movimientos populares.

Pero la principal vulnerabilidad del gobierno era la economía. Las fluctuaciones que marcaron el primer mandato de Cristina dieron paso al estancamiento a partir de 2014. La conjunción de la inflación, el aumento del desempleo privado —parcialmente compensado con empleos públicos— y los problemas fiscales y económicos agravados por la fuga de capitales y por el aislamiento financiero, desgastó la popularidad de Kirchner.

En este contexto, el gobierno se empeñó en retornar a los circuitos financieros internacionales. Pagó la deuda con el Club de París y aprobó una Ley de Pago Soberano buscando una mejor negociación con los "fondos buitres". El preámbulo de esta ley es una orgullosa afirmación de la disciplina financiera del país, que pagó 190 mil millones de dólares entre 2005 y 2013, en contradicción con el discurso de que Argentina se "desendeudó". Sin embargo, el acceso a nuevas líneas de crédito solo se consolidaría bajo Macri, que resolvió rápidamente los pendientes en favor de los buitres y el país retomó el endeudamiento a un ritmo galopante. Esta situación, en la que el gobierno ni rompió con las finanzas internacionales, ni retomó su confianza, ilustra los impases del capitalismo en serio, que se pretendió.

El kirchnerismo llegó a las elecciones de 2015 parcialmente desprestigiado por varias razones: por la inflación y los escándalos de corrupción que incomodaban a la clase media; por el populismo y la falta de confianza de los mercados, que reinvindicaba el empresariado; por los efectos de la crisis que sentía el pueblo y por la intolerancia a la disidencia, que resentía a la izquierda, más allá de las contradicciones del gobierno. Sin embargo, el kirchnerismo era también parcialmente popular en todos estos sectores, porque estaba identificado con la recuperación de la sociedad argentina después de la crisis: la clase media volvió a reinar; el capitalismo retomó el crecimiento; el pueblo reencontró comida y trabajo; la izquierda tenía logros concretos que mostrar. Por ejemplo, 2.489 miembros de las Fuerzas Armadas acusados de crímenes de lesa-humanidad, además de 343 civiles, de los cuales 616 habían sido condenados en 2015.

Este escenario presagiaba elecciones ajustadas, en las que cualquiera de los principales contendientes podría ganar —y fue lo que sucedió—. La pretensión de reformar la Constitución, permitiendo a Cristina disputar una segunda reelección, fue abortada por la derrota del gobierno en las elecciones parlamentarias de 2013. Entonces, las disputas internas en el campo de gobierno resultaron en la candidatura de Daniel Scioli, un representante de la derecha peronista que se proyectó en la política con Menem durante en la década de 1990. El voto de la izquierda al kirchnerismo se hizo más difícil pero no imposible. La oposición se unió en torno a la candidatura de Mauricio Macri. Hijo de una familia que se enriqueció bajo la dictadura, se hizo famoso como presidente del Club Atlético Boca Juniors, surgiendo a la política nacional como alcalde de Buenos Aires, donde ejerció dos mandatos.

Scioli venció en la primera vuelta, pero Macri ganó en la segunda, con poco más de la mitad de los votos. Fue el primer presidente electo en cien años sin estar afiliado al radicalismo ni al peronismo, en una política protagonizada cada vez más por nombres como "Mauricio" y "Cristina", que por la disputa de los proyectos nacionales. Pocos días después, el bolivarianismo sufrió una contundente derrota parlamentaria en Venezuela, señalando que la ola progresista sudamericana estaba entrando en un período de retroceso.

Reflexiones finales

En medio del extraordinario dinamismo de la economía argentina en el paso del siglo XIX al XX, se consolidó un movimiento obrero combativo, con diversas expresiones sindicales y partidistas, que presionó por la democratización de la sociedad desde entonces. En el polo opuesto de la vitalidad obrera, la historia del país fue atravesada por la intervención militar en la política, incluso cuando se inclinó hacia el reformismo burgués bajo el liderazgo de Perón. En su trayectoria personal, el general gravitó hacia posiciones antipopulares, explicitando

los límites de la ideología que encarnó. No obstante, la penetración del peronismo en los sectores populares dotó a este fenómeno político de longevidad singular, metamorfoseándose en una ideología polifacética que estuvo al servicio de múltiples agendas, obstaculizando una política autónoma de la clase trabajadora en el país.

La inestabilidad política argentina entre la presidencia de Perón y la guerra sucia estuvo referida a los impases de la revolución burguesa en el capitalismo dependiente, con la cual el peronismo se identificó originalmente. El golpe militar de 1976 enterró esta posibilidad histórica y comenzó un giro en la dirección neoliberal. Pero a diferencia de Chile, este tránsito en la Argentina no fue inmediato, a pesar de los efectos devastadores del terrorismo de Estado sobre la resistencia popular. La falta de cohesión de las clases dominantes en torno a este proyecto, más allá de un Estado relativamente más débil, limitó la reorientación de la sociedad en ese sentido.

Por otro lado, el fracaso económico de la dictadura llevó al país a la Guerra de las Malvinas en un intento de escape, cuyo desastre precipitó el fin del régimen. Aprisionado entre los cambios que lo eligieron y las continuidades que lo sostuvieron, el gobierno de Alfonsín sucumbió entre los ensayos golpistas y la hiperinflación. Correspondió entonces al peronismo disfrazado de menemismo resolver las ambivalencias que se alzaban en la política del país, implementando una agenda neoliberal radical que culminó en la dolarización de la economía. En un primer momento, con la inflación controlada, la paridad con el dólar y el acceso al crédito y a las importaciones baratas popularizaron al gobierno. Pero cuando la coyuntura favorable se esfumó, los crecientes déficits comerciales y fiscales evidenciaron que el modelo era insostenible. La economía entró en recesión y los indicadores sociales del país, en caída libre. El siguiente gobierno se rindió rápidamente a la lógica del ajuste estructural, que solo fue frenado por una rebelión popular que amenazó con destruir la institucionalidad vigente, pero que se limitó a derrocar a algunos presidentes.

Nuevamente, el peronismo encontró un papel que desempeñar enfriando la política de las calles para reencuadrarla en las instituciones. El gobierno de Néstor Kirchner estuvo condicionado por la extraordinaria movilización popular, así como por dos medidas cruciales que la precedieron: el fin de la convertibilidad y la moratoria de la deuda. El Estado recobró rápidamente la capacidad fiscal, mientras que el auge de las *commodities* volvió a encauzar la economía en la ruta del crecimiento.

En este contexto, Kirchner coqueteó con las ideas de un capitalismo nacional, reciclando los motivos del peronismo original. Sin embargo, esta propuesta encontró poca base objetiva y subjetiva para materializarse, lo que no impidió que los sectores empresariales se acercaran al gobierno ganando dinero en el proceso. La industria, por lo tanto, no retomó la centralidad económica que tuvo, ni el capital nacional. Al contrario, la intensificación de la siembra de soja, sumada a la explotación de minerales e hidrocarburos, —incluso los no convencionales, como en el caso del *fracking*—, profundizó la orientación primaria prevaleciente desde la "guerra sucia"[6], al mismo tiempo que se intensificaron los conflictos socioambientales.

A nivel político, sectores del movimiento social se enamoraron de los gobiernos Kirchner, algunos porque los comedores populares se vaciaron, otros porque los militares fueron presos (Movimiento Territorial Liberación, 2017; Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, 2017). Pero aquellos que preservaron su autonomía se arriesgaron a la difamación y a la represión, y en muchos casos se dividieron.

Cuando las condiciones económicas favorables se ralentizaron, el gobierno intentó recaudar más pero sin mover las estructuras, al mismo tiempo que gastaba para preservar el empleo y los ingresos. Este trayecto tensionó los límites de la estrategia adoptada, evidenciados en la derrota que sufrió de la mano del propio vicepresidente

6 Medidas adoptadas por el gobierno argentino durante la dictadura civil-militar (1973-1983), caracterizadas por la violencia indiscriminada contra los opositores, como persecuciones, secuestros, torturas, desapariciones forzadas, etc [n.e.].

en el tema de las retenciones. A esta altura, la retórica del conflicto se acentuó como un recurso para enfrentar a nuevos enemigos —como el Clarín—, fortalecer la autoridad de Cristina e intimidar a la oposición de izquierda. El kirchnerismo consolidó adhesiones, pero también profundizó desafectos y no resolvió la economía. Este proyecto de poder fue derrotado poco a poco y por poco en las urnas: primero en las elecciones legislativas de 2013, que inviabilizaron la reforma necesaria para una tercera candidatura consecutiva de Cristina y después, con la derrota de Scioli por Macri.

En su primer año de gobierno, Macri desmontó la ley de medios de comunicación, se entendió con los "fondos buitres", retomó el endeudamiento, cortó los subsidios y despidió a servidores por criterios políticos, entre otras medidas que contrastan con el gobierno anterior y agravan los problemas nacionales. Se estima que el número de pobres aumentó en 1,5 millones de personas. El fantasma del desempleo y del hambre vuelve a ensombrecer las periferias de un país que solo comprendió lo que era el subdesarrollo latinoamericano a fines del siglo XX.

Por otro lado, el campo popular se movilizaba con frágil unidad y relativo éxito contra el nuevo gobierno, imponiendo límites a la ofensiva antipopular. En el plano propositivo, parece necesario arreglar cuentas con el kirchnerismo, versión siglo XXI de la utopía peronista de un reformismo burgués. El kirchnerismo apostó por la reconstrucción del capitalismo argentino referido a una burguesía nacional. En este proceso, fue más lejos que Uruguay o Brasil, protagonizando medidas concretas y enfrentamientos genuinos, aunque moderados. Sin embargo, no construyó la correlación de fuerzas para vencer los enfrentamientos que emergieron en el ámbito de las clases dominantes, ni favoreció el poder popular para sostener los avances que pretendió. El resultado de esta tibia apuesta por una burguesía nacional en el siglo XXI revela, una vez más, la condición insuficiente y provisional de todo cambio que no afecta a las estructuras de la dependencia y de la asimetría social en América Latina. Los avances que la crisis no deshizo, el gobierno de Macri se ocupó en deshacer.

Mientras Cristina se esfuerza para retornar al poder, aquellos que ambicionan otra política tienen el desafío de arreglar cuentas con el peronismo en el pasado reciente y lejano. Un balance del kirchnerismo implica ajustar cuentas con el peronismo, lo que se traduce en una creencia en el reformismo burgués y la conciliación de clases como vía para la nación argentina. Esta utopía tuvo cierta base de realidad en los años nacional-desarrollistas, cuando la social-democracia parecía una posibilidad histórica en el país. Sin embargo, desde la guerra sucia, esta ideología perdió su fundamento material. En la actualidad, superarla implica confrontar el legado de la dictadura profundizado por el menemismo, porque es este el país forjado por esta burguesía, y retomar la agenda inconclusa de los rebeldes de 2001: "que se vayan todos, para comenzar".

Bibliografía

ALTAMIRA, JORGE

2009 "Entrevista", en Martín Fioretti y Federico Shinzato, *Las izquierdas en la política argentina*. Buenos Aires: Divino Tesoro.

AYERBE, LUIS FERNANDO

2002 *Estados Unidos e América Latina: a construção da hegemonia*. São Paulo: Unesp.

AZPIAZU, DANIEL Y EDUARDO BASUALDO

2002 *El proceso de privatización en Argentina*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.

BASUALDO, EDUARDO M.

2009 "Evolución de la economía argentina en el marco de las transformaciones de la economía internacional de las últimas décadas", en Enrique Arceo y Eduardo M. Basualdo (comps.), *Los condicionantes de la crisis en América Latina. Inserción internacional y modalidades de acumulación*. Buenos Aires: Clacso.

2001 *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina. Tres ensayos sobre la Argentina actual*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, FLACSO e IDEP.

BOBBIO, NORBERTO; NICOLA MATTEUCCI Y GIANFRANCO PASQUINO

1983 *Dicionário de política*. Brasília: Editora Universidade de Brasília.

CANO, WILSON

1999 *Soberania e política econômica na América Latina*. São Paulo: Unesp.

CATELA, LUDMILA DA SILVA
2001 *Situação-limite e memória: a reconstrução do mundo dos familiares de desaparecidos na Argentina*. São Paulo: Hucitec y Anpo CS.

CORTÉS CONDE, ROBERTO
1986 "The growth of the Argentine economy, 1870-1914", en Leslie Bethell (ed.), *The Cambridge History of Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.

EL DESCAMISADO
2015 *Apuntes políticos 2001-2014*. Edición especial. Buenos Aires: El Descamisado.

FIORETTI, MARTÍN Y FEDERICO SHINZATO
2009 *Las izquierdas en la política argentina*. Buenos Aires: Divino Tesoro.

FRONDIZI, SILVIO
1955 *La realidad argentina. Ensayo de interpretación sociológica*. Buenos Aires: Praxis.

FURTADO, CELSO
1970 *Formação econômica da América Latina*. Rio de Janeiro: Lia.

GAGGERO, ALEJANDRO; MARTÍN SCHORR Y ANDRÉS WAINER
2014 *Restricción eterna: el poder económico durante el kirchnerismo*. Buenos Aires: Futuro Anterior.

GALLO, EZEQUIEL
2004 *La pampa gringa*. Buenos Aires: Edhasa.

GERMANI, GINO
1965 *Política y sociedad en una época de transición. De la sociedad tradicional a la sociedad de masas*. Buenos Aires: Paidós.

GRUPO DE REFLEXIÓN RURAL E IGNACIO LEWKOWICZ
2003 *Estado en construcción*. Buenos Aires: Tierra Verde.

KAPLAN, MARCOS
1984 "50 años de historia argentina (1925-1975): el laberinto de la frustración", en Pablo González Casanova (coord.), *América Latina: Historia de medio siglo*. México: Siglo XXI.

KATZ, CLAUDIO
2014 "Contrasentidos del neodesarrollismo: el caso de Argentina", en Jairo Estrada Álvarez (coord.), *América Latina en medio de la crisis mundial. Trayectorias nacionales y tendencias regionales*. Buenos Aires: Clacso, pp. 227-242.
2013 "Anatomía del Kirchnerismo", en *Rebelión*, 17 de enero de 2013.
2009 "Entrevista", en Martín Fioretti y Federico Shinzato, *Las izquierdas en la política argentina*. Buenos Aires: Divino Tesoro.

KIRCHNER, NÉSTOR
2003 "Palabras del Presidente Néstor Kirchner en la Firma del Acta de Presentación del Programa de Asistencia Crediticia en Operaciones de Corto Plazo", 29 de marzo de 2003. Disponible en: http://www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo/24456-blank-90565382.

KOSACOFF, BERNARDO
2010 *Marchas y contramarchas de la industria argentina (1958-2008)*. Santiago: CEPAL.

LYNCH, JOHN
1987 "The River Plate Republics from Independence to the Paraguayan War", en Leslie Bethell (ed.), *Spanish America after Independence*. Cambridge: Cambridge University Press.

MURMIS, MIGUEL Y JUAN CARLOS PORTANTIERO
1973 *Estudos sobre as origens do peronismo*. São Paulo: Brasiliense.

NOVARO, MARCOS Y VICENTE PALERMO
2007 *A ditadura militar argentina (1976-1983)*. São Paulo: Edusp.

O'DONNELL, GUILLERMO
1982 *El Estado burocrático autoritario*. Buenos Aires: Belgrano.

REPETTO, NICOLÁS
1956 *Mi paso por la política*. Buenos Aires: Santiago Rueda.

ROCK, DAVID
2001 *El radicalismo argentino, 1890-1930*. Buenos Aires: Amorrortu.

ROMERO, JOSÉ LUIS
2001 *Breve historia de la Argentina*. Buenos Aires: Tierra Firme.

SARTELLI, EDUARDO
2007 *La plaza es nuestra. El Argentinazo a la luz de la lucha de la clase obrera en la Argentina del siglo XX*. Buenos Aires: RyR.

SCHINCARIOL, VITOR
2013 "A recuperação da economia argentina nos anos 2000", en *Revista Galega de Economia*, vol. 22, núm. 2, pp. 1-26.

SCHORR, MARTIN Y DANIEL AZPIAZU
2015 "Industria y economía (1976-2007)", en *El Descamisado*, *Apuntes políticos 2001-2014*. Buenos Aires: *El Descamisado*.

SVAMPA, MARISTELLA
2017 *Del cambio de época al fin de ciclo. Gobiernos progresistas, extractivismo y movimientos sociales en América Latina*. Buenos Aires: Edhasa.

VARESI, GASTÓN ÁNGEL
2012 "Crisis mundial, modelo de acumulación y lucha de clases en la Argentina actual", en Jairo Estrada Álvarez (coord.), *La crisis capitalista mundial y América Latina. Lecturas de economía política*. Buenos Aires: Clacso, pp.145-158.

Conversaciones

Buenos Aires, julio de 2017

CENTRAL DE TRABAJADORES DE ARGENTINA AUTÓNOMA (CTA). Dirigentes.
CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR (CTEP).Dirigentes.
GALLO MENDOZA, GUILLERMO. Especialista en cuestión agraria.
GAMBINA, JULIO. Economista y asesor sindical.
GRINGO. Dirigente de la CTEP.
HOURCADE, SOL. Abogada del equipo Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
ISACOVICH, PAULA. Profesora de la Universidad Nacional José Carlos Paz (UNIPAZ).

MARCOS, DANIEL. Militante del Movimiento Emancipador Peronista.
MOVIMIENTO DE OCUPANTES E INQUILINOS (MOI). Dirigentes.
MOVIMIENTO EMANCIPADOR PERONISTA. Dirigentes.
MOVIMIENTO TERRITORIAL LIBERACIÓN (MTL). Dirigentes.
MTL OFICIALISTA. Dirigentes del comedor y merendero La Colmena.
PALMISANO, TOMÁS. Integrante del Grupo de Reflexión Rural del Instituto de Investigaciones Gino Germani.
PCCE. Dirigentes del Centro Cultura Roque Centurión.
PETZ, MARÍA INÉZ. Integrante del Grupo de Reflexión Rural del Instituto de Investigaciones Gino Germani.
TUFRÓ, MANUEL. Coordinador del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS.

El proceso de cambio en Bolivia: ¿tensiones creativas o destructivas?

Este proceso de cambio es sin retorno; digan lo que digan, hagan lo que hagan. No volverá el neoliberalismo a Bolivia.

Evo Morales, al aprobar la nueva Constitución, enero de 2009

Su función [de la etnicidad estratégica] es hacer ***como si*** *los índios gobernaran,* ***como si*** *el país fuera plurinacional [...],* ***como si*** *las Fuerzas Armadas pudieran ser aliadas interculturales y democráticas de las y los indios. Este 'as if' (como sí fuera), se actualizaba a través de un discurso y de una identidad performática, que terminarán por encubrir las continuidades (neo) coloniales del pasado, bajo el rótulo de "proceso de cambio".*

Silvia Rivera Cusicanqui, 2015

Introducción

La elección de Evo Morales en 2005, luego de una movilización popular que derogó medidas neoliberales y derrocó a dos presidentes, prometió nuevos horizontes a la ola progresista. A diferencia del contexto venezolano, el líder cocalero se amparó en un poderoso movimiento popular, templado y radicalizado en luchas sucesivas. Un país con el mayor porcentaje de la población indígena del subcontinente, la sociedad boliviana se constituyó en una modalidad de apartheid de la minoría blanca en relación a la masa indígena.

Esta *sociedad abigarrada*[1] descrita por René Zavaleta Mercado produjo, en 1952, una revolución nacionalista protagonizada por trabajadores en reacción a una clase dominante que condujo al país a guerras y pérdidas territoriales. Doblegada la revolución entre la presión estadounidense y el temor a la autonomía popular, el país atravesó una secuencia de regímenes militares hasta enfrentarse a la crisis de la deuda y la hiperinflación en la década de 1980. La espiral neoliberal y la degradación política que siguieron solo fueron frenadas por la revuelta popular, dando como resultado una situación con las características de una coyuntura revolucionaria a principios del siglo XXI. Paradójicamente, la elección de Morales en este contexto ha devuelto la política a la institucionalidad. Después de superar la amenaza de secesión y guerra civil, el llamado proceso de cambio gravitó en una dirección conservadora en todas las dimensiones, causando la división de su base popular. El gobierno respondió a la disidencia con intolerancia, mientras que la intensificación del evismo y del extractivismo cuestionan la naturaleza del ambicioso cambio: ¿estaríamos ante un neoliberalismo de cara aymara?

La *sociedad abigarrada* entre revolución y dictaduras

Núcleo de la empresa colonial castellana, el territorio que comprende la actual Bolivia está poblado mayoritariamente por descendientes de poblaciones originarias, situación compartida por Perú y Ecuador. A pesar de la independencia boliviana en el siglo XIX, esta población continuó sometida a la explotación, mientras sus referencias culturales fueron discriminadas y marginalizadas conformando un

1 El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define la palabra abigarrado como "de varios colores ", especialmente si están mal combinados o "heterogéneos" reunidos sin armonía. El término lleva el sentido de amalgamado, sincrético, mezclado, multifacético, compuesto por distintas partes, pero que mantiene la particularidad o especificidad de cada uno de los componentes que se mezcla [n.e.].

patrón rígido de segregación social que se asemeja a la estratificación de castas. Sin embargo, subyacente a esta dominación, persisten formas económicas, políticas y culturales que remiten a relaciones sociales diversas que, a menudo, alimentan formas de resistencia.

Este patrón de segregación fue conceptualizado por Zavaleta Mercado, en el caso boliviano, como una sociedad abigarrada, refiriéndose a una formación social en la que se superponen diferentes tiempos históricos, correspondientes a distintas relaciones de producción poco articuladas a nivel político y cultural, expresándose en diferentes formas de gobierno, justicia, lenguas, entre otros factores[2]. Se diferencia de una formación socioeconómica porque es una "dominación parcial y aparente del modo de producción dominante y no la rearticulación del resto de los modos de producción al nuevo principio orgánico dominante" (Urquidi, 2007: 46).

Según Zavaleta Mercado (1988: 20), el Estado correspondiente a esta formación histórica busca invisibilizar la diversidad en lugar de representarla, agudizando contradicciones que emergen en los momentos de crisis en toda su concreción: son momentos de desgarramiento (en oposición al abigarramiento) y universalidad. De ahí que el intelectual boliviano aboga por el estudio de la "crisis nacional general como método de conocimiento", entendiendo que ella traduce el movimiento de la sociedad boliviana, que avanza por convulsiones, derivando en la propuesta metodológica de "momentos constitutivos" como referencia de análisis (Zavaleta Mercado, 1988: 207)[3].

---

2 Luis Tapia (2011) reformuló esta noción refiriéndose a Bolivia como un país "multisocietal", que no es lo mismo que una sociedad multicultural, donde "el pueblo puede tener identidades diferentes, pero no cuenta con una forma de identificación del gobierno diferente y es parte de las mismas estructuras económicas y políticas".

3 "Desde el punto de vista metodológico, se trata de aislar determinados acontecimientos por circunscripción en el tiempo, o situaciones regionales por circunscripción en el espacio. Eso es una respuesta a la escasez de información y, se trata sin duda, de una selección simbólica. En defensa del método, debe decirse que ninguna ciencia social es posible de otra manera en un país con las características de Bolivia" (Zavaleta Mercado, 2008: 9).

La revolución nacional de 1952 es uno de estos momentos constitutivos, referencia fundamental en la constitución de la Bolivia contemporánea. Sus orígenes se remontan a la Guerra del Chaco (1932-1935), episodio que reveló la falta de compromiso de la clase dominante con el país, al mismo tiempo que generalizó un horizonte nacional-popular en una sociedad fragmentada geográfica y culturalmente. Dos décadas de inestabilidad política y conflicto social culminaron en el levantamiento popular de 1952, derrocando no solamente al gobierno, sino también al propio Estado.

La trayectoria de este acontecimiento, uno de los más notables en la región en el siglo XX, ilustra la imbricación entre revolución nacional y revolución democrática en América Latina. El núcleo de la cuestión es entender cómo un proceso que comenzó con la toma del Estado bajo una insurrección popular, en una circunstancia en que hasta el Ejército se disolvió, capituló ante la instauración de una dictadura militar en 1964, el mismo año del golpe en Brasil.

Algunos elementos son esenciales para comprender este recorrido. El gobierno revolucionario vivió en permanente tensión entre el impulso radicalizador de los trabajadores, las presiones contrarrevolucionarias de los Estados Unidos y la propia naturaleza moderada de la dirección del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que asumió el Estado.

Desde el punto de vista de los trabajadores, la relación establecida con el partido que subió al gobierno fortaleció su protagonismo político, expresado en el nombramiento de varios ministros obreros. Pero, al mismo tiempo, la imposibilidad de una política de clase autónoma condenó a los trabajadores a una constante vulnerabilidad. En la síntesis de Zavaleta Mercado, se trataba de una clase "tan victoriosa como impotente".

En el campo, la aceleración de las luchas sociales obligó al gobierno a decretar la reforma agraria con la intención de controlar un proceso que no podía contener. Se pretendió canalizar políticamente ese movimiento por medio de sindicatos, a pesar de las situaciones

regionales diferenciadas, a menudo establecieron una relación clientelar con el Estado revolucionario (Rivera Cusicanqui, 1984). La difusión de las escuelas rurales y la universalización del voto —avances importantes de la revolución—, también se prestaron a la instrumentalización, con el objetivo de construir la hegemonía de un partido renuentemente revolucionario.

También es posible analizar la evolución del proceso bajo la perspectiva de la sumisión progresiva a los Estados Unidos. El punto de inflexión fue la adopción de un programa de estabilización económica del FMI en 1956, congelando los salarios, recortando gastos públicos e inviabilizando cualquier industrialización alrededor de la minería. Este movimiento provocó un distanciamiento gradual del movimiento obrero que, a su vez, optó por una política reformista bajo el liderazgo de Juan Lechín, alienando el apoyo de sectores antiimperialistas, como los trotskistas del Partido Revolucionario Obrero (POR).

En relación con los negocios internacionales, la visión del presidente Víctor Paz Estenssoro se sintetizó en una declaración al Congreso en la cual decía que sería prudente evitar el destino de Irán —en referencia a la destitución de Mohammed Mossadegh, tramada por la Central de Inteligencia Americana (CIA) algunos años antes (Hylton y Thomson, 2007: 81)—. Confrontado con la suspensión del 70% de las exportaciones de estaño como resultado de la negativa del magnate Simón Patiño y de los Estados Unidos para refinar el mineral en función de las nacionalizaciones, el gobierno optó por indemnizar a los "barones del estaño", que de todos modos enfrentaban dificultades con el agotamiento de las reservas minerales. Mientras tanto, el capital internacional mantuvo el control sobre las operaciones centrales como la fundición y el transporte.

La docilidad del nuevo gobierno fue reconocida por los Estados Unidos, que brindó al país la mayor ayuda económica entre las naciones latinoamericanas en ese momento. En 1958, aproximadamente un tercio del presupuesto nacional se financió de esta manera, constituyendo la ayuda *per cápita* más grande del mundo. Al mismo tiempo,

la potencia rechazaba financiar a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Por estos motivos, el presidente John F. Kennedy (1961-1963), que agonizó con la radicalización cubana y se refirió al proceso boliviano con estas palabras: "Esta gran revolución abrió un camino para que otros la sigan" (Kennedy, 1961: 184). El país se convirtió, junto a la Venezuela de Rómulo Betancourt (1959-1964), en una vitrina de lo que sería la "revolución democrática", abrazada entonces por la Alianza para el Progreso[4].

Paralelamente, los Estados Unidos asesoraron la reconstrucción del Ejército boliviano. El nuevo Estado se enfrentaba a la necesidad de contener a las masas en un país donde las milicias obreras mantuvieron las armas y los mineros manejaban dinamita. Cuando Paz Estenssoro inició su tercer mandato en 1964, enfrentó una creciente oposición del movimiento obrero, incluso del sector moderado liderado por Lechín, mientras era acosado por la derecha. El golpe que acortó su mandato fue liderado por un oficial de la Fuerza Aérea, que apenas existía en la época de la Guerra del Chaco —por lo tanto—, estuvieron constituidas integralmente bajo el auspicio estadounidense.

La dictadura que siguió se apoyó en la fidelidad campesina al Estado, construida por el gobierno nacionalista, para consolidar el llamado Pacto Militar-Campesino. Al ganarse la simpatía rural, el régimen neutralizó la solidaridad entre los trabajadores mientras reprimía brutalmente a los mineros. La injerencia de los Estados Unidos en el país alcanzó niveles extremos, como se deduce de las circunstancias del asesinato de Ernesto Che Guevara en 1967 y también del relato de un exagente de la CIA, entre otras fuentes (Gott, 1971; Agee, 1976).

La muerte del dictador René Barrientos, en 1969, en un helicóptero obsequiado por una compañía petrolera, posibilitó la ascensión de un militar aún relacionado al nacionalismo, que fue sucedido poco

4 La Alianza para el Progreso fue un proyecto político ejecutado por el gobierno de los Estados Unidos durante el mandato de John F. Kennedy. El objetivo era integrar a los países del continente americano en los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales contra la "amenaza" comunista de la Unión Soviética en la región [n.e.].

después por el general Juan José Torres que abortó una conspiración reaccionaria apoyado en la movilización de trabajadores. A diferencia de 1952, en esta ocasión los trabajadores se negaron a participar en el gobierno, conformando una Asamblea Popular aceptada por el general, que, sin embargo, se empeñó poco en fortalecer los lazos con la izquierda. En América del Sur, eran los días del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas en Perú, comandado por Juan Velasco Alvarado y del triunfo de la Unidad Popular (UP) en Chile, bajo la presidencia de Salvador Allende.

El espectro de la dualidad de poderes precipitó un contragolpe militar respaldado por Brasil y liderado por otro cuadro entrenado en los Estados Unidos, el coronel Hugo Banzer (1971-1978). Banzer instauró una dictadura similar a la de los regímenes contemporáneos del Cono Sur, mientras el general Torres fue asesinado en Argentina en el marco de la Operación Cóndor (Dinges, 2004). En el plano político, el nuevo régimen se basó principalmente en el agronegocio que prosperaba en la región oriental, de donde provenía Banzer, dando lugar a lo que el exvicepresidente Álvaro García Linera (2013c) describió como poder empresarial-hacendal, un bastión reaccionario en la Bolivia contemporánea.

Por otro lado, fueron abandonadas las políticas sociales y económicas que sustentaban el Pacto Militar Campesino. El punto de inflexión en esta relación fue la masacre de trabajadores campesinos en los valles de Cochabamba en 1974, cuando protestaban contra el aumento de precios de los productos básicos. El resurgimiento de un movimiento campesino autónomo se nutrió de una corriente política que recuperó al mártir aymara Túpac Katari como símbolo de la reivindicación indígena y cuya referencia intelectual era la obra *La revolución india*, de Fausto Reinaga. El llamado katarismo fue alimentado en el altiplano boliviano por una subcultura urbana de rasgos indígenas, cultivada en medio de la migración a La Paz. Este nuevo sindicalismo —protagonizado por jóvenes que ya habían nacido bajo la reforma agraria y que tenían una visión crítica del sindicalismo

paraestatal—, cumplió un papel fundamental en las movilizaciones por la democracia, convergiendo en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), fundada en 1979 (Rivera Cusicanqui, 1984).

El derrocamiento de Banzer en 1978, cuando se desaceleró la expansión económica, generó un período de inestabilidad política en el que nueve gobiernos se sucedieron hasta el restablecimiento de las elecciones en octubre de 1982 (Mesa, Gisbert y Mesa, 1999: 671). Un movimiento popular ascendente derrocó a tres dictaduras: Banzer en 1978; Alberto Natusch, en 1979; y Luis García Meza y sus sucesores a partir de 1981, a pesar de la represión sin precedentes practicada por este último, que asesinó a más de mil militantes en menos de un año. García Meza defendía los intereses de otro sector económico que prosperó en el este del país bajo Banzer y cuya importancia creció extraordinariamente en la década de 1980: el narcotráfico[5].

Democracia y neoliberalismo

Los contornos generales de la historia boliviana a partir de 1982 se asemejan a la trayectoria de diversos países sudamericanos en el período, aunque con una intensidad singular. Después de un intento efímero de enfrentar los problemas económicos que dejó la dictadura por un gobierno de centro-izquierda, el proyecto neoliberal fue implementado en el país. A partir de entonces, se sucedieron gobernantes vinculados a distintos matices de la política post-revolucionaria, entre el caudillo del MNR y un exdictador. Se observa una corrosión progresiva del tejido socioeconómico en el marco de un debilitamiento de las organizaciones de clase convencionales, lo que acentuó la vulnerabilidad del campo popular, mientras lentamente maduraban nuevos movimientos sociales. Este proceso llevó al desgaste de los partidos identificados con la política convencional, incapaces de proponer una

5 Fallecido el 29 de abril de 2018, García Meza fue condenado a treinta años de prisión por los asesinatos ocurridos durante su mandato y por perjuicios económicos al país [n.e.].

alternativa a las recetas de los organismos multilaterales, que proponen enfrentar los problemas del neoliberalismo con más neoliberalismo. Esta espiral de degradación, que culminó en la elección del dictador Hugo Banzer en 1997, como sucesor de Gonzalo Sánchez de Lozada —un millonario que hablaba español con acento inglés—, solo fue frenada por un contundente ascenso de nuevos movimientos sociales, abriendo otro capítulo en la historia del país, que incluye la elección de Evo Morales.

En 1982, el fin de la secuencia de dictaduras militares fue precipitado por intensas movilizaciones sociales en el campo y en la ciudad. En una elección indirecta, fue elegido un expresidente post-revolucionario, Hernán Siles Zuazo —cuyo primer gobierno duró de 1956 a 1960—, que abandonó el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), dominado por Paz Estenssoro, para unirse a una coalición de partidos de centro-izquierda, la Unidad Democrática y Popular (UDP). Encarando una difícil coyuntura económica heredada de la dictadura, en que confluían la recesión, la depreciación cambiaria, los desequilibrios en la balanza comercial, la presión inflacionaria y la explosión de la deuda externa, como ocurría en otros países de la región, Siles Zuazo (1982-1985) se enfrentó a los problemas característicos de una administración centrista en América Latina. Confrontado en las calles por el movimiento sindical, él recurrió a la emisión monetaria para pagar compromisos, exacerbando las presiones inflacionarias. En el Congreso, sufrió la inclemente oposición de su excorreligionario Paz Estenssoro, que se alió al partido recién fundado por el exdictador Banzer: Acción Democrática Nacionalista (ADN). Aislado en un contexto de hiperinflación y descontento social generalizado, Siles Zuazo anticipó el fin de su mandato.

El cuarto gobierno de Paz Estenssoro (1985-1989) desmanteló significativamente la estructura construida por el nacionalismo y mantenida por las dictaduras, implementando el neoliberalismo en las antípodas del proyecto encarnado por la revolución. El célebre Decreto 21060, diseñado por el Ministro Sánchez de Lozada con el asesoramiento de

Jeffrey Sachs, fue exitoso en el control inflacionario, a costa de un notable deterioro del tejido social del país. En este contexto, el despido de 23.000 mineros de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) motivó la "Marcha por la Vida", que terminó derrotada por la represión estatal, marcando un punto de inflexión del poder sindical en el país —que no se recuperaría—. Muchos mineros que perdieron el empleo en estos años emigraron a la región del Chapare, donde florecía el cultivo de la coca, llevando su experiencia de lucha a uno de los pocos sindicatos que se fortaleció bajo el neoliberalismo (Vadillo, 2015).

El sucesor de Paz Estenssoro fue Jaime Paz Zamora (1989-1993), figura vinculada al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), partido que conformó la Unidad Democrática y Popular (UDP). A pesar de haber dicho en otros tiempos que "un río de sangre" separaba a Banzer del MIR, Paz Zamora gobernó en alianza con el exdictador y reafirmó el neoliberalismo, mientras intensificaba la presión de Estados Unidos para combatir la coca, que el presidente no se atrevió a implementar. Esa misma política fue seguida por su sucesor, Sánchez de Lozada (1993-1997), arquitecto del Decreto 21060. "Goni", como es conocido este boliviano que creció en los Estados Unidos, tuvo como vicepresidente a un importante líder katarista, Víctor Hugo Cárdenas. Más allá del rechazo de un sector significativo del movimiento indígena a esta composición, era sintomático que nuevas configuraciones sociales se delinearan en aquel momento, cuando la cuestión étnica asumió un papel central. A nivel político, la investigación de Loayza Bueno (2011: 104-105) constató que la preferencia por los partidos o candidatos con discursos étnicos aumentó notablemente desde 1991. Por lo tanto, la radicalización de las políticas neoliberales, que implicó la privatización de las empresas estatales del país bajo el eufemismo de una "capitalización", avanzó al mismo tiempo que las políticas indigenistas de matriz multiculturalista. Este neoliberalismo multicultural fue plasmado en la Constitución de 1994.

Más importante que la promoción de la educación bilingüe y el reconocimiento constitucional del carácter multiétnico y plurinacional

del país fue la reglamentación de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Otra iniciativa que pretendía dar un matiz democrático a la gestión fue la "ley de participación popular", que amplió la posibilidad de participación cívica y vecinal en el gobierno municipal, generando la expectativa de ocupar gobiernos locales. Según Almaraz (2015), que participó en la primera dirección del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), el MAS se creó con este objetivo y no tenía un programa nacional. La organización del Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu (CONAMAQ) también está asociada a este momento, aunque desde una perspectiva distinta, ya que privilegió la lógica del *ayllu*[6] como forma de organización (Schavelzon, 2015).

Mientras tanto, la radicalización del proyecto privatista sembraba la crisis social. Por ejemplo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue fragmentado y subastado, las multinacionales que firmaron nuevos contratos pagaron *royalties* que fueron reducidos de 50% a 18%. Los 350 millones de dólares anuales que la empresa dio al Tesoro Nacional, entre 1985 y 1996, no se repitieron y en algunos años, la transferencia fue siete veces menor (Hylton y Thomson, 2007: 102). Así, la escalada del desempleo estuvo acompañada de una reducción en los ingresos del gobierno, lo que disminuía el margen del Estado para las políticas públicas y aumentaba la dependencia de los préstamos internacionales, que subieron del 3,3% al 8,6% del PIB, entre 1997 y 2002, además de la ayuda estadounidense; ambas estaban condicionadas a la profundización del neoliberalismo y a la política de erradicación de la coca.

Este engranaje perverso solo fue frenado por la intensificación de las protestas sociales a partir de la Guerra del Agua en 2000, que culminó con la Guerra del Gas en 2003, la caída de dos presidentes y la elección de Evo Morales. No se entrará en detalle sobre estos

6 *Ayllu* es el grupo familiar extenso con un origen común, poseedor o no de un territorio utilizado de modo comunitario para la subsistencia de sus integrantes [n.e.].

eventos (Crabtree, 2005; Hylton y Thomson, 2007; Dangl, 2009; Webber, 2013). Sin embargo, se esboza una visión general sustentando la hipótesis de que Bolivia atravesó una coyuntura revolucionaria, en la cual la insubordinación popular inviabilizó el comando de las clases dominantes hasta la elección de Morales en 2005, y la instalación de la Asamblea Constituyente, procesos que contuvieron las posibilidades de cambio en este contexto extraordinario.

Coyuntura revolucionaria

En el plano político, la caída de Bolivia bajo el neoliberalismo alcanzó su punto más bajo con la elección del dictador Hugo Banzer en 1997. Su mandato estuvo marcado por la adhesión a la política estadounidense de erradicación de la coca, que había sido atenuada por los presidentes anteriores. La escalada del conflicto con los cocaleros proyectó nacionalmente el movimiento liderado por Evo Morales, quien asociaba la hoja de coca con las prácticas ancestrales y con el nacionalismo boliviano, ante la evidente injerencia extranjera en el país. Esta dinámica fue mantenida e intensificada por el vicepresidente Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002) cuando Banzer falleció en 2001.

El ascenso del movimiento de masas en esta coyuntura tiene como referencia inicial la Guerra del Agua, que estalló en Cochabamba en 2000. La semilla de la confrontación fue el compromiso asumido por el Banco Mundial en 1997 de condonar 600 millones de dólares de la deuda del país si el sistema de aguas de Cochabamba se privatizaba, lo que sucedió en 1999. Así como ocurriría en el Altiplano, donde estalló autónomamente un conflicto similar, la idea de pagar por el uso del agua hería los usos y costumbres asociados al modo de vida comunitario arraigado entre los campesinos del país. En ambos casos, la represión estatal provocó una escala del conflicto y el campo popular se radicalizó. En Cochabamba, las asambleas populares (cabildos) reunieron a más de cincuenta mil personas en contra del control multinacional sobre los recursos naturales, debatiendo la propuesta de una Constituyente. El gobierno se vio obligado a retroceder.

En el Altiplano, los campesinos aymaras, liderados por Felipe Quispe al frente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), bloquearon las carreteras principales del país, resucitando el fantasma del cerco indígena de La Paz, realizado por Túpac Katari en el siglo XVIII. El Estado usó al ejército y la fuerza aérea en la represión, irrumpiendo en casas y torturando personas. Los víveres eran llevados por rutas aéreas a la capital por orden de Banzer, mientras que los campesinos realizaban asambleas multitudinarias en Achacachi, marcando el resurgimiento del radicalismo aymara. Finalmente, el gobierno se comprometió con una larga lista de demandas, que incluían la suspensión del Decreto 21060. Pero las protestas volverían al año siguiente.

Los nuevos protagonistas de las luchas sociales en Bolivia han sido descritos como "poco estructurados, múltiples en su composición (vecinos, sindicalistas, cocaleros, maestros, campesinos, indígenas) y en sus demandas, pero todos parecidos por su alta intensidad y emotividad, expresando las fracturas históricas del país" (Lazarte, 2015: 5). Practicaban formas radicales de acción directa, reemplazando la huelga tradicional, que detiene la producción de bienes, por el bloqueo que impide su circulación. También cultivaban modalidades de democracia directa, como los multitudinarios cabildos abiertos, lo que alentó a las fracciones del movimiento a radicalizar la crítica al Estado en los años siguientes.

Otros sectores presionaban por una reforma del Estado. En 2002, una marcha por derechos políticos no tuvo éxito inmediato, pero difundió la propuesta de una Constituyente en el imaginario popular. Esta manifestación contrariaba los intereses de Morales, en ese entonces enfocado en las elecciones que ocurrirían en junio de ese año. En estas elecciones, "Goni" fue reelegido, pero con un pequeño margen en relación al candidato del MAS: 22,5% contra 20,9%. La campaña del líder cocalero recibió un empujón del embajador estadounidense, que había declarado que cesaría la ayuda económica de los Estados Unidos a Bolivia si Morales fuera elegido (Stefanoni y Alto, 2014: 56).

La Bolivia que "Goni" asumió, en 2002, era diferente de aquella que encontró como ministro en 1985. Uno de los países con mayor presencia del Estado en la economía era ahora una de las economías más abiertas de América Latina. La fuerza laboral informal alcanzaba el 68% y el desempleo se había triplicado desde 1990. Bolivia era el país más desigual de la región, después de Brasil. La pobreza histórica no había disminuido: el 41,3% de la población vivía en extrema pobreza y la mortalidad infantil y la baja esperanza de vida solo eran superados por Haití. La economía enfrentaba crecimiento bajo o negativo por quinto año consecutivo, además de un gran déficit en la balanza de pagos, mientras que los datos del Ministerio de Trabajo revelaban un aumento significativo de las huelgas y de las protestas sociales.

La decisión de implementar un impuesto del 12,5% en los salarios superiores a 110 dólares exigido por el FMI desencadenó una nueva ola de protestas en febrero de 2003. Los policías de bajo rango se declararon en huelga y la salvaje represión del Ejército desencadenó revueltas populares en diferentes sectores que se extendieron a otras partes del país, obligando al gobierno a retroceder. Pocos meses después, sin embargo, se anunció un plan, que el presidente negociaba sigilosamente desde su mandato anterior, para exportar gas boliviano a California, a través de puertos chilenos. Esta propuesta hería la sensibilidad nacional popular, porque remitía a la histórica explotación extranjera de los recursos naturales del país, así como a la delicada relación con Chile desde la pérdida de la salida al mar en la Guerra del Pacífico (1879-1883).

En los siguientes meses, demandas de naturaleza diversa convergieron alrededor de esta bandera nacionalista engendrando una extraordinaria secuencia de luchas sociales que tuvieron como epicentro El Alto, un municipio en la periferia de La Paz que fue ocupado y controlado por la población organizada. Nuevamente la represión implacable del Estado, que resultó en la muerte de decenas de personas, elevó el nivel de las protestas. Los enfrentamientos alcanzaron proporciones épicas, como en la noche cuando la multitud

movió vagones del tren hasta el puente que conecta La Paz con El Alto, cerrando el flujo vehicular e impidiendo incluso el paso de tanques. En el plano político, las demandas se condensaron en lo que se conoce como la "agenda de octubre", proponiendo fundamentalmente la industrialización del gas en lugar de su exportación por Chile; el fin de cualquier posibilidad de participar en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); la anulación de la ley de "Protección y seguridad para el ciudadano", que legitimaba la represión y la renuncia del presidente. El último punto se alcanzó con la intensificación de las protestas en ese mes, reuniendo a más de 300 mil personas en La Paz.

El gobierno fue asumido por el vicepresidente Carlos Mesa (2003-2005), un historiador y comunicador de televisión, hijo de intelectuales prestigiosos, que aparecía como una figura ponderada en medio de la crisis. Fue un acuerdo polémico respaldado por el MAS, que en todo momento defendió una salida constitucional para la situación. En retrospectiva, es evidente que el partido calculaba un triunfo electoral en las próximas elecciones y tenía interés en aparecer como garante del orden.

La breve presidencia de Mesa confirmó una agudización de las contradicciones sociales, polarizadas entre el retorno de la protesta popular ante la nacionalización frustrada y el recrudecimiento de la reinvindicación autonomista de la Media Luna, una región compuesta por los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, que concentra reservas de hidrocarburos y el agronegocio, que tiene su centro en Santa Cruz de la Sierra. Parte significativa de los cruceños alberga sentimientos regionalistas anclados en una ideología racista, contraponiendo la población de las Tierras Bajas (*cambas*) con los indígenas del Altiplano (*kollas*), a pesar de la existencia de pueblos indígenas en zonas orientales (Soruco, 2008). Por lo tanto, una escisión regional se fusionaba con las tensiones étnicas y de clase, explicitando en la crisis las contradicciones de la propia formación del país, como había señalado Zavaleta Mercado.

En el nivel popular, el recrudecimiento de las movilizaciones fue una respuesta al rechazo del gobierno a considerar la nacionalización de los hidrocarburos. Con el apoyo del MAS, Mesa articuló un complejo plebiscito con cinco preguntas, pero que eludía la pregunta fundamental: la expropiación de las multinacionales por parte del Estado. A pesar del boicot de importantes sectores populares, el resultado de la votación abrió la posibilidad de modificar los términos de la relación del Estado con las multinacionales del sector —lo que a su vez fue interpretado como una amenaza a la propiedad privada y a las inversiones externas, sobre todo por la élite cruceña—. A medida que las movilizaciones se intensificaron en ambos polos, Mesa se alineó con Santa Cruz y su "agenda de enero" en defensa de la autonomía de los negocios, lo que obligó a un reticente MAS a distanciarse de un gobierno del que era un aliado informal. Las manifestaciones volvieron a adquirir dimensiones multitudinarias reuniendo a medio millón de personas en La Paz. Mesa no llamó a los militares para reprimir las protestas y hostigado en el Congreso y en las calles, renunció.

A pesar de la evidencia de que la movilización popular crecía, se radicalizaba y fortalecía su autonomía en relación a las manifestaciones de 2003, nuevamente Morales intercedió para limitar el desarrollo de la rebelión al nivel político. Fue así que, en diciembre de 2005, se convirtió en uno de los raros presidentes de Bolivia en ser elegido con la mayoría de los votos (54%). Se iniciaba el llamado "proceso de cambio".

El proceso de cambio

Desde el primer momento, el gobierno de Morales fue interpretado internacionalmente como una gestión progresista, sumándose a la ola de presidentes elegidos en América del Sur en reacción al neoliberalismo. Las credenciales eran sólidas: el origen pobre y los rasgos indígenas en un país marcado por el racismo; la asociación con la hoja de coca, que se convirtió en un símbolo de autodeterminación cultural; el antagonismo a los Estados Unidos, por esta misma razón;

la identificación con la Madre Tierra (Pachamama), el Vivir Bien (Suma Qamaña) y otros valores de raíz indígena; la trayectoria como liderazgo sindical rural; las circunstancias del ascenso a la presidencia, junto a una poderosa movilización que revirtió medidas neoliberales y derrocó a dos presidentes. La difusión de esta imagen se puede atestiguar con numerosos ejemplos, de los cuales se citan dos.

En 2009, Morales propuso a la ONU que el Día de la Tierra, celebrado el 22 de abril, se renombrara como el Día de la Madre Tierra, una denominación que "vincula concepciones originarias que hasta hace poco eran vistas como primitivas en relación a concepciones sofisticadas y modernas, considerando la vida humana como un paso más en la vida de todo el cosmos". En función a esta propuesta, el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Miguel d'Escoto, llamó a Morales el "héroe mundial de la defensa de la Madre Tierra" (Albó, 2014: 20). Más recientemente, en el ejercicio de la presidencia del Grupo 77 + China, en 2014, el líder boliviano convocó la Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno "por un nuevo orden mundial para vivir bien", e incluyó en sus resoluciones los temas de la Madre Tierra y del Vivir Bien, además de los principios andinos del "ama suwa (no seas ladrón), ama llulla (no seas mentiroso) y ama qhilla (no seas flojo)" (Guevara, 2015: 8).

El segundo ejemplo es un artículo que circuló en Brasil a principios de 2016, de Leonardo Boff, referencia internacional de la Teología de la Liberación. Se trata de una crítica al Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) titulada "Los errores del PT y el sueño de Lula". En este texto, Boff evocó al gobierno de Morales como un contrapunto a la trayectoria del PT bajo Lula:

> En Bolivia, Evo Morales Ayma buscó el apoyo de la vasta red de movimientos sociales, de donde él provenía como un líder fuerte. Lo consiguió luchando contra los partidos. Después de años construyó una base de apoyo popular, de indígenas, de mujeres y de jóvenes, al punto de dar un rumbo social al Estado y lograr

> que más de la mitad del Senado esté hoy compuesto por mujeres. Ahora, los principales partidos lo apoyan y Bolivia goza del mayor crecimiento económico en el continente (Boff, 2016).

Esta es la imagen difundida por el propio presidente que anunció que gobernaría de acuerdo con el principio zapatista de "mandar obedeciendo". La difusión internacional de esta lectura también fue atestiguada por la elección del país para ser la sede del Segundo Encuentro Mundial de Movimientos Populares con el Papa Francisco, en julio de 2015.

La noción de que este es un "gobierno de los movimientos sociales" encontró su principal ideólogo en el vicepresidente Álvaro García Linera, un intelectual con militancia previa en el katarismo[7]. García Linera acuñó el término capitalismo andino-amazónico[8] para describir las posibilidades y los límites del gobierno posesionado en 2006 y que más recientemente fue denominado como "socialismo comunitario" (García Linera, 2015). Subyacente a estos conceptos está la propuesta de que el fortalecimiento de los procesos comunitarios en un país con las características económicas y culturales de Bolivia es el camino para superar el capitalismo en el largo plazo[9]. El vicepresidente se refirió a los obstáculos enfrentados por este proceso, principalmente en el campo popular, como las tensiones creativas de "nuestra revolución", entre las cuales destaca "la contradicción creativa entre la necesidad y la voluntad de industrialización de las materias primas y la necesidad imprescindible del Vivir Bien" (García Linera, 2011: 62).

---

7 Llamado por Silvia Rivera Cusicanqui como "el mejor alumno del peor [Pierre] Bourdieu", García Linera en realidad estudió matemáticas y recientemente se reveló que no terminó su carrera.

8 Definido como "la construcción de un Estado fuerte, que regula la expansión de la economía industrial, extraía sus excedentes y los transfería al ámbito comunitario para promover formas de auto-organización y el desarrollo mercantil propiamente andino y amazónico" (García Linera, 2006a).

9 Esta lectura también surge de la noción de Estado Integral, entendido como el lugar donde el Estado "comienza a disolverse en un largo proceso en la propia sociedad, y de donde esta última comienza a apropiarse, cada vez más, de los procesos de decisión del Estado" (García Linera, 2014: 29).

En este texto no será posible discutir la retórica que adorna el "proceso de cambio" difundido por la vicepresidencia, incluso para consumo interno[10]. Se debe indicar que, en vísperas de las elecciones por un cuarto mandato de Morales, en 2016, los principales líderes indígenas y ambientales del país, así como numerosos intelectuales y asesores de movimientos sociales, tenían una visión muy diferente sobre el gobierno. Para comprender el punto de vista crítico, se describe la evolución de la gestión de Evo Morales entre las disputas para aprobar una nueva Constitución, la afirmación del MAS en el poder en las elecciones de 2009 y la demanda de un cuarto mandato por *referéndum*, en 2016.

El gobierno del MAS se enfrentó en sus primeros años a un desafío crucial. En línea con la reinvindicación popular, Morales siguió el camino abierto por Hugo Chávez y convocó a una Asamblea Constituyente. De antemano, la decisión de que la participación en el Congreso estaría restringida a los partidos, prohibiendo la representación de movimientos o naciones indígenas, fue interpretada como un revés para el campo popular, pues prácticamente obligaba a los candidatos a afiliarse al MAS. Sin embargo, la elección otorgó a este movimiento solamente la mayoría simple en el Congreso (54%), menos de los dos tercios necesarios para avanzar sin que fuese necesario aliarse con otras fuerzas. Las esperanzas de cambio que confluyeron para el plenario se enfrentaron con una oposición decidida a impedir la nueva Constitución, con el pretexto de una demanda por descentralización y autonomía articulada desde Santa Cruz. El liderazgo de este bloque fue asumido por el vicepresidente de Banzer, Jorge "Tuto" Quiroga, que decidió cambiar el nombre del partido del dictador fallecido en 2002 a Poder Democrático y Social (PODEMOS).

La intransigencia de la oposición desencadenó un clima de tensión permanente entre la amenaza separatista y la inminencia de una

10 Llama la atención que Ramiro Saravia, quien hace años realiza un trabajo notable de enseñanza abierta en la plaza central de Cochabamba, frente a la Red Tinku, repite en sus exposiciones varios motivos difundidos por la vicepresidencia. Una crítica a la visión de García Linera de la identidad boliviana se encuentra en Rivera Cusicanqui (2015: 23-30).

guerra civil, ya que la base masista del altiplano planeaba cercar a sus enemigos. Fue en este contexto que ocurrió la expulsión del embajador estadounidense Philip Goldberg, veterano de la secesión en Kosovo y acusado de financiar a los autonomistas, y de la Drug Enforcement Administration (DEA, por su sigla en inglés), la agencia de drogas de los Estados Unidos. La solución a este impase exigió prolongadas negociaciones, en las cuales el gobierno cedió a las demandas de la oposición que reescribió 130 artículos del texto acordado de la Constitución. La nueva Constitución solo fue aprobada en el año 2009, lo que en aquellas circunstancias fue interpretado como una victoria política del MAS.

De hecho, en las elecciones generales que siguieron, Morales fue reelegido con el 64 % de los votos, y el MAS conquistó la mayoría de dos tercios en el Congreso y en el Senado. La oposición constitucional articulada en torno a PODEMOS se disolvió en un escenario en el que los partidos tradicionales estaban derrotados. Por otro lado, el MAS contaba con una sólida base popular alrededor del Pacto de Unidad, sellado en 2004 entre las principales organizaciones del país: la CSUTCB, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa, CONAMAQ, cocaleros e indígenas de las Tierras Bajas, reunidos en la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). La situación que García Linera describió como un "empate catastrófico", refiriéndose al período inaugurado en 2003, entraba en la fase de desempate. Y el MAS ganaba por goleada. En estas circunstancias, el riesgo era que Morales se sintiese como el "monarca del país" (Ávila, 2015).

Al contrario de lo que cabría esperar, en los años siguientes hubo continuas deserciones en el campo popular e importantes adhesiones de la oligarquía. La primera marcha contra Morales ocurrió en 2010, reinvindicando la autonomía territorial. Esta era una demanda central de los pueblos indígenas, asociada a la plurinacionalidad consagrada en el nuevo nombre del país: Estado Plurinacional de Bolivia. En

contraste con las políticas multiculturales implementadas por Sánchez de Lozada, el control territorial implicaba soberanía política, que a su vez señalaba hacia una justicia propia y relaciones económicas distintas. Sin embargo, la regulación de la ley imponía un conjunto de trabas para hacer efectivo este derecho constitucional, resultando en la práctica en territorios y municipios indígenas como parte de la estructura del Estado que se pretendió modificar. Salvador Schavelzon (2015: 53) sintetiza la paradoja: "La autonomía nació como un orden para debilitar al Estado. Ahora el Estado se indigenizó y la autonomía pierde la fuerza que tuvo antes".

Un segundo antagonismo entre el gobierno y su base fueron las protestas en respuesta al decreto promulgado en la Navidad de 2010, instituyendo un impuesto que aumentaría el precio final del combustible en más del 70%. Difundida como una medida necesaria para frenar el gasto público con subsidios, una encuesta minuciosa reveló que, en realidad, la acción explicitaba los límites de la nacionalización de los hidrocarburos.

Anunciada el 1 de mayo de 2006, en medio de una intensa conmoción, la nacionalización se tradujo, en última instancia, en una profundización de la reforma tributaria iniciada en 2005 por Mesa, cuando los impuestos aumentaron del 18% al 50% en el sector. La revisión de los contratos entre las multinacionales y el Estado elevó nuevamente los impuestos, que sumaron el 62,5%, al mismo tiempo que dio nueva vida a YPFB al comprar, a precios altos, la mitad más una de las acciones de cinco empresas que en el pasado habían sido estatales (Arze Vargas y Gómez, 2013: 78). Sin embargo, el Estado no dirige el sector, ya que las multinacionales controlan las reservas y la extracción, incluso los llamados megacampos, de los cuales depende la producción de petróleo y de gas del país. A pesar de que la tasa de ganancia de las empresas disminuyó, la masa de lucro aumentó, toda vez que el valor de la producción casi se triplicó entre 2004 y 2010. En 2010, las multinacionales controlaban más del 80% de la producción, porcentaje que creció, especialmente en la participación

de Petrobras, que aumentó de 56,7% en 2005 a 63,7% en 2010 (Arze Vargas *et al*., 2011; Gandarillas y Rodríguez Cáceres, 2011).

Al contrario de una expropiación orientada al monopolio estatal, la medida respetó íntegramente los derechos de las empresas extranjeras, bajo la lógica de que la inversión externa es imprescindible para desarrollar el sector. Sin embargo, el volumen de producción de hidrocarburos no creció, en un país donde la inversión privada ha estado por debajo del 10% del PIB (Molina, 2015: 27). El aumento de las ganancias y de la recaudación de impuestos correspondió a la elevación de los precios internacionales de estas materias primas, en una economía cada vez más dependiente de los hidrocarburos. Entre 2001 y 2005 estos representaron el 47% de las exportaciones, un porcentaje elevado al 69% en el último quinquenio (Requena, 2015: 21). Por otro lado, la importación de gasolina subió de 3% a 9% de las importaciones totales del período. A pesar del creciente ingreso fiscal, el gobierno central presenta déficits recurrentes, motivados principalmente por el aumento del gasto relacionado al incremento de la burocracia estatal, cuyo número de funcionarios se quintuplicó. Incluso son los resultados de las empresas estatales los que sustentan los difundidos superávits fiscales (Arze Vargas *et al.,* 2011: 78).

Enfrentando un escenario de estancamiento en la producción de hidrocarburos, el Estado boliviano se vio forzado a generar nuevos impuestos o recurrir al endeudamiento externo. Impotente frente a las multinacionales, el principal objetivo del nuevo impuesto planteado en 2010 —conocido como *gasolinazo*— fue constituir un fondo que viabilizara 32 dólares adicionales por barril, elevando las ganancias de las empresas en cerca de 400%, con la intención de alentarlas a aumentar la producción. Las protestas contra el *gasolinazo* obligaron al gobierno a revertir la medida. Sin embargo, en abril de 2012, se decretó un incentivo de 30 dólares por barril, lo que constituyó una subvención dos veces mayor que los ingresos obtenidos a través del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y el de las regalías sobre el precio de 27,11 dólares entonces vigente (Arze Vargas y Gómez, 2013: 84).

La determinación del gobierno de intensificar la exportación primaria —que incluye hidrocarburos, minerales y agronegocios— también está relacionada a la presión fiscal. Una expresión de este movimiento es la disminución progresiva de los requisitos socioambientales para la expansión de estas actividades en el país, en contradicción con los preceptos constitucionales y la imagen del protector de la Madre Tierra. El conflicto en torno al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), que surgió en 2011, condensó estas tensiones más allá de ser considerado un punto de inflexión en la relación del gobierno con los movimientos indígenas.

Como su propio nombre describe, el TIPNIS es al mismo tiempo un territorio indígena y un área de protección ambiental desde la década de 1960, con dos figuras legales que protegieron este espacio del avance del progreso. No obstante, el gobierno de Morales inició la construcción de una carretera atravesando el parque, una obra adjudicada a la empresa brasileña OAS. De inmediato el proyecto fue asociado a la controvertida IIRSA, que se analiza en otro capítulo (Villegas, 2015). Más allá del negocio de la empresa brasileña, la prospección de petróleo y la expansión de los colonizadores cocaleros fueron destacadas como motivaciones subyacentes a la obra.

Aunque la población indígena del TIPNIS sea relativamente pequeña, estimada en 2 mil familias, se evaluó que realizar la obra pondría en riesgo a todos los territorios en situación similar (Paz, 2015). Por otro lado, la retórica del gobierno es que no se puede arriesgar el futuro del país "por unos cuantos" y, como sugirió Morales en la apertura del Segundo Encuentro Mundial de Movimientos Populares con el Papa, cuando la ley contradice los "intereses del pueblo" es necesario cambiarla (Morales, 2015).

Bajo el liderazgo de CIDOB y los indígenas de las Tierras Bajas, se organizaron varias marchas de protesta en una tradición que se remonta a la movilización original de 1990. Entre ellas, la octava marcha, realizada en 2011, tuvo repercusión internacional. En esta ocasión, el gobierno reprimió brutalmente a los manifestantes en Chaparina.

Adultos fueron secuestrados, familias fueron dispersadas en la selva, niños desaparecieron durante días. La represión generó solidaridad popular, y la quema de llantas impidió el embarque de líderes atrapados en un aeropuerto cercano. Al final del recorrido, los manifestantes fueron recibidos por una multitud en La Paz, mientras la CIDOB y CONAMAQ se retiraban del Pacto de Unidad (Fundación Tierra, 2012; Rivera Cusicanqui, 2015: 48-49; Ávila, 2015; Chávez, 2015; Paz, 2015). En esta misma coyuntura, un grupo nutrido de intelectuales, algunos de los cuales habían ocupado altos cargos en el gobierno, circularon un Manifiesto para la recuperación del Proceso de Cambio para el pueblo y con el pueblo. La base de apoyo de Morales se fracturaba[11].

La reacción del gobierno a los sectores populares que se fueron con la oposición fue implacable. La CIDOB y el CONAMAQ se dividieron y sus sedes fueron ocupadas por sectores aliados. El gobierno creó una central alternativa, el Consejo Indígena del Sur (CONISUR), para hacer una contramarcha. Los líderes fueron difamados y criminalizados[12]. Las organizaciones que apoyan al gobierno reciben dinero, mientras las opositoras son reprimidas. La sede de la Central Obrera Departamental (COD) en Santa Cruz, donde en 2015 se construyó un hotel, contrasta con el estrecho garaje en las afueras de la ciudad donde se reúne el sector autónomo de la CIDOB. En Cochabamba, la ampliación y remodelación de la sede de las Seis Federaciones del

11 La posición de Osvaldo Peredo, un exlíder guerrillero cuyos hermanos lucharon y murieron con el Che Guevara, es significativa: partidario de un gobierno que difícilmente critica, reconoció que la situación del TIPNIS "me coloca en disidencia conmigo mismo" (Peredo, 2015).

12 Dos ejemplos en el TIPNIS involucran al líder de la CIDOB, Adolfo Chávez: acusado de robar el bote a motor de un diputado acosado por comunidades indígenas, respondió a una denuncia de robo agravado, aunque Chávez ni siquiera estuvo en el lugar en el momento del robo. El segundo caso involucró al jefe de CONISUR, Gumercindo Pradel, condenado por la justicia comunitaria a doce latigazos por su participación en el gobierno. En reacción, Chávez estuvo bajo orden de arresto por tres meses, aunque ha huido con éxito. En ambos casos, también se vislumbran los conflictos entre la justicia comunitaria reconocida constitucionalmente y el Estado boliviano (Chávez, 2015). En diciembre de 2015, Chávez recibió otra orden de arresto mientras participaba de la 21ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), acusadao de malversación de fondos del Fondo Indígena.

Trópico de Cochabamba se concluyeron hacia fines de 2015, en una fiesta que tuvo torta con la cara del presidente.

La persecución se extendió a quienes apoyan los grupos disidentes: IBIS, una ONG danesa que financiaba la organización de grupos originarios, fue expulsada de Bolivia; del mismo modo, otros enfrentan problemas para permanecer en el país, incluso organizaciones nacionales. En 2015, tres reconocidos centros de investigación y asesoramiento a movimientos populares: el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) y la Fundación Tierra, enfrentaron una campaña difamatoria dirigida por García Linera, que amenazó la continuidad de sus actividades (ANF, 2013; 2015)[13].

El vicepresidente difamaba a todos los opositores con notable virulencia. En el panfleto en que defendía la carretera cortando el TIPNIS, acusó a los movimientos que marcharon contra el proyecto de "defender los intereses de las fuerzas conservadoras de derecha, socavando su propio proceso revolucionario"; dijo que las ONG "reproducen mecanismos de cooptación clientelista y subordinación ideológica para las agencias de financiamiento, siendo que la mayoría de ellas son europeas y norteamericanas", mientras los críticos de la izquierda son "intelectuales orgánicos de la restauración de la colonialidad" (García Linera, 2013a: 14, 26, 84). Los notables exdirigentes del gobierno que firmaron el manifiesto por la "recuperación del proceso de cambio" fueron tachados como "políticos resentidos" por el vicepresidente, de acuerdo con el folleto titulado: *El "oenegismo" enfermedad infantil del derechismo* (García Linera, 2013a)[14]. El simplismo de las acusaciones es análogo a la lógica de

13 La Fundación Milenio, en línea con el neoliberalismo, también fue cuestionada por el gobierno.

14 Se mencionan: al exviceministro de Tierras, Alejandro Almaraz; al ex Director General de Normas y Gestión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y exviceministro de Planificación Estratégica, Raúl Prada; al exembajador en los Estados Unidos, Gustavo Guzmán; y al exsuperintendente de Hidrocarburos, Hugo Sainz.

la Guerra Fría, en la que cada oponente es un derechista al servicio del imperialismo.

Por lo tanto, la autorreferencia como un "gobierno de movimientos sociales" necesita ser, al menos cualificada. Quien apoya incondicionalmente a Morales son los cocaleros, que forman su base de origen. Al contrario de lo que se pueda imaginar, no se trata de una organización indígena desde el punto de vista socioeconómico, sino rural. Porque en un país como Bolivia, donde la gran mayoría de la población tiene un fenotipo indígena, es necesario diferenciar entre tres situaciones: los indígenas urbanos, que pueden ser ricos, como la burguesía comercial aymara, o pobres como la mayoría; los indígenas campesinos, que frecuentemente conciben la tierra como una mercancía a ser explotada, como es el caso de los cocaleros y del propio Morales, y los indígenas comunitarios, cuya forma de vida está vinculada a una relación orgánica con el territorio (Ávila, 2015; Vadillo, 2015; Ribera Arismendi, 2015). De ahí las tensiones entre los pueblos indígenas de Tierras Bajas y los cocaleros, que en su expansión colonizadora se convirtieron en "la punta de lanza del proyecto anticomunitario" (Ávila, 2015). Otro clivaje a ser tomado en cuenta es que la mayoría de los indígenas campesinos y urbanos son de origen quechua o aymara, mientras decenas de otros pueblos de poca relevancia demográfica no lo son. Es en esta perspectiva que el dirigente de la CIDOB, Adolfo Chávez, se quejó de que en el gobierno del MAS la "descolonización sería hacernos quechuas o aymaras" (Chávez, 2015).

A pesar de la simpatía internacional que la despenalización de la hoja de coca suscita, al ser identificada con los derechos indígenas (cuando en realidad antagoniza con estos derechos en Bolivia), esta es una actividad económica algo oscura. Los bolivianos dicen que la coca para consumo doméstico es la hoja suave producida en la región de Yungas de La Paz. De ahí la sospecha generalizada de que los cocaleros del Chapare, la base original de Morales, estén involucrados en el narcotráfico obteniendo rendimientos por hectárea mucho más altos que la soja. Hay indicios de que el país actualmente no solo planta

la hoja, sino que también procesa cocaína boliviana y peruana, mitad de la cual se vende a Brasil, el segundo mercado más grande de drogas del mundo. Los productores de la región están organizados, son incondicionalmente fieles al "hermano" Evo y consideran que es un deber defenderlo. Con cierta ironía, algunos comentan que el Chapare es el único territorio realmente autónomo del país (Vadillo, 2015).

Hay pocas investigaciones al respecto, incluso porque los investigadores temen involucrarse con el tema. Pero existe la percepción de que el papel de esta actividad en el desempeño económico del país no es secundario, ya que genera recursos que no se contabilizan en el PIB, sino que ingresan a la economía a través de la construcción civil y las importaciones.

No menos importante, hay diversos escándalos que involucran a funcionarios gubernamentales de alto nivel del gobierno con el narcotráfico. En 2011, la DEA, que fue expulsada de Bolivia por Morales, arrestó en Panamá a René Sanabria, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) —en otras palabras, el zar antidrogas del país—. Extraditado y sentenciado a quince años de prisión, el general divulgó una carta cuando su hijo fue arrestado en Bolivia por enriquecimiento ilícito, acusando al gobierno de encubrir a varios funcionarios involucrados con la corrupción y el narcotráfico. En otro caso, Luis Cutipa, jefe de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (DIGCOIN), fue acusado de revender cocaína incautada en 2013. Sin embargo, fue liberado después de dos semanas, en una situación que expuso otra vulnerabilidad democrática del gobierno: la falta de autonomía de la justicia. La conjunción de la expansión cocalera en el TIPNIS, apoyada por el Estado; los escándalos involucrando a autoridades del más alto nivel; los numerosos indicios de lavado de dinero, como la multiplicación de edificios en Cochabamba, pagados en especie, entre otras características, llevaron al renombrado intelectual Alejandro Almaraz, viceministro de Tierras hasta 2010, a describir al gobierno, sin reparos, como un "gobierno narcotraficante" —una acusación fuerte, que también es sugerida en

escritos recientes de Rivera Cusicanqui (Almaraz, 2015; Rivera Cusicanqui, 2015).

La base campesina del gobierno, que tiene un aliado incondicional en los cocaleros, se ve reforzada por los movimientos que conforman el Pacto de Unidad, así como por las fracciones fieles de las organizaciones indígenas fracturadas. Muchas de estas accedieron al llamado Fondo Indígena, compuesto por una parte de los ingresos de los hidrocarburos destinada a financiar proyectos de desarrollo. Sin embargo, el fondo acabó convirtiéndose en una fuente de denuncias de corrupción, afectando a los movimientos sociales y al gobierno hasta que fue extinguido por el presidente en agosto de 2015. A finales de ese año, un informe del Fiscal General del país mostraba 49 obras fantasma incluyendo el desvío de 6,8 millones de dólares, teniendo como resultado la imputación de 205 personas y la detención de otras 24, incluyendo la exministra de Desarrollo Rural y Tierras y dirigente de la organización campesina Bartolina Sisa, Julia Ramos, además de dos senadores y otros líderes sociales gubernistas como la jefa de la facción de CIDOB que apoya al gobierno (Miranda, 2015).

Los sindicatos mineros también componen la base del gobierno, aunque el sector sea apenas una sombra de lo que fue en el pasado (Campos, Tosito y Romero, 2015). La Central Obrera Boliviana (COB) llegó a romper con el gobierno, pero reanudó los lazos en 2013 después de "derrotar a la ultraizquierda en el seno de los sindicatos mineros" (Rada Vélez, 2015: 4). En realidad, las cooperativas mineras son dirigidas por capitalistas medianos y pequeños conocidos por la sobreexplotación del trabajo, mientras que la gran minería es comandada por el capital internacional. También en este sector, en el que solo dos minas son operadas por el Estado, no hubo intención de afectar a las empresas transnacionales. El gobierno se limitó a establecer un impuesto del 12,5% sobre las ganancias extraordinarias de las empresas y, aunque la recaudación se haya duplicado en la última década en función al aumento de los precios, el poder político de las cooperativas mantuvo los impuestos muy por debajo de los hidrocarburos (Escóbar, 2015).

En el período, la contribución fiscal del sector estuvo alrededor de una séptima parte de los hidrocarburos, aunque su participación en el PIB fue 1,7 veces mayor (Arze Vargas y Gómez, 2013: 105). La importancia de estos segmentos para los ingresos del país dejó de lado la preocupación socioambiental. En el año 2014, el gobierno promulgó la Ley de Minería y Metalurgia autorizando la exploración en áreas protegidas y glaciares, fuentes importantes de suministro de agua en el Altiplano. Enseguida, el Decreto 2366 de mayo de 2015 autorizó la exploración de hidrocarburos en ocho áreas protegidas. En síntesis, no hay motivo para que estos sectores se opongan al gobierno.

Otro grupo social que apoya a Morales es la llamada burguesía aymara, migrantes de origen rural, que ascendieron por medio del comercio de importación, legal o no. Muchos ostentan su cultura y su poder económico, simbolizados en los edificios de arquitectura peculiar que proliferan en El Alto y son conocidos como *cholets*, aludiendo a su origen cholo. La paradoja es que el sentido general de la política de gobierno, basada en este orgullo aymara, al mismo tiempo que reprime el plurinacionalismo, incidió negativamente en la autoidentificación del indígena, que alcanzó el 62% en el censo de 2001 y que cayó a 40% en 2011 (Rivera Cusicanqui, 2015: 38).

Se trata de una burguesía comercial porque, a pesar del discurso oficial, la industrialización no ha sido una prioridad del gobierno. En 2012, solo tres de las nueve plantas manufactureras estatales proyectadas en 2007 estaban en operación. Y aunque la Constitución hable de una economía plural abarcando cuatro sectores (comunitario, estatal, privado y social-cooperativo), el énfasis en la exportación primaria inhibe la diversificación productiva. Desde el punto de vista de las relaciones de trabajo, el propio García Linera reconoció que, al estimular la economía comunitaria el objetivo no es competir con el sector privado, pero sí ayudar a los productores rurales en una modalidad de política asistencial (García Linera, 2013b: 46). Por lo tanto, mientras aumenta la dependencia de la exportación de *commodities*, la participación del llamado sector comunitario ha disminuido: del 7%

en 2005 cayó al 6% en 2010, mientras que el sector social creció del 2% al 3% durante ese período. La participación del Estado, menos la participación de la administración pública, habría aumentado del 4% al 10%, una cifra distante del 34% difundida por el gobierno (Arze Vargas y Gómez, 2013: 100-102).

El gobierno también ha importado productos diversos, principalmente alimenticios, como parte de una política social que se orienta simultáneamente a frenar la inflación. Anclada en una moneda apreciada frente al dólar, esta política desalienta la producción local, haciendo que las oportunidades de lucro graviten en torno a los ingresos extractivistas, ya sea a través del sector de servicios o de las importaciones. Es una economía cada vez más consumista, y cada vez menos productiva.

Tal vez el mayor impacto de esta orientación económica ocurra en el campo. El valor *per cápita* de la importación de alimentos se triplicó en la última década, pasando de 24 a 70 dólares, además de un subsidio estimado en 800 bolivianos por familia en el precio del azúcar, el pan, la leche y el pollo (Urioste, 2015: 22). Bolivia hoy importa del Perú verduras, frutas e incluso papas, un patrimonio andino (Escóbar, 2015).

Como resultado, el modo de vida campesino asociado a una relación orgánica con la tierra, en contraste con la mentalidad mercantil del monoproductor rural, está en rápida descomposición. Se estima que el 79% de los alimentos consumidos en el campo se compran actualmente en la agroindustria. Paralelamente, prosperan actividades más rentables orientadas a la exportación, como la quinua. Muchos dejan de ser agricultores y se involucran en el próspero sector del transporte en las ciudades o venden su fuerza laboral en la construcción o emigran (Urioste, 2015: 22).

Al principio parecía que sería diferente. Adoptando el discurso de una segunda revolución agraria, el primer gobierno del MAS (2006-2009) aceleró el proceso de saneamiento de tierras que comenzó en 1996, regularizando cerca de 20 millones de hectáreas entre 2005

y 2010, aunque solo se produjo un cambio efectivo de propiedad en unas 4 millones de hectáreas (Almaraz, 2015: 23; Arze Vargas y Gómez, 2013: 92). Sin embargo, la mayoría de las tierras distribuídas como Tierras Comunitarias de Origen pertenecían al propio gobierno (tierras fiscales), mientras solo 821 mil hectáreas fueron redistribuidas en 2011 por no cumplir su función económica (Ormachea y Ramírez, 2013: 82). El ritmo y el sentido de este proceso fueron frenados desde entonces, siendo saneadas principalmente las propiedades de la oligarquía rural.

En la segunda gestión del MAS se intensificó el acercamiento entre el gobierno y el agronegocio cruceño, que fue notable en algunos movimientos. En 2011, la Ley de Revolución Productiva liberó el cultivo transgénico que fue prohibido en 2008. Luego, el gobierno acató dos demandas del sector. Aunque el país deforesta cerca de doscientas mil hectáreas por año, situándose entre los principales emisores de dióxido de carbono *per cápita* del mundo (Requena, 2015: 21), fue promulgada la Ley de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, en enero de 2013. Conocida como perdonazo, esta ley otorgó amnistía a más de dos millones de hectáreas de tierras deforestadas que deberían ser revertidas al Estado. Simultáneamente, el gobierno acordó una pausa de cinco años para verificar el cumplimiento de la función social de la tierra prevista en la Constitución, frenando otro mecanismo de expropiación de tierras.

Pero el indicio más claro del compromiso del gobierno con la oligarquía cruceña fue el anuncio, en 2014, de la intención de extender la frontera agraria en diez millones de hectáreas para 2025, con el pretexto de asegurar la soberanía alimentaria. Poco después, la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), una organización del agronegocio oriental, asumió la responsabilidad de delinear una estrategia con este propósito, materializando uno de los objetivos de la Agenda Patriótica 2025 lanzada por Morales (Condori, 2015) —que, como se nota, tiene planes de largo plazo para el

país—. En resumen, "el MAS, de forma natural y vertiginosa, se va transformando en el partido que representa los intereses generales del poder empesarial-hacendal" (Ormachea y Ramírez, 2013: 98).

Ante esta realidad, la principal causa del debilitamiento de la oposición y del apaciguamiento de la movilización autonomista es que el gobierno se apropió de la agenda política y la base de apoyo de la oposición. Partidarios de Hugo Banzer se unieron al MAS, mientras los "cívicos" de Santa Cruz[15] pusieron candidatos en el partido. Esta situación llevó al histórico líder guerrillero Osvaldo Peredo, avergonzado por las alianzas realizadas por el partido, a comentar que "los invitados deben ser recibidos en la sala" y no en el dormitorio (Peredo, 2015).

Es cierto que persiste una oposición histriónica, motivada antes por su alejamiento del poder que por una disputa del proyecto. Estos recalcitrantes también se arriesgan a enfrentar el largo brazo del MAS, que controla los órganos electorales, el poder judicial y los medios de comunicación. Hay un reconocimiento generalizado de que las elecciones regionales fueron manipuladas en Beni y Chuquisaca en 2015. En Beni, por ejemplo, se anularon 228 candidaturas, todas de la oposición. El desencadenante del proceso fue la mención a los resultados de una encuesta no oficial realizada por un portavoz de la oposición, siendo que la ley electoral prohíbe hacer cualquier referencia a sondeos no oficiales, aunque las dos encuestas estén patrocinadas por el gobierno. A causa de esto, fue anulada la personería jurídica del partido (Almaraz, 2015).

Los juicios políticos se han naturalizado para la izquierda y para la derecha del espectro político. Almaraz citó el caso del hijo de un político reaccionario de Santa Cruz que, en 2015, había estado preso durante siete años acusado de planear un golpe, cuya prueba principal era una llamada telefónica de diecisiete segundos (Almaraz, 2015). El objetivo político de la prisión era doblegar al padre, en un país donde

15 Alusión al Comité Cívico Pro-Santa Cruz, que se refiere al reclamo de autonomía de la región.

la policía tiene libertad de acción. Algunos sugieren que se tiene más miedo ahora que en el tiempo de la dictadura (Gandarillas, 2015).

En el campo de los medios de comunicación, al contrario de lo que se pueda suponer, tampoco circula una oposición consistente. Un periodista analizó la situación de la siguiente manera: "Tras una ola de cambio de propietarios, los nuevos dueños archivaron el asedio previo (al MAS). ATB, *La Razón*, PAT y el *Extra* cambiaron de dueño y de accionistas. Unitel y la Red Uno suavizaron radicalmente su línea editorial. En 2013, el presidente le comentaba al diario *El Deber* que ya solo un 10% de los medios se enfrentaba a su administración [...]" (Archondo, 2015: 34).

Hay sospechas de que García Linera cumplió un papel central en el proceso que resultó en esta situación. El vicepresidente, sin embargo, negó tener control de los medios y afirmó que solo posee libros.

Pero el líder político indiscutible del gobierno es Evo Morales. Este liderazgo se transforma cada vez más en personalismo, en un partido en el que no hay democracia interna y en un gobierno empeñado en no proyectar sombras sobre su estrella más grande. Esta puede ser una explicación para el nombramiento de ministros que parecen cumplir con los criterios de resonancia publicitaria, como, por ejemplo, la búsqueda de una mujer indígena con formación en derecho para asumir el Ministerio de Justicia. Otra lectura posible es que el nombramiento de jóvenes con escasa experiencia política facilite el manejo de la maquinaria pública al modo de Morales. La exministra de Salud, Ariana Campero, tenía 29 años cuando asumió el cargo en 2015 y describió las llamadas del presidente en plena madrugada solicitando su intervención en situaciones particulares. En su opinión, esto ilustra la preocupación humanista del líder (Campero, 2015), pero también puede ser interpretado como clientelismo. El barniz ideológico de este personalismo, que se materializó en el intento de llevar a Morales a un cuarto mandato, fue anticipado por García Linera en la noción de "evismo, lo nacional popular en acción" (García Linera, 2006b).

Más allá de la disputa ideológica y política, la orientación macroeconómica del proyecto liderado por Morales ha sido aumentar la recaudación estatal por medio de la intensificación de la exportación primaria, para potenciar la inversión pública, lo que de hecho ha ocurrido. En contraste con el bajo nivel de la inversión privada, la asignación de recursos públicos se multiplicó por cuatro en los últimos años, destinado principalmente a infraestructura, sobre todo carreteras (Escóbar, 2015). Los proyectos productivos orientados a la diversificación económica y a la industrialización están en un segundo plano, por lo que el crecimiento ha sido impulsado por la exportación primaria, la construcción civil, la administración pública y la economía delictiva.

El aumento de los ingresos fiscales facilitó la difusión de las políticas de transferencia monetaria condicionada destinadas a reducir la pobreza, como ocurrió en muchos países de la región. En Bolivia, hay tres bonos fundamentales: el Bono Juancito Pinto que beneficia a los niños en edad escolar, que reciben 30 dólares al año; el Bono Juana Azurduy que está dirigido a mujeres embarazadas, con derecho a recibir siete dólares cada vez que asisten a un control médico y los adultos mayores que reciben alrededor de un dólar por día a través del programa Renta Dignidad, que mueve más recursos que la suma de los dos primeros. Se trata del perfeccionamiento de una iniciativa lanzada en 1996, bajo el impacto de una reforma de pensiones más brutal que la chilena. Es difícil evaluar el impacto de estos programas para aliviar la pobreza, pero los datos indican que el volumen de las remesas de emigrantes del país, es al menos tres veces mayor (Arze Vargas y Gómez, 2013: 117).

Las estadísticas oficiales indican una reducción de la pobreza, que llegó a caer casi un 30% en 2008 debido a un cambio en la metodología del Banco Mundial. Esto llevó a considerar a Bolivia como un país de "ingresos medios", calificando para préstamos no concesionales a precios de mercado. Sin embargo, no ha habido cambios en el mundo del trabajo que justificasen este ascenso. Mitad de la población urbana boliviana todavía vive en condiciones de subsistencia (Escóbar, 2015).

Mientras que los índices internacionales generalmente se refieren a la pobreza como un ingreso menor a dos dólares por día y la pobreza extrema como un ingreso de menos de un dólar por día, debemos tener en cuenta la apreciación de la moneda boliviana en relación al dólar, una vez que su cotización se ha mantenido estable a pesar de la inflación: de modo que dos dólares en Bolivia compran menos en 2015 que hace 10 años. Los datos indican que el aumento de los salarios no ha sido efectivo para responder al aumento del costo de vida, excepto en el sector público. En 2004, el salario mínimo compró el 99% de una canasta básica del hogar y en 2010 alcanzó el 74%, lo que muestra una pérdida de poder adquisitivo. En el último año, aproximadamente dos tercios de los trabajadores empleados tenían un salario por debajo del alimento básico del hogar. La participación del ingreso laboral disminuyó del 36% en 2000 al 25% diez años después, mientras que la participación del capital aumentó del 47% al 55%, lo que sugiere una economía en crecimiento basada en la sobreexplotación del trabajo (Arze Vargas y Gómez, 2013: 133-142).

La otra cara del énfasis en los programas de transferencias monetarias condicionadas es que el gasto público social no ha sido priorizado. El gasto estatal en salud y educación es más bajo que el gasto privado. Solo el 35% de los empleados están cubiertos por el sistema de salud y el 38% por el sistema de pensiones, que corresponde a entre el 13% y el 14% de la población económicamente activa. El precario sistema de salud, en un país donde un niño muere cada media hora y una mujer pierde la vida en el parto cada tres días, contrasta con el alto presupuesto de defensa y los beneficios a los militares, como la jubilación con el total del salario, cuando se abolió la contribución tripartita a la seguridad social y los bolivianos estaban sujetos a pensiones muy bajas (Saucedo, 2015). En resumen, el legado de la legislación neoliberal sigue vigente, a pesar de la derogación simbólica y parcial del Decreto 21060 en 2011.

Reflexiones finales

Emergiendo en la cima de la movilización popular más radical de inicios del siglo XXI en el subcontinente, la elección de Evo Morales en 2005 pretendió devolver al parlamento la política de las calles. Mientras algunos anticiparon la frustración de un proceso que en su momento amenazaba las estructuras estatales, prevaleció el sentimiento de que sería posible modificarlo sustantivamente por la vía legislativa. En otras palabras, la reforma se impuso sobre la revolución.

La inauguración del proceso constituyente agudizó las contradicciones sociales del país, exponiendo las divisiones de clase, etnia y región. Frente a una agenda surgida del bloque popular, la reacción se articuló en torno a la Media Luna, amenazando la propia unidad del país. El descenlace de lo que García Linera describió como el "empate catastrófico" implicó significativas concesiones del campo popular, señalando lo que estaba por venir. Pero en 2009 muchos interpretaron la aprobación de la nueva Constitución como una victoria.

En aquel momento, la ceremonia de posesión de Evo Morales en Tiwanaku, la defensa de la Pachamama, el Estado Plurinacional, la reinvindicación ancestral de la hoja de coca, la nacionalización de los hidrocarburos y la resurrección de YPFB, la expulsión del embajador estadounidense y de la DEA, el alineamiento con Chávez y el Alba, la súbita proyección internacional del país, el saneamiento de tierras, la prohibición de los transgénicos y los bonos sociales eran indicios de que estaba en curso un proceso de cambio. Y por este, Morales fue reelegido en 2009 con el 64% de los votos, en una elección que le aseguró mayoría parlamentaria absoluta.

Paradójicamente, el colapso de la derecha partidaria correspondió a un giro del gobierno en esta dirección, intensificando las relaciones con el poder hacendal-patrimonialista al mismo tiempo que profundizaba el compromiso con la exportación primaria. Esta articulación resultó incompatible con las expectativas de plurinacionalidad, soberanía y defensa del medioambiente que surgieron en la marcha indígena de 2010, en el *gasolinazo* y, sobre todo, en el conflicto del TIPNIS.

Amparado en las alianzas conservadoras que consolidó, el gobierno enfrentó una creciente disidencia popular con intolerancia retórica y represión política.

Desde entonces se acumulan desilusiones: el plurinacionalismo se convierte en una burguesía aymara, mientras las referencias a Túpac Katari adornan los cholets y hasta un satélite espacial lleva su nombre; la justicia comunitaria es criminalizada por la justicia común; la autonomía territorial solo ocurre en el Chapare; la reinvindicación de la coca se empañó por la supuesta participación en el narcotráfico de parte de la base social del gobierno y de las autoridades; el "gobierno de los movimientos sociales" corrompe a los fieles, aplasta a los disidentes y extiende su dominio a los órganos electorales, el poder judicial y la prensa; el poder hacendal-patrimonial conforma la base del gobierno, al lado del partido de Banzer; la soja prospera, el campesinado se desvanece; la "nacionalización" es insuficiente para satisfacer las necesidades nacionales básicas en el sector de gas y petróleo; la oposición a los Estados Unidos coexiste con la defensa del capital internacional y la imitación al Brasil; el compromiso del Alba es instrumental, interesada en los recursos venezolanos; el Vivir Bien es masacrado por el extractivismo. En síntesis, no se puede mirar al MAS de 2016 con los ojos del 2006.

En este contexto, el proyecto subyacente a la búsqueda de un cuarto mandato de Morales estuvo lejos de "pasar de la revolución democrática y cultural a la revolución económica y social, en un proceso que nos permite comenzar la construcción del socialismo comunitario bajo el paradigma del Vivir Bien" (Rada Vélez, 2015: 4). El análisis muestra que, en un proceso análogo a las gestiones petistas en Brasil, el MAS ha instrumentalizado el conocimiento y la confianza que tiene de las organizaciones sociales para superar los obstáculos a la explotación de hidrocarburos y del agronegocio[16], involucrándose

16 Muchos ministros del gobierno provienen de movimientos sociales o asesores del tercer sector, a quienes ahora critican, como el ministro Carlos Romero, quien fue asesor de la CIDOB y ahora lo enfrenta en el tema del TIPNIS.

en la competencia regional para ofrecer las mejores garantías legales al capital internacional, rebajando todas las obligaciones sociales y ambientales. Eso es justamente lo contrario de Vivir Bien, a no ser que esté identificado con el patrón de las clases dominantes de América Latina, en que el más sofisticado patrón de consumo se combina con la mano de obra barata, asentada en una obscena concentración de riqueza. En resumen, se trata de la reproducción del subdesarrollo con rostro aymara.

Es innegable que Bolivia cambió en los últimos diez años. Los viajeros ya no encuentran las sinuosas carreteras llenas de huecos que atascaban en lluvia, y el país dejó de ser un destino turístico barato. La economía se mercantilizó, hay indígenas y mujeres en el poder, y se nota más consumo —pero también se percibe más abandono y más violencia.

Más "moderno", el país parece dejar de ser la sociedad abigarrada analizada por Zavaleta, pero no en favor de una nación soberana integrada alrededor de un mercado interno, como pretendió el nacionalismo revolucionario, o mediante la convivencia equilibrada de diversas visiones del mundo, como ambicionó el plurinacionalismo. Es el modo de producción capitalista subsumiendo los modos de vida comunitarios en medio de un proyecto que reedita el estilo político del viejo Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), en el que el poder se convirtió en un fin en sí mismo.

El hecho de que una parte significativa de la izquierda internacional todavía identifique a este gobierno como progresista invita a la reflexión. Descartando la barrera de la desinformación, que no es menor, hay los rehenes de aquello que en inglés se conoce como *wishful thinking*, creer en lo que se quisiera, no en lo que se ve. Sin embargo, muchos apoyan al gobierno basándose en consideraciones geopolíticas que abstraen la dinámica de la lucha de clases en el país (Borón, 2016), o en razonamientos binarios, preconizando que las alternativas serían peores, una práctica cómplice con la ideología del TINA —*There is no alternative*—, o sea, de que no hay alternativa.

Es necesario ampliar el horizonte, rompiendo con el inmovilismo. El hecho de que las relaciones de Bolivia con Estados Unidos no sean amistosas o que predominen rostros indígenas en el Congreso no es concluyente. El internacionalismo debe superar la lógica de que "el enemigo de mi enemigo es mi amigo", lo que llevaría a la izquierda a apoyar regímenes represivos en Siria e Irán. También necesita afinar los vínculos entre clase y etnia, los "dos ojos" del katarismo. La llamada "razón de Estado", así como la relación entre desarrollo y ecología, o la articulación de la dimensión clasista de las cuestiones raciales y de género, están entre los desafíos que la política revolucionaria debe abordar de manera original en el siglo XXI. En el "proceso de cambio" boliviano, el aspecto creativo de estas tensiones solo sobrevive como ideología.

Bibliografía

AGEE, PHILIP

1976 *O diário da CIA*. São Paulo: Círculo do Livro.

ANF-AGENCIA DE NOTICIAS FIDES

2015 "García Linera asegura que Fundación Tierra y Cedib mienten en favor de los extranjeros", en ANF, 8 de agosto de 2015. Disponible en: https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/garcia-linera-senala-que-la-fundacion--tierra-y-el-cedib-mienten-en-favor-de-los-extranjeros-355486-355440.

2013 "TIPNIS: Morales exige enjuiciar a financiadores de VIII Marcha Indígena", en ANF, 10 de diciembre de 2013. Disponible en: https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/TIPNIS-morales-exige-enjuiciar-a-financiadores-de-VII- I-marcha-indigena-337443-337430. Acceso 8 de octubre 2015.

ALBÓ, XAVIER

2015 "Algunos de nuestros desafíos ambientales", en *Página Siete*, 19 de abril de 2015.

ALMARAZ, ALEJANDRO

2015 "La frustración agraria", en *Página Siete*, 19 de abril de 2015.

ARCHONDO, RAFAEL

2015 "El periodismo en la era Evo Morales", en *Página Siete*, 19 de abril de 2015.

ARGUEDAS, ALCIDES

1937 *Pueblo enfermo. Contribución a la psicología de los pueblos hispanoamericanos*. La Paz: Ercilla.

ARZE VARGAS, CARLOS; JUAN LUIS ESPADA, JUAN CARLOS GUZMÁN Y PABLO POVEDA

2011 *Gasolinazo: subvención popular al Estado y a las petroleras*. La Paz: CEDLA.

ARZE VARGAS, CARLOS Y JAVIER GÓMEZ

2013 "Las contradictorias nociones del Vivir Bien y las estrategias para alcanzarlo", en Edgardo Lander, Carlos Arze Vargas, Javier Gómez, Pablo Ospina y Víctor Álvarez, *Promesas en su laberinto. Cambios y continuidades en los gobiernos progresistas de América Latina*. La Paz: IEE, CEDLA y CIM.

BARRIENTOS, RENÉ

1966 *Teoría y programa de la Revolución Boliviana*. La Paz.

BOFF, LEONARDO

2016 "Os equívocos do PT e o sonho de Lula", 6 de febrero de 2016. Disponible en: https://leonardoboff.wordpress.com/2016/02/06/os-equivocos-do-pt-e-o-sonho-de-lula/.

BORÓN, ATILIO

2016 "Bolivia, el No nace en Washington", en *La Jornada*, 11 de febrero de 2016. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2016/02/11/opinion/031a1mun#texto.

COLQUE, GONZALO

2014 *Expansión de la frontera agrícola. Luchas por el control y apropiación de la tierra en el oriente boliviano*. La Paz: Fundación Tierra.

CONDORI, IVÁN

2015 "La Cumbre Agropecuaria definirá lineamientos para la Agenda 2025", en *La Razón*, 5 de abril de 2015. Disponible en: http://www.la-razon.com/economia/Cumbre-Agropecuaria-definira-lineamientos-Agenda_0_2246775352.html.

COSTA NETO, CANROBERT

2005 *Políticas agrárias na Bolívia (1952-1979). Reforma ou revolução?* São Paulo: Expressão Popular.

CRABTREE, JOHN

2005 *Patterns of Protest. Politics and Social Movements in Bolivia*. Londres: Latin American Bureau.

DANGL, BENJAMÍN
2009 *El precio del fuego. Las luchas por los recursos naturales y los movimientos sociales en Bolivia*. La Paz: Plural.

DINGES, JOHN
2004 *Os anos do Condor: uma década de terrorismo internacional no Cone Sul*. São Paulo: Cia. das Letras.

FUNDACIÓN TIERRA
2012 *Marcha indígena por el TIPNIS. La lucha en defensa de los territorios*. La Paz: Fundación Tierra.

GANDARILLAS, MARCO Y GUSTAVO RODRÍGUEZ CÁCERES
2011 *Mitos de la inversión extranjera. El caso de los hidrocarburos en Bolivia*. Cartilla. Cochabamba: CEDIB.

GARCÍA LINERA, ÁLVARO
2015 *Socialismo Comunitario. Un horizonte de época*. La Paz: Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
2013a *El "oenegismo", enfermedad infantil del derechismo*. La Paz: Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
2013b *Las empresas del Estado. Patrimonio colectivo del pueblo boliviano*. La Paz: Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
2013c *Geopolítica de la Amazonía. Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista*. La Paz: Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
2011 *Las tensiones creativas de la revolución*. La Paz: Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
2006a "El 'capitalismo andino-amazónico'", en *Le Monde Diplomatique*. Disponible en: http://www.lemondediplomatique.cl/El-capitalismo-andino-amazonico.html.
2006b "El evismo: lo nacional popular en acción", en *Observatorio Social de América Latina*, año VI, núm. 19, enero-abril, pp. 25-32.

GOTT, RICHARD
1971 *Guerrilla Movements in Latin America*. New York: Doubleday.

GUEVARA, JEAN PAUL
2015 "Política exterior del Estado Plurinacional", en *Página Siete*, 19 de abril de 2015.

HALPERIN DONGHI, TULIO
1972 *Hispanoamérica después de la Independencia. Consecuencias sociales y económicas de la emancipación*. Buenos Aires: Paidós.

HYLTON, FORREST Y SINCLAIR THOMSON
2007 *Revolutionary Horizons. Past and Present in Bolivian Politics*. Londres: Verso.

KENNEDY, JOHN
1961 *Public Papers of the Presidents of the United States*. Washington: United States Government Printing Office.

KLEIN, HERBERT
1982 *Bolivia: The Evolution of a Multi-Ethnic Society*. New York: Oxford University Press.

LAZARTE, JORGE
2015 "Los 'movimientos sociales' en el 'proceso de cambio'", en *Página Siete*, 19 de abril de 2015.

LOAYZA BUENO, RAFAEL
2011 *Eje del MAS. Ideología, representación social y mediación en Evo Morales Ayma*. La Paz: Konrad Adenauer Stiftung.

MESA, JOSÉ DE; TERESA GISBERT Y CARLOS D. MESA GISBERT
1999 *Historia de Bolivia*. La Paz: Gisbert.

MIRANDA, BORIS
2015 "Bolivia: el millonario caso de corrupción que involucra a exministros, parlamentarios y dirigentes del partido de Evo Morales", en *BBC*, 6 de diciembre de 2015. Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151205_millonario_escandalo_corrupcion_partido_evo_morales_bm.

MOLINA, FERNANDO
2015 "Donde el 'proceso de cambio' choca con el subdesarrollo", en *Página Siete*, 19 de abril de 2015.

MORALES, EVO
2015 "Discurso de abertura no encontro dos movimentos sociais com o Papa Francisco". Cochabamba, 7 de julio de 2015.

ORMACHEA, ENRIQUE S. Y NILTON RAMÍREZ
2013 *Políticas agrarias del Gobierno del MAS o la agenda del "poder empresarial-hacendal"*. La Paz: CEDLA.

RADA VÉLEZ, ALFREDO
2015 "En defensa de los movimientos sociales", en *Página Siete*, 19 de abril de 2015.

REINAGA, FAUSTO
2001 *La revolución india*. El Alto: Fundación Amáutica Fausto Reinaga.

REQUENA, CECILIA
2015 "El Vivir Bien y sus malestares", en *Página Siete*, 19 de abril de 2015.

RIVERA CUSICANQUI, SILVIA
2015 *Mito y desarrollo en Bolivia. El giro colonial del gobierno del MAS*. La Paz: Plural.
1985 "Apuntes para una historia de las luchas campesinas en Bolivia (1900-1978)", en Pablo González Casanova (coord.), *Historia política de los campesinos latinoamericanos*. Volumen 3. México: Siglo XXI, pp.146-207.
1984 *Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y qhechwa de Bolivia, 1900-1980*. La Paz: HISBOL-CSUTCB.

SCHAVELZON, SALVADOR
2015 *Plurinacionalidad y Vivir Bien/Buen Vivir. Dos conceptos leídos desde Bolivia y Ecuador post-constituyentes*. Quito: Abya-Yala y Clacso.

SILVA, FABRÍCIO PEREIRA DA
2009 "Equilíbrios precários: a trajetória do movimento ao socialismo e seus dilemas", en José Maurício Domingues *et al*. (orgs.), *A Bolívia no espelho do futuro*. Belo Horizonte: UFMG.

SORUCO, XIMENA (coord.)
2008 *Los Barones del Oriente. El poder en Santa Cruz ayer y hoy*. Santa Cruz: Fundación Tierra.

STEFANONI, PABLO Y HERVÉ DO ALTO
2014 *Evo Morales, de la coca al Palacio. Una oportunidad para la izquierda indígena*. La Paz: Malatesta.

STERN, STEVE J. (comp.)
1990 *Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes (siglos XVIII al XX)*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

TAMAYO, FRANZ
1986 *Obras escogidas*. Caracas: Ayacucho.

TAPIA, LUIS
2011 "Sociedad abigarrada. Repensando la democracia multicultural en Bolivia" Entrevista a Luis Tapia por Marianela Díaz Carrasco, en *Revista Estudiantil Latinoamericana de Ciencias Sociales*, vol. 1, núm. 1. Disponible en: http:// https://relacso.flacso.edu.mx/sites/default/files/docs/01/sociedad-abigarrada.pdf.

URIOSTE, MIGUEL
2015 "La marginalización de la agricultura campesina e indígena", en *Página Siete*, 19 de abril de 2015.

URQUIDI, VIVIAN
2007 *Movimento cocaleiro na Bolívia*. São Paulo: Hucitec.

WEBBER, JEFFERY
2013 "From Left-Indigenous Insurrection to Reconstituted Neoliberalism, en Bolivia: Political Economy, Indigenous Liberation, and Class Struggle, 2000-2011", en Jeffery Webber y Barry Carr (eds.), *The new Latin American left. Cracks in the Empire*. Lanham: Rowman & Littlefield.

ZAVALETA MERCADO, RENÉ
2008 *Lo nacional-popular en Bolivia*. La Paz: Plural.
1988 *Clases sociales y conocimiento*. La Paz: Amigos del Libro.
1984 "Consideraciones generales sobre la historia de Bolivia", en Pablo González Casanova (coord.), *América Latina: Historia de medio siglo*. México: FCE.
1973 *El poder dual en América Latina*. México: Siglo XXI.

Conversaciones

Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, julio de 2015

ALMARAZ, ALEJANDRO. Exviceministro de Tierras del gobierno de Evo Morales.

ÁVILA, HERNÁN. Director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).
CAMPERO, ARIANA. Médico, entonces ministra de Salud.
CAMPOS, ISAU; FRANKLIN TOSITO Y ZOLANDO ROMERO. Dirigentes de la COD.
CHÁVEZ, ADOLFO. Dirigente de la CIDOB.
ESCÓBAR, SILVIA. Economista e investigadora del CEDLA.
GANDARILLAS, MARCO. Director del CEDIB.
MÉNDEZ, FERNANDO. Coordinador de la Casa del Alba en Cochabamba.
PAZ, SARELA. Investigadora, referencia en asuntos relacionados al TIPNIS.
PEREDO, OSVALDO "CHATO". Exlíder guerrillero y exconcejal del MAS en Santa Cruz.
PEREZ PEÑA, MIGUEL ANGEL. Analista de relaciones institucionales de Petrobras Bolivia S.A.
RIBERA ARISMENDI, MARCO ANTONIO. Director de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA).
SALLARI, ANDRÉS Y MARIANO VÁZQUEZ. Periodistas del canal estatal Abya Yala.
SARAVIA, RAMIRO. Fundador de la Red Tinku.
SAUCEDO, ERWIN. Diputado nacional por dos legislaturas, ministro de Salud del gobierno de transición y docente de salud pública.
VADILLO, ALCIDES. Abogado y exdirector de la Fundación Tierra. Trabajó en el Instituto Nacional de Reforma Agraria.
VILLANUEVA, AMARU. Director del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia (CIS).
VILLEGAS, PABLO. Investigador del CEDIB.

Ecología versus capitalismo: dilemas de la Revolución Ciudadana en Ecuador

El mayor peligro para nuestro proyecto de país es el izquierdismo y el ecologismo infantil. Temo que no me haya equivocado, aunque tal vez haya faltado agregar el indigenismo infantil.

Rafael Correa en la Asamblea Nacional Constituyente, 2008

No hay otra conclusión posible: esta es una revolución ciudadana sin ciudadanía.

Ospina Peralta, 2013

Introducción

La elección de Rafael Correa para la presidencia del Ecuador pocos meses después de la victoria de Evo Morales en Bolivia en 2006, señaló el apogeo de la ola progresista que todavía elegiría a Fernando Lugo en Paraguay en 2008. En los países andinos, el triunfo electoral concluía luego de años de insubordinación popular que derrocaron a varios presidentes, abriendo camino para procesos constituyentes que prometían refundar estas naciones.

Diez años después, Morales y Correa continuaban en la presidencia, pero a la cabeza de proyectos de poder distanciados de las expectativas de cambio con las que se identificaron originalmente. Una pequeña síntesis de los dilemas del progresismo es que en Ecuador convergen el desafío venezolano de superar la dependencia del petróleo y la necesidad boliviana de integrar a la población indígena. Por un lado, las limitaciones enfrentadas por una tímida economía de exportación primaria, basada en la explotación de petróleo para superar la dependencia, son agravadas por la ausencia de moneda nacional desde la dolarización en el año 2000. Por otro lado, el

degradante legado social y ambiental de la efímera riqueza petrolera de la década de 1970 está en la raíz de una aguda sensibilidad hacia la renovada explotación de recursos naturales en el presente, cuando la resistencia indígena y campesina se suma al argumento ambientalista en la presión por un patrón de desarrollo alternativo. Así como en Bolivia, este ideario confluyó, aunque de forma difusa, en la noción de *Sumak Kawsay* o Buen Vivir, consagrado en la Constitución de 2008. Los conflictos entre la afirmación de este principio y la profundización simultánea de la exportación primaria están en la raíz de las contradicciones vividas por la autoproclamada Revolución Ciudadana, que en 2017 pareció ganar en las elecciones un tiempo de vida adicional.

La formación ecuatoriana

Los anuncios de Ecuador como destino turístico realzan la impresionante diversidad de paisajes en este país. Un territorio más pequeño que Polonia, atravesado por la cordillera de los Andes, enriquece el paisaje de picos nevados y volcanes que separan la Amazonía de la costa del Pacífico donde se encuentra el santuario ecológico de Galápagos, atractivo turístico de interés mundial. Si en el plano geográfico se destaca la diversidad de paisajes reunidos en un espacio pequeño, los impases de la coyuntura reciente muestran una analogía en el plano político, en el que la intención de reconciliar soberanía, desarrollo económico y ecología milita hacia un patrón civilizatorio alternativo, explicitando dilemas subyacentes a la política continental en el siglo XXI.

Vista desde una perspectiva histórica, esta geografía accidentada dificultó la integración nacional del país, que desde la independencia enfrentó obstáculos internos y externos para consolidarse. A nivel internacional, las fronteras ecuatorianas sufrieron un permanente asedio de sus vecinos más grandes: Perú y Colombia, lo que se materializó en diversos enfrentamientos armados, especialmente con los peruanos, resultando en una significativa pérdida territorial. A nivel nacional, la inserción de Ecuador en el mercado mundial, como

exportador primario —especialmente de cacao, a partir de mediados del siglo XIX— agudizó las disparidades regionales. La oposición entre los intereses de una burguesía comercial y financiera apoyada en el dinamismo exportador de la costa, con base en Guayaquil y de una oligarquía serrana asentada en la propiedad agraria y en la explotación de la mano de obra indígena, asentada en Quito, se expresó en conflictos de matiz regionalista, que a veces dieron el colorido ideológico a simples disputas de poder (Quintero, 1991).

La vulnerabilidad a los flujos del mercado mundial y una correspondiente inestabilidad política caracterizaron la historia ecuatoriana en el siglo XX. La caída de los precios internacionales del cacao frente a la competencia africana, sumada a las plagas que afectaron la producción local y a los efectos de la crisis de 1929, sumieron al país en un período de estancamiento económico y alternancia política: entre la Revolución Juliana en 1925 y la presidencia de Galo Plaza en 1952, hubo 26 cambios de mandatarios y regímenes.

El aumento de las exportaciones de banana a partir de 1950, arrancó al país del letargo económico, favoreciendo una pacificación política. Pero, la inédita sucesión de tres presidentes constitucionales se interrumpió con el derrocamiento de José Velasco Ibarra y de su sucesor, a través de un golpe militar apoyado por los Estados Unidos en el contexto del triunfo de la Revolución Cubana. El cinco veces Presidente de la República, Velasco Ibarra, fue elegido por última vez en 1968 y nuevamente, no concluyó su mandato, interrumpido por otro golpe militar en 1972, en el momento en que comenzó la explotación petrolera a gran escala en el país (Cueva, 1984; Hurtado, 1988; Maiguashca y Maiguashca, 1991).

La extracción de petróleo en el Ecuador recibió un impulso decisivo a partir del aumento de los precios internacionales provocado por la Guerra de Yom Kippur de 1973 en el Medio Oriente, que hizo de la inversión en las reservas ecuatorianas una alternativa atractiva. Aunque el Ecuador nunca haya sido un gran productor mundial, el tamaño relativo del negocio petrolero tuvo un impacto extraordinario

en la economía nacional: la exportación total del país creció de menos de 190 millones de dólares en 1970 a 2.500 millones de dólares en 1981, un aumento de más de trece veces, mientras el PIB en ese período creció a una tasa anual promedio del 8% (Acosta, 2006: 117).

Sin embargo, la afluencia de los recursos petroleros fue efímera y dejó devastadoras consecuencias ambientales y financieras. El petróleo ecuatoriano se concentra en la región amazónica y su explotación causó daños ecológicos irreparables. En 1993, nativos y colonos de la Amazonía presentaron una demanda judicial contra Chevron, ex Texaco, multinacional que operó en el área entre 1964 y 1992. El proceso quedó conocido como "el juicio del siglo". La indemnización estimada por el perito designado por la justicia ecuatoriana alcanzó a 27 mil millones de dólares (Acosta, 2009a). En julio de 2018, la Corte Constitucional del Ecuador ratificó la sentencia de que la empresa debía pagar 9,5 mil millones de dólares solo para reparar los daños ambientales causados —no para cubrir compensaciones personales—. Las heridas abiertas por la acción depredadora de la transnacional y por las idas y venidas judiciales repercuten en la proyección política singular que la cuestión ecológica tiene en el país.

A nivel económico, las veleidades nacionalistas de los militares se tradujeron en inversiones en infraestructura y desarrollo industrial, referidos a la planificación estatal. En esta perspectiva, el objetivo era nacionalizar el petróleo. De modo similar a lo que sucedió en Venezuela en el mismo período, se creó una empresa estatal: Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE). Durante las dictaduras (1973-1979), la tasa promedio de expansión de la industria fue del 10% y el peso de este sector en la economía pasó del 14,3% al 20% del PIB, mientras que la inversión, medida como formación de capital fijo, creció en promedio 21,8% al año (Dávalos, 2016: 70). Al mismo tiempo, se mantuvo intacto un patrón de concentración de ingresos que alimentó el consumo suntuario basado en las importaciones, profundizando las determinaciones características del subdesarrollo:

> La bonanza que motivó el petróleo —la mayor cantidad de divisas que había recibido hasta entonces el país— que apareció en forma masiva y relativamente inesperada, se acumuló sobre las mismas estructuras anteriores y reprodujo, a una escala mayor, gran parte de las antiguas diferencias. El salto cualitativo llevó al Ecuador a otro nivel de crecimiento económico pero, al no corresponderle una transformación cualitativa similar, en poco tiempo se cristalizó en "el mito del desarrollo" (Acosta, 2006: 117).

En un contexto internacional de disponibilidad de capital, los ingresos petroleros aseguraron un aumento en el endeudamiento externo, también similar a lo que sucedió en Venezuela: el valor de la deuda ecuatoriana creció casi 22 veces entre 1971 y 1981, pasando de 206,8 millones de dólares a 5.868,2 millones de dólares y del 16% del PIB al 42%. Visto desde otro ángulo, el servicio de la deuda que comprometía 15 de cada 100 dólares exportados en 1971 aumentó al 71%, diez años después (Acosta, 2006; Correa, 2009).

La eclosión de la crisis de la deuda a partir del incumplimiento del pago mexicano en 1982, sumada a la drástica caída en el precio del petróleo en los años siguientes, evidenció la vulnerabilidad de la economía del país. En este contexto, el Estado ecuatoriano se vio obligado a ceder gradualmente su participación en el negocio petrolero en vista de la implementación de políticas neoliberales, cuyos efectos sociales provocaron una intensa respuesta popular.

De la redemocratización al Alianza País

La economía ecuatoriana entre la crisis de la deuda y la dolarización, ocurrida en el año 2000, está marcada por el estancamiento, en un contexto en que el cambio en los flujos de crédito internacionales agravó las dificultades derivadas de la caída de los precios del petróleo. La débil posición del país frente al capital financiero forzó la adopción progresiva de políticas neoliberales, a pesar de la diversa filiación política de los presidentes electos. El estrecho margen de

maniobra para manejar la crisis frente a las restricciones impuestas por los organismos internacionales está en la raíz del desgaste sufrido por los sucesivos gobernantes, evidenciada por la constatación de que, desde la salida de los militares en 1979, hasta la reelección de Correa en 2009, ningún presidente eligió a su sucesor.

El marco inicial de esta inflexión es la firma de la carta de intención con el FMI, en 1983, indicando el abandono de la orientación nacional-desarrollista, prevalente, incluso bajo los militares. En los años siguientes, el país firmaría otras cinco cartas de intención, hasta adoptar, en la década de 1990, las políticas de ajuste estructural características del neoliberalismo. La consecuencia política de este proceso fue el descrédito masivo de los partidos convencionales, agravado por escándalos de corrupción que impactaron a más de un gobierno, creando un ambiente favorable para la candidatura de Correa en 2006, contra aquello que denominó "partidocracia".

En la década de 1980, las expectativas de cambio traídas por el fin de la dictadura se frustraron por el imperativo de gestionar la crisis en el marco del orden heredado. Las respuestas antipopulares al estancamiento económico tuvieron consecuencias sociales devastadoras, especialmente cuando eran contrastadas con la prosperidad del período anterior. Impulsado por la bonanza del petróleo, el PIB por habitante aumentó de 375 dólares en 1973 a 1.668 dólares en 1981. En vísperas de la crisis de la deuda, el salario mínimo superó por primera y única vez en la historia reciente del país el costo estimado de la canasta básica (Dávalos, 2016).

Sin embargo, en los años siguientes el ingreso bruto por habitante se redujo a casi la mitad alcanzando a 951 dólares en 1989. La tasa de empleo formal, que era del 65% al comienzo de la década, decreció al 40%, proporción que se mantuvo en las décadas siguientes. La participación de los salarios en el ingreso nacional disminuyó vertiginosamente, reduciéndose del 35% al final de la dictadura al 12% en 2007. El servicio de la deuda externa absorbió una parte extraordinaria del gasto público, alcanzando el 28% del PIB en 1986 y el 25% en

1988, mientras que el gasto social en salud y educación alcanzaba en promedio el 4% del PIB. Entre la redemocratización y la ascensión de Correa, la pobreza siempre alcanzó al menos al 60% de la población, mientras los indicadores sociales de desnutrición infantil, deserción escolar, mortalidad materno-infantil y enfermedades relacionadas con la pobreza, entre otros, registraron un aumento sustancial (Dávalos, 2016: 72-74).

El deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores que provocó el aumento de la protesta social puede sintetizarse en dos datos: el poder adquisitivo del salario real se redujo a casi una cuarta parte, entre 1980 y 2000, mientras que en el mismo período el monto de las remesas de los trabajadores emigrantes en el exterior, que era inferior al 1% del PIB, pasó a 7,8%, convirtiéndose en la principal fuente de divisas del país después del petróleo (Acosta, 2009, 286-289).

El impacto de esta formidable regresión social sobre las fuerzas populares fue heterogéneo. El movimiento obrero enfrentó una severa disminución en el número de afiliados, lo que incidió en su combatividad, reflejando la precarización de las relaciones laborales y el desempleo. En este escenario, las organizaciones indígenas que confluyeron en la formación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en 1986, asumieron el protagonismo de las luchas populares. En 1990 lideraron un levantamiento de impacto nacional y cinco años después organizaron un partido político propio, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik. En 1997, ellas tuvieron un papel central en el derrocamiento del presidente Abdalá Bucaram (1996-1997), menos de seis meses después de su posesión. Como figura carismática y corrupta, Bucaram inició un programa radical de ajuste estructural asesorado por el argentino Domingo Cavallo, exministro de Carlos Menem, indicio de que la dolarización ya era considerada como una respuesta a la crisis.

Las dificultades económicas del país se agravaron por un nuevo conflicto militar con Perú en 1995 —la Guerra del Cenepa, último enfrentamiento armado entre naciones sudamericanas— y por la

devastación natural provocada por El Niño en 1997 y 1999. Después de casi dos décadas de estancamiento, la crisis alcanzó su punto máximo en 1999, cuando el PIB del país cayó en un 7,3% contabilizado en sucres constantes y el PIB *per cápita* en dólares se redujo en casi un 32%. En estos años el país sufrió el empobrecimiento más acelerado de la historia de América Latina, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). El número de pobres aumentó de 3,9 millones a 9,1 millones, pasando del 34% al 71% de la población, mientras que el número de personas afectadas por la pobreza extrema se duplicó, pasando de 2,1 millones a 4,5 millones. Este proceso fue acompañado de una mayor concentración del ingreso, ya que el 20% más rico aumentó su participación en la riqueza, del 52% a más del 61%, mientras que el 20% más pobres redujó su participación del 4,6% al 2,5% (Acosta, 2006; Correa, 2009).

En esta coyuntura recesiva, el gobierno del presidente Jamil Mahuad (1998-2000) decretó abruptamente la dolarización de la economía, extinguiendo el sucre como moneda nacional en enero del año 2000, en un proceso marcado por la imprevisibilidad, la falta de transparencia y la promiscuidad en la relación con el sector financiero (Correa, 2009). De inmediato, la macro-devaluación redujo el salario mínimo a cuatro dólares mensuales, mientras que el ingreso nacional cayó cerca de un 30% en términos nominales. La medida también afectó el poder adquisitivo de la clase media, fracturando la confianza en el Estado y en sus instituciones. En general, lejos de evitar la crisis, la medida acentuó el problema social, provocando una elevación en el costo de vida en una situación de desempleo creciente, al mismo tiempo que potenciaba la vulnerabilidad del país a la dinámica del capital internacional.

La reacción popular a la dolarización apuntó en dos direcciones diferentes. Por un lado, la emigración se intensificó, expresando la búsqueda de mejores condiciones de vida a expensas de los lazos afectivos y culturales. Se calcula que más de un millón de personas dejó el país en esa coyuntura, elevando el total de emigrantes a cerca

de tres millones, de una población de aproximadamente 14 millones de habitantes (Acosta, Olivares y Villamar, 2006; Eguez, 2001).

Por otro lado, la dolarización desencadenó una vigorosa rebelión popular dirigida por el movimiento indígena, que se ganó la simpatía de sectores militares. La presión de las masas precipitó la caída de Jamil Mahuad en enero de 2000. Sin embargo, la alianza realizada con los militares se disolvió cuando el comandante de las Fuerzas Armadas traicionó el compromiso con el liderazgo popular y entregó el gobierno al vicepresidente, quien ratificó la dolarización.

No obstante, en las siguientes elecciones el conjunto del movimiento social encabezado por las organizaciones indígenas apoyó la candidatura del coronel Lucio Gutiérrez, quien surgió en el levantamiento, como un líder nacionalista radical. La victoria de Gutiérrez a fines de 2002, al mismo tiempo que Lula triunfaba en las elecciones brasileñas, entusiasmó a los progresistas sudamericanos, quienes aplaudieron a ambos candidatos en el Foro Social Mundial en Porto Alegre en enero de 2002.

Pero el nuevo presidente ecuatoriano disipó rápidamente cualquier expectativa de cambio, comprometiéndose con la austeridad neoliberal y con los Estados Unidos, lo que puso en situación embarazosa a sus seguidores indígenas, que entonces ocupaban varios ministerios. Abatido por denuncias de corrupción y entreguismo que rápidamente lo colocaron en oposición al campo popular y a las clases medias, el mandato de Gutiérrez fue desastroso para el movimiento indígena, que salió desmoralizado y dividido de su breve participación en un gobierno cuyo mandato no llegó hasta el fin, acosado por la rebelión de los llamados 'forajidos' en 2005. Si Domingo Cavallo mostró el camino a la dolarización, los gritos de "que se vayan todos" de las calles argentinas, en 2001, llegarían al Ecuador cuatro años después.

En este contexto emergió al escenario político el economista Rafael Correa, ministro de Hacienda en el mandato cumplido por el vicepresidente de Gutiérrez, Alfredo Palacio (2005-2007), después de la fuga del presidente —que se exilió en Brasil—. Exhibiendo un

discurso crítico al neoliberalismo y la política convencional, acuñada como "partidocracia", su candidatura fue apoyada por partidos considerados de centro-izquierda, como la Izquierda Democrática (ID) y el Movimiento Popular Democrático (MPD) y también por los partidos Socialista y Comunista, además del movimiento Pachakutik, brazo electoral de la CONAIE.

Sin embargo, es un error ver una solución de continuidad entre el ascenso de las organizaciones indígenas y sociales de Ecuador y el mandato de Correa.

En un momento en que la combatividad y la legitimidad del movimiento indígena disminuía, el economista Pablo Dávalos (2016: 246) considera decisiva la forma en que la clase media se incorporó al Movimiento Alianza País, vehículo partidario de la política correísta. La propuesta de la ciudadanización de la política implicó "no solamente establecer una distancia radical de los partidos políticos existentes, sino también la cooptación y confiscación de la historia de resistencia y de la movilización social que tuvo en la clase obrera y en el movimiento indígena sus sujetos históricos más importantes".

El rechazo de los partidos políticos es parte de esta ideología de "ciudadanización de la política", que se ampliaría en la Revolución Ciudadana. Fiel a esta perspectiva, el joven profesor universitario de Guayaquil triunfó en las urnas sin pertenecer a un partido tradicional ni apoyar candidatos al parlamento. Sin embargo, el compromiso antipartidista planteó un problema concreto: el nuevo gobierno no tenía representantes en el Congreso, y éste tenía escasa legitimidad social. Para superar este dilema, Alianza País apostó sus fichas en la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que solo fue posible cuando los 27 diputados del Partido Sociedad Patriótica, dirigido por el expresidente Lucio Gutiérrez, se unieron sorprendentemente a la propuesta después de largas negociaciones (Muñoz Jaramillo, 2014: 185).

Inspirándose en el camino abierto por Hugo Chávez en Venezuela y seguido por Evo Morales en Bolivia, Correa instauró una asamblea que escribió la vigésima Constitución de la historia del país,

recurriendo a una combinación de manejo de medios y de las urnas para despegar, en apenas 28 meses, la autodenominada Revolución Ciudadana. Como en los países vecinos, el recorrido fue turbulento desde el inicio. El mismo día en que se inauguró la Constituyente en la ciudad de Montecristi, el nuevo gobierno reprimió brutalmente una protesta en Dayuma, en la provincia amazónica de Orellana, cuando la población cerró las vías de acceso al campo petrolero de Auca, operado por la estatal PETROECUADOR. Fue un presagio significativo de los enfrentamientos que estaban por venir, en la asamblea y en las calles.

En Montecristi, la tensión entre la aspiración a una Constitución referida al Bien Vivir, como esperaba el campo popular y el imperativo de la explotación primaria, impuesta por el capital, llevó a la renuncia del presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, a pedido de Correa. Más allá de las diferencias en cuanto al sentido de la Constitución, Acosta defendía una discusión más profunda de los temas sensibles a la sociedad ecuatoriana, incorporando la participación popular, en oposición a las exigencias políticas inmediatas y el verticalismo de la presidencia.

A pesar de los retrocesos y contradicciones, prevaleció la percepción de que el texto aprobado se apartaba del liberalismo constitucional en aspectos importantes, al incorporar nociones como la plurinacionalidad, la Pachamama, el *Sumak Kawsay*, la democracia comunitaria, la justicia indígena y la interculturalidad, además de los derechos de la naturaleza (Ávila Santamaría, 2013: 70). La constatación de que esta Constitución sufriría 23 cambios hasta 2017 es un indicio del camino recorrido por Alianza País desde entonces.

Economía política de la revolución ciudadana

A pesar de la contundente crítica a la injerencia de organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial en los países sudamericanos, así como a la dolarización ecuatoriana, Rafael Correa no se propuso revertir la medida. En términos concretos, su nacionalismo avaló una auditoría de la deuda externa que encaminó la revisión de

los contratos firmados por el gobierno y no renovó la cesión de la base militar de Manta a los Estados Unidos, cumpliendo una promesa de campaña. De manera similar a Evo Morales, el presidente ecuatoriano renegoció contratos con las compañías petroleras buscando invertir en programas de transferencia monetaria condicionada y en obras de infraestructura. Esta política se benefició por el aumento en los precios internacionales del petróleo, de modo que Correa dispuso de más recursos que todos sus predecesores. Existe consenso entre los críticos de la dolarización de que este es el principal de una serie de factores coyunturales que sustentaron la arquitectura heredada.

> La dolarización se sostuvo por factores exógenos y no por méritos propios. Recordemos el aporte de las remesas, de los crecientes precios del petróleo, de la bonanza para muchas exportaciones, del acceso a créditos externos baratos por parte de los agentes económicos privados. A lo anterior se tendría que añadir el ingreso de dólares provenientes del narcolavado o de otras actividades delictivas, alentado por la propia dolarización (Acosta, Olivares y Villamar, 2006: 117).

Esta situación puso al gobierno frente a un dilema: los recursos provenientes de la exportación primaria, especialmente del petróleo, facilitaban los gastos sociales sin enfrentar las restricciones estructurales de la sociedad ecuatoriana. Este beneficio inmediato condujo a una mayor inversión en la extracción del producto, en el momento en que las estimaciones indicaban que las reservas del país ya habían alcanzado su pico y decrecían irreversiblemente, expresando el carácter provisional del esquema actual. Como consecuencia, afloró una contradicción entre la orientación extractivista de la economía y su superación proyectada, en el marco del precepto constitucional del *Sumak Kawsay* o Bien Vivir (Carpio Benalcázar, 2008).

La contradicción entre la presión sobre los recursos naturales mediada por el Estado, y el precepto constitucional del *Sumak Kawsay*

se planteó de modo paradigmático en la negociación de la Iniciativa Yasuní-ITT, que proponía mantener inexplorado un potencial de 850 millones de barriles de petróleo que ocupan cerca de 200 mil hectáreas en el subsuelo del Parque Nacional Yasuní, a cambio de un aporte estimado de 350 millones de dólares anuales a ser realizado por la comunidad internacional a lo largo de diez años. Este dinero sería administrado por una comisión fiscalizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), e invertido en programas sociales de energía renovable, reforestación o eficiencia energética.

Más allá de las ambigüedades de una propuesta basada en la buena voluntad de la "comunidad internacional", la iniciativa fue manejada de modo contradictorio por Correa, desde su lanzamiento. Incluso cuando el gobierno firmó un protocolo con el PNUD en 2010, defensores de la propuesta intuyeron que se trataba de una puesta en escena: creían que el gobierno no invertiría esfuerzos en recaudar fondos y luego archivaría la iniciativa, declarándola inviable (Acosta, 2010). Cuando este escenario se materializó en 2013, el colectivo Yasunidos propuso un referéndum nacional para decidir el tema. El presidente respondió: "Si quieren una consulta, de acuerdo, vamos a la consulta. Pero no sean vagos, recojan las firmas si tienen tanto apoyo (*El Universo*, 2013). Meses después, los que se oponían a la exploración petrolera en Yasuní entregaron un número de firmas superior al necesario. El referéndum, sin embargo, nunca se realizó, bajo el pretexto de que hubo irregularidades en las firmas.

Eso no sorprendió a nadie en el Ecuador. Hace mucho tiempo estaba claro que Alianza País resolvería la contradicción entre el extractivismo y Bien Vivir apoyando el primero y enfrentando el segundo.

Desde la aprobación de la Constitución por referéndum, en octubre de 2008, las figuras de la izquierda integradas en Alianza País quedaron desplazadas. Por ejemplo, se inviabilizaron las candidaturas de los exministros Alberto Acosta y Gustavo Larrea en las elecciones parlamentarias de febrero de 2009. Este alejamiento del sector permeable a las presiones populares correspondió a un fortalecimiento

del estilo de Correa, cuyo temperamento muchos ecuatorianos describirían como "autoritario, intolerante y personalista" (Ospina Peralta, 2013b: 27).

Al mismo tiempo, el gobierno avanzó, aún en 2008, en un proyecto de Ley de Minería antagónico al espíritu y a la norma de la Constitución. El texto de la ley contradice la afirmación de los derechos colectivos y el derecho a la propiedad territorial, a la consulta previa y a la consulta prelegislativa de las nacionalidades indígenas, lo que desencadenó protestas del movimiento indígena, que luego enfrentaría a un gobierno cerrado al diálogo. En el año siguiente, los proyectos de ley sobre aguas y tierras motivaron la reanudación de las movilizaciones de CONAIE, que anunciaban: "No caímos en el cuento de la revolución ciudadana, hemos retomado nuestro proyecto político" (Observatorio Social de América Latina, 2008). En 2010, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), aliada con el gobierno, se sumó sorprendentemente a la lucha en torno a la Ley de Recursos Hídricos, evidenciando el alejamiento entre Alianza País y los movimientos sociales.

El patrón de la relación de Correa con el campo popular articula cooptación —principalmente por medio de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana— y represión. Según un estudio conjunto realizado entre 2008 y 2010 por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y la ONG ambientalista Acción Ecológica —que llegó a tener su personería jurídica provisoriamente suspendida—, el gobierno activó 41 casos judiciales por motivos políticos, incluidos 31 procesos penales, alcanzando a 199 personas, un número que creció en los años siguientes. En 2011, la prisión de líderes shuar, acusados de sabotaje y terrorismo, provocó indignación generalizada. En aquel momento, organizaciones como CONAIE, el Congreso de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE)

y la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (CONAICE) reclamaban la amnistía de casi doscientos perseguidos políticos procesados por "defender la vida y la Pachamama" (Batista, 2011). Las protestas no se limitaron al movimiento indígena, el gobierno propuso una Ley Orgánica de Educación Superior que fue interpretada como atentatoria para la autonomía de las universidades, provocando manifestaciones y conflictos en las principales ciudades del país.

En respuesta a la intolerancia del gobierno, Alianza País se enfrentó a los altos niveles de conflictividad social. En 2010, se registraron cerca de 900 conflictos; en 2011 había alrededor de 800; en 2012, se estimaron 700 eventos de ese tipo, incluida la Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad, la movilización popular más importante bajo la gestión de Rafael Correa hasta entonces. A modo de comparación, en la cúspide de la crisis económica ecuatoriana en 1999, se registraron 750 conflictos. Ante estos datos, los observadores señalaron que "la Revolución Ciudadana es el período de mayor conflicto social desde el retorno de la democracia en 1979" (Ramírez Gallegos, 2013).

Estos conflictos contrastan con la forma dialogada en que el gobierno lima las asperezas con la burguesía, evidenciada en las negociaciones sobre el Código Productivo con la mediación de la ministra Nathalie Cely en 2010, que más tarde sería nombrada embajadora en los Estados Unidos. El apoyo de clase a Alianza País se evidenció en un polémico episodio en ese mismo año, calificado por el presidente como un intento de magnicidio y golpe de Estado. El 30 de septiembre, la policía se rebeló contra la incorporación de su carrera a la recién aprobada Ley de Servicio Público. Correa se dirigió personalmente al principal foco de la protesta —un cuartel de Quito— y pronto tuvo un desencuentro con los rebeldes. Los ánimos se exaltaron y el presidente, que se estaba recuperando de una cirugía de rodilla, fue evacuado a toda prisa y trasladado a un hospital militar. Las instalaciones médicas acabaron cercadas de policías revoltosos que se enfrentaron con escuadrones de élite de las Fuerzas Armadas, encargados de proteger

y rescatar al presidente. El episodio dejó un saldo de cinco muertes en la capital: una civil, dos militares y dos policiales.

En este contexto, los empresarios se manifestaron por unanimidad a través de sus instituciones representativas a favor de la estabilidad política y el orden, en marcado contraste con las acciones de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) en 2002, entonces dirigida por Pedro Carmona. En Ecuador, quedó claro que no había una articulación de clase sustentando un supuesto golpe, pero justamente fue lo contrario. Frente a los hechos, una investigación consistente concluyó: "Entre los policías actuantes en el hecho no hubo una voluntad para llevar a cabo un golpe de estado, esto es, el derrocamiento de Rafael Correa y la conformación de un gobierno de facto, mediante la conformación de alianzas de partidos, movimientos o grupos específicos, con los policías rebeldes y necesariamente con fuerzas militares. El Ecuador tiene una larga e ilustrativa historia de golpes de estado, a la luz de la cual el 30-S (referencia a la fecha de la protesta, el 30 de septiembre de 2010, como quedó conocida) no encaja sino como una asonada policial" (Muñoz Jaramillo, 2014: 232).

El apoyo burgués a Alianza País fue tejido al menos desde la Constituyente, cuando las diferencias asociadas a las relaciones laborales, al régimen de desarrollo y a la exigencia de consentimiento previo para proyectos extractivistas obligaron a la salida de Alberto Acosta. El compromiso del gobierno con el nuevo código de minería, que resultó en enfrentamientos con el campo popular, fortaleció esta afinidad, especialmente con los segmentos de la burguesía vinculados a la globalización, como es el caso de la exportación primaria.

En el contexto del levantamiento policial de 2010, esta complicidad había sido sellada por la reacción relativamente exitosa del gobierno a los efectos de la crisis mundial. Con la caída en el precio del petróleo en 2008, la balanza comercial del país pasó a registrar saldos negativos desde 2009, que persistieron aún cuando el barril subió a casi 100 dólares, entre 2011 y 2013. Entre 2009 y 2015, el déficit comercial sumó

7.329 mil millones de dólares, mientras las remesas de los emigrantes disminuyeron de 3.335 mil millones de dólares en 2007 a 2.378 mil millones en 2015. Las exportaciones de banana se duplicaron en el período (de 1.303 mil millones a 2.808 mil millones de dólares), pero fueron insuficientes para cubrir la diferencia. Para mitigar el desequilibrio comercial, el gobierno recurrió al endeudamiento externo. En 2009, la deuda externa pública alcanzó un nivel histórico mínimo de 7.015 mil millones de dólares (12% del PIB). En 2016, la deuda externa se había triplicado, alcanzando 22.572 mil millones de dólares (22% del PIB). Las relaciones con China se intensificaron, negociándose incluso el petróleo a futuro con ese país (Ospina Peralta, 2013a; Acosta y Guijarro, 2016).

En general, los datos indican que la política económica correísta favoreció a los grandes conglomerados que concentran la riqueza del país y respaldan al gobierno. En 2015, los ingresos de los primeros 20 grupos económicos más importantes equivalían al 24,5% del PIB, mientras que el sector extractivista, el de la construcción y los grupos financieros registraron niveles de rentabilidad más elevados. A pesar de la retórica del "cambio de la matriz productiva", intensificada a partir de la decisión de explotar el petróleo en Yasuní, la estructura productiva y el patrón de inserción internacional del país se mantuvieron inalterados.

La participación de las manufacturas en el PIB, entre 2007 y 2015, estuvo alrededor del 12,5%, mientras que la participación de las exportaciones primarias aumentó del 74% al 79% del total. En lugar de favorecer a la industrialización, la caída en el peso de las exportaciones de petróleo, que se redujo del 52% al 35% en el período, acentuó la presión por la exportación de otros productos primarios (Ospina Peralta, 2013a; Acosta y Guijarro, 2016). La intensificación del agronegocio y de la minería, hasta entonces una actividad marginal, están entre los factores que impulsaron el conflicto social en la Revolución Ciudadana.

A nivel laboral, la tasa de ocupación de la población económicamente activa estuvo alrededor del 40% entre 2007 y 2015. Hubo una

modesta mejora en los salarios, mientras que el PIB y el consumo crecieron, siguiendo una tendencia que se remonta al inicio de la década, cuando la crisis se revirtió. Esta tendencia no fue exclusiva del Ecuador, toda vez que en todo el subcontinente se invirtió el cuadro recesivo prevaleciente en la década de 1990. En este país, el ritmo de la recuperación decreció en la segunda mitad de la década y la reactivación económica no estuvo vinculada a ningún cambio estructural (Ospina Peralta, 2013a: 226).

Las ganancias salariales de las minorías en la formalidad fueron erosionadas por el costo de la canasta básica de alimentos, que aumentó de 427,7 dólares en 2007 a 683,16 dólares en 2016, mientras que el salario mínimo cubrió en promedio el 51,7% de este costo. En un país donde no hay beneficios de desempleo, los programas de ingresos condicionados han desempeñado un papel social clave, además de consolidar el apoyo de sectores empobrecidos al gobierno. El más importante de estos programas es el Bono de Desarrollo Humano, elevado de 35 a 50 dólares en medio de la campaña presidencial de 2013 (Acosta y Guijarro, 2016; Muñoz Jaramillo, 2014). Sin embargo, Pablo Dávalos (2016) considera incorrecto establecer vínculos directos entre el aumento de las exportaciones primarias y los programas sociales. El economista ecuatoriano señala que la arquitectura institucional que sustenta el gasto público del país, acordada con los organismos multilaterales, impide que las exportaciones financien programas sociales. "La renta extractiva puede permitir la construcción de hospitales y escuelas, pero prohíbe contratar al personal de salud o educación necesario para estos nuevos hospitales y escuelas".

Estos gastos se financian con impuestos, cuya recaudación aumentó bajo Alianza País debido al crecimiento económico, la modernización del aparato estatal y el aumento de los tributos, inclusive sobre el ingreso. Estos ingresos, que representan las tres cuartas partes de la recaudación estatal, costean los programas sociales, mientras que las exportaciones financian subsidios a los combustibles, inversiones en infraestructura y reservas internacionales depositadas en bancos

extranjeros (Dávalos, 2016: 146). Ilustrativo de esta tendencia es que mientras más del 50% de la inversión pública entre 2008 y 2013 se centró en el transporte y las carreteras que benefician al sector exportador, la inversión en riego y gestión del agua —fundamental para la economía campesina— cayó del 7,5% a menos del 2,5% (Muñoz Jaramillo, 2014: 61).

Como ocurre en Bolivia, el hostigamiento a los modos de vida tradicionales y a la agricultura campesina se relacionan con una mayor mercantilización de la economía. Alianza País también reforzó este movimiento en el nivel subjetivo, al difundir el consumo como un valor en un contexto de crecimiento económico y la popularización del crédito doméstico, lo que elevó los niveles de endeudamiento familiar. Desde el inicio de la dolarización, hubo aumento en el consumo de los hogares, una tendencia profundizada bajo Alianza País. El consumo de los hogares aumentó de 11,83 mil millones de dólares en el año 2000 a 53,03 mil millones de dólares en el año 2012 y aproximadamente 61,51 mil millones de dólares en 2013 (Dávalos, 2016: 126). Aunque las estadísticas indican una reducción de la pobreza, desde el 57% de la población en medio de la crisis de 1999 hasta el 26% en 2013, la centralidad de las remesas de los emigrantes sugiere la precarización del mundo del trabajo: entre 2000 y 2015 se estima que se enviaron 35.270,5 millones de dólares al país, un promedio de 2.351 millones de dólares por año. Para que se tenga una idea de la importancia macroeconómica de las remesas de migrantes, durante ese mismo período, el Ecuador recibió 11.338 millones de dólares por inversión extranjera directa (Dávalos, 2016: 124, 151).

Alianza País se empeñó en recuperar el papel del Estado en la economía y la política. Sus gobiernos vieron una notable expansión de la participación del sector público no financiero en el PIB, que pasó de menos del 25% en 2006 a casi el 50% cinco años después, mientras que la planilla de pago se triplicó entre 2005 y 2015 —de 2,9 millones de dólares a 9,9 millones de dólares (Ospina Peralta, 2013a: 199)—. Los partidarios del correísmo señalan que el empleo público

fue un importante impulsor del consumo, mientras que los críticos afirman que la máquina estatal fue instrumentalizada por el partido: "Los funcionarios mimetizan la militancia del movimiento oficial y viceversa" (Machado, 2013: 17)

Hay una percepción consensuada de que Alianza País operó una modernización exitosa del Estado ecuatoriano. Sin embargo, el carácter conservador de esta modernización fue reconocido por el propio presidente: "Básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa" (Correa, 2012).

Con todo, en el proceso de hacer "mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación", el gobierno se revistió de un carácter antidemocrático que fue denunciado por movimientos y personalidades de izquierda en el país. De modo similar a lo que ocurre en Bolivia, hay indicios de que instituciones como la Corte Constitucional, la Procuradoría del Estado, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría del Estado, las Cortes de Justicia, la Defensoría del Pueblo, los tribunales electorales, entre otras, actúan con independencia limitada. En general, los opositores constatan que la única crítica aceptada por Alianza País es la que proviene de la derecha tradicional, ya que ella contribuye a legitimar al partido en el poder (Dávalos, 2016: 65).

Rendida al "mismo modelo de acumulación", la Revolución Ciudadana vio menguar su potencial creativo original. El desafío de conciliar desarrollo, ecología y soberanía dio paso a las políticas de la moda. La intensificación del extractivismo alienó el apoyo de sectores populares organizados, que se pretendió compensar con la extensión de las políticas asistencialistas a los más empobrecidos estimulados por el crecimiento económico, la expansión del crédito y la promesa de consumo, en medio de la propaganda masiva. En el campo de la ecología, el agotamiento de las propuestas pioneras, como la Iniciativa Yasuní-ITT o la figura constitucional de los derechos de la naturaleza,

correspondió a la adopción de los programas Socio Bosque y Socio Páramo, inscritos en la lógica del mercado de carbono y de la financiarización de la naturaleza difundida por el Banco Mundial (Houtart, 2014: 167). En el plano de la integración regional, el país que alberga la sede de Unasur y forma parte del Alba selló, en 2014, un tratado comercial con la Unión Europea en el marco de lo que previamente se había negociado con Perú y Colombia, gobiernos a favor de la apertura multilateral.

En resumen, el proyecto Alianza País implicó un fortalecimiento eficaz del Estado para los negocios extractivistas y para la política correísta, pero se distanció de las expectativas democráticas que impulsaron su ascenso. La dinámica se resume en las siguientes palabras:

> En la disyuntiva de tener que escoger entre democracia y eficacia, el gobierno ha escogido la segunda. Su prioridad no es democratizar el Estado sino fortalecerlo, y eso significa fortalecer al Ejecutivo; […] En tal sentido, los sindicatos públicos, las organizaciones indígenas y ecologistas y las organizaciones locales son ante todo obstáculos para un Estado eficiente y una sociedad disciplinada (Ospina Peralta, 2013a: 263).

Al despreciar la utopía de conciliar desarrollo, ecología y soberanía —que le había impulsado en su origen—, Alianza País se resignó a una modernización conservadora del Estado y de los negocios en el Ecuador. En este proceso, el "izquierdismo", el "ecologismo infantil" y el "indigenismo infantil" se convirtieron en enemigos de un régimen que replica la intolerancia característica de la burguesía latinoamericana, aunque "disfrazada en la piel del socialismo", consumando, en la mejor de la hipótesis, "una revolución ciudadana sin ciudadanía" (Acosta y Guijarro, 2016; Ospina Peralta, 2013a: 263).

Reflexiones finales

Al surgir en un contexto de crisis y rebelión en que varios presidentes fueron destituidos gracias a la presión popular, la consolidación de Alianza País bajo el liderazgo de Rafael Correa abrió una nueva etapa en la política ecuatoriana. Inicialmente concebida para disputar la presidencia en 2006 con una candidatura solitaria, la victoria transformó la convocatoria de la Asamblea Constituyente —una promesa de campaña— en un imperativo político orientado a sentar las bases de sustentación del nuevo gobierno. En este proceso, las fracciones del partido permeables a las aspiraciones populares fueron alejadas de las posiciones de mando, mientras la relación con los sectores burgueses se estrechó. La intolerancia con la protesta popular contrastaba con el diálogo fluido con el capital.

El núcleo de la discordia se sintetizó en la visión del mundo en torno al Bien Vivir. Las características de la formación socioeconómica ecuatoriana, sumadas a una historia reciente de depredación ambiental, forjaron una sensibilidad única al tema ecológico, en el que indígenas, campesinos y ambientalistas convergieron en torno a una visión de modernidad alternativa, en oposición a los intereses del capital internacional y a la racionalidad del Estado burgués.

Si la Constitución redactada en Montecristi contempló aspectos de estas aspiraciones, incorporadas retóricamente por Alianza País, su práctica se comprometió en la dirección contraria. La represión en Dayuma y la imposición del código de minería dieron el tono inicial a la gestión. Desde entonces, las ambigüedades insinuadas en la negociación de la Iniciativa Yasuní-ITT se evaporaron, en medio de juegos escénicos y del desprecio agresivo a los defensores del proyecto, mientras que el gobierno se embarcó en políticas de mercado de carbono afinadas con el "capitalismo verde" que retóricamente reniega. Dispositivos constitucionales que impedían el extractivismo fueron alterados o ignorados, como es el caso de la prohibición de la agricultura transgénica.

Modificada 23 veces en siete años, la Constitución de 2008 nos recuerda que la arena parlamentaria a menudo sirve para que la contrarrevolución eluda al cambio. En una situación que sintetiza

el movimiento del período, la comunidad indígena amazónica de Sarayaku otorgó asilo a tres perseguidos políticos de Alianza País en 2014, incluido un diputado de Pachakutik: la Constitución amparaba, por medio de la plurinacionalidad, la libertad de quien era impotente para defender la propia Constitución.

Es indiscutible que Alianza País condujo una refundación de la política y una modernización del Estado nacional ecuatoriano. Se desvanecieron los partidos que se alternaron en el poder desde el final de la dictadura, como el Partido Social Cristiano (PSC), Izquierda Democrática (ID), Democracia Popular (DP) y el Partido Roldocista Ecuatoriano (PRE). En contraste con la retórica neoliberal del Estado mínimo, se recuperó la centralidad estatal en la economía y la política. Sin embargo, el sentido de esta refundación contradice las aspiraciones populares que lo impulsaron inicialmente. Alianza País avanzó una modernización funcional a la reproducción capitalista, combinando nuevos y viejos negocios, todos en consonancia con la inserción internacional periférica: los ingresos petroleros, la minería a gran escala, el agronegocio —incluidos los transgénicos— grandes obras de infraestructura y el consumo importado.

Esta política económica convencional correspondió a una economía política convencional. Alianza País utilizó el poder estatal para reprimir el disenso y fidelizar a las masas, en medio de un estado de propaganda permanente que adulaba a su líder. El crecimiento económico, el aumento del consumo, las políticas asistencialistas y las obras de infraestructura respaldaron la popularidad del gobierno, que triunfó en diez elecciones consecutivas.

En 2014, Alianza País fue derrotado en las elecciones municipales y provinciales y la oposición se hizo cargo de diecinueve de las veinte ciudades más importantes del país —incluida la capital, Quito—. La caída de los precios del petróleo a partir de ese año desafió la economía política del régimen. La derecha tradicional recuperó la iniciativa, incluso en las calles, obligando a Correa a retroceder en la propuesta de un impuesto a las herencias, un hecho inédito hasta entonces.

Aunque terminara su mandato acorralado, en 2017 Rafael Correa eligió a su sucesor en una elección apretada, a contramano de las sucesivas derrotas de los gobiernos progresistas en la región. Pero luego se desencontró con el nuevo presidente, Lenín Moreno, quien fue su vicepresidente en los dos primeros mandatos, mientras que Jorge Glas, vicepresidente en su tercer mandato, acabó preso por corrupción. En el afán de "descorreizar" al país, Moreno se inclinó a la derecha para fortalecer su posición en una disputa visceral que dividió a Alianza País, presagiando la melancólica degradación de una revolución que nunca hubo[1].

1 Rafael Correa dejó Alianza País en enero de 2018 para crear un nuevo partido, el Movimiento Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana. En julio de 2018, un juez decretó su prisión preventiva por sospechas de que el expresidente había sido autor intelectual del secuestro del exdiputado opositor Fernando Balda en 2012, en Colombia. Sin embargo, el arresto de Correa, que en 2018 vivía en Bélgica, no se hizo efectivo [n.e.].

Bibliografía

ACCIÓN ECOLÓGICA, COMISIÓN ECUMÉNICA DE DERECHOS HUMANOS; FUNDACIÓN REGIONAL DE ASESORÍA EN DERECHOS HUMANOS

2011 "Criminalización a Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza en Ecuador", en Cecilia Chérrez, César Padilla, Sander Otten y María Rosa Yumbla (eds.), *Cuando tiemblan los derechos: extractivismo y criminalización en América Latina*. Quito: Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina; Acción Ecológica y Broederlijk Denle.

ACOSTA, ALBERTO

2010 "La firma del fideicomiso para la Iniciativa Yasuní-ITT", en Viento Sur, 3 de agosto de 2010. Disponible en: http://www.vientosur.info/documentos/Alber- to%20Acosta.pdf.

2009a *La maldición de la abundancia*. Quito: Abya Yala.

2009b *Análisis de coyuntura política, económica y social del Ecuador: Una lectura de los principales componentes económicos, políticos y sociales de Ecuador durante el año 2009*. Alberto Acosta (coord.). Quito: Flacso, Friedrich Ebert Stiftung e Ildis. Disponible en: http://www.fes-ecuador.org/fileadmin/user_upload/pdf/393%20ANACOY2010_0509.pdf.

2006 *Breve história econômica do Equador*. Brasília: Funag.

ACOSTA, ALBERTO Y JOHN CAJAS GUIJARRO

2016 "Ocaso y muerte de una revolución que al parecer nunca nació", en *Rebelión*. Disponible en: http://www.rebelion.org/docs/216525.pdf.

ACOSTA, ALBERTO; SUSANA LÓPEZ OLIVARES Y DAVID VILLAMAR

2006 "El aporte de las remesas a la economía ecuatoriana", en *La Insignia*, septiembre.

ÁVILA SANTAMARÍA, RAMIRO
2013 "De la utopía de Montecristi a la distopía de la revolución ciudadana", en Decio Machado *et al*., *El correísmo al desnudo*. Quito: Montecristi Vive.

BÁEZ, RENÉ *et al.*
1995 *Ecuador, pasado y presente*. Quito: Libresa.

BATISTA, GENARO
2011 "Represión a los Shuar", en *Revista Memoria*. Disponible en: http://www.revistamemoria.com/noticia.php?id=79.

BREDA, TADEU
2011 *O Equador é verde: Rafael Correa e os paradigmas do desenvolvimento*. São Paulo: Elefante. Disponible en: http://www.editoraelefante.com.br/wp-content/uploads/2015/09/o_equador_e_verde_TB2.pdf.

CARPIO BENALCÁZAR, PATRÍCIO
2008 "El buen vivir más allá del desarrollo: la nueva perspectiva constitucional", en *Alai*, 11 de junio de 2008. Disponible en: https://www.alainet.org/es/active/24609.

CORREA, RAFAEL
2012 "El desafío de Rafael Correa", en *El Telégrafo*, 15 de enero de 2012. Disponible en: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/especial-desafio-rafael-correa/1/el-desafio-de-rafael-correa.
2009 *Ecuador: de Banana Republic a la no República*. Bogotá: Random House Mondadori.

CUEVA, AGUSTÍN
1984 "Ecuador: 1925-1975", en Pablo Gonzáles Casanova (coord.), *América Latina: Historia de medio siglo*. México: Siglo XXI.

CUVI, JUAN (ed.)
2014 *La restauración conservadora del correísmo*. Quito: Montecristi Vive.

DÁVALOS, PABLO
2016 *Alianza País o la reinvención del poder. Siete ensayos sobre el posneoliberalismo en el Ecuador*. 2a ed. Bogotá: Ediciones Desde Abajo.

2014 *Alianza País o la reinvención del poder. Siete ensayos sobre el posneoliberalismo en el Ecuador*. 1a ed. Bogotá: Ediciones Desde Abajo.
2008 "Reflexiones sobre el sumak kawsay (el buen vivir) y las teorías del desarrollo", en *Alai*, 5 de agosto de 2008. Disponible en: http://alainet.org/active/25617&lang=es.

EGUEZ, ALEJANDRO
2001 "Las remesas de emigrantes en Ecuador tras la dolarización", en *Observatorio de la Economía Latinoamericana*. Disponible en: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/Eguez-remesas-A.htm.

EL UNIVERSO
2013 "Presidente Rafael Correa reta a grupos opositores a reunir firmas para consulta sobre Yasuní", en *El Universo*, 17 de agosto de 2013. Disponible en: https://www.eluniverso.com/noticias/2013/08/17/nota/1302246/ presidente-rafael-correa-reta-grupos-opositores-reunir-firmas.

HOUTART, FRANÇOIS
2014 "El desafío de la agricultura campesina para el Ecuador", en Juan Cuvi (ed.), *La restauración conservadora del correísmo*. Quito: Montecristi Vive.

HURTADO, OSVALDO
1988 *El poder político en el Ecuador*. Quito: Letraviva.

MACHADO, DECIO *et al.*
2013 *El correísmo al desnudo*. Quito: Montecristi Vive.

MAIGUASHCA, JUAN Y LIISA NORTH MAIGUASHCA
1991 "Orígenes y significado del Velasquismo: Lucha de clases y participación política en el Ecuador, 1920-1972", en Rafael Quintero (ed.), *La cuestión regional y el poder*. Quito: Corporación Editora Nacional.

MUÑOZ JARAMILLO, FRANCISCO (ed.)
2014 *Balance crítico del gobierno de Rafael Correa*. Quito: Universidad Central de Ecuador.

OBSERVATORIO SOCIAL DE AMÉRICA LATINA
2008 *Cronología del conflicto social. Ecuador, enero 2008*. Documento de trabajo 160. Buenos Aires: Clacso

OSPINA PERALTA, PABLO

2013a "Estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo antes que cambiarlo", en Pablo Ospina Peralta *et al*., *Promesas en su laberinto. Cambios y continuidades en los gobiernos progresistas de América Latina*. La Paz: IEE, CEDLA y CIM.

2013b "La revolución ciudadana en Ecuador: conflicto social, régimen disciplinario y proyecto de Estado", en Decio Machado *et al*., *El correísmo al desnudo*. Quito: Montecristi Vive.

QUINTERO, RAFAEL (ed.)

1991 *La cuestión regional y el poder*. Quito: Corporación Editora Nacional.

RAMÍREZ GALLEGOS, FRANKLIN (coord.)

2013 *Nuda política. Democracia, participación y conflictos. Ecuador 2009-2012*. Quito: FES-ILDIS y FLACSO.

La destitución de Fernando Lugo en Paraguay y la cuestión brasiguaya

En la entrevista que concedió a la Folha [de São Paulo], en la sede de su grupo empresarial en Asunción, ese catarinense nacido en la pequeña ciudad de Videira llamó a los campesinos que cercan su hacienda de delincuentes; elogió al gobierno del dictador Alfredo Stroessner ("En aquella época tu podías dormir con la ventana abierta y nadie te robaba. Solo estamos empeorando desde entonces"); y dijo que es inútil lidiar con los sin tierra sobre la base de la diplomacia, que ellos tienen que ser tratados "como mujer de maleante, que solo obedece en base al palo".

Entrevista con Tranquilo Favero, el mayor productor de soja de Paraguay, 2012

Quiero que ustedes se sientan en casa; más allá de lo protocolar, voy a repetir lo que ya dije: usen y abusen de Paraguay... Todo con el Brasil, nada contra el Brasil.

Horacio Cartes para empresarios brasileños, 2014

Introducción

El oprimido Paraguay fue tocado brevemente por la marea progresista y también sufrió con las contradicciones de este proceso. La elección de Fernando Lugo en 2008 fue el primer cambio político en el país después de seis décadas de dominio colorado, incluyendo la dictadura más larga de la región, encabezada por Alfredo Stroessner (1954-1989). Identificado como un aliado progresista, la principal promesa electoral de Lugo fue la reforma agraria. Sin embargo, el gobierno se enfrentó con fuertes obstáculos para avanzar en ese sentido, los cuales fueron endurecidos por la prosperidad reciente del agronegocio de la soja, protagonizados por propietarios de origen brasileño, conocidos como brasiguayos.

Aunque la presencia de brasileños en el país no sea reciente, su papel central en la expansión de la soja redimensionó esta problemática. Durante las gestiones petistas, el Estado brasileño incentivó la proyección brasiguaya por medio de líneas de crédito y apoyo político. De este modo, sin embargo, ayudó a endurecer los obstáculos enfrentados por Lugo para avanzar en acciones mínimas para democratizar el acceso a la tierra. Esto debilitó la posición del gobierno paraguayo frente a los intereses que desencadenaron el proceso de *impeachment* en 2012 —que la diplomacia brasileña fue impotente para frenar—. Se constata una situación paradójica donde el apoyo a los sectores económicos que se oponen al cambio político termina finalmente por revertirlo. Visto a través del prisma de la problemática brasiguaya, el *impeachment* en Paraguay explicita las contradicciones de la política regional brasileña y del progresismo sudamericano, inherentes a la pretensión de articular el cambio político y el conservadurismo económico.

Cuestión agraria y presencia brasileña en Paraguay

La problemática brasiguaya está enraizada en la confluencia de dos vectores de la historia del Paraguay independiente: la cuestión agraria y la influencia de Brasil. Ambos fenómenos están relacionados con el resultado de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), un episodio decisivo en la formación del Paraguay contemporáneo, que impactó tanto en las relaciones sociales en el campo como en la inserción internacional del país. En su expresión actual, la constitución del poder brasileño se refiere a la convergencia de intereses económicos y geopolíticos entre la dictadura comandada por Alfredo Stroessner y la política exterior brasileña en el período.

Aunque la naturaleza de las relaciones de producción predominantes en Paraguay antes de la Guerra de la Triple Alianza sea un tema polémico tanto en el país como en el exterior (Pastore, 1972; Rivarola, D., 1986; Rivarola, M., 2010; White, 1984), prevalece entre los estudiosos de la cuestión agraria una lectura según la cual el

conflicto armado con Brasil, Argentina y Uruguay alteró drásticamente las relaciones de producción vigentes, basadas en modos de vida de orientación campesina, en las que predominaba la propiedad estatal de la tierra y no existía una oligarquía vinculada al latifundismo —un caso singular en el continente—. Según este enfoque, el desenlace de la guerra abortó el camino relativamente autónomo de la formación del Estado paraguayo, que fue entonces incorporado a la esfera de la influencia de sus vecinos, principalmente de Argentina, por medio de una conversión de sentido mercantil de uso de la tierra que sostuvo la formación de una clase dirigente análoga a la de otros países de la región, además de la masiva adquisición de tierras por extranjeros.

Desde el punto de vista de las relaciones con el Brasil, hay un consenso historiográfico señalando un cambio en la orientación de la política exterior paraguaya a partir del régimen instalado por Stroessner, que se acercaría progresivamente a los brasileños en detrimento de los argentinos (Moraes, 2007; Mello, 2002). Se indica una injerencia de Estados Unidos en el golpe operado en 1954, destinado a evitar una aproximación no deseada entre el presidente paraguayo Federico Chaves y su colega argentino Juan Domingo Perón. En los años siguientes, se observa una reorientación de la política externa paraguaya, que encontró eco en los intereses del Estado brasileño en ese momento. Esta aproximación se expresó en el establecimiento de una ruta comercial que conecta al Paraguay con el Atlántico a través del puerto de Paranaguá eliminando así la dependencia secular de Buenos Aires; en la construcción del Puente de la Amistad entre Foz de Iguazú y la nueva ciudad de Puerto Stroessner, actual Ciudad del Este, iniciada en 1956; y en el establecimiento de esta nueva ciudad como polo comercial de productos importados orientado principalmente al mercado brasileño.

Estos lazos se estrecharon con el golpe militar de 1964 en Brasil, cuando las preocupaciones geopolíticas y económicas se sumaron a proyectos de interés común, como la colonización de la región fronteriza (la "marcha hacia el oeste", en el caso brasileño y hacia el este,

en el caso paraguayo), la construcción de la Usina Hidroeléctrica de Itaipú y la complicidad en torno a la represión social, avalada por la Operación Cóndor (Albuquerque, 2005; Menezes, 1987; Laino, 1979).

En lo que respecta específicamente a la cuestión agraria, en 1963 la dictadura paraguaya creó el Instituto de Bienestar Rural (IBR) y promulgó un Estatuto Agrario mostrando la intención de expandir la frontera agrícola promoviendo la colonización de áreas, principalmente en el oriente del país, con el doble propósito de aliviar la presión social en la región central y prevenir el enraizamiento de grupos guerrilleros en zonas fronterizas. Diseñada como una estrategia de desarrollo mercantil de la agricultura paraguaya, la colonización promovida por el IBR se despojó de su propósito oficial de enraizar a los trabajadores en el campo, distribuyendo áreas a los favorecidos del régimen y practicando un próspero comercio de tierras originalmente destinadas a la reforma agraria.

A lo largo de la década de 1970, esta política de colonización del este paraguayo convergió con la expansión de la frontera agrícola brasileña, un movimiento intensificado en la región fronteriza en el contexto de la construcción de la represa hidroeléctrica de Itaipú. Motivado por el bajo precio relativo de las tierras paraguayas, por una presión fiscal inocua y por la permisividad del Estado en relación a temas legales, laborales y ambientales, se produjo un flujo significativo de brasileños a través de la frontera. Los inmigrantes encontraban condiciones favorables de crédito en el país, donde el Banco Nacional de Fomento facilitaba recursos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), prestándoles al 13% de interés con un plazo de reembolso de ocho años, concediendo tres años para comenzar a pagar —mientras en Brasil las tasas vigentes oscilaban entre 22% y 24%—, con un plazo de reembolso de cinco años y un período de gracia de apenas un año.

Andrew Nickson señala que estos préstamos beneficiaron principalmente a los brasileños que compraron tierras en efectivo, toda vez que la exigencia de titulación definitiva de la propiedad excluía

del acceso al crédito a la mayoría de los paraguayos, que parcelaban la adquisición de los lotes. Frente a estos hechos, el investigador inglés sintetizó a principios de la década de 1980 el resultado de la actuación del IBR:

> Concluyendo, existen muchas evidencias que sugieren que, desde su formación en 1963, el IBR funcionó de una manera que facilita la penetración de la agricultura capitalista en Paraguay bajo el control brasileño. Su política de no expropiar los latifundios existentes y su decisión de vender las tierras estatales vírgenes en la región contribuyeron a la transferencia posterior de la mayor parte de la región fronteriza oriental a manos brasileñas en poco más de una década (Nickson, 1981: 240).

Así, la migración de los propietarios y trabajadores rurales brasileños en un contexto de expansión de la frontera agrícola y de las remociones causadas por las obras de Itaipú, convergió con la política de colonización del oriente paraguayo impulsada por el régimen de Stroessner. Este movimiento socioeconómico respondía a los intereses geopolíticos de ambas dictaduras. Stroessner se alineó decididamente al Brasil, estableciendo la posición paraguaya como beneficiaria subalterna del crecimiento económico del país vecino, al mismo tiempo que comulgaba con las ideas de asentamiento y desarrollo territorial como una política antisubversiva en el marco de la Guerra Fría. La dictadura brasileña, a su vez, alentaba la ocupación de la región limítrofe referenciada en la noción de "frontera viva" manejada por el general Golbery do Couto e Silva, entendiendo que el área de influencia del Estado se extendía al territorio ocupado por sus ciudadanos (Couto e Silva, 1967). Al mismo tiempo, los acuerdos oficiales que involucran la hidroeléctrica de Itaipú o los acuerdos tácitos estimulando la colonización del oriente paraguayo, no solamente favorecían esta estrategia geopolítica sino también los intereses económicos representados por el Estado brasileño.

La penetración masiva de los agricultores rurales brasileños atraídos por las oportunidades que vislumbraron al otro lado de la frontera fue uno de los resultados de esta confluencia de intereses. Es este movimiento migratorio el que está en la raíz de lo que el geógrafo francés Sylvain Souchaud (2001) llamó "espacio brasiguayo" —un territorio caracterizado por el predominio de la lengua, de la cultura y del poder político y económico brasileño en territorio paraguayo—. Este es un fenómeno único en la medida en que los inmigrantes discriminan a los trabajadores nativos, haciendo eco de los estereotipos transmitidos por la propia clase dominante nacional: "La regla universal acostumbra ser que aquel que llega es discriminado y en algunos lugares esa discriminación alcanza límites increíbles. Pero en Paraguay sucede lo contrario: el que llega se apropia de lo que tenemos y nosotros somos discriminados por él. Eso es único" (Fogel, 2011).

Aunque la mayoría de los migrantes estuviese compuesta por trabajadores rurales y la actual masa brasiguaya comprenda todas las clases sociales, los conflictos que involucran a los terratenientes de origen brasileño popularizaron en los últimos años una sinécdoque en la cual el neologismo "brasiguayo" se volvió sinónimo de empresario de soja. Políticamente, la fuerza económica de los brasileños conforma una especie de poder paralelo al débil Estado paraguayo, que a su vez se muestra desinteresado o incapaz de integrar a estos inmigrantes a la sociedad nacional. El dominio brasiguayo es reforzado por la elección de concejales y alcaldes en municipios donde su presencia es dominante. En una situación en la que la mayoría de los trabajadores brasileños continúa indocumentada, habla portugués y ve la Red Globo, la impermeabilidad del poder brasiguayo a la institucionalidad local es, en la visión de algunos analistas, una realidad reconocida y respaldada por la diplomacia brasileña (Albuquerque, 2009; Fogel y Riquelme, 2005: 95).

Una dimensión central de la problemática brasiguaya es que la ocupación del suelo paraguayo protagonizada por brasileños en las últimas décadas se basó en prácticas irregulares de distribución de

tierras —que ocurren desde la dictadura y que son el origen de las llamadas tierras mal habidas—. El clientelismo y la corrupción en la gestión del patrimonio fundiario del país continuaron después de la caída de Stroessner en 1989, en el contexto de la singular apertura democrática paraguaya, conducida por el mismo partido que manejó la dictadura.

A lo largo de estas décadas, los brasileños se involucraron en estas prácticas irregulares de dos maneras principales: negociando las tierras apropiadas por los favorecidos de la dictadura y adquiriendo lotes distribuidos a los que serían los genuinos beneficiarios de la colonización. Estas tierras son denominadas derecheras, ya que consisten en la cesión del derecho de ocupación de una parte de tierra otorgada por el Estado y que, por lo tanto, no puede ser vendida. Como un agravante: los brasileños adquirieron tierras en la región fronteriza, situación que el gobierno intentó reglamentar por medio de una ley vigente desde 2005, que creó una zona de seguridad donde se prohíbe la propiedad extranjera en una franja de 50 kilómetros de la frontera internacional. Finalmente, frente a la precariedad de la situación catastral en una realidad en que el Estado no dispone de registros confiables sobre la titulación y el tamaño de las propiedades, existen las llamadas tierras excedentes, donde la extensión de las áreas efectivamente apropiadas es mayor que la registrada en los títulos, cuya legitimidad original es muchas veces cuestionable por sí misma.

La soja y los brasiguayos

Aunque la presencia masiva de brasileños en el territorio paraguayo no es un fenómeno reciente, los conflictos que involucran a los brasiguayos se han multiplicado con la expansión del cultivo de soja en el siglo XXI. Se estima que en 1973 la semilla oleaginosa ocupaba cuarenta mil hectáreas en el país. En 1996 el área plantada se acercó a un millón de hectáreas. Con la introducción de semillas transgénicas a fines de siglo, la frontera de la soja avanzó en promedio 125 mil hectáreas por año en las posteriores cosechas alcanzando 2,8 millones

de hectáreas en el ciclo agrícola 2010-2011 (Palau, 2012: 33, 347). En este período, el país mantuvo altas tasas de crecimiento, rompiendo con el letargo prevaleciente desde la construcción de Itaipú, en 2010, por ejemplo, el ritmo de expansión de la economía paraguaya solo fue inferior al de Qatar. El Paraguay se volvió el cuarto mayor exportador mundial de soja y octavo de carne vacuna.

La expansión de la soja, que se convirtió en la principal exportación del país, implica la adopción de un modelo de negocio asociado a un paquete tecnológico promovido por las empresas transnacionales, que determina cómo se produce el *commodity*. Al igual que en Brasil, el mercado está dominado por la semilla transgénica resistente al herbicida Roundup (glifosato) —siendo que tanto la semilla como el herbicida están patentados por Monsanto—. Este paquete tecnológico está vinculado a la técnica de la siembra directa, en el que los procesos de arar y limpiar el suelo son reemplazados por la aplicación de productos químicos cuya eficacia está vinculada al uso creciente de este tipo de sustancia. El plantío directo permite reducir la mano de obra, calculada en dos personas por cada mil hectáreas por año, en un modelo productivo viable solo para el cultivo a gran escala. Esta intensificación de la agricultura es comparada por algunos autores con "una agricultura extractivista, una minería en el suelo agrícola", en una realidad en la cual "el paquete de soja implica la "descampesinización" absoluta, tratándose de una agricultura sin agricultores" (Rulli, 2007: 18-20). En el otro extremo del proceso, las transnacionales como Cargill, Archer Daniels Midland (ADM) y Bunge acaparan y exportan la soja producida, lo que llevó a un autor a concluir que "en la práctica, los productores son apenas un engranaje entre el proceso de abastecimiento y almacenamiento de la producción" (Rojas, 2009: 73).

Los impactos socioambientales de la expansión de la soja en Paraguay son documentados y denunciados regularmente por organizaciones vinculadas a los campesinos y pueblos indígenas. Las consecuencias incluyen la expropiación de pequeños productores por medio de múltiples mecanismos; graves daños a la salud y el medioambiente

debido a las fumigaciones de agrotóxicos; aumento del desempleo, del éxodo rural y de la emigración; mayor concentración de la tierra; amenaza a la soberanía alimentaria; avance directo e indirecto sobre áreas vírgenes como consecuencia del desplazamiento de la frontera agrícola; potencial desertificación del suelo en función de la siembra directa y contaminación del Acuífero Guaraní. En este contexto, la expansión de la soja enfrenta la resistencia de los actores sociales identificados con la democratización de las relaciones de producción en el campo y la preservación del medioambiente (Palau *et al.*, 2007; Fogel, 2008; ONG Repórter Brasil y Base Investigaciones Sociales, 2010 Benitez, Macchi y Acosta, 2011).

El protagonismo de los empresarios rurales brasileños en la expansión del agronegocio en Paraguay es notorio. Aunque no existen estadísticas precisas, Marcos Glauser cruzó datos oficiales del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), para estimar la cantidad y el tamaño de las propiedades extranjeras en el país. Su trabajo revela que cerca de la quinta parte de las tierras nacionales están en manos extranjeras, de las cuales aproximadamente dos tercios pertenecen a los brasileños, lo que equivale a 4.792.528 hectáreas (Glauser, 2009). Dado que el área cultivable del país está calculada en 24 millones de hectáreas, se estima que los brasileños poseen alrededor de una quinta parte de las mejores tierras, dentro las cuales se incluye alrededor del 40% del área dedicada a la soja. La apropiación de tierras a gran escala por parte de extranjeros también fue denunciada recientemente en Argentina y en Bolivia, para citar otros ejemplos en la región (Klipphan y Enz, 2006; Urioste, 2011), pero el papel singular que tuvo la reivindicación de los derrotados en la Guerra de la Triple Alianza para la afirmación del nacionalismo paraguayo hace de la preponderancia brasiguaya un tema particularmente sensible.

Según los analistas paraguayos, la especificidad de la situación del país se basa en la ínfima integración del agronegocio a las demás cadenas productivas nacionales, fenómeno acentuado por las características de la inserción brasiguaya. En general, la baja presión fiscal sobre el

agronegocio, que todavía se beneficia de un subsidio al combustible utilizado en la agricultura, minimiza las posibilidades de intervención estatal en un sentido redistributivo (Fogel y Riquelme, 2005: 69). La exportación de un alto porcentaje de soja en grano, incluso al Brasil, reduce el potencial dinamismo económico derivado del procesamiento de la *commodity* en el país[1]. Como factor agravante, se admite que la producción de soja liderada por brasiguayos involucra operaciones de contrabando a gran escala, principalmente a través de la frontera seca —donde su presencia es dominante—, impactando negativamente en la recaudación de impuestos y en la balanza comercial del país.

> En esta dinámica que podría calificarse como clandestina, los empresarios del Brasil vienen con sus propias máquinas, sus propios tractores que después, eventualmente, regresan al Brasil, de modo que técnicamente no hay inversión. Los impuestos irrisorios a las exportaciones también son evadidos en parte por los soyeros, siendo que algunas fuentes estiman que un millón de toneladas de soja habían salido por la vía del contrabando en la última cosecha (Fogel y Riquelme, 2005: 68).

Los vínculos que unen el espacio económico brasileño con la dinámica del agronegocio en Brasil son evidenciados por la investigación titulada "Los actores del agronegocio en Paraguay", en la que Luis Rojas analizó una muestra de las empresas líderes en el sector. Enfatizando que "la columna vertebral del agronegocio en el país está compuesta por las corporaciones transnacionales [...] que finalmente determinan qué y cómo será producido", Rojas describió el desempeño de nueve compañías extranjeras, incluidas tres compañías brasileñas —además de analizar otras 28 empresas consideradas nacionales—, sobre las cuales concluye: "De las 28 empresas nombradas, al menos 14 pertenecen

1 Paraguay es uno de los raros países que reconoce a Taiwán, lo que impide que exporte directamente a China. Esta situación intensifica el flujo de soja paraguaya por el Brasil.

total o parcialmente a brasileños (o brasiguayos), lo que representa el 50% de la muestra de empresas locales" (Rojas, 2009: 52-53).

Considerando la naturaleza de los nexos establecidos entre los grandes propietarios brasiguayos con el espacio económico paraguayo, los analistas evalúan que la producción de soja constituye una modalidad de economía de enclave (Fogel y Riquelme, 2005). En este sentido, Fogel indicó que "se debe enfatizar en el análisis de la expansión de los sojeros brasileños la dinámica del espacio fronterizo centrada en lo brasiguayo, que responde más a las relaciones y agendas del Brasil, del cual depende de relaciones internas con nuestro Estado-nación [Paraguay]" (Fogel y Riquelme, 2005: 97).

En esta perspectiva, la evolución del agronegocio brasiguayo está relacionada a la dinámica de los gobiernos brasileños correspondientes. En el caso de las gestiones petistas, hubo un notorio empeño en apoyar y defender sus negocios, no solamente en Paraguay, sino también en otros países de la región. De hecho, la expansión de la soja protagonizada por brasileños en Paraguay es parte del movimiento de expansión de la oleaginosa en una vasta región transnacional, que incluye los territorios de Paraguay, Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay. Esta región fue descrita por un anuncio publicitario de la transnacional Syngenta como una "República Unida de la Soja". El anuncio nos recuerda que, si los brasiguayos son un enclave económico en Paraguay, el negocio global todavía está dirigido por empresas transnacionales.

Así como ocurrió con la construcción civil, la soja fue impulsada por la política de crédito del BNDES y defendida por la diplomacia corporativa de Itamaraty[2]. Esta actuación es constatada en los dos polos de la cuestión: los empresarios del agronegocio y los que luchan por

2 Según el informe sobre Los *impactos socioambientales* de la soja en Paraguay, "en mayo de 2007, la visita del presidente Lula en el contexto del Seminario de Agrocombustibles Brasil-Paraguay concluyó con la firma del memorando de entendimiento. El presidente brasileño estuvo acompañado por treinta empresarios y los alentó a invertir en Paraguay. El BNDES de Brasil anunció en el seminario que habilitaría una línea de crédito específica para financiar a los empresarios brasileños que decidiesen invertir en agronegocios en Paraguay" (ONG Repórter Brasil y Base Investigaciones Sociales, 2010: 10).

la reforma agraria. Nilson Medina, considerado el mayor empresario rural brasileño en Bolivia, habló sobre este apoyo en una entrevista:

> Ahora nosotros […] tenemos la garantía del gobierno brasileño, sabe, yo creo que, así como los "brasiguayos" tienen la garantía del gobierno brasileño, cuando algo ocurre allá hay una intervención, yo creo que nosotros vamos a tener la misma atención. El gobierno de Celso Amorim, vino exclusivamente para hablar con nosotros; Celso Amorim, creo que es un espectáculo, Celso Amorim entonces creo que si sucede alguna cosa aquí en Bolivia, el gobierno intervendrá de inmediato y ahí Lula llama a Evo y le dice: "Mira, la propiedad de Nilson Medina fue invadida, tiene todo bien, cumple la función social y todo" (Gimenez, 2010: 166).

Una vez que el productor de soja brasileño más importante de Bolivia evoca el ejemplo de los brasiguayos como un precedente que afianza su situación bajo el gobierno de Evo Morales —una coyuntura ciertamente más conflictiva que el gobierno de Lugo en aquel momento—, se infiere que la actuación de la diplomacia brasileña en defensa de los intereses del empresariado es vista como un hecho concreto por los empresarios del sector[3]. El mismo Medina relata un episodio en el que, durante la campaña presidencial de Morales, expresó su preocupación sobre la posibilidad de expropiación de brasileños al entonces ministro de Agricultura del gobierno de Lula, Roberto Rodrigues. Pocos días después, el embajador brasileño en el país habría llamado para tranquilizar a Medina, que más tarde recibiría garantías personales del propio Morales (Giménez, 2010: 165-166).

3 En esta misma entrevista, "en el gobierno Fernando Henrique, nosotros fuimos un poco olvidados en Bolivia; en el gobierno Lula, el Lula nos dio una asistencia espectacular, ¿verdad? Yo, sinceramente soy un fanático del gobierno de Lula, porque fue un gobierno que siempre nos auxilió. Fue en el gobierno Lula que tuvimos la preocupación de la embajada brasileña con los productores brasileños en Bolivia" (Gimenez, 2010, anexo).

Del otro lado del espectro político, los exdirectores de los organismos encargados de proceder a la reforma agraria en Bolivia y en Paraguay informan de las presiones ejercidas por la diplomacia brasileña en defensa del empresariado rural brasileño[4]. Los observadores de la cuestión agraria en Paraguay también registraron la intercesión brasileña en el conflicto por tierras en Ñacunday, episodio que explicitó los impases enfrentados por el gobierno de Lugo en su último año, y que ahora será analizado.

La presidencia de Lugo (2008-2012)

La elección de Fernando Lugo como presidente paraguayo en 2008 representó la primera alternancia a la dominación colorada en la política paraguaya desde el ascenso de Alfredo Stroessner en 1954. La dictadura dirigida por el general llegó a su fin en 1989 a través de un golpe militar liderado por un subordinado suyo, el general Andrés Rodríguez. Eventos dramáticos que animaron la política nacional en años posteriores, como el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña en 1999 y la posterior renuncia de Raúl Cubas Grau ante la presión popular (el llamado *marzo paraguayo*), las desventuras que llevaron al general Lino Oviedo al exilio y prisión (y la disidencia intracolorada liderada por él), entre otros, no traspasaron los marcos de la dominación colorada. Aunque la gestión del Estado después de la dictadura involucrara, en alguna medida, compartir el aparato estatal con la oposición conservadora, la transición paraguaya fue operada por el mismo partido que sostuvo la dictadura —caso único en el continente—. En este contexto, los liberales, rivales de los colorados en la política conservadora desde finales del siglo XIX, vieron en la adhesión a la candidatura de Lugo nada más que un camino para reaproximarse al Ejecutivo.

4 Para el relato de Alcides Vadillo, exdirector del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), consultar el anexo de la tesis de Heloisa Gimenez (2010). Alberto Alderete, exdirector del INDERT en Paraguay, afirmó que sufrió presiones del gobierno brasileño durante su gestión en entrevista al autor en agosto de 2012.

Por otro lado, el campo popular identificó en esta novedad política una oportunidad para plantear demandas hace mucho tiempo reprimidas. País poco industrializado, con el IDH más bajo de América del Sur, aliado a una de las más grandes concentraciones de riqueza del continente, Paraguay tiene en la cuestión agraria el foco principal de sus tensiones sociales desde el final de la dictadura. Se relata, por ejemplo, que al día siguiente de la destitución de Stroessner hubo tres ocupaciones de tierras (Riquelme, 2003).

Las tensiones en el campo paraguayo se acentuaron a partir de 1990. La expansión de la soja y de la ganadería, en un contexto en que se agotaba la disponibilidad de tierras del Estado (las llamadas *tierras fiscales*), agudizó las contradicciones entre el agronegocio y los modos de orientación campesina, además de causar devastación ambiental en el oriente del país y en el Chaco, donde, por ejemplo, se encuentra amenazado uno de los últimos grupos indígenas que viven en aislamiento voluntario en el continente, los ayoreos. Como respuesta a este movimiento, recrudeció la resistencia de campesinos e indígenas en el único país oficialmente bilingüe del Cono Sur, que se expresó en una dinámica de lucha por la tierra y de represión estatal familiar en los países latinoamericanos.

Aunque no tuviese una militancia reconocida en el campo de la izquierda, Fernando Lugo se proyectó como una figura política por medio de una acción episcopal sintonizada con la sensibilidad social característica de la Teología de la Liberación, ejercida en el interior del país en el contexto de agudización de las tensiones en el campo. Como candidato, hizo de la reforma agraria su principal promesa de campaña, obteniendo el apoyo de aquellos inclinados al cambio social.

Apoyada por los sectores populares, pero respaldada por la estructura del partido liberal, la candidatura de Lugo consumó un matrimonio de conveniencia en el que intereses dispares convergieron bajo el designio común de derrotar a los colorados. Como resultado, su triunfo electoral puede interpretarse más bien como un rechazo a la situación imperante que como un triunfo de la izquierda, en un

país donde las fuerzas populares se asfixiaron bajo el dominio colorado —principalmente bajo la dictadura— y, por lo tanto, encontraron dificultades para fortalecer instrumentos de política autónoma. En este sentido, la elección de Lugo es paralela a otros casos en el continente, en los cuales figuras desconocidas fueron llevadas a la presidencia a través de acuerdos políticos *ad hoc*, en una coyuntura de desprestigio de los partidos y de los políticos convencionales, desgastados frente a la impopularidad del recetario neoliberal. Cuestionado sobre las convicciones políticas del nuevo presidente, un futuro integrante del gobierno resumió el espíritu prevaleciente: "no me pregunten sobre quién entra, sino sobre quién sale".

Entre los que simpatizaron con la victoria de Lugo, hay dudas sobre la voluntad política que el gobierno demostró para transformar la realidad, pero hay consenso sobre los obstáculos que enfrentó. Elegido con el 40,9% de los votos en una alianza con los liberales, que nominaron al vicepresidente, las agremiaciones de la izquierda que integraron la coalición eligieron a tres de ochenta diputados y un número igual de senadores de un total de 45. Para constituir mayoría en las cámaras, el Ejecutivo tuvo que concertar no solo con los liberales, que eligieron a 29 diputados y 14 senadores, sino también con la disidencia colorada dirigida por Lino Oviedo bajo la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE). La frágil autonomía del presidente fue realzada por la Constitución vigente, originada en la transición y que acentuaba la dependencia del gobierno en relación al parlamento. En esta circunstancia, son evidentes las limitaciones para proponer cambios a través de los canales legales vigentes, dominados por parlamentarios cuyo perfil fue descrito en estas palabras por un erudito anglosajón:

> La cosa más obvia a ser percibida es que casi todos son latifundistas, que tienen títulos de propiedad directamente a su nombre o a nombre de amigos y familiares. En 2008, un antiguo director del Banco Mundial en Paraguay se sorprendió al descubrir que todos

> los miembros del Congreso que él conoció se encuadraban en esa descripción. Muchos eran beneficiarios de transferencias ilegales de grandes extensiones de tierras estatales (generalmente, dos mil hectáreas para arriba), que fueron transferidas por partidarios civiles y militares de la dictadura de Alfredo Stroessner y ese proceso continuó a lo largo de las dos décadas siguientes de los gobiernos colorados (Nickson, 2012).

A diferencia de otros casos en el subcontinente, Lugo no consideró convocar una Asamblea Constituyente —lo que exigiría una fuerza política que no tenía para dirigir el proceso—. En todo caso, esta no era su propuesta y los analistas paraguayos consideran equivocada esta analogía a la luz de lo que el gobierno efectivamente se propuso hacer.

En un arreglo que recuerda al primer gobierno de Lula, los ministerios más importantes —Hacienda, Obras Públicas y Agricultura y Ganadería— fueron asignados a personas de confianza del capital, mientras que los sectores populares se quedaron con Salud y organismos más pequeños —como el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Asuntos Indígenas, la Secretaría Medio Ambiental y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)—. Fueron implementados programas sociales de carácter asistencial y se abrieron múltiples espacios de participación ciudadana que, sin embargo, no significaron algún cambio estructural.

Pese a la inocuidad de las políticas sociales avanzadas, los principales movimientos del campo adoptaron una especie de "tregua" con respecto al gobierno —lo que significó una moderación, pero no el fin, de las ocupaciones y de las marchas—. Se entendía que la presión social podría desestabilizar un mandato que, a pesar de sus debilidades, abría por primera vez las puertas de la presidencia a estos grupos. En cierta medida no era una lectura equivocada, considerando los eventos posteriores.

La buena voluntad expresada por los movimientos populares hacia el gobierno no fue recíproca. Por el contrario, hubo un acercamiento

con Colombia en asuntos relacionados a la seguridad nacional, liderado por el Ministerio del Interior, que resultó en entrenamientos y asesorías asociados con el afamado Plan Colombia. Lugo también aprobó una ley antiterrorista en la línea difundida por los Estados Unidos, además de permitir el establecimiento de la Iniciativa de la Zona Norte, que prevé el despliegue y el ejercicio de tropas estadounidenses en la región oriental del país (Méndez, 2012).

En este escenario, la represión de los movimientos sociales en el campo no disminuyó, registrándose decenas de casos de violencia, incluyendo el asesinato de militantes, en consonancia con el patrón prevaleciente en los gobiernos anteriores. Según observadores de los derechos humanos, el momento culminante de esta política de seguridad se produjo a mediados de 2010, cuando el gobierno declaró el estado de sitio en cinco departamentos del país. Bajo el pretexto de erradicar un supuesto movimiento guerrillero llamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), se cometieron innumerables violaciones a los derechos civiles de los militantes campesinos. Muchos hacen la lectura de que el EPP, una oscura organización compuesta por pocos miembros que realizaban actos esporádicos de vandalismo social, cumple un papel funcional a un discurso que, modulado en la ideología del combate al terrorismo, valida políticas de control como en Colombia (Palau, 2009). De todos modos, la oposición a Lugo buscó sistemáticamente vincular al presidente con el EPP, lo que levanta sospechas de vínculos entre esta organización y la dimensión mafiosa de la política nacional.

La cuestión agraria en el gobierno de Lugo

Es en este contexto que se inscribió la política agraria del gobierno de Lugo. De modo general, los militantes de la reforma agraria diagnosticaron temprano las ambivalencias del gobierno, criticando la dispersión de esfuerzos interpretada como falta de voluntad política para trascender la retórica:

> Se puede apreciar fácilmente que esta gran cantidad de planes, programas, proyectos e iniciativas de diferentes reparticiones gubernamentales, muchos de los cuales fueron elaborados en paralelo (en el mejor de los casos) o de manera antagónica, cuando los intereses en disputa eran o son políticamente distintos, no puede dejar de ofrecer un panorama desolador: es la expresión más clara de que no se hará nada (Riquelme, Rojas y Palau, 2010: 31).

De acuerdo a los especialistas de la cuestión agraria, hay tres formas legales para distribuir propiedad rural en Paraguay: mediante la compra, la expropiación o la recuperación de tierras. Aparentemente menos conflictiva, la compra de tierras se vuelve impracticable en la medida que la legislación la enmarca como la adquisición de cualquier propiedad, que debe ser sometida a licitación pública. Apenas las tierras no aptas al cultivo o de acceso remoto son ofrecidas. En la práctica, la acción del Estado se reduce a comprar tierras ya ocupadas, donde no hay perspectiva de recuperar la posesión.

La expropiación también es descartada en función de los bajísimos niveles de productividad requeridos por el Estatuto Agrario, además de la falta de recursos propios que permitirían al INDERT comprar tierras a precio de mercado. Finalmente, existe la posibilidad de recuperar lotes adquiridos de forma irregular: —las llamadas *tierras mal habidas*—, cuyo origen, como se vio, está estrechamente vinculado a la dictadura de Stroessner y a la problemática brasiguaya.

El primer director de INDERT en el gobierno de Lugo, Alberto Alderete, había trabajado en una extensa investigación destinada a mapear las tierras mal habidas, impulsado por la Comisión de Verdad y Justicia, cuyo intento fue determinar el legado de la dictadura en diferentes esferas. El resultado mostró que, de un total de 12.229.594 hectáreas distribuidas a lo largo de la dictadura, el 64,1% fueron apropiadas ilegalmente, lo que constituye cerca de una quinta parte del área del país. En otras palabras, habría 7,8 millones de hectáreas apropiadas ilegalmente y, por lo tanto, sujetas a la expropiación del

gobierno. Se divulgó una lista de 3.336 nombres asociados a 4.232 propiedades, encabezada por el propio Stroessner y Andrés Rodríguez, el militar que lo derrocó. Según el sociólogo Ramón Fogel, otro de los responsables de la investigación, el 90% de las tierras malhabidas estarían en posesión de brasiguayos en la actualidad (Programa Democratización y Construcción de la Paz, 2012: 24).

A pesar de la divulgación pública del informe y del conocimiento de causa de Alderete, su breve gestión frente al pequeño y corrupto INDERT —entre agosto de 2008 y marzo de 2010— fue incapaz de producir cualquier resultado significativo, toda vez que chocó con el bloqueo jurídico a la recuperación de tierras, el sabotaje presupuestario al INDERT y la defenestración política conducida por la prensa.

De hecho, la crisis que provocó su caída fue desencadenada por un episodio incomparablemente menor que la expropiación de una quinta parte del territorio nacional. En un intento por promover la distribución de tierras, el INDERT negoció la compra de 22 mil hectáreas del brasileño Ulisses Rodrigues Teixeira por cerca de 30 millones de dólares, con la intención de establecer dos mil familias en el área. Sin embargo, el Congreso vetó la operación, que se convirtió en una campaña dirigida por el principal periódico del país, el *ABC Color*, contra el titular del INDERT y el propio Presidente, acusados de sobrevalorar la tierra con fines oscuros. Todo indica que se pretendía evitar un precedente de distribución de tierras que interesaban a los empresarios de la soja. Fue en esta coyuntura que se produjo la primera amenaza seria de juicio político contra Lugo. Alderete renunció poco después, cuando el bloqueo a la compra culminó en un recorte significativo de los fondos al INDERT al mando del Congreso. Fue también en esta circunstancia que se creó la Liga Nacional de Carperos, aludiendo a las carpas utilizadas por los campistas que presionan por la reforma agraria.

En abril de 2011, unas quinientas personas sin tierra ocuparon un área en Ñacunday, en la frontera con Brasil, desencadenando un conflicto que se extendió durante el año siguiente y repercutió en el

país vecino, toda vez que el área en cuestión había sido apropiada por el ícono del poder brasiguayo en el país, Tranquilo Favero. Favero, el principal productor de soja de Paraguay, también es conocido por su desprecio racista en relación a los trabajadores paraguayos, que contrasta con una admiración no encubierta por Stroessner (Capriglione, 2012). De hecho, esas dos características son comunes a muchos propietarios brasileños en el país, que en su mayoría se identifican políticamente con los colorados.

La ocupación fue protagonizada justamente por el segmento de trabajadores rurales sin tierra que radicalizó sus métodos de lucha con el fracaso de la adquisición del área de Rodrigues Teixeira. Hay indicios de que el propio gobierno favoreció esta acción, con la intención de realizar una expropiación cargada de valor simbólico y que lo fortaleciese políticamente, con vistas a futuras elecciones, fomentando la percepción de que la reforma agraria avanzaba. En estas circunstancias, el recién constituido movimiento de los carperos fue calificado como oportunista por las organizaciones consideradas "históricas" del movimiento campesino en el país, que se opusieron a sus métodos.

Las tierras en cuestión tienen documentación frágil y de procedencia dudosa. Sin embargo, el argumento central de los trabajadores rurales es que se trata de tierras excedentes, o sea, la superficie cubierta por la propiedad sería mayor a la que registra la documentación en por lo menos doce mil hectáreas. Ante esta sospecha, el INDERT decidió medir el terreno, pero hubo resistencia de los brasiguayos. Con el respaldo de una autorización judicial y de tropas militares, ese trabajo comenzó, pero poco después, un segundo magistrado revocó el mandato original y el juez que inicialmente emitió la autorización fue castigado.

Frente a la intransigencia, Lugo retrocedió. No fue la primera ni la última vez que reaccionó así, lo que llevó a un analista a describir su política social como "un paso al frente y dos atrás". El caso Ñacunday provocó no solamente la reacción unificada del empresariado ligado a la soja, sino también del gobierno brasileño, que intervino:

> El gobierno brasileño se interesó por el caso de Ñacunday dada la inseguridad en que las familias de los brasiguayos podrían encontrarse. El interés del gobierno se expresó en diversas acciones: el cónsul adjunto de Brasil en Ciudad del Este, junto a abogados de los productores y un asesor jurídico del consulado brasileño, acudieron a la zona de Ñacunday para informarse sobre la situación y el propio embajador de Brasil realizó una visita de "cortesía" al presidente del INDERT (Programa Democratización y Construcción de la Paz, 2012: 5).

Al final, las tierras no fueron recuperadas, el INDERT sufrió la intervención del gobierno en medio de acusaciones de corrupción por parte de su tercer director —cercano a los liberales— y los campesinos se retiraron. Parte de ellos fueron a Curuguaty, escenario de los trágicos eventos que sirvieron de pretexto para desencadenar el juicio de Lugo.

El juicio político

En el campo popular hay una percepción consensual de que los eventos que resultaron en la muerte de seis policías y once campesinos el 15 de junio de 2012, en Curuguaty, fueron desencadenados por francotiradores. Después de que los policías fueron alcanzados por los disparos, once campesinos, entre los más de cincuenta presentes en la escena, fueron ejecutados. La tierra en cuestión, apropiada por un conocido empresario y exsenador colorado, Blas Riquelme, era un antiguo reclamo del movimiento campesino que ya la ocupó y desocupó varias veces. El consenso en relación a la ilegalidad de la propiedad era tal que Frederico Franco, el presidente golpista, emprendió posteriormente su recuperación en un intento de producir un hecho político popular —lo que, dígase de paso, ratifica la irregularidad del desplazamiento que resultó en tragedia.

Aunque la destitución de Lugo fue viabilizada por una convergencia de intereses variados, la articulación inmediata del golpe se

atribuye a dos personajes: Aldo Zucolillo y Horacio Cartes. El primero es un empresario influyente que tiene, entre otros negocios, sociedad con Cargill en el país y es dueño de *ABC Color*. Además, Zucolillo era considerado un lobista de alto nivel de las multinacionales que actúan en Paraguay y del gobierno de los Estados Unidos. A su vez, Horacio Cartes es considerado por sus pares como uno de los empresarios más exitosos del país, mientras sus opositores lo describen como uno de los mafiosos más poderosos del Cono Sur. Sus negocios involucran al sector financiero, bebidas, tabaco, haciendas y hasta un equipo de fútbol. Cartes pretendía convertirse en el próximo presidente de Paraguay por la Asociación Nacional Republicana, denominación oficial del Partido Colorado[5].

Sin embargo, los analistas indican que en ese momento la candidatura de Cartes encontró dificultades para trascender el ámbito del coloradismo que, a su vez, está sujeto a permanentes disputas internas. La popularidad de Lugo, que se estimaba encima del 40% a pesar de las limitaciones de su gobierno, no era un obstáculo menor. En estas circunstancias, se especula que Zucolillo, políticamente cercano a los colorados, sensibilizó a Cartes sobre la urgencia de una actitud drástica para salvar su proyecto presidencial. La publicación de un artículo en *ABC Color* a principios del 2011 insinuando la conexión de Cartes con diversos negocios ilegales, entre los cuales se incluyen el contrabando de cigarrillos a Brasil y el narcotráfico, puede haber contribuido a persuadirlo[6].

Consumada la masacre en Curuguaty, la oposición subió el tono de las críticas al presidente, acusado de ser el responsable de los eventos por su presunta incapacidad para lidiar con los problemas del país. La reacción de Lugo, a su vez, fue defensiva. Se solidarizó

5 Cartes fue elegido presidente de Paraguay en 2013, sucediendo al vicepresidente de Lugo, Federico Franco.

6 "El lado oscuro de Horacio Cartes", en *ABC Color*, 14 de enero de 2011. Disponible en: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/el-lado-oscuro-de-horacio-cartes-207834.html.

con los policías muertos, pero no con los campesinos. Y sustituyó al ministro del Interior, Carlos Filizzola, con Rubén Candia Amarilla, un colorado de notorios lazos con grupos anticomunistas del stronismo y detestado por los movimientos sociales por su actuación como fiscal general del Estado. De hecho, una vez jurado, el primer anuncio del nuevo ministro fue decretar el fin del "protocolo" establecido para hacer frente a las ocupaciones de tierra, que preveía el diálogo inicial con los manifestantes.

Al nombrar a un colorado como ministro, Lugo incurrió en el desprecio de la izquierda, mientras profundizaba la brecha que lo separaba de los liberales, su base de sustento en el Congreso. La racionalidad probable detrás de este nombramiento es política: Candia Amarilla sería un colorado cercano a la presidenta del partido, Lilian Samaniego, quien se oponía internamente a la candidatura de Cartes. Al ver degastada su relación con los liberales después de casi cuatro años de convivencia espuria, Lugo visualizaba su futuro político en un acercamiento con sectores de este partido.

Sin embargo, el juego cambió cuando los liberales, que no necesitaban muchas razones para hacerse cargo de la maquinaria estatal a pocos meses de la elección, hicieron un acuerdo con los colorados, que se oponían a Lugo desde el inicio. El proceso de *impeachment* se concretó en la 24ª ocasión en que hubo amenaza de desencadenarlo, a lo largo del mandato. Fue la octava vez que un presidente paraguayo cayó al final de su gobierno.

Reflexiones finales

Los primeros actos de Frederico Franco en el poder revelaron que otros intereses ansiaban un cambio de gobierno. La semana siguiente al golpe fue liberada una variedad de semillas transgénicas de algodón producida por Monsanto y, poco después, cuatro variedades más de semilla de maíz. También se aceleraron las negociaciones con la multinacional Rio Tinto Alcán, que pretendía construir una gigantesca planta

de aluminio a orillas del río Paraná. Aunque el Paraguay no produzca bauxita, se trata de un proceso de intenso consumo de energía, que allí se beneficiaría de la proximidad con la usina de Itaipú. Según el especialista Ricardo Canese, quien asesoró al gobierno de Lugo en las negociaciones con Brasil sobre Itaipú, las condiciones establecidas por la multinacional canadiense —segundo país en reconocer a Franco después del Vaticano— implicarían un subsidio de 14 mil millones de dólares a lo largo de los próximos veinte años, lo que equivalía a siete veces el monto de la deuda externa paraguaya (Canese, 2012). Finalmente, existía todavía la expectativa de que el Paraguay recibiría industrias provenientes de países vecinos, especialmente de Brasil, replicando las maquiladoras mexicanas en el Cono Sur.

En el ámbito de las relaciones internacionales, se extendió la idea de que Estados Unidos apoyaba el golpe, lo cual es coherente con el papel atribuido a Zucolillo en los acontecimientos. Para la diplomacia brasileña, la destitución de Lugo fue un revés y el gobierno se movió intensamente para evitarlo. El poder brasiguayo, a su vez, se alineó inmediatamente con Franco[7].

Sin embargo, el móvil fundamental de la maniobra fue interno y pone en evidencia los límites para el cambio en el país. Aunque las circunstancias políticas iluminen el modo como Lugo fue destituido, las causas de la oposición intransigente que enfrentó son estructurales. Los episodios que involucran la compra de tierras de Rodrigues Teixeira, Ñacunday y Curuguaty ilustran, por un lado, la tenaz resistencia de las clases dominantes paraguayas a cualquier cambio en el campo, donde el agronegocio expulsa a la población campesina causando la emigración, además de agredir a aquellos que permanecen en la tierra y agravar la devastación ambiental. Por otro lado, revelan la fuerza del legado de la dictadura en el aparato del Estado, así como su contrario: la impotencia de un gobierno ambiguo para avanzar

7 "'Brasiguayos' pedirán a Itamaraty que respalde a Franco", en *ABC Color*, 23 de junio de 2012. Disponible en: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/brasiguayos-pediran-que-itamaraty--respalde-a-franco-418087.html.

en cambios, incluso mínimos, a pesar del compromiso individual de muchos militantes.

Pilar del agronegocio en el país, el poder brasiguayo encarna la resistencia a cualquier disciplinamiento de la cuestión de la tierra, sin mencionar a la reforma agraria como un instrumento de democratización de la sociedad paraguaya. Así, el poder brasiguayo es parte de los actores que confluyeron con el interés de las multinacionales del agronegocio, de la Rio Tinto Alcán, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de las maquiladoras, de ganaderos y de traficantes diversos, para favorecer la alianza táctica entre liberales y colorados que llevó al golpe. En esta perspectiva, el dilema paraguayo expresó una paradoja de la influencia brasileña en la región, en la medida en que el apoyo a los empresarios rurales brasiguayos endureció los obstáculos enfrentados por el gobierno de Lugo para avanzar en acciones mínimas de democratización del acceso a la tierra, debilitando su posición frente a los intereses que desencadenaron un proceso de *impeachment* que, al final, la diplomacia brasileña no pudo frenar.

Asociada a la dictadura de Stroessner, a las múltiples ilegalidades que marcan la cuestión agraria en el país, a los conflictos derivados de la expansión del agronegocio y la intermitente amenaza brasileña a la autonomía paraguaya, la cuestión de los brasiguayos problematiza la articulación entre las dimensiones económica y política de la proyección regional brasileña: el agronegocio se revela como una modalidad de expansión capitalista que combina la violencia socioambiental y la dependencia respaldada por la diplomacia brasileña, lo que indica que la soberanía paraguaya está subordinada a una razón de Estado solidaria con los intereses de la bancada parlamentaria rural en ambos países. Como resultado, se fomenta el crecimiento económico regional en el marco de una inserción internacional basada en las exportaciones de las *commodities*, perpetuando las determinaciones fundamentales que impiden una integración democrática y soberana.

Bibliografía

ALBUQUERQUE, JOSÉ LINDOMAR C.

2009 "A dinâmica das fronteiras: deslocamento e circulação dos 'brasiguaios' entre os limites nacionais", en *Horizontes Antropológicos*, vol. 15, núm. 31, pp. 137-166.

2005 *Fronteiras em movimento e identidades nacionais: a imigração brasileira no Paraguai* (Tesis de doctorado). Universidade Federal do Ceará, Fortaleza.

BASE INVESTIGACIONES SOCIALES

1995 *Brasiguayos, Itaipu y Mercosur. Memorias del IV Seminario binacional sobre brasiguayos*. Documento de Trabajo 68. Disponible en: http://www.portalguarani.com/detalles_museos_otras_obras.php?id=87&id_obras=1981&id_otras=295.

BENÍTEZ LEITE, STELA; MARÍA LUISA MACCHI Y MARTA ACOSTA

2011 *Malformaciones congénitas asociadas a agrotóxicos*. Asunción: Base IS.

CANESE, RICARDO

2012 "Não foi nem 'juízo', nem 'político'; o processo de destituição de Lugo é de nulidade insanável", en *Correio da Cidadania*, 18 de julio de 2012. Disponible en: http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7382:manchete180712&catid=72:ima- gens-rolantes.

CAPRIGLIONE, LAURA

2012 "Conflito com brasiguaio não é diplomático, e sim, agrário", en *Folha de S. Paulo*, 20 de diciembre de 2012.

CECEÑA, ANA ESTHER; PAULA AGUILAR Y CARLOS MOTTO
2007 *Territorialidad de la dominación. Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)*. Buenos Aires: Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.

COMISIÓN DE VERDAD Y JUSTICIA
2008 *Informe final de la Comisión de Verdad y Justicia*. Tomo IV: Tierras Mal Habidas. Asunción: Comisión de Verdad y Justicia. Disponible en: http://www.meves.org.py.

COUTO E SILVA, GOLBERY DO
1967 *Geopolítica do Brasil*. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editoral.

FOGEL, RAMÓN
2011 "Ramón Fogel: 'Este es el único país donde los inmigrantes son los que discriminan a los locales'", en *E'a*, 25 de julio de 2011. Disponible en: http://ea.com.py/v2/ramon-foguel-este-es-el-unico-pais-donde-los-inmigrantes-son-los--que-discriminan-a-los-locales/.
2008 "La región de la triple frontera: territorios de integración y desintegración", en *Sociologias*, vol. 10, núm. 20, julio-diciembre, pp. 270-290.
2006 "Movimientos campesinos y su orientación democrática en el Paraguay", en Hubert C. de Grammont (comp.), *La construcción de la democracia en el campo latinoamericano*. Buenos Aires: Clacso, pp. 95-106.
1988 "Tierra y democracia: la lucha de los campesinos paraguayos", en *Nueva Sociedad*, núm. 96, julio-agosto, pp. 163-173.

FOGEL, RAMÓN Y MARCIAL RIQUELME
2005 *Enclave sojero: merma de soberanía y pobreza*. Asunción: Ceri.

GLAUSER, MARCOS
2009 *Extranjerización del territorio paraguayo*. Asunción: Base IS.

GIMENEZ, HELOISA MARQUES
2010 *O desenvolvimento da cadeia produtiva da soja na Bolívia e a presença brasileira: uma história comum* (Tesis de maestría). Universidade de São Paulo, São Paulo.

GONZÁLEZ, DAVID
2011 "Paraguay por primera vez superará 3 millones de hectáreas en soja", en *5 días*, 30 de agosto de 2011. Disponible en: https://www.5dias.com.py/paraguay-por-primera-vez-superar-3-millones-de-hectreas-en-soja/.

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL

2008 "ONG paraguaia denuncia desmatamento promovido por empresas brasileiras na região do Chaco", 13 de octubre de 2008. Disponible en: http://www.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=2773.

KLIPPHAN, ANDRÉS Y DANIEL ENZ

2006 *Tierras S.A.: Crónicas de un país rematado*. Buenos Aires: Alfaguara.

KOROL, CLAUDIA Y MARIELLE PALAU

2009 *Resistencias populares y recolonización del continente. Talleres de la triple frontera*. Asunción: Base IS.

LAINO, DOMINGO

1979 *Paraguai: fronteiras e penetração brasileira*. São Paulo: Global.

MELLO, LEONEL ITAUSSU ALMEIDA

2002 "Brasil e Argentina em perspectiva", en *Revista de História*, núm. 147, pp. 211-224. Disponible en: https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/18948.

MÉNDEZ, IDILIO

2012 "Monsanto golpea en Paraguay: los muertos de Curuguaty y el juicio político a Lugo", en *Otramérica*, 23 de junio de 2012. Disponible en: http://otramerica.com/radar/monsanto-golpea-en-paraguay-los-muertos-de-cu-ruguaty-y-el-juicio-politico-a-lugo/2082.

MENEZES, ALFREDO DA MOTA

1987 *A Herança de Stroessner: Brasil-Paraguai*, 1955-1980. São Paulo: Papirus.

MORAES, CERES

2007 "Interesse e colaboração do Brasil e dos Estados Unidos com a ditadura de Stroessner (1954-1963)", en *Diálogos*, vol. 11, núms. 1-2, pp. 55-80.

NICKSON, ANDREW R.

2012 "Paraguay's Presidential Coup: The Inside Story", en *OpenDemocracy*, 10 de julio de 2012. Disponible en: https://www.opendemocracy.net/en/paraguays-presidential-coup-inside-story/.

1981 "Brazilian Colonization of the Eastern Border Region of Paraguay", en *Journal of Latin American Studies*, vol. 13, núm. 1, mayo, pp. 111-131.

ONG REPÓRTER BRASIL Y BASE INVESTIGACIONES SOCIALES
2010 *Los impactos socioambientales de la soya en Paraguay*. Asunción: Base IS.

PALAU, MARIELLE (org.)
2009 *Criminalización de la lucha campesina*. Asunción: Base IS.

PALAU, TOMÁS
2012 *Es lógico que una sociedad agredida se defienda. Recopilación de artículos 2003-2007*. Asunción: Base IS.
2005 "El Movimiento campesino en el Paraguay: conflictos planteamientos y desafíos", en *Observatorio Social de América Latina*, vol. 6, núm. 16, enero-abril, pp. 35-46.
2001 "Brasiguaios", en Mary Garcia Castro, *Migrações Internacionais: Contribuições para políticas*. Brasília: CNPD.

PALAU, TOMÁS *et al.*
2007 *Los refugiados del modelo agroexportador. Impacto del monocultivo de soya en las comunidades campesinas paraguayas*. Asunción: Base IS.

PASTORE, CARLOS
1972 *La lucha por la tierra en el Paraguay*. Montevideo: Antequera.

PROGRAMA DEMOCRATIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ
2012 *Monitoreo de la Política de Reforma Agraria del Gobierno Lugo. Síntesis a diciembre de 2011*. Asunción: PDC.

RIQUELME, QUINTÍN
2003 *Los sin tierra en Paraguay. Conflictos agrarios y movimiento campesino*. Buenos Aires: Clacso.

RIQUELME, QUINTÍN; LUIS ROJAS Y TOMÁS PALAU
2010 "Acciones del Gobierno Lugo para la Reforma Agraria entre agosto de 2008 y junio de 2010". Informe final de consultoría. Asunción.

RIVAROLA, DOMINGO (org.)
1986 *Los movimientos sociales en el Paraguay*. Asunción: Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos.

RIVAROLA, MILDA
2010 *Vagos, pobres y soldados: la domesticación estatal del trabajo en el Paraguay del siglo XIX*. Asunción: Servilibro.

ROJAS, LUIS
2009 *Actores del agronegocio en Paraguay*. Asunción: Base IS y Diakonia.

RULLI, JAVIER
2007 *Repúblicas unidas de la soya*. Córdoba: GRR. Disponible en: http://lasojamata.iskra.net/es/republicasunidas.

SOUCHAUD, SYLVAIN
2001 "Nouveaux espace en Amérique du Sud: la frontière Paraguayo-Brésilienne", en *Mappemonde*, vol. 61, pp. 19-23.

URIOSTE, MIGUEL
2011 *Concentración y extranjerización de la tierra en Bolivia*. La Paz: Fundación Tierra.

WHITE, RICHARD ALAN
1984 *La primera revolución radical de América (1811-1840)*. Asunción: La República.

Entrevistas

Asunción, julio y agosto de 2012

AGUAYO, LUIS. Dirigente de la Mesa Coordinadora Nacional de las Organizaciones Campesinas (MCNOC).
ALDERETE, ALBERTO. Exdiretor del Indert.
BORDENAVE, JUAN DÍAZ. Miembro del Consejo Nacional de Educación y Cultura.
FLECHA, VÍCTOR-JACINTO. Sociólogo.
FOGEL, RAMÓN. Sociólogo.
GRIMALDI, IDILIO MÉNDEZ. Periodista y economista.
LOVERA, MIGUEL. Exdirector del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE).
RIQUELME, QUINTÍN. Sociólogo.
RIVAROLA, MILDA. Ingeniera agrónoma e historiadora.
VILLAGRA, LUIS ROJAS. Coordinador de Base Investigaciones Sociales e investigador.
WEHRLE, ANDRÉS. Exviceministro de Agricultura y Pecuaria.

Brasil y la economía política de la integración sudamericana

Hay muchas personas que juegan a la miseria, "ah, porque el imperialismo estadounidense, el imperialismo, nosotros somos pobres por causa del imperialismo". Las personas nunca perciben que el imperialismo americano solo tuvo influencia nefasta en algunos países porque su élite era nefasta. Si las personas fuesen honestas y dignas y tuviesen una élite allí luchando por la soberanía [...] no hubiera sucedido.

Lula, 2009

Lula es el chico. Yo amo a ese chico[*].

Obama, 2009

Introducción

Elegido por primera vez en 2002 en un contexto de rechazo a la agenda neoliberal, el Partido de los Trabajadores (PT) ganó cuatro elecciones presidenciales consecutivas en Brasil. Sin embargo, en la medida en que la continuidad macroeconómica restringía el alcance del cambio, los argumentos para votar por el PT, desde el punto de vista de la izquierda, se estrecharon gradualmente. Uno de los últimos bastiones antes de sucumbir al voto por el mal menor fue la política externa petista, ampliamente percibida como progresista, particularmente en su entorno regional. En este período, el Brasil reinvindicó un papel de liderazgo promoviendo diversas iniciativas de integración, como Unasur, creada en 2008. Relaciones amistosas con Hugo Chávez

* Traducción libre que circuló en Brasil. Al saludar a Lula en una reunión del G-20, Obama dijo, textualmente: "That's my man right there. I love this guy".

y Fidel Castro, particularmente bajo las presidencias de Lula (2003-2010), respaldaban la percepción de que el país desafiaba la histórica dominación de los Estados Unidos en el subcontinente.

Este capítulo cuestiona esta visión, proponiendo un balance crítico del papel brasileño en la integración sudamericana bajo la ola progresista. Este abordaje complementa el análisis de las dinámicas nacionales, toda vez que, en la esfera de la integración, convergen las posibilidades de sinergia, pero también las limitaciones al cambio en cualquier proceso a escala regional, en el cual Brasil tiene un peso decisivo. Mi hipótesis es que, a pesar de la retórica que evoca un proyecto "neodesarrollista" que respaldaría una integración "post-neoliberal", las continuidades estructurales impuestas por las políticas económicas neoliberales limitaron las posibilidades de cambio, en el país y en la región.

Regionalismo abierto versus *regionalismo desarrollista*

Aunque elegido en un contexto de rechazo a la agenda neoliberal implementada por Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), el gobierno de Lula honró el compromiso asumido con la ortodoxia económica que heredó de su antecesor. Como se analizó en un capítulo anterior, la subordinación deliberada a la lógica del ajuste estructural se evidenció en una macroeconomía basada en el trípode meta inflacionario, superávit primario y tipo de cambio flexible, así como en la reforma de las pensiones y la nueva ley de quiebras aprobada en su primer mandato, elementos que sostienen la evaluación de que sus gestiones constituyeron "la más completa encarnación" del neoliberalismo (Paulani, 2008: 10). Sin embargo, a pesar del conjunto de evidencias, la economía política de los sucesivos gobiernos petistas a menudo fue caracterizada como neodesarrollista, una ideología que buscó conciliar supuestos aspectos saludables del neoliberalismo con rasgos positivos del nostálgico desarrollismo.

En el campo de las relaciones internacionales, el ideario neodesarrollista encontró correspondencia en la propuesta de que los

gobiernos petistas implementaron un "regionalismo desarrollista" o "post neoliberal". A pesar del reconocimiento de las líneas de continuidad entre las gestiones y de que la prioridad en relación a América del Sur antecede a la elección de Lula, en 2002, entre los analistas de polos dispares del espectro político prevalece la lectura de que la política exterior practicada por los gobiernos de Lula (2003-2010) representó una inflexión en relación a los gobiernos anteriores. Para diferenciarse de la administración de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), los simpatizantes de la política petista refieren el proyecto de integración regional a una inflexión en la diplomacia brasileña, en sintonía con el surgimiento de gobiernos progresistas de diferentes matices, cuestionando las políticas neoliberales nacionales y regionales prevalecientes (Cervo, 2003; Vizentini, 2008; Vigevani y Cepaluni, 2011).

En este contexto, se argumentó que el Estado brasileño abandonó la orientación de las gestiones anteriores, apuntando a una apertura comercial multilateral en el marco de lo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) describió como un "regionalismo abierto" (CEPAL, 1994), en favor de una política que enfatizaba la integración sudamericana como estrategia de inserción internacional soberana, denominada "regionalismo desarrollista" o "postneoliberal" (Serbin, Martínez y Ramanzini, 2012). Se sugirió que esta modalidad de integración promovería la "integración física entre los interiores de los países, paso fundamental para la integración de las cadenas de proveedores y productores relacionados, con el objetivo de formar economías de escala y la propia integración de las sociedades sudamericanas" (Desiderá Neto y Teixeira, 2012: 32).

Sin embargo, la necesidad de reorientar los parámetros de la política brasileña, dando prioridad a América del Sur, surgiría aún en los últimos años del gobierno de Fernando Henrique Cardoso (Silva, 2010). En 1994, la implementación de un acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos, México y Canadá selló el vínculo de la política exterior mexicana con los Estados Unidos, mientras que la administración de George W. Bush lanzaba en la primera Cumbre

de las Américas en Miami el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Ante este escenario, la diplomacia brasileña visualizó a América del Sur como una referencia geográfica para un proyecto de liderazgo regional, una perspectiva que se materializó en una aproximación entre el Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) como estrategia para constituir un bloque económico alternativo en el espacio sudamericano (Funag, 2012).

Fue en este contexto que surgió, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Constituida como un mecanismo institucional de coordinación de acciones de los doce países sudamericanos, su objetivo es construir una agenda común de infraestructura en las áreas de transporte, energía y comunicaciones. La realización de los más de quinientos proyectos previstos en la cartera alteraría la fisonomía del subcontinente, además de provocar un impacto ambiental considerable.

Propuesta en una cumbre de presidentes sudamericanos en Brasilia el año 2000, IIRSA se concibió como la dimensión de infraestructura de un proyecto de integración inscrito en el regionalismo abierto. La cartera de proyectos de la iniciativa fue diseñada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que dividió el subcontinente en diez ejes de integración y desarrollo de acuerdo a una racionalidad orientada por corredores de exportación de materias primas. En términos territoriales, se pretendía superar dos obstáculos "naturales" a la integración —los Andes y la Amazonía—, potenciando los nexos entre las costas del Atlántico (el Brasil) y del Pacífico, en un contexto de gravitación del dinamismo de la economía mundial hacia Asia.

En el año siguiente al lanzamiento de IIRSA, el presidente mexicano Vicente Fox anunció el Plan Puebla-Panamá —más tarde llamado Plan Mesoamérica—, que obedecía a una racionalidad idéntica, aunque en menor escala, y contaba con el respaldo de las mismas organizaciones financieras multilaterales, en particular el BID. En esas circunstancias, IIRSA fue interpretada como una expresión infraestructural

del ALCA, universalmente repudiada por los movimientos populares del continente.

El ALCA no avanzó debido a las múltiples resistencias que despertó en el campo popular, pero tampoco obtuvo el consenso entre las burguesías latinoamericanas. De igual importancia fue que el proyecto no fue de consenso en los Estados Unidos y la gestión de George W. Bush no pudo obtener las autorizaciones necesarias para acelerar las negociaciones. El fracaso de la iniciativa, consumada en la IV Cumbre de las Américas realizada en 2005 en la ciudad argentina de Mar del Plata, se celebra como una victoria de los gobiernos progresistas en América Latina.

Por otro lado, IIRSA fue acogida por el proyecto de integración regional desarrollado por el gobierno de Lula. Con la constitución de Unasur en 2008, la iniciativa se incorporó al Consejo de Infraestructura y Planificación (COSIPLAN) de esta organización, dando lugar a una situación paradójica: IIRSA se convirtió en el pilar material de una organización identificada con un "regionalismo desarrollista" que propuso invertir las premisas que guiaron la constitución original de IIRSA, bajo la égida del "regionalismo abierto". El argumento es que sería posible y deseable integrar la estructura técnica de la iniciativa, pero otorgándole un sentido político diferente en el marco del liderazgo brasileño bajo la égida de Unasur.

Para comprender esta paradoja, es necesario analizar la racionalidad económica y los objetivos políticos del proyecto integracionista brasileño.

Economía política del regionalismo desarrollista

El sustrato económico de la política de integración regional petista fue la estrategia del gobierno brasileño de apoyar a la internacionalización de grandes empresas de capital nacional o con sede en el país, entendidas como vector del desarrollo capitalista nacional: fue la política de las "campeonas nacionales". Este apoyo se materializó principalmente por medio de una diplomacia empresarial, practicada

por Itamaraty y por la política crediticia del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

En 2003, el banco cambió su estatuto para ofrecer una nueva línea de crédito especial, alentando la inserción externa de estas empresas, siempre que promovieran las exportaciones brasileñas. Entre 2003 y 2009, el crédito concedido para este propósito a través del Programa BNDES Exim aumentó de 42 millones de dólares a 1,26 mil millones de dólares —un aumento de alrededor del 3.000%— (Rodrigues, 2009). En 2010, el volumen de crédito manejado por BNDES alcanzó los 96,32 mil millones de dólares, lo que era 3,3 veces superior a los 28,6 mil millones de dólares del Banco Mundial en ese año y mucho más de 11,4 mil millones de dólares movidos por el BID. Esta expansión estuvo directamente relacionada al crecimiento de la economía brasileña, cuyo PIB ese año creció 7,5% en medio del *boom* de las *commodities*, poniendo al país como séptima economía mundial (Leopoldo, 2011).

Además del retorno de las operaciones, la principal fuente de financiamiento del BNDES es al menos el 40% de los depósitos obligatorios del Fondo PIS-PASEP[1], según establece el artículo 239 de la Constitución. Asimismo, recursos fueron canalizados por el Tesoro Nacional —cuya participación en realidad se elevó de 3,8 mil millones de reales o el 3,4% del total en 2001, a 450 mil millones de reales o el 54% del total en 2014—. Esta política también tendría una intención anticíclica apuntando a mitigar los efectos de la crisis mundial desencadenada en 2008 (Pinto y Reis, 2016).

Sin embargo, estas políticas implican préstamos con intereses subsidiados por BNDES. Esto se debe a que las tasas de interés de largo plazo (TILP) aplicadas por el banco para la mayoría de sus fondos son más bajas y menos volátiles que los acuerdos de recompra federal asociados a la tasa Selic, una vez que las tasas de interés brasileñas se encuentran entre las más altas del mundo: 5,64% a principios de

1 PIS es la contribución de empleadores privados y PASEP del Estado como empleador de servidores públicos.

2015, comparando con 4,10% en China, 3,6% en Rusia, 2,75% en India y 0,45% en Sudáfrica durante el mismo período. Así, al final del segundo mandato de Lula, los bonos del gobierno eran emitidos con base en la tasa Selic, que en ese momento era del 11,75%, mientras los préstamos del BNDES estaban vinculados a la TILP, cotizada en 6%. Se calcula que el costo fiscal de estos préstamos en 2009 estuvo alrededor del 85% del presupuesto de Bolsa Familia ese año (Rodrigues, 2009).

Evidentemente, esta diferencia entre los costos para que el gobierno recaude dinero y los intereses subsidiados tuvo un impacto fiscal, afectando a la deuda nacional. Se beneficiaron de este apoyo los sectores concentrados y oligopolizados del capitalismo brasileño, que a menudo operan como una extensión de negocios dominados por transnacionales, especialmente en el campo de la construcción civil y de la exportación primaria, en torno a productos como soja, etanol, minerales, carne y petróleo, entre otros. La justificación para este enfoque es la evaluación de que son los sectores en los cuales el país es más competitivo internacionalmente.

Otra forma de apoyar esta internacionalización fue el desempeño de BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), que capitaliza empresas por medio de la adquisición de acciones al portador (*debentures*). En 2009, la BNDESPAR tenía una participación en 22 multinacionales con sede en Brasil e inversiones que llegaban a un total de 92,8 mil millones de dólares, equivalente al 4% de la capitalización total del mercado accionario brasileño (Tautz *et al*., 2010: 261). En 2012, el 89% de las acciones de BNDESPAR se concentraban en los sectores: petróleo, minería, papel y celulosa, energía y frigoríficos (Garzon, 2013).

La actuación del banco intensificó la concentración de capitales en sectores de la economía nacional. Este movimiento fue acelerado con la crisis mundial iniciada en 2008 y alcanzó su auge en 2010, cuando se registraron más de setecientas operaciones de fusiones y adquisiciones de empresas brasileñas: JBS, Fibria, Vale, Ambev y Brasil Foods están entre las corporaciones globales consolidadas en este proceso. El caso del grupo JBS es ilustrativo de este movimiento: dos

años después de financiar la compra de la mayor empresa de carne bovina en Argentina —la estadounidense Swift Armor—, el BNDESPAR inyectó 4,5 mil millones de reales en el conglomerado JBS-Friboi para la compra de Swift & Co. y Pilgrim's Pride Corp. en los Estados Unidos. En 2008, BNDESPAR poseía el 20% de las acciones de la empresa, participación que llegó en los años siguientes al 35% como forma de eliminar las deudas y obligaciones. Hasta el 2010, el BNDES ya había invertido más de 7,5 mil millones de reales en JBS, empresa que en 2016 estuvo en el centro de un escándalo de corrupción que sacudió al gobierno de Michel Temer.

La trayectoria de JBS también ilustra el movimiento de capitales brasileños en dirección a la Argentina, un país que atravesó una aguda crisis que culminó en el derrocamiento de cinco presidentes a fines del 2001. En 2003, Petrobras adquirió el control de Pérez Companc, una compañía petrolera argentina, incrementando su presencia en el país desde entonces; la Camargo Corrêa compró la fábrica de cemento más grande del país, Loma Negra, en 2005; en 2010, Vale adquirió los activos argentinos de la empresa anglo-australiana Rio Tinto en el Proyecto Potasio de Río Colorado; Votorantim, que ya poseía acciones de la siderúrgica AcerBrag, adquirió el 50% de Cementos Avellaneda y en el sector de servicios, el Banco do Brasil adquirió el Banco de la Patagonia (Fundación Dom Cabral, 2010; Luce, 2007).

Sin embargo, el protagonista de la expansión internacional de las empresas brasileñas fue la construcción civil, un sector que se fortaleció bajo la dictadura (1964-1985) y diversificó sus actividades al participar en las privatizaciones en la década de 1990, también impulsadas por el BNDES (Campos, 2009). Entre 2001 y 2010, la transferencia de recursos del BNDES a obras de contratistas brasileños en el exterior aumentó en un 1.185%, pasando de 72.897 millones de dólares a 937.084 millones de dólares. Durante los dos gobiernos de Lula, entre 2003 y 2010, se invirtieron más de 10 mil millones de dólares en financiamiento a obras en América del Sur, muchas de ellas referidas a IIRSA. Entre estas obras están la construcción y ampliación

de la red de gasoductos en la Argentina (a un costo de 1,9 mil millones de dólares para Odebrecht y Confab), el acueducto del Chaco en la Argentina (180 millones de dólares para Odebrecht, Techint, OAS e Isolux); en Bolivia, la carretera San Ignacio de Moxos-Villa Tunari (332 millones de dólares para la empresa OAS), el Proyecto Hacia el Norte-Rurrenabaque-El Choro (199 millones para Queiroz Galvão) y la carretera Tarija-Bermejo (179 millones de dólares nuevamente para Queiroz Galvão); la ampliación del metro de Santiago de Chile (209 millones de dólares para Alstom); la construcción del puente sobre el río Tacutu en Guyana (17,1 millones de dólares), el segundo puente sobre el río Paraná en Paraguay (200 millones de dólares) y el puente Assis Brasil-Iñapari en Perú (17,1 millones de dólares); en Uruguay, la implementación de la renovación de la red de distribución de gas de Montevideo (7 millones de dólares para OAS); en Venezuela, la construcción y expansión del metro de Caracas (943 millones de dólares para Odebrecht) y la construcción de la Hidroeléctrica La Vueltosa (121 millones de dólares para Alstom). También se agregan a esta lista las grandes centrales hidroeléctricas proyectadas en Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia y República Dominicana por las empresas Odebrecht, Camargo Corrêa y OAS (Saggioro, 2012).

Muchos proyectos respaldados por el banco tienen un gran impacto socioambiental, además de involucrar a empresas que ignoran sistemáticamente la legislación laboral. Por estos motivos, su desempeño fue desafiado por el campo popular en Brasil y otros países de la región. En 2007, un conjunto de organizaciones sociales y movimientos populares conformó la Plataforma BNDES, señalando contradicciones entre la actuación del banco y su papel como entidad pública dotada de una función social.

Algunos ejemplos de esta actuación controversial incluyen: la Hidroeléctrica São João del Grupo Brenco, que recibió un préstamo de 600 millones de reales, además de tener al BNDESPAR como socio, fue procesada por el Ministerio Público del Trabajo por mantener a 421 trabajadores en una situación similar a la esclavitud; el frigorífico Bertin,

que recibió 2,5 mil millones de reales, garantizando al BNDESPAR el control del 27,5% de las acciones —antes de ser adquirido por la JBS—, fue denunciado repetidas veces por mantener ganado en áreas ilegalmente deforestadas; en otro caso, se prestaron 500 millones de reales al grupo Alcoa para explotar bauxita en Juriti, en un territorio con licencia ambiental vencida acarreando diversos conflictos con la población local (Tautz *et al*., 2010).

Dos conflictos relacionados a emprendimientos financiados por el BNDES tuvieron amplia visibilidad nacional. En 2011, estalló un motín entre los catorce mil trabajadores de una de las principales centrales hidroeléctricas en construcción en el país, la Central Hidroeléctrica Jirau, en Rondônia, cerca de la frontera con Bolivia. Este conflicto desencadenó una ola de revueltas en situaciones similares. Generalmente alejados de los principales centros, de la presencia estatal y de los ojos de la opinión pública, estos lugares de trabajo frecuentemente se convierten en máquinas de moler gente. El consorcio responsable de la Central de Jirau estaba dirigido por la contratista Camargo Corrêa, asociada a la empresa transnacional francesa Suez y a Electrosul, y recibió 13.300 mil millones de reales del BNDES. Un segundo conflicto de amplia repercusión estalló alrededor de la represa de Belo Monte, en los márgenes del río Xingu, en la Amazonía brasileña. A pesar de la necesidad dudosa del proyecto, de su viabilidad económica incierta y del extraordinario impacto socioambiental previsto, la obra se inauguró en mayo de 2016, movilizando como mínimo más de 23 mil millones de reales del BNDES.

La actuación del BNDES también fue cuestionada en el plano internacional. En el ámbito de las relaciones laborales, la situación más famosa involucró a los trabajadores de la International Nickel Company of Canada (INCO), adquirida por el gigante brasileño Vale do Rio Doce en 2006, que enfrentaron a la nueva dirección de la empresa con una prolongada huelga. En el ámbito sudamericano, se registran múltiples controversias. En Ecuador, la tensión entre el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y Odebrecht por irregularidades en la construcción

de la hidroeléctrica de San Francisco llevó a los países al borde de una crisis diplomática en 2008. En Bolivia, los conflictos en relación a la construcción de una carretera a través de TIPNIS, que es simultáneamente territorio indígena y parque nacional, son considerados como un parteaguas en la relación del gobierno de Evo Morales con los movimientos indígenas. A pesar de la represión brutal de la octava marcha indígena en 2011, la obra, adjudicada a la empresa constructora brasileña OAS, que tenía un crédito de 332 millones de dólares del BNDES, fue suspendida. Situación similar implicó la construcción de represas hidroeléctricas en la Amazonía peruana, hasta el momento obstaculizadas por la resistencia popular.

El caso peruano ilustra la estrategia regional brasileña. En 2010, los presidentes Alan García y Lula da Silva firmaron un acuerdo para construir cinco represas hidroeléctricas en la Amazonía peruana, que exportarían el 80% de su producción de energía a Brasil. La primera y más importante estaría en Inambari, una obra concedida a un consorcio de tres empresas brasileñas, liderada por OAS. Más allá del proyecto en sí, se pretendía crear un movimiento orientado a acoplar la economía peruana al Brasil, como sucedió con la construcción del gasoducto boliviano a fines de la década de 1990, cuando Brasil se convirtió en el principal socio comercial de Bolivia. En la visión de los formuladores de política brasileños, se estrecharían los lazos económicos regionales fortaleciendo la base material para la autonomía política de la región, bajo el liderazgo brasileño (Araújo, 2015; Paloschi, 2015).

En términos generales, la racionalidad petista preveía que la internacionalización de las corporaciones brasileñas serviría de base material para proyectar regionalmente la influencia del país, modificando su patrón de inserción internacional —o, para usar la jerga del medio diplomático—, hacer de Brasil un *global player* (actor global).

Es en esta perspectiva que fue creada Unasur en 2008. Pero, ¿por qué Brasil militó por la creación de esta organización y no se unió a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), lanzada en 2004?

El Alba señalaba una integración que no se restringía a la dimensión comercial, involucrando los campos de la educación, salud, cultura, comunicación, entre otros. El intercambio de petróleo venezolano por el servicio de médicos cubanos y la creación del canal de televisión Telesur, aunque no están directamente vinculados al Alba, son emblemáticos de esta intención. En el campo de la economía, se proponían ideas innovadoras, como el Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), la moneda única destinada a mitigar la dependencia regional del dólar y la formación de empresas de inversión conjunta como la Petrocaribe. La intención de la iniciativa fue descrita en estas palabras: "el Alba optó por la lógica de la cooperación comercial, el intercambio solidario y la complementariedad económica entre las diferentes estructuras productivas nacionales, como principios generales de su filosofía, en un esfuerzo por extender la solidaridad revolucionaria en todo el continente" (Cerezal, Simarro y Soler, 2013: 152).

Finalmente, al proponer una integración de alcance latinoamericano —y no sudamericano— que trascendía la dimensión mercantil, el Alba planteaba un proyecto político contrahegemónico en el continente que tuvo como su primer y principal socio a Cuba. Sin embargo, esta lógica encontró poca resonancia en el gobierno brasileño, cuyo compromiso con un mundo multipolar no se tradujo en radicalización política. Desde la perspectiva brasileña, el Alba fue de escaso interés económico, ya que no traía negocios atractivos. En el plano político, la iniciativa fue interpretada como un proyecto que respondía a los intereses venezolanos antes que latinoamericanos y el protagonismo de este país fue visto como competidor con la proyección deseada por Brasil, a pesar de la empatía personal entre Chávez y Lula (Cerezal, 2015; Parkinson de Castro, 2015; Ramos, 2015).

Por lo tanto, en oposición a la lógica defendida por el Alba que apuntaba a una integración contrahegemónica de alcance latinoamericano, Unasur se guió desde su origen por el mínimo denominador común capaz de aglutinar políticas dispares en América del Sur, como las practicadas entonces por los gobiernos de Venezuela y de Colombia.

La membresía de este último solo se aseguró cuando se acordó que las decisiones en la organización serían unánimes y no por mayoría, lo que en la práctica concedió poder de veto a sus miembros.

Más allá de los logros destacados, pero de escaso impacto estructural, como los acuerdos para la convalidación de diplomas y compras conjuntas de vacunas (Nascone, 2015), se esperaba que la creación del Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planificación (COSIPLAN) como organismo de Unasur invertiría la racionalidad original de la cartera de proyectos asociada a IIRSA. En términos económicos, este desafío implicaba minimizar el papel de las instituciones multilaterales que concibieron la iniciativa, el BID, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA). Esto porque la lógica estrictamente mercantil que sustenta a estas instituciones impedía la inversión en obras relevantes para la integración regional, pero [que, para ellas, resultaban] poco rentables. Esta presencia debería ser contrarrestada con la actuación de otros organismos financiadores, especialmente el BNDES (Barros, 2015). Al mismo tiempo, surgieron propuestas para una nueva arquitectura financiera regional, que resultaron en la creación del Banco del Sur en 2009, con la adhesión formal de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Desde el punto de vista brasileño, el movimiento integracionista amplió los frentes comerciales y fortalecía su protagonismo político. Los demás países de la región tenían dos motivaciones fundamentales para sumarse. Por un lado, hubo quienes vieron la oportunidad de consolidar un campo político alternativo a la influencia estadounidense. Esta fue la motivación subyacente para los países sudamericanos que forman parte de Alba, una iniciativa de integración potencialmente más radical que fue neutralizada en la práctica por la conducta brasileña. Por otro lado, había países que hacían negocios con Brasil como con cualquier otro país, como es el caso de Perú. Sintomáticamente, Venezuela y Perú fueron los dos países donde Odebrecht, corporación que simboliza la expansión apoyada por las administraciones petistas,

movía más volumen de negocios al final del gobierno de Dilma Rousseff (Chan, 2015).

En general, los países donde los vínculos comerciales brasileños se intensificaron más son aquellos con los cuales las gestiones petistas mantuvieron vínculos de proximidad política, como Argentina, Venezuela, Cuba y la República Dominicana. Fuera del continente, esta asociación entre afinidad política e intensificación comercial parece menos relevante, tomando en cuenta el volumen de negocios con la tenebrosa dictadura angolana. Pero fue la búsqueda de aliados políticos que motivó el activo apoyo a la candidatura de Ollanta Humala a la presidencia del Perú en 2011, aunque el presidente haya dado la espalda a los brasileños después de su elección.

Desarrollismo en crisis

¿Cómo ha evolucionado este proceso de integración regional? Desde el punto de vista de la política exterior brasileña, que apuntaba a un desarrollo capitalista apoyado en la internacionalización de sus corporaciones —y, a partir de eso, ambicionaba un papel protagónico en la política internacional—, es posible afirmar que este proyecto avanzó con éxito durante las gestiones de Lula. En este período, el *boom* de las *commodities* respaldó una popularidad incuestionable, que permitió al presidente incluso elegir a una virtual desconocida como su sucesora. Al mismo tiempo, había evidencia de un nuevo papel para el país, entre el liderazgo en la misión de estabilización de la ONU en Haití y las victoriosas campañas para organizar la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos, todos triunfos de dudosa virtud.

A lo largo de la primera presidencia de Dilma Rousseff (2011-2014), el proceso aún avanzó, pero de manera intermitente. Al perfil distinto de la presidenta, que no priorizó la agenda externa ni la integración regional en su mandato, se sumaron indicios de que la crisis internacional estaba llegando al país, perjudicando, por ejemplo, las transferencias del Tesoro Nacional al BNDES. En el ámbito político, aunque las manifestaciones de junio de 2013 no estuvieron relacionadas con

la recesión económica, se expresaba un profundo malestar. Era una señal inequívoca de que la pacificación social producida por el PT perdía terreno. En la medida en que las aspiraciones populares fueron nuevamente frustradas, la iniciativa política gravitó consistentemente hacia la derecha.

Ya en 2014, cuando Dilma fue reelegida, este proyecto político se vio amenazado en diferentes frentes. Fundamentalmente, las condiciones económicas que habían protegido a Brasil de los impactos más destructivos de la crisis que estalló en 2008 ya no estaban presentes, y había signos de recesión económica. Por otro lado, numerosos escándalos evidenciaron los esquemas de corrupción que constituyen el modus operandi de los negocios de los contratistas, en el país y fuera de él. Estas revelaciones minaron la confiabilidad del gobierno y de su partido y también amenazaron los cimientos de su proyecto capitalista. Paradójicamente, la exigencia de transparencia en la rendición de cuentas del BNDES dejó de ser una demanda de los movimientos populares y fue apropiada por la derecha en las calles.

Presionados en todos los frentes, los cuadros petistas interpretaron las dificultades para hacer negocios que enfrentaron los contratistas y Petrobras como una amenaza para su proyecto nacional. Impotentes para negar la corrupción, alegaron que el país siempre había funcionado de esa manera, y que solo había surgido entonces porque el PT estaba en el gobierno. En relación con este argumento, se sugirió que el extenso trabajo de investigación en curso inhibía la inversión de la construcción civil, entre otros sectores, lo que ponía en riesgo la economía del país. En otras palabras, se dejó en claro que el proyecto de integración regional avanzado presuponía una identificación entre la nación y los contratistas y su forma corrupta de hacer negocios, para no mencionar las pésimas condiciones de trabajo.

Reconocer la debilidad de las premisas petistas no significa negar el uso político que la derecha antipetista hace de las investigaciones, ni las preocupantes infracciones a la legalidad cometidas con este propósito. Sin embargo, los escándalos evidenciaron una innegable

corrupción. Y la conjunción entre corrupción y crisis económica puso a la gestión petista a la defensiva.

Incluso antes de que empeorara la crisis, el BNDES estaba más preocupado por las investigaciones que por las inversiones, incluso porque los recortes presupuestarios, junto con la disminución de los ingresos del Fondo de Apoyo al Trabajador (FAT), redujeron el capital disponible para inversiones a largo plazo. En este contexto, como se mencionó en un capítulo anterior, varias evidencias cuestionaron la estrategia de las "campeonas nacionales", entre las cuales se destacan las empresas beneficiadas por aportes voluminosos del banco, pero que poco después pasaron al control internacional; operaciones que recibieron apoyo para internacionalizarse y se autonomizaron, colaborando poco a la exportación de servicios y productos brasileños; y finalmente, evidencias de que las "campeonas nacionales" utilizaron en especulación financiera los préstamos subsidiados destinados a estimular las exportaciones de bienes y servicios.

A las dificultades internas del gobierno petista, se sumaban obstáculos para consolidar la propuesta de que COSIPLAN le daría un significado diferente a IIRSA. De acuerdo con esta perspectiva, la infraestructura proyectada contribuiría a la endogenización del crecimiento, la sostenibilidad ambiental y la inclusión social. El núcleo del problema es que el conjunto de bancos en el origen de la iniciativa (BID, CAF y FONPLATA) preservaban en la práctica el poder de guiar la agenda de proyectos. Por ejemplo, son estos bancos los que financian los estudios previos a los proyectos, y el comité técnico de IIRSA continuaba integrado por representantes de estas tres instituciones.

Por otro lado, la propuesta de una "nueva arquitectura financiera", orientada a reducir la dependencia de la región en relación a las instituciones internacionales, fue bloqueada por el propio Brasil. Prevalecieron objeciones del Banco Central y del Ministerio de Hacienda para utilizar las reservas internacionales para financiar la inversión, mientras se recibían intereses del 1% en bonos del tesoro estadounidense, aunque en el otro extremo de esta ingeniería financiera se

pagasen las tasas de interés más altas del mundo. Si bien uno de los principales defensores de la "nueva arquitectura", el economista ecuatoriano Pedro Páez, haya minimizado este problema, argumentando que el aporte de las reservas internacionales estaría precedido por numerosas medidas que no implicarían tales cargas, prevaleció la percepción de que el motivo para que el Banco del Sur no despegase fue político. La institución preveía el mismo poder de voto para los países, independientemente de la contribución realizada, en un modelo diferente al practicado por el FMI. Este acuerdo no interesaría al pretendido liderazgo brasileño, lo que evidencia las motivaciones de poder subyacentes al discurso de la integración regional (Acosta, 2015; Páez, 2015).

La fragilidad de la propuesta integracionista también se explicitó por la constatación de que, en 2014, 477 proyectos de la cartera de COSIPLAN eran obras nacionales, 95 binacionales, cinco trinacionales y solamente dos proyectos eran multinacionales, incluyendo a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela en proyectos de telecomunicación. Además, el informe de IIRSA relataba que el 89,1% de los proyectos y el 66,5% de las inversiones previstas correspondían al sector de transportes, entre los cuales casi la mitad eran carreteras, mientras que los proyectos de energía correspondían al 9,3% de las iniciativas y al 33,5% de las inversiones y el sector de comunicaciones no alcanzaba el 2% del número de proyectos. Los datos evidencian la afinidad entre la iniciativa y las áreas de actuación de las empresas contratistas brasileñas (COSIPLAN, 2014). Quince años después de su lanzamiento, era posible afirmar que IIRSA avanzaba lenta, aunque exitosamente, pero sin cumplir la función política que le asignó el proyecto petista.

Esta constatación problematiza los supuestos vínculos entre el neodesarrollismo y el regionalismo desarrollista. Una vez que la dimensión económica del proceso se limita a los negocios potenciados por las obras referidas a una iniciativa incubada en el ámbito del regionalismo abierto, la propuesta de un regionalismo desarrollista envuelve una maniobra retórica, evocando una inflexión de sentido

en un proyecto que, en esencia, sigue siendo el mismo. Desde esta perspectiva, la asociación entre el conjunto de obras y los cambios regulatorios vinculados a IIRSA y un horizonte de neodesarrollo está revestida de un doble carácter ideológico. Asocia la expansión de los negocios oligopólicos brasileños y multinacionales con el nuevo desarrollismo y al mismo tiempo identifica este nuevo desarrollismo con una integración regional postneoliberal. En esta operación, se confunden la interconexión con la integración, el crecimiento con el desarrollo, los intereses oligopólicos con el interés nacional, la diplomacia empresarial con la cooperación Sur-Sur y la internacionalización de negocios brasileños con la integración postneoliberal.

El orden petista en América del Sur

Finalmente, se confunde la gestión de los conflictos regionales, principal virtud atribuida a Unasur, con la soberanía. Según esta lectura, la constitución de organizaciones regionales que no están dirigidas por los Estados Unidos es entendida como un avance en dirección a un mundo multipolar que se opone a los intereses de la potencia. Es importante destacar que Washington nunca hizo esta lectura. En vísperas de la formalización de Unasur, la entonces secretaria de Estado Condoleezza Rice expresó su apoyo al protagonismo brasileño en el marco de un proyecto de integración regional (Rice, 2008). Ya bajo la administración de Barack Obama, la subsecretaria de Asuntos Políticos del Departamento de Estado, Wendy Sherman, enfatizó: "Hoy, Brasil es un socio estratégico para direccionar cuestiones globales —y no solo hemisféricas— de interés común. Y yo quiero dejar claro que los Estados Unidos necesitan y dan la bienvenida al ampliado papel positivo de Brasil" (Sherman, 2012).

En línea con esta perspectiva, la intercesión brasileña en los asuntos regionales nunca antagonizó con la Casa Blanca. Brasil intervino en dirección contraria a los intereses golpistas respaldados por los Estados Unidos en las recientes crisis políticas en Honduras en 2009 y en Paraguay, en 2012. Sin embargo, en ambos casos esta actuación

fue incapaz de revertir el curso de los acontecimientos, a pesar de un ostensivo esfuerzo de Itamaraty en el caso paraguayo.

Los límites del progresismo petista se evidenciaron en la relación con el proceso bolivariano en Venezuela. Lula cultivó relaciones cercanas con Hugo Chávez, al mismo tiempo que condenó sus iniciativas de potencial innovador —como Alba, Banco del Sur y Telesur— a una marginalidad relativa. Esta conducta brasileña fortaleció a los sectores más moderados del bolivarianismo, un proceso dinámico cuyo sentido estuvo en permanente disputa, mientras se multiplicaron los negocios brasileños en el país.

Incluso fuera de la presidencia, Lula continuó presionando al gobierno venezolano en esta dirección. Un año después de la muerte de Chávez, el expresidente envió una carta a Nicolás Maduro, entregada por Marco Aurelio García, aconsejándole aceptar su papel como reformador del legado chavista, en lugar de pretender ser un segundo Chávez (Ramírez, 2015). En el momento en que Unasur se ofreció a mediar en el diálogo con la oposición, Lula proponía la conciliación y el pacto social para Venezuela, vía que hasta entonces parecía exitosa en Brasil:

> Maduro debería intentar disminuir el debate político para dedicarse por completo a gobernar, establecer una política de coalición, construir un programa mínimo y aliviar la tensión […] Venezuela debería tener un pacto de cinco años para trabajar contra los apagones, combatir la inflación y ser autosuficiente en la producción de alimentos (Lula, 2014).

Cuando la crisis venezolana empeoró y, en Brasil, el gobierno de Dilma Rousseff estaba acorralado, se extendió la percepción de que este país daba la espalda al bolivarianismo (Constant, 2015; Urbina, 2015).

Al neutralizar la expresión más radical de la ola progresista que ahora se agota, los gobiernos petistas contribuyeron a delimitar el

alcance y el límite del cambio en la región. En algunas situaciones, el cambio político fue radical, como en Venezuela, donde fue enterrado el legado del Pacto de Punto Fijo, o en Bolivia, donde el protagonismo indígena erosionó lo que René Zavaleta Mercado (1982) describió como una sociedad abigarrada, caracterizada por la segregación social entre indios y no indios. Sin embargo, en todos los casos se verificó una incapacidad para generar alternativas a una economía anclada en la explotación de recursos primarios para la exportación, inherente a la lógica de IIRSA, a la que todos se adhirieron. Por lo tanto, se observa una correspondencia entre el alcance y el límite de los procesos identificados con el campo progresista en la región, donde se constata un cambio político en el marco de la continuidad económica y la dinámica prevaleciente en el plano de la integración regional, en la que Unasur emerge como una novedad política referida a IIRSA, cuyo marco logístico profundiza las estructuras económicas de la dependencia.

Reflexiones finales

Existe una correspondencia entre el neodesarrollismo como ideología de la política económica de las gestiones presidenciales petistas y la noción de un regionalismo desarrollista —o postneoliberal—, como ideología de la política exterior practicada por estos gobiernos. La función política en ambos casos es establecer una distinción en relación a las gestiones anteriores, pretendiendo diferenciarse de la ortodoxia neoliberal, sin que este movimiento corresponda a ningún cambio sustancial —sea en la política macroeconómica fundada por el Plan Real, sea en el proyecto de integración regional, que se basa en los trabajos asociados a IIRSA.

Ambos polos del debate tienen un fundamento común que remite, en último análisis, al mito del crecimiento económico. Esta falsa polarización cumple una segunda función política, que es guiar el debate por alternativas que eludan las conexiones entre el crecimiento

económico y la profundización de la dependencia y la desigualdad que caracterizan el subdesarrollo. Las propuestas que apuntan a un patrón civilizador alternativo, ya sea en torno al Bien Vivir del bolivarianismo o del socialismo, no tiene voz en el país.

En economía, el debate se restringe a la microeconomía, que en última instancia discute el ritmo y la intensidad de la profundización de la agenda asociada al neoliberalismo. En el campo de las relaciones internacionales, se disputa la relevancia concedida al Sur en general y a América del Sur en particular, como un espacio privilegiado para la expansión de los negocios brasileños[2]. Los parámetros del debate son establecidos por la ponderación entre los costos y los beneficios de la integración regional, según una racionalidad mercantil. El contrapunto a la posición petista, que sostuvo la importancia estratégica de la región, fue resumido de manera lapidaria por la exasesora de la misión brasileña ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Vera Thorstensen, en su crítica al Mercosur: "No sirve de nada casarse con un pobre" (Thorstensen, 2014). Por otro lado, IIRSA fue defendida por diplomáticos sintonizados con el regionalismo abierto, como el exministro de gobierno de Fernando Henrique Cardoso, José Botafogo Gonçalves, quien se quejaba de que la iniciativa "fue poco reconocida, cuando tal vez sea la institución que más dinamismo pueda dar a la integración sudamericana", y defendió la práctica de una "diplomacia infraestructural" (Gonçalves, 2013: 268).

A pesar de las diferencias de enfoque, el propósito común es la inserción del espacio económico brasileño en los movimientos del capitalismo contemporáneo como exportador de materias primas, base para la expansión del capital multinacional y una plataforma de valorización del capital financiero. Bajo esta perspectiva, la política está siempre instrumentalizada por la economía. Contrario a lo que pregona la retórica del regionalismo postneoliberal, el significado del proceso

2 El desprecio del que era objeto Unasur en 2018 reflejaba este contrapunto, mientras IIRSA avanzaba de forma relativamente autónoma, apoyada por el BID, como siempre.

integracionista no cambió con la elección de gobiernos progresistas imbuidos de un horizonte neodesarrollista, pero hay indicios de que la interconexión del subcontinente como un imperativo mercantil, implicó una instrumentalización de la afinidad política entre estos gobiernos a favor de los negocios locales e internacionales.

Bajo esta óptica, se deshace la incógnita analítica que desafía explicar cómo un gobierno políticamente convencional, socialmente conservador y económicamente neoliberal practicaría una política exterior innovadora, perturbando los intereses estadounidenses en la región. Explicitado el carácter ideológico de la articulación entre el neodesarrollismo y el regionalismo postneoliberal, la política de las gestiones petistas para América del Sur emerge, ya no como lo que le gustaría ser, sino como lo que fue: una instrumentalización de la integración regional en favor de la internacionalización de los negocios brasileños oligopolizados en consonancia con la división internacional del trabajo imperante, asegurando para el país una posición de liderazgo en el subcontinente, circunscrita a la esfera política, para ser ejercida en tiempos de crisis según los estrechos límites tolerados por la potencia hegemónica.

Bibliografía

BONOMO, MARCO; RICARDO BRITO Y BRUNO MARTINS

2014 *Macroeconomic and Financial Consequences of the After Crisis Government-Driven Credit Expansion in Brazil*. Working paper 378. Rio de Janeiro: Banco Central do Brasil.

CAMPOS, PEDRO HENRIQUE

2009 "As origens da internacionalização das empresas de engenharia brasileiras", en Fundação Rosa Luxemburgo *et al.*, *Empresas transnacionais brasileiras na América Latina: um debate necessário*. São Paulo: Expressão Popular, pp. 104-114.

CEPAL

1994 "El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe: la integración económica al servicio de la transformación productiva con equidad", en CEPAL, *Cincuenta años de pensamiento en la CEPAL: textos seleccionados*. Volumen 2. Santiago: CEPAL.

CEREZAL, MANUEL; RICARDO MOLERO SIMARRO Y ALBERTO MONTERO SOLER

2013 "El Sucre: orígenes, funcionamiento y perspectivas de futuro para la integración latinoamericana", en Carlos Eduardo Martins (coord.), *Los retos de la integración y América del Sur*. Buenos Aires: Clacso, pp. 151-172.

CERVO, AMADO LUIZ

2003 "Política exterior e relações internacionais do Brasil: enfoque paradigmático", en *Revista Brasileira de Política Internacional*, vol. 46, núm. 2, julio-diciembre, pp. 5-25.

COSIPLAN

2014 "Cartera de proyectos 2014" (informe). V Reunión Ordinaria del COSIPLAN, Montevideo, 4 de diciembre de 2014. Disponible en: http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/cn25_montevideo14_Cartera_COSIPLAN_2014.pdf

DESIDERÁ NETO, WALTER Y RODRIGO ALVES TEIXEIRA

2012 "La recuperación del desarrollismo en el regionalismo latinoamericano", en Walter Desiderá Neto y Rodrigo Alves Teixeira (orgs.), *Perspectivas para la integración de América Latina*. Brasília: CAF e IPEA.

FIORI, JOSÉ LUÍS

2011 "A miséria do 'novo desenvolvimentismo'", en *Carta Maior*, 30 de noviembre de 2011. Disponible en: https://www.cartamaior.com.br/?/Coluna/A-miseria-do-novo-desenvolvimentismo-/20887.

FUNAG-FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO

2012 *A América do Sul e a integração regional*. Brasília: Funag.

FUNDAÇÃO DOM CABRAL

2010 *Ranking FDC das Transnacionais Brasileiras*. São Paulo: FDC.

GARCÍA LINERA, ÁLVARO

2016 "Álvaro García Linera en Argentina: 'No hay revolución verdadera, ni hay consolidación de un proceso revolucionario, si no hay una profunda revolución cultural'". Conferencia en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 30 de mayo de 2016. Disponible en: https://www.resumenlatinoamericano.org/2016/05/30/alvaro-garcia-linera-en-argentina-no-hay-revolucion-verdadera-ni-hay-consolidacion-de-un-proceso-revolucionario-si-no-hay-una-profunda-revolucion-cultural/.

GARZON, LUIS FERNANDO NOVOA

2013 "A esfinge, o BNDES e as 'campeãs' que nos devoram", en *Correio da Cidadania*, 3 de mayo de 2013. Disponible en: http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8329%3Amanchete030513&catid=34%3Amanchete&amp

GONÇALVES, JOSÉ BOTAFOGO

2013 "Desafios da inserção internacional do Brasil: próximos passos", en

Leonardo Paz (org.), *O Cebri e as Relações Internacionais no Brasil*. São Paulo: Senac.

LEOPOLDO, RICARDO

2011 "BNDES empresta 391% mais en 5 anos e supera em três vezes o Banco Mundial", en *Estadão*, 10 de marzo de 2011. Disponible en: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-empresta-391-mais- -em-5-anos-e-supera-em-tres-vezes-o-banco-mundial-imp-,689817.

LUCE, MATHIAS SEIBEL

2007 *O subimperialismo brasileiro revisitado: a política de integração regional do governo Lula (2003-2007)* (Tesis de maestría). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

MERCADANTE, ALOIZIO

2010 *As bases do novo desenvolvimentismo: análise do governo Lula* (Tesis de doctorado). Universidade Estadual de Campinas, Campinas.

O GLOBO

2014 "Oposição e governo iniciam diálogo na Venezuela com a mediação da Unasul", en *O Globo*, 8 de abril de 2014. Disponible en: http://oglobo.globo.com/mundo/oposicao-governo-iniciam-dialogos-na-venezuela-com-mediacao-da-unasul-1-12127392.

PAULANI, LEDA

2008 *Brasil Delivery*. São Paulo: Boitempo.

PINTO, LUIZ Y MARCOS REIS

2016 "Long-term Finance in Brazil: The Role of the Brazilian Development Bank (BNDES)", en Elias Grivoyannis (ed.), *The New Brazilian Economy: Dynamic Transitions into the Future*. New York: Palgrave Macmillan.

RICE, CONDOLEEZZA

2008 "Remarks with Brazilian Foreign Minister Celso Amorim". Brasília, 13 de marzo de 2008. Disponible en: http://2001-2009.state.gov/secretary/rm/2008/03/102228.htm.

RODRIGUES, ALEXANDRE

2010 "BNDES aposta R$ 7,5 bi no Friboi", en *Estadão*, 15 de febrero de 2010.

Disponible en: https://www.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-aposta-r-7-5-bi-no-friboi,511466

RODRIGUES, EDUARDO

2009 "Brasil faz obras nos vizinhos temendo a China", en *Folha de S. Paulo*, 27 de septiembre de 2009.

SAGGIORO GARCIA, ANA

2012 *A internacionalização de empresas brasileiras durante o governo Lula: uma análise crítica da relação entre capital e Estado no Brasil contemporâneo* (Tesis de doctorado). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

SAMPAIO JR., PLÍNIO DE ARRUDA

2012 "Desenvolvimentismo e neodesenvolvimentismo: tragédia e farsa", en *Serviço Social & Sociedade*, núm.112, octubre-diciembre, pp.672-688. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-66282012000400004&lng=en&nrm=iso.

SANAHUJA, JOSÉ ANTONIO

2012 "Regionalismo post-liberal y multilateralismo en Sudamérica: El caso de Unasur", en Andrés Serbin, Laneydi Martínez y Haroldo Ramanzini Júnior (coords.), *El regionalismo "post-liberal" en América Latina y el Caribe: nuevos actores, nuevos temas, nuevos desafíos. Anuario de la Integración Regional de América Latina y el Gran Caribe 2012*. Buenos Aires: Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales.

SANTOS, FABIO LUIS BARBOSA DOS

2014 "A problemática brasiguaia e os dilemas da projeção regional brasileira", en Walter Antonio Desiderá Neto (org.), *O Brasil e novas dimensões da integração regional*. Brasília: IPEA.

SERBIN, ANDRÉS; LANEYDI MARTÍNEZ Y HAROLDO RAMANZINI JÚNIOR (coords.)

2012 *El regionalismo "post-liberal" en América Latina y el Caribe: nuevos actores, nuevos temas, nuevos desafíos. Anuario de la Integración Regional de América Latina y el Gran Caribe 2012*. Buenos Aires: Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales.

SHERMAN, WENDY
2012 "Remarks to the Council of the Americas and the Center for Strategic and International Studies (CSIS)". Carnegie Endowment for International Peace. Washington, 28 de febrero de 2012. Disponible en: http://2009-2017.state.gov/p/us/rm/2012/184853.htm.

SICSÚ, JOÃO; LUIZ FERNANDO PAULA Y RENAUT MICHEL
2005 *Novo-desenvolvimentismo: um projeto nacional de crescimento com equidade social*. Barueri y Rio de Janeiro: Manole y Fundação Konrad Adenauer.

SILVA, ANDRÉ LUIZ REIS DA
2010 "As transformações matriciais da política externa brasileira recente (2000-2010)", en *Meridiano 47: Journal of Global Studies*, vol. 11, núm. 120, pp. 1-10.

TAUTZ, CARLOS; FELIPE SISTON, JOÃO ROBERTO LOPES PINTO Y LUCIANA BADIN
2010 "O BNDES e a reorganização do capitalismo brasileiro: um debate necessário", en João Paulo de Almeida Magalhães *et al*., *Os anos Lula: contribuições para um balanço crítico, 2003-2010*. Rio de Janeiro: Garamond, pp. 249-286.

THORSTENSEN, VERA
2014 "Ficar atrelado ao Mercosul é afundar o Brasil", en *Carta Capital*, 19 de mayo de 2014. Disponible en: http://www.cartacapital.com.br/economia/ficar-atrelado-ao-mercosul-e-afundar-o-brasil-804/.

VIGEVANI, TULLO Y GABRIEL CEPALUNI
2011 "Política externa de Lula: a busca de autonomia pela diversificação", en Tullo Vigevani y Gabriel Cepaluni, *A política externa brasileira: a busca de autonomia, de Sarney a Lula*. São Paulo: Unesp.

VIZENTINI, PAULO
2008 *Relações internacionais do Brasil: de Vargas a Lula*. São Paulo: Fundação Perseu Abramo.

ZAVALETA MERCADO, RENÉ
1982 *Clases sociales y conocimiento*. La Paz: Amigos del Libro.

Entrevistas y conversaciones

Caracas, Lima, Montevideo y Quito, entre julio y diciembre de 2015

ACOSTA, ALBERTO. Expresidente de la Asamblea Constituyente en el Ecuador y exministro de Gobierno de Rafael Correa.

ARAÚJO, JOAQUIM. Jefe del Sector de Defensa y Cooperación de la Embajada de Brasil en Perú.

BARROS, PEDRO SILVA. Director de Asuntos Económicos de Unasur.

CEREZAL, MANUEL. Asesor del Banco Central de Venezuela, investigador de la Universidad Bolivariana de Venezuela.

CHAN, ALAN. Director de la operación de Odebrecht en Perú.

CONSTANT ROSALES, HECTOR. Diplomático y profesor de la Universidad Central de Venezuela.

NASCONE, MARIANO. Director de Asuntos Sociales de Unasur.

PÁEZ, PEDRO. Economista, uno de los idealizadores de la "nueva arquitectura financiera".

PALOSCHI, JONAS. Jefe del Sector Cultural y de Cooperación Educacional de la embajada brasileña en el Perú.

PARKINSON DE CASTRO, JUAN CARLOS. Coordinador General de Asuntos Económicos de América del Sur.

RAMÍREZ, KENNETH. Director del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales.

RAMOS, FELIPPE. Investigador de la misión del Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (IPEA) en Venezuela.

URBINA, ELVIS. Coordinador Nacional de Venezuela en el COSIPLAN.

Chile y la economía política del neoliberalismo real

La conciencia moral de Chile exige que la
verdad sea esclarecida y que se haga
justicia, en la medida de lo posible.
Patricio Aylwin en el Congreso Nacional,
21 de mayo de 1990

Mercado más Estado es igual a menos democracia.
Esa es la ecuación que rige el Chile actual.
Alberto Mayol, 2012

Introducción

Cuando el socialista Ricardo Lagos fue elegido presidente de Chile en el año 2000, hubo cierta expectativa de un giro progresista en el país —que, sin embargo, no se materializó—. Heredera de una sólida tradición izquierdista que data del siglo XIX, la historia contemporánea chilena está marcada por el golpe de Estado comandado por el general Augusto Pinochet, quien abortó la "vía chilena al socialismo" ensayada bajo el liderazgo de Salvador Allende (1970-1973). La dictadura modificó radicalmente al país en todas las esferas de la existencia, constituyendo una experiencia pionera de fundamentalismo neoliberal. Las limitaciones que marcaron la democratización a fines de la década de 1980 implicaron profundas continuidades, sintetizadas en la Constitución que rige hasta hoy. En este contexto, la alianza entre socialistas y democratacristianos, que dominó la política nacional desde entonces, se afirmó como garante del orden legado por la dictadura, que permanece inquebrantable. En los últimos años, sin embargo, el llamado "duopolio" comenzó a ser desafiado por la izquierda en las calles y en las urnas, explicitando las contradicciones y resistencias a esta encarnación de la utopía social neoliberal: el neoliberalismo real chileno.

Entre el Frente Popular y la vía chilena al socialismo

La trayectoria chilena entre la depresión de entreguerras y el golpe de 1973 está marcada por el nacional-desarrollismo y la estabilidad institucional. En la economía, prevaleció la premisa de que la industrialización nacional es necesaria para la soberanía, consagrada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cuyas oficinas se instalaron en Santiago. En la política, los presidentes chilenos se sucedieron según el orden constitucional entre 1932 y 1973, fenómeno único en América del Sur. A lo largo de una parte significativa del período, el Partido Comunista no estuvo en la ilegalidad y, así como los socialistas, compitió por la presidencia y ejerció ministerios, lo que llevó a una parte de la izquierda a corroborar el mito de la excepcionalidad democrática chilena (Álvarez, 2017).

Después de participar en los gobiernos del Frente Popular[1] entre 1938 y 1952, la izquierda fue derrotada por un estrecho margen en las elecciones presidenciales de 1958, teniendo como candidato al socialista Salvador Allende. Fue en esta coyuntura de crecimiento de la izquierda que se fundó, en 1957, la Democracia Cristiana Chilena (DC), presentándose como una alternativa al conservadurismo, con sensibilidad social. En las elecciones siguientes, este partido recibía apoyo y financiamiento de los Estados Unidos en el contexto de la Alianza para el Progreso. Ante el desprestigio de la derecha entonces al comando del país, el democratacristiano Eduardo Frei recibió un apoyo conservador masivo en las elecciones presidenciales de 1964. Pero, para derrotar a la izquierda, acabó absorbiendo en su discurso las banderas y la retórica de ese espectro político, incluso la revolución. La nacionalización del cobre y la reforma agraria fueron incorporadas a su programa, cuyo espíritu se condensó en el lema de la campaña: "Revolución en Libertad".

1 La política soviética incitó a los partidos comunistas a aliarse con las fuerzas antifascistas en la década de 1930, aunque en el campo burgués. Los frentes populares alcanzaron la presidencia en España, Francia y Chile. En este último país, la presidencia fue ejercida por un miembro del Partido Radical durante tres mandatos consecutivos.

En la práctica, el gobierno democratacristiano se enfrentó a las contradicciones inherentes al reformismo conservador. La "chilenización" del cobre consistió en crear sociedades mixtas entre el Estado y las empresas estadounidenses por medio de la compra del 51% de las acciones de sus subsidiarias chilenas. A menudo, las indemnizaciones pagadas superaron el valor correspondiente declarado por las empresas, que en varios casos mantuvieron el control de la gestión, de modo que el potencial de conflicto de esta política fue sustancialmente mitigado (Elgueta y Chelén, 1984: 247). Diferente fue el caso de la reforma agraria, que expropió 3,5 millones de hectáreas correspondientes a 1.400 propiedades, en un proceso que sería acelerado por Allende. La ley de reforma agraria también estimuló la sindicalización campesina, lo que agudizó la hostilidad de los conservadores, al tiempo que multiplicó las huelgas y las ocupaciones de tierra en los años siguientes, desencadenando dinámicas que ni el futuro gobierno de Allende controlaría (Chonchol, 2017).

El saldo de la "revolución en la libertad" desagradó a la derecha y a la izquierda, contribuyendo a polarizar la política en el país. Un integralista brasileño captó la alarma entre los conservadores, denunciando a Frei como el "Kerensky" chileno[2]: aquel que, con la intención de apaciguar las tensiones sociales por medio de la reforma, abre camino para la revolución (Silveira, 1967). En el polo opuesto, el cantante Víctor Jara satirizaba el medio-término encarnado por la democraciacristiana en la canción "Ni Chicha, ni Limoná" —ni chicha, una bebida alcohólica, ni limonada, un sabroso refresco—, anunciando que "la cosa va pa'delante y no piensa recular".

Fue en este contexto que Salvador Allende se elegió presidente como candidato de la Unidad Popular, coalición compuesta principalmente por socialistas, comunistas y por la disidencia demócratacristiana bautizada como Movimiento de Acción Popular Unitaria

2 Alexander Fiodorovitch Kerensky (1881-1970) fue un socialista moderado y jefe del segundo gobierno provisional de Rusia entre julio y octubre de 1917, constituido después de la Revolución de febrero de 1917 [n.e.].

(MAPU) en 1970. Era la cuarta vez que Allende disputaba la presidencia, siempre afiliado al Partido Socialista (PS), reinvindicando el marxismo y la revolución.

En contraste con la vía cubana, que tuvo como punto de partida la lucha armada y la destrucción del Estado burgués, la Unidad Popular pretendió construir el socialismo a partir de la institucionalidad vigente. Este camino que partía de la reforma para llegar a la revolución fue idealizado como la "vía chilena" al socialismo, en un proceso que atrajo la atención mundial.

A pesar del horizonte socialista, la arquitectura económica del proyecto de la Unidad Popular revelaba una fuerte inspiración cepalina. Un aspecto clave era retomar la soberanía sobre el cobre, que representaba más del 80% de las exportaciones del país. En lo que se conoció como el "día de la dignidad nacional", el gobierno nacionalizó el sector sin indemnizaciones. El hecho de que la medida haya sido aprobada por unanimidad en el Congreso revela la popularidad de la causa. Esta política se extendió al hierro, al salitre y al carbón, ampliando la nacionalización de los recursos naturales.

En los otros segmentos de la economía, el programa preveía tres áreas: privada, mixta y social. Esta última fue formada inicialmente por 91 empresas básicas, mientras que la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) estimuló a lo largo del gobierno a más de 500 empresas bajo la égida del Estado (Sader, 1992). Los bancos fueron nacionalizados mediante la compra de acciones, así como el comercio exterior. El objetivo fundamental era viabilizar el control de la economía por el Estado.

Otro pilar del programa fue la reforma agraria, consumada con la expropiación de unas 4.400 propiedades que superaban los 6,4 millones de hectáreas. A lo largo de 34 meses, el gobierno de la Unidad Popular acabó con la hacienda, el "crisol de la cultura chilena" (Bengoa, 2009: 105). Se extirpó el poder político, social y económico asociado con el latifundio, dejando solo a las empresas vitivinícolas (Chonchol, 2017).

A nivel internacional, la Unidad Popular se guió por el no alineamiento, condenando la subordinación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a los Estados Unidos, mientras se solidarizaba con Cuba y denunciaba la injerencia de empresas estadounidenses en la política interna (Carlos, Freitas y Vettori, 1970). Los soviéticos poco ayudaron a la Unidad Popular y cuando un Allende asfixiado por problemas económicos visitó el país en 1972, Leonid Brezhnev le negó la solicitud de crédito (Álvarez, 2017).

Como era de esperar, el proyecto de la Unidad Popular enfrentó una activa oposición congresal, donde el gobierno no tenía la mayoría: decretos fueron sistemáticamente bloqueados, acusaciones fueron inventadas y ministros destituidos. La democraciacristiana emergió como el fiel de la balanza, ya que su apoyo garantizaría una mayoría para el gobierno o para la oposición. En la práctica, su actuación fue decisiva para frustrar los proyectos del gobierno —y, cuando llegó la hora, para derrocarlo.

En el ámbito económico, los resultados positivos del comienzo del mandato —cuando la economía creció, los salarios aumentaron y el desempleo cayó— se vieron erosionados por la conjunción entre la caída del precio del cobre, la inflación y la escasez de productos básicos, potencializados por el boicot doméstico e internacional. La Unidad Popular se enfrentó a una huelga en la mina de cobre más grande del país, *lockouts* patronales y un paro de transportes, con el apoyo activo de Washington.

Esta coyuntura polarizó a la sociedad chilena, que vio marchas dirigidas por señoras de clase media golpeando ollas vacías en alusión a la escasez, seguidas de manifestaciones multitudinarias de apoyo al gobierno. Para combatir el mercado ilegal, se crearon las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP), administradas por el pueblo. El *lockout* patronal, a su vez, condujo a la ocupación de fábricas y a la gestión de la producción por los trabajadores, organizados en cordones industriales. En el campo, la presión popular aceleró la reforma agraria, respaldada por el Ejército. En conjunto, la radicalización social abrió grietas al fortalecimiento del poder popular.

A pesar del desgaste social y económico intensificado por una media hostil, los votos de la Unidad Popular crecieron en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, frustrando la expectativa de una salida institucional. En este momento, quedó claro que la oposición necesitaría recurrir al golpe militar para derrocar al gobierno, lo que ocurrió el fatídico 11 de septiembre de 1973 bajo el liderazgo del general Augusto Pinochet, con el notorio apoyo de Estados Unidos (Kornbluh, 2003). Como dijo el entonces secretario de Estado, Henry Kissinger: "Yo no veo por qué presenciar parado a un país volverse comunista, a causa de la irresponsabilidad de su pueblo. Este tema es demasiado importante para dejar que los electores chilenos decidan por sí mismos" (citado en Peck, 2010: 43).

Los protagonistas sacaron diferentes lecciones de este trágico descenlace. Militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) recriminaron el legalismo del gobierno, que no armó al pueblo: "Una revolución tiene que saber defenderse", evaluó un activista (Mundaca, 2017). Por otro lado, personas cercanas al presidente, como Jacques Chonchol y Joan Garcés, opinaron que el gobierno había comprado demasiados pleitos al enfrentar simultáneamente a la oposición interna y a la hostilidad de los Estados Unidos. En particular, la nacionalización del cobre sin indemnización y la dificultad de concertar con la democracia cristiana fueron objeto de reconsideración (Garcés, 1993; Chonchol, 2017).

La democracia cristiana también hizo su propia revisión de conciencia. A pesar de las excepciones personales, el partido creó obstáculos a la gestión de la Unidad Popular hasta inclinarse al golpismo, con la expectativa de regresar a la presidencia. Esto de hecho ocurrió, pero solo diecisiete años después. En 1990 los revisionismos convergieron y la democracia cristiana volvió al Palacio de La Moneda de la mano de los socialistas. Sin embargo, en este medio tiempo, el país dejado por la Unidad Popular había sido desfigurado.

De la dictadura a la democracia protegida

La Junta Militar de Gobierno comandada por Pinochet (1973-1990) modificó radicalmente la sociedad chilena. La caravana de la muerte, en la que militares recorrieron el país asesinando a militantes previamente listados; la detención y tortura a gran escala, convirtiendo el principal estadio de fútbol de Santiago en una prisión; campos clandestinos de tortura y asesinato de presos políticos; y la Operación Cóndor, una articulación entre las dictaduras del Cono Sur que internacionalizó la represión, ideada por el jefe de la policía secreta del país, Manuel Contreras, constituyen aspectos del terrorismo de Estado que destruyó las referencias políticas y económicas asociadas al nacional-desarrollismo prevalecientes desde la década de 1930. En este proceso, se generaron condiciones objetivas y subjetivas para una refundación del país, caracterizada por un fundamentalismo neoliberal pionero en el mundo. La osadía del socialismo democrático fue castigada con su opuesto, descrito como "capitalismo de choque" (Klein, 2008).

Sin embargo, el neoliberalismo chileno debe ser entendido como un paradigma —un conjunto de valores o una "razón de mundo"—, antes que como un recetario específico, toda vez que convivió con políticas monetarias y cambiarias bastante diferentes. En particular, la grave crisis que estalló en el país entre 1981 y 1982 provocó iniciativas anticíclicas a contramano de las políticas impuestas hasta entonces, identificadas con la apertura comercial y financiera.

El diagnóstico subyacente al proyecto neoliberal chileno entendió que el país es pequeño —17 millones de personas en 2017— pero que posee una cantidad excepcional de recursos naturales en proporción a su población. De ahí vienen dos conclusiones: es inviable desarrollar una industria nacional basada en este pequeño mercado interno, pero si el país explora sus ventajas comparativas puede obtener, por medio de las exportaciones, las divisas necesarias para importar lo que necesita. En pocas palabras, ¿para qué fabricar lo que es posible importar?

El neoliberalismo chileno supone un Estado fuerte, que aplica una carga tributaria alta (regresiva) y perfecciona instrumentos de

intervención política y económica, aunque en una dirección liberal, según la óptica de las ventajas comparativas. Desde la dictadura fueron impulsados sectores exportadores alternativos a la minería, que también fue estimulada. El vino, el salmón, las frutas y las maderas están entre los segmentos respaldados por una agresiva política de fomento a las exportaciones, llevada a cabo desde 1974 por ProChile, órgano que hace parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El sustrato material de diversas modalidades de exportación primaria fue el desarrollo capitalista del campo, que se basó en la reversión de la reforma agraria realizada en los gobiernos anteriores. Sin embargo, la contrarreforma agraria pinochetista no tenía como objetivo restituir las tierras a los antiguos propietarios, sino crear las condiciones para el florecimiento de un nuevo empresariado agrícola orientado al mercado externo. Después de la dictadura, el campo comenzó a producir menos alimentos y más divisas.

El otro lado de esta política fue una acelerada desindustrialización. Entre 1974 y 1983, el valor de la producción del sector industrial chileno cayó en un 25%, mientras más de cinco mil establecimientos fueron cerrados, implicando la pérdida de casi 150 mil empleos (Faletto, 2007: 55). Militares asumieron la dirección de empresas estatales, siendo que muchas de ellas fueron privatizadas. La dictadura mantuvo la gestión del gobierno anterior sobre las minas nacionalizadas, reunidas en la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), que hasta hoy dirige el 10% de sus ganancias a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, las condiciones para la explotación extranjera fueron reestablecidas y la participación estatal en la minería disminuyó desde entonces.

El mundo del trabajo, desbaratado por la combinación entre terrorismo y desindustrialización, vio su marco legal completamente modificado. En 1978, la dictadura derogó la ley que prohibía el despido sin causa justa. También fueron autorizados los contratos de trabajo temporales y la flexibilización de las jornadas, según la conveniencia del empleador. Al año siguiente, se promulgó un Plan Laboral que refundó la legislación sindical y consagró la desregulación del mercado

de trabajo. Fueron prohibidas la negociación colectiva y la huelga en los servicios públicos, se permitió la contratación de trabajadores para reemplazar a los huelguistas, se prohibió la formación de sindicatos por categoría (solo por empresa), se alentó la negociación individual y se abolió la justicia laboral (considerada como conflictos entre individuos), entre otras disposiciones vigentes hasta el día de hoy. En resumen, se estableció un "modelo neoliberal sin obstáculos democráticos", fundado en una cultura política en la que "hablar de una huelga es como hablar de sexo en un convento de monjas" (Kremerman, 2017)[3].

Fue en este mismo contexto que la dictadura sometió a plebiscito la Constitución que elaboró —y que también continúa vigente—. Diseñada bajo el siniestro liderazgo de Jaime Guzmán, la Constitución proporcionó el marco legal para una profunda mercantilización de los derechos sociales, que en muchos aspectos se implementó y perfeccionó en los años siguientes, incluso después del final de la dictadura.

A pesar de la propaganda en contrario, la liberalización económica impuesta por la dictadura llevó al país al borde del colapso. En 1982, Chile fue uno de los países latinoamericanos más afectados por la crisis de la deuda, enfrentando una caída del 14,1% en el PIB, en el contexto de quiebras bancarias, empresas descapitalizadas y alto desempleo. El impacto de la crisis evidenció los riesgos inherentes al neoliberalismo radical practicado hasta entonces, lo que llevó a una revisión en la dirección pragmática. Por ejemplo, los bancos fueron nacionalizados, o salvados, en una maniobra concomitante con la privatización del sistema de pensiones. A pesar del creciente cuestionamiento que sufrió, la dictadura logró recuperar altos niveles de crecimiento desde 1984, lo que le dio aliento para otra temporada en el poder.

---

3 Las reformas laborales y de seguridad social fueron propuestas a la Junta Militar por José Piñera, hermano de Sebastián Piñera, un rico hombre de negocios que se convertiría en presidente de Chile entre 2010 y 2014, siendo elegido para un segundo mandato en 2017. La riqueza chilena se concentra en siete familias, incluida la de Piñera.

En este momento, parte de la izquierda reanudó la lucha armada, mientras reaparecían las protestas populares contra el régimen, que reaccionó con violencia. Entre 1983 y 1986, hubo continuas Jornadas de Protesta Nacional convocadas por sindicalistas, en las que decenas fueron asesinados. En 1986, un intento fallido de matar a Pinochet, llevado a cabo por el grupo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), sirvió de pretexto para sofocar el disenso. Los límites de la acción armada incidirían en la inflexión de parte de la oposición a la dictadura, que en los años siguientes concentró esfuerzos para derrocarla a través del camino institucional (Muñoz, 2008).

Con la intención de evitar una explosión popular, comenzaron las negociaciones de la dictadura con la Democracia Cristiana y sectores del Partido Socialista, que finalmente se unirían en la coalición llamada Concertación de Partidos por la Democracia[4]. Los Estados Unidos, la socialdemocracia internacional y la Iglesia católica estuvieron activos en el proceso, en un contexto en el que la legitimidad de la dictadura declinaba con el ocaso de la Guerra Fría. El proceso culminó en un referéndum en 1988, en el que se consultó la voluntad popular de mantener a Pinochet en el poder hasta 1997. En una decisión cuestionada, la oposición optó por una campaña gobernada por el *marketing* electoral, proyectando un Chile en el que "la alegría ya viene", en lugar de una crítica al legado de la dictadura. El argumento principal de esta estrategia, que resultó exitosa, es que una población traumatizada no quería poner el dedo en las heridas abiertas. Por otro lado, las condiciones de la campaña y la victoria misma limitaron el alcance de la transición que había comenzado.

Comprensiblemente, Pinochet se sorprendió con la derrota, y solo la aceptó bajo presión de colegas militares (Muñoz, 2008). Incluso Estados Unidos estaba a favor del "no" a la continuidad de la dictadura. Sin embargo, durante el año y medio que pasó hasta que

4 El PS se dividió desde 1979 en dos posiciones, lideradas respectivamente por Clodomiro Almeyda, que defendía una política de unidad de izquierda (PS-PC), y Carlos Altamirano, que favorecía una identidad socialdemócrata y un acercamiento con la DC.

salió de La Moneda, el dictador refinó las estructuras de una transición controlada por los intereses que la sostuvieron. Un aspecto clave en las negociaciones fue la derogación de los puntos más aberrantes de la Constitución, como la prohibición de partidos que hablaban de la lucha de clases o la atribución presidencial de disolver la Cámara de Representantes, a cambio de quórums de hasta dos tercios para reformar la propia Constitución (Grez, 2017). Sin embargo, en la práctica, los quórums supramayoritarios se hicieron inviables por el famoso sistema binominal[5], que consolidó el duopolio entre la Concertación y la derecha en la política chilena posterior a la dictadura, al tiempo que limitó la participación de las fuerzas minoritarias.

El resultado de esta arquitectura es que, aunque la coalición estructurada en torno a la alianza DC y PS (la Concertación y luego Nueva Mayoría, desde la adhesión del PC en 2013), ganaría todas las elecciones presidenciales posteriores, excepto en 2010, la Constitución es la misma. Hubo más de doscientas reformas menores, pero ninguna que se opusiera frontalmente a la derecha pinochetista, alterando su esencia. Desde entonces, el discurso de la Concertación es que la derecha ha bloqueado las reformas. Sin embargo, durante estos años hubo momentos en que la Concertación tuvo una mayoría para cambiarla y no lo hizo, lo que respalda la lectura de Sergio Grez, para quien esta arquitectura fue aceptada por estos partidos precisamente porque proporciona un pretexto para no avanzar las reformas, disfrazando así su acomodo al poder (Grez, 2017).

¿Cuál es la esencia de esta Constitución? El legado de la dictadura se cristalizó en la institucionalización de un neoliberalismo conservador. La noción de derechos sociales está subsumida por la garantía de libertad económica, lo que implica cambiar el significado de la

5 Sistema electoral que prevé circunscripciones en las que se eligen dos candidatos. El voto se calcula en listas, siendo elegido el más votado en cada lista, excepto si uno de ellos obtuviera el doble del segundo. En la práctica, la Concertación y la derecha a menudo tenían las dos listas más votadas, pero rara vez duplicaban el voto del rival. Por otro lado, los candidatos con los votos más altos individualmente, pero que aparecen en listas que terminan en tercer lugar, no son elegidos. El resultado es que las dos coaliciones comparten la legislatura.

intervención estatal. Entendido como un "estado subsidiario" (Ruiz y Boccardo, 2015), su función es asumir las atribuciones sociales que no son del interés de la empresa privada. Por un lado, garantiza la acción sin restricciones de la empresa privada, vista como un soporte de la libertad individual; por otro, ofrece servicios de salud, seguridad social y educación a los pobres, a menudo a través de políticas focalizadas. La idea por detrás de la privatización de las políticas sociales no era dejar de atender al individuo, sino dejarlo decidir.

En línea con esta perspectiva, el derecho a la educación está subordinado a la libertad de educación. El texto constitucional entiende que los padres tienen el "deber de educar a sus hijos" y para este propósito, tienen "el derecho de elegir el establecimiento educativo para sus hijos". Del mismo modo, la libertad de enseñanza significa el "derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educativos". En el plano de la salud, se registra que "toda persona tendrá derecho a elegir el sistema de salud en el que desea acogerse, ya sea estatal o privado" (Constitución de Chile, 1980). Sin embargo, esta opción está condicionada por la capacidad de pago: el derecho se convierte en una mercancía y la ciudadanía se ejerce como consumo. En la práctica, los derechos sociales se transformaron en nichos protegidos y subsidiados por el Estado, que se convirtió en un pilar fundamental del capitalismo chileno.

Con respecto al trabajo, la Constitución establece que "toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección de trabajo con una remuneración justa" (Constitución de Chile, 1980). Sin embargo, a la luz del Código Laboral de 1979, que extendió la organización de los trabajadores y flexibilizó los contratos, la "libre elección" y el "salario justo" se convirtieron en preceptos ejercidos unilateralmente por el empleador. Por lo tanto, la Constitución chilena consagra la igualdad entre los desiguales. El poder real del trabajador, que depende de la organización colectiva y la defensa de los derechos, se derrumba. Transformado en un individuo cuyo derecho supremo es la libertad de consumo, el trabajador está impelido a individualizar

también sus alternativas de vida, lo que tiene efectos notables en la sociedad, en la cultura y en la política chilenas.

La Constitución chilena también mantuvo la autonomía del Banco Central y la existencia del Tribunal Constitucional, que tiene el poder de derogar una ley aprobada en el parlamento o exigir un quórum supramayoritario para asuntos imprevistos, así como el régimen laboral antipopular; hizo que la empresa estatal fuera inviable (requiere un quórum supramayoritario); ha limitado la soberanía nacional sobre la minería, la silvicultura y los recursos hídricos, que en Chile han sido privatizados; y criminalizó el aborto, que era legal para fines terapéuticos. Finalmente, la Constitución reforzó la rigidez política al instituir figuras como senadores designados y de por vida, al mismo tiempo que no previo una ley de iniciativa popular o plebiscito, sellando el carácter irreformable del neoliberalismo chileno desde su propia institucionalidad (Ramírez, 2017: 107).

Los límites de esta "democracia protegida", diseñada por Guzmán, se ilustran con los privilegios de las Fuerzas Armadas que continúan hasta nuestros días. No hubo intervención en los planes de estudio modulados por doctrinas reaccionarias; los lazos se mantuvieron con la Escuela de las Américas; se glorifican los íconos de la dictadura: la biblioteca de la Academia Militar se llama Augusto Pinochet Ugarte, mientras que una estatua del Almirante José Toríbio Merino[6] se inauguró en Valparaíso bajo la presidencia de Ricardo Lagos (2000-2006), cuando la ex presa política Michelle Bachelet fue ministra de Defensa; no hay meritocracia interna; se conservaron los privilegios de carrera, se preservó a los militares de la seguridad social privada y el 10% de las exportaciones de CODELCO continuaron siendo destinadas a la corporación: según la ley, cuyo texto era secreto hasta 2016, esta

6 Arquitecto jefe del golpe de 1973, Toríbio Merino definió a los comunistas en las siguientes palabras, dadas en 1986: "Hay dos tipos de seres humanos: los que yo llamo humanos y los otros humanoides. Los humanoides pertenecen al Partido Comunista". En 1993, se refirió a los bolivianos: "Son camélidos andinos metamorfoseados que han aprendido a hablar pero no a pensar".

cantidad debe ser complementada por la Unión si es inferior a 180 millones de dólares. Emblemático de la doble restricción, militar y civil, legada por la dictadura, Pinochet siguió siendo jefe de las Fuerzas Armadas hasta 1998, cuando fue nombrado senador vitalicio: "En el amanecer de la democracia tutelada, el dictador podía pasearse a plena luz del día, a la vista de todo Chile, sabiéndose intocable, y el resto [de la población], sabiéndose en constante amenaza" (Alvarado y Roca, 2017: 26).

Economía política de la Concertación

a) La Concertación en el poder

Las elecciones de 1989, después de la victoria del "no" fueron ganadas por el democratacristiano Patricio Aylwin. Así se inauguró una secuencia de gobiernos de la Concertación que, a partir de la victoria de Ricardo Lagos, en 2000, alternó a los socialistas en la Presidencia de la República.

En un primer momento, las concesiones al legado de la dictadura fueron justificadas en favor de la estabilidad política, edulcoradas como "capacidad de diálogo" y de "generar consenso". De hecho, la amenaza militar no era fantasía. Los correligionarios de Pinochet ensayaron dejar el cuartel militar en varios momentos y así ahogaron el escándalo de corrupción conocido como los pinocheques que involucraban al hijo del general en 1993. Sin embargo, con el tiempo, hubo una adaptación notable a las estructuras heredadas. El resultado fue que los gobiernos elegidos finalmente legitimaron un orden de origen espurio, modelado bajo el terrorismo de Estado y consolidado bajo el chantaje de las armas. En particular, la capitulación de los socialistas, que otrora habían elegido a Allende como presidente, redujo el horizonte de la política de izquierda. Esta situación se agravó porque la gestión del neoliberalismo no era estática e implicó nuevas ingenierías de desposesión, mercantilización y financiarización de los derechos, convergiendo para

hacer de Chile una experiencia avanzada de "neoliberalismo real". Si los soviéticos justificaron su distanciamiento del ideal comunista con el sofisma de un "socialismo real", la realidad chilena pone en jaque la idealización de una sociedad en la que todas las esferas se rigen por la lógica mercantil.

En el plano ideológico, al asumir la gestión y actualización del legado de la dictadura, la Concertación respaldó el discurso de resonancia internacional que disocia el terrorismo de Estado y el neoliberalismo chilenos, a contramano de los análisis que explicitan los vínculos entre ellos (Klein, 2008). Según esta ideología, la dictadura exageró en la represión, pero acertó en la economía. La Concertación emergió entonces como la alternativa ideal, al mantener las determinaciones económicas del modelo, pero prescindiendo del terror. Implementado por socialistas, que otrora perturbaron el orden mundial con una propuesta de "socialismo con vino tinto y empanadas", este arreglo mereció ser aplaudido, tanto que fue premiado con un lugar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Ni siquiera Josef Stalin provocaría una retractación más elocuente.

En este giro incidieron diversos vectores, entre el trauma de la represión, el eurocomunismo y la seducción del poder, así como el debate sobre la experiencia de la Unidad Popular, sintetizada en la polémica entre el fracaso o la derrota, lo que supone una apreciación sobre la viabilidad histórica de esta vía[7]. De modo evidente, la alianza con la DC que desembocó en la Concertación reflejó la posición de que la Unidad Popular debería haber sido más flexible en la relación con otras fuerzas políticas en el pasado.

Más allá de estas consideraciones políticas, hubo también una genuina adhesión de la Concertación a la vía chilena al neoliberalismo, interpretada como una modalidad exitosa de inserción en la economía globalizada. En esta perspectiva, correspondió a la Concertación

7 "Fracaso" implica la inviabilidad estratégica del camino intentado, mientras que "derrota" implica conceptos erróneos tácticos.

cultivar un "neoliberalismo con rostro humano", que en sus expresiones ideológicas más delirantes se consideró como "parte de la (pre) historia del socialismo chileno" (Atria, 2013: 16).

Esta convicción fue visible desde los primeros momentos de la Concertación. Andrés Zaldívar, presidente de la DC durante la dictadura, argumentó que la "herencia positiva" de Pinochet "fue la transformación económica", mientras un asesor del ministro de Hacienda de la gestión Aylwin, declaró que "la imagen del éxito económico del gobierno militar" fue "asumida con mucha fuerza por los grupos empresariales", lo que acabó siendo determinante para las definiciones estratégicas del nuevo gobierno (Fazio y Parada, 2010: 7-8).

Entre el convencimiento y la adaptación, el gobierno de Aylwin estableció un patrón que fue seguido por los gobiernos posteriores: nada de lo que hizo la dictadura fue deconstruido y lo que se construyó se asentó sobre esa base. El espíritu del porvenir fue sintetizado en el mensaje de apertura del Congreso en abril de 1990, cuando el presidente afirmó, en relación a los crímenes de la dictadura, que la verdad y la justicia serían hechas "en la medida de lo posible".

En esta tónica, las privatizaciones efectuadas después del plebiscito de 1988 no fueron revisadas, desconociendo el acuerdo público asumido. Por el contrario, se reanudaron al final de su gobierno. Durante este mandato, la inversión extranjera alcanzó niveles inéditos, superando entre 1990 y 1993 el total de la inversión captada durante toda la dictadura de Pinochet. Estos datos indican que, de manera similar al apartheid sudafricano, la dictadura se había vuelto económicamente disfuncional debido al aislamiento al que condenó al país. Impulsadas por el capital internacional, las exportaciones mineras privadas superaron a las del sector estatal por primera vez en 1994 (Fazio y Parada, 2010: 17).

La Concertación convirtió la necesidad política en virtud económica. La adaptación se convirtió en estabilidad, valorizando a Chile como una plataforma de inversiones en la región. En palabras de un exministro, el país desempeñaría el papel de "portaaviones" porque

tiene "estabilidad política, recursos naturales y mano de obra altamente especializada" (Fazio y Parada, 2010: 27). Esta imagen siempre fue reforzada por un cuidadoso *marketing* del éxito económico, para el consumo doméstico e internacional.

Altos niveles de inversión extranjera estimularon el crecimiento económico. Mientras tanto, se aceleró la desindustrialización del país, que se convirtió en una economía de servicios. En medio de este movimiento, se generaron múltiples opciones de crédito y endeudamiento para las familias. Como señaló Tomás Moulian, la masificación del crédito fue el otro lado del mercado de trabajo flexible. En términos objetivos, el aumento de la demanda en la década de 1990 no fue impulsado por los salarios sino por el crédito al consumo, cuyo crecimiento siempre fue más acelerado que el de la economía misma. En el plano subjetivo, la masificación del "ciudadano *credit card*" hizo "más vivible" el desamparo de una existencia mercantilizada, a través del "consumo como pasión" (Moulian, 1997).

Sin embargo, el sociólogo recuerda que el crédito tiene dos caras, como el acceso al placer y como dispositivo de dominación: "El crédito permite la consumación del deseo de consumo sobre la base de un disciplinamiento a posteriori. Es la puerta de entrada al paraíso del consumo a través del purgatorio del endeudamiento" (Moulian, 1997: 89). El crédito y la disciplina social, el consumo y el conformismo político van de la mano en la constitución de la subjetividad del Chile contemporáneo, donde el colectivo es socavado por una razón individual absoluta. En la síntesis de Moulian: "El individuo-asalariado, no mediado por el sindicato, como el ideal de las relaciones de trabajo y el individuo-consumidor como lo real de las relaciones de consumo" (Moulian, 1997: 100).

Visto bajo el prisma de la alienación necesaria, el papel político de la Concertación parece congruente. Según el análisis de una líder estudiantil, el proyecto de la Concertación "pavimentó un camino de distanciamiento entre la sociedad y la política fundamentado en la estabilidad, en la tensión dictadura-democracia, que no solo desmovilizó,

sino que posibilitó una cultura política desanclada de la sociedad" (Rojas, 2017: 130).

La investigación de la antropóloga Julia Paley ilumina la fuerza desmovilizadora de este proyecto. Al estudiar un movimiento de salud en la periferia de Santiago en 1985, Paley constató la pujanza de los lazos comunitarios que sustentaron esta reinvindicación popular, ignorada en ese momento por las autoridades de la dictadura. Años después, con el país ya bajo la democracia, ella observó en el mismo lugar un empeño del Estado para tecnificar las cuestiones sociales y agotar el protagonismo popular, cuya base comunitaria se había debilitado considerablemente. En este contexto, el gobierno recibió el liderazgo, pero afirmó no tener recursos. Y cuando el movimiento decidió salir a las calles, fue tachado como traidor por el oficialismo (Paley, 2001).

A pesar de los matices entre gobiernos, las determinaciones fundamentales de la economía política de la Concertación permanecieron intactas cuando, en 2000, el socialista Ricardo Lagos sucedió al democratacristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo del expresidente. En realidad, este gobierno profundizó algunos aspectos importantes del movimiento histórico en curso.

La expectativa de que un presidente socialista se aproximara al Mercosur, o de gobiernos identificados con la izquierda, elegidos durante el mandato de Lagos (2000-2006), se desvaneció. Sucedió justamente todo lo contrario, pues fue bajo el liderazgo de Lagos que Chile firmó tratados bilaterales de libre comercio con los Estados Unidos y con la Unión Europea. Estas acciones fueron seguidas por su sucesora, la socialista Michelle Bachelet (2006-2010). Actualmente Chile es uno de los países con mayor número de tratados de libre comercio en el mundo: más de sesenta (Silva Flores, 2017). Subyacente a esta falta de interés en la integración regional está la noción de que Chile se encuentra en otra etapa de su evolución económica y, por lo tanto, tendría objetivos distintos a los de otros países de la región.

Lagos también promovió una reforma constitucional que eliminó aspectos de lo que en Brasil llamaríamos como "escombro autoritario",

como la figura del senador vitalicio. No se tocaron otros elementos, como el sistema binominal, que estuvo en vigencia hasta 2015. A lo largo de este proceso, el presidente fue ampliamente criticado por firmar la Constitución heredada de la dictadura, una acción interpretada como una forma de legitimarla.

Otras actitudes controversiales del presidente socialista incluyeron su decisión personal de mantener en secreto el "Informe de la Tortura", el recurso a la ley antiterrorista (otro legado de la dictadura) para enfrentar la protesta mapuche y el intenso empeño de su gobierno en evitar que Pinochet fuese juzgado en Europa —donde estaba detenido desde 1998— con el polémico argumento de que debería ser juzgado por la justicia chilena (Muñoz, 2008). En el plano social, el gobierno de Lagos aceleró la financiarización de la educación superior al crear el Crédito con Aval del Estado (CAE), que será analizado más adelante. La afirmación posterior del presidente Sebastián Piñera (2010-2014) de que "la educación es un bien de consumo" debe mucho de su materialidad al mandato socialista, que fue notablemente popular entre los empresarios.

Su sucesora, Michelle Bachelet, aprobó una ley de responsabilidad fiscal en los primeros meses de su mandato, señalando que no pretendía realizar cualquier cambio en relación al gobierno anterior. En realidad, cuando el empresario Sebastián Piñera rompió la hegemonía de la Concertación en las siguientes elecciones, los senadores y diputados de esta bancada se unieron en el sentido de "velar para que [Piñera] no se distancie del camino de la responsabilidad fiscal". Cuando sintieron que esto ocurriría en 2012, circularon una carta pública haciendo "un llamado al gobierno de Sebastián Piñera para mantener la responsabilidad fiscal como un patrimonio de Chile que debemos resguardar"[8].

A pesar de algunos matices, las determinaciones de la economía política de los gobiernos de la Concertación no cambiaron

8 El documento está disponible en https://media.elmostrador.cl/2012/11/Preocupaci%C3%B3n-de-la-Oposici%C3%B3n-por-la-Responsabilidad-fiscal.pdf.

sustancialmente bajo Piñera, cuando la "derecha", en términos socialistas, asumió la presidencia. Las principales referencias de este régimen son el neoliberalismo institucionalizado, la constitución de la dictadura, la mercantilización de los derechos sociales, el Código del Trabajo, la economía de servicios, el Estado subsidiario, la financiarización de la sociedad, el ciudadano *credit card*, el endeudamiento, la sofisticación de los patrones de consumo, la desigualdad, los tratados de libre comercio, la apuesta por las ventajas comparativas, las exportaciones primarias, la represión de los disidentes y los mapuche y el duopolio político. Con la excepción de este último elemento, que actualmente está en crisis, y la represión de los pueblos nativos, que proviene de mucho antes, todo se origina en la dictadura. En Chile, los vínculos entre la dictadura y el neoliberalismo no tienen mediación, mientras que las continuidades entre la dictadura y la democracia fueron mediadas por la Concertación.

b) Macroeconomía

Es posible argumentar que esta economía política ha sido exitosa. Los datos macroeconómicos a menudo corroboran esta lectura. Entre el final de la dictadura en 1990 y 2007, Chile creció en promedio un 5,5% resultando en un aumento de 96% en el ingreso *per cápita* (Sunkel e Infante, 2009: 136). En los años siguientes hubo una desaceleración, pero aún así el país creció en promedio un 3,2% entre 1998 y 2009. Entre 1990 y 2009, la deuda pública, que era del 45% del PIB, disminuyó a 7%. El PIB *per cápita* del país superó a Argentina y solo es más bajo que el uruguayo, mientras que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) asigna a Chile el IDH más alto de América del Sur (PNUD, 2015).

Una mirada crítica apunta a una base productiva poco diversificada y sofisticada, sujeta a ciclos financieros y productivos cuya dinámica no puede ser controlada. El país continúa dependiente de la exportación primaria, particularmente de cobre. El peso de las exportaciones de este mineral en el PIB se duplicó en la primera década del siglo

XXI, cuando la minería representaba entre el 50% y el 60% del total exportado. Es un porcentaje inferior a los años de la Unidad Popular, cuando alcanzaba el 80%, pero, por otro lado, el sector minero ahora está dominado por el capital internacional. Se estima que, entre 1974 y 2004, hubo inversiones extranjeras de 19 mil millones de dólares en minería —87,5% de ellas bajo gobiernos de la Concertación—. Solo en 2006, las ganancias de los mineros alcanzaron los 20 mil millones (Galarce Villavicencio, 2012: 193). A modo de comparación, las exportaciones de cobre y subproductos equivalía al 70% de los ingresos del petróleo venezolano a fines de esa década, pero la población del país es menor: 17 millones contra 29 millones en el país caribeño (Galarce Villavicencio, 2012). Paralelamente, la presión por la intensificación de las exploraciones provocó conflictos socioambientales, algunos de ellos protagonizados por los mapuches.

Las demás exportaciones chilenas incluyen madera, frutas (uvas, manzanas, peras, frutos secos), vinos y pescado. Por lo tanto, aunque las estadísticas indican que el país exporta 4.800 artículos a noventa países, prevalece una pauta poco diversificada con artículos que incorporan un bajo valor agregado. China consume alrededor del 28% de las exportaciones del país y Estados Unidos, la mitad de ese porcentaje (Silva Flores, 2017).

El país sufrió en menor intensidad que otros exportadores primarios de la región los efectos de la crisis de 2008. El precio del cobre se desplomó en ese año, pero volvió a subir desde 2009. En general, el precio de este *commodity* es menos inestable que otros, como el petróleo. El *boom* de la construcción civil, impulsado por el terremoto de 2010, y la caída en el precio del petróleo ayudó a mitigar el impacto de la crisis internacional (Lara, 2017).

Sin embargo, en años recientes, reaparecieron señales críticas. La economía está estancada desde 2014, en un país donde el sistema financiero mueve un volumen de 3,5 a 4 veces mayor al de los circuitos productivos. Se observa una caída de la inversión, además de la expansión del endeudamiento empresarial e individual. Hay

indicios de deterioro en el comercio exterior. En el año 2016, las exportaciones se contrajeron en 4,8% y las importaciones en 5,9%. El cobre enfrenta la competencia peruana y los crecientes costos de exploración a grandes profundidades, a más de mil metros (Lara, 2017). Además, el ecosistema que sustenta la competitividad primaria se deterioró en los últimos años. En particular, la industria del salmón se ha visto bastante afectada por problemas de esta naturaleza (Bengoa, 2009).

Sin embargo, el eje alrededor del cual gravitan las movilizaciones masivas en Chile reciente no es económico. Varios analistas señalan que son las relaciones sociales en que se asienta esta macroeconomía que han sido cuestionadas: se trata de una reacción al neoliberalismo real. Es posible que esta división entre la dinámica económica y el proceso social exprese una brecha más profunda, descrita por Enzo Faletto como una "segmentación dual de la economía y la sociedad" (Faletto, 2007: 57). Bajo esta perspectiva, el malestar proviene de la constatación de que "el modelo económico fue enormemente eficiente en producir un aumento del capital y la inversión en Chile, pero no construyó sociedad" (Mayol, 2012: 172).

Para comprender la naturaleza de los problemas sociales del Chile contemporáneo, se examina a continuación la situación de la educación, particularmente de la educación superior, las relaciones laborales y la seguridad social. La mercantilización de la vida alcanzó otras dimensiones sociales, como la salud, ya que incluso el sector público paga la franquicia por el uso; la vivienda popular, que la dictadura convirtió en un negocio para empresas mediado por el crédito popular, inspiración para el programa brasileño Mi Casa Mi Vida y la cultura, que ni siquiera merece un ministerio y funciona por medio de proyectos y de la competencia permanente. Sin embargo, los temas seleccionados cubren el período de vida de un trabajador chileno, entre la educación, el trabajo y la jubilación, permitiendo una lectura transversal que entregará una apreciación de los dilemas actuales, más allá de la macroeconomía.

c) Educación

En el Chile contemporáneo la educación pública está en extinción, pues incluso la educación estatal opera bajo la lógica del negocio privado. El patrón de reproducción social en el que la familia produce, el Estado educa y el capital contrata, ya no opera en Chile, donde el estudiante es educado y disciplinado bajo la lógica del capital.

En la educación básica prevalece la política de cupones implementada por la dictadura en la década de 1980, que habría sido extraída de un capítulo del libro *Capitalismo y libertad* de Milton Friedman (Orellana, 2017). En este sistema, la gestión escolar fue municipalizada, las escuelas públicas y privadas reciben del Estado una subvención financiera por estudiante. La idea es que la competencia por financiamiento entre escuelas premiará a las más competentes, que atraerán a más estudiantes y como consecuencia, recibirán más dinero. La propuesta es congruente con el espíritu de la Constitución chilena, transformando la educación de un derecho civil en una responsabilidad individual.

En la práctica, el sistema generó distorsiones que se agravaron desde 1993, cuando el gobierno de la Concertación lanzó otras formas de financiamiento para complementar los exiguos fondos estatales —el llamado "copago"—, que en realidad es un cofinanciamiento. La regla según la cual, los colegios particulares que recibían aportes complementarios dejaban de recibir la subvención estatal fue modificada, lo que benefició a la educación privada en detrimento de la pública. De allí en adelante, más de ochocientas escuelas municipales fueron cerradas, mientras el número de colegios particulares se duplicó, cubriendo actualmente alrededor del 68% de la demanda (Salazar, 2014).

El sistema de subvención estatal por alumno tuvo dos consecuencias principales. Por un lado, condenó a las escuelas a una existencia incierta, toda vez que las direcciones administran costos fijos con recursos variables. El principal desafío de la dirección escolar pasó a ser la sobrevivencia. Para adaptarse a esta dinámica, también se precarizaron las condiciones de trabajo de los profesores. Por otro

lado, hubo una profunda segregación del sistema escolar chileno. Las escuelas gratuitas son frecuentadas por los más pobres, mientras que los colegios particulares subvencionados, discriminan por la ubicación y por el precio. Es un negocio en el que hay operadores masivos de bajo costo, pero también operadores exclusivos de alto costo: cerca del 7% de las matrículas corresponden a colegios particulares que no reciben subvención estatal y son los más caros (Orellana, 2017)[9].

Si en la educación básica predominan capitales medianos que cobran mensualidades modestas complementarias a la subvención estatal, la educación superior es un negocio dominado por cuatro grupos empresariales, que cubren más de la mitad de la demanda. El punto de inflexión para la expansión de la universidad privada fue la creación del CAE en el gobierno de Lagos.

Esta política tuvo éxito en su propósito declarado, que era ampliar la cobertura universitaria. La matrícula en educación superior casi se duplicó entre 2005 y 2016, de 663.679 a 1.247.135 alumnos. Sin embargo, el 70% de este aumento se concentró en veinte instituciones vinculadas a cuatro grandes grupos: Laureate International, Santo Tomás, Universidad Tecnológica de Chile (INACAP) y Pontificia Universidad Católica. Estas instituciones concentran el 67,1% de los alumnos que acceden al CAE y 67,7% de los recursos recibidos por todo el sistema de educación chileno por esta vía (Kremerman y Páez, 2016). En este mismo período, la matrícula en establecimientos estatales aumentó solo en 20.634 alumnos, y su participación total en el sistema se redujo a 15,4%. Recibiendo el presupuesto mínimo, obligado a cobrar mensualidades, consultoría y cursos, la universidad pública chilena se convirtió en un apéndice del sistema de educación superior.

Desde un punto de vista económico, el CAE resultó ser un gran negocio. El argumento original para su implementación era que el

9 El último gobierno de Bachelet promulgó una ley en noviembre de 2017 creando un nuevo sistema de educación pública que gradualmente sacará a los colegios públicos de la administración municipal para una nueva institucionalidad de la educación pública, con el intento de ampliar la gratuidad.

Estado tenía restricciones presupuestarias y necesitaba la ayuda de los bancos para financiar la popularización de la educación superior. Sin embargo, los bancos solo estuvieron de acuerdo con el negocio cuando el Estado se comprometió a subsidiarlos, comprando cada año el 25% de los créditos contratados con un sobreprecio del 6%. En realidad, desde entonces, el Estado compró el 48% de los créditos con un sobreprecio del 28% (Kremerman y Páez, 2016). En esta operación, el estudiante continúa con la deuda, pero el banco realiza su crédito y la universidad garantiza su negocio.

En poco tiempo, la paradoja del programa se hizo evidente. Ya en 2009, el Estado gastó con las deudas relacionadas a la educación superior más de lo que sería necesario para conceder becas integrales a los estudiantes sujetos a crédito: "El diseño había pasado de ineficiente a absurdo" (Mayol, 2012: 129). Si en su inicio, en 2006, el CAE representaba el 2,4% del presupuesto de educación superior, actualmente alcanza el 36,5%.

Entre los países de la OCDE, es en Chile donde el estudiante más gasta en educación en proporción a la inversión del Estado: cerca del 80% del gasto recae en las familias, mientras que el promedio en los países de la OCDE invierte el 30% (Brunner, 2008). El país tiene la educación universitaria más cara del mundo, según el ranking de esta misma organización. Como consecuencia, en marzo de 2010, se registraban alrededor de 270 mil jóvenes endeudados que, en 2016 superaron los 730 mil, mientras que los incumplimientos del sistema alcanzaban al 38,7% (Kremerman y Páez, 2016).

Desde el punto de vista cualitativo, el sistema es débil: no hay incentivos para la calidad, nadie es reprobado y no se produce conocimiento. El principal mecanismo de supervisión cualitativa —la llamada 'acreditación'— también está subordinada al imperativo mercantil, toda vez que se volvió requisito esencial para acceder al financiamiento garantizado por el Estado. Prevalecen las relaciones promiscuas entre las empresas y la tecnocracia que debería fiscalizarlas, tanto en este como en otros negocios en el país (González y Guzmán, 2012).

A pesar de la extravagancia del sistema, es posible aventurar que el engranaje se mantuvo porque produjo una ilusión de integración social. Muchos hijos de padres sin educación universitaria creían que "subían en la vida". Sin embargo, al ingresar al mercado laboral, se enfrentaron a una realidad que difícilmente resolvía las deudas y los sueños que sembraron en la facultad.

d) Relaciones laborales, pobreza y deuda

Quienes manejan datos macroeconómicos para ensalzar el desempeño chileno, rara vez analizan los números asociados con las condiciones de vida de quienes producen la riqueza. A continuación, se presentan algunos datos relacionados a las condiciones de trabajo, a la situación de pobreza y al endeudamiento de los trabajadores chilenos.

En noviembre de 2016, la línea de pobreza para un hogar promedio de cuatro personas en Chile se estimó en 410 mil pesos chilenos. Sin embargo, la mitad de los trabajadores ganaba menos de 350 mil pesos netos, lo que significa que no podían sacar a sus familias de la pobreza. Siete de cada diez trabajadores ganan menos de 500 mil pesos, y solo el 14,7% recibe más de 800 mil pesos netos. Entre las mujeres, el 84,5% de las que tienen un trabajo remunerado ganan menos de 650 mil pesos netos (Durán y Kremerman, 2017a).

Con el salario mínimo establecido en 270 mil pesos en 2017, los chilenos generalmente tienen dos empleos o una fuente alternativa de ingresos; el 79,6% de los empleados a tiempo completo tienen un ingreso inferior a 500 mil pesos, evidencia elocuente de la precaria formalidad del trabajo asalariado. A modo de comparación, Croacia, que en 2013 tenía un PIB *per cápita* más bajo que Chile, tenía un salario promedio casi 45% más alto, mientras que el promedio salarial ajustado por paridad del poder adquisitivo de Polonia, que tiene un PIB *per cápita* similar al de Chile, era un 47,3% más alto (Durán y Páez, 2015).

El crecimiento del trabajo asalariado en los últimos períodos está marcado por menos estabilidad y, por lo tanto, por una alta rotación:

tres de cada cuatro trabajadores están sometidos a relaciones flexibles, es decir tercerización, contrato parcial o trabajo sin contrato, y seis de cada diez empleos creados en los últimos cinco años son terciarizados. La precarización alcanza al servicio público, donde muchos tienen contratos temporales y emiten facturas para recibir. En una fuerza laboral estimada en ocho millones de personas, hay un millón de terciarizados, un millón de empleados sin contrato de trabajo, 700 mil subempleados y 620 mil desempleados (Kremerman, 2017).

A fines de 2016, el 53,3% de los empleados estaba amparado por el Código Laboral y el 5,9% por el Estatuto Administrativo del Sector Público. Esto significa que el 40,6% de los empleados no están asociados a ninguna legislación laboral y, por lo tanto, no tienen posibilidades de protegerse legalmente o ejercer los derechos colectivos de trabajo como la sindicalización o la huelga (Brega *et al*., 2017).

La tasa de sindicalización antes de la dictadura alcanzaba al 34%, pero actualmente es de alrededor del 11%. De modo general, el movimiento sindical perdió capacidad de influir en la política. Más allá de las razones estructurales apuntadas, la falta de independencia de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en relación a la Concertación y las acusaciones de fraude, sumadas al rechazo de incorporar nuevas configuraciones de trabajadores por temor a alterar las relaciones internas de poder, contribuyeron a su desprestigio (Aravena, 2016).

El debilitamiento de la organización de los trabajadores, la precariedad laboral y la pobreza conviven en Chile con una creciente desigualdad, a pesar de los esfuerzos estadísticos para disfrazarla: "Escondemos la desigualdad con medidas que no son sensibles a ella" (Mayol, 2012: 82). La diferencia de ingresos autónomos (salario más ingreso) entre el 5% más rico y el 5% más pobre de la población aumentó de 129 a 285 veces entre 1990 y 2013. El ingreso autónomo *per cápita* para el 0,01% más rico de la población es de 459.446.908 pesos por mes, mientras que el 50% de los chilenos recibe en promedio 138 mil pesos. El milésimo más rico de la sociedad chilena (17.800 personas) gana más que su mitad más pobre (Fundación Sol, 2014).

Una forma de aliviar la pobreza en el mundo laboral de Chile son los programas de transferencia condicionada de ingresos. El Estado ofrece diversas modalidades de asistencia focalizada, en la forma de subsidio familiar (similar a la Bolsa Familia), subsidio por retención escolar, pensión para los más pobres y subsidio al consumo de agua. El cálculo de pobreza realizado en el país incluye estas transferencias de ingreso y el alquiler imputado[10], lo que disimula el bajo nivel de los salarios. Según los cálculos de la Fundación Sol, cuando se ignoran estos dos elementos, la pobreza en Chile alcanza al 26,9% —y no el 11,7% (Durán y Kermerman, 2017b)—. En el caso de las personas mayores de sesenta, muchas de las cuales reciben la pensión básica solidaria y no pagan alquiler, esta cifra se quintuplicaría. Es necesario agregar que las investigaciones constatan una alta movilidad entre las situaciones de pobreza y miseria, lo que indica la precariedad de las condiciones de reproducción de la vida (Ruiz y Boccardo, 2015: 70).

La precariedad del empleo asalariado en Chile se ve agravada por el endeudamiento familiar. Se estima que el 80% de los adultos están endeudados. Aún más preocupante son los datos publicados en marzo de 2017 que indican que hay más de 4,3 millones de chilenos deudores, que poseen una deuda que no la pueden pagar. Esto significa que más de la mitad de los trabajadores, o uno de cada tres mayores de dieciocho años, tiene una deuda que no puede pagar. Entre los deudores, el 76,1% tiene un ingreso mensual inferior a los 500 mil pesos y el 21,2% tiene un ingreso menor a 225 mil pesos, mientras que el 41% de las deudas derivan de compras minoristas (*retail*), indicador de la presión cultural para el consumo (*XVI Informe de Deuda Morosa Primer Trimestre*, USS y EQUIFAX, 2017). En 2014, el 38% del gasto de un hogar chileno se destinaban a pagar obligaciones financieras mensuales (Kremerman y Páez, 2016).

10 Se considera ingreso el alquiler que sería pagado por quien vive en un inmueble propio o cedido.

Infelizmente, el drama asociado a la precariedad laboral no se alivia con la jubilación en Chile.

e) Administradoras de fondos de pensiones

El sistema de pensiones chileno se privatizó a principios de los años ochenta. Las contribuciones seguían siendo obligatorias, creando una especie de impuesto no estatal del 10% sobre el salario, mientras los empleadores estaban exentos de contribuir. Este ahorro obligatorio ahora es administrado como una inversión financiera por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Para los pensionistas, esto significa que la jubilación se transformó en un producto financiero en el cual es obligado a invertir. Para el capital, este ahorro obligatorio se convirtió en una fuente de inversión para que los grandes grupos económicos se capitalicen, dinamizando el mercado de capitales del país. Según el representante del movimiento No + AFP, este fue el objetivo principal de la reforma, implementada en el contexto de la crisis que condujo a la intervención de la dictadura en los bancos chilenos (Guzmán, 2017).

Desde este punto de vista, el engranaje fue un éxito. Según un informe de la Superintendencia de Pensiones (2016), estas operadoras administraban en 2016, 112,6 trillones de pesos (cerca de 172 mil millones de dólares), lo que equivale al 70% del PIB chileno, una cifra que sería mayor si no fuese por la crisis en este momento. Es un monto muy superior a las principales fortunas del país, que también se benefician de las inversiones de las AFP: Luksic (10,1 mil millones de dólares), Paulmann (3,7 mil millones de dólares), Piñera (2,5 mil millones de dólares) y Matte (2,3 mil millones de dólares). El primero de estos grupos, por ejemplo, recibió inversiones de 3,4 mil millones de dólares en 2016. La fuerza política de los fondos corresponde a su poder económico. Desde la dictadura, las puertas giratorias entre el gobierno y las AFP son notorias. Al menos doce ministros de Pinochet se volvieron directores de estos fondos, una práctica que no ha cambiado bajo la Concertación (Matamala, 2017).

Las AFP se convirtieron en el motor dinámico del mercado de capitales chilenos desde su creación, invirtiendo en activos financieros y productivos en el país y en el exterior. Originalmente había 21 fondos, pero en 2017 el mercado estaba concentrado en seis operadores. Además del aporte obligatorio, el asalariado paga una comisión mensual de alrededor del 1,9%, que puede variar según el perfil de riesgo entre cinco modalidades disponibles. En resumen, el trabajador chileno está obligado por ley a entregar parte de su salario para que seis empresas especulen en el mercado financiero. En Chile, el trabajador sostiene el mercado de capitales.

Si el modelo es exitoso para el mercado de capitales, no se puede decir lo mismo desde el punto de vista de la jubilación de los contribuyentes. Subordinado a una dinámica financiera que no controla, el trabajador tiene la seguridad de cuánto paga, pero no de cuánto recibirá.

En la práctica, prevalecen pésimas pensiones en relación al ingreso anterior. En 2016, el promedio nacional de pensiones fue de 207.409 pesos por mes, menos del salario mínimo de 270 mil pesos. El Estado subsidiario complementa las pensiones por debajo de 150 mil pesos, proporcionando 80 mil pesos mensuales. La precariedad y la inestabilidad del trabajo generan largos períodos sin contribución, que afectan a las pensiones. Las mujeres son las más castigadas porque, además de las licencias asociadas a la maternidad, culturalmente se ocupan más del cuidado de niños y ancianos. En el Chile actual, las mujeres acumulan menos, viven más y se jubilan antes, recibiendo entre el 30% y 40% menos que los hombres en la misma condición (Guzmán, 2017).

No hay indicios de que la situación mejore. En 2013, un asesor del Banco Central reconoció que casi el 60% de los chilenos se jubilará en el futuro con pensiones de 150 mil pesos. En este contexto, existen presiones para aumentar el porcentaje de contribución al 15% y restablecer una contribución del empleador. Mientras tanto, la ganancia de las empresas creció 9,6% entre 2015 y 2016, aunque la

rentabilidad promedio de las pensiones en el período quedó en 3,34% (Vasconcelos, 2017).

Si la presión presupuestaria fue un argumento central para privatizar el sistema de pensiones chileno, es forzoso constatar que esta opción le ha costado caro al Estado —y le sigue costando—. El Estado apoya a aquellos que todavía están en el sistema antiguo; las pensiones solidarias para el 60% más pobre; la contribución provisional solidaria que complementa las pensiones por debajo del salario mínimo; el bono de reconocimiento ofrecido como incentivo a quien cambió de sistema[11]; también sustenta la jubilación de quienes no se vieron afectados por la reforma, como los carabineros (policías) y las Fuerzas Armadas. Con todo, el Estado soporta la carga social del sistema pagando el 70% de los gastos en pensiones, mientras que las AFP se quedan con los ingresos (Guzmán, 2017).

Los efectos perversos del sistema AFP se evidencian en la medida que más chilenos se jubilan según sus reglas. Guzmán menciona la situación de profesoras gemelas, en que aquella que se jubiló en el sistema antiguo recibe ocho veces más que la hermana que se afilió a la AFP. Una consecuencia de esta realidad es que las personas no pueden dejar de trabajar cuando se jubilan.

En resumen, en el Chile actual, la educación genera deudas, la deuda disciplina al trabajador y, sin embargo, el trabajo no resuelve la deuda pasada ni la jubilación futura. El chileno vive el neoliberalismo real como un presente eterno.

Crisis

La situación de la educación, las condiciones laborales, los niveles de pobreza y endeudamiento, además del drama de la jubilación, están entre los elementos que deterioran, en el cotidiano de los chilenos, la imagen de un país exitoso. Un punto de inflexión crítico fueron

11 Hubo incentivos estatales (bono de reconocimiento) y presiones privadas, como amenazas de despido, forzando la adhesión al nuevo modelo.

las masivas movilizaciones estudiantiles de 2011. Desde entonces, se difundió la percepción de que la sociedad fundada por la dictadura chilena y perfeccionada por la Concertación está en crisis.

La principal expresión de esta crisis no es económica: en el 2011, la economía chilena creció un 6% y se crearon empleos. Es plausible que la maduración de innovaciones asociadas a este patrón social, como el crédito universitario, la inestabilidad y la precariedad laboral, las condiciones de jubilación, el temor permanente a una enfermedad cuyo tratamiento sería costoso —y arruinaría a la familia—, entre otros, difundieron el creciente malestar. Se constata un vacío entre el Chile que se vende y el Chile que se vive, mientras "el anclaje individualista de la fantasía que vinculaba los procesos de crecimiento económico con las altas expectativas parece haberse fracturado" (Mayol, 2012: 181). En este contexto, las luchas colectivas resurgieron en el horizonte político como una alternativa deseable y necesaria.

Inicialmente, estudiantes de universidades públicas y privadas salieron a las calles por cuestiones relacionadas principalmente a la tarifa estudantil de transporte (pase escolar), pero también a financiamientos y becas. Las protestas de 2011 pronto se convirtieron en un levantamiento contra el modelo educativo vigente y por lo tanto, contra la herencia de la dictadura y el Estado subsidiario (Amtmann, 2017: 41). Los estudiantes de secundaria, pioneros en sacudir al país con la Revuelta de los Pingüinos en 2006, se unieron a las protestas. Se desató una ola de ocupaciones escolares que inspirarían a los estudiantes brasileños de secundaria en los años siguientes. Rápidamente, se amplió el alcance de la agenda, así como la adhesión social al movimiento, que contó con el apoyo de padres endeudados. Lo que comenzó como un movimiento estudiantil pronto desembocó en un movimiento social.

El movimiento tuvo un resultado ambiguo desde el punto de vista de sus objetivos inmediatos. La gratuidad sustantiva no fue atendida por el gobierno de Piñera, pero fue incorporada al programa de la candidata Michelle Bachelet, elegida en 2013. Como era de esperar,

el gobierno socialista no tuvo la determinación ni acumuló las fuerzas necesarias para llevar a cabo esta reforma en la perspectiva de los movilizados, es decir, como un derecho universal.

Por otro lado, las movilizaciones masivas —que se extendieron por casi un año— tuvieron dos efectos políticos importantes: rompieron con la cultura del miedo, vigente desde el golpe de Estado, y pusieron en debate a la razón neoliberal. No parece casual que hayan sido protagonizados por jóvenes nacidos después de la dictadura, dentro del neoliberalismo real.

En su expresión política más inmediata, la revuelta estudiantil abrió brechas en el duopolio electoral. Cuatro jóvenes del movimiento estudiantil fueron elegidos diputados, ninguno de ellos candidato por la Concertación o por la derecha. En años recientes, diversas organizaciones surgidas o fortalecidas en el curso de las movilizaciones convergieron en la formación del Frente Amplio, que disputó las elecciones presidenciales de 2017 con su propia candidatura[12]. El profundo desprestigio de la política convencional se ve reforzado por las frustraciones derivadas de otro gobierno socialista de Michelle Bachelet y por los sucesivos escándalos de corrupción que desacreditan toda la política profesional, afectando incluso al hijo de la presidenta, además de crecientes protestas que comprometen varias dimensiones del neoliberalismo real.

Más allá de esta crisis de representación, se observa una crisis progresiva de legitimidad. Para muchos, la pregunta no es si el modelo funciona o no, sino en beneficio de quién funciona. Se cuestionan cada vez más sus condiciones de operación, consideradas ilegítimas. En otras palabras, la capacidad de construir un consenso activo al neoliberalismo real está disminuyendo.

Por otro lado, se constata una creciente disposición a la organización social: se estima que el movimiento No + AFP llevó a las calles a cerca de dos millones de personas durante las manifestaciones de 2016.

12 Beatriz Sánchez obtuvo 20,27% de los votos en la primera vuelta, quedando en tercer lugar.

La percepción de que la despolitización viabiliza el modelo, de que esta fue producto de la represión, y de que es sobre este trauma en el que se asienta el Chile actual, motivó a muchos chilenos a enfrentar el pasado y el presente, recuperando en el proceso la expectativa de un futuro diferente.

Reflexiones finales

Chile es uno de los países sudamericanos donde se constituyó un importante movimiento obrero, aún a fines del siglo XIX, y una significativa tradición comunista desde principios del siglo siguiente. Con la fundación del Partido Socialista en la década de 1930, el campo de la izquierda se enriqueció, influyendo de manera substancial en la política del país. Este protagonismo alimentó la ilusión de la singularidad chilena en el contexto latinoamericano, que se asociaría a la estabilidad de las instituciones y a la fortaleza de la democracia. La participación de las fuerzas de izquierda en los gobiernos del Frente Popular en esos años; la regularidad de la sucesión electoral, en contraste con la inestabilidad política, característica de los países vecinos y el perfil discreto de la política militar en el período estaban entre los elementos que respaldaban esta percepción.

En un primer momento, la elección del socialista Salvador Allende a la presidencia pareció confirmar esta idea. En Chile y en el extranjero, la posibilidad de una "vía chilena" al socialismo, que modificaría las estructuras del subdesarrollo sin recurrir a las armas, despertó entusiasmo y simpatía. Sin embargo, la agudización de las contradicciones sociales condujo a la experiencia de la Unidad Popular a un trágico descenlace.

Aunque un golpe militar respaldado por los Estados Unidos no fuera excepcional en América Latina en el contexto de la Guerra Fría, ni en el Tercer Mundo, el proyecto social desencadenado por la dictadura lo fue. El terrorismo de Estado allanó el terreno para la implementación pionera de políticas de orientación neoliberal en

todas las esferas de la existencia. En varios casos, estas formulaciones tuvieron un carácter experimental. Si en el comienzo de la década de 1970 la originalidad de la vía chilena al socialismo cautivó la atención internacional, a partir de la dictadura el país venía despertando interés como una especie de laboratorio avanzado de políticas neoliberales.

A principios de la década de 1980, la dictadura enfrentó una grave crisis económica que obligó a revisar la liberalización radical, sin perder la referencia del paradigma neoliberal. Se crearon o mejoraron otras políticas, destacando la privatización de la seguridad social que capitalizó el mercado de capitales. A pesar del resurgimiento de la protesta popular, la combinación entre represión y crecimiento económico en los años siguientes apuntaló la continuidad del régimen, derrotado en un plebiscito en el ocaso de la Guerra Fría. Sin embargo, la estrategia conciliadora de lo que se convertiría en la Concertación implicó aceptar la Constitución de la dictadura —enredada por el sistema binominal—, un caballo de Troya que amarró la transición al pasado.

Con el tiempo, la impotencia se convirtió en adaptación, las concesiones en un interés propio, la ideología en un artículo de fe. La economía política de la Concertación perfeccionó y profundizó la utopía neoliberal moldeada por la dictadura, incluso cuando los socialistas llegaron a la presidencia. Esta utopía tiene una dimensión económica y social.

Por un lado, es una economía abierta que cree en las ventajas comparativas de una inserción internacional especializada, basada en la exportación primaria. Al renunciar a cualquier control sobre su espacio económico nacional, el país apuesta a que seguirá siendo un destino principal para los negocios internacionales. Este atractivo está referido a su liberalidad en relación a los flujos de capital, mercancías y regulación del trabajo y a su modernidad, una sofisticación asentada en la concentración del ingreso. Pero su base principal es la estabilidad, afianzada por un Partido Socialista que no podría ser más neoliberal. Mientras prevalezca en el vocabulario chileno la distinción entre los "socialistas" y la "derecha" —como

si los socialistas no fueran parte de la derecha—, los negocios dormirán tranquilos.

En el plano social, esta utopía proyecta relaciones sociales mediadas por el mercado y reguladas por la ley de la oferta y la demanda. El ciudadano ejerce control sobre la calidad y el precio de los servicios sociales (educación, salud, seguridad social), por medio de las elecciones que hace en cuanto consumidor: los mejores proveedores con precios más competitivos se imponen, mientras los menos efectivos quiebran. La ciudadanía mediada por el consumo ha exigido la bancarización y la financiarización en una sociedad donde el crédito se volvió condición de ciudadanía: el 'ciudadano *credit card*' del que habla Moulian.

Sin embargo, como suele suceder en el capitalismo, el neoliberalismo real chileno no fomentó la competencia sino el monopolio. Los derechos sociales convertidos en negocios se convirtieron en nichos de acumulación privilegiada para grupos económicos cuya rentabilidad está garantizada por el Estado, como explicita el análisis del crédito estudiantil y de las AFP. Aquellos que están al margen del mercado, porque el país es desigual, son amparados por el Estado subsidiario. La transformación de los derechos sociales en mercancía es afianzada por el Estado en sus dos polos: garantizar la rentabilidad del negocio y mitigar la degradación del país.

Es posible argumentar que este modelo fue exitoso. Hay datos que indican que Chile tuvo el mejor desempeño macroeconómico desde la década de 1980 en la región, donde fue la economía más estable, además de observar una importante, aunque cuestionable reducción de la pobreza. Por otro lado, la desigualdad creció y la existencia se volvió más cara, precaria, egoísta e insegura. La mercantilización de las relaciones sociales alcanzó el paroxismo, reflejada en todas las esferas de la existencia: la angustia por abastecerse de comida o de combustible para el automóvil después del terremoto de 2010; el partido comunista que alquila sus salas para actividades de militantes; el transeúnte que exige pagar por el cigarrillo que prendió; el mendigo

que muere sin un documento de identidad, pero con una tarjeta de fidelidad de las tiendas Falabella.

Hay un malestar generalizado y profundo en el Chile contemporáneo, que se encarna en protestas contra la educación y la seguridad social, entre otros. Los partidos políticos convencionales enfrentan un fuerte desprestigio, agravado por los escándalos de corrupción. En este escenario, las grietas abiertas desde las jornadas de 2011 ampliaron el horizonte de lo posible. Una política que vaya más allá del neoliberalismo exigirá instrumentos y prácticas alternativas al duopolio. El Frente Amplio surge como una alternativa a las "dos derechas" (Mundaca, 2017), embrionario y heterogéneo. La movilización de una Asamblea Constituyente es otra señal en esta dirección (Foro por la Asamblea Constituyente y Grez, 2016).

Sin embargo, dada la profundidad e interconexión de las estructuras del neoliberalismo chileno, será necesario más que "un instante de legalidad"[13] para desarmarlo. Como dijo un profesor, reformar la educación en el Chile actual es como hacer la reforma agraria en la década de 1970. Las diversas dimensiones del neoliberalismo real están vinculadas como un todo y difícilmente serán desarmadas una por una. Visto como una totalidad, el conflicto se coloca al mismo tiempo de modo elemental como radical: se trata de la lucha por recuperar la soberanía sobre los procesos de reproducción social y sobre la propia vida cotidiana, expropiada del trabajador en dimensiones más profundas y totalizadoras que la extracción de plusvalía en el trabajo (Ruiz, 2017: 137). En Chile, la confrontación entre mercancía y humanidad, que es otra forma de nombrar la contradicción entre capital y trabajo, está desnuda.

Desde esta perspectiva, la radicalidad del neoliberalismo real plantea, al mismo tiempo, desafíos y una potencialidad política única. Desafíos, porque la politización es más difícil en una sociedad en que

13 Expresión utilizada por el historiador Sergio Grez al recordar que Chile nunca ha tenido una constitución producida democráticamente en su historia.

la mercantilización de los derechos sociales se naturalizó. Además, Chile no tiene actualmente el mundo del trabajo como el campo organizador de las luchas sociales: todos se unen contra el crédito y el mercado en un orden respaldado por el Estado. Desde esta perspectiva, la experiencia chilena encuentra poca referencia o paralelo alrededor. Hay conciencia de que se trata de una experiencia de neoliberalismo avanzado y periférico que desafía las comparaciones (Romero, 2017).

Esta singularidad es parte del desafío, pero también del potencial. Es fácil ver que las luchas sociales en el país necesitan reinventarse —lo que es complejo—, porque el punto de partida fue rebajado por décadas de represión, que buscaron idiotizar a la sociedad chilena. Por otro lado, se aventura una mayor libertad creativa. De modo análogo, la apatía construida confronta la percepción de que no será posible cambiar las partes del problema sin confrontar el todo, lo que lleva a la radicalización, en un cotidiano en el cual los caminos se vuelven cada vez más estrechos.

Atrapada entre el trauma del pasado y la angustia del presente, la incertidumbre del futuro flamea sobre las alamedas, por donde se espera que más temprano que tarde, como sentenció Allende, pase el hombre libre para construir una sociedad mejor.

Bibliografía

ALVARADO, CONSTANZA Y PERSIDA ROCA

2017 "La plaga de Chile post tenebras lux", en Faride Zerán (ed.), *Chile actual: crisis y debate desde las izquierdas*. Santiago: Lom.

AMTMANN, CARLA

2017 "Mito, esperanza y vacío: la travesía de una crisis", en Faride Zerán (ed.), *Chile actual: crisis y debate desde las izquierdas*. Santiago: Lom.

ARAVENA, ANTONIO

2016 "Neoliberalismo, transición democrática y sindicalismo en Chile", en Antoine Faure *et al.* (dirs.), *Chili actuel: Gouverner et résister dans une société néolibérale*. Paris: L'Harmattan.

ATRIA, FERNANDO

2013 *Veinte años después. Neoliberalismo con rostro humano*. Santiago: Catalonia.

BENGOA, JOSÉ

2009 *La comunidad fragmentada. Nación y desigualdad en Chile*. Santiago: Catalonia.

BLAKEMORE, HAROLD

1974 *British Nitrates and Chilian Politics, 1886-1996*. Londres: Athlone Press for the Institute of Latin American Studies.

BREGA, CARLA *et al.*

2017 *Informe Mensual de Calidad del Empleo (IMCE). Análisis de los microdatos liberados el 30 de enero de 2017 correspondiente al trimestre*

móvil octubre-diciembre 2016. Informe nacional. Santiago: Fundación Sol.

BRUNNER, JOSÉ JOAQUÍN

2008 "El sistema de educación superior en Chile: un enfoque de economía política comparada", en *Avaliação*, vol. 13, núm. 2, junio, pp. 451-486. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-40772008000200010&lng=en&nrm=iso.

CONCERTACIÓN

2012 "Responsabilidad fiscal. Un patrimonio de Chile que todos debemos resguardar. Senadores y diputados de la oposición, 6 de noviembre de 2012". Disponible en: http://media.elmostrador.cl/2012/11/Preocupaci% C3%B3n-de-la-Oposici%C3%B3n-por-la-Responsabilidad-fiscal.pdf.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE

1980 *Constitución Política de la República de Chile*. Disponible en: https://www.camara.cl/camara/media/docs/constitucion_politica.pdf.

CARLOS, NEWTON; GALENO DE FREITAS Y MARCIA VETTORI

1970 *Chile com Allende, para onde vai?* Rio de Janeiro: Gernasa.

DEVÉS VALDES, EDUARDO

2002 *Los que van a morir te saludan. Historia de una masacre: Escuela Santa María de Iquique, 1907*. Santiago: Lom.

DINGES, JOHN

2005 *Os anos do Condor: uma década de terrorismo internacional no Cone Sul*. São Paulo: Cia. das Letras.

DURÁN SANHUEZA, GONZALO Y MARCO KREMERMAN

2017a *Los Verdaderos Sueldos de Chile. Panorama actual del valor de la fuerza del trabajo usando la NESI 2016*. Santiago: Fundación Sol.

2017b *Pobreza y la fragilidad del modelo chileno. Nuevos indicadores para el debate de pobreza en Chile*. Santiago: Fundación Sol.

DURÁN SANHUEZA, GONZALO Y ALEXANDER PÁEZ

2015 *Desposesión salarial en Chile. Panorama de los Verdaderos Sueldos usando la Encuesta CASEN*. Santiago: Fundación Sol.

ELGUETA, BELARMINO Y ALEJANDRO CHELÉN
1984 "Breve historia de medio siglo en Chile", en Pablo González Casanova (coord.), *América Latina: Historia de medio siglo*. México: Siglo XXI.

FALETTO, ENZO
2007 "De la teoría de la dependencia al proyecto neoliberal: el caso chileno", en Enzo Faletto, *Dimensiones sociales, políticas y culturales del desarrollo*. Santiago: Clacso.

FAZIO, HUGO Y MAGALY PARADA
2010 *Veinte años de política económica de la Concertación*. Santiago: Lom

FORO POR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y SERGIO GREZ
2016 *Asamblea Constituyente. La alternativa democrática para Chile*. Santiago: América en Movimiento.

FUNDACIÓN SOL
2014 "El Chile del 50%, del 1%, del 0,1% y del 0,01%". Disponible en: https://www.fundacionsol.cl/blog/graficos-3/post/el-chile-del-50-del-1-del-0-1-y-del-0-01-6238

GALARCE VILLAVICENCIO, GRACIELA
2012 "La propaganda engañosa sobre Chile. Agotamiento relativo del capitalismo neoliberal", en Jairo Estrada Álvarez (coord.), *La crisis capitalista mundial y América Latina*. Lecturas de economía política. Buenos Aires: Clacso.

GARCÉS, JOAN
1993 *Allende e as armas da política*. São Paulo: Scritta.

GIL, FEDERICO
1966 *The Political System of Chile*. Boston: Houghton Mifflin Company.

GONZÁLEZ, MARÍA ELENA
1989 "El poder contra el poder. Nacionalismo, progreso y libertad en la presidencia de Balmaceda", en María Elena González, Hernán Muñoz y Luis Cipriano Rodríguez, *Tres momentos del nacionalismo en Chile*. Caracas: Tropykos.

GONZÁLEZ, MÓNICA Y JUAN ANDRÉS GUZMÁN
2012 "Las pruebas confirman la venta de acreditaciones a universidades privadas", en *Ciper*, 10 de diciembre de 2012. Disponible en: http://

ciperchile.cl/2012/12/10/las-pruebas-que-confirman-la-venta-de-acreditaciones-a-universidades-privadas/

GONZÁLEZ CASANOVA, PABLO
1984 *América Latina: Historia de medio siglo*. México: Siglo XXI.

JOBET, JULIO CESAR
1955 *Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile*. Santiago: Editorial Universitaria.

KLEIN, NAOMI
2008 *A doutrina do choque: a ascensão do capitalismo de desastre*. São Paulo: Nova Fronteira.

KORNBLUH, PETER
2003 *Los EEUU y el derrocamiento de Allende: una historia desclasificada*. Santiago: Ediciones B.

KREMERMAN, MARCO Y ALEXANDER PÁEZ
2016 *Endeudar para gobernar y mercantilizar: el caso del CAE*. Santiago: Fundación Sol. Disponible en: https://www.fundacionsol.cl/cl_luzit_herramientas/static/wp-content/uploads/2016/08/Estudio-CAE-20163-1.pdf

MATAMALA, DANIEL
2017 "O poder impotente", en *Correio da Cidadania*, 4 de julio de 2017. Disponible en: http://www.correiocidadania.com.br/internacional/30-america-latina/12679-afp-o-poder-impotente.

MAYOL, ALBERTO
2012 *El derrumbe del modelo. La crisis de la economía de mercado en el Chile contemporáneo*. Santiago: Lom.

MOULIAN, TOMÁS
1997 *Chile actual: anatomía de un mito*. Santiago: Lom.

MUÑOZ, HERALDO
2008 *A sombra do ditador: memórias políticas do Chile sob Pinochet*. Rio de Janeiro: Zahar.

NECOCHEA RAMÍREZ, HERNÁN
1972 *Balmaceda y la contrarrevolución de 1891*. Santiago: Editorial Universitaria.

PALEY, JULIA
2001 *Marketing Democracy. Power and Social Movements in Post-dictatorship Chile*. Berkeley: University of California Press.

PECK, JAMES
2010 *Ideal Illusions: How the U.S. Government Co-opted Human Rights*. New York: Metropolitan Books.

PINTO, ANÍBAL
1996 *Chile: un caso de desarrollo frustrado*. Santiago: Editorial Universidad de Santiago.

PINTO, JULIO Y GABRIEL SALAZAR
1999 *Historia contemporánea de Chile II. Actores, identidades y movimiento*. Santiago: Lom.

PNUD
2015 "IDH 2015: América Latina", en *Projeto Latino América*. Disponible en: http://www.projetolatinoamerica.com.br/idh-2015-america-latina/

RAMÍREZ, FELIPE
2017 "Chile: el desafío de superar la crisis desde la izquierda", en Faride Zerán (ed.), *Chile actual: crisis y debate desde las izquierdas*. Santiago: Lom.

ROJAS, CAMILA
2017 "Lo que nos tocó vivir. Lo que nos toca cambiar", en Faride Zerán (ed.), *Chile actual: crisis y debate desde las izquierdas*. Santiago: Lom.

RUIZ, CARLOS
2017 "Socialismo y libertad. Notas para repensar la izquierda", en Faride Zerán (ed.), *Chile actual: crisis y debate desde las izquierdas*. Santiago: Lom.

RUIZ, CARLOS Y GIORGIO BOCCARDO
2015 *Los chilenos bajo el neoliberalismo*. Santiago: Fundación Nodo XXI.

SADER, EMIR
1992 *Cuba, Chile, Nicarágua: socialismo na América Latina*. São Paulo: Atual Editora.

SALAZAR, GABRIEL
2003 *Historia de la acumulación capitalista en Chile. Apuntes de clase*. Santiago: Lom.

SALAZAR, PAULINA
2014 "A 20 años de la explosión del financiamiento compartido", en *La Tercera*, 8 de junio de 2014. Disponible en: http://www.latercera.com/noticia/a-20-anos-de-la-explosion-del-financiamiento-compartido/.

SILVEIRA, FÁBIO VIDIGAL XAVIER
1967 *O Kerensky chileno*. São Paulo: Editora Vera Cruz.

SUNKEL, OSVALDO Y RICARDO INFANTE
2009 "Chile: hacia un desarrollo inclusivo", en *Revista CEPAL*, núm. 97, abril, pp. 135-154.

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
2016 *Informe. Valor y rentabilidad de los fondos de pensiones*, junio de 2016. Disponible en: https://www.spensiones.cl/portal/informes/581/articles-10988_recurso_1.pdf.

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN Y EQUIFAX
2017 *XVI Informe de Deuda Morosa Primer Trimestre 2017*. Disponible en: http://www.uss.cl/economia-y-negocios/wp-content/uploads/sites/12/2017/05/XVI-Informe-de-Deuda-Morosa-1er-trimestre-2017-USS-Equifax.pdf.

VASCONCELOS, JOANA SALÉM
2017 "'Aqui se fabricam pobres': a previdência chilena como antimodelo", en *Correio da Cidadania*, 18 de abril de 2017. Disponible en: http://correiocidadania.com.br/internacional/30-america-latina/12492-a-qui-se-fabricam-pobres-a-previdencia-chilena-como-antimodelo.

VERDUGO, PATRICIA
1989 *Los Zarpazos del puma*. Santiago: CESOC.

VITALE, LUIS
1980 *Interpretación marxista de la historia de Chile. De semicolonia inglesa a semicolonia norteamericana (1891-1870)*. Barcelona: Fontamara.

ZERÁN, FARIDE (ed.)
2017 *Chile actual: crisis y debate desde las izquierdas*. Santiago: Lom.

Conversaciones

Santiago y Valparaíso, 1ro al 8 de julio de 2017

AGUILAR CARVAJAL, SANTIAGO. Exmilitante del MIR y activista cultural.
ÁLVAREZ, ROLANDO. Historiador, especialista en la historia del Partido Comunista de Chile.
BOLADOS, PAOLA. Geógrafa de la Universidad de Valparaíso.
BORIC, GABRIEL. Diputado federal por el Movimiento Autonomista.
CAPUTO, ORLANDO. Economista, director de CODELCO durante el gobierno de Allende.
CHONCHOL, JACQUES. Ministro de Agricultura del gobierno de Allende y militante del MAPU.
CORREA, FELIPE. Economista de la CEPAL.
GARCÉS, MAGDALENA. Abogada en el área de Derechos Humanos.
GREZ, SERGIO. Historiador y militante del Foro por la Asamblea Constituyente.
GUZMÁN, JAIME. Abogado vinculado al Movimiento No + AFP.
KREMERMAN, MARCO. Economista de la Fundación Sol.
LARA, CLAUDIO. Economista.
MANSILLA, PABLO. Geógrafo de la Universidad de Valparaíso, especialista en conflictos territoriales.
MUNDACA, RODRIGO. Militante del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima).
OLIVARES, VALENTINA. Militante de la Nueva Democracia.
ORELLANA, VÍCTOR. Sociólogo de la Fundación Nodo XXI y especialista en educación.
PONCE, MARÍA IGNACIA. Doctoranda en geografía por la Universidad de Valparaíso.
ROMERO, NICOLÁS. Dirigente del Movimiento Autonomista.
RUBIO, PABLO. Historiador, especialista en historia de la derecha chilena.
SAAVEDRA, VALENTINA. Dirigente de la Izquierda Autónoma.
SILVA FLORES, CONSUELO. Coordinadora del grupo de trabajo Integración Regional del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).

TITELMAN, NOAM. Militante de Revolución Democrática.
UGARTE, JOSÉ LUIS. Abogado especialista en Derecho del Trabajo.

Perversión y trauma: los impases de la política peruana contemporánea

¡Agua sí, oro no!
Ollanta Humala, durante la campaña electoral, 2011

Yo creo, como jefe de Estado,
que podemos tener las dos cosas,
el agua y el oro, no el agua o el oro;
el agua o el oro es una posición
extremista, antihistórica y antinacional.
Ollanta Humala en la presidencia, 2012

Introducción

En la década de 1980, la izquierda peruana era una de las más poderosas del continente: un partido afiliado a la Internacional Socialista presidía el país, su principal oposición era un frente de izquierda, mientras que guerrillas actuaban en el campo y en la ciudad. Desde entonces, la derecha recuperó la iniciativa, situación que todavía persiste. Para comprender esta inflexión, es necesario tener en cuenta la trayectoria de la propia izquierda; las ambigüedades del primer gobierno de Alan García (1985-1990), asociadas a la trayectoria de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) y la especificidad del senderismo. Aunque no se tengan condiciones para profundizar aquí, se cree que los dos últimos fenómenos permiten una analogía con la noción psicoanalítica de perversión[1]. Se entiende que la relación

1 En general, el psicoanálisis identifica tres vías de salir del complejo de Edipo, conformando tres patrones de inserción del sujeto en la cultura: el neurótico es aquel que se subordina a las reglas establecidas por la cultura en la que se insertó, aceptándolas conflictivamente, siendo esta la condición de "normalidad". El psicótico se aleja de la interdicción, forjando un mundo que sigue reglas propias. Ya el perverso instrumentaliza las reglas prevalentes a su propio interés. Se considera el senderismo, alanismo y fujimorismo como perversiones en el sentido de que toman como referencia una norma socialmente establecida para

del alanismo con el APRA y de Sendero Luminoso con la guerrilla es de naturaleza perversa, así como fue la relación de Alberto Fujimori con la democracia, en un país donde el régimen militar del general Velasco Alvarado (1968-1975) no fue asociado a la represión.

Avanzando en la analogía, entiendo que la conjunción entre la desorganización económica y la violencia senderista al final del gobierno de García generó las condiciones para una respuesta política radical, en un momento en que la izquierda se desarticulaba. Parafraseando a León Trotsky, el fujimorismo fue una respuesta traumática a una situación traumática que asentó las bases del Perú contemporáneo[2]. En contraste con otros países, en Perú el choque neoliberal fue asociado a un régimen que pacificó y —en la visión de algunos— salvó al país, lo que plantea dificultades adicionales para su confrontación. Son las raíces de esta singularidad que se analizan para entender el trauma peruano, como premisa para su superación.

Nueva izquierda *e Izquierda Unida*

Las raíces de la llamada nueva izquierda peruana se remontan al período entre 1959 y 1965, cuando dos cortas experiencias guerrilleras se originaron a partir de dos partidos entonces identificados con la izquierda, el APRA y el Partido Comunista del Perú (PCP). Poco después, se conformó la Vanguardia Revolucionaria, organización a la que convergieron exmilitantes del partido Acción Popular[3], trotskistas y marxistas independientes. En la década siguiente, el llamado guerrillero dio lugar a una actuación ligada a los movimientos campesinos,

instrumentalizarla en el sentido contrario, configurando un desvío que resulta en una normatividad autorreferida, es decir, según intereses particulares distantes de su finalidad original.

2 Según Alain de Mijolla (2005: 1.858), "el traumatismo es un evento que, por su violencia y característica súbita, provoca un flujo de exitación suficiente para poner en jaque los mecanismos de defensa habitualmente eficaces, produciendo frecuentemente un estado de sideración y conduciendo, a largo plazo, a una desorganización de la economía psíquica".

3 Partido de Fernando Belaúnde Terry, presidente destituido por Velasco Alvarado en 1968.

consolidando una izquierda "nacional, mariateguista[4] y chola", en la expresión de Carlos Malpica. Se fundaba una nueva tradición socialista en el seno de la izquierda marxista, que no se identificaba con el APRA ni con el PCP.

El otro lado de esta radicalización de la izquierda en los años de 1960 fue la adaptación al orden del principal partido de oposición, APRA. Fundado en 1924 en la Ciudad de México por el líder estudiantil Víctor Raúl Haya de la Torre, el APRA dejó rápidamente sus aspiraciones continentales originales para convertirse en la organización política peruana más grande del siglo XX. El carácter totalizador de la organización aprista la convirtió en una especie de hermandad religiosa, dínamo en torno al cual giró la política nacional en el siglo pasado. Estableciéndose sobre todo en áreas de mayor penetración de las relaciones capitalistas, como la costa norte del país, la capacidad de integración del partido desafió a la fragmentada e impotente burguesía peruana. Mientras tanto, los esfuerzos del partido para dirigir el país se encontraron con una hostilidad militar sistemática, que se remonta al pasado insurreccional del partido. Políticamente, el APRA evolucionó de una organización subversiva de retórica revolucionaria a un partido convencional, mereciendo la simpatía de los Estados Unidos en el contexto radicalizado de la década de 1960.

Paradójicamente, el programa nacionalista original del APRA fue implementado por los militares que, al reprimir la guerrilla en los años sesenta, se sensibilizaron para superar la brecha que dividía al país y relegaba a la mayoría indígena a la miseria. El golpe que llevó al poder al general Velasco Alvarado en octubre de 1968 debe ser entendido a la luz de un impase histórico, entre la debilidad de la burguesía peruana y los límites del APRA para encarnar el cambio, en un momento de radicalización de la coyuntura nacional (ocupaciones de tierra, guerrillas y movimientos urbanos) e internacional (entre la

4 Referencia a la influencia del pensador José Carlos Mariátegui (1894-1930), fundador del Partido Socialista del Perú (PSP) en 1928, asociación que después de su muerte pasó a llamarse Partido Comunista del Perú (PCP) [n.e.].

Revolución Cubana y mayo de 1968). Bajo el lema Tupamaro "campesino: el patrón no comerá de tu pobreza", el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (GRFA) se propuso "desenclavar la economía del país implementando una serie de medidas de inspiración cepalina guiadas por un horizonte político que no era comunista ni capitalista" (Quijano, 1971; Cotler, 1978). Deteniendo la reforma para evitar la revolución, el GRFA constituyó un régimen militar único, en la antítesis del terrorismo de Estado de las dictaduras contemporáneas. Después de un éxito inicial, el gobierno velasquista sucumbió en medio de relaciones contradictorias con el campo popular —que pretendió tutelar—, además de enfrentar dificultades económicas y problemas de salud de su líder, que dejó la presidencia en 1975.

La *nueva izquierda*, que no se identificaba con el APRA o el PCP, fue construida política e ideológicamente en oposición al gobierno de Velasco Alvarado. Esta constatación implica otra paradoja, porque fueron las transformaciones impulsadas por este régimen las que crearon las condiciones objetivas para el avance de la izquierda en diferentes frentes: en el campo, donde la reforma agraria liberó a los campesinos sometidos a relaciones serviles; entre los indígenas, cuya lengua quechua fue reconocida por el Estado, en un país donde eran prohibidos de circular en las aceras de muchas ciudades[5]; entre los trabajadores, una vez que se reconocieron más sindicatos durante los siete años de Velasco que en todo el período republicano precedente; entre los servidores públicos, sector que se expandió simultáneamente a la presencia estatal y llegó a manejar el 50% del PIB del país; y en las periferias, donde se fomentaron modalidades de organización urbanas, como la Comunidad Urbana Autogestionada de Villa El Salvador, aunque desde un enfoque tutelar. En resumen, a pesar del poco

5 Por otro lado, GRFA prohibió el uso de la palabra "indio", término peyorativo invariablemente adjetivado en la sociedad peruana como "indio tonto" o "indio ignorante". La reducción del indígena a la condición campesina en el marco de la reforma agraria es un elemento relevante para entender el lugar discreto del ideario del Bien Vivir en la política contemporánea del país, en contraste con Bolivia y Ecuador.

tiempo que tuvieron las reformas velasquistas para asentarse y de los límites democráticos de un gobierno que pretendió monopolizar el poder, "se puede decir que, en gran parte, la constitución, expansión e importancia de la *nueva izquierda* se explica por el velasquismo; este crea procesos y fortalece actores que darían solidez a la izquierda peruana" (Gonzales, 2011: 26).

En la visión de sus protagonistas, la autonomía frente a Velasco cualificó a esta izquierda para resistir con relativo éxito ante la ofensiva antipopular desatada en el segundo momento de la GRFA, liderada por Francisco Morales Bermúdez (1975-1980). El vigor de la huelga general de julio de 1977 persuadió al régimen a negociar una salida mediada por los partidos convencionales para contener el ascenso de las masas, en lugar de implementar una dictadura represiva como los vecinos del Cono Sur. Es en este momento que los militares y el APRA se reconcilian en una clave conservadora. Al año siguiente, se convocó una Asamblea Constituyente, presidida por este partido (Diez Canseco, 2011: 120).

Inicialmente, la izquierda se dividió en cuanto a qué conducta asumir durante la transición. Después de todo, disputó la elección constituyente en que, sumadas las distintas siglas, obtuvo un tercio de los votos. Solo dos agremiaciones no se unieron al proceso legal: el Partido Comunista de Perú-Patria Roja (PCP-PR), que participó en las siguientes elecciones y el Partido Comunista de Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) que, como se verá, declaró la guerra al Estado poco después. Sin embargo, las ambigüedades permearon el proceso y algunos constituyentes como Hugo Blanco —probablemente el trotskista con la mayor cantidad de votos recibidos en el continente—, no firmaron el documento final. De todas maneras, la lectura general que prevaleció fue que la prioridad era garantizar que los militares salieran del poder, lo que solo era posible a través de una transición negociada.

La Constituyente fue sucedida por una elección presidencial en 1980, que agudizó el dilema con respecto a la postura hacia el Estado, para una izquierda de matriz revolucionaria, que identificaba ese

proceso, en gran medida con la idea de "claudicación política y camino electoral" (Adrianzén, 2011b). Había una convicción arraigada de que las fuerzas del orden jamás permitirían un gobierno de izquierda, lo que incidió en los cálculos políticos hasta el final de la década. En general, la cuestión fundamental en el campo de la izquierda no era la participación electoral, pero sí el papel de esta vía en un horizonte de transformación social.

Hubo un intento de aglutinar las fracciones más radicales de la izquierda alrededor de la Alianza Revolucionaria de Izquierda (ARI), teniendo en vista las elecciones presidenciales de 1980. Sin embargo, rota por diferencias menores entre las dirigencias políticas, esta alianza duró solo tres meses, generando una frustración hasta el día de hoy no superada para algunos. Asistiendo desunidos a esta elección, los siete candidatos de izquierda juntos recibieron cerca del 13,6% de los votos, es decir menos de la mitad de lo que habían logrado dos años antes. En amarga ironía, Fernando Belaúnde Terry (1980-1985), el presidente que Velasco Alvarado destituyó en 1968, fue elegido para un segundo mandato.

El fracaso de la ARI no significó la imposibilidad de una alianza de izquierda, pero sí que esta nacería de una derrota, lo que tuvo implicaciones decisivas. Al conformarse la Izquierda Unida pocos meses después, el liderazgo político de este nuevo frente correspondió al sector más moderado de las izquierdas, que había apoyado a Velasco. Esta tendencia se personificó en la figura de Alfonso Barrantes, cuyo principal triunfo político era no identificarse con cualquiera de los grupos rivales, más allá de su carisma, que lo llevó a la Alcaldía de Lima. La Izquierda Unida adoptó un perfil electoral y las posibilidades de establecer vínculos orgánicos con el movimiento popular fueron poco aprovechadas. Este distanciamiento ayudó a que las rencillas interpartidarias o interpersonales prevalecieran sobre los proyectos comunes, perpetuando la lógica heredada de los años anteriores.

Así, según el testimonio autocrítico de otro protagonista de este proceso, se enfrentaba "un nuevo escenario con viejas herramientas"

(Diez Canseco, 2011: 176). A pesar de las limitaciones culturales y sociales que restringieron el alcance de este frente, las fuerzas populares resistieron con relativa eficacia la arremetida antipopular del gobierno de Belaúnde Terry en un contexto de crisis económica, postergando el ataque neoliberal para la década siguiente. En el plano electoral, la Izquierda Unida se consolidó como la segunda fuerza política del país. En 1983, Alfonso Barrantes ganó las elecciones en Lima, convirtiéndose en el primer alcalde socialista de las Américas, como se decía. Las elecciones nacionales de 1985 fueron vencidas por el candidato Alan García (1985-1990), el presidente más joven en la historia del país, quien se anunciaba como una especie de reencarnación del fallecido Haya de la Torre. El mismo Barrantes quedó en segundo lugar en esta elección y, en una decisión controversial, renunció a disputar la segunda vuelta.

En este momento, la izquierda peruana era considerada una de las más poderosas del continente y su futuro parecía promisorio: el país estaba presidido por un partido afiliado a la Internacional Socialista y tenía como principal oposición un frente partidario a su izquierda, además de experimentar movimientos guerrilleros cuando, con excepción de Colombia, esta forma de lucha estaba extinta en América del Sur.

De hecho, la Izquierda Unida y su líder Alfonso Barrantes fueron vistos y se veían a sí mismos como favoritos para la sucesión de García en 1990. Sin embargo, el frente perdió fuerza y la izquierda llegó a estas elecciones dividida en dos candidaturas que sumaron el 13% de los votos —de los cuales el 5% se destinaron a Barrantes—. Venció un candidato hasta entonces desconocido que tuvo un ascenso meteórico al final de la campaña y ganó en la segunda vuelta: Alberto Fujimori.

¿Qué sucedió? La evaluación de esta experiencia es necesaria para reconstruir el campo de la izquierda, que desde entonces perdió la iniciativa política.

Examinando la situación política del país en 2015, Aníbal Quijano la atribuyó a la convergencia de tres fenómenos, llamados por él "fujimontesinismo", que "completa la degradación del país, la

putrefacción de su aparato institucional", en un proceso acelerado por el "alanismo"[6], descrito como "un hijo del APRA que no tiene nada que ver con el APRA" y el "senderismo", interpretado como una corriente "ultra-contrarrevolucionaria" (Quijano, 2015). Desde un punto de vista histórico, notamos que el alanismo y el senderismo colocaron a la izquierda peruana frente a impases que llevaron a la derecha a reanudar la iniciativa, generando el contexto en el que se desarrolló la dictadura fujimorista (1990-2000).

Alanismo e Izquierda Unida

En el plano político, el desmoronamiento de la Izquierda Unida está asociado con las ambivalencias de su relación con la principal fuerza política del país, el APRA y con el presidente Alan García. Específicamente, el grupo alrededor de Barrantes creyó en un escenario de alternancia presidencial informalmente acordado, insinuado por el propio García, cuyo gobierno comenzó con ambigüedad y terminó en caos.

García asumió un país que vivía un "desbordamiento popular", según la formulación de José Matos Mar (1987). Desde un punto de vista social, la intensa migración a las ciudades en un contexto de recesión económica agravó el desajuste entre las crecientes demandas populares y las limitadas posibilidades de integración del Estado y del mercado. En términos políticos, García pretendió socavar a la izquierda y neutralizar a la derecha, mientras lidiaba con el golpismo de los militares y la guerrilla en el interior del país. En el plano económico, el líder aprista asumió un Perú en depresión desde 1983, en el marco de la crisis de la deuda en la región. En oposición a su antecesor, propuso una política heterodoxa que fue insuficiente para impedir enormes déficits en transacciones corrientes, un problema

6 Aunque el término alanismo no es común para designar al primer gobierno aprista, refiriéndose corrientemente al segmento del partido liderado por Alan García, utilizo el término en el sentido sugerido por Aníbal Quijano, refiriéndose al proceso de degeneración política del APRA, sintetizado por la trayectoria de su principal líder después de Haya de la Torre.

agravado por el aislamiento internacional del gobierno, que no consiguió adhesiones a su propuesta de restringir el pago de la deuda al 10% de los ingresos de exportación, ocasionando la ruptura del FMI y del Banco Internacional para la Reconstrucción y Desarrollo (BIRD) con el país —aunque en la práctica esta meta no se habría cumplido.

En conjunto, los problemas en la balanza de pagos acentuados por la fuga de capitales agravaron la crisis monetaria y presionaron la inflación, que pronto derivó en una hiperinflación. Michel Chossudovsky criticó la política económica aprista con estas palabras:

> El modelo económico fue definido en términos técnicos tramposos, sustentados por una retórica populista: el APRA no tenía la base social ni la voluntad política y mucho menos el apoyo popular organizado, para implementar reformas sociales y económicas importantes y sostenibles en áreas como la reforma tributaria, la regionalización, la reactivación de la agricultura y el apoyo a las unidades de producción de pequeña escala en la economía informal. Por detrás de su discurso populista, el gobierno del APRA no estaba dispuesto a tomar medidas directamente contrarias a los intereses de las élites económicas (Chossudovsky, 1999: 129).

En medio de las ambivalencias del proceso, la medida que selló la fortuna del gobierno fue la repentina estatización del sector bancario en julio de 1987. Anunciada en ausencia del grupo conocido como los Doce Apóstoles, que reunía a los empresarios más poderosos del país y servía como interlocutor del gobierno, la medida tuvo como principal efecto la "resurrección instantánea de la derecha", liderizada por el escritor Mario Vargas Llosa (Rudolph, 1992: 132).

Motivada por consideraciones políticas antes que económicas, la iniciativa fue obstaculizada por medios legales por el sector financiero, desencadenando una disputa que llevó al gobierno a abandonar el proyecto. Como resultado, se rompió la confianza entre las empresas y García, acentuando las dificultades económicas del gobierno. Según

el Banco Mundial, el PIB disminuyó un 8,8% en 1988 y un 14% en 1989; entre diciembre de 1987 a octubre de 1988, los salarios reales en el sector privado se desplomaron 52% promedio, mientras en el sector público la disminución se estimó en 62%; el poder adquisitivo del salario mínimo cayó en 49% entre julio de 1985 y julio de 1990; la inflación alcanzó el 1.700% en 1988, el 2.800% en 1989 y el 7.600% en 1990. En este escenario, García perdió el control de la agenda política nacional y en 1988 implementó sin éxito el primer intento de un choque antiinflacionario (Cano, 2000: 132-134).

La Izquierda Unida fue uno de los pocos segmentos sociales que defendió públicamente la estatización de los bancos, convocando incluso a una movilización popular en Lima. Aunque la medida fue superficialmente coherente con las posiciones históricas de la izquierda, su ejecución por parte de un gobierno oportunista —que se hundía en contradicciones y corrupción— minó su prestigio. En términos subjetivos, la posición adoptada expresa las ambivalencias de la izquierda en relación con el APRA, un partido que hace mucho ya no era progresista, pero que manejaba temas nacionalistas en un momento en que la coyuntura se inclinaba hacia la izquierda. Mientras tanto, las expectativas de alternancia presidencial se frustraron ya que García ignoró el protocolo vigente, estableciendo la neutralidad del presidente, e intervino abiertamente en la campaña para la alcaldía de Lima en favor del candidato aprista, que derrotó a Barrantes por un estrecho margen. A pesar de la derrota en la capital, el número de votos emitidos por la Izquierda Unida en todo el país creció en 1986, ratificando su posición de fuerza.

Sin embargo, cuando se acercaron las elecciones presidenciales en 1990, el país vivía un momento bastante diferente. A los problemas económicos se sumó el incremento de la acción militar urbana de Sendero Luminoso, que desde 1989 creyó aproximarse al "equilibrio estratégico" del que hablaba Mao Tsé Tung (Degregori, 2013: 223). En este contexto tiene lugar el Primer Congreso Nacional de la Izquierda Unida, que también fue el último, ya que la unidad se vino abajo durante este mismo congreso.

Según numerosos testimonios, el motor de la división fue la posición de Barrantes y su grupo, a favor de la idea de que sería necesario separarse de los sectores más combatientes de la Izquierda Unida para atraer al elector moderado y ganar las elecciones (Ames, 2011; Guerra García, 2011; Pease, 2011; Zapata, 2011). También se pensaba que el Ejército difícilmente toleraría un gobierno más radical en un momento de gran preocupación por la insurgencia senderista. Como se adelantó, el resultado electoral de la división fue que Barrantes tuvo aún menos votos (5%) que la candidatura de Henry Pease para Izquierda Unida (8%), y ambos sumaron 13%. Sin embargo, para comprender esta derrota de la izquierda peruana, más allá de los vicios "de los micropartidos con lógicas corporativas que se camuflaban tras de un discurso ideológicamente radical" (Adrianzén, 2011b: 58), es necesario examinar el fenómeno de Sendero Luminoso.

Sendero Luminoso

Contrario a lo que sugiere el ideólogo mexicano Jorge Castañeda en *Utopía desarmada*, Sendero Luminoso no tiene afinidades con lo que se describe como una "segunda ola" guerrillera en el continente, incluyendo los movimientos centroamericanos y el M-19 colombiano (Castañeda, 1994). Entender la singularidad de esta insurgencia es una tarea compleja, a la cual se dedicaron intelectuales notables, principalmente peruanos (Degregori, 2013; Rénique, 2015). Haciendo una analogía con Benedict Anderson cuando sugirió que la naturaleza del nacionalismo está más cerca de las estructuras de parentesco o religión que de fenómenos ideológicos, como el liberalismo o el socialismo (Anderson, 1983), se entiende que la comprensión de la insurgencia senderista remite a desajustes sociales en un país en tránsito entre la referencia nacional desarrollista y el neoliberalismo, que en América Latina también potenció fenómenos como el neopentecostalismo y el crimen organizado.

Evidentemente es necesario integrar este marco general en las particularidades de la formación peruana, articulando, entre otras

dimensiones, la cuestión regional y el patrón de desarrollo desigual y combinado del país; el ambivalente legado del velasquismo; la subsistencia de patrones culturales autoritarios que informan las relaciones entre los misti (no indios) y los indígenas y campesinos; y preconceptos arraigados sobre la cultura andina y el racismo. También es necesario hacer un examen crítico de elementos que caracterizan cierta tradición marxista, desvirtuada por Sendero Luminoso como una modalidad de razón instrumental con contenidos de megalomanía, apoyada por prácticas antidemocráticas y fanáticas que resultaron en una política violenta y antipopular. Frente a la imposibilidad de explicar este "objeto de estudio opaco y elusivo" (Degregori, 2013: 23), se describen, más adelante, algunos aspectos fundamentales para comprender la naturaleza y el impacto del fenómeno, porque es una condición necesaria para entender el Perú actual.

Sendero Luminoso nació como una división de orientación maoísta dentro del PCP en la década de 1960, que prosperó en la región serrana de Ayacucho, una de las más pobres del país y de marcada presencia indígena. Su centro principal fue la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, cuya refundación en 1959 en la ciudad de Ayacucho tuvo, según Degregori, el efecto de un terremoto social, multiplicando por diez el número de estudiantes universitarios en la región más atrasada del país. Originalmente, la organización política de los universitarios respondía a la intención del gobierno de Belaúnde (1963-1968) de recortar fondos de la institución, acusada de apoyar a las guerrillas que germinaron en 1965. Sin embargo, la trayectoria de los senderistas liderados por el profesor de filosofía Abimael Guzmán a lo largo de los años de 1970 revela repetidas derrotas políticas, tanto en el campo de la política universitaria como en la campesina, pero que no les impidió consolidar su unidad, haciendo intenso proselitismo entre los estudiantes de secundaria y universitarios de la región, además de los profesores y funcionarios (Degregori, 2010).

A contramano del ascenso del movimiento de masas a fines de la década de 1970, Sendero Luminoso no apoyó la huelga general de 1977

y no respaldó la participación en el proceso constituyente. Contrario a la democratización política en 1980, mientras la izquierda peruana debatía las tácticas y estrategias que daban forma a la Izquierda Unida, Sendero Luminoso decretó el inicio de una guerra popular prolongada, que se convirtió en pública, de manera simbólica, con la quema del material electoral en el pueblo serrano de Chuschi.

Después de este acto simbólico, llevó a cabo acciones armadas en el campo que, a pesar de su brutalidad, inicialmente ganaban la simpatía entre la población rural: asesinaron a figuras odiadas, como hacendados y comerciantes; distribuyeron ganado y tierras; se movilizaron contra las cooperativas estatales, que eran repudiadas por los campesinos; y castigaron el robo de ganado e infracciones morales diversas, entre otras, el alcoholismo y el adulterio. En las regiones donde el Estado actuaba poco y cuando lo hacía tenía un carácter represor, la presencia senderista fue asociada con un guardián del orden. Pero como señala Degregori, la intervención de Sendero Luminoso se diferenciaba poco de lo que caracteriza a un buen patrón, que elimina al viejo misti, no para suprimirlo sino para ocupar su lugar. Pues en lugar de estimular la autonomía campesina, su práctica reproducía los aspectos "más autoritarios, cerrados, excluyentes y premodernos de la cultura política peruana" (Degregori, 2013: 192). La cultura senderista pretendía ser más justa pero no más democrática.

Considerando que Sendero tenía como base social una población rural "descampesinada" y "desindianizada", se puede decir que se alejaba de la tradición mariateguista porque nunca apostó por el protagonismo campesino. De hecho, tuvo dificultades para penetrar exactamente en las regiones en las que había organización campesina. También se distanció en el plano socioeconómico, porque pretendía erradicar del campo lo que no fuese senderista o campesino —lo que se describió como "batir el campo" —sin ninguna intención de establecer nexos con las formas políticas o económicas locales. Finalmente, se diferenciaba en el plano ideológico, porque los hallazgos anteriores disociaban la cuestión agraria y la indígena,

borrando una especificidad de la formación peruana destacada por Mariátegui.

En este contexto, la política senderista se enfrentó rápidamente con los campesinos. La disonancia fue evidente en la cosecha de 1982-1983, cuando el movimiento prohibió a los productores acceder a los mercados, toda vez que se pretendía establecer circuitos productivos autárquicos. En este contexto se registraron los primeros actos de resistencia campesina ante la presencia senderista.

Sin embargo, en este mismo período, el primer gobierno civil después de doce años superó sus dudas sobre la intervención militar y el Ejército subió a la sierra. Una declaración del entonces ministro de Guerra, Luis Cisneros Vizquerra, resumió los motivos por los cuales los militares también se resistían a intervenir, al tiempo que anunciaba el carácter de esta actuación. Afirmó que para tomar el control de Ayacucho, "tendrían que comenzar a matar a los senderistas y a los no senderistas, porque esa es la única forma de garantizar el éxito [de la operación]. Matan a sesenta personas y en el mejor de los casos allí hay tres senderistas" (Cisneros Vizquerra, 1983: 50).

La represión desatada por el Ejército avivó una escalada de violencia que ensangrentó a Ayacucho y extendió el conflicto a otras regiones del país. Varios analistas señalan que la conducta de las Fuerzas Armadas fue contraproducente porque forzó a la población a elegir entre el mal menor —y muchas veces este pareció ser Sendero— (Burt, 2011; Degregori, 2013). Compuesto mayoritariamente por reclutas costeños, pocos de los cuales hablaban quechua, el Ejército era percibido por muchos como un invasor. En el contexto de esta política, se registraron más de 4 mil asesinatos y desapariciones forzadas en 1984 (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2008).

Desde el punto de vista de la insurgencia, la respuesta del gobierno encajaba como un guante en la política de Guzmán. El "presidente Gonzalo", como se autodenominaba, pregonaba que la acción senderista explicitaría la violencia estatal, obligando al campesinado a levantarse contra el Estado y, en última instancia, tomar las ciudades.

Esta lectura alcanzó tonos extremos en los años siguientes, derivando en conductas de destrucción insospechada. Así, cuando Alan García asumió la presidencia en 1985 y anunció una nueva estrategia de combate ante la insurgencia, cuyo énfasis estaría en el desarrollo social, Guzmán respondió que sería necesario "quitarle [del gobierno] la careta progresista". El levantamiento simultáneo de senderistas encarcelados en los días en que el APRA organizaba un congreso socialista en Lima, episodio que terminó en la ejecución de trescientos prisioneros, fue concebido con este objetivo. Según esta racionalidad, el levantamiento fue exitoso, ya que hubo una escalada represiva del Estado, atestiguada por el número de asesinatos por motivos políticos, que aumentó de 5,4 por día en 1987 a 8,8 en 1988 y 9,4 en 1989 (Burt, 2011: 126). Mientras tanto, Guzmán proclamaba que "la sangre no detiene la revolución, pero la riega" y estimaba que la revolución podría costar un millón de vidas.

El líder senderista encaraba la militancia de izquierda bajo este mismo prisma y consideraba a sus miembros como aduladores que apaciguaron las contradicciones sociales, retrasando el camino revolucionario. En consecuencia, el movimiento persiguió y asesinó a cientos de líderes sociales y políticos de izquierda. Más sorprendente, la racionalidad senderista determinaba que muchas veces no bastaba matar: era necesario hacerlo de manera ejemplar. Así, la líder popular afroperuana María Elena Moyano fue dinamitada en presencia de sus hijos.

Si retrospectivamente es evidente el carácter antipopular de la insurgencia senderista, que puede ser calificada como terrorista por la izquierda contemporánea, esta lectura no fue inmediata en los años de 1980. Después de todo, como analiza Degregori, Sendero Luminoso surgió como una triple sorpresa: para el Estado y los servicios de inteligencia; para los partidos políticos y las organizaciones sociales y para la comunidad académica. Entre los factores que dificultaron una comprensión precisa de la naturaleza de la insurgencia, se destacan tres: la retórica marxista en un país de rica tradición socialista, en medio

de una coyuntura que se radicalizaba; el aislamiento de Ayacucho en relación a la costa y los preconceptos andinistas[7], confundiendo el Sendero como un movimiento milenarista o indigenista. El escenario se volvió aún más complejo cuando, en 1982, comenzaron las acciones armadas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), una organización guerillera urbana de corte convencional cuya actividad creció durante el gobierno de Alan García.

Aunque la peculiaridad y la destructividad senderista fueran evidentes para aquellos que estaban en contacto directo con lo que ocurría en Ayacucho, muchos no tenían esa conciencia. Para estos, solamente cuando las acciones se intensificaron en Lima quedó claro que Sendero Luminoso era un desafío nacional. Esto ocurrió a fines de los años ochenta, cuando Guzmán evaluó que la confrontación se aproximaba al "equilibrio estratégico" y por eso intensificó los esfuerzos para penetrar la periferia de Lima con la intención de establecer una especie de cinturón insurgente alrededor de la ciudad. Contrario a las apariencias, esta decisión correspondió a un debilitamiento de las posiciones rurales de la organización, amenazadas por una creciente resistencia campesina, principalmente en forma de rondas campesinas. En este período, el Estado cambió su estrategia y, sin dejar la "guerra sucia", invirtió en inteligencia y relaciones con estas organizaciones campesinas, que se convirtieron en Comités de Autodefensa (CAD). A diferencia de sus similares colombianos, estos comités no derivaron en escuadrones paramilitares delincuentes y tuvieron un papel decisivo en la derrota senderista.

Así, la decisión de seguir adelante en Lima surge más como una "fuga hacia adelante", que como una consecuencia del crecimiento orgánico. Pero en su momento, había un genuino recelo en relación al poder insurgente, ya que la repercusión de las acciones senderistas en la capital era amplificada y el poder de fuego de la organización

7 El antropólogo estadounidense Orin Starn (1991) trabaja la noción de "andinismo" en analogía con el concepto de "orientalismo" de Edward Said.

pareció crecer: el número de atentados entre 1988 y 1989 casi se triplicó en relación a 1981 y 1982. Más aterrador desde el punto de vista del Estado, el 47% de los atentados y ataques perpetrados por la organización entre abril de 1989 y diciembre de 1992 tuvieron lugar en la capital, sumando 907 acciones. A principios de la década de 1990, Lima aparecía como una ciudad sitiada (Rénique, 2015: 154). En este momento, el 32% del territorio peruano y el 49% de la población se encontraban bajo el mando militar.

Fue en este contexto que la Izquierda Unida se desintegró y se realizaron las elecciones ganadas por Fujimori. Aunque los testimonios indiquen que la condena a Sendero Luminoso era unánime en la Izquierda Unida, también hay un reconocimiento generalizado de que esta insurgencia causó daños irreparables para el esfuerzo político en curso, además de matar a líderes y militantes. Y en el largo plazo, estigmatizó a la izquierda a un punto que todavía no fue revertido, como reconoce el exsenador Rolando Ames: "Sendero empujó a la opinión pública contra el discurso y la imagen de cualquier izquierda, de toda izquierda o centro izquierda. Ellos hablaban también de Mariátegui, de marxismo, ¡leninismo, maoísmo, etc. —y hacían terrorismo!" (Ames, 2011: 210).

Fujimori

Las conexiones que Naomi Klein (2007) establece entre la "doctrina del choque" y el neoliberalismo, utilizando como caso paradigmático a Chile bajo Augusto Pinochet, encuentran resonancia en el Perú, comandado por Alberto Fujimori (1990-2000). En el caso peruano, el clima de desorden a causa de la degeneración del gobierno aprista y acentuado por la devastación senderista creó el ambiente adecuado para la combinación entre dictadura y neoliberalismo que marcó el régimen. Si la conjunción entre alanismo y senderismo desafió el ascenso de la izquierda peruana, la dictadura fujimorista floreció en este contexto, revirtiendo el descontrol económico, la violencia y la debilidad de la izquierda a su favor. El conservadurismo imperante en

el Perú está relacionado a la sensación aún vigente de que, a pesar de los medios empleados, "el chino" —como era llamado Fujimori— puso orden en la casa.

Para evaluar el significado de este régimen es necesario recordar, en primer lugar, que Fujimori se eligió en oposición a la candidatura de Mario Vargas Llosa, quien asumió el ajuste neoliberal como plataforma. Neófito político que se proyectó en el último mes de la campaña mostrando una imagen de honradez, tecnología y trabajo, tres características asociadas al inmigrante japonés, el *slogan* de Fujimori fue "No al shock económico". Utilizando el profundo descrédito de los políticos y la desmoralización de la izquierda para alimentar un discurso antipartidario, el candidato del improvisado partido Cambio 90 contó con el apoyo del aparato aprista para ser elegido —toda vez que Vargas Llosa se volviera archienemigo de García—, además de beneficiarse del rechazo a la arrogancia criolla de su rival, que hace mucho tiempo no vivía en el país.

Una vez elegido, Fujimori formó una alianza con los militares a través de la siniestra figura de Vladimiro Montesinos, quien se convirtió en el hombre fuerte del régimen: "Montesinos era el hace-todo, no solamente de Fujimori sino del gobierno de los Estados Unidos" (McClintock y Vallas, 2003: 55). Hay indicios de que las Fuerzas Armadas tramaban tomar el poder e implementar un proyecto de reordenamiento nacional previendo décadas de duración, que habría sido ajustado en función de la imprevista complicidad del nuevo presidente (Torres, 2015). Esta aproximación exigió la depuración de los altos mandos militares, cuando el gobierno destituyó a los enemigos y promovió a oficiales cercanos a Montesinos. En líneas generales, la división del trabajo establecida proporcionó poderes dictatoriales al presidente, mientras las Fuerzas Armadas tuvieron carta blanca para enfrentar a la insurgencia —y ambos se sumergieron en la corrupción.

Una vez al mando, Fujimori decretó un estado de emergencia en todo el país. Pocos días después, promulgó el conjunto de medidas conocido como *fujishock*, cuando en evidente contradicción con su

discurso electoral, implementó un programa neoliberal radical. Al eliminar el control de precios de la energía y de otros servicios públicos, se produjo un aumento de precios inmediato, estimado de entre 300% y 1.000%, incrementando en 70% el número de pobres en un día. El objetivo fundamental era, finalmente, recuperar la confianza del mercado financiero y de las instituciones multilaterales reinsertando al Perú en los circuitos financieros internacionales.

Este objetivo fue alcanzado con algunas medidas. La primera fue el programa de estabilización adoptado en agosto de 1990, destinado a controlar la inflación y a regularizar el pago del servicio de la deuda. A continuación, a partir de febrero del año siguiente, se implementaron reformas institucionales favorables al mercado, que incluyeron la desregulación de los mercados financiero y laboral, además de las privatizaciones. El compromiso de disciplinar la política nacional bajo directrices neoliberales consumó el retorno del Perú a los circuitos financieros internacionales. Es relevante notar que el ascenso de Fujimori coincidió con el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, acentuando la presión neoliberal.

Las condiciones de esta reinserción se consolidarían a partir del llamado "autogolpe", cuando Fujimori cerró el Congreso e intervino en el poder judicial en abril de 1992 decretando, a la moda argentina, un "gobierno de emergencia y reconstrucción nacional". Pervirtiendo la democracia, el presidente se escudó en el descrédito de la política institucional, agudizado por el fracaso de los gobiernos de Acción Popular (Belaúnde) y del APRA (García), además del colapso de la Izquierda Unida, para reivindicar el apoyo popular a la medida. Al mismo tiempo, este régimen, en el cual el Ejecutivo centralizó hasta el 75% del presupuesto nacional, implementó una extensa red clientelista lubricada por un programa de alivio a la pobreza apoyado por el FMI, el Banco Mundial y el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES). Esta combinación entre prácticas dictatoriales, apoyo popular y políticas neoliberales llevó a analistas a considerar que se trataba de un gobierno "neopopulista", una categoría imprecisa

que diluía el carácter represivo del régimen, deconstruida de modo convincente por Carlos Vilas (Weyland, 1996; Vilas, 2004).

A pesar de algún esfuerzo por mantener las apariencias, el pilar político del régimen no fueron las elecciones, siempre fraudulentas, sino el Ejército. En el día del "autogolpe", tanques circularon por las ciudades, medios de prensa fueron ocupados y los líderes de la oposición arrestados. La prensa fue sometida a una combinación de cooptación y coerción que garantizó su alineamiento al régimen. Pero lo que dio más peso social al fujimorismo fue la estabilización de la economía —a pesar de su alto costo social— y principalmente el fin del conflicto armado.

Un análisis ponderado de los hechos muestra que la derrota de Sendero Luminoso se debe atribuir a procesos desencadenados en ausencia de Fujimori. La decisión de pasar de una política reactiva a una política planificada, invirtiendo en el trabajo de inteligencia y en políticas de colaboración con el campesinado, en lugar del exterminio, son decisiones que precedieron a las elecciones, así como los reveses senderistas en el campo, que precipitaron el ataque a Lima. En la ciudad, la escalada de atentados agudizó la repulsión hacia esta organización, incluso entre la izquierda. La estrategia senderista en ese momento era profundizar el caos con la esperanza de provocar una intervención estadounidense que crease un escenario análogo al de China de entreguerras, en el cual el nacionalismo y el comunismo convergerían en la resistencia al invasor. Abimael Guzmán declaró que el asesinato de María Elena Moyano en febrero de 1991 se inscribía en esta perspectiva —que, en ese momento, no era alocada—: a principios de 1992, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Interamericanos, Bernard W. Aronson, advirtió a los líderes del Congreso estadounidense que era necesario prepararse para evitar que Sendero Luminoso llegara al poder y desatara el "tercer genocidio" del siglo XX (Burt, 2011: 176).

Pocos meses después, sin embargo, Guzmán fue arrestado en su escondite en Lima y la organización senderista decayó rápidamente,

como síntoma del alto grado de centralización política que lo caracterizaba. Este proceso fue acelerado por la capitulación del propio líder, que en contradicción con la retórica que cultivó, buscó un acuerdo de paz con Fujimori, anunciando el ingreso a una nueva etapa del proceso político. El MRTA, una organización de impacto social relativamente reducido, fue literalmente liquidado en una acción armada asesorada por la CIA en 1996, cuando un secuestro en la casa del embajador japonés fue frustrado y los guerrilleros ejecutados, a pesar de haberse rendido.

El cuidadoso trabajo realizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), establecida poco después de la caída de Fujimori, concluyó que 69.280 personas murieron o desaparecieron como resultado del conflicto en esos años, de las cuales el 53,68% fueron víctimas de Sendero Luminoso. Esta es una proporción extraordinaria si recordamos que en ninguna otra situación en el continente la insurgencia provocó más del 5% de las muertes. Se estima que tres cuartas partes de las víctimas eran campesinos de habla quechua de las regiones más pobres del país, el 40% de ellos residentes en Ayacucho. Entre las víctimas perecieron 1.503 autoridades políticas (incluidos alcaldes, gobernadores, jueces y líderes locales), 2.267 dirigentes campesinos y 1.674 "miembros de las fuerzas del orden" (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2008).

Estos números indican el clima de inseguridad, —y a menudo de terror— que amenazó al país en el período. Este ambiente fue explotado de muchas maneras por el régimen fujimorista. Por un lado, el gobierno se atribuyó el mérito de haber desarticulado la insurgencia y pacificado el país, lo que le valió gran aprobación, en un contexto en el que muchos minimizaron sus violaciones a la democracia como una especie de daño colateral. Por otro lado, el régimen manipuló el miedo generalizado en la sociedad con el objetivo de autolegitimarse, justificando la perpetuación de los mecanismos legales, políticos y militares característicos de un estado de excepción, incluso después de la disminución del conflicto. Más allá de la persecución jurídica facilitada

por una legislación antiterrorista draconiana, la presidencia autorizó el asesinato y la desaparición de profesores, estudiantes, campesinos y líderes obreros con el pretexto de la lucha contra la subversión. A menudo las muertes fueron atribuidas a Sendero Luminoso, como en el caso del asesinato del sindicalista Pedro Huilca, un crítico contumaz de las políticas de Fujimori. En el campo, el mantenimiento del estado de emergencia significó que las Fuerzas Armadas ejercían la autoridad máxima en muchas partes del territorio.

En el plano económico, son conocidos los efectos de la combinación entre estabilización y reforma estructural en el marco del neoliberalismo. La inflación fue controlada a través de mecanismos que condujeron a la apreciación del tipo de cambio combinada con un aumento de las importaciones, que tuvo efectos destructivos en la industria nacional, agravando los déficits de transacciones corrientes, cubiertos por privatizaciones y préstamos del FMI. La deuda externa se duplicó durante el gobierno de Fujimori, alcanzando el 53% del PIB —cifra mucho más alta que las observadas en Chile, México o Brasil—, mientras los pagos anuales se cuadruplicaron (McClintock y Vallas, 2003). El crecimiento del 59% de las exportaciones entre 1989 y 1998 no acompañó la explosión de las importaciones, que subieron un 264%, volviendo deficitaria a la balanza comercial peruana a lo largo de la década (Cano, 2000: 486). La reforma del mercado de capitales, la reforma fiscal, la reforma del mercado laboral y las privatizaciones generalizadas complementaron la apertura.

En resumen, fue desmantelado lo que quedaba de la estructura velasquista, tanto en la ciudad como en el campo —donde fue implementada una "reforma de la reforma agraria"—. La informalidad del trabajo y la economía ilegal se expandieron: durante la década de 1990, el número de trabajadores con contrato de empleo temporal se duplicó, mientras que el subempleo alcanzó tres cuartas partes de la población económicamente activa al final de la década. La ideología que transforma la precarización de las relaciones de trabajo,

de problema social en oportunidad emprendedora, prosperó en ese medio (De Soto, 1992).

Aunque los límites de esta política económica ya se evidenciaron a fines de la década de 1990, la caída del régimen se precipitó por razones fundamentalmente políticas. Solución traumática para una sociedad traumatizada, el fujimontesinismo del que habla Quijano se derrumbó por dentro, pero también fue empujado por afuera. Los escándalos detonados por la circulación de los "vladivideos", grabados por Montesinos para disciplinar a sus secuaces y que documentaban la corrupción endémica del régimen, afloraron en un momento de ascendente oposición callejera, intensificada después de las elecciones fraudulentas de 2000. En realidad, la propia participación de Fujimori en las elecciones fue una farsa, ya que la Constitución, que él mismo promulgó, prohibía un tercer mandato. También los Estados Unidos señalaron que dejarían de apoyar al régimen, decisión que se aceleró cuando salió a la luz una operación que involucraba a Montesinos con el narcotráfico y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Enfrentado a la corrosión del aparato de poder que erigió, con las protestas en las calles y con la presión estadounidense, Fujimori envió su renuncia por fax desde Japón en 2000. El hecho de que el dictador cayera —en lugar de bajar— del poder fue significativo, porque preparó el clima para las investigaciones sobre el conflicto interno peruano bajo la coordinación de la CVR que, a pesar de límites y dificultades, iluminó la historia reciente del país y subsidió el juicio de numerosos criminales, entre ellos el propio Fujimori.

Legado fujimorista

La votación presidencial posterior a la renuncia de Fujimori eligió a Alejandro Toledo (2001-2006), una figura que había liderado las protestas contra el fraude y el abuso electoral cometidos por el régimen en sus últimos momentos. En la elección siguiente, Alan García triunfó por poco sobre Ollanta Humala, un militar que en ese momento estaba asociado a la izquierda y a Hugo Chávez.

En su segundo mandato, entre 2006 y 2010, García abandonó los velos izquierdistas y dirigió un gobierno francamente neoliberal. Mientras en su campaña criticó al modelo de explotación minera en que se asentaba el crecimiento peruano —que prácticamente eximía a las empresas de las obligaciones fiscales o medioambientales—, su gobierno mantuvo la estructura normativa heredada de Fujimori y no tocada por Toledo. A nivel comercial, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos firmado durante la administración de Toledo entró en vigencia el 1 de febrero de 2009, sin ninguna oposición del gobierno de García.

En las siguientes elecciones, en 2011, Ollanta Humala, quien en la campaña de 2006 asumió una posición contraria al TLC, hecho que contribuyó para que fuera asociado a Hugo Chávez, se empeñó en distanciarse del venezolano, indicando una identificación con el petismo brasileño —que apoyó y asesoró su exitosa campaña.

Más allá de los matices entre los mandatarios, algunas paradojas llaman la atención en la política peruana del período. Primero, desde el fin del régimen militar en los años de 1970, ningún gobernante eligió a su sucesor: siempre ganó un candidato de la oposición. Sin embargo, el nuevo mandatario a menudo contradecía abiertamente su plataforma, constituyendo una sucesión de estelionatos electorales, una expresión extrema de la hipocresía que caracteriza a la democracia contemporánea (Panitch y Leys, 2005). Evidentemente, este fenómeno corroe la legitimidad de los partidos, alimentando una despolitización que favorece el conservadurismo. Fujimori, quien fue la expresión más radical de la mentira electoral, manejó conscientemente esta despolitización. Las mentiras de Ollanta Humala cuando estaba en la presidencia también fueron notorias, así como la promesa de privilegiar la preservación de las fuentes de agua en detrimento de la explotación de oro —"¡agua sí, oro no!"—, que colapsó frente a los conflictos sobre el proyecto minero Conga.

Más allá de la política como mentira, la repetición de victorias de una oposición que pronto niega su discurso electoral sugiere

dificultades para modificar las estructuras legadas por el fujimorismo. A pesar del descrédito de su figura máxima, quien pasó más de diez años en la cárcel[8], y del decline del prestigio de la institución militar, socia directa de la violencia y de la corrupción que asolaron al régimen, los fundamentos del patrón capitalista de reproducción de ese gobierno permanecen sin cuestionamientos.

En términos generales, se construyó una economía abierta, que ancla su inserción internacional en la exportación de minerales, impulsada por inversiones extranjeras atraídas por las bajas exigencias fiscales, laborales y ambientales. El marco jurídico de este modelo se constituyó a partir de la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada de noviembre de 1991 y fue consolidado en la Constitución promulgada en 1993, que garantizaba términos privilegiados, además de estabilidad jurídica y fiscal a las inversiones internacionales. El nuevo texto, que sigue vigente, también eliminó el carácter inalienable de las tierras de las comunidades campesinas y nativas, además de establecer que los recursos naturales dejarían de ser patrimonio exclusivo de la nación (Bebbington, Chaparro y Scurrah, 2014: 35).

Desde entonces, el crecimiento económico peruano ha sido un tributo a la extraordinaria expansión de la minería multinacional en el país. Los picos de crecimiento se alcanzaron en la década de 1990, siendo respectivamente 10,9% en 1993, 15,2% en 1994, 10,8% en 1997 y 16% en 1999 (Alayza y Gudynas, 2012: 65). En general, la inversión se incrementó en los años posteriores a Fujimori, en el contexto del aumento internacional de los precios de las *commodities*: la inversión extranjera directa aumentó del 4,5% del PIB, entre 1990 y 2000, al 25% en 2007. En 2009 Perú fue el país que más inversiones mineras

8 Contrariamente a un compromiso de campaña, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski indultó a Fujimori en diciembre de 2017, luego de un proceso de *impeachment* en el que tuvo los votos del grupo de Keiko Fujimori, la hija del exdictador, para permanecer en el cargo. Después, la difusión de videos comprobando la compra de votos por el gobierno, para frenar el juicio político del presidente en el Congreso —resultó en la apertura de un nuevo proceso de *impeachment*— PPK, como es conocido, renunció el 23 de marzo de 2018.

recibía en el continente, y el tercero en el mundo después de Canadá y Australia. Para fines comparativos, en 2011, el gasto de Brasil en investigación geológica totalizó el 60% de la inversión en Perú, aunque el territorio brasileño es siete veces más extenso.

Como expresión territorial de esta expansión, a principios de la década de 1990, las concesiones mineras ocuparon 2,3 millones de hectáreas, mientras que, un cuarto de siglo después, bordeaban los 25 millones. La actividad pasó de las alturas andinas a los valles, la costa e incluso a la Amazonía. Hay departamentos donde las concesiones mineras se acercan o superan la mitad del territorio, como Arequipa, Ancash, Lima, La Libertad, Moquegua, Huancavelica y Tacna (Mansur, 2014: 75). En 2017, Perú estaba entre los mayores productores mundiales de plata (tercero), oro (sexto), zinc (tercero), estaño (tercero), plomo (cuarto) y cobre (segundo). También concentraba el 40% de las reservas mundiales de oro en 2008.

Después de veinte años de expansión, la dependencia del país en relación a este sector de la economía se acentuó. Se estima que el 22% de la recaudación de los ingresos internos entre 2007 y 2010 provino de la minería y cerca del 6% del PIB y el 60% de las exportaciones derivan de estas actividades en la actualidad. Sin embargo, en función a las características del marco regulatorio del sector, se frustró cualquier aumento sustancial en la captación de impuestos, pues están eximidas, por ejemplo, las llamadas ganancias extraordinarias. Algunos remiten la paradoja de gobernantes impopulares en el contexto del crecimiento económico en Perú a las posibilidades limitadas para el Estado de convertir esta riqueza en programas sociales, en contraste con otros países de la región (Barros y Hitner, 2010).

Esta limitación se agudiza toda vez que, desde el punto de vista de las relaciones laborales, la minería contemporánea es una actividad que requiere grandes inversiones de capital, pero emplea poca fuerza de trabajo. Así, el otro lado de la política de desregulación mercantil y atracción de la inversión extranjera, que favoreció a la minería en detrimento de los sectores asociados a la producción nacional, fue el

crecimiento del desempleo y de la economía informal, impulsando así la economía criminal, que gravita en torno a la piratería, el contrabando y el narcotráfico. El Perú es hoy uno de los principales exportadores de cocaína del continente. Al mismo tiempo, se constata un aumento de los problemas de seguridad relacionados a la delincuencia común en el marco de una degradación del tejido social del país. En el plano sociológico, Francisco Durand señaló que la mezcla entre informalidad y delincuencia está tan arraigada en la sociabilidad peruana contemporánea que termina "haciendo parte integral de la matriz institucional del país" (Durand, 2007: 69).

Otra cara del crecimiento minero es el aumento de los conflictos socioambientales en el país. En contraste con la impotencia de la política institucional, hay numerosos casos en los que la resistencia popular interrumpió proyectos vinculados a la economía extractivista, como los proyectos mineros en Tambogrande y Conga, o la hidroeléctrica de Inambari. Entre los conflictos socioambientales registrados, el 64% están relacionados con la minería y algunos involucran un alto grado de violencia: entre 2006 y 2011, 195 personas fueron asesinadas en conflictos sociales y 2.312, entre civiles y policías, resultaron heridos, configurando la cifra más alta del continente en el período. El episodio más letal fue la llamada masacre de Bagua en 2009, cuando se contaron 34 muertos, incluidos 24 policías y diez indígenas, en resistencia a uno de los proyectos de oro más grandes de la actualidad (Guevara, 2013).

A pesar de la audaz resistencia popular a proyectos de impacto social y ambiental diverso, que gravitan entre la extracción forzada y el agotamiento del agua, pasando por diversos niveles de contaminación ambiental, no hubo cualquier cambio en los medios y en los fines de la política estatal desde Fujimori. En el mismo año de la masacre de Bagua, el ministro de Economía anunció que habrían multas para los funcionarios públicos que demorasen más de 100 días para realizar estudios de impacto ambiental, exigencia previa a la aprobación de los proyectos mineros (Mansur, 2014: 74). En este escenario, existe la percepción entre quienes se resisten al proceso de que la expansión

minera implica un esfuerzo continuo, pero de intensidad intermitente, lo que significa que los proyectos detenidos volverán en el futuro, con estrategias refinadas para convencer o imponer sus intereses (Gamboa, 2015; Choquehuanca, 2015).

En esta perspectiva, mientras el gobierno de Humala anunció una lista de nuevos proyectos mineros de valor superior a 41 mil millones de dólares, datos de la Defensoría del Pueblo registraron en el país 210 conflictos sociales en enero de 2015, de los cuales 140 eran de naturaleza socioambiental. Hasta mediados de 2015 hubo 65 víctimas fatales en conflictos sociales en el gobierno iniciado en 2011. A mediados de 2015, una de las principales ciudades del país, Arequipa, estaba ocupada por el Ejército debido a los conflictos derivados del proyecto minero Tía María, para nombrar un hecho de mayor repercusión.

La cara complementaria de esta modalidad de "acumulación por desposesión" es la política estatal de presentar al Perú como una marca —la llamada "Marca Perú"—, que explota algunos nichos de consumo sofisticado, especialmente gastronomía, mientras se exportan géneros como espárragos, pimentón, alcachofa, palta y quinua. Esta promoción del país para el consumo externo, movilizando motivos entre lo *cult* y lo exótico, es similar al proyecto de inserción internacional peruano, en el que el mercado define no solo su inserción en la división internacional del trabajo, sino también su propia identidad nacional. En la descripción de una docente universitaria, las piezas publicitarias de televisión de la Marca Perú pretenden enseñar a los propios peruanos quiénes son, preparándolos, entre otras finalidades, para recibir a los turistas (Pease, 2015). Es el *marketing* supliendo las deficiencias de la historia, resolviendo por medio de un simulacro la identidad nacional que la aristocracia criolla, Mariátegui y Velasco, entre otros, no pudieron afirmar.

Claramente, las contradicciones entre el extractivismo y la Marca Perú se evidencian en la amenaza a los recursos hidrobiológicos del país. El aumento en el consumo mundial de proteínas animales desde fines de la década de 1980, impulsado por China, elevó los precios

de la anchoveta, que tiene Perú, país pesquero, uno de sus mayores productores mundiales. En un proceso análogo a la expansión de la soja en el continente, la anchoa sirve como materia prima para la harina y el aceite de pescado, que, a su vez, alimenta a peces criados en cautividad en otros países. Sin embargo, el crecimiento de la pesca industrial de anchoa en la costa peruana amenaza el sustento de otros peces, en particular los que son apreciados para el ceviche —plato principal de la cocina peruana promovida a nivel mundial (Sueiro, 2012).

Reflexiones finales

La movilización estimulada en el contexto del velasquismo fue insuficiente para trascenderlo, pero armó la resistencia popular al ataque neoliberal en la década de 1980, cuando la izquierda peruana estuvo en la vanguardia del continente. Sin embargo, dos procesos perversos colocaron su expresión política organizada —la Izquierda Unida— frente a impases que precipitaron su repentino colapso, en medio de las ambigüedades del proyecto aprista, que finalmente llegó al gobierno con Alan García. La retórica y el simbolismo progresista de este gobierno disfrazaron el oportunismo y la venalidad que lo impulsaban, resultando en ambivalencias que llevaron al país al caos socioeconómico, preparando el escenario para las políticas de choque que siguieron. El canto de sirena aprista engañó a parte de la izquierda, encantada con la posibilidad de una alternancia electoral que solo agudizó sus contradicciones internas, mientras que el apoyo a una estatización inconsecuente de los bancos explicitó las dificultades para afirmar un liderazgo autónomo, en el momento en que la derecha recuperaba la iniciativa política.

Este escenario se volvió aún más confuso con la expansión de un fenómeno político original que pervertía la retórica y la cultura de la izquierda, haciendo que una organización de orientación terrorista apareciera como una guerrilla marxista. Después de sembrar la

guerra civil en los rincones empobrecidos del país, Sendero Luminoso intensificó sus acciones urbanas a finales de la década, anunciando una embestida para cercar la capital en medio del asesinato de líderes civiles de izquierda y atentados que amedrentaron al país. Frente a los desafíos planteados por esta coyuntura compleja, la Izquierda Unida no se diferenció claramente del alanismo y del senderismo, pero sucumbió ante las diferencias internas, revelando aspectos caudillescos y dogmáticos que permeaban la cultura política de la izquierda.

Fujimori fue elegido presidente en este contexto crítico con una plataforma que parecía capturar, tanto el rechazo popular a la política criolla personificada en Vargas Llosa y una desconfianza de cara a las ambigüedades izquierdistas, que oscilaba entre un pasado radical, como el de Sendero Luminoso y un futuro gobernista, como el APRA. Haciendo de las Fuerzas Armadas su partido, Fujimori se basó en el descrédito generalizado de la política y en la oportunidad de pacificación del país para consolidar un régimen dictatorial, cuyos éxitos relativos afirmaron los hitos fundamentales con los que se mueve la sociedad peruana en la actualidad: neoliberalismo, extractivismo mineral, libre comercio, informalidad laboral, economía delictiva y narcotráfico. La alternancia de partidos desde la caída de Fujimori en 2000 apenas oculta el conservadurismo de la política nacional, cuyo descrédito institucional fue agravado por la naturalidad con la que los candidatos elegidos por la oposición negaron sus promesas de campaña.

Este estrechamiento del horizonte político se evidenció por las candidaturas que se diseñaban a mediados de 2015 para suceder a Humala, lo que ocurriría en las elecciones de 2016. En un contexto en el cual el entonces presidente mostraba bajos índices de aprobación, se perfilaron tres candidaturas competitivas: Alan García, ícono de la política convencional y la corrupción; Keiko Fujimori, hija del exdictador encarcelado y que promete amnistiarlo; y Pedro Pablo Kuczynski, exministro de Economía del gobierno de Toledo, destacado cuadro neoliberal y el principal lobista estadounidense en el país,

un hombre que vivía en el Sheraton mientras su familia vivía en los Estados Unidos y que alentó a los peruanos a aprender inglés para eventualmente dejar el país[9].

En el campo de la izquierda, se vislumbraron dos polos que revelaron dificultades para unificarse. El congresista Sergio Tejada se presentó como candidato del Bloque Popular Nacional, reinvindicando una posición de centro izquierda proveniente de la tradición institucional de Izquierda Unida, a la cual está afiliada la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán (2011-2014), vinculada a la coalición conocida como Únete. Por otro lado, hubo esfuerzos para organizar la resistencia territorialmente dispersa al extractivismo en una alternativa política nacional. Este movimiento tiene como figura principal a Marco Arana, el exsacerdote y fundador del Movimiento Tierra y Libertad, una de las organizaciones que conforman el Frente Amplio. Arana fue derrotado en previas internas por la joven diputada de Cusco, Verónika Mendoza, que fue candidata presidencial de la coalición. La principal división entre los dos polos es la postura en relación a la minería, en la que el Frente Amplio ensayaba una problematización del patrón extractivista, mientras que Únete favorecía la negociación de mejores términos para el Estado, a la manera de sus vecinos andinos. Pero no se trata de una división lineal: el gobernador de Cajamarca y el líder regional contra los proyectos mineros del departamento, Gregorio Santos, flirteó con la segunda organización, aunque su movilidad política haya sido literalmente bloqueada desde que fue encarcelado por cargos de corrupción en 2014 —lo que no impidió que fuera reelecto a fines de este año, aunque no pudiese ser posesionado[10].

9 El PPK venció a Keiko en la segunda vuelta por un estrecho margen del 0,24% de los votos [n.e.].

10 Verónika Mendoza quedó en tercer lugar en la primera vuelta de las elecciones, con el 18,8% de los votos, apenas tres puntos porcentuales detrás del segundo lugar, PPK, que tuvo el 20,99%. Tejada renunció a la candidatura para apoyar al Frente Amplio. Gregorio Santos recibió 4%, más que la diferencia entre Mendoza y PPK.

Las condiciones para difundir un discurso alternativo al extractivismo avanzan en el país. Por ejemplo, en la Marcha Nacional por el Agua y la protesta que le siguió, cerca de veinte mil personas se reunieron en Lima en 2012 contra el proyecto minero de Conga. El lema que movió esta protesta fue defender el agua, y no la reinvindicación de mayores ingresos mineros, que caracteriza protestas similares. Sin embargo, existen diversos condicionantes históricos y políticos que diferencian el contexto peruano de Bolivia y de Ecuador, donde el protagonismo indígena en las luchas recientes colocó el tema del Bien Vivir en la agenda nacional. Estas singularidades envuelven aspectos objetivos, como el carácter de la reforma agraria velasquista, que priorizó un cooperativismo de inspiración yugoslava en detrimento de las formas indígenas de producción, pero también subjetivos, como la subsunción de la identidad indígena a la campesina favorecida por este régimen.

En otro plano, las violentas turbulencias que sucedieron al GRFA, que a su vez también fue un período de cambio acelerado, parecen haber favorecido la aceptación de los parámetros de un orden aparentemente estable, a pesar de todo. El drama de la política peruana contemporánea es que la recuperación de la paz y de la estabilidad está asociada a una combinación entre represión estatal y fundamentalismo neoliberal. Es esta percepción que explica el prestigio de Keiko Fujimori a pesar de la desmoralización internacional de su padre. La resistencia al cambio se ve agravada por la prosperidad superficial basada en las exportaciones de minerales, la economía delictiva y más recientemente, en la autoemulación evocada por la Marca Perú.

Las paradojas de la política peruana contemporánea, donde los gobiernos elegidos en oposición practican la continuidad; ningún presidente eligió a su sucesor, a pesar del crecimiento económico; la pesca extractivista amenaza al símbolo principal de la Marca Perú; y la protesta popular bloquea los proyectos extractivos sin cuajar una alternativa política nacional, expresan, en un contexto particularmente adverso, los impases de la política en América Latina actualmente. Se observa que el neoliberalismo no tiene legitimidad para reproducirse,

pero se perpetúa apoyado en un engranaje político impermeable a los anhelos populares, que naturaliza la mentira, la corrupción y la explotación, lo que solo es viable debido a la corrosión del tejido social, de las formas de resistencia organizada y del horizonte utópico que su propia implementación implicó, un proceso que se dio de manera particularmente traumática en la circunstancia peruana.

Bibliografía

ADRIANZÉN, ALBERTO (ed.)

2011a *Apogeo y crisis de la izquierda peruana. Hablan sus protagonistas*. Lima: IDEA y UARM.

2011b "La izquierda derrotada", en Alberto Adrianzén (ed.), *Apogeo y crisis de la izquierda peruana. Hablan sus protagonistas*. Lima: IDEA y UARM, pp. 45-60.

ALAYZA, ALEJANDRA Y EDUARDO GUDYNAS

2012 *Transiciones postextractivistas y alternativas al extractivismo en el Perú*. Lima: Cepes.

AMES, ROLANDO

2011 "Entrevista", en Alberto Adrianzén (ed.), *Apogeo y crisis de la izquierda peruana. Hablan sus protagonistas*. Lima: IDEA y UARM, pp. 203-214.

ANDERSON, BENEDICT

1983 *Imagined communities*. Londres: Verso.

BARROS, PEDRO Y VERENA HITNER

2010 "A economia política do Peru: da ruptura interrompida aos dilemas contemporâneos", en *Revista Oikos*, vol. 9, núm. 2, pp. 143-64.

BEBBINGTON, ANTHONY; ANAHÍ CHAPARRO Y MARTIN SCURRAH

2014 "El Estado compensador peruano y la persistencia del modelo neo-extractivista: seis hipótesis sobre el (no) cambio institucional", en *Debate agrario*, núm. 46, pp. 29-50.

BLANCO, HUGO
1979 *Terra ou morte*. São Paulo: Versus.

BURT, JO-MARIE
2011 *Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori*. Lima: IEP, SER y EPAF.

CANO, WILSON
2000 *Soberania e política econômica na América Latina*. São Paulo: Unesp.

CASTAÑEDA, JORGE
1994 *Utopia desarmada*. São Paulo: Cia. das Letras.

CHOSSUDOVSKY, MICHEL
1999 *A globalização da pobreza: impactos das reformas do FMI e do Banco Mundial*. São Paulo: Moderna.

CISNEROS VIZQUERRA, LUIS
1983 "Ayacucho: la espera del gaucho", en *Revista Quehacer*, núm. 20, pp. 46-58.

COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN
2008 *Informe final*. Versión en cinco fascículos. Lima: IDDHC y PUC.

COTLER, JULIO
1978 *Clases, Estado y nación en el Perú*. Lima: IEP.

DE ECHAVE, JOSÉ
2012 "La minería peruana y los escenarios de transición", en Alejandra Alayza y Eduardo Gudynas, *Transiciones postextractivistas y alternativas al extractivismo en el Perú*. Lima: Cepes.

DE SOTO, HERNANDO
1992 *El otro sendero*. Lima: Sudamérica.

DEGREGORI, CARLOS IVÁN
2013 *Qué difícil es ser Dios*. Lima: IEP.
2010 *El surgimiento de Sendero Luminoso: Ayacucho 1969-1979*. Lima: IEP.

DIEZ CANSECO, JAVIER
2011 "Exorcizando Izquierda Unida", en Alberto Adrianzén (ed.), *Apogeo y crisis de la izquierda peruana. Hablan sus protagonistas*. Lima: IDEA y UARM.

DURAND, FRANCISCO
2007 *El Perú fracturado. Formalidad, informalidad y economía delictiva*. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.

GONZALES, OMAR
2011 "La izquierda peruana: una estructura ausente", en Alberto Adrianzén (ed.), *Apogeo y crisis de la izquierda peruana. Hablan sus protagonistas*. Lima: IDEA y UARM.

GUDYNAS, EDUARDO
2010 "Si eres tan progresista, ¿por qué destruyes la naturaleza? Neoextractivismo, izquierda y alternativas", en *Ecuador Debate*, núm. 79, pp. 61-81.

GUERRA GARCÍA, FRANCISCO
2011 "Notas preliminares sobre la experiencia de la Izquierda Unida", en Alberto Adrianzén (ed.), *Apogeo y crisis de la izquierda peruana. Hablan sus protagonistas*. Lima: IDEA y UARM, pp. 61-96.

GUEVARA ARANDA, ROBERTO
2013 *Bagua: de la resistencia a la utopía indígena*. Lima: Punto & Grafía S.A.C.

KLEIN, NAOMI
2007 *Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism*. Toronto: Knopf.

MANSUR, MAÍRA SERTÃ
2014 "Peru: agricultura vs. mineração", en Juliana Malerba (org.), *Diferentes formas de dizernão. Experiências internacionais de resistência, restrição e proibição ao extrativismo mineral*. Rio de Janeiro: Fase.

MATOS MAR, JOSÉ
1987 *Desborde popular y crisis del Estado*. Lima: IEP.

McCLINTOCK, CYNTHIA Y FABIAN VALLAS
2003 *The United States and Peru: Cooperation at a Cost*. New York: Routledge.

MIJOLLA, ALAIN DE (ed.)
2005 *Dictionnaire international de la psychanalyse*. Volumen 2. Paris: Hachette.

PANITCH, LEO Y COLIN LEYS
2005 *Telling the Truth. Socialist Register 2006*. Londres: Merlin.

PEASE, HENRY
2011 "Entrevista", en Alberto Adrianzén (ed.), *Apogeo y crisis de la izquierda peruana. Hablan sus protagonistas*. Lima: IDEA y UARM, pp. 461-462.

QUIJANO, ANÍBAL
1971 *Nacionalismo, neoimperialismo y militarismo en el Perú*. Buenos Aires: Periferia.

RÉNIQUE, JOSÉ LUIS
2015 *Incendiar la pradera. Un ensayo sobre la revolución en el Perú*. Lima: La Siniestra.

RUDOLPH, JAMES
1992 *Peru: The Evolution of a Crisis*. Westport: Praeger.

STARN, ORIN
1991 "Missing the Revolution: Anthropologists and the War in Peru", en *Cultural Anthropology*, vol. 6, núm. 1, febrero, pp. 63-91.

SUEIRO, JUAN CARLOS
2012 "Explotación de los recursos hidrobiológicos en el post-extractivismo: el caso de la anchoveta", en Alejandra Alayza y Eduardo Gudynas, *Transiciones postextractivistas y alternativas al extractivismo en el Perú*. Lima: Cepes.

VELASCO ALVARADO, JUAN
1969 "Mensaje a la nación con motivo de la promulgación de la Ley de la Reforma Agraria". Disponible en: https://www.marxists.org/espanol/tematica/agro/peru/velasco1969.htm.

VILAS, CARLOS
2004 "¿Populismos reciclados o neoliberalismo a secas? El mito del 'neopopulismo' latinoamericano", en *Revista de Sociología Política*, núm. 22, junio, pp. 135-151. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782004000100011&lng=en&nrm=iso.

WEYLAND, KURT
1996 "Neo-Populism and Neo-Liberalism in Latin America: Unexpected *Affinities", en Studies in Comparative International Development*, vol. 31, núm. 3, pp. 2-31.

ZAPATA, ANTONIO
2011 "Entrevista", en Alberto Adrianzén (ed.), *Apogeo y crisis de la izquierda peruana. Hablan sus protagonistas*. Lima: IDEA y UARM, pp. 507-530.

Conversaciones

Lima, julio de 2015

ADRIANZÉN, ALBERTO. Sociólogo, asesor de la presidencia entre 2000 y 2001.
CHAN, ALAN. Director de la operación de Odebrecht en Perú.
AZCUETA, MICHEL. Líder político histórico y exalcalde de Villa El Salvador.
BLANCO, HUGO. Militante, exlíder guerrillero, exdiputado.
CUETO, ROSA MARÍA. Profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
DURAND, ANAHI. Entonces militante de Tierra y Libertad.
CHOQUEHUANCA, ZENÓN. Coordinador de la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER) en Puno.
ESPINOSA, OSCAR. Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
GAMBOA, CÉSAR. Director ejecutivo de la organización Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
PEASE, MARÍA ANGÉLICA. Profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
PALOSCHI, JONAS. Jefe del Sector Cultural y Cooperación Educativa de la embajada brasileña en Lima.
QUIJANO, ANÍBAL. Sociólogo.
TORRES, JAVIER. Periodista de *La Mula* y dirigente de la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER).
VARGAS, ANDRÉS LUNA. Exsenador de la República.

Guerra y paz en Colombia en perspectiva histórica

Colombia fue y sigue siendo una prueba de que la reforma gradual en el marco de la democracia liberal no es la única, ni siquiera la alternativa más plausible a las revoluciones sociales, incluyendo aquellas que fracasan o son abortadas. Yo descubrí un país en el que el fracaso en hacer una revolución social hizo de la violencia el núcleo constante, universal y omnipresente de la vida pública.

Eric Hobsbawm, *Años interesantes: una vida en el siglo XX*

[Juan Manuel] Santos abre la vía del castrochavismo al pactar con las FARC.

Álvaro Uribe, 2014

Introducción

La política colombiana a principios del siglo XXI fue asociada a las antípodas de la ola progresista. En un país con una larga historia de conflicto armado, el Plan Colombia firmado con los Estados Unidos en 2001 y la elección de Álvaro Uribe en 2002 intensificaron la represión a la guerrilla y la criminalización de toda disidencia. Más que un reaccionario que surfeó en la retórica antiterrorista desde el atentado a las Torres Gemelas, Uribe encarnó un proyecto de poder identificado con la llamada "parapolítica", que embruteció y envenenó la cultura política del país. Es necesario analizar el significado y la resonancia de este fenómeno para comprender los obstáculos a una salida negociada al conflicto armado y la derrota del plebiscito por la paz, que en 2016 culminó las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) iniciadas en 2012 en La Habana.

El *uribismo* echa raíces en la singular violencia que caracteriza el patrón de lucha de clases en la Colombia contemporánea, reconstruida

en este capítulo con el propósito de situar, en una perspectiva histórica, los dilemas inherentes al proceso de paz. Mi hipótesis es que la situación colombiana evidencia, de manera extrema, los impedimentos al cambio dentro del orden en América Latina, explicitando el carácter antinacional, antidemocrático y antipopular de las clases dominantes en el continente. Sintetizado por la disyuntiva entre prolongar la lucha armada sometiendo a toda la oposición a la criminalización, o deponer las armas exponiéndose al exterminio, el dilema colombiano explicita los obstáculos a la vía burguesa para la nación. En esta realidad, la disyuntiva entre reforma o revolución se diluye, porque frente a la contrarrevolución permanente, la reforma es revolución.

Preámbulo

Estadísticas conservadoras indican que entre 1958 y 2012, 220 mil personas fueron asesinadas por razones políticas en Colombia, de las cuales el 81% eran civiles (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013: 10). Sin embargo, fue el período inmediatamente anterior a este, iniciado con el asesinato del líder popular liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948, que quedó conocido en la literatura como *La Violencia*: se estima que hubo un número equivalente de víctimas políticas en esos años.

Muchos de los muertos eran figuras públicas, como los tres candidatos presidenciales asesinados en la campaña electoral de 1990, o el defensor Andrés Escobar, autor de un gol en contra que eliminó a la selección colombiana de la Copa Mundial de 1994. Otros eran militantes: según el testimonio de los líderes de la Unión Sindical Obrera (USO), de cada 100 sindicalistas asesinados en el mundo en años recientes, 51 son colombianos, contabilizando en 2014, 2.652 trabajadores asesinados (Gómez, 2014). Muchas de estas muertes fueron perpetradas por sicarios que no dejan rastros, en zonas periféricas de los centros urbanos o en el campo.

Además de los asesinatos selectivos, hay numerosas masacres. Entre 1985 y 2012, hubo casi dos mil matanzas, victimando a 11.751 personas. Algunas muertes tuvieron repercusión nacional, como cuando nueve investigadores del paramilitarismo en la región del Magdalena Medio fueron asesinados en 1989 (Páez, 2014). Pero la mayoría de estos crímenes no reciben tanta atención, como suele ocurrir con las masacres en las periferias de todo el mundo. En este mismo período, fueron registradas 25.007 desapariciones forzadas. Hay 2.700 casos de "falsos positivos", es decir, jóvenes vestidos con uniformes de guerrilla que fueron asesinados por el Ejército para que sus ejecutores recibieran la recompensa del gobierno, establecida en cerca de 1,9 mil dólares en 2005 (Fundación Lazos de Dignidad, 2014).

El asesinato y la desaparición de civiles han sido utilizados como forma de intimidar a la población, obligando a jurar lealtad a un grupo que reivindica el dominio del territorio. En la mayoría de estos casos, la responsabilidad es atribuida a los paramilitares: "Su marca distintiva ha sido matar masiva o selectivamente, desapareciendo con sus víctimas, despojándolas de sus tierras, cometiendo delitos con crueldad y ejerciendo la violencia sexual" (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013: 25).

Sin embargo, es un error interpretarlos como un "tercer actor" en un conflicto protagonizado por el Ejército y las guerrillas, pues son notorias las relaciones del paramilitarismo con las fuerzas públicas, tanto en su origen como en su forma de operar, así como en su pretendido desarme. En la actualidad los vínculos entre el Estado, los paramilitares y el narcotráfico dieron forma al fenómeno conocido como "parapolítica". Estimaciones moderadas durante el gobierno de Santos indicaban que un tercio de los parlamentarios del país tenían vínculos directos con actividades delictivas, incluyendo el senador y el expresidente Álvaro Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010 (Avella, 2014). Además de la violencia letal, otras formas de violencia están muy extendidas, como la desaparición forzada, la violencia personal, las minas antipersonales y el secuestro.

Como resultado de la violencia en el campo, el país produjo cinco millones de desplazados internos y cerca de nueve millones de refugiados, cifras que solo se comparan a las de la República Democrática del Congo. Entre 1998 y 2008, aproximadamente 760 mil familias fueron expulsadas, dejando cerca de 5,5 millones de hectáreas de tierra. Se estima que el 45% del territorio nacional colombiano esté cubierto por minas. En las últimas tres décadas, 10 mil personas fueron alcanzadas por la explosión de estos artefactos, dos mil de ellas murieron. La violencia transformó los roles culturalmente atribuidos a los hombres, ya que a menudo, el desplazamiento forzado los distanció de su trabajo y de su comunidad. Muchos perdieron la condición de proveedores de servicios del hogar, siendo obligados a aceptar trabajos que consideran degradantes —o incluso a mendigar— (Red Derecho y Desplazamiento, 2010; Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

Por otro lado, el foco de la violencia guerrillera ha sido, en sus más de cincuenta años de existencia, el combate a las fuerzas estatales, los daños al patrimonio y el secuestro con fines políticos y económicos. Hay 27.023 casos de secuestro documentados, de los cuales 16 mil ocurrieron entre 1996 y 2002. Entre los perpetrados por la guerrilla está la detención de 318 prefectos, 332 concejales, 52 diputados, 54 congresistas y 790 militares y policías (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Uno de los episodios extremos fue la toma del Palacio de Justicia por el Movimiento 19 de abril (M-19) en 1985, una operación que terminó con la invasión del Ejército y la muerte de los guerrilleros y sus rehenes —los magistrados de la Corte Suprema—. Desde un punto de vista liberal, se afirma que el régimen democrático prevaleció en el siglo XX, excepto en el período en que el general Gustavo Rojas Pinilla estuvo en el poder (1953-1957). Desde un punto de vista legal, sin embargo, el país estuvo en estado de sitio casi continuo entre la década de 1940 y la Constitución de 1991, situación que sería retomada por Álvaro Uribe cuatro días después de su posesión en 2002. En este momento, impulsado por la retórica de la "guerra al terror", se negó el estatuto político de la guerrilla y la criminalización de la protesta social se agudizó.

Actualmente, existen numerosos casos de persecución a líderes populares, sindicalistas, estudiantes y universitarios en Colombia. El profesor Miguel Ángel Beltrán, por ejemplo, fue deportado ilegalmente de México en 2009 y pasó dos años en la cárcel acusado del "delito de rebelión" sin pruebas concretas. Destituido de la Universidad Nacional de Colombia, tuvo sus derechos políticos anulados por trece años (Beltrán, 2014). A mediados de 2015, fue encarcelado nuevamente[1]. La exsenadora Piedad Córdoba, el senador Iván Cepeda y el prefecto de Bogotá, Gustavo Petro, están entre las figuras públicas que, en 2015, fueron procesadas por la Fiscalía de la República, dirigida por Alejandro Ordóñez, un integrista católico que actúa como inquisidor de izquierda, reciclando procesos basados en pruebas reconocidamente ilegales —tales como los supuestos archivos encontrados en computadoras en el atentado que mató al comandante de las FARC, Raúl Reyes en territorio ecuatoriano en 2008—, una acción por sí misma ilegal (Córdoba, 2014). En el campo, la situación es aún más dramática y muchos líderes se ven obligados a mudarse o vivir escondidos, como en el tiempo de las dictaduras militares del Cono Sur. En 2015, se estimaba que había más de nueve mil prisioneros políticos en Colombia, de los cuales menos de la mitad estaban vinculados a las guerrillas (Encuentro Nacional por la Libertad de Los Prisioneros Políticos, 2011).

Raíces de la violencia

Las raíces de la violencia que distinguen el patrón de lucha de clases colombiano son un tema controversial que moviliza una extensa bibliografía (Bergquist *et al.*, 1992). Algunos autores remiten sus orígenes al siglo XIX o incluso a la colonización (Sánchez, 1992). De hecho, entre 1830 y 1903 se contabilizan 29 alteraciones del orden constitucional en Colombia; tres golpes militares; dos guerras con

1 En septiembre de 2016, Beltrán fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia y puesto en libertad. En mayo de 2018, el Consejo de Estado suspendió la prohibición impuesta por la Fiscalía para que ocupe cargos públicos.

Ecuador; catorce guerras civiles locales; y nueve guerras civiles nacionales, incluida la división que dio origen a Panamá. Sin embargo, la inestabilidad política —que también se observa en otras regiones del continente— está vinculada a los obstáculos para la consolidación del Estado nacional en sociedades de formación colonial, en las cuales la guerra civil emerge como un instrumento de alternancia política (Halperin Donghi, 1989).

De modo similar a lo que ocurre en México, marcado por el protagonismo político campesino desde el período colonial (Katz, 1990), la clave de la singularidad colombiana se refiere al patrón de organización y resistencia popular. Como señaló Forrest Hylton refiriéndose al contexto de la Era del Capital (1848-1875), "la movilización radical-popular puso a Colombia en el extremo más avanzado de las democracias republicanas atlánticas" (Hylton, 2006: 15). La reacción a esta movilización radical popular, expresada por ejemplo en la difusión de Sociedades Democráticas[2] en el contexto de la "revolución liberal" de 1849-1853, resultó en medio siglo de prevalencia conservadora (1880-1930), de orientación centralista y marcada presencia católica (Tirado Mejía, 1985). Aunque Colombia evolucionó en el sentido contrario de muchos países latinoamericanos, donde predominaron las inflexiones de sentido liberal en este período, tampoco se trata de una trayectoria única, si uno recuerda, por ejemplo, que es coetánea a la República Vieja en Brasil.

Económicamente, los índices de acumulación de capital en Colombia fueron inferiores a Perú, Chile o Bolivia a lo largo del siglo XIX. Se estima que, a fines de la década de 1870, mientras el Brasil exportaba aproximadamente 90 millones de dólares, las exportaciones colombianas se estimaron en 11 millones de dólares. A principios del siglo XX, el país tenía 8% del valor *per cápita* de la inversión extranjera en relación al resto del continente, una proporción superior solamente

2 Una de las primeras formas de organización política de la Colombia independiente, que reunía a profesionales de asociaciones de oficios, teniendo un papel importante en la vida política y social de la época [n.e.].

a la de Haití (Checchia, 2007: 107). Estas cifras hacían de Colombia, antes de la expansión del café iniciada en la década de 1910, el país latinoamericano menos integrado en la economía mundial (Ocampo, 1984). Las barreras a la inserción mercantil se vinculaban a los desafíos de la integración nacional, potenciados por una geografía indómita, popularizando la opinión de que el país, aún en el siglo XX, era una especie de archipiélago de regiones desconectadas, retratado con talento literario en varias novelas de Gabriel García Márquez (Kalmanovitz, 2003).

A partir de la década de 1910, hubo una notable expansión de la producción cafetera, convirtiendo al país en el segundo exportador mundial del producto en el período de entreguerras, después de Brasil. Los ingresos del café estaban en la base del régimen de acumulación de capital vigente en el país hasta los años de 1980, a los cuales correspondió una relativa diversificación productiva anclada en el mercado interno. A nivel geopolítico, Colombia también es un país caribeño, una región considerada por los Estados Unidos como un mar interior desde el siglo XIX. Esta presencia fue decisiva para transformar una sangrienta guerra civil entre liberales y conservadores colombianos, conocida como la Guerra de los Mil Días (1899-1902), en la división territorial que dio origen a Panamá. Pocos meses después del final de la confrontación, la nueva república firmó un tratado que ratificó los derechos estadounidenses sobre la futura zona del canal, un documento redactado en inglés y firmado en los Estados Unidos, similar al Plan Colombia 100 años después (Jaramillo Levi, 1976).

Al igual que en otros países de América Central, alrededor de las tres cuartas partes del comercio exterior colombiano a principios del siglo XX involucraba a los Estados Unidos y las plantaciones bananeras de la United Fruit Company reproducían las características de un enclave (García, 1984: 181). Una huelga de los trabajadores bananeros en 1928, que terminó en masacre, fue un episodio fundador de las luchas de los trabajadores en el país y proyectó al abogado Jorge Eliécer Gaitán en la política nacional. De origen liberal, Gaitán

encarnaba los anhelos y las ambigüedades inherentes a las presiones para el cambio social en el marco del liberalismo colombiano de la década de 1940. Durante el período de entreguerras, se intensificaron las presiones por la democratización del acceso a la tierra, lo que llevó a la promulgación de la Ley 200 de 1936, que estableció la ocupación efectiva de la tierra como condición para su posesión. El período de dominio político liberal, entre 1930 y 1948, confluyó con un aumento de la protesta social urbana, en un contexto de incipiente industrialización sustitutiva de las importaciones.

Sin embargo, la autodenominada "Revolución en Marcha", desencadenada por el presidente Alfonso López Pumarejo, aumentó las expectativas de cambio sin generar los medios para consumarla. En su segundo mandato, entre 1942 y 1945, una ley conocida como "La revancha" revirtió las posibilidades de reforma agraria contenidas en la Ley 200. En un contexto de crecimiento del movimiento social en el campo y en las ciudades, Gaitán ensayó una ruptura con el bipartidismo prevaleciente desde la independencia, avanzando hacia la constitución de un movimiento de base popular, en los marcos del orden. En palabras de Antonio García, Gaitán se proyectaba como el "caudillo de un movimiento radicalizado de masas" (García, 1984: 192). Esta perspectiva de participación del pueblo en la política desencadenó, simultáneamente, una reacción de inspiración falangista —apoyada en valores católicos y en una cultura represiva— dirigida por Laureano Gómez. La efervescencia política que siguió a la renuncia de López Pumarejo en 1945 y la elección de un grupo conservador, en un momento en que los liberales estaban divididos por la ascendencia de Gaitán, alcanzó el clímax cuando este fue asesinado el 9 de abril de 1948, durante la celebración, en Bogotá, de la conferencia que dio origen a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Diversos países latinoamericanos vivieron una coyuntura de agudización de las contradicciones sociales post Segunda Guerra Mundial, siendo que la consolidación de la polarización ideológica en el marco

de la Guerra Fría, avaló desenlaces represivos (Bethell y Roxborough, 1992). En el caso colombiano, el levantamiento popular desencadenado por el asesinato del favorito en las próximas elecciones presidenciales engendró un proceso de persecución y asesinato de líderes y trabajadores asociados al liberalismo, tanto en las ciudades como en el campo. En líneas generales, la reacción conservadora consumó un proceso de "sustitución del modelo de república liberal —intervencionismo económico y liberalismo político— por el de absolutismo político y liberalismo económico" (García, 1984: 198).

La elección de un presidente de notorias inclinaciones fascistas en 1950, en una campaña en la que concurrió solo, amplió la violencia, alimentada por una identificación espuria entre gaitanismo, liberalismo y comunismo, que a menudo legitimaba la expropiación de propiedades de liberales. Así como en la Guerra de los Mil Días de inicio de siglo, cuando 100 mil colombianos (4% de la población) murieron en los enfrentamientos entre liberales y conservadores, la extremada represión en el contexto del *Bogotazo*[3] se conoció como La Violencia (1946-1957). Desde ese momento, la violencia abierta caracterizó el patrón de lucha de clases en el país.

En líneas generales, es posible discernir diferentes fases en este proceso. En sus primeros momentos, que coinciden con la polarización política en el contexto del gaitanismo y de la reacción conservadora, la violencia es predominantemente urbana. A partir del Bogotazo, en 1948, y de la propagación de las tensiones al campo, prevalecieron los patrones convencionales de insubordinación popular, guiados por lealtades políticas tradicionales asociadas al bipartidismo. En general, los campesinos lucharon dentro del sistema por medio de sus jefes políticos locales (Bejarano, 1985).

---

3 *Bogotazo* es el nombre dado a una serie de disturbios político-sociales ocurridos en la capital colombiana, Bogotá, en la secuencia del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y que marcó el inicio del período conocido como La Violencia. Uno de los episodios del *Bogotazo* fue la persecución y el linchamiento del asesino de Gaitán, Juan Roa Sierra, cuyo cuerpo fue arrastrado por la multitud al Palacio de Nariño, sede del gobierno nacional [n.e.].

Sin embargo, el debilitamiento de los sectores asociados a Gaitán como resultado de la represión favoreció una recomposición entre las clases dominantes, unificadas contra el protagonismo popular. A menudo abandonada a su propia suerte, la insubordinación popular trata de volverse autónoma, impulsada por la integración, en la lucha rural, de los cuadros comunistas perseguidos en las ciudades. Se vislumbra un cambio cualitativo en el conflicto, resumido en los siguientes términos: "Cuando el campesino tuvo que comenzar a luchar de igual forma contra la policía como el brazo armado de la represión oficial y contra el latifundio liberal, la naturaleza de la lucha cambió. Ya no era una guerra civil, era la lucha de clases" (Sánchez, 1976: 26).

El surgimiento de propuestas de unificación programática en el campo, señal de una autonomización de la organización popular, correspondió a una solución de compromiso entre las facciones de las clases dominantes en torno a la dictadura comandada por el general Rojas Pinilla (1953-1957). El gobierno anunció la paz en el campo mientras perseguía los segmentos campesinos mejor organizados. Las promesas de reconciliación no se cumplieron, ilustradas por el asesinato del líder Guadalupe Salcedo, quien había desmovilizado a cerca de 10 mil hombres bajo su mando, aún en el marco de la guerrilla liberal. Proliferaron *pájaros* y *chulavitas*, precursores de los paramilitares difundidos bajo el gobierno de Laureano Gómez, mientras el Ejército colombiano se modernizaba en asociación con los Estados Unidos. Colombia fue el único país de la región que envió tropas para combatir en la Guerra de Corea (1950-1953).

De cara a los indicios de que el general pretendía perpetuarse en el poder, organizando trabajadores en moldes corporativistas, los dos partidos de la clase dominante acordaron una división de poderes conocida como el "Frente Nacional", análoga al contemporáneo "Pacto de Punto Fijo" en Venezuela. Este acuerdo preveía una gestión compartida del aparato estatal entre liberales y conservadores, incluida la alternancia presidencial. También determinó la centralización del

poder en el Ejecutivo, por medio de un régimen jurídico de excepción que normalizaba situaciones como el estado de sitio, la emergencia económica y los poderes extraordinarios del presidente, al mismo tiempo en que se inhibían fuerzas sociales alternativas.

Formalmente en vigor hasta 1974, el marco político establecido por el acuerdo demostró ser de larga duración, por lo que el primer presidente electo que no estaba afiliado a ninguno de estos partidos fue Álvaro Uribe, un disidente liberal, en 2002. La única vez en que el bipartidismo estuvo amenazado fue en 1970, cuando hubo pruebas contundentes de que el fraude electoral impidió la victoria del general Rojas Pinilla.

Estudiantes y sectores populares participaron en las movilizaciones que derrocaron a la dictadura en 1957, dando lugar a expectativas de solución de los conflictos sociales por medios legales. Sin embargo, la resistencia para realizar una reforma agraria que democratice la sociedad colombiana, al mismo tiempo que se reducían los espacios para la oposición dentro del orden, resultó en un salto organizativo de la lucha armada. Las propuestas de reforma agraria avanzaron en el marco de la política estadounidense de la Alianza para el Progreso, proyectada por la administración de John F. Kennedy en respuesta a la Revolución Cubana de 1959, basada en una racionalidad económica mercantil y una política de prevención del comunismo (Reyes Posada, 2004). El resultado político en Colombia, como en otros países del continente, fue agudizar las tensiones en el campo.

Simultáneamente, se inoculó la doctrina de la "seguridad nacional", fundamentando políticas contrainsurgentes que incluían el acoso a las comunidades rurales y la formación de bandos paramilitares. En este contexto, el bombardeo de territorios dirigidos por campesinos convirtió milicias de autodefensa sedentarias en fuerzas móviles. Este es el proceso en el origen de las principales guerrillas colombianas que siguieron en combate en el siglo XXI: las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ambos con más de cincuenta años de existencia.

Insurgencia y contrainsurgencia en los años de 1980

La presión insurgente en Colombia se intensificó a principios de 1980, impulsada por el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 y por la ofensiva de los movimientos guerrilleros en El Salvador y Guatemala. Entre 1984 y 1994, la guerrilla colombiana alcanzó su apogeo, aumentando su contingente de cerca de cinco a diez mil militantes, a más de cuarenta mil. Paradójicamente, este fue un momento en que muchas guerrillas se desmovilizaron en América Latina, en una coyuntura desfavorable a los procesos de cambio social, agravada regionalmente con la derrota sandinista y el colapso de la Unión Soviética. Perú y Colombia son los dos únicos países en el subcontinente donde la confrontación armada atravesó la década de 1990, correspondiendo a Estados de características represivas similares a las dictaduras del Cono Sur que militarizaron el conflicto social, en un contexto de expansión de lo que fue descrito como "economía delictiva" (Durand, 2007). Fueron también los dos países donde la degeneración de los partidos convencionales —que caracterizó a la política regional en el marco del neoliberalismo— no se tradujo en el avance electoral de las fuerzas progresistas.

El aumento de la presión insurgente correspondió a una importante inflexión socioeconómica, en la medida en que un régimen de acumulación basado en el mercado interno, que tenía como horizonte el desarrollo nacional, cedió lugar a un proyecto basado en la liberalización comercial y financiera, apuntando a la desnacionalización de la economía desde la segunda mitad de 1980. Este proceso, traducido en la progresiva adopción de medidas identificadas con el neoliberalismo, tuvo efectos socioeconómicos nefastos para el tejido social colombiano, cuya cara más visible fue la expansión del narcotráfico.

Inicialmente, esto se dio con la producción de marihuana. En 1978, Colombia suministraba entre el 60% y el 65% del producto consumido en los Estados Unidos, cultivando entre 20 mil y 25 mil hectáreas (Tokatlian, 2004: 75). A pesar de las extensivas fumigaciones y del crecimiento de la producción en los Estados Unidos, diez años después el país volvió a ser el principal proveedor de este mercado.

Sin embargo, el negocio de mayor impacto en la sociedad y en la economía colombiana estuvo asociado a la cocaína. A diferencia de otros países andinos, Colombia no es una productora tradicional de hoja de coca vinculada a las culturas indígenas. Su inserción original en la división internacional del narcotráfico fue como refinadora y distribuidora de cocaína, un papel que desempeñó el país a partir de 1980, cuando se formaron los poderosos carteles. En esta década, los ingresos de la cocaína excedieron los del café. Economistas indicaron que el peso del narcotráfico en la economía colombiana fue uno de los elementos decisivos para que el país no sufriera los efectos de la crisis de la deuda en el período, una situación única en la región (López Restrepo, 2004: 27).

Desde entonces, las relaciones del país con los Estados Unidos estuvieron marcadas por el combate al narcotráfico. Las fumigaciones, las extradiciones y la militarización de la cuestión de las drogas son los pilares de una política que, a menudo, fue instrumentalizada para criminalizar los movimientos sociales en general y la insurgencia en particular. El tono de esta asociación fue dado por el embajador Lewis Tambs, quien acuñó el término "narcoguerrilla" en 1984. Así, el acuerdo de extradición firmado por Colombia con los Estados Unidos en 1997, que representó una violación flagrante a la soberanía nacional, fue permanentemente instrumentalizado para fines políticos. Además de facultar la extradición de guerrilleros como Simón Trinidad, el acuerdo hizo que fueran enviados a los Estados Unidos criminales vinculados al narcotráfico y al paramilitarismo que tendrían información comprometedora involucrando a segmentos de las clases dominantes y de la alta política colombiana.

Los vínculos entre el Estado, el paramilitarismo y el narcotráfico se hicieron cada vez más íntimos durante el período. El narcotráfico infiltró las instituciones políticas y la alta sociedad colombiana. Pablo Escobar, por ejemplo, se convirtió en parlamentario del Partido Liberal en 1982. Figuras que se opusieron a la penetración del narcotráfico en este partido, como el ministro de Justicia del gobierno de Belisario

Betancur, Rodrigo Lara Bonilla, y el candidato presidencial del entonces llamado nuevo liberalismo, Luis Carlos Galán, fueron asesinados.

Desde un punto de vista económico, el narcotráfico estuvo entre los sectores que más apoyaron a las políticas neoliberales, lo que debe ser atribuido a los reconocidos vínculos entre la liberalización financiera, la economía delictiva y el lavado de dinero (Strange, 1998). Por otro lado, por motivos egoístas, perpetró una campaña violenta contra las políticas de extradición a los Estados Unidos: "Mejor una tumba en Colombia que una prisión en los Estados Unidos", como decía Escobar.

El crecimiento de la insurgencia *pari passu* a la expansión del narcotráfico provocó respuestas represivas del Estado nacional apoyadas por los Estados Unidos, resultando en una progresiva militarización de la sociedad colombiana. Los vínculos entre el Estado, el paramilitarismo y el narcotráfico se intensificaron, proliferando las políticas de seguridad de tipo ilegal. En 1981, importantes traficantes organizaron el escuadrón Muerte a Secuestradores (MAS), dedicado al asesinato de militantes izquierdistas. Las técnicas contrainsurgentes promovidas por los Estados Unidos en América Central se extendieron por todo el país. Farouk Yanine Díaz, discípulo de la famosa Escuela de las Américas, implementó estrategias basadas en obligar a la población a cooperar con la contrainsurgencia en el Magdalena Medio, uno de los polos dinámicos de la protesta social en el país. Acusado de complicidad en numerosas masacres perpetradas por paramilitares, como el asesinato de nueve investigadores en La Rochela en 1989, Díaz se convirtió en comandante de las fuerzas militares nacionales al año siguiente. Los asesores israelíes también actuaron en el país, como el mercenario Yari Klein, que entrenó a varios grupos paramilitares. Condenado posteriormente por la justicia colombiana, Klein declaró que estuvo en el país por invitación de la Policía Nacional. A su vez, el principal líder paramilitar, Carlos Castaño, declaró en su autobiografía haber copiado el concepto de las fuerzas paramilitares de Israel, donde entrenó en 1983. Afirmó que aplicó las lecciones aprendidas en el

Líbano, Cisjordania y la Franja de Gaza para la región del Magdalena Medio (Cepeda y Uribe, 2014; Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014; Hylton, 2006).

Administrado y cultivado por el Estado con apoyo de los Estados Unidos y financiado por hacendados, multinacionales y narcotraficantes, el poder político del paramilitarismo evolucionó a lo largo de los años 1980 y 1990 en línea con los sectores sociales que lo sostuvieron, convirtiéndose en un obstáculo para procesos de paz en el país (Lozano, 2006). En 1982, el Gobierno de Belisario Betancur creó una Comisión de Paz que abrió diálogos con las principales fuerzas insurgentes, confluyendo en 1984 en los Acuerdos de La Uribe firmados con las FARC, preveyendo un alto el fuego bilateral y la búsqueda de una salida política al conflicto. En este contexto de negociación, que estipuló la formación de un movimiento de oposición para incorporar la insurgencia a la política legal, nació en 1985 la Unión Patriótica (UP), un frente de izquierda inspirado en la experiencia de la Unidad Popular en Chile. Desde el principio, la organización fue hostigada por la derecha y por los paramilitares, llevando a la ruptura del proceso de paz.

Sin embargo, en las elecciones de 1986, la UP se convirtió en la tercera fuerza política nacional, ganando un voto significativo para presidente y eligiendo a varios parlamentarios y concejales. En los años siguientes, el crecimiento sostenido de la agremiación desencadenó una extraordinaria ola represiva. Entre 1988 y 1995, hubo 6.177 asesinatos políticos en el país, asesinatos por motivaciones presuntamente políticas, 9.140 muertes en combates entre el Ejército y las guerrillas y 1.451 desapariciones forzadas (Giraldo, 1996). Con fines comparativos, la estimación de asesinatos políticos en 17 años de dictadura en Chile es de alrededor de 3 mil personas, número mayor que en Brasil (Giraldo, 1996).

Los muertos incluyen a casi todos los políticos elegidos por la UP entre senadores, diputados, alcaldes y concejales, además de los candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernard Jaramillo. En

la campaña presidencial de 1990, otros dos candidatos con una inclinación progresista también fueron asesinados: Luis Carlos Galán, líder del nuevo liberalismo, y Carlos Pizarro, por la guerrilla M-19, que entregó sus armas menos de dos meses antes, en medio del proceso constituyente que se instalaba. El exterminio de los integrantes de la UP es una de las pocas denuncias colombianas acogidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que generalmente ignora las peticiones de las organizaciones de derechos humanos del país (Gallardo, 2014).

Neoliberalismo y parapolítica

Aunque sea posible trazar los antecedentes de la política neoliberal en Colombia en la década de 1970, hay consenso en relación a la inflexión representada por el gobierno del presidente César Gaviria entre 1990 y 1994 (Estrada Álvarez, 2004). Al comienzo de este mandato, una Asamblea Constituyente pretendió responder a los indicios de crisis del régimen político negociando la desmovilización de algunas organizaciones insurgentes, como el M-19 y el Ejército Popular de Liberación (EPL). Paradójicamente, el nuevo texto constitucional afianzaba derechos económicos y sociales, al mismo tiempo que establecía las premisas para dar legalidad a la desregulación de la economía y a la llamada disciplina fiscal, consolidando un proceso que comenzó antes de la propia asamblea, y que se extiende hasta el presente. Fue en este momento, por ejemplo, que la autonomía del Banco Central se volvió constitucional.

Jairo Estrada Álvarez afirmó que, a partir de entonces, "la construcción de un orden neoliberal se convirtió en política de Estado" (Estrada Álvarez, 2009: 234). Consolidado en medio del derramamiento de sangre provocado por el ascenso de la UP, la afirmación del neoliberalismo en Colombia tiene características de "capitalismo de choque" que tuvo su implantación pionera en Chile bajo Pinochet y en Perú bajo Fujimori. De manera similar a lo que sucedió en Brasil, se vaciaron los derechos sociales consagrados por la Constitución ante

el progresivo deterioro de la actuación social del Estado en el marco de las políticas de ajuste fiscal.

El neoliberalismo redefinió el papel del Estado en Colombia, que se convirtió en gestor y promotor de nuevos mercados y negocios para el sector privado y las multinacionales. El ocaso del espacio económico nacional como horizonte de acumulación correspondió a la consolidación de un ordenamiento jurídico que volvió inocuo el derecho nacional, consagrado con la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. Aunque fue presentada como una negociación entre Estados, esta modalidad de tratado eliminó las prerrogativas jurídico-económicas del Estado nacional al subordinarlo a una normatividad supranacional funcional a las corporaciones transnacionales:

> Los TLC son la expresión de un proyecto de construcción de un orden capitalista privado que regula relaciones entre las empresas capitalistas privadas, especialmente multinacionales, pero revestidas con la forma estatal de regulación y dotado de los mecanismos de protección que el Estado puede "ofrecer" (Estrada Alvarez, 2009: 257).

Estos "mecanismos de protección" incluyen las funciones de vigilancia y control, ejercidas como parte de las prerrogativas de la administración de justicia y el monopolio de la violencia legítima por el Estado. El proceso de militarización del Estado y de la sociabilidad en Colombia se agudizó una vez que el genocidio de la UP provocó la escalada de la insurgencia armada. La degradación de la política en este contexto se evidenció con las comprobaciones de que el sucesor de Gaviria, el liberal Ernesto Samper, recibió apoyo del narcotráfico en su campaña electoral. En esta coyuntura, se operó una puesta en escena en la que, por detrás de una supuesta indignación de los Estados Unidos, que incluso llegó a suspender la visa de un presidente acorralado, se completó la "americanización" de la guerra contra las drogas en el país (Tokatlian, 2004: 103).

El desgaste del tejido social provocado por la conjunción entre el neoliberalismo y la economía delictiva en el marco de la militarización incidió en todas las esferas de la sociabilidad. El movimiento obrero, golpeado por la precariedad de las relaciones de trabajo y por el crecimiento de la economía informal en un país donde el sindicalismo se había convertido en una actividad de alto riesgo, no protagonizó una protesta de impacto nacional desde el paro cívico de 1977. En las periferias urbanas, la falta de perspectiva de vida fragiliza un horizonte social en torno al trabajo, haciendo del crimen organizado una carrera atractiva.

En las zonas rurales, los efectos nocivos de la apertura comercial llevaron a muchos campesinos a optar por cultivos ilícitos, convirtiendo al país en un importante productor de drogas. En palabras de un líder rural: "No es la voluntad del campesinado sembrar coca, amapola o marihuana. La situación de marginalidad lo obliga [a esto]" (Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, 2014). Así, el área de producción de coca se triplicó en la segunda mitad de la década de 1980, mientras que la producción de amapola, inexistente hasta entonces, alcanzó 61 toneladas en 1999. En este momento, los cultivos ilícitos cubrían alrededor de 100 mil hectáreas, de las cuales más de la mitad se dedicaron a la coca. Se estima que, a fines de 1990, Colombia suministraba el 40% de las importaciones estadounidenses de marihuana y el 90% de cocaína. En el otro lado de la moneda, el porcentaje del PIB proveniente de la producción agrícola disminuyó de 43% en 1980 a 13% en 1998, mientras las importaciones de alimentos se triplicaron en esta década (Hylton, 2006; Tokatlian, 2004; López Restrepo, 2004).

En este contexto, también los movimientos insurgentes, especialmente las FARC, se involucraron en la economía delictiva. Desde el punto de vista del campesino desposeído, la guerrilla ofrecía protección y estabilidad a los trabajadores rurales que, de lo contrario, serían expulsados de su tierra en el marco de las políticas de liberalización económica y la espiral de violencia. En esta situación, "prohibir [el

cultivo de coca] implicaría aislarla [a la guerrilla] de sus bases" (Gros, 2004: 114). Por otro lado, aunque la guerrilla se apropiase de una fracción de los ingresos del narcotráfico a través de los impuestos sobre las plantaciones y la comercialización de los cultivos, en un negocio en que alrededor del 7% del dinero movilizado permanece en Colombia, esta relación debilitó la legitimidad política de las FARC. Un dilema surge en la medida en que el involucramiento con el narcotráfico permitió a esta guerrilla fortalecerse en un contexto de degradación continua del tejido social colombiano, que las luchas sociales no pudieron revertir. A su vez, la segunda guerrilla más grande del país, el ELN, se negó a participar en el narcotráfico, lo que aumentó la dependencia de otras fuentes de ingresos, como los secuestros, tasas cobradas a las multinacionales que explotan los recursos naturales del país y otras formas de tributación local.

En este contexto, los efímeros intentos de diálogo de paz entabladas en Caracas, Venezuela, y Tlaxcala en México, fueron quebradas en 1992 por el gobierno, que declaró la "guerra integral" a la insurgencia. La generalización de estrategias militares implicando la cooperación campesina resultó en una escalada de víctimas civiles. Aunque llevado a cabo por los paramilitares y el Estado, que en muchas circunstancias actuaban de modo indiferenciado, la agudización de la represión brutalizó también la violencia de la insurgencia. Este proceso, amplificado exhaustivamente por los medios de comunicación, alienó parte del apoyo civil gozado por las guerrillas en una coyuntura internacional francamente hostil a la lucha armada.

Sin embargo, más impresionante que el crecimiento de las guerrillas en la década de 1990 fue la consolidación del paramilitarismo, es decir, de los grupos armados que actuaban al margen de la legalidad, a menudo con apoyo estatal. Como gobernador de Antioquia a partir de 1995, Álvaro Uribe tuvo un papel decisivo en la promoción y legalización de las milicias contrainsurgentes, que, además de aterrorizar a la población civil en medio del enfrentamiento contra la guerrilla, invariablemente se vinculaban a las actividades delictivas,

difuminando todavía más la línea que separa la política del crimen organizado en el país (Cepeda y Uribe, 2014). Desde el Estado, Uribe alentó la creación de Cooperativas de Vigilancia Rural (Convivir), siguiendo el modelo de las "rondas campesinas" peruanas y las Patrullas de Autodefensa Civil de Guatemala de los años de 1980, intentos de armar al campesinado como aliado del Estado. Fueron perfeccionadas las estrategias militares involucrando la cooperación forzada de los campesinos, ensayadas por el general Yanine Díaz en el Magdalena Medio en años anteriores.

Cuando las Convivir fueron declaradas ilegales por la Corte Suprema del país, en 1999, debido a las numerosas masacres de civiles que se le atribuyeron, muchos de sus miembros simplemente se pasaron a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Considerada como la organización paramilitar más letal del país, las AUC también florecieron a la sombra de Uribe, particularmente en Córdoba y Urabá. En esta región bananera, las tasas de homicidio alcanzaron setecientos por cada 100 mil, casi cien veces más altas que en los Estados Unidos en el período (ocho de cada 100 mil). Un año después del final de su mandato como gobernador, la tasa disminuyó a trescientos por cada 100 mil (Hylton, 2006: 94).

Esta violencia no estuvo dirigida solamente por fines políticos, pues fue funcional para concentrar tierras en beneficio del gobernador y de sus aliados (Cepeda y Uribe, 2014). Los métodos brutales de conquista territorial basados en masacres y terrorismo que caracterizaron a las AUC, con la complicidad de Uribe, se extendieron a otras regiones de Colombia. Siguiendo una geografía coincidente con las plantaciones de coca, la organización comandada por los hermanos Castaño se convirtió en protagonista del narcotráfico en el país.

Si la trayectoria de la familia de Uribe tiene marcas indelebles en la relación con el narcotráfico —simbolizadas por el hecho de que Álvaro fue llevado al encuentro de su padre, asesinado por las FARC en 1983, en el helicóptero de Pablo Escobar—, el proyecto defendido por el expresidente es de otra naturaleza: implica la organización política

de un sector diversificado y poderoso de la sociedad colombiana, que hace de la violencia una forma de vida y de la guerra un negocio:

> Amparados en el discurso de la necesidad de promover el fenómeno de la autodefensa con el que pretendieron legitimarse los paramilitares y sus gestores, involucrando a la población más pobre en la guerra con el ofrecimiento de posibilitarles un ascenso social en un contexto adverso, crearon un régimen de terror y complicidad que, lejos de limitarse a la lucha contrainsurgente, les permitió conquistar tierras, alcaldías, gobernaciones, curules en el Congreso; controlar y silenciar la crítica, influir y participar en la actividad económica y buscar, según lo plantearon los firmantes del célebre Pacto de Ralito, "la refundación de la patria" (Cepeda y Uribe, 2014: 76).

Cuando en 1998 el conservador Andrés Pastrana ganó las elecciones presidenciales con una propuesta de paz, se creó una zona desmilitarizada en territorio colombiano, conocida como "el Caguán", del tamaño de Suiza, dando inicio a un nuevo proceso de diálogo. Más allá de los obstáculos históricos para una salida democrática del conflicto, hubo un empeño explícito de las AUC en sabotear las negociaciones expresando a un sector de la sociedad que se oponía a cualquier entendimiento. Al mismo tiempo, las transnacionales que pagaban tasas a las guerrillas canalizaron recursos mucho más sustanciales a los *lobbies* estadounidenses en favor de una solución militar al conflicto. Después de todo, la ambivalencia del gobierno en este proceso, en que las conversaciones no implicaban una tregua militar, se evidenció en la adopción del Plan Colombia cuando los diálogos aún estaban en curso. Era una señal de que la parapolítica estaba lista para culminar su asalto al Estado.

El partido de guerra en el poder

El Plan Colombia debe interpretarse a la luz de las limitaciones afrontadas por la clase dominante colombiana para poner fin al

conflicto armado, en una situación en la cual el neoliberalismo agravó, simultáneamente, las causas sociales de la insurgencia y los medios del Estado colombiano para enfrentarla. La profundización del involucramiento de Estados Unidos en este contexto evidencia los vínculos entre las dimensiones antidemocrática y antinacional de la burguesía del país, toda vez que el vaciamiento ulterior de la soberanía nacional, que implica el plan, surgió como alternativa preferible al cambio social reclamado por la insurgencia.

Originalmente formulado en los Estados Unidos y redactado en inglés, el Plan Colombia culminó la injerencia estadounidense en la política colombiana con el pretexto del combate al narcotráfico, consolidando lazos que proyectan al país como un aliado regional a largo plazo en la región, una alineación sellada con la firma del TLC entre los dos países en 2006. La extradición de colombianos y el uso de bases militares, dinero, armas y asesoramiento estadounidense para la represión confluían con la regulación supranacional de los negocios y la devastación de los recursos naturales en el marco del libre comercio, para constituir un enclave contrarrevolucionario en territorio sudamericano, a menudo comparado con Israel.

Los números son elocuentes. La ayuda militar estadounidense a Colombia pasó de 317 millones de dólares en 1999 a casi un mil millones de dólares en 2000, representando el 80% del total de la asistencia militar y policial para toda América Latina. A nivel mundial, Colombia recibió la tercera mayor dotación militar de los Estados Unidos, después de Israel y Egipto. Los efectivos del Ejército aumentaron de 80 mil soldados, en 1990, a 278 mil en 2002 y a 386 mil en 2006, alcanzando recientemente cerca de 500 mil soldados, una marca que supera al Ejército brasileño, país que tiene una población cinco veces mayor. El ingreso destinado a las Fuerzas Armadas pasó de 2,2% del PIB en 1990, al 5,3% del PIB en 2005. Si se incluyera en el cálculo los recursos estadounidenses asociados al Plan Colombia, este porcentaje subiría al 6,1% del PIB en 2005 (Caycedo, 2009: 218-220; Silva, 2013).

Como era de esperar, la acción militar se concentró en las áreas bajo influencia de la guerrilla, preservando intactas las regiones dominadas por el narcotráfico y por el paramilitarismo. A partir de 2004, el llamado Plan Patriota fue implementado, siguiendo el Plan Colombia, que contribuyó a regionalizar el conflicto, cuya culminación fue el bombardeo de bases de las FARC en territorio ecuatoriano en 2008. El paramilitarismo también desbordó las fronteras nacionales agravando el problema de la criminalidad en Venezuela. Según Hylton, más de 100 colombianos fueron encarcelados en el país por conspirar para asesinar a Hugo Chávez en coordinación con paramilitares y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el servicio de inteligencia que informa al presidente (Hylton, 2006: 116). A nivel ideológico, el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) negó el estatuto político de la insurgencia, premisa en la cual se afianzaron los diálogos de paz anteriores y navegó en la retórica antiterrorista, mundializada después del 11 de septiembre de 2001. Al clasificar a las guerrillas como organizaciones terroristas, el gobierno negó las raíces políticas del conflicto, sentando las bases para una criminalización generalizada de la protesta social.

Este movimiento no fue iniciado ni concluido en su gobierno. En 1997, una sentencia de la Corte Constitucional modificó la relación entre rebelión y crímenes comunes, implicando que, si un guerrillero matase a un soldado, este debería ser juzgado por homicidio. Este escenario hacía que el uso de herramientas jurídicas como el indulto y la amnistía fuera más remoto. Bajo Uribe, sin embargo, la persecución a la oposición se intensificó, a menudo con la acusación del "delito de rebelión", en procesos que forjaban asociaciones espurias de opositores al gobierno con la insurgencia. En 2015, se estimaban más de 9 mil presos políticos en el país, en medio de la persecución cotidiana generalizada a la militancia en los sindicatos, en la universidad y en el campo (Encuentro Nacional por la Libertad de Los Prisioneros Políticos, 2011; Asociación Cimitarra Campesina del Valle del Río, 2014; Gallardo, 2014; Rivera, 2014).

Colombia es un país donde no solamente los ricos, sino también los activistas, circulan en vehículos blindados, proporcionados por un Estado incapaz de garantizar la integridad física de una oposición que el mismo criminaliza. No se trata de una precaución formal: la candidata a vicepresidenta de la alianza izquierdista en las elecciones de 2014, Aída Avella, sobrevivió a un tiro de bazuca contra su automóvil en el centro de Bogotá en 1996. No es raro que los militantes vistieran chalecos a prueba de bala o implementaran precauciones características de un contexto de dictadura, evitando el establecimiento de rutinas para obstaculizar su localización diaria.

El hostigamiento a la militancia es apenas una de las caras de un proceso generalizado de militarización de la sociedad, continuado por el sucesor de Uribe. Entre 2000 y 2011, 36 leyes modificaron el código penal del país, creando 47 nuevos delitos, al mismo tiempo que aumentaron las penas a ochenta delitos. En este mismo período, la población carcelaria se duplicó y, en los dos años siguientes, aumentó en un 20%, alcanzando el récord de 120 mil detenidos, en un sistema penitenciario cuya capacidad también se duplicó, pero que es inferior a 78 mil celdas. Sometidos a una legislación que no discrimina crímenes políticos, la vida carcelaria de los activistas es infernal en todas sus dimensiones, desde los obstáculos a las visitas hasta condenas que prolongan arbitrariamente su permanencia en las prisiones, impidiéndoles salir en libertad. Mezclados con los presos comunes, son frecuentemente torturados y estigmatizados en prisión (Encuentro Nacional por la Libertad de Los Prisioneros Políticos, 2011).

En contraste, el gobierno de Uribe movió montañas para reacomodar a los paramilitares en la legalidad, en una coyuntura internacional en que organizaciones como las AUC fueron catalogadas como terroristas. Bajo el gobierno de Uribe, la búsqueda de paz con la insurgencia se pervirtió, transformándose en la paz con los paramilitares. Este compromiso culminó con la promulgación de la Ley de Justicia y Paz en 2005, que tiene las características de un indulto a los paramilitares, entonces considerados criminales políticos (Lozano, 2006: 99).

Algunos pasaron a la legalidad, mientras que otros desmovilizaron las viejas organizaciones y constituyeron las llamadas bandas criminales ("bacrims"), que continúan actuando. Los casos más graves cumplen condenas de hasta ocho años y es con inquietud que se aguarda, en diversas regiones del país, la liberación inminente de algunos de estos que cometieron crímenes contra la humanidad.

Desde un punto de vista socioeconómico, la dinámica de la violencia y expulsión campesina bajo la égida del combate al narcoterrorismo alcanzó niveles paradójicos, convirtiendo a Colombia en uno de los mayores productores de refugiados del planeta. La racionalidad económica de estas remociones forzadas —que fueron acompañadas por la expansión de las plantaciones de palma africana (materia prima para biocombustibles), de los cultivos ilícitos, de la minería y de la extracción de petróleo— fue analizada por varios autores como una "acumulación por desposesión", según la categoría analítica propuesta por David Harvey (Harvey, 2006; Bautista, 2013; Estrada Álvarez, 2009).

En otros casos, la tierra despojada se convirtió en una reserva de riqueza, agravando la concentración fundiaria. Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2011, 39 millones de hectáreas en el país se destinan a la ganadería y apenas cuatro millones a la agropecuaria. Dado que Colombia no es un importante productor de carne, los números sugieren una ocupación dispersa e improductiva de la tierra, corroborando uno de los peores índices de concentración de la propiedad fundiaria en el mundo (PNUD, 2011). Autosuficiente en alimentos en 1988, 25 años después, Colombia importaba once millones de toneladas de alimentos. La guerra se siente menos en las ciudades, aunque la militarización de la vida, normalizada para el ciudadano promedio, es evidente a los ojos de un turista. La violencia invade todas las esferas de la existencia en Colombia, incluida la producción cultural: las películas sensibles sobre el conflicto conviven con series y largometrajes que reproducen la dinámica policial de las producciones estadounidenses, a menudo

folklorizando algunas de las figuras más nefastas asociadas con el narcotráfico, como Pablo Escobar y los hermanos Castaño.

Bogotá se convirtió en un centro de servicios donde prospera la especulación inmobiliaria y financiera. Al igual que en otros países de la región, la dinámica especulativa se impuso sobre la producción, acentuando la vulnerabilidad de la economía nacional a los movimientos del capital internacional, mientras que el mundo del trabajo se degrada. El crecimiento de la economía informal es la otra cara de este proceso. Así, al control territorial paramilitar en el campo corresponde el control paramilitar de las periferias urbanas —y el comando de la economía informal.

Con la elección de Uribe, el grupo compuesto de intereses que prosperan bajo la violencia llegó al Palacio de Nariño. La asociación política constituida por el presidente, denominada irónicamente Centro Democrático, tuvo a todos sus congresistas condenados o investigados por vínculos con el paramilitarismo (Cepeda y Uribe, 2014). Lejos están los días en que Samper fue atormentado interna y externamente por recibir dinero del narcotráfico para su campaña electoral.

El proyecto político liderado por Uribe instrumentalizó la violencia de clase por medio de una ideología del interés nacional, expresada en la noción de "seguridad democrática" pregonada por este gobierno. Además de envenenar el ambiente político con un discurso de criminalización de la protesta social, apoyado en la retórica del terror y ostensivamente replicado por la prensa, se pretendió consolidar tanto las bases subjetivas como las objetivas de un proyecto de poder. En otras palabras, el bloque uribista se propuso disputar la hegemonía sobre la sociedad colombiana.

Las bases materiales de esta política son varias. Además de los grandes beneficiarios de la economía política de la violencia —como el narcotráfico, el alto mando militar, el agronegocio y los latifundistas— se creó una especie de economía de la depedencia del militarismo, que trasciende a la propia economía delictiva. La degradación de la economía formal convirtió al Ejército en una oportunidad

profesional apreciada, lo militar en un estilo de vida, el soldado en un buen partido. En un estimado de quinientos mil hombres, se calcula la participación de dos empleados para cada militar en actividades de apoyo al Ejército, movilizando en total cerca de 1,5 millones de colombianos, lo que significa que alrededor del 3% de la población vive directamente de la guerra, más allá de las familias involucradas (Estrada Álvarez, 2014).

El gobierno también invirtió en un programa social al estilo del Bolsa Familia brasileño, denominado "Familias en Acción", que ambicionó abarcar a 2,5 millones de familias de una población estimada de cuarenta millones. En el plano de la propaganda, hubo una inversión masiva en campañas publicitarias para construir consenso en torno a la eliminación de la insurgencia como el camino para la paz (Roncancio, 2014).

Así, los altos índices de popularidad de Uribe a lo largo del mandato expresan un envenenamiento de la política y de la cultura en una sociedad militarizada que favorece consensos alrededor de salidas represivas, como si la violencia se pudiera resolver con más violencia. Este movimiento de la sociedad colombiana debe ser entendido a la luz de una conjunción de factores, entre los cuales destacan: los impactos políticos y sociales del exterminio de una generación de militantes vinculados a la UP; el bloqueo al surgimiento de alternativas políticas dentro del orden; la desestructuración del mundo del trabajo en el contexto del neoliberalismo; la mayor criminalización de la protesta social; la apatía como consecuencia de los estrechos horizontes de la política consentida, expresada en altos niveles de abstención electoral; la indiferencia como recurso de defensa psíquica de cara a una violencia endémica en la que el sujeto se percibe como incapaz de cambiar y un discurso que disemina el odio al mismo tiempo que oculta las raíces sociales de la perpetuación de la violencia, en un contexto mundial resonante de esta retórica. La popularidad sostenida en estos términos por Uribe permitió la reforma constitucional que viabilizó su reelección y aún le posibilitó elegir a su sucesor en 2010.

Dilemas del proceso de paz

Político proveniente de un linaje tradicional de las clases dominantes del país, Juan Manuel Santos fue elegido en 2010 con un discurso de continuidad en relación al gobierno de Uribe, de quien había sido ministro de Defensa. De hecho, no se observaron cambios sustanciales en la política económica o en los programas sociales, y prosiguió la criminalización de los movimientos populares.

Sin embargo, la decisión tomada por Santos de reabrir el diálogo como vía para la paz en Colombia, estableciendo a partir de 2012 un proceso de negociación con las FARC en La Habana, provocó el distanciamiento en relación a Uribe. En un fenómeno expresivo del sofocante conservadurismo que impera en el país, la división entre los dos políticos de origen liberal polarizó la siguiente disputa electoral en 2014. La cuestión central en esta contienda fue precisamente la política de seguridad, en la que el candidato uribista Oscar Iván Zuluaga defendía la ruptura de los diálogos de paz, en contraste con Santos. Zuluaga fue el candidato más votado en la primera vuelta y entonces la polarización se agudizó.

En la segunda ronda, hubo un consenso relativo en el campo popular para apoyar a Santos como un voto por la paz. Los movimientos campesinos, en plena confrontación con el gobierno después de una exitosa paralización nacional realizada en 2013, discretamente relajaron la presión. Los más de 15% de los votos obtenidos por la candidatura de la izquierda en la primera vuelta fueron reclamados por el proceso de paz. Santos fue reelegido en ese contexto.

Desde el punto de vista de clase, no había diferencia sustancial entre los proyectos que disputaron la segunda ronda. Santos representa a los segmentos de las clases dominantes colombianas cuyos negocios se ven favorecidos por un ambiente de paz, mientras el partido de Uribe es sostenido por aquellos que prosperan en medio de la guerra. Sin embargo, esta diferencia se traduce en horizontes políticos muy distintos. Con la victoria de Santos, las negociaciones continuaron en La Habana.

La premisa del diálogo del lado de las FARC, sensiblemente debilitadas después de la guerra uribista, fue que la toma del Estado ya no estaba más en el horizonte de la insurgencia. Desde el ángulo del gobierno, la premisa fue que el fin de la guerra sería menos costoso y más eficaz por medio de la conversación, una vez que la resiliencia de la insurgencia fue históricamente atestiguada. Sin embargo, no hubo tregua, lo que indica que, como en las negociaciones anteriores, el gobierno manejó el diálogo y la guerra simultáneamente, especialmente para debilitar la posición de la guerrilla mientras se desarrollaban conversaciones en la capital cubana.

En el campo popular, la expectativa era que la solución política a la confrontación abriría grietas en la estructura autocrática del Estado colombiano, que serían ampliadas por un aumento en el movimiento de masas (Chagas y Pismel, 2014). La adhesión de la izquierda al proceso fue casi unánime: prevaleció el entendimiento de que los obstáculos provenientes de la perpetuación de la insurgencia, instrumentalizada para legitimar la persecución a toda oposición en el país, no fueron compensados por la capacidad de la guerrilla de mantener en jaque el monopolio de la violencia por parte del Estado, particularmente en un contexto de aislamiento internacional de la lucha armada. Específicamente, se pretendía que los diálogos de La Habana culminaran en la convocatoria de una Asamblea Constituyente, ampliando las bases de sustentación de los acuerdos. Esto, porque los cinco temas sobre los cuales versaron las conversaciones (política de desarrollo agrario integral; participación política; fin del conflicto; solución al problema de las drogas ilícitas y el tema de las víctimas) conciernen a toda la sociedad colombiana y suponen su democratización radical (Voz, 2013).

Subyacente al proceso de paz había el siguiente impase: el gobierno creía que llevaría la guerrilla al desarme mediante concesiones mínimas, que podrían revertirse sin sangre en un futuro cercano, como ocurrió en América Central. Su adhesión al proceso tuvo una característica perversa en la medida en que pretendía revertir el significado implícito de la paz, que es pacificar al país a través del

cambio, buscando congelar el cambio para sellar la paz. Ya el campo popular, en el cual se incluye a la guerrilla, entendió que sería posible aprovechar los diálogos para construir un movimiento social en torno a la paz, politizando su contenido desde la agenda política avanzada en los diálogos. El denominador común a ambos fue la intención de disputar la hegemonía uribista.

Sin embargo, el garante de las negociaciones fue un gobierno que navegó por un horizonte estrecho, limitado de un lado por un Estado colonizado por la parapolítica y, de otro, por las limitaciones a la democratización social que caracterizan al país. Santos mostró poca autonomía o disposición para enfrentar la parapolítica y no apuntó a cambios sociales. Su estrategia era consolidar un campo político opuesto al uribismo, con el objetivo de afirmarse como el partido hegemónico del orden burgués.

En síntesis, el gobierno y el campo popular se unificaron provisionalmente contra el partido de la guerra. Mientras tanto, Santos tuvo como objetivo reemplazarlo como una alternativa al orden, mientras que el campo popular miró las estructuras sociales que sustentan este orden —que encuentra expresión política en el uribismo, pero también en Santos—. En una palabra, el primero propuso un proyecto político alternativo al uribismo, mientras el segundo proyectó una sociedad en sus antípodas. Finalmente, el gobierno y el campo popular pretendieron utilizar el proceso de diálogo para propósitos contradictorios: algunos para congelar el cambio y otros para desencadenarlo.

Sin embargo, fue una negociación desigual, en la que el gobierno tuvo el poder de establecer el ritmo y el tiempo del proceso y así subordinarlo a su agenda política. En esta perspectiva, el 2 de octubre de 2016, la firma de acuerdos negociados en La Habana se sometió a la consulta popular. Distante de cualquier preocupación democrática, el plebiscito fue concebido por el gobierno como una ocasión para reafirmar su posición de fuerza en detrimento del uribismo, que venía perdiendo terreno en las últimas elecciones en todas las esferas. Contando con más espacio en los medios de comunicación y con

amplia ventaja en las encuestas, el gobierno consideró el referéndum como pan comido. La campaña por el "no" dirigida por Uribe también previó la propia derrota y, por este motivo, se opuso a la realización de la consulta.

El tiro, sin embargo, salió por la culata. En una elección reñida, marcada por el alto índice de abstención que caracteriza las elecciones del país (62,67%), el "no" venció por un margen pequeño: 50,21% de los votos contra 49,79% a favor del "sí". El mapa electoral expresó fracturas sociales que remiten al propio origen de la insurgencia, toda vez que el "sí" fue mayoritario en los territorios directamente afectados por el conflicto y derrotado en áreas donde la violencia tiene menos incidencia. Al final de cuentas, en lugar de fortalecer el campo político del presidente, el plebiscito expresó una caída de popularidad: en el voto de muchos, el "no" fue un rechazo a Santos en lugar de la paz. Como consecuencia, en lugar de fortalecer al gobierno para las elecciones presidenciales, el referéndum señaló su desgaste político[4].

Más allá de los cálculos de Santos, el resultado explicitó una vez más el envenenamiento de la política colombiana, explotada por la parapolítica y por el bloque uribista. En una campaña mentirosa dirigida a despertar la indignación en lugar de aclarar, como reconoció su coordinador, se difundió que los acuerdos representaban el "castrochavismo", la bancarrota de la familia y de la economía, abriendo las puertas para que el jefe de las FARC presidiera el país. Se difundió que la guerrilla no entregaría sus armas, que cada insurgente recibiría una subvención de casi setecientos dólares del gobierno —lo que exigiría reducir las pensiones de los demás trabajadores—, que las FARC tendrían 26 escaños en el Congreso (no diez) y así sucesivamente. El mensaje fundamental era que el gobierno estaba a punto de entregar el país al terrorismo. Por otro lado, la campaña del "sí" tuvo dificultades para contrarrestar las mentiras. Aunque los principales medios de

4 En las elecciones presidenciales del año siguiente, los dos candidatos cercanos a Santos, Germán Vargas Lleras y Humberto de la Calle, sumaron cerca del 9% de los votos en la primera vuelta, ocupando el cuarto y quinto lugar.

comunicación simpatizaban con la paz, esta misma prensa criminalizó la lucha armada durante décadas. No era trivial defender la integración política de quien siempre fue retratado como enemigo interno.

El revés en el referéndum no abortó el proceso de paz, ya que la consulta tenía naturaleza política y no normativa: resolvió sobre la firma de este acuerdo específico por parte del presidente de la República y no sobre el proceso en su totalidad. En las semanas siguientes, las partes firmaron un nuevo acuerdo, modificando aspectos menores del texto original. Aún en 2016, Santos lo presentó al Congreso para su aprobación, donde gozaba de la mayoría, sin arriesgarse a un nuevo referéndum. Por otro lado, el partido de la guerra cuestionaba el proceso en su integridad, sembrando la inestabilidad y la discordia con el objetivo de presentarse a las siguientes elecciones como la alternativa del orden[5].

En resumen, la derrota en el plebiscito no inviabilizó los acuerdos de paz, pero evidenció sus contradicciones, así como las formas en que se reactualiza la contrarrevolución en el siglo XXI, bloqueando el cambio como vía para la paz.

5 Las elecciones de 2018 fueron vencidas por el candidato del uribismo Iván Duque, quien en la segunda vuelta derrotó a Gustavo Petro, identificado con el centro-izquierda. Las FARC participaron como un partido político, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que, siguiendo los acuerdos firmados en La Habana, tendría una cuota de diez de las 280 sillas del Congreso, en la próxima legislatura [n.e.].

Bibliografía

BAUTISTA, SANDRA CAROLINA

2013 "La paz como construcción social", en Jairo Estrada (coord.), *Solución política y proceso de paz en Colombia: a propósito de los diálogos entre el gobierno y las FARC-EP*. México: Ocean Sur.

BEJARANO, JESÚS ANTONIO

1985 "Campesinado, luchas agrarias e historia social en Colombia: notas para un balance historiográfico", en Pablo González (org.), *Historia política de los campesinos latinoamericanos*. México: Siglo XXI.

BERGQUIST, CHARLES *et al.* (orgs.)

1992 *Violence in Colombia: The Contemporary Crisis in Historical Perspective*. Willington: Sr. Books.

BETHELL, LESLIE E IAN ROXBOROUGH (orgs.)

1992 *Latin America between the Second World War and the Cold War, 1944-1948*. Cambridge: Cambridge University Press.

CAYCEDO, JAYME

2009 "Militarização e alternativa popular: outro olhar sobre as lutas sociais na Colômbia", en Ana Esther Ceceña (org.), *O desafio das emancipações em um contexto militarizado*. São Paulo: Clacso y Expressão Popular.

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

2014 *Desaparición forzada. Tomo III: Entre la incertidumbre y el dolor: impactos psicosociales de la desaparición forzada*. Bogotá: Imprenta Nacional.

2013 *¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*. Resumen. Bogotá: Pro-Off Set. Disponible en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/resumen-ejecutivo-basta-ya.pdf.

CEPEDA, IVÁN Y ALIRIO URIBE
2014 *Por las sendas de El Ubérrimo*. Bogotá: Ediciones B.

CHAGAS, RODRIGO SIMÕES Y MATHEUS LOBO PISMEL
2014 *Colômbia: Movimentos pela paz*. Florianópolis: Insular.

CHECCHIA, CRISTIANE
2007 *Terra e capitalismo. A questão agrária na Colômbia, 1848-1853*. São Paulo: Alameda.

DURAND, FRANCISCO
2007 *El Perú fracturado. Formalidad, informalidad y economía delictiva*. Lima: Fondo Editorial del Congreso.

ENCUENTRO NACIONAL POR LA LIBERTAD DE LOS PRISIONEROS POLÍTICOS
2011 Bogotá, 4-5 de junio. Campaña Traspasa los Muros.

ESTRADA ÁLVAREZ, JAIRO
2009 "As reformas estruturais e a construção da ordem neoliberal na Colômbia", en Ana Esther Ceceña (org.), *O desafio das emancipações em um contexto militarizado*. São Paulo: Clacso y Expressão Popular.
2004 *Construcción del modelo neoliberal en Colombia, 1970-2004*. Bogotá: Aurora.

GARCÍA, ANTONIO
1984 "Colombia: medio siglo de história contemporânea", en Pablo González Casanova (coord.), *América Latina: Historia de medio siglo*. México: Siglo XXI.

GIRALDO, JAVIER
1996 *Colombia: The Genocidal Democracy*. Monroe: Common Courage Press.

GROS, CHRISTIAN
2004 "Los campesinos de las cordilleras frente a los movimientos guerrilleros y a la droga: ¿actores o víctimas?", en Alejandro Reyes Posada,

Christian Gros y William Ramírez Tobón, *Guerra en Colombia: democracia y conflicto agrario*. Bogotá: IPRI y FIC.

HALPERIN DONGHI, TULIO
1989 *História da América Latina*. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

HARVEY, DAVID
2006 "O 'novo imperialismo': acumulação por espoliação", en Leo Panitch y Colin Leys (org.), *O novo desafio imperial. Socialist Register 2004*. São Paulo: Clacso.

HYLTON, FORREST
2006 *Evil Hour in Colombia*. Londres: Verso.

JARAMILLO LEVI, ENRIQUE (org.)
1976 *Una explosión en América: el canal de Panamá*. México: Siglo XXI.

KALMANOVITZ, SALOMÓN
2003 *Economía y nación. Una breve historia colombiana*. Bogotá: Norma.

KATZ, FRIEDRICH
1990 *Revuelta, rebelión y revolución: la lucha rural en México del siglo XVI al siglo XX*. México: Ediciones Era.

KLEIN, NAOMI
2007 *Shock Capitalism. The Rise of Disaster Capitalism*. New York: Picador.

LÓPEZ RESTREPO, ANDRÉS
2004 "El cambio de modelo de desarrollo de la economía", en Juan Gabriel Tokatlian *et al.*, *Colombia: economía y política internacional*. Bogotá: IEPRI y FICA.

LOZANO, CARLOS A.
2006 *¿Guerra o paz en Colombia? Cincuenta años de un conflicto sin solución*. Bogotá: Ocean Sur.

OCAMPO, JOSÉ ANTONIO
1984 *Colombia y la economía mundial. 1830-1910*. Bogotá: Siglo XXI.

PNUD
2011 *Colombia rural: razones para la esperanza*. Bogotá: PNUD.

RED DERECHO Y DESPLAZAMIENTO
2010 *Informe sobre política pública y desplazamiento forzado*. Bogotá: Ilsa, ACNUR y NRC.

REYES POSADA, ALEJANDRO
2004 "La violencia y el problema agrario", en Alejandro Reyes Posada, Christian Gros y William Ramírez Tobón, *Guerra en Colombia: democracia y conflicto agrario*. Bogotá: IPRI y FIC.

SÁNCHEZ, GONZALO
1992 "The Violence: An Interpretative Synthesis", en Charles Bergquist *et al.* (orgs.), *Violence in Colombia: The Contemporary Crisis in Historical Perspective*. Willington: Sr. Books.
1976 *Los Bolcheviques del Líbano (Tolima): crisis mundial, transición capitalista y rebelión rural en Colombia*. Bogotá: Mohan.

SANTOS, FABIO LUIS BARBOSA DOS
2010 "Dilemas da Revolução Bolivariana", en *Contra a corrente*, vol. 4, pp. 57-64.

SILVA, LUIZA LOPES DA
2013 *A questão das drogas nas relações internacionais: uma perspectiva brasileira*. Brasília: FUNAG.

STRANGE, SUSAN
1998 *Mad Money: When Markets Outgrow Governments*. Michigan: The University of Michigan Press.

TIRADO MEJÍA, ALVARO
1985 "Colombia: medio siglo de bipartidismo", en Mario Arrubla *et al.*, *Colombia Hoy*. Bogotá: Siglo XXI.

TOKATLIAN, JUAN GABRIEL
2004 "Política antidrogas de Estados Unidos y cultivos ilícitos en Colombia. La funesta rutinización de una estrategia desacertada", en Juan Gabriel Tokatlian *et al.*, *Colombia: economía y política internacional*. Bogotá: IEPRI y FICA.

VOZ
2013 *100 propuestas en La Habana*. Bogotá: Fundación Semanario Voz.

Conversaciones

Bogotá y Barranca-Bermeja, en julio de 2014

ACVC. Equipo de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra.
AVELLA, AÍDA. Líder política, candidata a la vicepresidencia en 2014.
BELTRÁN, MIGUEL ÁNGEL. Sociólogo y profesor de la Universidad Nacional de Colombia (UNC).
CÓRDOBA, PIEDAD. Exdiputada y exsenadora.
ESTRADA ÁLVAREZ, JAIRO. Economista y profesor de la Universidad Nacional de Colombia (UNC).
FUNDACIÓN LAZOS DE DIGNIDAD. Abogados de la fundación.
GALLARDO, GUSTAVO. Abogado y dirigente del movimiento Marcha Patriótica.
GÓMEZ, DAVID. Militante del movimiento Marcha Patriótica.
PÁEZ, ANNYE. Asesora de la ACVC.
RIVERA, JAIRO. Líder estudiantil.
RONCANCIO, GERMÁN. Integrante del Congreso de los Pueblos.

¿Hacia dónde va la revolución cubana? Dilemas del socialismo primitivo

Este país puede autodestruirse por sí mismo; esta Revolución puede destruirse, los que no pueden destruirla hoy son ellos; nosotros sí, nosotros podemos destruirla y sería culpa nuestra.

Fidel Castro, 2005

En los Estados Unidos tenemos un monumento claro de lo que pueden construir los cubanos: se llama Miami.

Barack Obama en La Habana, marzo de 2016

Introducción

Cuba no está en América del Sur y está gobernada por la izquierda mucho antes de la ola progresista. Sin embargo, desde la revolución de 1959, la isla se convirtió en una referencia y un punto de apoyo para la política anticapitalista en la región. Recíprocamente, la política cubana estuvo condicionada por el entorno regional, una percepción cristalizada desde el siglo XIX en el ideario de Nuestra América forjado por José Martí. Durante la Guerra Fría, el triunfo de la revolución encendió las esperanzas de cambio, lo que a su vez endureció la reacción contrarrevolucionaria expresada en numerosas dictaduras. Por otro lado, el aislamiento regional fue determinante en la decisión de aproximarse a la Unión Soviética, movimiento que incidió en la revolución, para bien o para mal. Boicoteada, difamada y aislada, Cuba resistió el fin del socialismo real como referencia de un otro mundo posible, en circunstancias cada vez más adversas.

En este escenario inhóspito que puso al socialismo a la defensiva, la elección de gobiernos progresistas en América del Sur fue un aliento. Como siempre, la isla apoyó a los gobiernos amigos y buscó ser apoyada. Hizo negocios con Brasil. Con Venezuela estableció una relación de confianza que resultó en asesorías diversas, formales e

informales, retribuidas con el apoyo económico y político materializado en la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba). Así, las relaciones con Cuba incidieron en la ola progresista de América del Sur, mientras el alcance y los límites de este proceso condicionaron el margen de maniobra de la revolución. Lo que sucedió y sucede en Cuba es un termómetro de las posibilidades de cambio estructural, cada vez más estrechas, en la región.

Revolución versus *subdesarrollo*

La Revolución Cubana que triunfó en 1959 fue una reacción al subdesarrollo. Desde esta perspectiva, el igualitarismo y la soberanía nacional se afirmaron como valores centrales. Sin embargo, la concretización de estos valores por medio de las primeras medidas del gobierno revolucionario provocó la reacción intolerante de las clases dominantes y del imperialismo, explicitando la articulación entre dependencia externa y asimetría social en el capitalismo periférico. Rápidamente los cubanos se enfrentaron al dilema de radicalizar el cambio o revertirlo. Es esta dinámica que condujo un proyecto nacional, democrático y popular a la vía socialista. En palabras de Florestan Fernandes (2007: 35), "la revolución dentro del orden fue un momento real de la revolución cubana. Duró poco y se extinguió rápidamente porque solo los desheredados de la tierra se movilizaron para luchar por ella. La 'revolución contra el orden' se volvió, alternativamente en una realidad permanente y en aceleración creciente".

Las medidas iniciales del gobierno incluyeron suprimir loterías y juegos de azar; declarar de uso público las playas del país; reducir los precios de los medicamentos y las tarifas telefónicas; establecer un salario mínimo para los cortadores de caña; crear el Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados, para recuperar los bienes apropiados por la dictadura; reglamentar el juzgamiento de los cómplices de la dictadura a través de los tribunales populares; y establecer los Comités de Defensa Revolucionarios (CDRs). Como se puede observar, es un conjunto de medidas que no tuvieron orientación socialista. La

reforma urbana, que redujo los alquileres en un 50% para luego convertirlos en amortización del inmueble, se orientó contra el rentismo. La propiedad fue limitada a apenas una residencia y aquellos que no tenían otro ingreso recibieron una pensión vitalicia del Estado.

Incluso la reforma agraria inicialmente decretada, que selló la hostilidad de Estados Unidos hacia la revolución, puede describirse como moderada. Pretendió combatir al rentismo en el campo distribuyendo latifundios ociosos a los trabajadores sin tierra, pero permitió grandes propiedades con rendimiento 50% superior al promedio nacional. En conjunto, la propuesta no difería de los objetivos cepalinos de diversificar la producción, industrializar la agricultura e integrar a la población por medio del trabajo. En ese momento, la reforma agraria extendió la propiedad privada de la tierra a 200 mil familias (Vasconcelos, 2016).

Al principio, Estados Unidos pretendió doblegar a los cubanos por la vía económica, reduciendo las compras de azúcar. Fidel Castro sintetizó la respuesta de la revolución: "ya que han comenzado a quitarnos las cuotas, libra por libra, nosotros les quitaremos central tras central". Al mismo tiempo, los cubanos comenzaron una aproximación a los soviéticos, que hasta entonces no tenían relación alguna con la revolución. Cuando las refinerías estadounidenses instaladas en Cuba se negaron a procesar el petróleo soviético, lo que paralizaría la economía de la isla, los revolucionarios decidieron nacionalizarlas. Luego, el gobierno de Dwight D. Eisenhower suspendió la compra de azúcar cubana y en sus últimos días como presidente, rompió relaciones diplomáticas con el país (Faya y Rodríguez, 1996).

Simultáneamente, se aceleraron los preparativos para la invasión militar de la isla por mercenarios entrenados y financiados por la CIA, lo que ocurrió en 1961, en los primeros meses de la administración de John F. Kennedy. Fue en vísperas de la invasión que Fidel Castro declaró el carácter socialista de la revolución, en un visible gesto en la dirección soviética. Incluso en este delicado momento, cuando la sobrevivencia del proceso estuvo en jaque por la violencia estadounidense, Fidel habló de una revolución de los humildes, una retórica

adversa a la ortodoxia marxista: "Compañeros obreros y campesinos, esta es la revolución socialista y democrática de los humildes, con los humildes y para los humildes. Y por esta revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, estamos dispuestos a dar la vida" (Castro, 1961a). Como dijo Fernando Martínez Heredia (2016), la Revolución Cubana fue un asalto contra las oligarquías, pero también contra los dogmas revolucionarios.

El fracaso de la invasión a la Bahía de Cochinos —también conocida como Playa Girón—, derrotada en menos de tres días, solo aumentó la hostilidad imperial hacia la revolución, lo que condujo a una política marcada por sanciones económicas, amenaza militar, operaciones encubiertas, intentos de asesinato, aislamiento político y diplomático, campaña mediática y financiamiento de la disidencia, entre otras agresiones (Acosta González, 2016). Sintomáticamente, la invasión ocurrió en medio de la extraordinaria campaña nacional de alfabetización, que movilizó a la juventud de secundaria y universitaria del país y erradicó el analfabetismo. El folleto utilizado introducía a los estudiantes a las vocales a través de la sigla OEA, en referencia a la Organización de los Estados Americanos, de la cual Cuba fuera expulsada recientemente.

A lo largo de la década de 1960, el Estado cubano se involucró en el movimiento de los países no alineados, del cual se volvió un promotor activo. Enfrentado al servilismo de los Estados latinoamericanos, que respaldaron sistemáticamente las condenas a la revolución emanadas de los Estados Unidos en foros internacionales, Cuba acogió y estimuló organizaciones revolucionarias o comprometidas con la soberanía de los pueblos en el entorno regional. Pocos meses antes del asesinato del Che Guevara en Bolivia, en 1967, se realizó una conferencia que dio origen a la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS).

Así, la gravitación de Cuba hacia la esfera soviética, que se consumó en los años 1970, debe entenderse en el marco de una doble limitación: el aislamiento regional de la revolución, en un contexto

en el que las dictaduras militares impedían trayectorias similares a la cubana en el subcontinente y los obstáculos para enfrentar la dimensión económica del subdesarrollo e industrializar el país.

En los primeros años de la revolución, hubo intensos debates sobre la estrategia de desarrollo económico a ser adoptada. Entre otras cuestiones se discutió el lugar de la economía azucarera; las posibilidades de industrialización; el alcance de la planificación económica; el papel del mercado; estímulos materiales versus motivaciones morales (Guevara *et al.*, 2006). Sin embargo, a fines de la década de 1960, se cristalizó un consenso en torno a la inserción especializada del país en la esfera económica soviética como proveedor de azúcar. El agravamiento del bloqueo impuesto por los Estados Unidos y los obstáculos para superar el legado colonial en una economía pequeña y poco diversificada convergieron con consideraciones de orden geopolítico y de seguridad para sellar esta decisión. La lectura prevaleciente fue resumida por el representante cubano en el Consejo para la Asistencia Económica Mutua (Comecon), al cual la isla se unió en 1972: "Esa dependencia es la única condición en la que podemos mantener nuestra independencia" (Rodríguez en Vasconcelos, 2016: 332).

La relación con los soviéticos dejó marcas contradictorias en la Revolución Cubana, que Limia Díaz resume en dos vertientes: por un lado, considera innegable que los soviéticos ayudaron y defendieron la isla, hecho reconocido por los cubanos de manera general. Por otro lado, el dogmatismo y el burocratismo dejaron un legado nocivo a la política y a la cultura cubana. Debe aclararse que la relación de Cuba con los soviéticos no puede ser comparada a los países del Este Europeo, ya que la isla nunca se subordinó a la Unión Soviética. Por ejemplo, nunca un soviético participó en las discusiones del Partido Comunista cubano (Limia Díaz, 2016; Padrón, 2016).

Los soviéticos importaban azúcar a precios fijos y frecuentemente por encima del mercado internacional. Proporcionaban créditos baratos y asistencia técnica en varios campos, desde defensa hasta deportes. Esto propició una estabilidad preciosa para la isla, que tuvo

condiciones sin precedentes para organizar y planear el desarrollo. Al mismo tiempo, Martínez Heredia (2016) recordó que los soviéticos nunca pagaron más de un tercio de lo que les costaría producir azúcar de remolacha. Y nunca aceptaron, por ejemplo, vender una siderúrgia a Cuba. En síntesis, la relación con los soviéticos no sentó las bases para una mayor autonomía económica ni para la industrialización, pero fue fundamental para universalizar las conquistas sociales por las cuales la isla es mundialmente conocida.

Así, Cuba entró en la década de 1980 articulando los mejores índices de salud, educación, empleo, cultura y deportes de América Latina —sino es que de todo el tercer mundo— aunque siendo una economía con características típicas de subdesarrollo, como dependencia externa, modesta industrialización, reducida diversificación productiva y bajos salarios —aunque el desempleo estructural y la sobreexplotación del trabajo le fueran ajenos.

Sin embargo, las potencialidades de realización social de esta población, que disfrutaba de una estabilidad única, estaban limitadas por la incorporación de rasgos asociados al régimen soviético que restringieron sus posibilidades de protagonismo político y de creación artística. No se trata de las críticas que destacan la falta de libertad y de democracia bajo el prisma liberal, asociadas a los presos políticos y al pluripartidismo[1]. La política de la revolución en este campo había sido delineada por Fidel en 1961, en la alocución conocida como "Palabra a los intelectuales": "Dentro de la revolución, todo; contra la revolución, nada" (Castro, 1961b)[2]. Sin embargo, en los años setenta se endurecieron notablemente las prácticas y políticas culturales, sometidas frecuentemente al dogmatismo y a la burocracia, bajo la fachada de criterios revolucionarios. En último análisis dichos criterios emanaron de una versión conservadora de la propia revolución y que frenaron su necesaria renovación.

1 Sobre el sistema político cubano, ver August, 2014; Rafuls Pineda, 2014; Guanche, 2012.

2 Sobre el contexto y el significado de esta frase ver Martínez Heredia, 2010: 25-30, 42-52.

La propia dirección revolucionaria comprendió en la década de 1980 que el imperativo de la sobrevivencia estaba cobrando un precio excesivo a la libertad revolucionaria. O tal vez se haya dado cuenta, con el ascenso de Mikhail Gorbachev en 1985, que la sobrevivencia exigiría medidas de sentido contrario. En 1986, se inició una rectificación del "seguidismo" de la Unión Soviética, mientras que era rechazada la vía reformista difundida en Europa Oriental, expandiendo el papel del mercado y los incentivos materiales (Gott, 2004: 309).

De hecho, cuando la Unión Soviética se disolvió, el presidente ruso Boris Yeltsin, implementó una política que redujo en 94% el intercambio comercial de Cuba con Rusia, que hasta entonces concentraba el 85% de su comercio internacional en Comecon. Además de eso, los rusos inscribieron la deuda cubana en el Club de París —foro internacional creado en la década de 1950 que representa a los acreedores internacionales— como si fuese en dólares, pasando a incidir sobre ella intereses y corrección monetaria (Rodríguez, 2011)[3].

El impacto del fin de la Unión Soviética y del Comecon sobre la economía cubana fue devastador. Entre 1989 y 1993, el PIB del país cayó en casi un 35%; la capacidad de importar cayó un 70%; el país se quedó sin crédito; sin petróleo, los cortes de energía fueron tales que los cubanos bromistas decían tener "alumbrones" y no "apagones"; bicicletas ocuparon las ciudades donde no había automóviles ni buses; bueyes jalaban los arados en lugar de tractores; la desnutrición, erradicada en años anteriores, regresó —aunque no el hambre—; faltaban repuestos, fertilizantes, bienes de consumo: en 1993, se importó el 17% del volumen de estos artículos, en relación a 1989.

Y, sin embargo, mientras la Unión Soviética y el este europeo parecían aceptar el fin de la historia y los vecinos latinoamericanos se sumergían en el neoliberalismo, la Revolución Cubana sobrevivió: "Pocas sociedades fueron capaces de enfrentar tamaña catástrofe

3 En 2003, bajo la presidencia de Vladimir Putin, se canceló el 90% de la deuda y el 10% restante se pagaría en términos favorables durante diez años.

económica y salir ilesas", escribió el historiador Richard Gott (2006: 323), que no es un defensor del régimen.

Los esfuerzos para superar adversidades de esta magnitud fueron comparados por Fidel con una situación de guerra: de ahí la referencia a un "período especial en tiempos de paz". Para superarlo, la dirigencia radicalizó el criterio distributivo que siempre prevaleció en la revolución, estableciendo prioridades que todos comprendían: la leche es para los niños, el dólar es para los remedios y no para las armas, el poco pan es para todos. Los cubanos entendieron la situación y confiaron en las estrategias para enfrentarlas, respaldadas por un liderazgo que no se corrompiera económica ni ideológicamente a lo largo de treinta años. También entendieron que las alternativas practicadas en Europa del Este o en América Latina comprometerían las conquistas sociales y la soberanía asociadas a la revolución —y apreciadas por todos los cubanos.

Sin embargo, es un error afirmar que la sociedad cubana salió ilesa del período especial, como sugiere Gott. El principio de igualdad fundamental que la caracterizaba se dividió en dos sentidos. Por un lado, la crisis económica comprometió la capacidad del Estado para responder a las necesidades básicas de la población, que se expresó en una creciente disparidad entre los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores.

Esta situación generó múltiples distorsiones socioeconómicas. La principal de ellas fue un floreciente mercado ilegal en dólares, por donde circulaban productos en escasez. Poco a poco, se conformó una realidad en que todo cubano necesitaba acceso a dólares para complementar sus ingresos. Como el Estado apostó a la reactivación del turismo como principal fuente de divisas, el acceso a dólares se daba por tres canales básicos: en la relación con el turismo y los turistas; en las remesas de familiares en el exterior y en el involucramiento con el propio mercado ilegal.

Esta dualidad económica generó un segundo desequilibrio en la sociedad cubana, al promover la desigualdad entre quien tiene y quien

no tiene acceso a la moneda extranjera. En este contexto, muchos profesores fueron a trabajar con el turismo, mientras reventaban las inscripciones para la medicina, frente a la posibilidad de servir en una misión en el extranjero. Es probable que Cuba sea el único país en el mundo donde los anfitriones tienen un nivel educativo y cultural superior al de los turistas que los visitan y es el único país que tiene servicios de medicina prestados alrededor del mundo como principal ingreso externo.

Las alternativas encontradas por los líderes cubanos para responder a estos desafíos implicaron una apertura controlada a la iniciativa privada y a la inversión extranjera, además del intento de atenuar las disparidades internas que no pudieron evitarse. Una economía que durante décadas estuvo entre las menos mercantilizadas del mundo tomó diversas medidas opuestas. El monopolio estatal sobre el comercio exterior fue abolido. Una nueva ley, que exigió un cambio en la Constitución de 1976[4], permitió consorcios entre el Estado y los inversores internacionales en cualquier área, excepto salud, educación y defensa, limitando la participación internacional a un máximo del 49%. El número de *joint ventures* aumentó de dos en 1990 a 112 en 1993.

El llamado trabajo por "cuenta propia" se legalizó, permitiendo una diversidad de pequeños negocios privados, en los que se destacan aquellos vinculados al turismo, como restaurantes, cafés y el alquiler de habitaciones para turistas. El sistema tributario fue reorganizado, ya que hasta entonces los trabajadores cubanos no recaudaban impuestos. En el campo, muchas haciendas estatales se convirtieron en Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), con el objetivo de dinamizar la producción de alimentos. Fueron creados mercados de productos agrícolas, así como de productos industriales y artesanales. El Estado reformó el sistema bancario, legalizó la propiedad de dólares y abrió casas de cambio y tiendas vendiendo productos en

4 La Constitución prohibía las formas no estatales de propiedad de los medios de producción y las empresas con capital extranjero.

dólares, para reglamentar el circuito mercantil de la moneda fuerte (Gott, 2006; López Segrera, 2010; Tablada, 2001).

En los años siguientes, la duplicidad monetaria se institucionalizó creando el peso cubano convertible (CUC) para circular en lugar del dólar, cotizado en 2016 a 24 pesos cubanos (CUP). La brecha entre las transacciones corrientes en moneda nacional con la que se paga a los asalariados estatales, y aquellas en peso convertible, que suponen el acceso a dólares, continúa desafiando a la igualdad social.

Las dificultades que enfrentó la isla se acentuaron por la política estadounidense. Quien imaginó que el país suavizaría la política anticubana con el fin de la Guerra Fría, subestimó la naturaleza del imperialismo. Inicialmente, los Estados Unidos endurecieron el bloqueo económico por medio de la Ley Torricelli en 1992, calculando que la agudización de la crisis derrocaría al régimen. Al mismo tiempo, las organizaciones terroristas con sede en Miami realizaron atentados turísticos selectivos en la isla, para sabotear la revitalización del sector[5]. Cuando se evidenció la recuperación económica de la isla en 1996, la administración de Bill Clinton aprobó la Ley Helms-Burton[6], días después de que dos aviones de organizaciones anticastristas que sobrevolaban ilegalmente la isla fueron derribados. Más allá de insistir en la exigencia de una "democracia" en sus términos para reconocer al gobierno cubano —partidos de oposición con acceso a los medios de comunicación; elecciones libres, justas y supervisadas internacionalmente; avances hacia una economía de mercado; cláusulas específicas vetando la participación de Fidel o Raúl en el gobierno, etc.—, la ley estipulaba que cualquier individuo o empresa que negociara con propiedades cubanas que pertenecieran

5 El esfuerzo de inteligencia del gobierno cubano para prevenir estas acciones, que resultó en la prisión de diez cubanos acusados de espionaje en los Estados Unidos, es vívidamente narrado por Morais (2011).

6 La ley Helms-Burton impide que el presidente de Estados Unidos cambie las normas del embargo o lo elimine por decreto, lo que solamente puede hacer el Congreso. La legislación también obliga al presidente a votar contra la entrada de Cuba en organismos multilaterales, privando a la isla de importantes fuentes de crédito.

a un ciudadano estadounidense, —o a un cubano con ciudadanía estadounidense— y que fueran nacionalizadas, serían demandadas en los tribunales estadounidenses. El objetivo de la ley era ahuyentar cualquier inversión extranjera en la isla. Pero, esta cláusula fue interpretada como una violación de la ley internacional, incluso por parte de la Unión Europea y su implementación fue suspendida por sucesivos presidentes cada seis meses por medio de un subterfugio legal (Gott, 2006: 342).

En conjunto, las medidas implementadas durante el período especial, que fueron discutidas entre enero y marzo de 1994 por tres millones de miembros de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), debatidas en asambleas en más de ochenta mil lugares de trabajo, además de una sesión especial de la Asamblea Nacional, surtieron el efecto económico deseado (Gott, 2006: 329). En ese mismo año, la economía dejó de caer y desde 1996 retomó el crecimiento impulsado por el sector de turismo, que se expandió en promedio un 18% al año durante el período especial. Entre 1995 y 2005, el país creció 4,5% en promedio. En 2006, al constatar que el PIB había vuelto al nivel de 1989, el Ministerio de Economía declaró que Cuba había superado el período especial (López Segrera, 2010: 31).

A pesar del hecho de atravesar una crisis de proporciones colosales en una nación periférica y aislada, preservando los marcos fundamentales de la revolución, la percepción de que los valores revolucionarios estaban amenazados motivó reacciones. En el año 2000, el gobierno anunció una "Batalla de Ideas", un conjunto de iniciativas sociales destinadas a mitigar potenciales desigualdades, pero referidas a un discurso revelador de que el impacto del fin del bloque socialista iba más allá de sus efectos económicos y políticos, alcanzando la subjetividad. A fines de 2005, ya cerca de alejarse del gobierno, Fidel Castro pronunció un discurso a la juventud en el que destacó el riesgo de que la revolución se destruyera a sí misma y no por fuerza de adversidades externas: "Este país puede autodestruirse por sí mismo; esta Revolución puede destruirse, los que no pueden

destruirla hoy son ellos; nosotros sí, nosotros podemos destruirla y sería culpa nuestra" (Castro, 2005b)[7].

Cuando Raúl Castro asumió la presidencia del Consejo de Estado en febrero de 2008, enfrentó estos mismos dilemas.

Reforma o actualización

Aunque la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) afirme que "Cuba no está haciendo reformas sino actualizando su modelo económico" (Martínez, 2016), haciendo eco a la visión estatal, muchos entienden que el país está "aunque tal vez no nos guste la palabra, frente a una reforma" (Cobo *et al.*, 2013: 70). El núcleo de los dilemas actuales está relacionado a las limitaciones para universalizar los derechos sociales en una economía subdesarrollada, agravadas por las presiones modernizadoras hacia un patrón de consumo asociado a la sociedad digital. En una palabra, se refieren a las posibilidades contradictorias de realización, en un entorno hostil, de un "socialismo primitivo" (Martínez Heredia, 2003).

La raíz de los cambios en curso son los problemas económicos que estallaron en el período especial, acentuados por la dominación neoliberal y por la crisis del capitalismo mundial. Las relaciones favorables con Venezuela permitieron cierto respiro a la isla, que exportó servicios a gran escala y recibió petróleo en condiciones favorables, pero eso declinó junto con el *boom* de las *commodities*.

Entre 2008 y 2010, el crecimiento del PIB disminuyó a un promedio de 2,5%, mientras que el déficit fiscal se amplió. La imposibilidad del Estado cubano de sustentar el patrón de vida anterior de los trabajadores se revela a través del análisis de los gastos básicos de las familias que dependen del salario o de la jubilación. En el año 2011, los gastos de alimentación consumían entre 59% y 74% del ingreso familiar cubano, ya que la canasta básica a la que todo trabajador tiene derecho ("libreta de abastecimiento") no satisfacía el consumo

7 El libro organizado por Guanche (2007) recopila debates motivados por este discurso.

calórico mínimo de un adulto, sino de niños de hasta los siete años. Ese mismo año, se calculó que el déficit de ingresos para satisfacer las necesidades básicas de reproducción de la vida osciló entre 185 CUP (familia con dos trabajadores y un jubilado) a 747 CUP (familia con un trabajador) (García y Anaya, 2014). Esos datos revelan que cada familia cubana cuyo ingreso proviene del Estado está obligada a buscar fuentes de ingreso complementarias.

José Luis Rodríguez, el economista que dirigió la economía de la isla durante el período especial, resumió los desafíos actuales en tres puntos: reducir el déficit de la balanza de pagos; aumentar la productividad laboral; ampliar y mejorar la infraestructura (Rodríguez, 2016). En principio, estos objetivos implican reducir el gasto del Estado; romper con el igualitarismo de las remuneraciones; atraer financiamiento e inversión extranjera. Indican por lo tanto medidas contrarias a los valores de igualdad y soberanía, recordando el espectro neoliberal.

Sin embargo, la afinidad con el recetario neoliberal es solamente formal, ya que en Cuba los gastos sociales en proporción al PIB nunca fueron reducidos; la propiedad y el empleo estatal continúan siendo dominantes y la relación con el capital internacional es reglamentada. Además, al contrario de la opacidad que caracteriza a la política de ajuste fiscal mundial, decisiones de esta naturaleza están sometidas a una amplia consulta popular (Martínez, 2001). Este fue el caso de los "Lineamientos de la política económica y social" que orientan la política cubana desde 2011, sometidos a debate en varias instancias, entre más de 163 mil reuniones que involucraron a ocho millones de participantes en la base, hasta su lapidación durante el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, que resultó en la modificación de 197 de los 291 lineamientos originales, ampliados a 311 (VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, 2011).

En líneas generales, el deseo de aumentar el dinamismo y la eficiencia de la economía cubana es identificado con el imperativo de ampliar el papel del mercado y de la iniciativa privada, en oposición a la economía estatal. La expectativa es que el Estado cumpla el

papel de reglamentar el mercado, disciplinando la iniciativa privada y la inversión extranjera con la finalidad de preservar las conquistas sociales de la revolución y la soberanía nacional.

En consonancia con esta lectura, los lineamientos comienzan reafirmando su compromiso con la planificación económica, pero que deben "tener en cuenta el mercado" (Partido Comunista de Cuba, 2011). En este sentido, la economía se descentralizó y se promovió el apoyo a la pequeña iniciativa privada y a la inversión extranjera. Los lineamientos se basan en la lectura de que es necesario reducir el empleo estatal y otorgar mayor eficiencia a las empresas públicas. En esta perspectiva, está en curso un proceso de reorganización del Estado y de sus empresas, previendo la reubicación de 1,2 millones de trabajadores, algunos de los cuales son reasignados dentro del sector público, mientras que otros migran al cuentapropismo, pero muchos se jubilan en el camino. Existe la intención de transferir al menos el 20% de la fuerza de trabajo al sector no estatal. En el otro extremo de este proceso, la posibilidad de trabajo por cuenta propia se extendió a 178 actividades (Díaz Vázquez, 2011: 130). Sin embargo, es común que los empleados estatales además de los jubilados, también realicen algún trabajo por cuenta propia (Piñeiro Harnecker, 2016).

Hay sectores de la sociedad cubana que apuestan por el fortalecimiento de un cooperativismo genuino, vinculado a la autogestión y con elevada autonomía en relación al Estado, como alternativa a la vía cuentapropista. Piñeiro Harnecker observó que los lineamientos estimularon, por primera vez, la formación de cooperativas fuera del sector agrícola. Pero en la práctica, su constitución es más burocrática y lenta que un negocio propio, ya que exige la aprobación del Consejo de Estado. Entre 2013 y 2014, se oficializaron 498 cooperativas, pero a fines de 2016, la creación de nuevas unidades estaba paralizada (Piñeiro Harnecker, 2016).

Por otro lado, el lineamiento 17 establece que las empresas estatales o las cooperativas no solventes puedan cerrarse o privatizarse, mientras que el lineamiento 219 prevé la venta o alquiler de equipos

industriales del Estado a particulares (Partido Comunista de Cuba, 2011). Sin embargo, hay disposiciones contrarias a la concentración de la propiedad de los medios de producción (lineamiento 3), lo que no impide las maniobras para burlarlas, como cuentapropistas que mantienen negocios en nombre de familiares.

El principio comunista "de cada cual, según su capacidad; a cada cual según sus necesidades" dio lugar, en los lineamientos, a una retribución salarial vinculada a la productividad[8]. En esta perspectiva, el lineamiento 171 rompe con el incremento simultáneo de los salarios en todos los niveles, priorizando las actividades "que aportan beneficios de particular impacto económico y social" (Partido Comunista de Cuba, 2011). Así, mientras los científicos del ramo de la biotecnología tuvieron un aumento salarial y los estivadores reciben bonos en moneda fuerte cuando descargan con rapidez, el salario de los profesores no tuvo reajuste, acentuando la evasión de la carrera. En 2016 no hubo candidatos inscritos para el magisterio (Fernández, 2016).

A nivel social, los lineamientos prevén la abolición gradual de la libreta y de otros subsidios universales, proponiendo que este tipo de asistencia se oriente a los más necesitados[9]. Es en este sentido que se entienden las afirmaciones contrarias al igualitarismo en Cuba. "Acostumbrados durante tanto tiempo a la aplicación de fórmulas igualitarias, tan perjudiciales para el sistema económico, político y para la psicología e ideología de las personas, también será bastante complejo convencer de que el igualitarismo no es sinónimo de igualdad ni de justicia social y que es necesario terminar con este fenómeno"

8 Según el lineamiento 170: "Asegurar que los salarios garanticen que cada uno reciba según su trabajo, que este genere productos y servicios con calidad e incremento de la producción y de la productividad, y que los ingresos salariales tengan un reflejo efectivo en la satisfacción de las necesidades básicas de los trabajadores y su familia" (Partido Comunista de Cuba, 2011).

9 De acuerdo con el lineamiento 173: "Eliminar las gratuidades indebidas y los subsidios excesivos, bajo el principio de compensar a las personas necesitadas y no subsidiar los productos, de manera general". Y el lineamiento 174: "Implementar la eliminación ordenada y gradual de la libreta de abastecimiento, como una forma de distribución regulada, igualitaria y a precios subsidiados" (Partido Comunista de Cuba, 2011).

(Duharte *et al.*, 2011: 75). La seguridad social también está cambiando, apuntando a mayores contribuciones de los trabajadores en el sector estatal y no estatal (Partido Comunista de Cuba, 2011, líneamiento 165).

La liberación de la compra y venta de casas y automóviles es reconocida (lineamientos 297 y 286) mientras se anuncia la apertura de líneas de crédito para la compra de bienes de consumo duraderos y materiales de construcción (Hernández Pedraza, 2016). En un país donde solo las empresas extranjeras y el sector privado recaudaban impuestos, se prevén nuevos impuestos en consonancia con la expansión del cuentapropismo y de las transacciones comerciales.

En el campo, se enfatiza la entrega de tierras ociosas en usufructo, un proceso desencadenado con la emisión del Decreto-Ley 259, en 2008 (lineamientos 187, 189, 198). En 2006, cerca del 60% de las tierras nacionales fueron identificadas como improductivas, de las cuales el 40% habían sido distribuidas en 2016. Juan Valdés Paz considera que está en curso en el país una cuarta reforma agraria. A diferencia del período especial, cuando se estimuló la formación de cooperativas a partir de propiedades estatales, hay un intento de "recampesinar" los campos cubanos, difundiendo la producción campesina (Valdés Paz, 2016). El objetivo principal es aumentar la producción de alimentos para disminuir las importaciones.

Sin embargo, en un país urbanizado, donde la mayoría de los cubanos en la zona rural está en el servicio público, pocos quieren volver al arduo trabajo del campo. Un dilema similar vive la construcción civil, un sector en expansión, pero que enfrenta escasez de mano de obra. La revolución enfrentó una situación comparable en sus primeros años, cuando la necesidad de exportar tropezó con el rechazo de los cubanos al cultivo de la caña de azúcar, asociado a la sobreexplotación del trabajo, al cual nadie se quería dedicar. En la actualidad, el Estado atrae con altas tasas de ganancias, además de la posibilidad de construir casas y hacer mejoras. Se cree que la reforma constitucional anunciada sustituirá la figura del usufructo de la tierra por la propiedad (Valdés Paz, 2016).

Finalmente, los lineamientos relacionados al capital extranjero reafirman, simultáneamente, la necesidad de atraer y reglamentar las inversiones (lineamientos 96 a 107). Esta es una ecuación delicada, en la medida en que al capital internacional solo le interesa la disciplina favorable a los negocios. Bajo este prisma, el principal atractivo de Cuba es una fuerza de trabajo altamente calificada y barata. Aunque en esta coyuntura hay cubanos que prefieran recibir dólares de un capitalista que órdenes de un burócrata –el "explotado feliz", como dicen —, la intención predominante es conciliar la inversión extranjera y el desarrollo nacional.

Sin embargo, es significativa la parsimonia con la que los cubanos se expresan en relación al régimen chino, un importante socio político y económico, en relación al cual es difícil encontrar críticas. Al contrario, hay frecuentes análisis elogiosos. Por ejemplo, en un balance de los cincuenta años de la Revolución Cubana, Carlos Alzugaray Treto enumeró aspectos del "proceso de reformas implementado en China que tienen validez para Cuba", incluido el énfasis en los resultados, citando la famosa frase de Deng Xiaoping, "da lo mismo si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace ratones"; o el "reconocimiento y la utilización de las relaciones monetario-mercantiles mediante la fórmula de 'economía de mercado socialista'; y la creación de una nutrida clase media (Alzugaray Treto, 2009: 43). El propio Fidel Castro, en un discurso ante las autoridades chinas en 2004, declaró que "China se convertió objetivamente en la esperanza más promisoria y en el mejor ejemplo para todos los países del Tercer Mundo" (Castro, 2004).

Entiendo que, en este momento, hay una especie de torcida de brazo, entre el gobierno cubano y el capital extranjero, en el que se pretende el mínimo de concesiones para atraer la inversión deseada. En 2014, se promulgó una nueva ley de inversión extranjera, permitiendo la actuación de las empresas "totalmente extranjeras". Entre otros incentivos al capital internacional está la exención del impuesto sobre las ganancias durante los primeros ocho años de inversión; sobre las ganancias reinvertidas; sobre los ingresos personales de

socios extranjeros; sobre el empleo de la fuerza laboral (además de la contribución a la seguridad social del 14%); exención de derechos de aduana durante el período de inversión, entre otras disposiciones. En este mismo año, circuló por primera vez una Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera, presentando 246 proyectos de búsqueda de inversionistas en la isla, muchos de ellos en la Zona Especial de Desarrollo (ZED) asociada al puerto de Mariel. Hasta el 2016 fueron registrados quince nuevos acuerdos en la ZED Mariel y 54 fuera de ella, moviendo un total de 1,3 millones de dólares, cifra aún baja para las expectativas del gobierno (López R. y Herrera, 2015; Concepción *et al.*, 2016).

El dilema se ilustra con una anécdota que circula en el país: el gobierno cubano ofrece una cartera de posibles inversiones al capitalista extranjero en Mariel y explica cada una de las posibilidades; su interlocutor escucha, cierra el maletín y dice: "Lo que quiero yo saber es cuánto vale Mariel" (Valdés Paz, 2016).

En general, los lineamientos expresan la lectura, resumida por la economista Gladys Hernández, de que Cuba necesita fomentar una economía mixta, ya que el Estado no puede garantizar el pleno empleo y la sociedad no admite un desempleo elevado, pero entiende que la preservación de los servicios públicos universales sirve como un importante "colchón social" que mitiga el impacto de la creciente desigualdad (Hernández Pedraza, 2016). Valdés Paz hace eco de la opinión de muchos cuando dice que Cuba sigue siendo una economía planificada, en la que el Estado controla los sectores económicos (finanzas, industria, hoteles) y sociales (salud, educación, ciencia) estratégicos. En la antítesis del libre mercado, afirma que "en Cuba, nadie está solo, ni hay nada suelto" (Valdés Paz, 2016).

A diferencia de quienes entienden que las experiencias socialistas "subestimaron las leyes del mercado" (Alzugaray Treto, 2009: 46), el exministro Rodríguez está entre los que admiten una contradicción esencial entre el socialismo y el mercado. Pero frente a lo inevitable del cambio, se refiere a un esfuerzo por "dosificar" las medidas, con

el fin de liberar las tensiones sociales sin perder el control sobre el tiempo del proceso. Como dijo Raúl Castro (2011), "sin prisa, pero sin pausa". Rodríguez resumió su lectura sobre el sentido de lo que se propone al decir que Cuba es una economía planificada que contempla el mercado, mientras que China y Vietnam son economías de mercado con modulación socialista, toda vez que tienen aspiraciones redistributivas. Y, por último, reafirma la voluntad política prevalente de no permitir que se opere una restauración capitalista en la isla (Rodríguez, 2016).

Dilemas actuales

En 2016, Cuba atravesaba el mayor debate público vivido en 57 años de revolución. Quien rinde culto a la imagen de una ideología totalitaria en un país estático, en medio de una sociedad silenciosa y apática, no comprende lo que pasa en la isla. Rafael Hernández (2016), intelectual a la cabeza de la revista *Temas* y del foro de debates llamado *Último Jueves*, uno de los espacios críticos más vitales en el país, enumeró los principales temas en discusión:

(i) el problema de la desigualdad, que se cuadruplicó en 25 años, en paralelo al crecimiento: ¿sería la desigualdad un costo a pagar por el crecimiento?

ii) sobrecentralización *versus* control: ¿cómo descentralizar sin perder el control o cómo generar nuevas formas de control? El debate cubano no está pautado por la ideología del Estado mínimo, pues prevalece la percepción de que el Estado tiene un papel fundamental y su extinción es impracticable bajo el imperialismo. El problema original que se puso a la revolución: —"¿cómo demonios voy a hacer un Estado fuerte pero que no me coma?"— es reactualizado (Martínez Heredia, 2016);

iii) el espacio del sector no estatal, tanto privado como cooperativo. Hay diferentes visiones sobre cómo dinamizar y democratizar la economía;

iv) modificar lo que Raúl Castro describe como "vieja mentalidad", asociada a los vicios políticos y culturales heredados de la influencia soviética, como el dogmatismo y el burocratismo. Hay una paradoja en la medida en que los responsables de la reforma perderán poder;

v) el papel de la ley: el desajuste entre los cambios en curso y la ley actual, que demora en modificarse. Hernández mencionó la necesidad de reformar la ley de municipios, la ley electoral, la ley de asociaciones, la ley de culto, la legislación laboral, entre otras. Por ejemplo, hay un nuevo código general de trabajo, pero que no contempla el sector cuentapropista, ya que todos son reconocidos como trabajadores por cuenta propia, a pesar de que muchas veces son pequeñas empresas. Por lo tanto, muchos de los que trabajaban, en la práctica, para pequeños y medianos empresarios, no tienen reglamentados los horarios de trabajo, el salario mínimo, las vacaciones, la protección ante el embarazo, entre otros (Hernández, 2016).

Hay dos cuestiones centrales que atraviesan estos debates y están relacionadas: la reforma económica y la democratización política. Existe un consenso entre los cubanos sobre la necesidad de ambas, pero hay diferentes formas de interpretarlas.

Camila Piñeiro Harnecker (2016) describe tres corrientes en el debate económico: 1) la visión estatista, que defiende cambios mínimos, generalmente asociados a los sectores de la burocracia estatal; 2) una visión economicista, que favorece la propiedad y la iniciativa privadas, inspirándose frecuentemente en la referencia china; y 3) quienes defienden una democratización de las relaciones productivas vinculadas

a intereses colectivos y no individuales, referido principalmente al cooperativismo. Además de estos, se constata una minoría simpatizante con la liberalización *tout court*, así como hay voces en el polo opuesto, acusando una renuncia a los ideales de la revolución en el proceso en curso (Hernández, 2016; Katz, 2014). Sin embargo, lo que prevalece es la defensa de caminos discrepantes, pero igualmente convencidos de realizar el ideario revolucionario en las condiciones actuales.

Este denominador común no siempre se tradujo en convergencia de ideas o mayor claridad en el debate. Frecuentemente los valores socialistas aparecen inmiscuidos en un vocabulario asociado con la racionalidad capitalista. El término "capital humano", de uso corriente en la Cuba actual, es representativo de este fenómeno (Salazar Fernández, 2012). Fidel Castro se refirió al término en las siguientes palabras: "El capital humano implica no solo conocimientos, sino también —y esencialmente— conciencia, ética, solidaridad, sentimientos verdaderamente humanos, espíritu de sacrificio, heroísmo y capacidad de hacer mucho con poco" (Castro, 2005a). Otro ejemplo es trabajar la imagen de Cuba como una "marca país" en el mercado turístico internacional (Ricardo Luis, 2014).

En un debate reciente sobre la actualización del socialismo, se delinearon los marcos de la discusión. Hay quien defiende la importancia de "conformar una cultura empresarial competitiva, en la cual el empresario se perciba en su condición de creador de riqueza, comprometido con los clientes a los que destina su producción y servicios y que su responsabilidad social adquiera un verdadero sentido". (Cobo *et al.*, 2013: 71). Por otro lado, hay quien critica los lineamientos, diciendo que allí "lo que se propone es una mayor autonomía empresarial, léase gerencial; el documento no menciona el tema de la participación de los trabajadores y de la población". Y enmienda: "Necesitamos del poder del pueblo y no solo la propiedad de todo el pueblo" (Alonso *et al.*, 2013: 72).

Mientras algunos sugieren que "el desarrollo radica en el desarrollo empresarial" (Nova *et al.*, 2013: 75), otros preguntan: "Si no es

ahora, ¿cuándo estaremos listos para la autogestión?", defendiendo el fortalecimiento de una "cultura de iguales" (Piñeiro Harnecker, 2016).

La compleja relación entre medios y fines en una sociedad que propone superar el capitalismo tiene un tema central en las relaciones de producción. Y también en este campo los valores socialistas corren el riesgo de empaparse de la racionalidad mercantil. En un análisis de las relaciones laborales en la política de actualización, José Luis Martín Romero (2015) considera que Cuba, al "no abandonar los esquemas de gestión verticalista, salarialista y centralizadora, renunció a la ventaja comparativa [del socialismo] de contar con el involucramiento y compromiso de los trabajadores". ¿No sería paradójico superar el trabajo alienado para obtener una "ventaja comparativa" en el mundo contemporáneo?

En el fondo de este debate se enfrentan dos enfoques: el recurso a los medios capitalistas, que se pretenden subordinar a los fines socialistas versus la orientación de los vientos de cambio rumbo a una democratización en todas las dimensiones, que incluyen las relaciones de producción. Este dilema exige considerar las posibilidades reales de cambio en las relaciones jerárquicas de producción, lo que implica cuestionar hasta qué punto la Revolución Cubana construyó el sujeto de una sociedad emancipada. Cuando Piñeiro Harnecker pregunta "si no es ahora, ¿cuándo estaremos listos para la autogestión?", es necesario recordar que, en los primeros años de la revolución, ciertamente ellos no estaban: la mayoría absoluta de los trabajadores rurales optó por servir a una granja estatal en lugar de formar una cooperativa. El legado de la esclavitud y de la monocultura azucarera no favorece la autogestión. Por lo tanto, una cultura en esta dirección necesitaría ser forjada.

Es en este punto que los desafíos económicos y políticos de la revolución se encuentran. Ya que, a pesar del alto nivel de escolaridad y de la notable cultura política del ciudadano común, que impresiona a cualquier visitante, hay una evaluación generalizada de que prevalecen límites para la formación de un sujeto emancipado.

El educador Ariel Dacal recuerda que la educación cubana alcanzó niveles de excelencia atestiguados rutinariamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), pero siempre en la línea de lo que Paulo Freire llamó "educación bancaria". En su opinión, es una sociedad altamente informada, pero que tiene capacidades limitadas para producir política a partir de esta información (Dacal, 2016).

Este es un problema para aquellos que consideran esencial contraponer la creciente presión del mercado con el compromiso crítico, en defensa de los valores revolucionarios. Desde esta perspectiva, hay una preocupación por la despolitización, sorprendente para el observador extranjero, acostumbrado a niveles de alienación que no tienen paralelo en Cuba. En particular, se discute la situación de la juventud, lo que está vinculado a una apreciación crítica del sistema educativo y la participación política.

En un debate sobre estos temas, se observó que "nuestra educación está planificada, organizada, proyectada de manera despolitizada, porque cuando se politiza se hace como ritual, dogma o memorización de circunstancias" (Fernández Estrada *et al.*, 2013: 75). Desarrollando esta perspectiva crítica sobre la política, el periodista Luis Sexto afirmó: "Si continuamos insistiendo en que el lema y la fraseología es el mejor modo de unir, de hacer política, continuaremos equivocándonos" (Sexto *et al.*, 2013: 76). En este tono, Julio César Guanche, uno de los exponentes críticos de la izquierda, relacionó la despolitización con un agotamiento de la legitimidad del gobierno: "En Cuba, la despolitización expresa la crisis de la política oficial; es decir, la desconexión, la desvinculación, la ruptura con la política oficial que está en curso. Cuando se despolitiza, es porque alguien fue desposeído de la política" (Guanche *et al.*, 2013: 78). Un asistente al debate ofreció una visión distinta: "Nuestra sociedad está completamente politizada. El hecho de pensar de manera diferente […] no llamo despolitización, sino estar politizado en una dirección diferente" (Garcés, 2013: 78).

La cuestión de la politización está vinculada a la participación política y a los valores. Desde este ángulo, Hernández pregunta: "¿Puede haber un cambio de mentalidad y de valores sin cambiar los modos de participación, acceso al poder, jerarquías establecidas?" (Hernández *et al*., 2013b: 78). De hecho, se constatan presiones de origen diverso dentro del campo revolucionario por cambios en esta dirección.

Estas cuestiones son particularmente sensibles en relación a la juventud, cuyo compromiso revolucionario es motivo de escepticismo en el extranjero. Aunque prospere un ideario individualista, sintetizado en el lema "solo hay una vida" —y esta vida es suya—, también hay quienes reclaman una mayor participación en los rumbos del país a partir de una posición comprometida (Limia Díaz, 2016).

En un debate sobre la relación de los jóvenes con la revolución, un participante afirmó: "Nosotros, los jóvenes cubanos no estamos curtidos en la participación y en el ejercicio del poder. Tampoco tenemos claridad de lo que queremos y las formas de conseguirlo" (Rojas *et al*., 2008: 159). El rechazo a la participación tutelada fue resumido por otra joven en la siguiente frase: "Los jóvenes no queremos que nos dejen jugar a hacer la revolución: queremos hacer la revolución" (Ortega González *et al*., 2008: 154).

Más allá del papel de la juventud, el cientista político Julio Antonio Fernández Estrada señaló que, en Cuba, el pueblo se acostumbró a la participación popular amparado por el Estado. Evidentemente, esto se da en el marco del origen singular del Estado cubano, su renovada legitimidad como defensor de los valores revolucionarios y de la exigencia de la unidad contra la agresividad estadounidense, que nunca fue retórica. En este contexto, llama la atención su observación de que el pueblo tiene poca relación con la lucha política y necesita adquirir experiencia en este campo (Fernández Estrada, 2016). Esta reinvindicación supone una relación modificada con el Estado. ¿Será que la renovación de la política cubana que se insinúa corresponderá a una agudización de las contradicciones características de una sociedad de clases?

Se vislumbra una flexibilización del Estado, en que el dogmatismo y el control asociados a la influencia soviética se ponen en jaque, abriendo posibilidades progresistas para las formas de hacer política y cultura en Cuba. Sin embargo, esto ocurre en un contexto de mercantilización de la vida, que milita contra la nación, la igualdad y el internacionalismo como valores colectivos. Luis Morlote (2016) recordó que en el ámbito de la cultura nunca hubo un bloqueo, y que el *American way of life* se hace presente en la televisión, en la radio, en los cines y en los turistas. La delicada paradoja de la radicalización democrática en la unidad revolucionaria, entre el fuego cruzado del imperialismo y de la burocracia, fue resumida en estas palabras por un joven: "El llamado a la disciplina dentro de las filas revolucionarias tiene que estar compensado por una indisciplina urgida por las necesidades de cambio" (Pérez *et al.*, 2008: 155).

La mercantilización de las relaciones sociales y la penetración del capital extranjero inciden en la dinámica social y crean divisiones. Debe haber cuentapropistas que "quieren contribuir con el país", como dice Piñeiro Harnecker. Pero ciertamente garantizarán sus ganancias primero, lo que implica la explotación del trabajo, aunque en este momento puedan ser "explotados felices". En general, los cubanos quieren un proyecto justo, pero como no tienen claros los caminos, "primero resuelven el suyo" (Dacal, 2016). Las tensiones entre la expectativa de una actualización progresista y la erosión de los valores colectivos resultantes de la difusión mercantil delimitan la disputa por el sentido de los cambios en la isla.

Es probable que las contradicciones abiertas en la transición cubana —los "hilos sueltos", como dice Valdés Paz—- afloren y se encaminen hacia una reforma constitucional anunciada por el gobierno, que comenzó a mediados de 2018. Se formó una comisión para realizar la reforma constitucional. En el anteproyecto, aprobado por unanimidad por el parlamento en julio, se reconoce la propiedad privada y la palabra "comunismo" se elimina del texto, aunque enfatice que el socialismo sigue siendo una política de Estado. Aún así, no hay

total claridad sobre cómo se dará el proceso, ni sobre el contenido y el alcance de la reforma. Sin embargo, su urgencia es cierta, ya que muchas de las "actualizaciones" en curso son, en la práctica inconstitucionales. Se cree que, después de todo, será necesario producir una nueva Constitución (Fernández Estrada, 2016).

La nueva etapa fue sellada con el retiro de Raúl Castro, cuyo puesto como presidente del Consejo de Estado y Ministros cubanos fue ocupado por el entonces primer vicepresidente, Miguel Díaz-Canel, que nació después del triunfo revolucionario[10].

Reflexiones finales

Los dilemas del presente sumergen a la isla en un intenso "proceso de introspección" (García *et al.*, 2013: 80), que da lugar a reflexiones sobre la totalidad del proceso revolucionario. En particular, llama la atención la coincidencia entre la reinvindicación de la necesidad de una alianza con la Unión Soviética en el pasado y el reconocimiento prácticamente unánime de la necesidad de ampliar el papel del mercado en la actualidad, al tiempo que atribuye al Estado un papel regulador.

No se pretende argumentar contra la política de aproximación con la Unión Soviética o cuestionar los lineamientos actuales. En ambos casos, se tratan de políticas conducidas por un liderazgo comprometido con el pueblo cubano y provisto de una vivencia incomparable, que les dota de argumentos políticos y morales de incuestionable solidez. Sin embargo, en un momento en que el fracaso de la ola progresista obliga a repensar los medios y fines del cambio social en la América Latina del siglo XXI, se considera relevantes algunas reflexiones sobre estos temas, a fin de volver a colocar la revolución en la agenda política de la región.

10 Aún así, Raúl continúa influenciando la política del país, ya que se mantuvo como presidente del Partido Comunista de Cuba y como comandante máximo de las Fuerzas Armadas [n.e.].

1.

La aproximación con la Unión Soviética tuvo dos consecuencias importantes y relacionadas. A nivel económico, la inserción productiva especializada en el marco de una relación comparativamente favorable, que fue tratada como un hecho permanente de la realidad, llevó a postergar el enfrentamiento de las dimensiones estructurales del legado colonial. Su principal expresión es la incompatibilidad entre una base productiva relativamente estrecha y la universalización del patrón de consumo asociado a las sociedades industriales.

A pesar del importante crecimiento registrado en el período, el intercambio con los soviéticos frustró cualquier expectativa de acumulación en una dirección industrial, que no estaba entre las intenciones de Moscú durante la Guerra Fría. Cuba no superó su condición de país exportador primario y dependiente y las debilidades inherentes a una economía subdesarrollada volvieron a la superficie cuando la potencia se desmoronó. Es innegable que el bloqueo estadounidense exacerba la carga de la pobreza, pero no es su causa, ni su suspensión será un día su solución.

Una revolución en la periferia del capitalismo que confronte la ilusión desarrollista, asumiendo los límites materiales que impone el subdesarrollo, al menos en un contexto de aislamiento, necesita compensar su debilidad económica con el poder político. De hecho, es lo que las burguesías dependientes hacen, aunque con la finalidad contraria: la de perpetuar el subdesarrollo (Fernandes, 1975).

La legitimidad de toda revolución emana de la capacidad de defender los intereses del pueblo. Inicialmente en el proceso cubano, estos intereses se identificaron con la formación de la nación. Pero, la superación del neocolonialismo desencadenó una dinámica que empujó el proceso hacia el comunismo, que supone una igualdad sustantiva. Al romper con los parámetros de la sociedad burguesa, la revolución se comprometió a radicalizarse en esta dirección. La distribución equitativa de la riqueza es una dimensión fundamental de este ideario, pero no es la única: el fin de las jerarquías en el trabajo,

la participación política y la igualdad étnica y de género también hace parte de él.

La igualdad sustantiva es necesariamente un ideario colectivo, premisa para la realización de la individualidad. Eso es la libertad en el ideario comunista. En oposición al comunismo, la ideología del capitalismo supone que el ser humano se realiza individualmente. Presidida por la competencia, en lugar de la cooperación, la realización liberal está asociada al mérito, que a su vez remite a la capacidad de acumulación. En una ideología que naturaliza el mercado, la realización individual está mediada por el consumo, ilusión que solo puede prosperar en medio de seres humanos frustrados.

El comunismo ofrece una vía radicalmente opuesta, porque el humano se realiza por medio de lo que hace, y lo que se hace condiciona lo que se es. Por lo tanto, el individuo solo es libre cuando el hacer estuviera emancipado de la coerción. Eso no significa la abolición del trabajo en el sentido de la producción material de la existencia, pero si la superación del trabajo vacío de sentido para quien lo hace. Como el trabajo, así como la política, se llevan a cabo en la esfera social y no en lo privado, se puede decir que el ser comunista se realiza en la esfera social.

La mano dura de la influencia soviética inhibió la realización revolucionaria en esta dirección. El burocratismo en la economía militó contra el trabajo libre, el dogmatismo en la política contra el poder popular y el realismo cultural contra la originalidad creadora. Aunque se admita la aproximación a los soviéticos como una necesidad, la justificación de estas características en función al imperativo de la unidad es discutible. Considerando la escasa injerencia de la superpotencia en los asuntos internos de la isla, lo más probable es que la opción tradujera una creencia genuina en los méritos del patrón soviético. Cabe destacar que esta fue una incorporación selectiva: en Cuba la revolución se ha conducido de manera pacífica y la isla nunca vivió las convulsiones y expurgaciones del primer Estado obrero y campesino en la historia, ni las de su rival chino.

La convergencia entre burocratismo, dogmatismo y el realismo socialista impidió la renovación política en términos generacionales, pero afectó principalmente las propias posibilidades de revolución dentro de la revolución —o, para usar un término herético—, de revolución permanente: inhibió la "indisciplina urgida por las necesidades de cambio".

2.

Al gravitar hacia el campo soviético y adoptar prácticas políticas y culturales asociadas a él, la Revolución Cubana profundizó la apuesta por un camino asociado al desarrollo de las fuerzas productivas. Para hacer una analogía, apostó a destacar en los Juegos Olímpicos y tuvo éxito en este camino: durante ediciones seguidas obtuvo más medallas que toda América Latina sumada. Con esto, sin embargo, reforzó la lógica del deporte competitivo de alto rendimiento, alineada según los criterios nacionales —a pesar de preservar el carácter amateur de la práctica deportiva, también en revisión en la actualidad.

El "seguidismo" soviético implicó la opción por un patrón civilizatorio determinado, vinculado a la noción de desarrollo. Esta opción tuvo como resultado, necesario o no, políticas antagónicas a la autogestión económica, a la formación crítica y a la libertad creativa. En conjunto fueron factores conservadores que limitaron la realización del ideal humanístico de la revolución: el "hombre natural" de Martí o el "hombre nuevo" del Che Guevara.

Es posible considerar que los avances materiales de los años 1970 ampliaron el margen de la maniobra futura. Rodríguez considera que la revolución no resistiría el impacto del período especial sin la prosperidad de años anteriores. Sin embargo, este es un raciocinio problemático, como toda contrafactualidad en la historia: es posible argumentar que, sin la inserción en la órbita soviética, el impacto de su colapso sería otro. O que, en realidad, ni siquiera habría habido un período especial. Es imposible especular sobre lo que habría sido

Cuba sin su inserción a la órbita soviética, que solo se consumó después de una década del triunfo revolucionario.

Lo cierto es que esa vía también condicionó las elecciones políticas futuras, en la medida en que la revolución de los valores, que ampliaría el campo de las alternativas, incluso económicas, se vio limitada por la discontinuidad de la radicalización democrática y cultural. Es probable que el propio campo de alternativas teóricas y políticas considerado por el liderazgo revolucionario —la "máxima conciencia posible" en la expresión de György Lukács—, se haya reducido. Existen nexos objetivos y subjetivos entre la necesidad de aproximación a los soviéticos en el pasado y a la necesidad de apertura mercantil en el presente.

Finalmente, el razonamiento de la necesaria aproximación con los soviéticos implica reconocer la imposibilidad del socialismo en la periferia sin amparo internacional. Bajo esta perspectiva, los límites de la Revolución Cubana están inscritos en las contradicciones de la experiencia soviética. Este enfoque se justifica en el plano de realización material del comunismo, que supone la revolución mundial. Pero, desde el punto de vista político, la propia trayectoria cubana desafía esta lectura, un cuarto de siglo después del colapso soviético.

La alternativa a las limitaciones económicas es radicalizar su lastre político, lo que exige un patrón civilizatorio alternativo no solo al capitalismo, sino también al comunismo. Esto porque el socialismo primitivo enfrenta la desigualdad en condiciones en que la igualdad en la abundancia es imposible. Esta disyuntiva se evidencia en el presente: frente a las barreras para sostenerse materialmente —del aislamiento político mundial, de la abrumadora industria del entretenimiento, de la seducción consumista y de las modernidades del mundo digital—, le quedaría al socialismo primitivo basarse en valores radicalmente diversos, más allá de la igualdad y de la soberanía. Su salvaguarda sería la unidad popular en torno a un proyecto de nación asentado en la igualdad sustantiva, permitiendo gozar de un conjunto de valores alternativos a la seducción del consumo: la igualdad, la participación y la libertad. Rechazar esta posibilidad histórica equivale a resignarse

a una modalidad de "socialismo dependiente", subestimando la radicalidad humanista implícita en el marxismo, en el que la realización de la existencia trasciende de lejos los motivos económicos.

3.

El proceso cubano tuvo limitaciones para superar la alienación del trabajo y de la política —y, consecuentemente, para generar una cultura emancipadora—. Es cierto que todo depende de la vara con la que se mide: Cuba es una sociedad más democrática, autoconsciente y culta que cualquier Estado burgués.

También es mucho más humana: los cubanos tienen poca experiencia en lo que se refiere a la violencia policial; peleas de barras bravas; llamadas de *telemarketing*; atención de grabaciones electrónicas; memorización de contraseñas; puertas giratorias; torniquetes; publicidad en las calles, en la televisión, en periódicos, revistas y cines; el *marketing* electoral; el parlamento como mesa de negocios; la notaría; el crimen organizado; la seguridad privada; la matanza en prisiones superpobladas; la enseñanza, la salud, la seguridad social y la cultura como negocios; el cine, el ballet, el libro, el medicamento y transporte público caro; examen que impide el ingreso a la universidad; *fast-food*; desalojo; niño trabajador; niño fuera de la escuela; madre que no tiene dónde dejar al niño para trabajar; el matrimonio es fácil y gratuito, así como el divorcio; el analfabetismo; *big brother*; radar en el tránsito; tráfico; *shopping center*; lotería; bingo; culto (aunque el neopentecostalismo esté creciendo); pornografía; hambre; desempleo; abandono de la infancia; abandono en la vejez. En resumen, el cubano tiene poca familiaridad con la experiencia del desamparo.

Es evidente que hay muchos problemas y dificultades: autobuses insuficientes y abarrotados, salarios bajos, trabajos muy por debajo de su capacidad, filas, poca variedad de productos, eventual escasez, cortes de energía, casas cayendo, procesos largos, funcionarios arbitrarios o no comprometidos, prensa aburrida, internet precario, etc. Una lista que cualquier cubano alargaría.

Algunos de estos problemas son los mismos en otras partes del mundo. Otros son diferentes, pero no necesariamente peores. Los cubanos se quejan del Estado, pero no tienen idea de lo que significa ser atendido por una voz electrónica, descargar un formulario en Internet, pagar una tarifa, volver al otro día y no ser atendido. En Cuba, las personas todavía hablan con personas.

El racismo y el machismo subsisten. Pero muchos negros son médicos, dirigentes y profesores, mientras que las mujeres están en la mayoría en las universidades y en sectores como la salud pública, la ciencia y la cultura. También se habla de la ineficiencia del Estado. Pero es un Estado que alimenta, viste, educa, cuida, defiende y da cultura a toda su población. La ineficiencia depende del punto de vista.

Medida por la regla del capitalismo contemporáneo, Cuba es una especie de reserva ecológica de valores humanos que el mundo se esfuerza por desnaturalizar: "Para nosotros, tú no eres un extranjero, eres un ser humano", escuchó un colega brasileño, inseguro por no saber si recibiría atención médica en la isla. "Los médicos cubanos son los mejores del mundo porque son los más amorosos", dijo un padre.

Pero el desafío de sostener el "socialismo primitivo" en un siglo XXI muy primitivo y poco socialista requeriría una radicalización democrática de la economía y de la política, arraigada en una elevación de la conciencia crítica y de la creatividad de su población, que no se sembró bajo la órbita soviética. Cuando el liderazgo revolucionario inició una autocrítica a mediados de la década de 1980, se temía que los desafíos planteados por el período especial en medio del colapso del socialismo real harían de la radicalización democrática una empresa arriesgada. En ese contexto, la cohesión nacional sobrevivió como un valor porque la gente entendió lo que estaba sucediendo e incorporó la adversidad como suya.

La situación actual es ambigua, porque el cambio también sopla a través de los vientos del mercado. Expresando esta ambivalencia en la relación con el Estado, los cubanos quieren cambiar, pero preservando

las conquistas; apuestan en el mercado, pero regulado; atraen capital internacional, pero defienden la soberanía.

Hay un componente de conformismo, pero también hay una conciencia crítica en esta ambivalencia. El cubano que emigra difícilmente carga la ilusión del *American dream* y valora la seguridad social que deja atrás. Raramente abandona el país por razones ideológicas, pero sí porque cree que puede y merece más. Como dijo un cubano, el joven emigra como quien sale de casa porque no aguanta más a los padres y quiere seguir su camino, no porque ya no los ama.

Finalmente, la ambigüedad existe porque la vida no solo es difícil, sino que a veces le falta sentido. Si el consumo llena los vacíos existenciales en el capitalismo, el antídoto socialista es proporcionar vías de realización existencial, haciendo que el consumismo carezca de sentido.

En Cuba, se avanzó mucho en esta dirección: se forjó una cultura en que nadie se enorgullecía de sus bienes materiales, pero sí porque ejerció la solidaridad en Angola. Es una revolución en la que se perdió el respeto por la riqueza, por la propiedad privada y por el imperialismo. Quizás no sean los revolucionarios "guiados por grandes sentimientos de amor" idealizados por el Che, pero todos tienen dientes sanos: al menos ya tienen la dentición del hombre nuevo, como dijo Martínez Heredia.

En la actualidad, el dinero recuperó el poder —y lentamente recupera su legitimidad—. Resurgen las familias que gastan lo que no tienen en una fiesta de quince años, o en un casamiento ostentoso. Se pueden observar comportamientos volcados a la mirada del otro, característicos de una sociedad narcisista: son posturas conservadoras, discrepantes de la ética revolucionaria en que se forjó la emancipación cubana, pero no necesariamente contrarrevolucionarias. Más grave es la percepción de que, poco a poco, las cosas del capitalismo se naturalizan, como aceptar como normal que uno compre algo que el otro no pueda. O constatar el avance de la racionalidad neoliberal, entendida no como una prescripción económica, sino como una razón estructurante que coloniza otras esferas de la existencia, como

denota la noción de "capital humano". En este contexto, Martínez Heredia (2016) consideró que en Cuba los revolucionarios no están perdiendo la batalla, pero tampoco la están ganando.

4.

En la actual Cuba, el Estado perdió el monopolio de las preguntas y respuestas sobre el futuro del país. El orden social en el cual el Estado tiene el compromiso de resolver los problemas de sus ciudadanos, en una trayectoria que apunta al comunismo, entró en crisis. El sentido de los cambios iniciados en el período especial ya no es provisional ni reversible y la utopía comunista se enfría. Se vive un momento de transición, en el que el paradigma anterior pierde peso en la realidad, pero todavía no se consolidó una alternativa con capacidad movilizadora comparable (Dacal, 2016). Como dijo un joven: "No tenemos claro lo que queremos y las formas de conseguirlo".

El sentido del cambio en la isla está en disputa y se imagina el país de muchas maneras. Barack Obama compartió su visión de Cuba con los cubanos en su visita al país: "En los Estados Unidos tenemos un monumento claro de lo que pueden construir los cubanos: se llama Miami" (Obama, 2016).

Dentro de la isla, existe un alto consenso en torno a un proyecto de nación que preserve la universalidad de las conquistas sociales y la soberanía. Las reacciones espontáneas a la muerte de Fidel dieron este testimonio: quien habló de juventud indiferente a la muerte del comandante expresó un deseo y una mentira. Los cubanos homenajearon masivamente al líder del proceso que consumó la nación, a pesar de las discrepancias que todo cubano tiene. Fue un reconocimiento a quien defendió el pueblo en el pasado, pero también un homenaje al presente y un mensaje para el futuro: las manifestaciones tuvieron un importante efecto demostrativo frente a los Estados Unidos y al mundo (Garcés, 2016).

Como dijo la presidente de la FEU, el problema no son los que están en contra de la revolución, sino la dirección que tomará

la revolución: en qué medida será posible preservar el valor de la igualdad frente a los cambios en curso y cómo hacerlo. El futuro que respiran los cubanos ya no es la utopía de una sociedad sin Estado, sin clase y sin propiedad privada, pero una combinación de derechos universales, gratuitos y de calidad, con relaciones mercantiles disciplinadas por un Estado soberano.

Frente a este escenario, dos dilemas se presentan para la revolución que "asaltó a la oligarquía, pero también a los dogmas revolucionarios": ¿hasta qué punto la mercantilización de las relaciones sociales será compatible con la preservación del ideario revolucionario, aunque en su versión minimalista? ¿Podrá el Estado disciplinar al capital en defensa de la nación en la periferia mundial en el siglo XXI?

En la obra moral regeneradora de la Revolución Cubana, el optimismo de la voluntad se enfrenta al pesimismo de la razón.

Bibliografía

ALONSO, AURELIO *et al.*

2013 "Actualizando el modelo: economía política y cultura", en *Temas*, núm. 73, enero-marzo, pp. 70-80.

ALZUGARAY TRETO, CARLOS

2009 "Cuba cincuenta años después: continuidad y cambio político", en *Temas*, núm. 60, octubre-diciembre, pp. 37-47.

ARMAS, RAMÓN DE

2002 *La revolución pospuesta*. La Habana: Centro de Estudios Martianos.

AUGUST, ARNOLD

2014 *Cuba y sus vecinos. Democracia en movimiento*. La Habana: Ciencias Sociales.

CASTRO, FIDEL

2005a "Discurso pronunciado por el Presidente de la República de Cuba, Fidel Castro Ruz, en el acto con motivo de la primera graduación de la Escuela Latinoamericana de Medicina, Teatro Carlos Marx", 20 de agosto de 2005. Disponible en: http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2005/esp/f200805e.html.

2005b "Discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz, Presidente de la República de Cuba, en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la universidad, efectuado en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, el 17 de noviembre de 2005". Disponible en: http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2005/esp/f171105e.html.

2004 "Una sola China, única, intangible e inmortal". Discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, Primer Secretario del

Partido Comunista de Cuba y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en la ceremonia de condecoración con la Orden 'José Martí', a Hu Jintao, Secretario General del Partido Comunista de China y Presidente de la República Popular China, en el Palacio de la Revolución, el 23 de noviembre de 2004, en *Granma*, 24 de noviembre de 2004. Disponible en: http://www.granma.cu/granmad/secciones/visitas/china/art04.html.

1961a "Una Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes". Discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz, Presidente de la República de Cuba, en las honras fúnebres de las víctimas del bombardeo a distintos puntos de la República, efectuado en 23 y 12, frente al cementerio de Colón, el día 16 de abril de 1961, en *Cuba Debate*. Disponible en: http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/04/16/una-revolucion-de-los-humildes-por-los-humildes-y-para-los-humildes/#.WIDeoVMrLIU.

1961b "Discurso pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz, Primer Ministro del Gobierno Revolucionario y Secretario del PURSC, como conclusión de las Reuniones con los Intelectuales Cubanos, efectuadas en la Biblioteca Nacional el 16, 23, 30 de junio de 1961". Disponible en: http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1961/esp/f300661e.html.

1952 "Al tribunal de urgencia", 24 de abril de 1952. Disponible en: http://www.fidelcastro.cu/es/articulos/al-tribunal-de-urgencia.

CASTRO, RAÚL

2011 "Discurso de Raúl Castro: 'Continuaremos haciendo realidad todo lo acordado'". Discurso del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en el VIII Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 23 de diciembre de 2011. Disponible en: http://www.cubadebate.cu/opinion/2011/12/23/discurso-de-raul-castro-en- el-parlamento-de-cuba/#.WHio-VMrLIU.

COBO, NARCISO *et al.*

2013 "Debate: Actualizando el modelo: economía política y cultura", en *Temas*, núm. 73, enero-marzo, pp. 70-80.

CONCEPCIÓN, JOSÉ RAÚL; DIANET GUERRERO DOIMEADIOS, IRENE PÉREZ Y RODRIGO MALMIERCA

2016 "Necesitamos atraer el capital extranjero", en *Cuba Debate*, 1 de noviembre de 2016. Disponible en: http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/11/01/rodrigo-malmierca-en-fihav-2016-necesitamos-atraer-el-capital-extranjero/#.WHecUVMrLIU.

DÍAZ VÁZQUEZ, JULIO
2011 "Un balance crítico sobre la economía cubana. Notas sobre dirección y gestión", en *Temas*, núm. 66, abril-junio, pp. 123-133.

DIEZ ACOSTA, TOMÁS
2008 *Octubre de 1962: A un paso del holocausto*. La Habana: Editorial Política.

DUHARTE, EMILIO *et al.*
2013 "Debate: Actualizando el modelo: economía política y cultura", en *Temas*, núm. 73, enero-marzo, pp. 70-80.

FAYA, ANA JULIA Y PEDRO PABLO RODRÍGUEZ
1996 *El despliegue de un conflicto. La política norteamericana hacia Cuba: 1959-1961*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

FERNANDES, FLORESTAN
2007 *Da guerrilha ao socialismo: a Revolução Cubana*. São Paulo: Expressão Popular.
1975 *Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina*. Rio de Janeiro: Zahar.

FERNÁNDEZ ESTRADA, JULIO ANTONIO *et al.*
2013 "Debate: Politización/despolitización en la cultura contemporánea", en *Temas*, núm. 76, octubre-diciembre, pp. 72-82.

FERNÁNDEZ RETAMAR, ROBERTO
1984 *Cuba defendida*. La Habana: Letras Cubanas.

GARCÉS, CARLOS *et al.*
2013 "Debate: Politización/despolitización en la cultura contemporánea", en *Temas*, núm. 76, octubre-diciembre, pp. 72-82.

GARCÍA, TANIA *et al.*
2013 "Debate: Actualizando el modelo: economía política y cultura", en *Temas*, núm. 73, enero-marzo, pp. 70-80.

GARCÍA ÁLVAREZ, ANICIA ESTHER Y BETSY ANAYA CRUZ
2014 "Gastos básicos de familias cubanas pensionadas y salario-dependientes", en *Temas*, núm. 79, julio-septiembre, pp. 89-94.

GOTT, RICHARD
2006 *Cuba: uma nova história*. Traducción de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar.

GUANCHE, JULIO CÉSAR
2013 "Debate: Politización/despolitización en la cultura contemporánea", en *Temas*, núm. 76, octubre-diciembre, pp. 72-82.
2012 "La participación ciudadana en el Estado cubano", en *Temas*, núm. 70, abril-junio, pp. 69-79.

GUANCHE, JULIO CÉSAR (ed.)
2007 *En el borde de todo. El hoy y el mañana de la revolución en Cuba*. La Habana: Ocean Sur.

GUERRA VILABOY, SERGIO; ROBERTO GONZÁLEZ ARANA Y ALEJO MALDONADO GALLARDO
2006 *Revoluciones latinoamericanas del Siglo XX*. Morelia: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

GUEVARA, ERNESTO CHE *et al.*
2006 *El gran debate sobre la economía en Cuba (1963-1964)*. Melbourne: Ocean Press.

HALPERIN DONGHI, TULIO
1985 *Reforma y disolución de los imperios ibéricos, 1750-1850*. Madrid: Alianza.

HARNECKER, MARTA
2000 *Fidel: A estratégia política da vitória*. São Paulo: Expressão Popular.

HERNÁNDEZ, RAFAEL *et al.*
2013a "Debate: ¿Valores em crise?", en *Temas*, núm. 75, julio-septiembre, pp. 67-80.
2013b "Debate: Politización/despolitización en la cultura contemporánea", en *Temas*, núm. 76, octubre-diciembre, pp. 72-82.

KATZ, CLAUDIO
2014 "La epopeya cubana", en La página Claudio Katz, textos de ciencias sociales, 1 de diciembre de 2014. Disponible en: http://katz.lahaine.org/?p=243.

LE RIVEREND, JULIO
1984 "Cuba: del semicolonialismo al socialismo (1933-1975)", en Pablo González Casanova, *América Latina: Historia de medio siglo*. México: Siglo XXI.

LIMIA DÍAZ, ERNESTO
2016 *Cuba: ¿fin de la historia?* La Habana: Ocean Sur.

LÓPEZ R., FELIPE Y HUMBERTO HERRERA CARLÉS
2015 "Inversión extranjera: clave para el futuro de Cuba", en *Forbes México*, 11/03/2015. Disponible en: http://www.forbes.com.mx/inversion-extranjera-clave-para-el-futuro-de-cuba/.

LÓPEZ SEGRERA, FRANCISCO
2010 *La revolución cubana. Propuestas, escenarios y alternativas*. Barcelona: El Viejo Topo.

MARTIN ROMERO, JOSÉ LUIS
2015 "Las relaciones de trabajo: una asignatura pendiente en la política de la Actualización", en *Temas*, núm. 83, julio-septiembre, pp. 66-74.

MARTÍNEZ, OSVALDO
2001 "Cuba en el contexto de la economía mundial", en Carlos Tablada, *Cuba: transición… ¿hacia dónde?* Madrid: Editorial Popular.

MARTÍNEZ HEREDIA, FERNANDO
2010 *A viva voz*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
2003 "Un socialismo primitivo", en *Cuestiones de América*, núm. 13, febrero-marzo. Disponible en: http://www.cuestiones.ws/revista/n13/feb03-fsm-cuba-fmh.htm.

MORAIS, FERNANDO
2011 *Os últimos soldados da Guerra Fria*. São Paulo: Cia. das Letras.

MORENO FRAGINALS, MANUEL
2005 *Cuba-Espanha-Cuba. Uma história comum*. Bauru: Edusc.
1986 *El Ingenio: complejo económico-social cubano del azúcar*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

NOVA, ARMANDO *et al.*
2013 "Debate: Actualizando el modelo: economía política y cultura", *Temas*, núm. 73, enero-marzo, pp. 70-80.

OBAMA, BARACK
2016 "Discurso del presidente Obama al pueblo cubano", 22 de marzo de 2016. Disponible en: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/03/22/discurso-del-presidente-obama-al-pueblo-cubano.

ORTEGA GONZÁLES, DIOSNARA *et al.*
2008 "Debate: ¿Qué es para ti la Revolución? Los jóvenes opinan", en *Temas*, núm. 56, julio-septiembre, pp.152-160.

PARTIDO COMUNISTA DE CUBA
2011 "Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución (Resolución del VI Congreso del PCC)", abril de 2011. Disponible en: www.congresopcc.cip.cu.

PÉREZ, ERNESTO *et al.*
2008 "Debate: ¿Qué es para ti la Revolución? Los jóvenes opinan", en *Temas*, núm. 56, julio-septiembre, pp. 152-60.

PÉREZ JR., LOUIS
1993 "Cuba, c. 1930-1959", en Leslie Bethell, *Cuba: a Short History*. Cambridge: Cambridge University Press.

RAFULS PINEDA, DANIEL
2014 "El sistema electoral cubano: de la representación formal a la participación real", en *Temas*, núm. 78, abril-junio, pp. 64-71.

RAMONET, IGNACIO
2006 *Fidel Castro: biografia a duas vozes*. São Paulo: Boitempo.

RICARDO LUIS, ROGER
2014 "Prensa e imagen. Cuba ante el espejo de la realidad", en *Temas*, núm. 77, enero-marzo, pp. 49-55.

RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS
2011 "Cuba, su economía y la Unión Soviética", en *Temas*, núm. 68, octubre-diciembre, pp. 114-121.

ROJAS, FERNANDO LUIS *et al.*
2008 "Debate: ¿Qué es para ti la Revolución? Los jóvenes opinan", en *Temas*, núm. 56, julio-septiembre, pp. 152-160.

SADER, EMIR
2001 *Cuba: um socialismo em construção*. Petrópolis: Vozes.

SALAZAR FERNÁNDEZ, DIANA (org.)
2012 *La red Capital Humano*. La Habana: Editorial Academia.

SEXTO, LUIS *et al.*
2013 "Debate: Politización/despolitización en la cultura contemporánea", en *Temas*, núm. 76, octubre-diciembre, pp. 72-82.

TABLADA, CARLOS
2001 *Cuba: transición… ¿hacia dónde?* Madrid: Editorial Popular.

TAIBO II, PACO
2008 *Ernesto Guevara, também conhecido como Che*. São Paulo: Expressão Popular.

VASCONCELOS, JOANA SALÉM
2016 *História agrária da revolução cubana: dilemas do socialismo na periferia*. São Paulo: Alameda.

VI CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA
2011 "Información sobre el resultado del debate de los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución", mayo de 2011. Disponible en: http://www.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2011/05/tabloide_debate_lineamientos.pdf.

VITIER, CINTIO
2008 *Ese sol del mundo moral*. La Habana: Unión.

Conversaciones

La Habana, diciembre de 2016

ACOSTA GONZÁLES, YOAN KARELL. Investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU).
DACAL, ARIEL. Educador popular del Centro Memorial Martin Luther King Jr.
FERNÁNDEZ ESTRADA, JULIO ANTONIO. Abogado y exprofesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
GARCÉS, RAÚL. Periodista y vicedirector da revista *Temas*.
HERNÁNDEZ, RAFAEL. Director de la revista *Temas*.
HERNÁNDEZ PEDRAZA, GLADYS. Economista vinculada al Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM).
LIMIA DÍAZ, ERNESTO. Asesor del Ministerio de la Cultura.
MARTÍNEZ, JENNIFER. Presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).
MARTÍNEZ HEREDIA, FERNANDO. Investigador del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello.
MORLOTE, LUIS. Vicepresidente de la Unión de Artistas y Escritores de Cuba (UNEAC).
PADRÓN, JUAN NICOLÁS. Escritor.
PIÑEIRO HARNECKER, CAMILA. Especialista en cooperativismo.
RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS. Exministro de Economía de Cuba.
VALDÉS PAZ, JUAN. Especialista en cuestión agraria.

México y el progresismo tardío en la frontera imperial

El distintivo del neoliberalismo es la corrupción
[...] El combate a la corrupción y (gobernar con)
austeridad nos permitirá liberar suficientes fondos,
más de lo que imaginamos, mucho más, para
impulsar el desarrollo de México.
Discurso de López Obrador en el
Congreso, 1 de diciembre de 2018

Nuestros sueños no caben en sus urnas,
tampoco nuestras pesadillas, ni nuestros muertos.
Grafiti en el caracol zapatista
Oventic, Chiapas

Introducción

México eligió un presidente progresista en 2018, cuando la ola ya había pasado. ¿Cómo interpretar ese progresismo tardío en la frontera imperial? El segundo país más grande de América Latina vivió en el inicio del siglo XX una de las convulsiones populares más radicales de la historia. La Revolución Mexicana forjó las instituciones, pero también el patrón de dominación del país, toda vez que se preservó la estructura de clases. Desde entonces, el monopolio político de un partido que se confundió con el propio Estado (el Partido Revolucionario Institucional, PRI) se asentó en un pacto social velado, que tiene como referencia la Constitución de 1917. Sin embargo, la crisis de la industrialización sustitutiva y del desarrollismo nacional comprometió las bases materiales de un proyecto de país de esta naturaleza. En la medida en que la clase dominante vinculó su destino al de los Estados Unidos, culminando en la creación de un área de libre comercio, el monopolio del partido de Estado perdió apoyo. Salvado primero por el fraude y luego por una alianza con su rival conservador (el Partido

Acción Nacional, PAN), con quien compartió el poder en el siglo XXI, el dominio del llamado PRIAN (PRI + PAN) fue finalmente atropellado por López Obrador. A diferencia de Lula cuando fue elegido, el partido del presidente goza de una mayoría parlamentaria. Por otro lado, la fuerza del crimen organizado y la aguda dependencia de los Estados Unidos hace que los desafíos de México sean singulares en el contexto latinoamericano. Ante este escenario, uno debe preguntar si la elección de López Obrador debe interpretarse como una victoria de la izquierda o una alternativa de gestión de la profunda crisis mexicana.

De la revolución institucionalizada a la crisis del PRIAN

Caso único en América Latina, México entró al siglo XX bajo el signo de una revolución. El levantamiento contra la reelección de Porfirio Díaz en 1910, que comandaba el país desde 1876, pronto trascendió los modestos objetivos políticos de quienes lo iniciaron, convirtiéndose en una de las rebeliones populares más radicales de la historia. Durante casi diez años, el país se sumió en una guerra civil que incluyó tropas de trabajadores rurales, guerrillas campesinas, batallones obreros, caudillos liberales y conservadores, la Iglesia, las mujeres (como las 'Adelitas'), el ejército mexicano y los Estados Unidos.

Si la revolución no alteró la estructura de clases de la sociedad mexicana —y en este sentido puede describirse como una "revolución interrumpida"—, fue un parteaguas en la historia del país (Gilly, 1974). El muralismo mexicano; la reforma agraria y la nacionalización del petróleo bajo Cárdenas; el PRI como partido de Estado; la neutralidad en relación a la revolución cubana; la preservación del patrimonio arqueológico; la trayectoria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la universidad más grande de América Latina; entre otros rasgos destacados en la trayectoria del país, solo pueden ser comprendidos a la luz de este evento fundador.

No hay consenso en relación al momento en que la revolución se extinguió. Entre el levantamiento contra la reelección y la Constitución

de 1917 —el mismo año de la Revolución Rusa—, el poder cambió de manos varias veces. En este proceso, la intransigencia de las clases dominantes con el cambio social quedó clara: los sucesivos presidentes se dedicaron a poner fin al conflicto reprimiendo la reivindicación popular, lo que prolongó la guerra civil. Frente al espectro del levantamiento popular y de la intervención estadounidense, los de arriba evitaron a toda costa el camino más corto hacia la paz: resolver la cuestión agraria.

En la lectura de Gilly y Roux, la revolución terminó en una especie de empate. Si es cierto que la estructura de clases y la desigualdad social se perpetuaron, las demandas populares fundamentales fueron integradas al marco institucional que se consolidó. Para encaminar la cuestión agraria sin cuestionar el orden del capital, fue necesaria la mediación estatal, que incorporó el derecho a la tierra en el nuevo orden jurídico, plasmado en la figura del "ejido", modalidad de propiedad comunal. En general, se consumó un pacto velado, en el que los derechos políticos de los de abajo fueron expropiados resultando en la dominación autocrática del partido de Estado, a cambio de una agenda de derechos sociales consagrada en la nueva Constitución (Gilly, 1996; Roux, 1996: 118).

En esta clave, la legitimidad del patrón de dominación impuesto dependió más del compromiso del partido de Estado con este arreglo fundador, que de la obtención de votos. Visto desde esta perspectiva, el partido que institucionalizó la revolución no fue forjado para competir por el voto ciudadano, pero sí para disciplinar a los estratos de la clase dominante que llegaron al poder por las armas (Meyer, 2016: 114). Cuando el general revolucionario Álvaro Obregón fue asesinado en 1928, enterrando sus ambiciones de perpetuarse en el poder, la alternancia presidencial se consolidó como regla, aunque nunca la renovación política. El partido estatal se afirmó como espacio de resolución de disputas al interior de la burguesía.

En este movimiento, en que la revolución fue capturada por el Estado, que luego se confundió con un partido, el avance de una

agenda estatal popular y nacional alcanzó su punto máximo bajo el gobierno del general Lázaro Cárdenas (1934-1940). Interpretado por algunos como una continuidad de la revolución (Gilly, 2001), en este gobierno la reforma agraria y la nacionalización del petróleo fueron acompañadas por un disciplinamiento de la relación con los trabajadores siguiendo los moldes corporativistas. La "democracia de los trabajadores" de Cárdenas favoreció el interés material de los de abajo, pero no su autonomía.

En la década siguiente, el régimen postrevolucionario se estabilizó. El país que hasta entonces solo tuvo presidentes militares en el siglo XX, a partir de este momento fue comandado por civiles. Entre 1940 y 1972, México avanzó consistentemente en una dirección industrial, mientras el centro de la economía gravitó del campo a la ciudad, en medio de una acelerada urbanización. Las altas tasas de crecimiento y la baja presión inflacionaria caracterizaron este período, descrito como "desarrollo estabilizador" (Labastida, 1984). Sin embargo, la estabilidad política se rompió en 1968, cuando una masiva movilización de estudiantes fue reprimida en vísperas de los Juegos Olímpicos en la capital. La masacre de Tlatelolco fracturó irreparablemente la ideología democrática del Estado mexicano, exponiendo su rostro autocrático y represivo (Aguilar y Meyer, 2000).

En la década de 1970, México se enfrentó a los impases del desarrollismo: el "milagro mexicano" se agotó. Depósitos de petróleo explotados a fines de la década atenuaron temporalmente los desequilibrios económicos, mientras que el endeudamiento externo se aceleró en un contexto de liquidez internacional, similar a lo ocurrido en Venezuela en el período (Aguilar Mora, 1984). Entre 1973 y 1981, las reservas de petróleo aumentaron de 3,6 mil millones a 72 mil millones de dólares, mientras que la deuda externa saltó de 6,5 mil millones a 75 mil millones de dólares (Cano, 1999). Sin embargo, la convergencia entre el aumento de las tasas de interés internacionales y la caída de los precios del petróleo desencadenaron una aguda crisis y el país se vio obligado a decretar una moratoria de la deuda en

1982. Aunque México firmó una primera carta de intenciones con el FMI en 1976, fue a partir de la moratoria que se impusieron políticas de ajuste estructural, apuntando a una reorientación de la economía en dirección neoliberal.

Bajo la dimensión financiera de la crisis, la burguesía mexicana entendió que la mejor respuesta a los impases enfrentados implicaba una opción estratégica por los Estados Unidos. En el plano manufacturero, esto significó estimular las 'maquiladoras', un sector manufacturero de capital extranjero orientado a la exportación, pero que tiene poca articulación con las cadenas de suministro nacionales y que genera bajo valor agregado. Es probable que el cálculo mexicano implicara hacer del país una especie de China, donde la inversión extranjera revitalizaría el sector industrial, dinamizando la economía en su conjunto. En retrospectiva, es evidente que esto no sucedió. Sin embargo, la economía mexicana se articuló de modo intenso, aunque de manera fragmentaria, a los Estados Unidos y desde 1992 su movimiento se sincronizó, lo que indica la consolidación de un grado extremo de dependencia (Morales, 2015; López Bolaños, 2018) .

La opción estratégica por los Estados Unidos en el marco de la inflexión neoliberal significó un distanciamiento de las premisas del régimen posrevolucionario. Aunque el compromiso con la nación prevaleciente hasta entonces no se debe idealizar, hubo un giro notable en el que la maquiladora gana centralidad frente a la industria orientada al mercado interno; las privatizaciones comprometen la soberanía sobre los recursos minerales y energéticos; las presiones mercantiles en favor del agronegocio amenazan la propiedad comunal de la tierra. En conjunto, las bases del pacto fundador del Estado postrevolucionario fueron puestas en jaque, erosionando la legitimidad del patrón de dominación que le correspondía (Roux, 2005).

Es en este contexto en que se da la rebelión electoral liderada por Cuhautémoc Cárdenas, un disidente del PRI que se postuló para presidente contra el partido de Estado en 1988. Victoriosa en las urnas, la candidatura fue derrotada por un escandaloso fraude, que las

manifestaciones subsiguientes fueron impotentes para revertir (Fuser, 1995). Cárdenas recuperaba el ideario nacionalista de su padre en el momento en que la burguesía mexicana se preparaba para cruzar el Rubicon hacia Washington. Es sintomático que el Partido de Acción Nacional (PAN), que surgió en los años de 1940 como reacción al cardenismo original, se haya aliado al PRI contra el neocardenismo medio siglo después.

La presidencia de Salinas de Gortari (1988-1994) comenzó bajo el espectro del fraude y terminó en medio de acusaciones de corrupción y asesinatos. Mientras tanto México se adhirió al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)[1], que institucionalizó la opción de la clase dominante por los Estados Unidos, mientras se modificaron los artículos más famosos de la Constitución de 1917, abriendo camino para la mercantilización de los ejidos y para intensificar la privatización y desnacionalización de las riquezas naturales. La resistencia a este proceso fue sintetizada por la insurgencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que estalló en Chiapas el mismo día que el TLCAN entró en vigor.

El sentido del movimiento puede ser sintetizado en algunos elementos. Se consolidó un patrón manufacturero disociado del mercado interno y de las cadenas productivas nacionales, apoyándose en la sobreexplotación de la mano de obra barata, particularmente femenina. Como indicio del grado de apertura —y, por lo tanto, de dependencia de la economía—, la participación del comercio exterior en el PIB aumentó del 27% en 1994 al 60% en 2014 (Sotelo Valencia, 2016: 42). Se modificó el papel del Estado, que dejó de ser un instrumento central de acumulación, para actuar en favor de las privatizaciones. A principios de 1980, el Estado todavía respondía por cerca de 2/3 de los activos nacionales, pero entre 1982 y 2010 más de 1.000 empresas públicas fueron subastadas al capital privado (Sotelo Valencia, 2016: 34). En términos de las relaciones laborales, se fragilizaron los patrones

1 En inglés, North American Free Trade Agreement (NAFTA).

de organización y negociación colectiva que caracterizaban al Estado corporativista, en un contexto de mercantilización e individualización de los vínculos sociales. En el campo se eliminaron las políticas de apoyo a la producción campesina, como los bancos ejidales y la política de precios, mientras los granos transgénicos subsidiados provenientes de los Estados Unidos inundaron el mercado nacional (Rappo, 2018).

A nivel ideológico, la clase dominante abandonó el gran relato de la Revolución Mexicana, evidenciando que el pacto velado en el origen del régimen estaba desactualizado (Meyer, 2016: 68). Libre de cualquier vínculo con la revolución que lo fundó, en adelante este patrón de dominación se sostuvo sobre la base de la coerción, del clientelismo y del fraude. En este contexto, se avanzaron dos respuestas políticas. En el primer día de su administración, Salinas de Gortari lanzó el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), pionero entre las políticas de transferencias condicionadas de ingresos en el subcontinente. Además de señalar el paso de la lógica de los derechos universales a estrategias focalizadas en el combate a la pobreza, la iniciativa se orientaba a mitigar la debilitada legitimidad del nuevo gobierno a través de un programa asistencial manipulado según designios clientelistas (Sánchez Juárez, 2018). Al mismo tiempo, el PAN fue instado por el PRI a cogobernar, intensificando la alianza contra el neocardenismo.

En las siguientes elecciones, la expectativa en relación a la entrada en vigor del TLCAN, que finalmente coincidió con una grave crisis económica, y los vínculos clientelistas reforzados por el PRONASOL, aseguraron la victoria del candidato del PRI, Ernesto Zedillo (1994-2000). Sin embargo, la campaña estuvo marcada por los asesinatos del candidato original del partido, Luis Donaldo Colosio, y del propio presidente del PRI, Francisco Ruiz Massieu, lo que indica la degeneración de su papel unificador de las clases dominantes. En las siguientes elecciones de 2000, Vicente Fox (2000-2006) fue elegido por el PAN, rompiendo lo que puede considerarse el sistema de partido único más antiguo en la historia (1929-2000). Aunque algunos lo celebraron

como una democratización, lo que se observó en la práctica fue una alternancia en el marco del conglomerado político que gobernaba el país, conocido popularmente como "PRIAN". Sintomáticamente, Fox fue el primer presidente proveniente de una universidad privada del país, al igual que sus sucesores, antes de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En las siguientes elecciones, López Obrador dejó el gobierno del Distrito Federal para postularse a la presidencia por el Partido Democrático Revolucionario (PRD), fundado en 1988 por Cárdenas. En un resultado vívidamente cuestionado, AMLO fue derrotado por una diferencia del 0,56% de los votos, mientras el candidato del PAN, Felipe Calderón, asumió la presidencia "haiga sido como haiga sido", según dijo. Por primera vez, el PRI amargó un tercer lugar. En 2006, López Obrador sostuvo posiciones más combativas que tres elecciones más tarde, en un momento de ascensión de la ola progresista sudamericana: Chávez, Lula y Kirchner estaban en el auge, el Frente Amplio comandaba el Uruguay, Morales asumió la presidencia de Bolivia y Correa fue elegido en Ecuador. En este contexto, es plausible que la elección de AMLO fuera temida por un orden comprometido con los Estados Unidos, aunque el fantasma fuera más aterrador que el candidato de carne y hueso.

Si Salinas de Gortari recurrió al PRONASOL para fidelizar a los votantes, Calderón (2006-2012) declaró una "Guerra contra las Drogas" al estilo americano, con la expectativa de dispersar el manto del fraude electoral con la pacificación del país. A lo largo de los años de 1990, la represión y la pulverización de los carteles colombianos habían desviado las rutas de drogas en la región, favoreciendo que el crimen organizado prospere y se enraíce en el país (Barrios, 2018). Como consecuencia, los niveles de violencia en Colombia se extendieron en México, practicados con exceso de crueldad por antiguos cuadros de la represión a las guerrillas centroamericanas entrenadas por los Estados Unidos, que ahora obtienen su sustento de la economía criminal. La adopción de la Iniciativa Mérida en 2008, la versión

local del Plan Colombia, consumó la incorporación de la agenda de seguridad de los Estados Unidos por México, alimentando con dinero, entrenamiento e inteligencia, la escalada de violencia en el país. De modo revelador, el embajador de los Estados Unidos en Brasil en ese momento se refirió a esta integración militar como "*armoring* NAFTA" (blindando TLCAN) (en Cockroft, 2014: 43).

En las elecciones de 2012, el PRI tenía la intención de renovarse y volvió a la presidencia con el joven y guapo Enrique Peña Nieto (2012-2018). De salida, el nuevo presidente acordó un "Pacto por México" con el PAN y el propio PRD, que después de sucesivas derrotas electorales, se rindió al PRIAN. El segundo clasificado López Obrador volvió a cuestionar el resultado, dejó el PRD y convirtió el movimiento electoral que lideró en un partido político: el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Mientras tanto, Peña Nieto aceleró un conjunto de reformas neoliberales con el pretexto de modernizar el país, incluyendo una polémica reforma energética destinada a privatizar la explotación de los recursos mineros y energéticos, incluida la compañía petrolera estatal PEMEX, y una reforma educativa que enfrentó encarnizada resistencia (Sotelo Valencia, 2016). El presidente continuó la guerra contra las drogas y su gobierno terminó con niveles muy bajos de aprobación, manchado por escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos —la más famosa de ellas comprometiendo la desaparición de 43 estudiantes de una escuela rural de Ayotzinapa, en el Estado de Guerrero.

En 2018, AMLO triunfó con una votación masiva. El candidato de Morena ganó en 31 de los 32 estados de la federación (perdió en Guanajuato), obteniendo más de la mitad de los votos en una elección a la que asistieron casi 2/3 de los votantes. Si bien es cierto que la superioridad electoral volvió cualquier fraude más difícil, también se puede argumentar que el desgaste del PRIAN ante la magnitud de los problemas nacionales volvió la alternancia hacia la izquierda no solamente aceptable, sino deseable. En 2018, la ola progresista en el continente ya era pasado. Estaba claro que estos gobiernos eran

tigres sin dientes y no daban más miedo a nadie —pero podían ser gestores eficaces de la crisis en contextos de desgaste del orden—. Para explorar esta hipótesis, se analizan a continuación varios aspectos de la crisis mexicana para dimensionar la profundidad de los desafíos encarados por este gobierno.

Radiografía de la crisis

En contraste con otros países latinoamericanos, la economía mexicana no está basada en el extractivismo, sino en la industria maquiladora. Los orígenes de esta actividad se remontan a la década de 1960, cuando la intención de industrializar la frontera norte se combinó con el propósito de retener a la fuerza laboral migrante, una vez expirado el acuerdo que permitía y estimulaba a los mexicanos a trabajar en los campos estadounidenses en el marco del esfuerzo de guerra. Sin embargo, es la crisis del patrón industrial de sustitución de importaciones lo que impulsó la difusión de este modelo productivo, agravada en México por la conjunción entre la caída de los precios del petróleo y la crisis de la deuda a inicios de 1980. En un contexto en que la devaluación de la moneda nacional abarató la fuerza laboral, la maquila mexicana se consolidó como un eslabón de cadenas globales de valor, estableciéndose en enclaves territoriales bajo un régimen de excepcionalidad fiscal y laboral. A lo largo de los años de 1980, México se convirtió en un exportador manufacturero y en 1993, en vísperas del TLCAN, el sector representó el 80% de las exportaciones totales. En este momento se registraban 2.114 maquiladoras en el país, con 542.074 trabajadores, que respondían por la mitad de las exportaciones de manufacturas (Morales, 2015: 106).

Visto en perspectiva, el tratado formalizó y consolidó una tendencia en curso, pero también creó condiciones para profundizarla (Arroyo Picard, 2009). El régimen de liberalización comercial característico de las maquiladoras fue generalizado, reduciendo las tarifas en casi todos los ramos de la industria. Al mismo tiempo, se anularon las exigencias de contenido nacional en las fábricas, que en tres décadas no superó

el 3%, incluso en la industria de automóviles, que no se encuadra como maquila. Impulsado por la crisis financiera de 1995, que triplicó el valor del dólar en pesos mexicanos, el patrón maquilador dejó la frontera y se extendió por el país, convertido en "plataforma territorial de exportación" (López Bolaños, 2015; Morales, 2018).

En las dos décadas siguientes, las exportaciones manufactureras se multiplicaron en 7,7 veces, pero en un ritmo desigual: en los primeros siete años crecieron un 16% por año (al cambio del dólar del 2009), mientras que en los años siguientes se observó una regresión a un nivel inferior al 1%, volviendo a crecer en tasas de dos dígitos en 2010. Esta desaceleración está relacionada a la crisis de las empresas.com en los Estados Unidos y con la competencia china y de las maquiladoras del sudeste asiático. En 2006, el sector empleaba cerca de 1,2 millones de trabajadores en México, volumen similar a las Filipinas, mientras que Vietnam movilizaba a un millón de trabajadores y la China a más de 40 millones (Morales, 2013). Entre 2000 y 2013, las maquiladoras crecieron un promedio de 3,7% por año, limitando su papel como dinamizador de la economía, cuyo crecimiento promedio fue inferior al 3% en los tres gobiernos de este siglo: 2,36% bajo Fox; 1,58% bajo Calderón; 2,5% bajo Peña Nieto hasta 2017 (Sotelo Valencia, 2018).

En este período, el 45% de la inversión extranjera directa se dirigió al sector manufacturero, principalmente para la adquisición de empresas nacionales. En 1999, 2/3 de las maquiladoras en México eran de propiedad estadounidense, empleando casi tres cuartos de los trabajadores del sector; los japoneses representaban el 4,8% de las fábricas y el 9,8% del personal, mientras que 1/4 pertenecía a los mexicanos, responsables por el 11% de los trabajadores, principalmente en las maquilas de confección (Morales, 2015: 109). La desnacionalización, que se agravó en la última década, alcanza a todos los sectores de la economía: los tres principales bancos, BBVA, Santander y Citibank concentran más de la mitad de los activos del sector, el 70% de los cuales están en manos extranjeras. En la actualidad, incluso la industria del tequila está controlada por empresas estadounidenses y japonesas (López Bolaños, 2018).

En el primer semestre de 2018, el 87,5% del valor de las exportaciones mexicanas correspondió a productos manufacturados, seguidos por productos petroleros (7%) y agrícolas (4%) (Aguirre, 2018). Desde 2007, las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no diferencian las maquiladoras y las demás exportaciones manufactureras, como automóviles y camiones, pero es notoria la centralidad de las maquilas. La principal exportadora no maquiladora es la industria automotriz, que en 2017 fabricó vehículos para más de 100 países, pero el 77% de ellos fue para los Estados Unidos. Datos de 2015 indican que el 88,2% del total de las exportaciones mexicanas fueron a los Estados Unidos, mientras que el 47,4% de las importaciones provino de este país (Sotelo Valencia, 2018).

En general, las perspectivas de prosperidad asociadas a la maquiladora no se alcanzaron. Es cierto que México se convirtió en exportador de manufacturas, pero se trata de una modalidad de industrialización de enclave, con escaso encadenamiento a sectores productivos nacionales o transferencia tecnológica. En este contexto, el crecimiento del sector es incapaz de dinamizar el conjunto de la economía, mientras las divisas generadas son insuficientes y el endeudamiento público aumenta. A pesar del superávit con el país vecino, que llevó a Trump a renegociar los términos del TLCAN, la balanza comercial mexicana ha sido deficitaria en función de los intercambios con Asia, principalmente con China. A la inversa de la expectativa de crecimiento y modernización, la apuesta maquiladora potenció la dependencia y la sobreexplotación del trabajo, agravando las determinaciones estructurales del subdesarrollo mexicano.

La gallina de los huevos de oro de la industria maquiladora es la mano de obra barata. Los salarios en el país están disminuyendo desde 1976, y actualmente se encuentran entre los más bajos del mundo. En 2018, el salario mínimo mexicano rondaba los 128 dólares, valor inferior a China, pero también a países como Haití y Honduras. Según Sotelo Valencia, la diferencia salarial promedio entre los trabajadores en México y sus contrapartes en los Estados Unidos y Canadá es de

14 veces, pudiendo alcanzar hasta 30 veces en algunos sectores. En 2015, la industria automovilística pagaba un promedio de 3,95 dólares por hora de trabajo en México, 34 en los Estados Unidos y 40,40 en Canadá (Sotelo Valencia, 2016: 41). Según el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el salario mínimo de 88,36 pesos por día en 2018 no cubrió los costos de alimentar a una familia mexicana, que luego se estimó en 204,73 pesos.

Los datos publicados en 2017 por el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), indican que el 62% de la población activa no tiene acceso a las instituciones de seguridad social y el 42% tiene ingresos inferiores a la "línea mínima de bienestar" (IDIC, 2017). En una población económicamente activa estimada en 54 millones de personas, el 74% recibe menos de cinco salarios mínimos, la mitad tiene ingresos inferiores a 200 pesos diarios (alrededor de 10 dólares), mientras el 15,5% recibe menos que un salario mínimo. En el período de seis años de Peña Nieto, la fracción de trabajadores que gana entre tres y cinco salarios mínimos cayó un 9,6%, mientras la que recibe más de cinco salarios mínimos se redujo en un 30,6% (Sotelo Valencia, 2017). En el otro lado de la moneda, el periódico *La Jornada* estima que la fortuna de diez personas equivale al 10% de la economía del país, mientras que cuatro de cada diez mexicanos no pueden garantizar una buena alimentación diaria (Cockroft, 2014: 155).

Seis de cada diez trabajadores son informales (unos 30 millones), una proporción que alcanza a 4/5 de la población en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Se estima que hay cerca de 8 millones de jóvenes "ni-ni", que ni estudian ni trabajan. En 2015, 53,4 millones de mexicanos estaban en pobreza y 9,4 millones en pobreza extrema, en una población de poco más de 120 millones (Rappo, 2018; Sotelo Valencia, 2018). Parte de esta población cuenta con el apoyo de programas de transferencias monetarias condicionadas de origen priista, que ofrecen entre 20 y 60 dólares a los beneficiarios.

Los estudios indican que siete de cada diez mexicanos que emigran tienen trabajo en el país, sugiriendo que la precarización es un

importante motor de la migración. De estos, el 90% van a los Estados Unidos, donde viven alrededor de 12,7 millones de personas nacidas en México. La cifra alcanza a 31,8 millones de ciudadanos cuando se incluyen hijos y nietos de estos inmigrantes. En total, uno de cada diez mexicanos vive en los Estados Unidos y uno de cada cinco trabajadores se gana la vida en ese país (Cortéz, 2018).

Como consecuencia, el envío de dólares de los inmigrantes a sus familias es otra dimensión de la integración fragmentada de la economía mexicana a la estadounidense, que se volvió crucial para mitigar el desequilibrio de las cuentas del país. En 2018, las remesas llegaron a 33 mil millones hasta octubre, lo que equivale a casi el 3% del PIB, superando las divisas provenientes del petróleo y el turismo. Para fines de comparación, se estima que el narco mueve 40 mil millones de dólares al año (Rappo, 2018). México es el cuarto país que más recibe remesas de inmigrantes en el mundo, después de India, China y Filipinas.

Otro vector de la intensificación de las migraciones fueron los cambios operados en el campo, cuya línea divisoria fue la modificación en 1992 del famoso artículo 27 de la Constitución, que resguardaba la propiedad ejidal. La estructura de apoyo a la producción campesina, que incluía un sistema de crédito público, seguro de producción, política de precios protegidos, entre otros, fue desmantelada progresivamente. La situación fue agravada por el TLCAN, que impulsó la exportación de artículos que los Estados Unidos no producen a costos comparables, como frutas, cítricos, hortalizas, tomate, pepino y aguacate, al mismo tiempo que facilitó las importaciones de maíz, leche, trigo y otros productos agrícolas que gozan del subsidio estatal en los Estados Unidos. Como resultado de esta política, México, que exportaba granos hasta fines de la década de 1970, volvió a ser un importador, con una dependencia del orden del 50%. Actualmente, el país importa alrededor del 40% del trigo, el 80% del arroz y el 60% del maíz que consume, además de productos como carne de res, frijoles, soja y leche (Bartra, 2018; Rappo, 2018).

Este cambio asociado con el TLCAN afectó el patrón alimenticio de los mexicanos, especialmente de la población más pobre. Como informó un reportaje del *The New York Times*, México actualmente exporta frutas, verduras y jugos, mientras importa carne de res, soja y maíz, que sirven como insumos para la industria de alimentos procesados, favorecida por la expansión de las cadenas de *fast food* e hipermercados estadounidenses. La tasa de obesidad en la población aumentó del 7% en 1980 a casi el 21% en 2016, mientras que la diabetes se convirtió en la principal causa de muerte en el país, que tiene el mayor número de obesos en el mundo. En 2015, el mexicano promedio compró 1.928 calorías de alimentos y bebidas ultra procesados por día, 380 calorías más que los estadounidenses (Jacobs y Richtel, 2017). La situación del maíz, un patrimonio cultural ancestral de la región, es emblemática: México comenzó a importar el grano transgénico en lugar de abastecerse con las variedades nativas, un síntoma de la degradación del tejido social del país, denunciado por la campaña "sin maíz no hay país". Un fenómeno análogo ocurrió con el petróleo, agravado por la reforma energética impuesta por Peña Nieto: México se convirtió en un país petrolero que importa 3/4 de la gasolina que consume. En 2018, incluso importó petróleo crudo (López Bolaños, 2018).

A pesar de la difícil situación de la agricultura campesina, que condenó a muchos a emigrar a las ciudades o al extranjero, cerca de la mitad de la superficie del país todavía pertenece a comunarios o ejidos. Desamparadas por el Estado, las familias de los trabajadores rurales sobreviven gracias a sí mismas, a menudo apoyadas por las remesas de los familiares que emigraron. Hay un fuerte componente cultural en la relación con la tierra y muchos se resisten a dejar de ser campesinos, incluso si la producción apenas alcanza para sobrevivir. Aunque solo 1/4 de los 15 millones de indígenas que pertenecen a 62 grupos etnolingüísticos en el país todavía viven en el campo, la vitalidad de las tradiciones comunitarias que atravesaron la colonización y el capitalismo nutre esta resistencia (Rappo, 2018).

La expresión política más conocida de este brío comunitario es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que dejó su origen guerrillero en los años de 1980 para sumergirse en las culturas nativas de la región de Chiapas, donde se arraigó:

> El espíritu revolucionario vanguardista de esos primeros guerrilleros que fue tragado por las comunidades indígenas (digiriendo lo revolucionario y descartando el vanguardismo), creando así un movimiento profundamente indígena y al mismo tiempo cosmopolita, en singular sintonía con las necesidades de aquel momento histórico de neoliberalismo y globalización (Accioly y Reyes, 2019: 207).

Este movimiento original se hizo público el 1 de enero de 1994, cuando se apoderó de siete municipios en Chiapas el día en que entró en vigor el TLCAN. Después de cinco años presionando al gobierno para cumplir los Acuerdos de San Andrés entonces negociados, los zapatistas cortaron la comunicación con el Estado y en 2001 decidieron implementar los Acuerdos en su territorio por cuenta propia. Desde entonces, invierten en frentes de construcción de la autonomía, entre los caracoles (centros administrativos), las juntas de buen gobierno (guiadas por el principio de "mandar obedeciendo"), así como iniciativas de salud, educación y cultura, teniendo como horizonte "un mundo donde quepan muchos mundos" —menos el capitalista, aclaran algunos— (Sánchez Barraza, 2018).

Sin embargo, el zapatismo es apenas el más notable entre una variedad de movimientos de orientación autonomista, angulados en torno a la defensa del territorio (Badillo Cuevas, 2018; Garza, 2018). En años recientes, enfrentamientos entre comunidades agrarias y corporaciones multinacionales se multiplicaron, porque si es cierto que México no es un país extractivista, como aclara Armando Bartra, por otro lado, estas actividades han crecido aceleradamente en el país, como en todo el continente. Sotelo Valencia argumenta que, frente al agotamiento del patrón de reproducción capitalista vigente, se estaría

forjando en México un nuevo modelo extractivista basado en el petróleo, el gas, la minería y el agronegocio para responder a la crisis del modelo maquilador, relacionada en última instancia a los impases de la economía estadounidense a la cual está asociado (Sotelo Valencia, 2016; 2018).

Entre 2002 y abril de 2016, el gobierno otorgó 25.716 títulos de concesión minera en el país, concentrados en los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Michoacán. En 2017, el área total concesionada superaba los 20 millones de hectáreas, lo que equivale a una décima parte del territorio nacional. Las empresas canadienses operan 2/3 de estos proyectos, mientras que las firmas estadounidenses tenían el 13,2% y las mexicanas el 9,2%. Se explota principalmente oro, plata, cobre, zinc y hierro. El gobierno de Calderón permitió a las multinacionales eludir la doble tributación, por lo que la minería genera ingresos irrisorios para las arcas públicas mexicanas, respondiendo por menos del 1% de las recaudaciones. Entre 2006 y 2015, los derechos mineros recaudados representaron el 1,3% del valor generado en el período (Fundar, 2018; Garduño, 2015; Informe, 2018). Por otro lado, los activistas estiman que en las últimas décadas se extrajo más plata mexicana que en todo el período colonial (Reyes Méndez, 2018).

En opinión de los líderes comunitarios, desde que entró en vigencia la ley de minería en 1992, el mismo año en que se modificó la ley de tierras, el Estado actúa como una especie de promotor de proyectos mineros. Se otorgan concesiones sin consultar a las poblaciones involucradas, violando la legislación nacional e internacional relativa al derecho a la autonomía y a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas. Diversas prerrogativas legales facilitan la expropiación territorial para fines de explotación minera, que también obtiene derechos sobre el agua de los respectivos territorios, en detrimento de las poblaciones rurales. La ley es permisiva desde el punto de vista socioambiental y aunque se constaten infracciones, no se prevén mecanismos para cancelar los proyectos. Por otro lado,

cuando las comunidades se resisten o se oponen al negocio minero, los paramilitares siembran el terror para romper toda oposición. Hay relaciones difusas pero notorias entre el Estado, el paramilitarismo, el extractivismo y el crimen organizado (Informe, 2018; Reyes Méndez, 2018; Paredes, 2018).

Estos nexos se intensificaron en los últimos años como resultado de la territorialización de los carteles de la droga y de la diversificación de sus actividades. Además de actuar en otras ramas de la economía criminal, como el tráfico de migrantes, de armas y de órganos, las facciones del crimen organizado también ingresaron en la economía formal, participando en la exportación de aguacates, madera y minería, entre otros. En este contexto, algunos carteles se comportan como un Estado, cobrando inclusive impuestos —los "derechos de piso"—, para liberar y proteger los negocios en los territorios que dominan. En esta realidad, conforme señaló Bartra, no hay lugar en el país donde el campesino esté inmune al narcotráfico (Bartra, 2018).

La colusión entre el Estado y el crimen organizado es aceptada como un hecho por muchos mexicanos. Cuestionado sobre las evidencias de esta relación, el periodista Heriberto Paredes cuenta que fue perseguido y atacado por la policía después de dar un testimonio comprometedor en la Corte de Justicia. También vio a militares uniformados animando a los Caballeros Templarios, un poderoso cartel de drogas que se percibe como una hermandad religiosa (Paredes, 2018). Fue en una región controlada por los Templarios en el Estado de Michoacán que las mujeres encabezaron una rebelión en 2011, expulsando a los madereros de la localidad de Cherán. La comunidad se levantó contra la devastación del bosque nativo, que amenazaba el equilibrio ecológico y el suministro de agua de la región. Además, había vínculos notorios entre los madereros y el crimen organizado, que cobraba "impuesto" a los comerciantes de la ciudad. Sin embargo, cuando el conflicto se intensificó, los residentes también decidieron expulsar a la policía y a los políticos, sospechosos de colusión con las actividades delictivas. En otra experiencia de autonomía popular, desde entonces Cherán es gestionada y defendida por

la propia población, que incluso organizó una autodefensa comunitaria, como ocurre en otras partes del país (Alonso Reynoso, 2018).

Los vínculos entre el crimen organizado y el Estado mexicano adquirieron visibilidad internacional en la llamada masacre de Iguala en 2014, cuando 43 estudiantes de una escuela rural en el municipio de Ayotzinapa desaparecieron, mientras se trasladaban a la capital del país para realizar actividades conmemorando la masacre de Tlatelolco en 1968. La versión oficial sostiene que la matanza fue articulada por el alcalde de Iguala y su esposa con la complicidad de la policía local, que habría entregado a los estudiantes a un cartel de drogas que los incineró. Sin embargo, esta versión, que absuelve al Ejército, la Policía Federal y el gobierno federal, es refutada por familiares y organismos de derechos humanos y fue desmentida por expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dos años más tarde. En ausencia de investigaciones concluyentes, se sospecha que los autobuses que los estudiantes tomaron para viajar, según una práctica común entre la militancia, estaban cargados de drogas. El temor de que saliera a la luz un esquema de tráfico involucrando altas esferas del poder público, habría precipitado la masacre (Olivier, 2018).

Los desaparecidos de Iguala son la punta del iceberg de un drama más grande. A principios de 2019, las cifras oficiales registraban 40.180 desaparecidos (*Animal Político*, 2019), sin contar a los inmigrantes, mientras las ONG de derechos humanos sugieren un número hasta cinco veces mayor. Las desapariciones, que hasta 2006 se limitaron a 247 casos, son una faceta de la escalada de violencia relacionada a la "guerra a las drogas" declarada por Calderón en ese año. El número de homicidios también se multiplicó, y entre 2006 y abril de 2018, los registros de INEGI sobrepasaron los 250 mil casos. El promedio anual, en ascenso desde 2014, alcanzó en 2017 la cifra récord de 31.174 personas —cerca de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes—, mientras que, en 2008, la tasa fue de 13 por cada 100 mil mexicanos. Se estima que ocurren alrededor de 60 muertes diarias relacionadas al narcotráfico, en el tercer país con más homicidios y muertes causadas

por armas de fuego en el mundo, ambas estadísticas lideradas por Brasil (EFE, 2018; PRODH, 2018).

Así como en Colombia, la guerra contra las drogas fue, algunas veces, efectiva para desbaratar la centralización en grandes carteles, diluyendo la economía política del narcotráfico en un sinnúmero de grupos más pequeños, pero sin socavar la vitalidad del negocio como un todo. La economía delictiva, que en 2006 se concentró en ocho carteles, al final del mandato de Peña Nieto se extendía por más de 300 organizaciones (Alonso Reynoso, 2018: 8). La eficacia de los operativos espectaculares con cobertura mediática es política antes que criminal y apunta a reforzar la imagen de los gobernantes implacables, en un contexto donde tres de cada cuatro mexicanos considera inseguro el lugar donde vive.

La intervención estatal, cuyo poder de fuego es muy superior al del crimen organizado, a menudo reprime a una facción en beneficio de otra, mejor relacionada con la política de turno. Así como en Colombia, proliferan las relaciones promiscuas entre el narcotráfico y el Estado, que, sin embargo, no se partidizaron como en el país sudamericano, donde se alinean principalmente al uribismo. El crimen organizado influye en la política mexicana de una manera diferente, ya sea amedrentando, subordinando o comandando directamente gobiernos y alcaldías (Meyer, 2016: 264). En las últimas elecciones en 2018, se registraron 82 políticos asesinados. El narcotráfico es visto como un actor determinante en al menos cinco estados (Morelia, Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa y Guerrero, donde ocurrió la matanza de Iguala). Se cree que la paz relativa en la capital del país está mediada por acuerdos que involucran al gobierno y a las facciones criminales. Frente a esta realidad, los observadores señalan que la noción de un narco Estado es absolutamente real, subrayando que el Estado y el narcotráfico muchas veces no son actores diferentes, sino papeles diversos ejercidos por las mismas personas (Bartra, 2018; Paredes, 2018; Rappo, 2018).

La violencia que emana de esta relación, a veces dialéctica y otras simbiótica, entre represión estatal y crimen organizado, corroe el tejido

social mexicano. La guerra contra las drogas puso al Ejército en acción en un entorno civil, militarizando la sociedad según una lógica en la que la población pobre es tratada como enemigo interno. Las leyes de seguridad inspiradas en el modelo colombiano criminalizan la protesta social, mientras la tortura se naturaliza como un método para obtener información en cualquier investigación. A nivel judicial, las investigaciones están prohibidas y los investigadores indeseables son eliminados, reforzando un clima de impunidad que favorece las acciones extremas (PRODH, 2018).

La violencia alcanza a quien se resiste pero también a quien la documenta: más de 120 periodistas fueron asesinados en el siglo XXI, lo que convierte al país en uno de los más peligrosos del mundo para ejercer la profesión, mientras un número similar de ambientalistas fue victimado. México introdujo el término "feminicidio" en el vocabulario latinoamericano, en función de los asesinatos de mujeres a gran escala en Ciudad Juárez, lo que motivó la legislación que tipifica este crimen desde 2007. La muerte persigue incluso a quien escapa del país: entre 2002 y 2012, más de 10 mil personas perecieron intentando cruzar la frontera con los Estados Unidos por la zona desértica (Meyer, 2016: 59). Frente a este escenario, algunos consideran que México vive una crisis humanitaria no reconocida, ya que, en 12 años de guerra contra las drogas, murió tanta gente en el país como en las décadas de guerra civil en Colombia (PRODH, 2018).

En resumen, la crisis mexicana tiene múltiples facetas: desequilibrios comerciales y fiscales, dependencia de los Estados Unidos, la precariedad del trabajo, el desempleo, el drama agrario, la obesidad y diabetes como problemas de salud pública, los conflictos socioambientales, la cuestión indígena, las tensiones migratorias, el chauvinismo de Trump, el crimen organizado, los desaparecidos, los feminicidios, los asesinatos políticos, la impunidad, la narco política, la corrupción. Si es cierto que "este país es un cementerio", como sentenció Josefina Morales, el gobierno de López Obrador tiene la difícil tarea de resucitar la nación mexicana, para que el

día de los muertos sea apenas un feriado celebrado una vez al año, y con fiesta.

La elección de López Obrador

Vista bajo el trasfondo de la historia mexicana reciente, la elección de López Obrador incita expectativas contradictorias. Por un lado, la primera alternancia para la izquierda en una política marcada por el autocratismo y el fraude, despertó un incuestionable entusiasmo, motivado por una notable movilización ciudadana que dio al nuevo gobierno una legitimidad inicial sin par. Por otro lado, la gravedad de los problemas enfrentados coloca desafíos colosales, sugiriendo la necesidad de soluciones radicales. Retóricamente, esto es reconocido cuando López Obrador se atribuye la responsabilidad de llevar a cabo una "cuarta transformación" en México, después de la independencia, de las reformas liberales del siglo XIX y de la revolución.

Sin embargo, cualquier cambio estructural en el país implica revisar el patrón de relación con los Estados Unidos consolidado en el TLCAN, que incide en todas las esferas de la existencia, desde el patrón alimenticio hasta la política de seguridad, de la política industrial a la cuestión agraria, desde el mimetismo cultural a la inmigración. Sin embargo, eso está fuera del horizonte del nuevo gobierno, que acepta los parámetros estructurales del orden heredado.

En su campaña, López Obrador se limitó a afirmar que exigiría de los Estados Unidos que su país fuese tratado con respecto, sin dejar claro lo que eso implicaba. Una vez elegido, los miembros de su equipo se integraron a la renegociación del tratado forzada por el gobierno de Trump, quien, a su vez, amenazó varias veces, en campaña, abandonar el TLCAN, lo que resultó ser otro más de sus engaños. Así, cuando en el inicio de la presidencia de López Obrador duplicó el salario mínimo en la región fronteriza, su gobierno respondió a una demanda presentada por los Estados Unidos y Canadá en la renegociación del tratado. En otras partes del país, el aumento concedido fue del 16,21%. Por otro lado, el nuevo tratado restringe las posibilidades de

México de negociar con economías que no "son de mercado", lo que se traduce como la China. Hay quien critica el TLCAN por este ángulo, argumentando que el modelo maquilador sería más favorecido por vínculos con la potencia oriental, donde los salarios están en ascenso, que, con el vecino del norte, cuya economía patina (Martínez, 2018).

Aunque un barniz latinoamericanista adorne el ideario de Morena, fueron raras las menciones concretas a América Latina en la campaña electoral, excluyendo la posibilidad de un cambio radical en la política exterior (Carvalho y Franzoni, 2018). En todo caso, el contexto regional desfavorable a cualquier iniciativa integracionista, en contraste con el 2006, facilita la postura conservadora del nuevo gobierno en este campo. En este escenario, el no reconocimiento de Juan Guaidó como presidente autoproclamado de Venezuela en enero de 2019 remite a un antiguo arreglo diplomático con los Estados Unidos, en que la libertad de discrepar de la gran potencia calma las presiones domésticas, pero no tiene consecuencias prácticas relevantes. La oposición a las sanciones económicas y la ruptura diplomática con Cuba durante la Guerra Fría, se inscriben en esta tradición.

Al aceptar los parámetros de la relación con los Estados Unidos, el margen de maniobra del Estado mexicano para formular política pública se ve limitado en todas las direcciones. En este contexto, más realista que una "cuarta transformación", es la expectativa de una especie de programa republicano de salvación pública, con el objetivo de frenar la degradación del tejido social mexicano y recuperar la capacidad interventora del Estado, en el marco de una política económica que, aunque ortodoxa, reivindica el desarrollismo (Olivier, 2018).

Sin embargo, incluso esta aspiración más modesta enfrenta obstáculos y contradicciones. Cualquier designio desarrollista se enfrenta a una realidad en que el TLCAN restringe la posibilidad de control del espacio económico nacional; en el que la burguesía mexicana se comprometió con una asociación subordinada a los Estados Unidos en todos los niveles; en el que la dependencia en relación al dinamismo de la economía de este país se potenció; en el que la industria

maquiladora reproduce las condicionantes que caracterizan un enclave económico; en el que la autonomía del Banco Central, vigente desde 1994, debilita el comando gubernamental de la política monetaria; en el que la deuda pública ha crecido, la recaudación de impuestos es baja (cerca del 10% del PIB) y la reforma fiscal está fuera de la agenda. En este contexto, la agenda de López Obrador apunta a una versión mexicana del progresismo sudamericano, combinando la expectativa de crecimiento económico con programas sociales redistributivos, eludiendo la raíz estructural de los problemas asociados al subdesarrollo.

Al igual que el PAC brasileño, López Obrador prevé un conjunto de megaproyectos de infraestructura para dinamizar la economía y generar parte de los dos millones de empleos que prometió. Los proyectos más conocidos y polémicos incluyen un Corredor Industrial Interoceánico a través del istmo de Tehuantepec, donde la distancia entre el Atlántico y el Pacífico es más corta, favoreciendo el tráfico interoceánico en competencia con el Canal de Panamá. La propuesta está en el marco de la agenda de Peña Nieto de promover Zonas Económicas Especiales en el sur del país, toda vez que los puertos de Cuatzacoalcos y Salina Cruz, vinculados por el corredor tendrían ese estatuto. Otro proyecto controversial es el llamado tren Maya, una red de 1.500 kilómetros de líneas férreas, también en el sur del país, orientado a dinamizar la industria del turismo. Sin embargo, la lógica de los megaproyectos está asociada a una modalidad depredadora de desarrollo que choca con las tradiciones comunitarias fuertemente arraigadas y organizadas en la región, preanunciando conflictos. El movimiento zapatista ya dejó claro que resistirá al tren Maya que atravesará Chiapas. El gobierno anunció que respetará los protocolos de consulta con las poblaciones afectadas, pero como dijo un militante: "Está bien preguntarnos, pero es necesario escuchar la respuesta" (Froehling, 2018). Y muchos sospechan que eso no sucederá.

Incluso antes de asumir el cargo, el presidente emitió una señal en la dirección contraria: en octubre de 2018, respaldó una consulta popular que rechazó la construcción de un aeropuerto en el lago

drenado de Texcoco, obra que amenaza el equilibrio ecológico y las fuentes de agua en los alrededores de la capital. AMLO propuso como alternativa la ampliación y reacondicionamiento de otros aeropuertos cercanos. Aunque hubiera elementos de oportunismo en la consulta y la alternativa presentada también sea cuestionable desde un punto de vista socioambiental (Badillo Cuevas, 2018), el compromiso del nuevo gobierno de interrumpir la obra presupuestada en 13 mil millones de dólares molestó a gente importante, como Carlos Slim, el hombre más rico de México y el mayor inversor en el proyecto. Sin embargo, el alcance del episodio debe ser matizado: no hay indicios de fisura con el empresariado y el propio Slim asistió al discurso gubernamental de 100 días de gobierno, al cual solo elogió.

Tampoco está claro el compromiso del gobierno de oponerse a lo que el campo popular describe como "proyectos de muerte", como el aeropuerto y la agenda extractiva. López Obrador se posicionó contra los megaproyectos mineros, prometió "*fracking* cero" y condenó los transgénicos. Sin embargo, en los primeros días de mandato, liberó más de 100 mil hectáreas para nuevas minas, mientras que uno de cada cuatro pozos de petróleo continuaba siendo fracturado hidráulicamente (*fracking*). En el campo anunció una política de crédito para los pequeños productores sin necesidad de garantías, pero nombró para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a un especialista en transgénicos vinculado a Monsanto, Víctor Villalobos, visto como "defensor del modelo agroindustrial neoliberal" por los movimientos campesinos e indígenas de Oaxaca (Resumen Latinoamericano, 2018).

La misma ambigüedad es constatada en el terreno de la seguridad y los derechos humanos. AMLO se comprometió con el fin de la "guerra a las drogas", pero anunció la creación de una controvertida Guardia Nacional, movilizando a las tropas del Ejército y de la marina bajo el comando civil. La iniciativa indica que la militarización continuará y fue severamente criticada por organizaciones de derechos humanos. Dos premisas discutibles fundamentan la propuesta: la primera es que el

Ejército no se corrompió. La segunda es que es imposible desmilitarizar a la sociedad sin un Estado fuerte —en otras palabras, no es posible desmilitarizar al Estado sin militarizarlo primero—. En el campo de los derechos humanos, se creó una Comisión de la Verdad sobre la masacre de Iguala, mientras las organizaciones de derechos humanos piden que se investigue el conjunto de los crímenes cometidos bajo la égida de la "guerra contra las drogas" (PRODH, 2018).

Más allá de recurrir a la represión, el gobierno reparte becas entre los jóvenes que estudian, como una alternativa al crimen organizado. Según un informe de la Cámara de Diputados, casi medio millón de mexicanos integran las redes del narcotráfico, en su mayoría jóvenes (Meyer, 2016: 277). Sin embargo, el poder de atracción de esas becas para una juventud que tiene como horizonte el desempleo y la violencia es discutible. Como dice una canción en el país, "más valen cinco años de rey que veinte años de buey". AMLO también prometió duplicar la pensión de las personas mayores y construir 100 nuevas universidades y cuando le preguntan sobre la fuente de los recursos para ello, su respuesta invariablemente apunta a un tema central de su campaña: la lucha contra la corrupción y la moralización del Estado.

En su discurso de posesión, López Obrador habló de vender la flota aérea presidencial, eliminar las pensiones vitalicias para los expresidentes, no usar guardaespaldas ni la casa presidencial, prohibir el uso de vehículos públicos para fines personales, prescindir de los choferes, personal de seguridad y asesores, reducir viajes y viáticos, limitar el valor de los obsequios para los servidores públicos, que no podrían convivir más en fiestas con proveedores de servicios, reducir el gasto en publicidad. Decretó que ningún servidor público ganaría más que el presidente, sugirió eliminar la inmunidad del presidente y foros privilegiados para servidores públicos, estableció como delito grave el tráfico de influencias y fraude fiscal, entre otras medidas republicanas, pero con poco impacto presupuestario (López Obrador, 2018).

El límite del republicanismo anunciado está dado por la continuidad de las formas convencionales de hacer política. El ascenso de Morena estuvo acompañado por alianzas controversiales y por la acogida de deserciones del PRIAN, interesadas en ser poder y no oposición. La coalición electoral que dirigió incluyó el Partido Encuentro Social, de orientación evangélica. La coordinadora de la campaña, Tatiana Clouthier, militó muchos años en el PAN, y su padre fue candidato presidencial por este partido en 1988. Por eso, ella se opuso al nombramiento de Manuel Bartlett para dirigir la Comisión Federal de Electricidad: el *expriista* es considerado uno de los artífices del fraude de 1988, cuando presidía la Comisión Electoral. Otro que cambió de lado es el empresario Alfonso Romo, ahora jefe de gabinete del presidente. En síntesis, un militante estima que la mitad del gabinete de AMLO es conservador, mientras que la otra mitad la describe como una izquierda neoliberal (Froehling, 2018).

Las ambivalencias también marcan el nuevo gobierno en relación a las reformas antipopulares y antinacionales de su antecesor. AMLO se comprometió a enterrar la reforma educativa propuesta por Peña Nieto, pero nombró para la cartera de educación a un notorio *priista*, Esteban Monctezuma. En su discurso de posesión, el nuevo presidente instó a los trabajadores petroleros a actuar con patriotismo para rescatar esta industria, "como se hizo en los tiempos del general Cárdenas", pero la nacionalización está fuera del radar. En realidad, la reforma energética promulgada en 2013, así como la reforma laboral de 2012, no son cuestionadas. Al estilo del progresismo brasileño, la idea es construir sobre la estructura heredada, sin cuestionar sus fundamentos.

Reflexiones finales

Con la masacre de Tlatelolco en 1968, se evidenciaron las fisuras del nacionalismo revolucionario, que se institucionalizaron como ideología estatal bajo la batuta del PRI, configurando la dominación partidaria más longeva del siglo. En la década siguiente, los impases

de la industrialización sustitutiva en un orden impermeable a las presiones populares, condujeron a la burguesía mexicana a la opción por Estados Unidos, lo que implicó renunciar a los fundamentos del pacto velado que sostenía el orden *priista*. El vaciamiento de la legitimidad del régimen se reveló en las elecciones de 1988, cuando la disidencia neocardenista adquirió la forma de una rebelión electoral abortada por el fraude. Fue un momento crucial: en los años siguientes, las reformas del artículo 27 de la Constitución y de la ley minera modificaron los parámetros de la relación con la tierra y con los recursos naturales, mientras la adhesión al TLCAN comprometió irremediablemente la soberanía del país. Estos cambios condenaron al patrón de dominación vigente, que vio en la incorporación del PAN como oposición leal, una vía para la alternancia controlada, mientras los sectores populares se radicalizaron en una dirección autonomista, como fue el caso de los zapatistas.

Cuando la llama neocardenista se enfrió, López Obrador surgió como una alternativa a la izquierda. En su lectura, México no entró en la ola progresista en 2006 solo porque hubo un nuevo fraude electoral. Aunque la consolidación del TLCAN volviese a la agenda cardenista del pasado cada vez más difícil, los movimientos en torno a una integración latinoamericana en ese momento generaban desconfianza. Avanzando en la dirección contraria, Calderón extendió la simbiosis con los Estados Unidos al plano de la seguridad, lanzando una guerra contra las drogas que elevó la violencia al nivel de una crisis humanitaria. El PRI todavía tuvo una supervivencia electoral, pero al final de cuentas, el mandato de Peña Nieto consumó la decadencia del PRIAN. Si en 2006 la elección fue dividida, en 2018 López Obrador se impuso con una mayoría indiscutible.

El apoyo popular de AMLO se remite más al desgaste de la política tradicional, que a una agenda social radical. Los tiempos del neocardenismo pasaron: sintomáticamente, la narrativa de una cuarta transformación deja de lado el cardenismo, asociado a la reforma agraria y a la nacionalización del petróleo. En el centro del discurso

reluce un moralismo republicano, que también tiene una dimensión personalista: como si el esfuerzo de austeridad personal del presidente sanease las finanzas públicas o su discurso dirigido al pueblo volviese al país más democrático. Al mismo tiempo, deja en claro que se respetará la autonomía del Banco Central y el compromiso con la austeridad fiscal. En conjunto, la noción de que el combate a la corrupción y la moralización de la cosa pública financiarán la agenda social del gobierno es, en la mejor de las hipótesis, ingenua y, en la peor, hipócrita. Quizás el principal mensaje transmitido es que los cambios estructurales no son imaginados.

De todos modos, esto ya estaba dado por la postura en relación a los Estados Unidos. Sin cuestionar el modo en que la burguesía mexicana vinculó su destino al de este país, la intención de recuperar el margen de maniobra del Estado para hacer política pública es severamente limitada en todas las esferas. El progresismo tardío mexicano se enfrenta a una realidad particularmente inhóspita, porque además de todas las dificultades inherentes al cambio en el capitalismo periférico, está amarrado a los Estados Unidos, gangrenado por el crimen organizado y con escasos aliados regionales.

En este escenario y a la luz de la historia reciente, es pertinente preguntarse si la primera variación electoral hacia la izquierda en la historia mexicana es más bien una victoria del cambio o una alternativa de gestión de la crisis. Visto desde una perspectiva internacional, el triunfo de Morena reproduce un fenómeno global, en el que novedades políticas se imponen frente a los partidos tradicionales, explicitando el descrédito de la política convencional; en este sentido, hay una semejanza con la elección de Bolsonaro en Brasil. La particularidad mexicana es que la victoria de AMLO parece ir a contramano de la historia, porque ocurre cuando la ola progresista sudamericana pasó y con ella los ensayos integracionistas que convergieron en Unasur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Sin embargo, vista desde el ángulo del patrón autocrático de la política mexicana, la elección de AMLO puede interpretarse como la

culminación de una transición controlada, que apunta al surgimiento de un nuevo patrón de dominación, pero dentro del marco del orden vigente. Si en Brasil la victoria de Bolsonaro señala el ocaso de la Nueva República, el triunfo de López Obrador en México culmina el largo final del reinado del PRI. Una transición lenta y gradual pero segura, después de todo.

Analizado desde esta perspectiva, el progresismo y el bolsonarismo emergen como caras opuestas pero complementarias de la autocracia burguesa en América Latina, contraria al protagonismo popular e impermeable al cambio. Desde este punto de vista, el gobierno de López Obrador plantea un dilema para la izquierda: brote tardío de la estirpe progresista, que pretende cambiar sin enfrentar la raíz de los problemas, su éxito dependerá de la relativa eficacia en gestionar, en múltiples frentes, la colosal crisis mexicana. En otras palabras, el éxito de un gobierno de esta naturaleza radica en asegurar condiciones relativamente estables para la reproducción capitalista, lo que implica torear las presiones populares — entre migajas, puestos y represión—, mientras se profundizan las estructuras del capitalismo dependiente. Por otro lado, su fracaso se interpretará como una derrota de la izquierda con la que se alinea, nutriendo una frustración que puede convertirse en odio, favoreciendo la reacción y la represión, en un país donde el Ejército es una de las pocas instituciones que todavía goza de credibilidad junto a la opinión pública.

Puede llevar menos tiempo, como Lugo en el Paraguay, o más tiempo, como el PT en Brasil. Pero el guion del progresismo ya fue vivido. Aunque el rumbo de la historia sea siempre imprevisible, es posible anticipar las líneas generales de su evolución, como acostumbra suceder con las novelas mexicanas. En este caso, es poco probable que el final sea feliz.

Bibliografía

ACCIOLY, LUCIANA Y ALEJANDRO REYES

2019 "Como está o zapatismo?", en Fabiana Dessotti, Marcela Franzoni y Fabio Luis Barbosa dos Santos (org.), *México e os Desafios do Progressismo Tardio*. São Paulo: Elefante, pp. 206-213.

AGUILAR CAMÍN, HÉCTOR Y LORENZO MEYER

2000 *À sombra da Revolução Mexicana*. São Paulo: EDUSP.

AGUILAR MORA, MANUEL

1984 *Crisis y esperanza. México más allá de 1984*. México: Juan Pablos Editor.

AGUIRRE, JOEL

2018 "La industria maquiladora y manufacturera es la más productiva de México", en *Newsweek*, 11 de noviembre de 2018. Disponible en: https://newsweekespanol.com/2018/11/industria-maquiladora-manufacturera-productiva-mexico/.

ALONSO REYNOSO, CARLOS

2018 *Movimientos recientes de Autodefensas y policías comunitarias en México*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

ALTMANN, WERNER

2002 *México e Cuba. Revolução, nacionalismo, política externa*. São Leopoldo: Unisinos.

ANIMAL POLÍTICO

2019 "Hay más de 40 mil desaparecidos y 36 mil muertos sin identificar en México, reconoce Gobernación", en *Animal Político*, 17 de enero de 2019. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2019/01/40-mil-desaparecidos-mexico-victimas-sin-identificar/.

ARROYO PICARD, ALBERTO

2009 "México a 14 años del TLCAN: realidad y propaganda", en Juan Manuel Sandoval Palacios (comp.), *TLCAN: Balance general e impactos subregionales y sectoriales*. México: Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, pp. 15-46. Disponible en: http://www.rmalc.org/historico/documentos/libros/tlcan2009.pdf.

CANO, WILSON

1999 *Soberania e política econômica na América Latina*. São Paulo: Unesp.

CARVALHO, CARLOS EDUARDO Y MARCELA FRANZONI

2018 "López Obrador diante de Trump", en *Valor Econômico*, 20 de julio de 2018.

COCKROFT, JAMES

2014 *Revolución y contrarevolución en México*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

EFE

2018 "La tasa de homicidios en México alcanza su mayor nivel en una década", en Agencia EFE, 30 de julio de 2018. Disponible en: https://www.efe.com/efe/america/mexico/la-tasa-de-homicidios-en-mexico-alcanzasu-mayor-nivel-una-decada/50000545-3706122.

FUNDAR, CENTRO DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

2018 *Anuario 2017. Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio*. Ciudad de México: Fundar. Disponible en: http://fundar.org.mx/mexico/pdf/AnuarioExtractivas2017.pdf.

FUSER, IGOR

1995 *México em transe*. São Paulo: Scritta.

GARDUÑO, ROBERTO

2015 "Fox y Calderón cedieron casi 10 millones de hectáreas a mineras", en *La Jornada*, 20 de septiembre de 2015. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2015/09/20/politica/005n1pol#.

GARZA ZEPEDA, MANUEL Y GEOFFREY PLEYERS
2017 *México en movimiento*. Oaxaca: UABJO.

GILLY, ADOLFO
2001 *El cardenismo: una utopía mexicana*. México: Era.
1996 *México: el poder, el dinero y la sangre*. México: Nuevo Siglo.
1974 *La revolución interrumpida*. México: El Caballito.

INFORME
2018 *Juicio popular comunitario contra el estado y las empresas mineras en Oaxaca*. Oaxaca.

IDIC-INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
2017 "Bajos salarios, informalidad y pobreza, la debilidad social del modelo económico", en *La Voz de la Industria*, vol. 5, núm. 108. Disponible en: https://idic.mx/wp-content/uploads/2017/12/VozIndustria-20171213-Vol-05-Num-108-Bajos-salarios-informalidad-y-pobreza-la-debilidad-social-del-modelo-econ%C3%B3mico-v2.pdf

JACOBS, ANDREW Y MATT RICHTEL
2017 "Nafta pode estar relacionado à disparada da obesidade no México", en *The New York Times*, 13 de diciembre de 2017. Disponible en: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2017/12/1942835-nafta-pode-estar-relacionado-a-disparada-da-obesidade-no-mexico.shtml.

KNIGHT, ALAN
1989 "Interpretaciones recientes de la Revolución Mexicana", *Revista Secuencia*, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, núm. 13, abril, pp. 23-43.

LÓPEZ BOLAÑOS, ALEJANDRO CÉSAR
2015 "México: la continuidad y profundización del despojo neoliberal. Balance de la economía a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 1994-2014", en Luis Rojas Villagra (coord.), *Neoliberalismo en América Latina. Crisis, tendencias y alternativas*. Asunción: Clacso, p. 223-240.

LÓPEZ OBRADOR, ANDRÉS MANUEL
2018 "Discurso de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos", 1 de diciembre de 2018. Disponible en: https://

www.gob.mx/presidencia/articulos/discurso-de-andres-manuel-lopez-obrador-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos?idiom=es

LABASTIDA MARTÍN DEL CAMPO, JULIO

1984 "La unidad nacional al desarrollo estabilizador (1940-1970)", en Pablo González Casanova, *América Latina: historia de medio siglo*. México: Siglo XXI, pp. 328-376.

MEYER, LORENZO

2016 *Distopía mexicana. Perspectivas para una nueva transición*. México: Penguin Random House.

MORALES, JOSEFINA

2015 "La industria maquiladora en México bajo el TLCAN 1993-2013", en Luis Rojas Villagra, *Neoliberalismo en América Latina. Crisis, tendencias y alternativas*. Asunción: Clacso, pp. 103-124.

2013 "Maquila, reestructuración industrial y trabajo", en Genoveva Roldán (coord.), *La globalización del subdesarrollo en el mundo del trabajo*. México: IIEC-UNAM.

RESUMEN LATINOAMERICANO

2018 "México: indígenas de Oaxaca advierten que futuro titular de agricultura ha sido defensor del modelo neoliberal para el sector", en Resumen Latinoamericano, 16 de julio de 2018. Disponible en: http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/07/16/mexico-indigenas-deoaxaca-advierten-que-futuro-titular-de-agricultura-ha-sido-defensordel-modelo-neoliberal-para-el-sector/

ROUX, RHINA

2005 *El príncipe mexicano. Subalternidad, historia y Estado*. México: Era.

1996 "México: crisis de la forma de Estado", en Adolfo Gilly, *México: el poder, el dinero y la sangre*. México: Nuevo Siglo, pp. 111-138.

SOTELO VALENCIA, ADRIÁN

2017 "Trabajo precário e informalidade laboral en México", en *Rebelión*, 28 de diciembre de 2017. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=235878.

2016 *México (des)cargado. Del Mexico's Moment al Mexico's Disaster*. México: Itaca

Entrevistas y conversaciones

Entrevistas en la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, San Cristóbal de las Casas y comunidades de San Pablo, Tecalco y San Luis de Tecualtitlán, Valle del Teotihuacán entre el 2 y el 13 de diciembre de 2018

BADILLO CUEVAS, DONATTO DANIEL. Profesor y militante en el Valle de Teotihuacán.
BARRIOS, DAVID. Especialista en geopolítica, UNAM.
BARTRA, ARMANDO. Estudioso de las cuestiones indígena y agraria, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Xochimilco.
CORTÉZ, SERGIO. Especialista en cuestiones migratorias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
FROEHLING, OLIVER. Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca (SURCO).
GARZA MANUEL. Universidad Autónoma Benito Juárez.
LEÓN, EFRAIN. Profesor de Geografía de la UNAM.
LÓPEZ BOLAÑOS, ALEJANDRO. Profesor de Economía de la UNAM.
MARTÍNEZ, IGNACIO. Profesor de Relaciones Internacionales de la UNAM.
MORALES, JOSEFINA. Profesora de Economía de la UNAM.
OLIVIER, LUCIO. Estudioso de movimientos sociales y Estado, UNAM.
PAREDES, HERIBERTO. Periodista.
PRODH-Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
RAPPO, SUSANNA. Especialista en cuestión agraria, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
REYES, ALEJANDRO. Comunicador, escritor, apoyo del EZLN.
REYES MÉNDEZ, NEFTALÍ. Líder popular en Oaxaca, Red EDUCA.
SÁNCHEZ BARRAZA, RAYMUNDO. Centro Indígena de Capacitación Integral (CIDECI UniTierra).
SÁNCHEZ JUÁREZ, KARINA. Universidad Autónoma Benito Juárez.
SOTELO VALENCIA, ADRIÁN. Profesor de sociología de la UNAM.

Epílogo

Las reflexiones finales están enlazadas en tres secciones. Inicialmente se reconstruyen las determinaciones generales del movimiento de la historia en el que se inscribió la onda progresista y luego se establecen relaciones entre los procesos analizados aunque la cantidad y diversidad de países limite la posibilidad de comparaciones detalladas, se destacan las características comunes y las particularidades más relevantes, en un ejercicio ensayístico de comparación histórica.

A continuación, se analizan las convergencias y divergencias entre los diferentes gobiernos en el ámbito de la integración regional. La hipótesis de que la ola progresista atestigua el estrecho espacio para el cambio dentro del orden se desdobla en la constatación de que una integración regional que no confronta las estructuras de dependencia está condenada a reproducirla. En síntesis, se observa una correspondencia entre los procesos progresistas nacionales y el esfuerzo de integración regional, en la que el cambio en el marco de la continuidad económica lo restringió a la superficie de la política.

En la tercera sección, se enuncian nueve proposiciones motivadas por la reflexión en torno a la ola progresista que motivó el libro, con la intención de contribuir a pensar la política necesaria y construir el cambio necesario.

Parte I.

La Revolución Democrática y Cultural se hace con votos, no con balas; con conciencia política militante y sin ambición ni ganancia.
Evo Morales en declaración en Twitter, 16 de diciembre de 2016

Al confundir democracia con revolución, sus campeones patrocinan la inmovilidad del orden y la contrarrevolución permanente.
Florestan Fernandes

El contraste de la trayectoria de los países sudamericanos revela semejanzas y diferencias, como toda comparación histórica. La similitud fundamental está dada por el sentido general del movimiento, arrancado de un pasado colonial común, perpetuado en la articulación entre dependencia y desigualdad. En términos económicos es posible sintetizarlo en la secuencia de industrialización sustitutiva de importaciones, internacionalización de los mercados internos, crisis de la deuda e inflación, hasta neoliberalismo, *boom* de las *commodities*, recesión. En la esfera política, se suceden desarrollismo nacional, revolución versus contrarrevolución, transición, desgaste de los partidos convencionales, ola progresista, regresión conservadora.

No existe una correspondencia precisa entre los términos económicos y políticos, que tampoco obedecen a una secuencia cronológica exacta en las diferentes situaciones. Así como algunos países avanzaron poco en la dirección industrial, subsistiendo en la condición de economía de enclave[1], hubo quienes no eligieron presidentes

1 Florestan Fernandes (1975: 19) describió las economías de enclave como "versiones modernizadas del antiguo sistema colonial o neocolonialismo transitorio de principios del siglo XIX". Este patrón de dominación externa cristalizado bajo la creciente hegemonía de los

identificados con el campo progresista a inicios del siglo XXI. A pesar de las particularidades, la sucesión de estos momentos transmite el sentido general de la historia regional en los últimos cien años. Su relativa simultaneidad en los diferentes países concretiza el significado del imperialismo —y de la dependencia—, en el subcontinente. De manera inversa, la constatación de que la trayectoria cubana difiere sustancialmente de este recorrido, ilustra lo que significa romper estas amarras.

Las especificidades están dadas por cada formación socioeconómica, articulada de modo más o menos coherente en torno a los Estados nacionales a partir del siglo XIX. Las particularidades estructurales de cada país, como la abundancia de divisas en Venezuela, la sociedad abigarrada en Bolivia o la violencia en Colombia, se suman a las múltiples vicisitudes inherentes a los procesos históricos. Aunque Fidel Castro argumentó que donde quiera que existan decenas de revolucionarios reunidos, como en el *Granma*, siempre habrá un Che, un Raúl, un Cienfuegos y un Fidel, el papel del individuo en la historia es único.

Situada en una perspectiva histórica ampliada, las líneas generales del movimiento que confluyó en la ola progresista remiten al triunfo de la contrarrevolución en el período de la Guerra Fría, que congeló el cambio histórico en numerosas situaciones nacionales, tras la Revolución Cubana. Este proceso fue más visible en las dictaduras del Cono Sur, pero el cambio también fue bloqueado en los regímenes en que la política se restringió al circuito cerrado de los pactos oligárquicos, como en Venezuela y en Colombia.

El congelamiento del cambio no solo significó la derrota de la revolución sino también de la reforma. La intensificación de la penetración de las multinacionales eludió las presiones por la reforma social y la

Estados Unidos se basa en controles indirectos creados por los mecanismos de mercado, determinando que apenas una fracción diminuta de la riqueza sea retenida en el espacio económico nacional, lo que impone límites rigurosos al alcance y al ritmo de la descolonización. Ejemplos de esta situación son las islas caribeñas y el conjunto de América Central.

integración regional, entendidas como premisas para superar el agotamiento de la industrialización sustitutiva. Tanto a nivel político como ideológico, la disociación entre el desarrollo e integración nacional fue sellada, rompiendo con la referencia establecida por el pensamiento cepalino posguerra, que asociaba industrialización y nación.

El creciente endeudamiento externo de la región en la década de 1970 fue una de las dimensiones de la profundización de la dependencia, sentando las bases para el fin del nacional desarrollismo y para el dominio del capital financiero. Cuando estalló la crisis de la deuda en la década siguiente, los países enfrentaron una combinación de estancamiento económico e inflación. Los problemas económicos contribuyeron a desestabilizar las dictaduras, pero, en todos los casos, la transición fue un proceso controlado, aunque menos en la situación argentina y más en el caso chileno.

Como resultado, prevalecieron gobiernos identificados con la oposición consentida a los regímenes desmantelados, en situaciones donde no había correlación de fuerzas ni interés político en confrontar su legado. En otras palabras, la derrota anterior moduló las tímidas condiciones bajo las cuales los llamados gobiernos democráticos enfrentaron la crisis. El resultado universal de esta impotencia, compartida por los pocos países que no venían de las dictaduras, fue la progresiva subordinación de las políticas nacionales a las instituciones financieras internacionales, en particular el FMI. En la medida en que la globalización se aceleraba, los programas de ajuste neoliberal colocaron los últimos clavos en el ataúd del desarrollismo nacional.

El ritmo y la intensidad de la incorporación de los países de la región al neoliberalismo variaron en proporción inversa a la devastación social producida por los regímenes anteriores. O sea, cuanto más devastado estaba el campo popular, como en el caso de Argentina o Perú, más radical fue el neoliberalismo. En el plano político, esta agenda fue implementada en algunos casos por personas hasta entonces identificadas con el nacionalismo, como los peronistas en Argentina, Víctor Paz Estenssoro en Bolivia y Carlos Andrés Pérez en Venezuela.

En Chile, donde la relación entre dictadura y neoliberalismo prescindió de mediaciones, los socialistas gestionaron el orden. Al mismo tiempo, los autodenominados socialdemócratas en Brasil comprobaron la imposibilidad de un centro-izquierda en América Latina, gravitando hacia la derecha liberal.

En conjunto, la implementación de la agenda neoliberal desgastó las viejas fuerzas políticas y abrió espacio para las nuevas. En el campo popular, el deterioro de los instrumentos tradicionales de la política clasista, como los sindicatos y los partidos obreros, debilitó la base material de los proyectos de cambio asociados a la clase trabajadora como tal. Este fenómeno mundial fue reforzado por el fin de la Unión Soviética, que proporcionó una ofensiva neoliberal posterior sintetizada en la noción del "fin de la historia". Cuba desafió este veredicto y sobrevivió como una aberración, pero está en la defensiva desde entonces.

Por otro lado, surgieron nuevos actores políticos, organizados principalmente como movimientos sociales. Entre los sin tierra en Brasil, los piqueteros en Argentina y los zapatistas en México, los resultados políticos más impactantes fueron alcanzados por los movimientos de origen campesino y vinculados a la identidad indígena en Bolivia y en Ecuador, donde varios presidentes fueron derrocados a inicios del siglo XXI.

La conjunción entre el desgaste de la política convencional y el aumento de la protesta social abrió espacio para la novedad electoral. En algunos casos, triunfaron organizaciones tradicionalmente asociadas a la izquierda, como el PT brasileño o el Frente Amplio uruguayo. En otros casos, surgieron figuras identificadas con el cambio, como Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Fernando Lugo en Paraguay. En Argentina, Néstor y Cristina Kirchner expresaron el menor cambio posible para apaciguar un contexto radical. En Chile, los socialistas asumieron la delantera en la Concertación, pero frustraron cualquier expectativa de transformación. Solamente Perú y Colombia se inclinaron explícitamente

hacia la derecha, generando regímenes dictatoriales que combinaron el neoliberalismo, las "relaciones carnales" con los Estados Unidos, el asistencialismo y la represión. Estos fueron los únicos países en los que la lucha armada subsistió en los años 1990 —en el caso peruano, como una perversión de lo que fueron las guerrillas en la Guerra Fría—, lo que legitimó, a los ojos de parte de la población, el terrorismo de Estado.

En la vanguardia de la ola progresista estuvo, desde el primer momento, Venezuela. Decidido a recuperar el control estatal sobre los ingresos del petróleo, el movimiento comandado por Chávez se enfrentó a la intolerancia de las clases dominantes, que hicieron todo lo posible para derrocarlo en sus primeros años. Victorioso en las calles y en las urnas, la singularidad del proceso bolivariano en relación a sus contemporáneos fue su progresiva radicalización, cuando los demás retrocedieron. Este curso fue favorecido por las posesiones de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y Néstor Kirchner en Argentina en 2003, seguidas de victorias en Uruguay, Bolivia, Ecuador y Paraguay. Así, cuando se creó Unasur en 2008, la Colombia de Álvaro Uribe se vio obligada a unirse, bajo pena de aislarse en la región.

Sin embargo, a pesar de la retórica revolucionaria, el proceso bolivariano jamás trascendió la institucionalidad burguesa. Por el contrario, recurrió constantemente a las urnas para legitimarse, un curso seguido por la Revolución Ciudadana en Ecuador y por el proceso de cambio en Bolivia —donde la retórica revolucionaria fue más discreta—. Esta vía se tradujo en procesos enmarcados por la dinámica parlamentaria, evidencia de la debilidad de una supuesta pretensión revolucionaria. En 2016, sintomáticamente, los sectores populares en Chile y en Colombia —donde la izquierda fue silenciada por décadas— evocaron una Asamblea Constituyente como un instrumento para descongelar la política. En estos países, así como en Perú, los frentes de la izquierda crecían como una tercera o segunda fuerza electoral, manejando discursos y prácticas que reeditaban la ilusión progresista. La elección en 2018 de Andrés Manuel López Obrador

en México, tuvo lugar en el mismo tono: alternancia política en el marco del orden.

En el plano táctico, al elegir al parlamento como el foro para la resolución de las tensiones sociales, los gobiernos progresistas optaron por la conciliación de clases, incluso donde había un notable potencial para la radicalización popular. Frecuentemente, la vía legislativa sirvió como un medio para sacar al pueblo de las calles y devolver la política a la institucionalidad, restableciendo el orden en Argentina, Bolivia y en el Ecuador. En el polo opuesto, el juego electoral fue efectivo para alternar presidentes en Perú y en Colombia, donde la izquierda estuvo prácticamente proscrita, así como en Chile, donde fue congelada por el socialismo.

Invariablemente, la política parlamentaria progresista ha implicado concesiones a los conservadores, articulando estrategias para contrarrestar el potencial disruptivo de la población, que abarcaba desde la cooptación hasta la confrontación abierta. En todos los casos, hubo sectores que se unieron al gobierno, motivados por una mezcla de convicción y beneficios, mientras que aquellos que preservaron su autonomía fueron acusados de hacer el juego de la derecha. Tomados en conjunto, los llamados gobiernos progresistas se convirtieron en gestores del orden, tanto más efectivos porque neutralizaron a sus principales retadores en el campo popular.

La centralidad del parlamento también implicaba estrategias orientadas al prestigio electoral que dominaron el horizonte político. Los progresistas abogaban por el cambio, pero por medios convencionales. Además de buscar alianzas conservadoras y militares contra la autonomía popular, adoptaron todo tipo de prácticas identificadas con la alienación burguesa, como el marketing, la demagogia, el clientelismo y el personalismo, además de repetir ideologías económicas liberales, como el mito del crecimiento y la ilusión del consumo. En general, el comando del Estado dejó de ser instrumento para el cambio convirtiéndose en un fin en sí mismo.

En el caso venezolano, se puede argumentar que hubo esfuerzos para construir una correlación de fuerzas favorable a la radicalización. Sin embargo, el propósito de promover el cambio desde el Estado enfrentó contradicciones inherentes a la propuesta de fortalecer el poder popular a partir de la institucionalidad. Este dilema alcanzó el paroxismo en la Revolución Cubana, donde la exigencia de un Estado que defienda la isla del imperialismo entra en conflicto con la necesidad de radicalizar la base democrática de la revolución, entendida como poder popular. Sin embargo, a diferencia de Venezuela, Bolivia o Ecuador, el proceso cubano se asentó en una revolución popular y no en una Constitución reescrita bajo un nuevo presidente recién elegido. Significativamente, la revolución solo adoptó una Constitución diecisiete años después de su triunfo, lo que equivalía a la duración del proceso bolivariano en 2016.

Finalmente, la conciliación de clases significó que los gobiernos progresistas descartaron transformaciones estructurales: apostaron por el cambio sin tocar la raíz de los problemas. Este entendimiento implicó la continuidad económica, que vació el papel de la derecha tradicional. Subsistió una oposición recalcitrante compuesta por políticos ordinarios desplazados del poder, pero con escasa resonancia, ya que su importancia proviene del poder del dinero, que financió los brazos izquierdo y derecho del orden y durmió tranquilo durante la ola. En los países donde la izquierda fue estigmatizada en medio de guerras civiles o secuestrada por el transformismo socialista en el caso chileno, la necesidad de negociación fue menor y el sueño del capital todavía más tranquilo.

La intención de transformar sin enfrentar los problemas estructurales restringió el horizonte de cambio hacia políticas distributivas apoyadas en los ingresos estatales, originados principalmente de la exportación primaria. Por lo tanto, el otro lado de la difusión de los programas de transferencias monetarias condicionadas incentivadas por el Banco Mundial, como la Bolsa Familia en Brasil, fueron obras de infraestructura que potenciaron la circulación de las *commodities*.

Ambas políticas fueron adoptadas por todos los gobiernos de América del Sur y no fueron una exclusividad progresista. En algunos casos, hubo esfuerzos para aumentar el ingreso apropiado por el Estado, como en Venezuela y en Bolivia, o para ampliar la cobertura de los programas, como en Brasil. Pero la reducción de los índices de pobreza fue general, mientras que la desigualdad permaneció intacta. En conjunto, el proceso fue lubricado por extraordinarios ingresos que se disfrutaron durante el alza de precios de las *commodities*, lo que benefició a todos y facilitó la conciliación de intereses en las gestiones progresistas. Por otro lado, se profundizaron las determinaciones que caracterizan el legado colonial, como la dependencia económica, la sobreexplotación del trabajo y la devastación ambiental.

En conjunto, se reprodujeron sociedades incapaces de controlar su propio destino, avanzando rumbo a la degradación en todas las esferas de la existencia —lo que es característico del capitalismo contemporáneo—. Si la velocidad hacia la barbarie fue más lenta bajo la gestión progresista, el sentido del movimiento permaneció inalterado. Pero, al practicar políticas que debilitaron el campo popular que los eligió, estos gobiernos ayudaron a crear las condiciones para la reacción antipopular que se vislumbra, una dinámica evidente en el caso brasileño.

En síntesis: la política asociada a la ola progresista demostró ser suficiente para ganar elecciones, pero fue insuficiente para cambiar los países. La apuesta por la conciliación de clases dio como resultado diferentes estrategias de desmovilización o aparejamiento del campo popular, mientras que los negocios prosperaron y se fortalecieron. Por lo tanto, desde una perspectiva histórica ampliada, el interludio progresista puede verse como funcional para la reproducción del orden, porque contuvo el cambio en contextos donde la agitación contra el neoliberalismo —latente en Brasil, Paraguay y Uruguay o abierta, como en Argentina, Ecuador y Bolivia— amenazó el orden en sí. Desde esta perspectiva, el colapso de la ola progresista está asociado con el agotamiento de esta funcionalidad política —la contención del

cambio—, en un contexto en el que la caída del precio de los *commodities* agravó la crisis capitalista en el subcontinente, impulsando políticas antipopulares más agresivas.

Siendo un país donde el progresismo avanzó más y trató de desafiar el orden, el impase venezolano ilumina las paradojas. Incapaz de enraizar el cambio en la sociedad, consolidando el apoyo de los pobres que representaba, el proceso bolivariano se atrincheró en el Estado, de donde resistía entregar el poder. En 2017, su fuerza también fue su debilidad: el poder del Estado todavía le permitió evitar una salida electoral como en Argentina, o un golpe de Estado como en Brasil. La paradoja es que, para mantenerse en el poder, se transmutó en un factor político conservador. En Bolivia y Ecuador, se observó una degeneración política comparable, aunque en estos países el poder progresista no se había identificado por mucho tiempo con el cambio. Por otro lado, la velocidad e intensidad de la crisis venezolana desafiaban paralelos. En resumen, mientras más se fortaleció el progresismo, más conservador se volvió; y donde más profundo fue, más aguda ha sido la crisis. Desde este punto de vista, el gobierno de Nicolás Maduro surge como una consecuencia del propio chavismo y no como una inflexión, tal como Michel Temer que es la metástasis de los gobiernos petistas. Vista entre su vanguardia política y su motor, la ola progresista resultó, después de todo, ser otra cara de la barbarie, no su opuesto. En 2017, sobrevivía apenas como una cáscara vacía o una ideología.

Parte II.

Vamos a explorar América del Sur, que al mismo tiempo está tan cerca y tan lejos.
Luiz Inácio Lula da Silva, 2003

En la política exterior, será constituida lo que podríamos denominar, de manera informal, una internacional progresista y revolucionaria a nivel continental.
Álvaro García Linera, 2016

Si es posible decir que Venezuela estuvo en la vanguardia de la ola progresista, el motor dinámico regional fue el proceso brasileño, que representa cerca de la mitad del territorio y de la economía sudamericana.

El móvil económico de la integración fue la internacionalización de sectores oligopolizados del capital brasileño, impulsados por el dinero público gestionado por el BNDES. La competitividad de las "campeonas nacionales" estuvo vinculada a la sobreexplotación del trabajo y de los recursos naturales, además de las relaciones venales con el Estado. En este marco, la integración regional solo podría ser una extensión del apoyo doméstico a la exportación primaria y a la construcción civil, materializada en los corredores de exportación proyectados por IIRSA. La articulación de los organismos regionales, en particular Unasur, sirvió como fundamento del liderazgo político brasileño, proyectando al país en el plano mundial.

Asociada a los parámetros de la ortodoxia a nivel nacional e internacional, la política exterior brasileña condenó al aislamiento las

pretensiones más audaces ejercitadas por Venezuela bajo los auspicios del Alba, entonces denominada Alternativa Bolivariana para las Américas. Si bien es cierto que el proceso bolivariano prefiere gobiernos que lo toleran, también es verdad que la opción brasileña restringió sus alianzas antihegemónicas a las limitadas posibilidades de Cuba. La empatía petista ayudó a los bolivarianos a sobrevivir mientras aceptasen el orden propuesto.

En el otro polo, Colombia, Chile y Perú constituyeron un eje de apoyo explícito a la agenda estadounidense en la región. Pero más allá del Plan Colombia, expresión radical de esta complicidad, la convergencia entre los países se expresó en la Alianza del Pacífico, a la cual se sumó México. Constituida como un contrapunto a las aspiraciones regionalistas del bloque progresista en 2011, la alianza se articuló en torno a la apertura comercial multilateral, reuniendo a los países de la región que tienen acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos.

Sin embargo, este alineamiento internacional divergente no impidió que todos conviviesen en Unasur. La constatación de que los países sudamericanos se adhirieran unánimemente a esta iniciativa y su columna vertebral, IIRSA, evidencia los límites del progresismo en la región. La exportación de materias primas fue un denominador común para todos, entre los que se adhirieron a la Alianza del Pacífico y aquellos que se alinearon al Alba. Incluso los gobiernos que se autodescribieron como "revolucionarios" fueron incapaces de avanzar en una alternativa al extractivismo, es decir, a una economía anclada en la explotación de los recursos primarios para la exportación.

La Venezuela bolivariana ensayó enfrentar la cuestión, pero los resultados fueron insuficientes. Sin embargo, prevalecieron gobiernos que nunca cuestionaron consistentemente este patrón, a pesar de una retórica en el sentido contrario, plasmada en las constituciones de Ecuador y de Bolivia, o en el discurso neodesarrollista en Brasil y en la Argentina. Bajo la égida del "consenso de las *commodities*", los contrastes entre los gobiernos de América del Sur se diluyeron (Svampa, 2017).

Encarada bajo el prisma de la continuidad económica y del conservadurismo social, la ola progresista emerge como una especie de reciclaje, en el que la novedad política fue instrumentalizada para reproducir el viejo patrón de dominación, descrito por Florestan Fernandes como el Estado Autocrático Burgués. Este fue el caso de los gobiernos del PT en Brasil, cuyo proyecto regional puede resumirse en dos vectores: dependencia económica en el marco del extractivismo con beneficios relativos para las corporaciones brasileñas, que a menudo son los eslabones débiles en cadenas de negocios transnacionales que no comandan y la autonomía política también relativa, cuyo límite son los intereses de los Estados Unidos en la región.

En síntesis, hay una correspondencia entre el alcance y el límite de los procesos identificados con el campo progresista, donde se constata un cambio político en el marco de la continuidad económica y la dinámica en el plano de la integración regional, en el que Unasur surgió como una novedad política positiva pero asociada a IIRSA, cuyo marco logístico profundizó las estructuras de la dependencia. Esta paradoja explica la convergencia de los países sudamericanos en estas iniciativas regionales, cuyo potencial innovador fue, en consecuencia, limitado. Por otro lado, la ambigüedad entre el progresismo político y el conservadurismo económico generó situaciones contradictorias, como en el caso paraguayo, donde el apoyo del Estado brasileño a los sectores económicos que se opusieron al cambio político terminó finalmente por revertirlo.

Así, si la ola progresista ofrece una nueva prueba práctica de las limitaciones al reformismo como vía de cambio, los impases de la integración regional revelan otra cara de la misma moneda. La pretensión de abrir brechas en el espacio sudamericano conciliando soberanía e imperialismo reprodujo a nivel internacional la magia que el lulismo y los gobiernos relacionados pretendieron operar a nivel nacional, conciliando capital y trabajo, burguesía y nación. Sin embargo, la vulnerabilidad del cambio anclado en la continuidad económica se explicitó cuando la caída de los precios de las *commodities* alimentó

situaciones críticas en la región. La corrosión de las bases del pacto social lulista, la derrota electoral del kirchnerismo y la crisis enfrentada por el bolivarianismo inciden en el proceso de integración regional, cuya fragilidad era evidente en 2016[1]. Así, si la reforma no es un camino abierto para el cambio social en la región, la conciliación con el imperialismo tampoco es una vía para la soberanía. En la segunda independencia de América Latina, la soberanía es indisociable de la igualdad, así como la integración regional es inseparable de la revolución.

1 En abril de 2018, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay anunciaron que se retirarían de Unasur, agravando la crisis de la institución, que no tenía un secretario general desde febrero de 2017.

Parte III.

Mil veces peor que una derrota
es desviarse por mucho tiempo de la lucha,
allí donde ella se volvió inevitable.
Rosa Luxemburgo

Solo imaginando otros mundos
es que este será cambiado.
Alberto Acosta

Como el propósito de un análisis de la ola progresista desde una perspectiva comprometida con el cambio es contribuir a que este suceda, se desarrollan enseguida las reflexiones sobre la articulación entre soberanía, igualdad e integración continental, entendidas como referencias de un proyecto de cambio a ser construido. El enfoque destaca la unidad continental, toda vez que cada situación nacional tiene sus particularidades —y también porque la expresión "ola progresista" presupone cierto nivel de interrelación entre los procesos recientes—, que de hecho proyectaron diferentes visiones sobre la integración regional. Las siguientes nueve propuestas resaltan la timidez de las proyecciones ensayadas frente a los desafíos planteados para la unidad continental, al mismo tiempo que pretenden pensar en su devenir.

Estas notas incorporan reflexiones sobre procesos revolucionarios exteriores al continente, especialmente la Revolución Rusa. Después de todo, la revolución latinoamericana no debe ser ni más ni menos que un capítulo de la revolución mundial necesaria.

Integración es una dimensión de la revolución latinoamericana

En el siglo XXI, la unidad latinoamericana se revela como una premisa necesaria, aunque insuficiente para proteger a la región de las tendencias disgregadoras que caracterizan al capitalismo contemporáneo. Encarada bajo este punto de vista, la integración debe articular procesos de cambio nacionales que incorporen la unidad continental como una necesidad histórica. En otras palabras, la integración regional resurge como una dimensión de un movimiento que podemos describir como una revolución latinoamericana orientada hacia el control sobre el propio destino, subordinando la economía a los anhelos y a las necesidades del conjunto de la población. Pues, como recuerda Mariátegui, es inviable articular naciones formadas de manera incompleta:

> Pero lo que separa y aísla a los países hispano-americanos, no es esta diversidad de horario político. Es la imposibilidad de que, entre naciones incompletamente formadas, entre naciones apenas bosquejadas en su mayoría, se concerte y articule un sistema o un conglomerado internacional. En la historia, la comuna precede a la nación. La nación precede a toda sociedad de naciones (Mariátegui, 1990: 14).

En América Latina contemporánea, nación, unidad continental y socialismo son indisociables en la resistencia a la barbarie.

La historia exige soluciones propias a problemas propios

Una integración dirigida a superar la articulación entre dependencia y desigualdad debe asumir como premisa la singularidad de la formación socioeconómica de la región. Su principal característica es la permanencia del legado colonial, que se expresa en la orientación

extrovertida de su base económica, a pesar del avance de la industrialización y de la ampliación del mercado interno en varios países. Esta constatación trae dos consecuencias políticas.

En primer lugar, una formación histórica original exige propuestas de integración propias. En particular, los esquemas trasplantados de las experiencias europeas se revelan inadecuados a la realidad continental. Los proyectos integracionistas que niegan la especificidad latinoamericana corren el riesgo de reeditar debates similares a aquellos que informaron el campo democrático en el siglo XX, como el mito del *take off*[1] adelantado por Walt Whitman Rostow o la polémica en torno a la existencia del feudalismo latinoamericano (Rostow, 1974; Assadourian *et al*., 1973).

Ya a fines del siglo XIX, José Martí destacaba las dificultades de esta naturaleza al analizar los obstáculos enfrentados por Simón Bolívar:

> Acaso, en su sueño de gloria, para la América y para sí, no vio que la unidad de espíritu, indispensable a la salvación y dicha de nuestros pueblos americanos, padecía, más que se ayudaba, con su unión en formas teóricas y artificiales que no se acomodaban sobre el seguro de la realidad (Martí, 2000: 282).

La integración latinoamericana será contra la economía

La segunda consecuencia de la orientación extrovertida de la economía es la precariedad de las bases materiales de un proyecto integracionista. Se parte de una estructura productiva constituida como primario exportador desde el período colonial, en el marco de una inserción subordinada al mercado mundial. En consecuencia, la

1 Una de las fases del desarrollo económico por las cuales los países tendrían que atravesar para alcanzar el desarrollo, según la teoría del referido economista estadounidense, creada a principios de la década de 1960 [n.e.].

infraestructura de transportes, comunicación y energía está vinculada al imperativo de conectar polos productores de exportación a sus canales logísticos en el litoral.

Históricamente, los niveles de intercambio intrarregional son bajos, ya que prevalece la redundancia entre las bases productivas nacionales en lugar de la complementariedad, imponiendo una competencia entre países en lugar de la cooperación. Indudablemente, esto es consecuencia de los obstáculos que enfrentan los países de la región para controlar su propio destino, que se expresa, por un lado, en la perpetuación de los vínculos de dependencia característicos de la relación centro periferia y, por otro, en la impotencia para establecer relaciones de colaboración regional. Este problema fue agravado por su expresión cultural, toda vez que prevalecen las influencias ideológicas y los vínculos políticos y académicos con los países del centro, en detrimento del conocimiento mutuo y de la cooperación intelectual intracontinental.

Estas constataciones indican que la integración latinoamericana no está inscrita en la evolución económica de la región —a la manera como el desarrollo de las fuerzas productivas generaría las condiciones objetivas para el socialismo—. Esto, porque el movimiento de la historia reafirma la articulación entre dependencia y sobreexplotación del trabajo. Y con eso, se reproducen las determinaciones generales que obstaculizan la integración en las diferentes esferas: económica, política y cultural.

Partiendo de una trayectoria económica adversa, la integración regional será un designio político que emana del movimiento histórico de estas sociedades: la antítesis de la barbarie reservada a la condición dependiente. Aunque el análisis de Jorge Abelardo Ramos sobre la "nación latinoamericana", publicada en 1968, evoque una controversia "unidad esencial" del continente, su conclusión señala este camino:

> Por lo dicho, es evidente que la unidad de América Latina no se postula hoy como una exigencia del desarrollo de las fuerzas productivas en la búsqueda del grandioso mercado interno de las

> veinte repúblicas, sino exactamente por la razón opuesta. Para lanzarnos decididamente al camino de la civilización, de la ciencia y de la cultura y precisamente para desarrollar el potencial económico de nuestros pueblos, sea por la vía capitalista, por medio del capitalismo de Estado, por la ruta de un socialismo criollo o por una combinación de todas las opciones mencionadas, América Latina necesita unirse para no degradarse. No es el progreso del capitalismo, como sucedió en Europa o en los Estados Unidos, el que exige hoy la unidad de nuestros Estados, pero sí la profunda crisis y el agotamiento de la condición semicolonial que padecemos (Ramos, 2012: 551).

La revolución latinoamericana será contra la economía o, más precisamente, movilizará la política contra la orientación extrovertida de la economía. En última instancia, será necesario confrontar el mito del desarrollo económico, expresión periférica de la ideología del progreso.

El desarrollo debe ser igual y combinado —con el pueblo y el planeta

La Revolución Rusa y todas las revoluciones posteriores estuvieron relacionadas al paradigma marxista del desarrollo de las fuerzas productivas. Su premisa fundamental es la necesidad de acelerar la industrialización y la mecanización de la producción rural como condiciones de realización del comunismo en la periferia, para que la socialización de la producción no se transforme en la socialización de la pobreza. En el plano político, se entendía el comunismo como la solución histórica a la contradicción entre el carácter social de la producción y la apropiación privada de la riqueza en el capitalismo. El comunismo pondría el potencial productivo, fruto del progreso capitalista, al servicio de la mayoría trabajadora.

La idea por detrás de este paradigma es irrebatible: el comunismo anhela la igualdad en abundancia. Sin embargo, la dificultad surge en la historia cuando el imperativo del desarrollo de las fuerzas productivas choca con las exigencias políticas del proceso de cambio. Tal vez el ejemplo más conocido sea la colectivización forzada de la producción campesina en la Unión Soviética, donde el objetivo de la mecanización de la producción rural, entendida como necesaria para proveer alimentos y mano de obra barata para la industrialización, colisionó con el modo de vida de los campesinos —y solo avanzó en medio de un baño de sangre.

El saldo de este proceso fue paradójico: la acelerada industrialización convirtió a la Unión Soviética en una potencia económica, pero sacrificó la base popular de la revolución. Desde luego, no se tratan de cuestiones fáciles, sino de dilemas: problemas en que todas las soluciones vislumbradas son difíciles. Así, si la Unión Soviética no se hubiera convertido en una potencia industrial, probablemente habría sido aniquilada por el nazismo. Por otro lado, el camino elegido para el desarrollo alienó a la mayoría campesina, poniendo en jaque a la propia razón de ser de la revolución. El proceso cubano también vivió y aún vive sus dilemas. En la década de 1970, por ejemplo, prevaleció la comprensión paradójica de que la dependencia soviética era necesaria para preservar la independencia de la isla en la Guerra Fría.

En el siglo XXI, hay al menos tres motivos para revisar este paradigma. El primero de ellos ya fue mencionado: el imperativo del progreso atropelló las aspiraciones populares, alienando la razón revolucionaria. De esta problemática se desprende una segunda: la tensión entre la centralización —asociada a la defensa nacional y el desarrollo de las fuerzas productivas— y la democratización popular, que se detallará a continuación. Finalmente, hay una cuestión de orden: el mundo puede terminar si la política anticapitalista no subvierte la ideología del progreso. El imperativo ecológico nos obliga a revisar el enfoque de la naturaleza como una fuerza productiva, así como la emancipación del trabajo será imposible tratando a las personas como recursos humanos.

La ecuación entre las necesidades de desarrollo económico y el imperativo ecológico no es simple ni consensuado en la izquierda latinoamericana. En la práctica, frecuentemente resulta en un dilema entre la razón del Estado y la ideología, ilustrado de forma lapidaria en la postura del presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien, parafraseando al naturalista alemán Alexander von Humboldt (1769-1859), afirmó en repetidas veces: "No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro".

En el polo opuesto, el principio del Bien Vivir ilumina los impases civilizatorios que se proyectan hacia la integración regional. En primer lugar, traduce un rechazo popular al extractivismo, lo que sugiere una diversificación basada en la industrialización, pero también apunta a un rechazo del patrón de desarrollo anclado en el crecimiento económico. Esta segunda dimensión crítica se articula a un rechazo generalizado de lo que podemos sintetizar, en los términos de Karl Marx como la "sociedad de las mercancías". En resumen, el Bien Vivir reinvindica el legado indígena como fuente de inspiración de un proyecto civilizatorio alternativo, acorde con la realidad regional, en el que las determinaciones del desarrollo económico se subordinan a las aspiraciones y necesidades del conjunto de la sociedad —que incluyen la preocupación ecológica—. Bajo esta perspectiva, la integración sudamericana referida a IIRSA es identificada con la perpetuación del legado colonial.

Privilegiar las determinaciones sociales no significa ignorar la dimensión económica de la integración regional, sino involucrar la política en el direccionamiento de la economía, y no al contrario. Pues una integración de sentido emancipador debe trascender los acuerdos de libre comercio o la interconexión de infraestructura, con el objetivo de constituir, como observó Celso Furtado, un auténtico sistema económico regional:

> Actualmente, se admite, como más o menos evidente que, lejos de ser una simple cuestión de liberalización del comercio, el verdadero

> problema consiste en promover la creación de un sistema económico regional, lo que no será una tarea pequeña, dada la orientación anterior del desarrollo, de los riesgos de agravar la concentración geográfica, tanto de las actividades económicas, como de la apropiación de los frutos del desarrollo, de la considerable autonomía con que actúan en la región los poderosos consorcios internacionales, que controlan no solamente las actividades de exportación tradicionales, sino también gran parte del sector manufacturero moderno, de las divergencias entre las políticas nacionales para controlar y orientar los procesos económicos y de otros factores no menos importantes (Furtado, 1986: 267-268).

En resumen, la integración regional debe estar asociada a la soberanía, exigiendo una política que revierta el sentido de la economía, en la cual la superación del legado colonial está necesariamente vinculada a un patrón civilizatorio alternativo.

El progreso es caminar con las propias piernas, con la cabeza donde los pies pisan

El desarrollo de las fuerzas productivas y la modernización de los patrones de consumo son dos caras del paradigma del progreso que la izquierda debe superar.

Más allá de la igualdad en la abundancia, el énfasis en las fuerzas productivas se asentó en una segunda premisa: que el socialismo sería más productivo que el capitalismo. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la impactante victoria soviética alentó las estimaciones sobre cuántos años llevaría superar las potencias occidentales. En poco tiempo, los soviéticos desarrollaron la bomba nuclear y luego enviaron un perro al espacio.

Retrospectivamente, algunos entienden que eso fue una ilusión y que el socialismo resultó ineficiente desde el punto de vista de la producción. El socialismo habría perdido la disputa con el capitalismo

en el ámbito económico (Blackburn, 2005). No se pretende, en este momento, discutir cuál sistema es más productivo —aunque se esté convencido de que el comunismo, que aún no se vive, será más productivo—. El punto a enfatizar es que la superioridad del socialismo no necesita estar en la productividad, sino en atender los anhelos y necesidades de las personas.

Para enunciar la cuestión en términos weberianos, el debate sobre la eficiencia económica planteado en términos de productividad disocia los medios de los fines. Así se volvió común decir que el Estado cubano es ineficiente. Pero, ¿bajo cuál criterio un Estado que acoge, alimenta, educa, cuida la salud y defiende a toda su población en medio del subdesarrollo es considerado ineficiente? Al aceptar el debate en los términos de eficiencia económica, reducida a la productividad, la izquierda incorporó referencias capitalistas para proyectar el éxito socialista.

Esta cuestión tiene un desarrollo crucial para el imaginario anticapitalista en América Latina, donde es imposible e indeseable generalizar los patrones de consumo de los países centrales. La integración latinoamericana debe construir otro horizonte civilizatorio, teniendo como valores fundamentales la autodeterminación económica, la soberanía política, la integración social y la autorreferencia cultural.

Este no es un enfoque inédito en el pensamiento crítico del subcontinente. Problematización análoga fue hecha por, al menos, dos intelectuales en momentos históricos y realidades nacionales diferentes, y que se enfrentaron al problema de la integración continental. A fines del siglo XIX, José Martí sugirió desde Cuba un rechazo al "odio de clases" que caracterizaba a las sociedades occidentales, señalando un camino civilizatorio propio, en torno a las nociones de "hombre natural" y de "equilibrio del mundo". Casi un siglo después, Celso Furtado problematizó la reproducción de los patrones de consumo del centro capitalista en las sociedades periféricas, donde la estrecha base productiva exigía una concentración de ingresos como condición para la realización capitalista. Desde esta perspectiva, el economista

brasileño criticó duramente al "mimetismo cultural" de las clases dominantes en América Latina, indicando la imposibilidad de conciliar los patrones de consumo importados y la integración de la población a través del trabajo. En el siglo XXI, la idea del Bien Vivir retomó a su manera un problema similar, apuntando la necesidad de un horizonte civilizatorio alternativo.

Estas reflexiones indican que es necesario subordinar el desarrollo económico a los intereses de la población en su conjunto —lo que, a la luz de los problemas ecológicos en el siglo XXI, implica cuestionar el paradigma civilizatorio anclado en la noción de progreso—. Eso no significa rechazar los avances de la civilización industrial, como nunca hicieron Martí ni Furtado, pero sí subordinar los medios a los fines. Para América Latina, el paradigma del progreso se revela tanto inviable como indeseable, ya que aún su versión exitosa produjo sociedades marcadas por el individualismo, la alienación y la competencia, en lugar de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, como prometía la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Donde prosperó, el capitalismo resultó en sociedades reguladas por la acumulación, asentadas en la explotación de los trabajadores y del medioambiente, tanto en la patria como en el extranjero. Es necesario recordar que, en esta realidad, como dijo Walter Benjamin, todo documento de cultura es también un documento de barbarie.

Desde una perspectiva distinta, la integración de América Latina, así como el socialismo, es una utopía de la abundancia que apunta al futuro, pero que no hace escala en Miami. O sea, es necesario adecuar el patrón de consumo a las bases materiales de las sociedades periféricas, lo que implica una descolonización cultural y una reorientación productiva que rompa con la concentración y el privilegio, en favor de la integración social. La abundancia que se busca no se basa en el consumismo moldeado por la industria de la propaganda. La emancipación cultural implica también liberarse de la modulación de las necesidades humanas por los imperativos del capital. En resumen, se

trata de controlar el ritmo, el tiempo y la orientación de la innovación social: caminar con las propias piernas, a pasos que sean de su tamaño, en dirección al interés común.

Valores no solamente opuestos, sino diferentes de los del capitalismo

La comprensión de que la hegemonía neoliberal articula la coerción y el consenso implica asumir la cultura como un terreno en disputa, en el cual la principal arma anticapitalista son valores radicalmente diferentes.

El socialismo será, eventualmente, un sistema social de mayor eficiencia productiva. Pero necesita ser inmediatamente superior en los planos político, social y cultural. Debe ser políticamente más democrático, porque la antítesis del liberalismo burgués no son los trabajadores en el parlamento, sino los parlamentos de trabajadores —como fueron los soviets en su origen—. Debe ser socialmente más humano, porque contempla las necesidades básicas de la población, en oposición al desamparo que caracteriza a las sociedades contemporáneas. Debe ser culturalmente diferente porque se rige por valores antitéticos al capitalismo, como la solidaridad, el altruismo y el contentamiento. La superioridad también será económica, pero el criterio inmediato no debe ser la productividad, sino la práctica de relaciones de producción democráticas, favoreciendo la reapropiación del trabajo por el trabajador.

En América Latina, esta subversión de los valores necesita estar asociada a una profunda descolonización cultural: es necesario dejar claro que la igualdad impone otras referencias culturales y otro patrón de consumo. Esta proposición indica la necesidad de un esfuerzo continuo y de largo plazo para desmontar lo que Antonio Gramsci llamó de "sentido común", construyendo una visión contrahegemónica sobre el horizonte civilizatorio del continente. Este esfuerzo tiene tres dimensiones principales.

Primero, como ya se mencionó, es necesario explicitar la incompatibilidad entre la integración del conjunto de la población a través del trabajo y los patrones de consumo copiados de los países centrales. En las antípodas del mito del crecimiento económico, la democratización del consumo exige una adecuación de la estructura productiva a las necesidades del conjunto de la población, en un movimiento que contradice la modernización dependiente. Es necesario explicitar los nexos entre modernización de los patrones de consumo y concentración del ingreso, mostrando su relación antitética con el control sobre el espacio económico y la igualdad social (Furtado, 1974). En resumen, es necesario evidenciar que, en el momento histórico actual, es necesario optar entre modernización y concentración o soberanía y democratización.

Una segunda dimensión, que se deriva de la primera, es la importancia de la descolonización cultural. Esta proposición, que es más fácil dicha que hecha, tiene múltiples implicaciones, desde el patrón de consumo hasta la teoría social, pasando por el racismo y las referencias culturales. Lejos de ser un fenómeno restringido a las clases dominantes, la admiración de las expresiones culturales del capitalismo central —y de los Estados Unidos en particular— es un fenómeno que atraviesa a todas las clases sociales y también a diferentes espectros políticos, aunque con diferentes grados de intensidad.

La otra cara de este fenómeno es un sentimiento de inferioridad en relación con lo que es nativo. Por eso, el punto de partida para enfrentar el colonialismo cultural es la valorización de lo que es propio en todas sus dimensiones, lo que envuelve un reconocimiento de la especificidad continental. No se trata solamente de una cuestión de fondo humanístico, reivindicando el estatuto civilizatorio de las diferentes culturas, sino de una cuestión política central en un horizonte de autodeterminación. Porque los valores por los cuales se evalúa el éxito de un proyecto latinoamericanista deben ser otros, referidos a la autonomía y la democratización, al equilibrio ecológico y a la realización de las potencialidades humanas.

La tercera dimensión apunta a una concientización sobre las determinaciones históricas que hermanan el destino de los países latinoamericanos. A pesar de los obstáculos económicos, históricos y culturales para la integración continental, el movimiento en dirección a la internacionalización de la producción y la financiarización del capital, al que corresponde la formación de bloques regionales, vuelve aún más improbable la superación de los dilemas comunes en escala nacional. La unidad continental reaparece en el siglo XXI como una necesidad histórica.

Será necesario superar una visión instrumentalizadora de la integración entre países vecinos. Una integración de sentido emancipador no puede ser guiada por la lógica de la competencia económica y de la dominación política, sino debe orientarse por la búsqueda del bien común, privilegiando la cooperación económica y la solidaridad política, respetando el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Una diplomacia de generosidad debe ser asumida y practicada con orgullo en la región, especialmente en Brasil, cultivando un matrimonio a ser sellado no solamente por dinero, sino también por amor.

Igualdad en el trabajo contra el capital

La premisa de que superar al subdesarrollo en América Latina requiere superar al capitalismo, teniendo como horizonte la igualdad sustantiva, da lugar a una reflexión crítica sobre el proceso soviético, que asombró a la derecha con el espectro de la revolución y lanzó una sombra sobre la política revolucionaria en el siglo pasado.

En su análisis sobre la Unión Soviética, István Mészáros diagnosticó una sociedad poscapitalista que no fue más allá del capital. En la opinión del intelectual húngaro, el capital está constituido por el trípode de la propiedad privada, trabajo asalariado y Estado. Al romper apenas con el primer elemento de este trípode, la Unión Soviética sacudió un elemento fundador del capitalismo — la propiedad privada de los medios de producción—, pero el sistema metabólico

del capital se mantuvo intacto: por eso la Unión Soviética es descrita como una sociedad poscapitalista que no superó la tiranía del capital (Mészáros, 1996).

Este análisis sugiere que las revoluciones contra el capital en el siglo XXI serán más y no menos radicales que la experiencia soviética. Porque más allá de superar la propiedad privada de los medios de producción —la contradicción entre el carácter social de la producción y el carácter privado de la apropiación—, es necesario enfrentar las otras dos patas del capital.

Por lo tanto, será necesario romper con la jerarquía en las relaciones de trabajo. La experiencia histórica muestra que abolir la propiedad privada de los medios de producción es una condición necesaria, pero insuficiente, para superar la alienación del trabajo. Esto exigirá que los productores se apropien del proceso de producción: el socialismo entendido como la autogestión de los productores asociados.

Esta tampoco es una tarea simple o inmediata. Entre otras cosas, porque una dimensión de la alienación capitalista es volver a los trabajadores incrédulos o desinteresados de la apropiación del trabajo, así como de la política. Mencionamos un ejemplo concreto durante la Revolución Cubana, cuando la mayoría absoluta de los trabajadores rurales optó por trabajar para el Estado en lugar de unirse a una cooperativa. En el penúltimo país que abolió la esclavitud en las Américas, los labradores parecían contentos de tener un patrón decente y no ambicionaban comandarse a sí mismos.

Por lo tanto, la hipótesis revolucionaria enfrenta otro dilema: ¿cómo las instituciones y los seres humanos forjados bajo el capitalismo construyen una sociedad no capitalista?

Un Estado fuerte que no me coma

La noción del socialismo como proceso de transición del capitalismo al comunismo surge de la comprensión de que es necesario construir condiciones objetivas y subjetivas para una sociedad sin

propiedad privada, sin clases sociales y sin Estado. El diagnóstico subyacente es que las relaciones económicas y sociales, así como la cabeza de las personas forjadas bajo el capitalismo, no tienen condiciones de adentrarse sin mediaciones en el comunismo, arriesgándose a una desorganización social que llevaría, en último análisis, a la restauración capitalista.

El libro que Lenin terminó apresuradamente, porque consideraba "más importante hacer una revolución que hablar sobre ella", consagró el Estado como el principal instrumento de esta transición. En línea con el ideal comunista, se asumió que el Estado es una institución de dominación de clase, pero en esta situación histórica serviría al interés de la mayoría: es la dictadura del proletariado. Ante la imposibilidad de liquidar esta pierna del capital, la revolución pretendió invertirla (Lenin, 1986).

De ahí en adelante, la apuesta principal para construir la sociedad anticapitalista donde triunfó la revolución fue el Estado obrero y campesino. En la práctica, sin embargo, la concepción del Estado como instrumento de la transición al comunismo, que sería una sociedad sin Estado, se enfrentó a una paradoja de solución difícil: ¿cómo afirmar el Estado posrevolucionario como instrumento de transición y, simultáneamente hacerlo innecesario? En resumen, ¿cómo se fortalece y se desvanece al mismo tiempo?

Además de este argumento propositivo, que concibe el Estado como un instrumento de transición, el dilema del Estado tiene una segunda dimensión defensiva. La centralización del poder ha resultado necesaria para contrarrestar la contrarrevolución desencadenada por cualquier revolución. La experiencia histórica, desde la Revolución Francesa hasta la cubana, pasando por procesos frustrados como la Revolución Mexicana o la Guerra Civil Española, revela este impase: la centralización del poder fue necesaria y efectiva para derrotar a la contrarrevolución, pero militó contra el potencial democratizador original de estos procesos.

En el caso soviético, la centralización exigida por la guerra civil fue parcialmente revisada en la economía con la adopción de la Nueva

Política Económica (NEP). Pero no hubo un movimiento similar a nivel político, lo que contribuyó para la consolidación posterior del stalinismo. En el caso cubano, en el que persistió un notable compromiso del Estado con la igualdad y la soberanía, Martínez Heredia resumió el dilema planteado por la exigencia de la centralización del poder en los siguientes términos: "¿Cómo hacer un Estado fuerte que no me coma?".

Porque en América Latina, donde la dominación capitalista fue descrita por Florestan Fernandes (1975) como "imperialismo total", la defensa de la revolución siempre será urgente. A pesar de los abusos y las distorsiones que pueden ser apuntados, hay una sabiduría innegable en el proceso cubano que resiste hace décadas, cuando nacionalistas bolivianos, socialistas chilenos, sandinistas, entre otros, sucumbieron. Esta es una cuestión central, a menudo eludida por formulaciones que se refieren al zapatismo, sugiriendo cambiar el mundo sin tomar el poder o referidas al Bien Vivir. Estas elaboraciones aportan una crítica pertinente y necesaria al carácter antipopular de la política estatal en el subcontinente, incluso bajo gobiernos progresistas. Por lo tanto, es necesario responder en la teoría y en la práctica a los desafíos concretos que plantea el capitalismo como una totalidad —el imperialismo.

Así como la producción industrial en pequeña escala difícilmente atenderá las necesidades materiales de las sociedades contemporáneas, es improbable que la política descentralizada defienda con eficacia a un país del imperialismo. Esta doble constatación de las restricciones para generalizar la abundancia en las sociedades periféricas, aunque emancipada de los patrones de la publicidad capitalista, asociada a la exigencia de defensa de la revolución en el marco del imperialismo, es lo que renueva la actualidad del comunismo como una utopía mundial.

En otras palabras, mientras la integración económica esté subordinada a la racionalidad mercantil y la dominación imperialista sea una realidad, el Estado nacional será un instrumento necesario para defender, económica y militarmente a las sociedades que desafían el

orden. En el siglo XXI, la igualdad en la abundancia y la sociedad sin Estado siguen vigentes como paradigmas del comunismo, al igual que la revolución mundial.

No hay alternativa al poder popular

La democratización de las relaciones de producción, así como la democratización de la política, fueron contenidas en revoluciones pasadas debido a los imperativos de la producción y de la defensa. Enfrentándose con hombres y mujeres forjados por las sociedades que pretendían superar, los líderes revolucionarios desconfiaron, comprensiblemente, del protagonismo popular, centralizando la dirección de la economía y de la política.

Pero la jerarquización del trabajo y el fortalecimiento del Estado bloquearon la superación del capital y la restauración capitalista se apoyó en estas dos patas del trípode. Con base en la experiencia histórica, la solución del dilema "centralización versus democratización" parece imponerse: la infalibilidad del comité central debe ceder espacio a la espontaneidad del poder popular (Luxemburgo, 2017). La dictadura del proletariado dará paso a la transición concebida como una pedagogía de la praxis[2].

Si el origen del comunismo en el siglo XIX estaba vinculado a la ciencia, y sus primeros ensayos históricos en el siglo XX se consolidaron como dogmas, la praxis del siglo XXI necesitará creer en la espontaneidad como camino hacia la autodeterminación de los trabajadores: menos ciencia y más espontaneidad, entendida no como voluntarismo

2 La noción de praxis entiende la historia como un proceso ilimitado de doble transformación de las relaciones del hombre con el medio, que forja su propia naturaleza. Desde esta perspectiva, no habría una esencia humana inmanente, pero es su naturaleza práctica e histórica, como un ser producido socialmente, lo que la define. Es esta conciencia de la producción y de la autoproducción, como características constitutivas de la naturaleza humana, la que está en la raíz de la unidad entre la teoría y la práctica que subyace a la problemática de la formación de la conciencia de clase y de la superación del capitalismo desde el punto de vista del materialismo histórico. Sobre esto, ver Sánchez Vázquez (2007).

o improvisación, sino como expresión creativa del ser humano. La creatividad intrínseca a los albores de la revolución, momento en que los trabajadores "toman el cielo por asalto", revela que, con una situación histórica nueva, surgen respuestas históricas originales. Esto fue lo que se vio en la Comuna de París en 1871.

La estrategia bolchevique en 1917 tuvo como telón de fondo la masacre con la que terminó la breve experiencia de la Comuna. En la Revolución Rusa, que influenció todas las revoluciones siguientes, la exigencia de la centralización del poder para derrotar a la contrarrevolución se perpetuó bajo el temor de la contrarrevolución desde dentro y desde fuera. A ese temor se respondió con más centralización estatal, como medio para controlar el proceso. El hecho de que los bolcheviques tomaran y mantuvieran el poder, abriendo la posibilidad de construir por primera vez en la historia una sociedad en la que se aboliera la explotación de clase, es un logro político extraordinario.

Por otro lado, el imperativo de la supervivencia sofocó la creatividad original del proceso. Rápidamente, la defensa de la revolución se confundió con la defensa del Estado y la razón del Estado suplantó a la revolución mundial. En la Unión Soviética, como en otras revoluciones que la sucedieron, el Estado se distanció de la ideología que lo legitimó en su inicio, actuando frecuentemente en un sentido contrarrevolucionario. Así como el desarrollo económico se volvió un fin en sí mismo, el comando del Estado también se convirtió en un fin en sí mismo. En conjunto, el poder económico y el poder político se alejaron del propósito original: el poder popular.

Entiendo que el poder popular se muestra como único camino para enfrentar el poder económico y cultural del capital en el siglo XXI. La ecuación de los dilemas de la "eficiencia versus democratización de la producción", así como de la "centralización versus democratización de la política" solo encontrará respuesta en la propia experiencia histórica, en experiencias que confíen en la iniciativa de los trabajadores. Este es también el camino para afirmar una cultura radicalmente diferente, sentando las bases del apoyo popular necesarias para cualquier

revolución igualitaria. Los trabajadores defenderán una sociedad que sea de ellos, por más imperfecta que sea.

Es posible que, por esta vía, se dibujen más curvas que rectas. Lo más importante es romper con el sistema metabólico del capital y no andar en círculo, aunque sea un círculo de décadas de duración. En esta perspectiva, los medios resultan ser tanto o más importantes que los fines. La apuesta leninista por el Estado obrero y campesino en el siglo XX necesitará coexistir, en el siglo XXI, con la hipótesis de la autodeterminación de las masas formulada por Rosa Luxemburgo. Cien años después de octubre, la observación de que es preferible cometer errores con el pueblo, que acertar sin él parece inevitable.

Parece deseable, después de todo, una sociedad menos eficiente pero más feliz. Puede ser que así no plantemos la bandera roja en la luna ni ganemos los juegos olímpicos. Pero quizás cultivaremos la sabiduría de los niños uruguayos que jugaban fútbol en las calles y cantaban: "Ganamos, perdimos, igual nos divertimos" (Galeano, 1995).

Bibliografía

ASSADOURIAN, CARLOS SEMPAT *et al.*
1973 *Modos de producción en América Latina*. Buenos Aires: Siglo XXI.

BLACKBURN, ROBIN (org.)
2005 *Depois da queda: o fracasso do comunismo e o futuro do socialismo*. São Paulo: Paz e Terra.

FERNANDES, FLORESTAN
1975 *Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina*. Rio de Janeiro: Zahar.

FURTADO, CELSO
1986 *A economia latino-americana*. São Paulo: Companhia Editora Nacional.
1974 *O mito do desenvolvimento econômico*. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

GALEANO, EDUARDO
1995 *El fútbol a sol y sombra*. Buenos Aires: Siglo XXI.

LENIN, VLADIMIR I.
1986 *O Estado e a Revolução*. São Paulo: Hucitec.

LUXEMBURGO, ROSA
2017 *Textos escolhidos*. Selección: Isabel Loureiro, São Paulo: Unesp y Fundação Rosa Luxemburgo.

MARIÁTEGUI, JOSÉ CARLOS
1990 *Temas de nuestra América 12*. Lima: Biblioteca Amauta.

MARTÍ, JOSÉ
2000 *Obras escogidas*. Tomo 3. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

MÉSZÁROS, ISTVÁN
1996 *Beyond Capital*. New York: Monthly Review Press.

RAMOS, JORGE ABELARDO
2012 *História da Nação Latino-Americana*. Florianópolis: Insular

ROSTOW, WALT WHITMAN
1974 *Etapas do desenvolvimento econômico*. Rio de Janeiro: Zahar.

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, ADOLFO
2007 *Filosofia da práxis*. São Paulo: Clacso y Expressão Popular.

SVAMPA, MARISTELLA
2017 *Del cambio de época al fin de ciclo: gobiernos progresistas, extractivismo y movimientos sociales en América Latina*. Buenos Aires: Edhasa.

Fabio Luis Barbosa dos Santos se sumerge en la historia de América del Sur para comprender las razones del surgimiento y de la caída de los llamados "gobiernos progresistas". En el camino de las movilizaciones contra las reformas neoliberales de los años de 1990, la mayoría de los países de la región eligieron presidentes identificados con las causas populares. Sin embargo, menos de veinte años después de la victoria del primero de ellos, Hugo Chávez, y después de golpes de Estado más o menos explícitos, esa ola llegaría al fin, abriendo espacio para el recrudecimiento del conservadurismo. ¿Qué sucedió? El diálogo crítico entre el pasado y el presente propuesto en este libro ofrece caminos para el futuro de una izquierda sudamericana aturdida con la fuerza de macris, uribes, fujimoris, piñeras y bolsonaros, después de un ciclo de crecimiento e inclusión social.

Con el apoyo de

Suecia
Sverige

ISBN: 978-9917-9831-3-2